



EL URUGUAY DESDE LA SOCIOLOGÍA XI

**11ª Reunión Anual de Investigadores del
Departamento de Sociología**

1. Desigualdades y Educación en el nuevo milenio
2. Género y Sistema de Cuidados
3. Acción Colectiva y Élités
4. Ruralidad y Agricultura Familiar
5. Trabajo y Gestión del Riesgo
6. Violencia, Ciudadanía y Discursos

**Departamento
de Sociología DS**

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Constituyente 1502 - Piso 5

Tel.: 2410 3855/Fax: 2410 3859

Correo electrónico: direccion.ds@cienciasociales.edu.uy

Página web: <http://www.fcs.edu.uy/sociologia>



Facultad de Ciencias Sociales



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Universidad de la República (Uruguay) Facultad de Ciencias Sociales.
Departamento de Sociología.
El Uruguay desde la Sociología XI. Desigualdades y educación en el nuevo milenio. Género y sistema de cuidados. Acción colectiva y élites. Ruralidad y agricultura familiar. Trabajo y gestión de riesgo. Violencia, ciudadanía y discursos./Alberto Riella, coordinador. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Montevideo: UR.FCS-DS, 2013.
p. 448
Incluye bibliografía.
11ª Reunión Anual de Investigadores del Departamento de Sociología
ISBN Vol XI: 978-9974-0-0976-9
ISBN O.C.: 978-9974-0-0397-2
ISSN: 1688-9932
1. Sociología. 2. Educación. 3. Desigualdad social. 4. Género. 5. Política social. 6. Acción colectiva. 7. Elite. 8. Agricultura familiar. 9. Desarrollo rural. 10. Trabajo. 11. Condiciones de trabajo. 12. Violencia. 13. Ciudadanía. 14. Multiculturalismo. 15. Uruguay.
I. Título. II. Riella, Alberto coord.
CDD:301.020 2

Ficha catalográfica elaborada por Sección Procesos Técnicos de la Biblioteca de Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR)

Undécima edición, 2013

Obra completa: ISBN 978-9974-0-0397-2
Undécima edición: ISBN: 978-9974-0-0976-9
Coordinación editorial: Helvecia Pérez

Edición gráfica: Claudio Ortiz (claudioysumac@gmail.com)

Impresión y encuadernación:
Mastergraf S.R.L.
Gral. Pagola 1823 - CP 11800 - Tel.: 2203 4760*
Montevideo - Uruguay
Depósito Legal XXX.XXX-12 - Comisión del Papel
Edición amparada al Decreto 218/96

DERECHOS RESERVADOS

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, transmisión o archivo en sistemas recuperables, sea para uso privado o público por medios mecánicos, electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, total o parcial, del presente ejemplar con o sin finalidad de lucro, sin la autorización expresa del editor.

Índice

Presentación	7
Alberto Riella	

1. Desigualdades y Educación en el nuevo milenio

Reproducción y Movilidad sociales en Montevideo 1996-2010	13
--	----

Marcelo Boado

Desigualdades sociales y segregación: Montevideo a principios de milenio	39
---	----

Danilo Veiga

Educación técnica y transición al trabajo entre los activos de Montevideo	61
--	----

**Tabaré Fernández - Marcelo Boado - Virginia Lorenzo -
Pía Pirelli**

La reducción de la brecha digital en sectores pobres de la población. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Ceibal.....	95
--	----

Ana Laura Rivoir - Ruy Blanco - Santiago Escuder

2. Género y Sistema de Cuidados

El cuidado de las personas mayores en Uruguay: una mirada de género a las representaciones sociales	119
--	-----

Karina Batthyány - Natalia Genta - Valentina Perrotta

La dimensión de género en el saber experto en cuidado infantil	143
---	-----

Karina Batthyány- Natalia Genta- Valentina Perrotta

3. Acción Colectiva y Élités

El desarrollo local cañero en Bella Unión Territorios en disputa y construcciones emergentes en distintos contextos históricos	171
Anabel Rieiro	
Cartografías, generaciones y acontecimiento. A propósito del movimiento social juvenil.....	191
Verónica Filardo - Sebastián Aguiar	
El papel de la responsabilidad social empresarial en la regulación del tejido social. Aperturas analíticas para el caso uruguayo	217
Alfredo Falero	
Nuevas élites empresariales y legitimación del poder económico en el Uruguay.....	235
Miguel Serna	

4. Ruralidad y Agricultura Familiar

El impacto de la agriculturización sobre los pueblos rurales. Un estudio de caso: “los pueblos de la línea 2” en el departamento de Soriano.....	253
Alberto Riella - Rossana Vitelli - Jessica Ramírez	
Producción familiar y acción colectiva: la agenda de la Comisión Nacional de Fomento Rural en la era progresista	271
Alberto Riella - Adrián Silveira - Paola Mascheroni	

5. Trabajo y Gestión del Riesgo

Análisis de la cultura organizacional de una empresa agroindustrial uruguaya.....	295
Marcos Supervielle - Rafael Rey	
Culturas de seguridad y gestión del riesgo en la empresa CONAPROLE.....	313
Francisco Pucci - Soledad Nión	

Desafíos para una nueva gestión de recursos humanos: el caso de la industria del software	331
Mariela Quiñones - Marcos Supervielle - María Julia Acosta - Erika Van Rompaey	
Las dimensiones descuidadas del trabajo.....	347
Mariela Quiñones - Erika Van Rompaey	

6. Violencia, Ciudadanía y Discursos

Factores asociados a la reincidencia delictiva en el Uruguay.....	363
Ana Vigna - Nico Trajtenberg	
La protesta social conservadora. Representaciones sociales y nuevas sensibilidades sobre juventud y violencia a través de las movilizaciones en torno a la baja de edad de responsabilidad penal.....	385
Susana Mallo - Nilia Viscardi - Marcia Barbero	
El genocidio de los charrúas. Discurso, poder y multiculturalismo	403
Felipe Arocena - Pablo Silva	
Retornar al Uruguay.....	419
Verónica Filardo	



Presentación

El Uruguay desde la Sociología es la publicación principal del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales que, año a año desde 2001, reúne los trabajos más destacados de sus investigadores. Desde sus inicios, el objetivo principal de esta publicación es acercar estos trabajos a diferentes actores e instituciones de nuestra sociedad que tienen interés en las líneas de trabajo que se llevan adelante en nuestra institución.

La presente es la undécima edición y se ha articulado alrededor de seis ejes temáticos que dan cuenta de las diversas trayectorias académicas de los investigadores del Departamento de Sociología, que realizan sus aportes desde enfoques múltiples tanto a nivel teórico como metodológico, reflejo de la pluralidad de nuestros investigadores y de la diversidad de áreas de la Sociología contemporánea.

El primer eje temático está dedicado a las Desigualdades y Educación en el nuevo milenio, e incluye artículos sobre “Reproducción y Movilidad sociales en Montevideo 1996-2010”, “Desigualdades sociales y segregación: Montevideo a principios de milenio”, “Educación técnica y transición al trabajo entre los activos de Montevideo” y “La reducción de la brecha digital en sectores pobres de la población. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Ceibal”.

El segundo eje aborda la temática de Género y Sistema de Cuidados, y abarca investigaciones referidas a “El cuidado de las personas mayores en Uruguay: una mirada de género a las representaciones sociales” y a “La dimensión de género en el saber experto en cuidado infantil”.

El tercero trata sobre la Acción Colectiva y Élités. Allí se reúnen trabajos sobre “El desarrollo local cañero en Bella Unión: Territorios en disputa y construcciones emergentes en distintos contextos históricos”, “Cartografías, generaciones y acontecimiento. A propósito del movimiento social juvenil”, “El papel de la responsabilidad social empresarial en la regulación del tejido social. Aperturas analíticas para el caso uruguayo” y “Nuevas élités empresariales y legitimación del poder económico en el Uruguay”.

El cuarto eje temático reúne trabajos orientados hacia la Ruralidad y Agricultura Familiar, e incluye los artículos “El impacto de la agriculturización sobre los pueblos rurales. Un estudio de caso: ‘los pueblos de la línea 2’ en el Departamento de Soriano” y “Producción familiar y acción colectiva: la agenda de la Comisión Nacional de Fomento Rural en la era progresista”.

El quinto gira en torno al Trabajo y Gestión del Riesgo y compila los artículos sobre el “Análisis y la cultura organizacional de una empresa agroindustrial uruguaya”, las “Culturas de seguridad y gestión del riesgo en la empresa CONAPROLE”, los “Desa-

fíos para una nueva gestión de recursos humanos: el caso de la industria del software” y “Las dimensiones descuidadas del trabajo”.

Finalmente, el sexto eje centra su abordaje en los temas vinculados a la Violencia, Ciudadanía y Discursos y agrupa los trabajos acerca de los “Factores asociados a la reincidencia delictiva en el Uruguay”, “La protesta social conservadora. Representaciones sociales y nuevas sensibilidades sobre juventud y violencia a través de las movilizaciones en torno a la baja de edad de responsabilidad penal”, “El genocidio de los charrúas. Discurso, poder y multiculturalismo” y “Retornar al Uruguay”.

Es nuestro deseo que la presente publicación, al igual que los volúmenes anteriores, sea de utilidad tanto para docentes, investigadores y estudiantes de sociología, así como para diferentes actores sociales, políticos e institucionales vinculados a las temáticas que aquí se analizan. Agradecemos sinceramente a todos los colegas del Departamento de Sociología que en esta oportunidad, al igual que en todas las anteriores, volcaron su esfuerzo para la realización del encuentro anual de investigadores de nuestra institución, a partir del cual se hizo posible esta undécima edición de “El Uruguay desde la Sociología”.

Dr. Alberto Riella

Director del Departamento de Sociología

1

Desigualdades y Educación en el nuevo milenio



Reproducción y Movilidad sociales en Montevideo 1996-2010

Marcelo Boado¹

El presente trabajo es un avance del proyecto “50 años de movilidad social en el Uruguay”, que tiene por fin integrar los tres grandes estudios sobre el tema, para generar un panorama de largo plazo sobre la movilidad social en el Uruguay, integrando las encuestas de 1959, 1996 y 2010 para la ciudad de Montevideo, y las de 2000 y 2012 para las ciudades de Maldonado y Salto. Se retoma la discusión y análisis de la movilidad social en Montevideo, para lo cual se utilizan los resultados de las dos últimas muestras realizadas por el autor. Se recuperan las hipótesis de varios autores nacionales e internacionales sobre el tema. En este sentido las preguntas parecen sencillas: ¿se ha cerrado la cumbre social?; ¿la movilidad ascendente ha sido decreciente como pronosticaron Labbens y Solari; ¿las distancias entre las clases son más pronunciadas?; ¿la movilidad social limita cambios ocupacionales en torno a posiciones intermedias de la estructura social?; ¿la movilidad y la herencia difieren para hombres y mujeres?

Métodos

El presente estudio de movilidad social en Uruguay se basa en dos encuestas representativas de la población económicamente activa de ambos sexos mayor de 18 años de la ciudad de Montevideo, que alcanzaron 845 casos en 1996 y 2021 en 2010. La muestra fue estratificada y polietápica, con afijación proporcional al tamaño de las secciones censales de la ciudad de Montevideo. La diferencia de tamaños muestrales de cada año, pese a contar con una precisión del 95%, expresaron diferentes márgenes

- 1 Doctor en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Se desempeña como profesor e investigador titular, Grado 5, en el Departamento de Sociología, FCS, UdeLaR. Es coordinador del Doctorado de Sociología, y previamente coordinó la Maestría de Sociología. En grado y posgrado desarrolla investigación y docencia en movilidad social, políticas de salud, y métodos cuantitativos. Integra el Sistema Nacional de Investigadores en Nivel II. marcelo.boado@cienciassociales.edu.uy
- 2 Asimismo este trabajo se inscribe dentro de las actividades que desarrolla el Grupo de Investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC): “Transiciones Educación Trabajo (TET)”, que estudia el fenómeno de la movilidad social y la desigualdad de oportunidades en perspectivas transversal y longitudinal, con múltiples metodologías.

de error en cada caso (1996: 3,3; 2010 2,1), para la prevalencia de participación en la Población Económicamente Activa (PEA), según sexo³.

Los antecedentes uruguayos en movilidad social

Es común leer referencias a la movilidad social en numerosos trabajos uruguayos contemporáneos que examinan la estructura social, el empleo, el consumo, la pobreza, la desigualdad social de diversa índole, etc., sin embargo en pocos de ellos se examina la movilidad social de la manera precisa y usual que lo hace la literatura especializada. En general, lo que se hace es hipotetizar sobre efectos que influirían sobre resultados de movilidad social, pero no se analiza el asunto de manera específica, sino que se deja abierto a hipótesis ad hoc. En algunos casos no queda claro qué es lo que se entiende por movilidad social –¿se trata del tamaño de los grupos o de las chances de cambiar de grupo?, y cómo ello se vincula con otros procesos macrosociales. No es posible pasar revista a todos ellos, sino sólo a los que consideramos de recibo para el presente trabajo y para la información que se procesa. Con esto queremos situar la discusión, y dar significado a nuestros objetivos, en el contexto de los tratamientos actuales.

En Uruguay podemos identificar unos cuatro aportes en el tema de la movilidad social: Labbens y Solari (1966), Filgueira (1973), Errandonea (1989) y Boado (2004, 2009). No todos ellos abordan la movilidad social de la misma forma. Puede distinguirse entre ellos una historicidad en el tratamiento de la movilidad social, que refleja las preguntas de investigación y los desarrollos teóricos de las épocas respectivas.

El trabajo de Labbens y Solari (1966)⁴ sobre la movilidad intergeneracional en Montevideo, basado en la encuesta de 1959, fue el primero y el más representativo en el tema hasta 1996, en que Boado y sus colaboradores retomaron de manera sistemática y periódica el análisis de datos en movilidad social. La encuesta de movilidad social en Montevideo de 1959 fue realizada por el Instituto de Ciencias Sociales (ICS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, bajo el auspicio del Consejo Latino Americano de Investigaciones Sociales, y en paralelo con las ciudades de Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile. En su artículo Labbens y Solari examinaron detalladamente las tablas de movilidad de los encuesta-

3 El universo consideró a todos los hogares de la ciudad de Montevideo con al menos dos miembros. Se estimaron 337 puntos muestrales, distribuidos proporcionalmente respecto del número de hogares con miembros económicamente activos de las 25 secciones censales pobladas de la ciudad de Montevideo, según el marco muestral vigente y disponible en INE a marzo de 2010. Expresamente se excluyeron los hogares rurales. Se relevaron seis hogares por punto muestral. Y dentro de cada uno de ellos se seleccionó al azar un miembro adulto (18 años y más) económicamente activo. No se consideraron activos a los que buscaban trabajo por primera vez, porque no aportarían historia ocupacional.

4 El trabajo de Labbens y Solari fue publicado por primera vez en la revista *América Latina en Brasil* en 1962, y reimpresso por el propio Solari en 1966, en una colección de artículos de análisis e interpretación de la sociedad uruguaya: Solari, A.: "Estudios sobre la sociedad uruguaya"; Arca, Montevideo, 1966.

dos. Sus hallazgos, a partir de las tasas absolutas de movilidad y de los coeficientes de Glass, señalaron: por un lado, que la movilidad social ascendente estaba en declive en ese momento, dado que la retención en las posiciones de origen era importante; y por otro lado, que la movilidad que se advertía se restringía a “movimientos cortos”, fundamentalmente entre los status ocupacionales intermedio bajo y bajo, y entre los de status alto y medio alto. Por ende, no había evidencia de una sostenida movilidad ascendente o descendente interstatus de larga distancia entre las clases sociales. Concluyeron Labbens y Solari que estaban frente a un proceso de retraimiento de la estructura socio-ocupacional, generado por la gran asalarización de la mano de obra y de la expansión de los servicios personales que resultó de la absorción de los inmigrantes que provenían de los departamentos del interior del país. Finalizaron su análisis pronosticando que la movilidad social ascendente continuaría reduciéndose, porque los uruguayos no tendrían oportunidad estructural de recorrerla.

Filgueira (1973) no realizó un estudio típico de la movilidad social, ni un relevamiento específico, pero sí discutió la relación entre la educación y el proceso de desarrollo y crecimiento, y señaló los resultados incompletos de esta relación macrosocial en el caso uruguayo. El trabajo de este autor está basado en datos secundarios, provenientes del censo de población de 1963 y del censo de funcionarios públicos de 1972, examinando la participación de diferentes estratos socioeconómicos y educativos en el aparato público, y la evolución de sus retribuciones. Allí señaló que el retraimiento de la movilidad social y de la estructura social era más grave de lo que se pensaba, en la medida en que las oportunidades ocupacionales y los ingresos monetarios no estaban acompañando a los jóvenes que se educaban en general, y en especial a los que más se educaban. Según este autor tenía lugar un bloqueo de oportunidades, uno de cuyos resultados, más grave que el descenso de la movilidad misma augurado por Labbens y Solari, era la “incongruencia de status”, concepto acuñado por Heintz (1966), para indicar un fenómeno con un potencial político disruptivo.

Claramente estos dos trabajos en torno a la movilidad están situados en su época. La movilidad social era uno de los objetivos del desarrollo, y éste, un tipo de funcionamiento de la economía que permitiría el surgimiento de una clase social predestinada a consolidarlo: la clase media. Notoriamente se partía de una situación de desigualdad social preexistente profunda y duradera, con un fuerte predominio de un patrón cultural tradicional. El dinamismo económico propio de la industrialización, podía contribuir a la creación no sólo de un proletariado, como ya se había visto en Europa y Estados Unidos, sino también de una clase media garante del cambio económico y cultural de cuño democrático necesario para el desarrollo. Fueron enfoques de su época, inicios de los 60, inspirados en el surgimiento de clases y las oportunidades sociales propias del desarrollo.

Errandonea (1989), en su estudio sobre las clases sociales del Uruguay, tampoco realizó un relevamiento de movilidad, pero cotejó las conclusiones y predicciones de Labbens y Solari, sobre la base de su propio análisis de los Censos de población de

1975 y 1985, y de la evolución de la distribución del ingreso de los hogares en los años 70 y 80. En su conclusión sostuvo que no era posible afirmar que subsistiera el proceso de limitación de la movilidad socio ocupacional ascendente como pronosticaron Labbens y Solari, y que ello se tradujera en una degradación completa de la estructura social, pero sí era notorio que había empeorado la calidad de vida para muchos sectores de la sociedad, probablemente redefiniendo la significación de ciertas fronteras sociales.

Claramente pueden reconocerse dos linajes y numerosos clivajes. Los estudios de Filgueira y Errandonea prefirieron las bases censales, y se concentraron en el tamaño de los grupos. Sus esfuerzos se dirigieron a ver los efectos incompletos de la movilidad, básicamente estructural. Este tipo de estudios no ha prosperado, y no se han actualizado en más de 24 años. El estudio de Labbens y Solari prefirió la perspectiva de las historias de vida ocupacional, inaugurada en la época moderna por Glass, y fortalecida luego por Duncan, Goodman, Hauser y Goldthorpe.

Además de lo metodológico, los estudios representan también clivajes en lo temático, por un lado, preocupaban condiciones del posicionamiento social y de correspondencia de ello con el comportamiento sociopolítico, y por el otro, preocupaba la perspectiva de igualdad de oportunidades. Esta última, como mostró la bibliografía internacional, ha sido la que más ha avanzado, básicamente porque se han hecho más estudios de este tipo, porque se desarrolló en gran medida la estadística, y porque se desarrolló la informática y los sistemas de relevamiento y acopio de información de manera inimaginable para los investigadores de los años 60, 70 u 80⁵.

En los estudios uruguayos revisados arriba quedó clara la necesidad de obtener una visión más actualizada de las tendencias de la movilidad social, que superara algunas de las limitaciones señaladas, así fue que hacia fines de 1996 Boado emprendió la tarea de explorar la movilidad ocupacional en Montevideo, con auspicio y respaldo financiero de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) y la Dirección Nacional de Empleo (DINAE)⁶; y en dos localidades urbanas del interior del país, en el año 2000, con el financiamiento de la CSIC de la UdelaR⁷. Boado desarrolló en todos sus relevamientos muestras probabilísticas de PEA de ambos sexos, y no muestras independientes de

5 En la actualidad cualquier estudio del pasado puede ser replicado, modelado y contrastado con cualquier estudio actual, dando forma a poder disponer de miles de historias ocupacionales, lo cual cambia sustancialmente los conceptos que se sostuvieron sobre el cambio histórico, porque se ha incrementado enormemente la capacidad de re examen de los datos.

6 Junta Nacional de Empleo (JUNAE), fue un organismo integrado sindicatos, empresarios y el Estado para la prospección de políticas de empleo; se separó del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se transformó en el INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con iguales fines. Dirección Nacional de Empleo (DINAE): dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

7 Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), de la Universidad de la República. Servicio universitario de distribuye financiamiento a la investigación científica en UdelaR.

cada sexo, básicamente por dos razones, por un lado porque las mujeres incrementaron sustancialmente su participación en la PEA, de un 25% en 1963 a un 44% en 1996; y por otro lado, porque los efectos de la desigualdad de género no pueden estudiarse separados de donde se producen.

Boado realizó una encuesta a los miembros activos de 850 hogares de Montevideo, y generó una base de datos –insumo para este trabajo– que cubrió las siguientes temáticas: movilidad social intergeneracional, movilidad sectorial, movilidad social intrageneracional (carrera ocupacional), calificaciones y formación educativa de los trabajadores, presencia del capital relacional en las carreras ocupacionales.

A partir de su trabajo publicado en 2008⁸, pueden reconocerse varios clivajes con respecto a los trabajos previos. En primer lugar, el autor se orientó por las hipótesis más usuales que sostenían el análisis de las tasas absolutas de movilidad, examinando el cercamiento de la cumbre, la movilidad de corta distancia, los contrapesos generacionales, y los ‘rebotes’ al origen social a lo largo de la carrera ocupacional. En segundo lugar, avanzó hacia los modelos estadísticos de la época explorando el modelo de fluidez constante. En tercer lugar, midió los efectos de la educación y el capital social en las carreras ocupacionales para la explicación de sus logros ocupacionales. En cuarto lugar, además de recoger muestras de ambos sexos, generar marcos muestrales nuevos y específicos, típicamente urbanos, sustentó el análisis comparativo sobre el desarrollo y la desigualdad en las ciudades del país.

Los resultados producidos por Boado en prosecución de las hipótesis más convencionales de la teoría sobre la movilidad social, indicaron que en términos generales el proceso de reproducción de la desigualdad de oportunidades en Uruguay no parece apartarse significativamente del “mainstream” de los hallazgos internacionales. La movilidad social no cesó pronosticar Labbens y Solari, o Filgueira, ni mostró resultados contradictorios. Más bien ella ha mostrado un aspecto más duradero y complejo, como vaticinaba Errandonea. Se siguieron a manera de ordenamiento las tesis de cercamiento de la cumbre social, zona intermedia, y la fluidez constante. Pudo verse que Salto y Montevideo se asemejaban entre sí en la importancia de la herencia social. Aunque Salto fue la ciudad con la cumbre social más cerrada sobre sí misma, y donde los efectos de bloqueos en el acceso a la cumbre social fueron más notorios. Mientras que Montevideo y Maldonado se aproximaron más en la movilidad.

Por otro lado, todas las generaciones de entrevistados en las tres ciudades tuvieron en común haber estado expuestas a una desigualdad social con una inercia muy grande, que los acompañó en más de una fase de su historia ocupacional. Pero el contraste entre la descripción de toda la carrera y la de su fase inicial arrojó que los entrevistados de las ciudades del interior estuvieron expuestos a una desigualdad social más notoria que en el caso de los de Montevideo.

8 Tesis de doctorado de 2005 publicada en 2009: “Movilidad social en el Uruguay contemporáneo” IUPERJ/UdelaR.

El modelo de fluidez constante propuesto por Goldthorpe fue aplicado a los entrevistados de ambos sexos y ajustó entre las tres ciudades. Para ambos sexos y en cada ciudad, el modelo fluidez constante intergeneracional (CnSF) ajustó sólo para las ciudades del interior, pero no para Montevideo. Poniendo en claro donde la primaba la desigualdad de clase y dónde la de género. Finalmente el autor exploró el modelo CnSF sólo a los hombres jefes de 1996 y 1959, reuniendo sus datos con los del estudio de Labbens y Solari; y la hipótesis de la fluidez constante sí mostró tener vigencia. Esto sugiere que el resultado, para el total de la muestra de ambos sexos de 1996 de Montevideo, reunía trayectorias ocupacionales muy distintas de los hombres jefes.

En consecuencia la finalidad de este trabajo es retomar el análisis allí donde lo dejó Boado en 2008, integrando solamente las muestras de Montevideo 1996 y 2010, pero separando en el análisis a hombres y mujeres. En este sentido las preguntas parecen sencillas: ¿se ha cerrado la cumbre social?; ¿la movilidad ascendente ha sido decreciente como pronosticaron Labbens y Solari; ¿las distancias entre las clases son más pronunciadas?; ¿la movilidad social limita cambios ocupacionales en torno a posiciones intermedias de la estructura social?

Esquema de clases para el estudio de la movilidad social

Para la presente investigación sobre movilidad social se adoptó el esquema EGP (Erikson, Goldthorpe, Portocarero), que es ampliamente preferido en numerosos estudios internacionales comparativos⁹. Con estos criterios se reprocesaron los datos de las encuestas de 1996 y 2010.

El esquema EGP considera clases sociales a los agrupamientos de ocupaciones en función de y la calidad de los contratos de trabajo propios de las ocupaciones (tipos de ocupaciones), de la categoría en la ocupación (empleado vs autoempleado), de la supervisión o control de la función laboral en el esquema laboral (supervisa personal vs no supervisa a otro personal), y de la rama de actividad (rural vs no rural). Con estos criterios conforma 11 posiciones o clases sociales: la clase de servicio, que se diferencia entre empresarios, profesionales, gerentes, directivos y controladores, de alta función (I) y los de baja función (II); la clase intermedia de trabajadores rutinarios de los servicios, con su subconjunto de jefes de sección y secretarios/as (IIIa); y la de administrativos y vendedores de variado tipo (IIIb); las de autoempleados, propietarios de sus pequeños y medianos negocios de cualquier tipo, pero totalmente urbanos, que se diferencian entre los que tienen empleados (IVa) y los que no tienen (IVb); la de los supervisores, contra maestres y suboficiales (V), que marca el inicio del sector manual; la de los trabajadores calificados o de oficios especializados en el trabajo manual bási-

9 La posición de clase surge de combinar nombre de la ocupación al momento de la entrevista según diccionario ISCO88 de OIT, más condición de supervisión de trabajo ajeno, más el tipo de relación laboral, según los algoritmos de Hendricks y Ganzeboom, más correcciones adaptadas a la realidad de este continente. Para los desempleados se consideró la última ocupación desempeñada antes de la encuesta.

camente (VI), aunque puede incluirse servicios; la de los trabajadores semi y poco calificados, de la producción y los servicios; la de los propietarios rurales de producción mediana y pequeña, dueños de su predio, o de maquinaria para la producción agrícola, o administradores de establecimientos rurales (IVc); y la de los trabajadores rurales dependientes, de cualquier calificación (VIIb). Para este trabajo, siguiendo recomendación de sus creadores, las 11 clases se agruparon en 7 clases: I+II, IIIa+IIIb, IVa+IVb, IVc, V+VI, VIIa, VIIb.

Pero, dado que el diseño de relevamiento, tanto en 1996 como en 2010, extrajo solamente una muestra de la PEA urbana mayor de 18 años y con experiencia laboral, de la ciudad de Montevideo; y que se halló en cada muestra sólo 1% de posiciones sociales actuales en ocupaciones rurales; en consecuencia en los análisis que siguen se excluyeron todos los casos que reportaron orígenes y destinos en clases sociales de tipo rural. Lo cual en total alcanzó un 8,5% del total de los casos en ambas muestras, y por ende sólo se utilizaron las clases I+II, IIIa+IIIb, IVa+IVb, V+VI, y VIIa. Se consideró el esquema de clases sociales EGP a 716 casos de 1996 y 1840 de 2010.

Sensibilidad del esquema de clases

Un primer paso descriptivo, fue medir la capacidad de diferenciación social del esquema EGP para Uruguay, a nivel general, y según sexo, considerando variables continuas básicas como el ingreso personal declarado (en pesos y en dólares corrientes), los ingresos medios escalados en la media inferior (VIIa), y los años de escolaridad, bajo el procedimiento que se conoce como análisis de la varianza (Tabla 1). Este análisis se exhibe para 1996 y 2010.

Las cinco categorías del esquema EGP confirman una desigualdad socioeconómica válida entre los entrevistados, por medio del análisis de la varianza, con pruebas F significativas al 0,01, en cualquiera de las variables elegidas como dependiente de la desigualdad que expresa EGP. Los resultados señalaron tres cosas. Primero, una consistencia apreciable para la diferenciación entre las clases, con coeficientes de variación aceptables en cada categoría, en particular el ingreso promedio estimado y en años de escolaridad. Segundo, un “orden” subyacente a las categorías en términos de ingresos promedio según clases EGP. Una “jerarquía” válida en términos estadísticos, que bien podría, para el caso uruguayo reordenar la pauta EGP clásica en I+II, IVa+b, IIIa+b, V+VI, VIIa. Tercero, los años de escolaridad también recogen la jerarquización entre las clases EGP en ambos años, de manera más suavizada, y sin exhibir variaciones sustanciales.

Tabla 1. Montevideo 1996 y 2010. Ingresos medios (en pesos y dólares corrientes del año). Ingresos medios escalados y Años de escolaridad promedio según clase social EGP.

EGP ACTUAL		1996				2010			
Total Muestra		1	2	3	4	1	2	3	4
I+II	Media	8616,1	974,3	2,69	14,3	23442,4	1155,9	3,25	14,9
	CV	0,794			0,214	0,299			0,268
IIIa+b	Media	5752,1	650,4	1,8	10,9	15928,3	785,4	1,65	11,3
	CV	1,019			0,265	0,381			0,269
IVa+b	Media	7037,4	795,8	2,2	9,5	16020,1	789,9	1,76	8,9
	CV	0,887			0,364	0,568			0,383
V+VI	Media	3900,1	441	1,22	8,6	10766,6	530,9	1,53	8,7
	CV	0,568			0,326	0,448			0,284
VIIa	Media	3192,6	361	1	7,9	7877,6	388,4	1	7,8
	CV	0,674			0,395	0,632			0,342
	Media	5695,3	644	-	10,4	14769,2	728,3	-	10,5
	CV	0,961		-	0,368	0,586		-	0,402
ANOVA (F) 0,01		32,4	-	-	119	378	-	-	23

1 Ingreso promedio en pesos uruguayos; 2 Ingreso promedio en USD; 3 Ingresos medios escalados en VIIa; 4 Años de escolaridad promedio.

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Tendencias generales de la movilidad social entre 1996 y 2010

En la tabla 2 vemos los resultados según clase social de origen y de destino al momento de la encuesta en 1996 y 2010, para el conjunto de la muestra y separado por sexo del entrevistado. El origen social está representado por la ocupación del jefe de familia, según el entrevistado, cuando él o ella tenían 15 años de edad. Y la posición actual por la última que tenía el entrevistado al momento de la entrevista.

Los marginales que se exhiben representan la estructura de posiciones de clase al momento de cada encuesta, y los orígenes declarados por los entrevistados. Se advierten algunas variaciones de tamaño entre orígenes y destinos de las categorías. La categoría I+II, la clase de servicio, tiende a crecer entre cada muestra, y también lo hace la clase VIIa, los trabajadores no calificados. Esto ocurre tanto para hombres como para mujeres. En especial se advierte que el destino I+II crece sensiblemente para los hombres hacia 2010. También se advierte que las categorías IVa+b y V+VI no son destinos ni mayoritarios ni crecientes para las mujeres entre ambas muestras.

Tenemos un panorama prima facie que nos señala que hay clases hacia las cuales se concentran o distribuyen los cambios entre orígenes y destinos. Las mujeres se concentran en el trabajo no manual calificado y no calificado, y en el manual de baja calificación. Los hombres se distribuyen de manera más pareja en los destinos ocupa-

cionales, aunque hasta 2010 no exhibieron un acceso a la clase de servicio como fue usual para las mujeres. Lo que sí queda claro es que las mujeres tienen una presencia muy menor en las posiciones que reflejan la destreza manual y la posesión de capital económico.

Tabla 2. Totales marginales de orígenes sociales y posiciones actuales para muestras de Montevideo. 1996 y 2010

Montevideo 1996						
Clases	Ambos sexos		Sólo Hombres		Sólo Mujeres	
	Origen social	Posición actual	Origen social	Posición actual	Origen social	Posición actual
I+II	14,2	23,3	13,9	18,5	14,6	29,5
IIIa+b	21,9	24,7	22,4	20,4	21,3	30,2
IVa+b	22,5	13,5	21,7	18,0	23,5	7,6
V+VI	25,1	19,3	24,1	24,3	26,3	12,7
VIIa	16,4	19,3	18,0	18,7	14,3	20,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Montevideo 2010						
Clases	Ambos sexos		Sólo Hombres		Sólo Mujeres	
	Origen social	Posición actual	Origen social	Posición actual	Origen social	Posición actual
I+II	15,3	26,5	14,5	24,7	16,0	28,4
IIIa+b	16,7	20,3	16,7	15,5	16,8	25,2
IVa+b	19,9	13,9	20,5	17,2	19,4	10,3
V+VI	19,0	13,9	18,8	18,4	19,1	9,2
VIIa	29,1	25,5	29,5	24,2	28,7	26,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

En la tabla 3, un primer grupo de tasas resume la movilidad y la herencia de modo agregado¹⁰.

El cociente entre los casos que mantienen el origen social sobre el total de casos, indica la proporción de herencia, o inmovilidad, o reproducción social; y el cociente entre los cambiaron sus posiciones sociales actuales respecto de las posiciones sociales de origen, refleja la movilidad social total. Aquí podemos ver que la inmovilidad

¹⁰ Las tasas absolutas de movilidad son las medidas que responden a un conjunto variado de preguntas que, históricamente, desde el pionero trabajo de David Glass y su equipo, han modelado la agenda de los estudios de movilidad social.

decrece de 1996 a 2010, en especial para los hombres; la movilidad entre todas las clases crece de 1996 a 2010, en especial la movilidad ascendente para los hombres fue muy notoria.

Es posible descomponer esta movilidad social total entre las discrepancias en los marginales y un residuo global. La primera de las dos sugiere un cambio sensible entre los tamaños de las categorías de los orígenes y los destinos, suele llamarse “movilidad estructural”, y se mide con un índice de disimilaridad que suma las diferencias observadas entre las categorías de orígenes y destinos. Se le interpretó de diversas formas, inapropiadas por comparar padres e hijos y procesos históricos, cuando en realidad sólo refleja la discrepancia en la que las historias ocupacionales de los hijos no alcanzan las posiciones que tuvieron los padres. En este caso se ve que los hombres en 2010 exhiben una mayor movilidad estructural que en 1996; es decir que hubo mayor proporción de cambios entre los hombres de los que había hacia 1996. Y ya anotamos que eran predominantemente ascendentes. Las mujeres atenuaron su movilidad estructural, que de por sí es muy elevada, tomado en cuenta que no se dirigen hacia todos los destinos sino que orientan hacia tres de las cinco clases.

El residuo entre la movilidad total y la estructural es la movilidad de reemplazo o circulatoria. Su carácter residual devenía del énfasis en lo estructural, mal conceptualizado en el tipo previo de movilidad. Y por ello las hipótesis le adjudicaron un carácter menos preciso, originado en la diversidad de perspectivas y ambiciones personales de los entrevistados. Esta movilidad entre las mujeres creció sensiblemente, y entre los hombres se mantuvo elevada. Estas medidas que pretenden situar una cantidad de movilidad no ayudan porque refieren a una generalidad que es muy limitada, ya que hay clases que sólo pueden tener una movilidad descendente y otras que sólo pueden tener una movilidad ascendente. Cuánta movilidad es una pregunta de otros enfoques de tipo estructural, mientras que aquí debe importar un enfoque de los movimientos entre orígenes y destinos.

Tabla 3: Montevideo 1996 y 2010. Tasas brutas de Movilidad total y por sexos

Aspectos descriptivos de movilidad	1996			2010		
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres
N	726	411	315	1840	985	835
Inmovilidad	30,3	33,1	26,7	28,6	30,2	27,0
Tasa de Movilidad Absoluta	69,7	66,9	73,3	71,4	69,8	73,0
Tasa de Movilidad Ascendente	39,5	35,3	45,1	45,5	42,9	48,1
Tasa de Movilidad Descendente	30,2	31,6	28,2	25,9	26,9	24,9
Índice de disimilitud (=movilidad "estructural")	14,8	5,7	29,5	14,7	10,2	20,8
Movilidad "circulatoria" (=absoluta-estructural)	54,9	61,3	44	56,7	59,6	52,2
Tasa de Disparidad (% outflow I+II / % outflow VIIa)	3,33	7,79	1,79	5,56	6,44	4,92

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Reproducción social y movilidad social

Precisamente para analizar la relación entre los orígenes y los destinos, recuperaremos algunas hipótesis clásicas y profundizaremos en el análisis descriptivo. En su libro sobre la movilidad social en Gran Bretaña (1987), Goldthorpe procuró situar, medir y responder a dos hipótesis usuales para interpretar las tendencias de la movilidad social en Gran Bretaña: el "cercamiento de la cumbre social", y la "zona intermedia". Para estas hipótesis el autor utilizó las tasas absolutas de movilidad que surgen de la tabla de movilidad, y que son notoriamente más útiles para examinar cualquier sociedad que hablar de cantidades por sí mismas. La primera hipótesis sostenía que la cumbre social era inmune a la movilidad social. Por lo cual era necesario a medir el reclutamiento y la dispersión de la cumbre social. La pregunta subyacente es: ¿está cerrada la cumbre social o admite la entrada fácil a personas que provienen de otros orígenes? Para ello se deben mirar los inflows, o proporciones de llegada, y los outflows, o proporciones de salida, que son las probabilidades condicionales a cada destino, o a cada origen social. Los inflows muestran cuántos llegan a cada posición, con lo que se advierte cuánto retiene cada posición y cuánto recluta. Y los outflows muestran cuánto reproduce cada origen y cuánto dispersa.

La segunda de las hipótesis replanteadas por Goldthorpe refería a que la mayor proporción de la movilidad social era de corta distancia y se concentraba en torno a una

“frontera social” que podría ubicarse entre los “trabajos manuales y no manuales”¹¹. La presente pauta ocupacional, en cinco categorías no favorece especialmente la observación de este fenómeno, si bien las dos primeras clases son típicamente no manuales y las dos últimas predominantemente manuales. Observar una hipótesis así requeriría que el grueso de los casos se concentrara en celdas adyacentes a la diagonal y en torno a las categorías que señalan la frontera manual no manual. Lo que sugiere esta hipótesis puede formularse de modos más complejos y sistemáticos. A continuación examinaremos resultados que surgen de las tablas de outflows e inflows de 1996 y 2010, para explorar que ha pasado con el cercamiento de la cumbre social, y, la zona intermedia, para los hombres y mujeres de Montevideo.

Los outflows, son las probabilidades condicionadas al origen, y permiten medir la capacidad de retención y la dispersión de una clase social. En la tabla 4 se reportan para cada año y sexo las proporciones de casos, según clase social de origen, que mantienen su origen social. El gráfico 1 nos muestra dos poligonales que permiten comparar la magnitud de la retención para cada origen social en 1996 y 2010 para ambos sexos. La tendencia interanual propende a una figura de “U” o al menos una “V”, señalando con ello que la clase de servicio (I+II) y la clase VIIa suelen tener niveles de retención apreciables en general. La clase de servicio es siempre la clase que tiene niveles de retención más altos y exhibe una tendencia creciente de 1996 a 2010. La clase IIIa+b, no manual e intermedia, pasa del segundo al tercer puesto en la capacidad de retención de 1996 a 2010. Pero lo que destaca es que los obreros calificados y los capataces, así como los pequeños empresarios con y sin personal, siempre ocupan el cuarto y quinto lugar, en este contraste que representa las chances de reproducción. En resumen, si en la sociedad se esperara que se reprodujeran burgueses y proletarios en sentido clásico, habría que prevenirse porque estos grupos parecen ser vulnerables a reproducirse, ya que en ambas muestras estas clases del capitalismo típico están por debajo del 28% de retención. En otras palabras, parece que la sociedad tiene más chance de reproducir otras posiciones que éstas, que por su parte dispersan muchos descendientes.

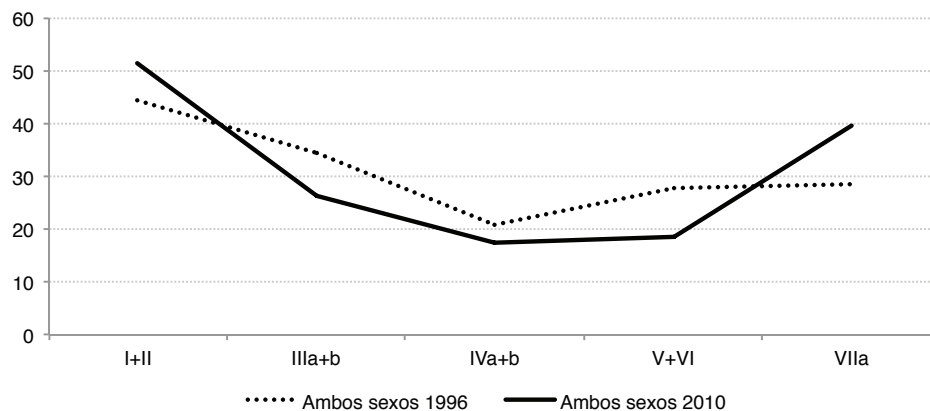
11 Más precisamente Blau y Duncan (1978) sugirieron la existencia de fronteras o cruces entre los empleos no manuales, manuales y rurales, con desiguales chances de ser atravesados.

Tabla 4. Outflows 1996 y 2010. Montevideo.
% retención de origen social, por sexos, según origen social

Origen social	Outflows					
	Todos 1996	Hombres 1996	Mujeres 1996	Todos 2010	Hombres 2010	Mujeres 2010
I+II	44,4	42,1	47,8	51,6	54,1	50,7
IIIa+b	34,6	33,7	35,8	26,2	27,7	24,7
IVa+b	20,9	30,3	9,5	17,4	23,2	11,3
V+VI	28	32,3	22,9	18,5	25,7	10,9
VIIa	28,6	29,7	26,7	39,5	35,8	43,5

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Gráfico 1. Outflows 1996 y 2010. Montevideo.
% retención de origen social, ambos sexos.



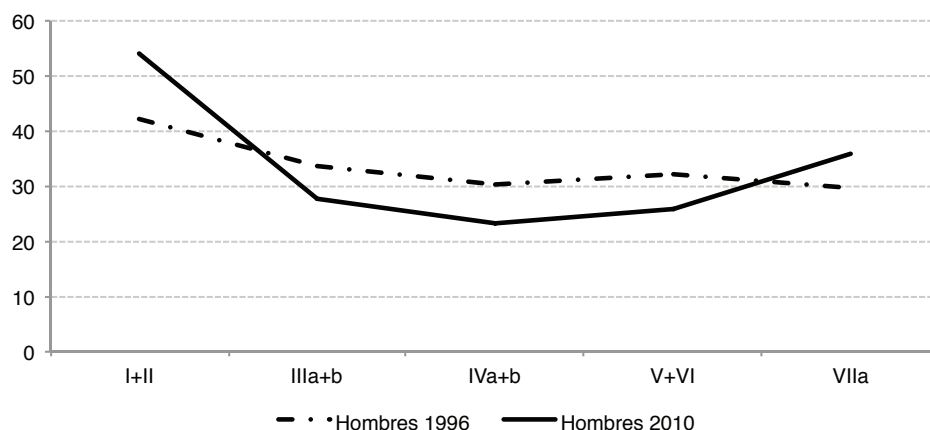
Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Los gráficos 2 y 3, nos traen los outflows de hombres y mujeres en cada año, y se explicitan aspectos importantes anotados en la tabla 2 sobre las distribuciones marginales. La tendencia general de la reproducción en forma de "U" se aplica con claridad a las mujeres, en ambos años, con las clases de servicio (I+II), la clase intermedia (IIIab) y la clase VIIa como principales reproductores. Las mujeres exhiben baja chance de retener: el autoempleo empresarial de capital medio y pequeño, incluso de empleo autónomo; y los oficios especializados del trabajo manual. No extraña que, como muestran las descripciones marginales, hacia donde menos van las mujeres (IVab y V+VI), es desde donde son menos retenidas.

Los hombres exhiben un cambio de 1996 a 2010. Claramente en 1996 los hombres exhibían un nivel de reproducción de las clases muy importante, todas se ubicaron entre 44 y 30%. La clase de servicio era y es la más eficaz para reproducirse. La clase VIIa en el extremo opuesto, tendió a fortalecer su reproducción en el mismo lapso. También se destaca el debilitamiento hacia 2010 del empleo no manual no calificado, del empresariado medio, y del empleo manual calificado, donde tradicionalmente ha sido importante el empleo masculino.

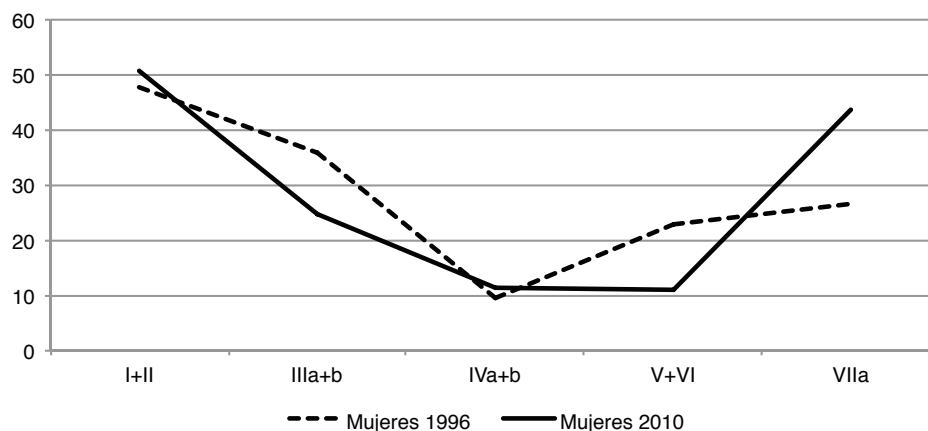
En resumen, en primer lugar, vemos que los movimientos de salida desde la clase más alta, la que experimentó mayor ingreso medio (y menor variabilidad del mismo), se reducen de 1996 a 2010, y tiende a aumentar la retención, lo cual comparten hombres y mujeres. En segundo lugar, vemos que la reproducción entre las clases es muy desigual entre sí; y hay algunas de ellas que se debilitan sustancialmente, en particular entre los hombres de un año a otro. En tercer lugar, la desigualdad de reproducción de las clases entre las mujeres parece no variar sustancialmente de un año a otro, aunque ya vimos que las diferencias de ingreso también se estiraron. En cuarto lugar, las tendencias de la reproducción de las clases son débiles precisamente en las zonas intermedias de la estructura de clases, esto podría estar sugiriendo la naturaleza de los movimientos y probablemente la mayor incidencia hacia estos destinos. En quinto lugar, podría decirse que los hombres de 2010 se parecen más a las mujeres en general, que a los hombres de 1996.

**Gráfico 2. Outflows 1996 y 2010. Montevideo.
% retención de origen social. Hombres.**



Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

**Gráfico 3. Outflows 1996 y 2010. Montevideo.
% retención de origen social. Mujeres.**



Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Un aspecto adicional y necesario es saber hacia dónde se van los que dejan su origen social. Es notoria la limitación que tienen las clases extremas del esquema, porque los miembros de la clase de servicio se mantienen o sólo caen, mientras los de la clase VIIa nunca escapan o sólo mejoran. En la siguiente tabla 5 examinaremos cuál es el principal destino de las clases en cada año de observación y por sexo, según la clase de origen.

Fuera de sí misma, el principal destino para los nacidos en la clase de servicio no puede ser otro que un descenso social, y es dominante en cualquier año y sexo: la clase IIIab. Es decir, un trabajo no manual y asalariado. El empresariado pequeño siempre es segunda opción, pero sólo para los hombres.

Para las personas provenientes de la clase IIIab, en cualquier año y en cualquier sexo, la clase de servicio es la principal opción. Es decir un ascenso. En 2010 lo es incluso por encima del nivel de reproducción de la propia clase.

El origen pequeño empresarial (IVab), como ya anotamos, es uno de los más débiles para reproducirse. Puede verse que la transferencia del capital, no suele darse a edades tempranas de la carrera ocupacional, y también es plausible que suceda a edades donde los individuos tienen carreras irreversibles para heredar. Los casos de origen empresario tienen como principal destino la clase de servicio cuando son mujeres en 1996 y 2010, y para los hombres en 2010. En las mujeres la clase IIIab siempre fue más concurrida que la propia clase de origen IVab, que fue siempre tercera opción.

Como ya se notó, hubo un cambio para los hombres de 2010, el movimiento hacia la clase de servicio fue mayor que la propia reproducción, algo opuesto a 1996.

El origen en la clase de los oficios y los capataces (V+VI), el empleo calificado de cualquier rama productiva, ha sido claramente uno de los de mayor dispersión. Para los hombres la vía no reproductiva los condujo en primera opción al trabajo no calificado manual, mientras que las mujeres fueron al trabajo no calificado no manual. Una clara dispersión que en el actual esquema sostienen movimientos contrapuestos descendentes y ascendentes, por lo cual una lectura de ese tipo debe ser al menos cautelosa.

Finalmente para la clase de los trabajadores no calificados (VIIa), nuevamente los destinos no reproductivos fueron claramente dispares, aunque siempre indicaron movilidad ascendente. Para los hombres el destino han sido las ocupaciones manuales calificadas, en 1996 en proporción mayor que la propia reproducción. Mientras que para las mujeres, las ocupaciones no manuales en general, en clase de servicios o intermedia, son la principal opción luego de la reproducción. Estos sucesivos resúmenes nos señalan aspectos referidos a las chances de recorrer distancias, o de las distancias a que sitúan las clases entre sí.

Tabla 5. Principal clase de destino según origen social, por año de relevamiento y sexo, según clase de origen

Origen social	Clase de destino por años y sexo			
	1996		2010	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
I+II	IIIa+b	IIIa+b	IIIa+b	IIIa+b
IIIa+b	I+II	I+II	I+II	I+II
IVa+b	IIIa+b	I+II	I+II	I+II
V+VI	VIIa	IIIa+b	VIIa	IIIa+b
VIIa	V+VI	I+II	V+VI	IIIa+b

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

La contracara que proponen los inflows es el reclutamiento de las clases, en otros términos, cuántos y quiénes. Fue tradicional en los estudios sobre movilidad enfatizar el ascenso a la cumbre, en especial, para contrastar la hipótesis de la zona intermedia como concentración geográfica de la movilidad. En muchos estudios se examina el acceso a la cumbre social por medio de las Tasas de disparidad (disparity ratios), pero aquí optamos por reiterar un análisis semejante al previo. Con la variante de atender al reclutamiento general y no al autoreclutamiento. Por eso trabajaremos con el porcentaje de casos que ingresaron a cada posición de clase actual, o sea al momento de la encuesta.

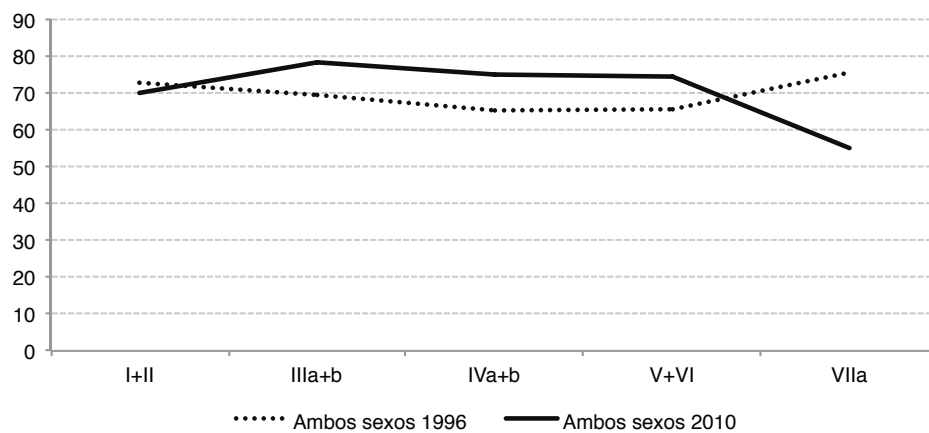
En la tabla 6, se puede advertir una ligera diferencia a nivel general: las clases extremas de la estructura de clase eran más abiertas que las clases intermedias en 1996, y a su vez, en 2010 las clases intermedias son más abiertas que las clases extremas, que en un caso se cierran sobre sí (VIIa) de modo muy notorio. La tendencia de 1996 era muy clara para los hombres, las clases I+II y V+VI y VIIa fueron más permeables que las clases IIIa+b y IVa+b. Para las mujeres las tendencias son las propias del empleo femenino que crece en I+II, IIIa+b y VIIa, tiene dificultades en IVa+b y no avanza en V+VI. En general para niveles de por sí altos de reclutamiento, el avance de la movilidad hacia 2010 para hombres y mujeres presenta una tendencia similar. Se retrae el ingreso a la clase más baja, en otras palabras “caen” cada vez menos casos; y ya vimos que de un año a otro se eleva la reproducción. Los gráficos 4, 5 y 6 ilustran lo examinado. Por ende es notorio que se estiran las distancias sociales entre base y cumbre.

Tabla 6. Montevideo 1996 y 2010. Reclutamiento en clase de destino (% inflows de otros orígenes) por año y sexo

Clase de destino	Reclutamiento					
	Todos 1996	Hombres 1996	Mujeres 1996	Todos 2010	Hombres 2010	Mujeres 2010
I+II	72,8	68,4	76,3	70,1	68,1	71,5
IIIa+b	69,3	63,1	74,7	78,4	70,1	83,4
IVa+b	65,3	63,5	70,8	75	72,5	78,7
V+VI	65,4	68	52,5	74,6	73,7	77,4
VIIa	75,7	71,4	81	55	56,4	53,7

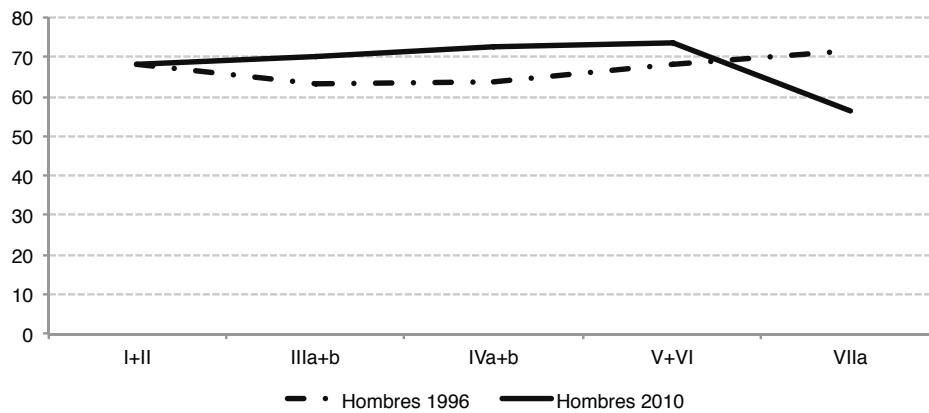
Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Gráfico 4. Inflows 1996 y 2010. % de ingresos según clase social, ambos sexos

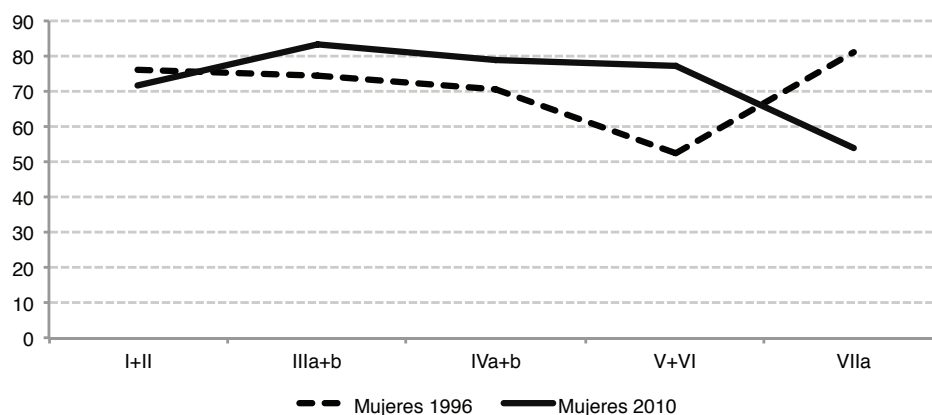


Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Gráfico 5. Inflows 1996 y 2010. % de ingresos según clase social. Hombres.



Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Gráfico 6. Inflows 1996 y 2010. % de ingresos según clase social. Mujeres.

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

¿Y de dónde vienen los móviles? La tabla 7 nos acerca el principal afluente a cada clase. Para la clase I+II la mayoría proviene alternativamente de las clases IIIab y IVab. Es decir de las cercanías de la estratificación. Para los hombres en 1996 provienen más de la clase no manual intermedia (IIIab) y en 2010 de los pequeños empresarios (IVab). Y para las mujeres en 1996 de primero IVab y luego en 2010 de IIIab. Claramente a la clase de servicio se llega principalmente desde la propiedad o desde el empleo no manual.

La presencia en IIIab del ascenso social es muy clara, pero en 1996 los móviles provienen de las cercanías (IVab o V+VI), mientras que en 2010 emerge la larga distancia procediendo desde VIIa.

En el pequeño empresariado (IVab) en 1996, los hombres que llegaron provenían del trabajo manual calificado (V+VI), y las mujeres eran del no manual no calificado (IIIab). Mientras que en 2010 el principal aporte es de VIIa, es decir para ambos sexos el origen no calificado manual. En V+VI para los hombres los móviles provenían de VIIa en ambos años, un pasaje típico y plausible del movimiento de corta distancia por vía de adquirir calificación. Mientras que para las mujeres, en 1996 provenían de IVab, y para 2010 provienen de VIIa. Finalmente, en VIIa la circularidad con V+VI es innegable. Es claro así que hay un circuito muy notorio en la parte baja de la estructura de clases.

Tabla 7. Montevideo. 1996 y 2010. Principales clases, procedencia por año y sexo, según clase de destino

Clase de destino	1996		2010	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
I+II	IIIa+b	IVa+b	IVa+b	IIIa+b
IIIa+b	IVa+b	V+VI	VIIa	VIIa
IVa+b	V+VI	IIIa+b	VIIa	VIIa
V+VI	VIIa	IVa+b	VIIa	VIIa
VIIa	V+VI	V+VI	V+VI	V+VI

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Conclusiones

El trabajo retomó la discusión y análisis de la movilidad social en Uruguay, para lo cual presentó los resultados de las dos últimas muestras realizadas por el autor, y recuperó las conclusiones de otros varios autores nacionales e internacionales sobre el tema.

De manera general la movilidad social no decayó entre 1996 y 2010 sino que, tal como reflejan la tasa general de movilidad, los índices de disimilaridad y los inflows, se incrementó levemente: La movilidad social en 1996 fue menor al 70% y en 2010 superó el 71%. Numerosos estudios en la mayoría de los países sitúan los porcentajes de movilidad en ese entorno del 70%.

La movilidad ascendente, en términos tradicionales, no la sugerida por Goldthorpe y Erikson, siguió siendo el principal componente de la movilidad de hombres y mujeres, y se incrementó para ambos en 2010. Por lo cual ya las hipótesis de Labbens y Solari pasados tres relevamientos deben ser abandonadas.

Sin embargo la alegría fue por barrios, y no todas las clases se reprodujeron y dispersaron de igual modo. La herencia o retención del origen tendió a transformarse en el rasgo dominante entre 1996 y 2010 para las clases I+II y VIIa, tanto para hombres como para mujeres. Mientras que en las clases IIIab, IVab y V+VI, tendió a debilitarse la reproducción, y a dominar la dispersión hacia clases sociales contiguas. Claramente la clase I+II tiene afinidades con las clases IVab y IIIab en cualquier movimiento; así como la VIIa tiene afinidades con V+VI. Como consecuencia de la herencia observada, la movilidad se incrementó para los hombres, y se mantuvo ligeramente constante para las mujeres. Hay aspectos a considerar porque las mujeres no se mueven con igual intensidad en todas las ocupaciones y los hombres exhiben mayor amplitud de destinos. Puede presumirse que los hombres de 2010 se parecen más a las mujeres de ambos relevamientos, en sus movimientos y en su propensión a la herencia. Pero hay que advertir que esta convergencia de hombres y mujeres hacia 2010 no es coincidencia plena por lo ya señalado de las ocupaciones.

También hay que señalar, recordando la tabla 1, que las diferencias entre las clases en los ingresos escalados entre 1996 y 2010, así como en las tasas de disparidad de inflows a clase I+II, confirman que se consolidó la elongación de las distancias de clases que adelantamos como hipótesis tendencial en nuestro libro de 2009. Las clases estarían alejándose entre sí en general, y esto se haría más notorio para las mujeres indicando una tendencia a la creciente diferenciación entre sí.

Para los hombres de 1996 no era tan notorio el debilitamiento de la herencia frente a la movilidad, pero en las restantes submuestras sí fue claro el fortalecimiento de la herencia sólo en los extremos de la estructura social, mientras que en las posiciones intermedias, predominaba un debilitamiento de la herencia y una fuerte presencia de los inflows desde posiciones contiguas. Plantear una hipótesis que limite la movilidad social a la contigüidad o movimientos cortos, no es inverosímil, hay resultados, pero podría examinarse de mejor modo, apuntando a saber cuánto se debe a movilidad y cuánto a un condicionamiento del origen más allá de la reproducción. Por otra parte, debe entenderse que la prevalencia de movimientos de larga distancia, por ejemplo al atravesar más de una clase respecto del propio origen, puede estar afectado por el proceso de elongación de la desigualdad que señalamos, y por ende debe precisarse de manera escalar. Pero asimismo, salvo en ejemplos históricos muy especiales, propios de movilidad social forzada, o de un circuito de afinidad muy específico, es plausible esperar que sea de baja entidad y que enfrente numerosos bloqueos.

Anexos

Tabla A1. Hombres 1996. Ingresos y destinos de las clases sociales

Clase de origen	Clase del encuestado					
	I+II	IIIa+b	IVa+b	V+VI	VIIa	Total
Porcentajes de salida						
I+II	42,1	28,1	19,3	7,0	3,5	100,0
IIIa+b	18,5	33,7	15,2	15,2	17,4	100,0
IVa+b	18,0	19,1	30,3	18,0	14,6	100,0
V+VI	15,2	10,1	18,2	32,3	24,2	100,0
VIIa	5,4	13,5	5,4	45,9	29,7	100,0
Total	18,5	20,4	18,0	24,3	18,7	100,0
Porcentajes de entrada						
I+II	31,6	19,0	14,9	4,0	2,6	13,9
IIIa+b	22,4	36,9	18,9	14,0	20,8	22,4
IVa+b	21,1	20,2	36,5	16,0	16,9	21,7
V+VI	19,7	11,9	24,3	32,0	31,2	24,1
VIIa	5,3	11,9	5,4	34,0	28,6	18,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla A2. Hombres 2010. Salidas e Ingresos por clase social

Clase de origen	Clase del encuestado					
	I+II	IIIa+b	IVa+b	V+VI	VIIa	Total
Porcentajes de salida						
I+II	54,1	14,8	12,6	9,6	8,9	100,0
IIIa+b	32,9	27,7	11,6	12,9	14,8	100,0
IVa+b	33,7	12,6	23,2	12,1	18,4	100,0
V+VI	10,3	13,1	18,3	25,7	32,6	100,0
VIIa	8,4	12,4	17,9	25,5	35,8	100,0
Total	24,7	15,5	17,2	18,4	24,2	100,0
Porcentajes de entrada						
I+II	31,9	13,9	10,6	7,6	5,3	14,5
IIIa+b	22,3	29,9	11,3	11,7	10,2	16,7
IVa+b	27,9	16,7	27,5	13,5	15,6	20,5
V+VI	7,9	16,0	20,0	26,3	25,3	18,8
VIIa	10,0	23,6	30,6	40,9	43,6	29,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Tabla A3. Mujeres 1996. Ingresos y destinos de las clases sociales

Clase de origen	Clase del encuestado					
	I+II	IIIa+b	IVa+b	V+VI	VIIa	Total
Porcentajes de salida						
I+II	47,8	30,4	6,5	2,2	13,0	100,0
IIIa+b	34,3	35,8	9,0	9,0	11,9	100,0
IVa+b	36,5	27,0	9,5	10,8	16,2	100,0
V+VI	10,8	32,5	3,6	22,9	30,1	100,0
VIIa	26,7	22,2	11,1	13,3	26,7	100,0
Total	29,5	30,2	7,6	12,7	20,0	100,0
Porcentajes de entrada						
I+II	23,7	14,7	12,5	2,5	9,5	14,6
IIIa+b	24,7	25,3	25,0	15,0	12,7	21,3
IVa+b	29,0	21,1	29,2	20,0	19,0	23,5
V+VI	9,7	28,4	12,5	47,5	39,7	26,3
VIIa	12,9	10,5	20,8	15,0	19,0	14,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabla A4. Mujeres 2010. Salidas e ingresos por clase social

Clase de origen	Clase del encuestado					
	I+II	IIIa+b	IVa+b	V+VI	VIIa	Total
Porcentajes de salida						
I+II	50,7	27,4	8,2	6,2	7,5	100,0
IIIa+b	47,4	24,7	9,1	5,2	13,6	100,0
IVa+b	34,5	26,6	11,3	7,9	19,8	100,0
V+VI	14,3	26,3	11,4	10,9	37,1	100,0
VIIa	10,3	22,5	10,7	13,0	43,5	100,0
Total	28,4	25,2	10,3	9,2	26,9	100,0
Porcentajes de entrada						
I+II	28,5	17,4	12,8	10,7	4,5	16,0
IIIa+b	28,1	16,5	14,9	9,5	8,5	16,8
IVa+b	23,5	20,4	21,3	16,7	14,2	19,4
V+VI	9,6	20,0	21,3	22,6	26,4	19,1
VIIa	10,4	25,7	29,8	40,5	46,3	28,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuestas de Movilidad social 1996 y 2010.

Bibliografía

- ABBOTT, P.; PAYNE, G.** (Eds.). (1991). "The social mobility of women: Beyond male mobility models"; The Falmer Press, London.
- BLAU, P.; DUNCAN, O.** (1978). "The American Occupational Structure." Free Press, N.Y.
- BOADO, M.** (2004). "Tras los pasos de Labbens y Solari: Movilidad social de Hombres jefes de hogar en Montevideo 1959-1996"; en: "El Uruguay desde la Sociología II". Lic E. Mazzei (Ed), Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Montevideo.
- BOADO, M.** (2009). "Movilidad social en el Uruguay contemporáneo". IUPERJ/Udelar. Montevideo.
- BOADO, M.; FERNÁNDEZ, T.** (2006). "La alegría no va por barrios... ¿Quién pagó la crisis de 2002 y el empobrecimiento, según clase social?"; en: E. Mazzei (Comp): "El Uruguay desde la Sociología IV", Departamento de Sociología. FCS, Udelar. Montevideo.
- BOADO, M.; FERNÁNDEZ, T; PARDO, I.** (2006). "Un esquema de estratificación basado en la clase: precisiones metodológicas para la aplicación del esquema 'EGP' en Uruguay". Documento de Trabajo Departamento de Sociología. FCS, Udelar. Montevideo.
- BREEN, R.** (Ed). (2004). "Social mobility in Europe"; Oxford University Press, Oxford.
- BREEN, R; LUIJKX, R.** (2004). "2004 Social mobility in Europe between 1970 and 2000"; in Breen, R (Ed) "Social Mobility in Europe".
- DUNCAN, O.** (1966). "Methodological issues in the analysis of social mobility", in: N. Smelser & S.M Lipset (eds): "Social structure and mobility in economic development."; Aldine, Chicago.
- ESCOBAR, A.; CORTÉS, F.** (2007). "Modelos de acumulación de capital y movilidad social: un estudio en seis ciudades mexicanas"; en: Escobar, Cortés y Solís (Eds). "Cambio estructural y movilidad social en México".
- CORTÉS, F.; ESCOBAR, A.; SOLÍS, P.** (Comp.) (2007). "Cambio estructural y movilidad social en México". El Colegio de México, México.
- ERRANDONEA, A.** (h). (1989). "Las clases sociales en el Uruguay". CLAEH/ Banda Oriental. Montevideo.
- FILGUEIRA, C.** (1973). "Imbalance y Movilidad Parcial en la Estructura Social: el caso uruguayo." en: *Cuadernos del Instituto de Ciencias Sociales* N°3, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo.
- FILGUEIRA, C, GENELETTI, C.** (1981). "Estratificación social y movilidad ocupacional en América Latina.". CEPAL, Santiago.
- GANZEBOOM, H.; TREINMAN, D.** (1996). "Internationally comparable measures of occupational status for the 1988 international standard classification of occupations". *Social Science Research*, N° 25.
- GERMANI, G.** (1963). "Movilidad Social en la Argentina"; en:Lipset & Bendix "Movilidad Social en la sociedad industrial". Eudeba, Buenos Aires.
- GLASS, D.** (1963). "Social Mobility in Britain."; Routledge & Keegan Paul, London.
- GOLDTHORPE, J.; LLEWELYN, C.; PAINE, C.** (1987). "Social Mobility and Class Structure in Modern Britain". Clarendon Press, Oxford.
- GOLDTHORPE, J.; ERIKSON, R.** (1993). "The constant Flux". Clarendon Press, Oxford.

-
- GOLDTHORPE, J.** (2000). "On Sociology. Numbers, Narratives and the Integration of Research and Theory". Oxford University Press. Oxford.
- HEINTZ, P.** (1966). "Un Paradigma Sociológico del Desarrollo"; EUDEBA, Bs.As.
- JORRAT, J. R.** (2000). "Estratificación social y movilidad. Un estudio del área metropolitana de Buenos Aires". Universidad Nacional de Tucumán. Editorial Universitaria de Tucumán. Tucumán.
- Solari, A.** (1966). "Estudios sobre la estructura social uruguaya". Arca, Montevideo.
- SOROKIN, P.** (1966). "Sociedad, Cultura y Personalidad. Sus estructuras y dinámicas". Aguilar, Madrid.



Desigualdades sociales y segregación: Montevideo a principios de milenio

Danilo Veiga¹

Uruguay ha sido reconocido tradicionalmente, en el contexto de América Latina, por sus altos niveles relativos de equidad e integración social. Sin embargo, durante la década de 1990, nuevas formas de diferenciación social y vulnerabilidad resultaron en el aumento de las desigualdades sociales, que estimularon la fragmentación cultural y socioeconómica. Una de las principales consecuencias de estos procesos fue una creciente exclusión social y la segregación residencial y educativa de la población. En esta perspectiva, a continuación se analiza la interacción entre la desigualdad social, la exclusión y la segregación urbana en Montevideo, de acuerdo a varias tendencias y estudios (Veiga y Rivoir, 2008 y 2010; Alves et al., 2009).

Las desigualdades sociales en el contexto urbano

El análisis se basa en una sociedad atípica en América Latina, teniendo en cuenta el “Estado de Bienestar”, implementado desde las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, durante los últimos veinte años, el país se ha insertado en contextos internos y externos que implicaron, sucesivamente: la reestructuración como alternativa económica, la privatización, la crisis socioeconómica y el posterior crecimiento económico y redistribución. En este sentido, se sabe que desde la asunción del gobierno del Frente Amplio en 2005, se implementaron nuevas políticas sociales y económicas, en particular en la lucha contra la pobreza y la mejora del crecimiento económico, frente a la profunda crisis socioeconómica que la población uruguaya sufrió durante los años 2001 a 2003.

Inicialmente, es necesario destacar algunos aspectos de la reestructuración urbana que influyeron en la configuración socioeconómica de nuestra ciudad capital. En este sentido, debe tenerse en cuenta que durante los años setenta y ochenta, el precio de la vivienda y el transporte, creció más rápido que los precios medios de consumo, y la disminución de los ingresos reales influyó en los desplazamientos de la población,

1 Profesor Titular de Sociología Urbana y Regional de la FCS, Udelar. Miembro de la Red Iberoamericana Globalización y Territorio, RC 21 de la Asociación Internacional de Sociología ISA, Consejo Latinoamericano de Sociología, ALAS y LASA. daniloalbertoveiga@gmail.com

dando lugar a migraciones hacia la periferia y el centro de la ciudad. Luego, durante la década de los noventa, hubo desplazamientos significativos de las clases medias hacia las zonas residenciales suburbanas, aparición de centros comerciales en zonas de nivel socioeconómico alto, como la Costa Este, etc.

Estos fenómenos implicaron diferentes niveles de apropiación del espacio y la diferenciación socioeconómica, así como cambios urbanos, sobre todo en el comportamiento de la población, lo que se refleja en cambios en el consumo, en las relaciones sociales y las estrategias colectivas, que responden a diversas situaciones, expectativas y valores de las diferentes clases sociales.

De tal manera, se ha producido un aumento en Montevideo de la segregación urbana entre las diferentes clases y estratos sociales, como consecuencia de las desigualdades en los niveles de vida, accesibilidad y servicios en diversas áreas residenciales. Asimismo, los movimientos de población estimularon la segmentación y los consiguientes cambios en los estilos de vida, lo cual implicó una fuerte segregación residencial en una sociedad caracterizada por la proximidad e integración entre diferentes clases sociales, y que ha cambiado fuertemente durante los últimos veinte años (Katzman y Retamoso, 2005; Observatorio Social IMM, 2007 y Veiga, 2010).

Por otra parte, es sabido que las redes globales emergentes en nuestros países articulan simultáneamente individuos, sectores y áreas, mientras que excluyen personas, grupos y territorios. Como resultado, los espacios urbanos están atravesados por esta lógica de redes transnacionales y componentes dinámicos de la globalización, asociados a la exclusión de diferentes grupos sociales. En definitiva, las sociedades en la “era de la información” conllevan cambios estructurales en las relaciones de producción, con aumento de la desigualdad, la exclusión social y la fragmentación del empleo. (Castells, 1998).

En este contexto, recordamos que de acuerdo con una de las hipótesis centrales sobre las llamadas “ciudades globales”, la transformación industrial y la expansión de los servicios, daría lugar a una estructura social dual en el empleo y los ingresos de la población (Sassen, 1991; Castells y Mollenkopf, 1991). Sin embargo, según las investigaciones en diferentes países, surgen tendencias que contrastan con la bipolarización, y muestran que hay un aumento de la desigualdad social entre los dos extremos de la población urbana, pero de una forma no-dual y fragmentada, con una estructura social diversificada y un aumento de las clases medias en las zonas periféricas. (Taschner y Bogus, 2000; Leal, 2008 y Preteceille, 2008).

Este hallazgo es importante, ya que refleja la influencia en la vida cotidiana, de la reestructuración económica y los cambios en el empleo, la nueva composición de los roles del hogar y la familia, y la diversidad de patrones culturales. Estos procesos provocaron cambios significativos en la estratificación social, y sobre todo en las clases medias, que se expresan en su fragmentación y ubicación en el espacio urbano.

Desde esta perspectiva, se asume la hipótesis de los Estudios de “Ciudades de globalización”, en relación a que la mayoría de las ciudades reciben impactos del proceso de globalización, pero la extensión de sus efectos, no es el resultado de su posición en el orden internacional, sino que depende de la naturaleza y extensión de ese proceso, y no existe un modelo uniforme o singular de la ciudad global (Marcuse y Van Kempen, 2000). Por otra parte, la investigación comparativa de las metrópolis de América Latina ha confirmado el aumento de la polarización y la desigualdad social como los principales eventos en el contexto de la globalización (de Mattos, 2004).

Cuando se analiza la interrelación de estos procesos con las políticas públicas y sociales, resulta que sus efectos y consecuencias sobre los grupos de población y las clases sociales se diferencian en función de su influencia en los niveles de vida. La combinación de estos elementos y las pautas de localización al interior de las ciudades, provoca divisiones significativas entre la población de diferentes áreas. En este sentido, durante las últimas dos décadas, se produjeron transformaciones asociadas al aumento de la desigualdad social. Así, las siguientes tendencias se pueden destacar:

- La reestructuración económica, la participación de la diversidad social y territorial, en la medida en que las comunidades locales están insertas en escenarios de desarrollo desigual con la consiguiente fragmentación socioeconómica.
- Las tendencias del mercado de trabajo durante los primeros años de la década (2001-2003) –el desempleo, la informalidad y la precariedad–, junto con la disminución y/o pérdida de ingresos, determinaron “nuevas formas de pobreza” y empobrecimiento que estimularon la desintegración social.
- La heterogeneidad social y urbana no surge como una simple consecuencia de las desigualdades sociales, sino que es resultado de la diferenciación social en el espacio y retroalimenta estos procesos.
- Los componentes culturales de la segregación y la desigualdad son factores relevantes, ya que reflejan las percepciones y comportamientos, a través de los cuales algunos grupos ignoran a otros, reproduciendo la exclusión a través de barreras reales y simbólicas.

Además, en este contexto, surgen diversos procesos asociados a los impactos significativos a nivel de barrios y áreas locales, tales como:

- La difusión de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales.
- La expansión de nuevos patrones culturales y de consumo.
- Nuevas estrategias y formas de apropiación del espacio urbano.
- Los patrones de polarización socioeconómica.
- Emergencia de actores con los conflictos y demandas de gestión pública.

En este sentido, estas tendencias se vinculan con la distribución de las clases en el espacio urbano, como lo revela la investigación en Montevideo (Veiga y Rivoir, 2008), y otras ciudades de América Latina (Torres Ribeiro et. al., 2004; Portes et. al., 2005). También se ha demostrado que el crecimiento de la clase media baja y baja y en particular la fragmentación de la clase media, fue el resultado del empobrecimiento de la población durante la crisis, estrechamente relacionado con el aumento de la desigualdad en Argentina y Uruguay (Filgueira, 2002; Boado y Fernández, 2005).

Desde esta perspectiva, recordamos que “la fragmentación de las experiencias individuales que pertenecen a varios lugares y tiempos”, es una característica fundamental de la vida moderna, como sugirió hace varios años Alain Touraine (1997). En este sentido, el análisis de las relaciones entre las culturas globalizadas frente a las culturas locales, puede contribuir a una mejor comprensión de estos procesos (Featherstone, 1998). Así por ejemplo, se configuran nuevas relaciones sociales y situaciones en la vida cotidiana y urbana, tales como:

- La pérdida de “marcos y agentes de socialización tradicionales”, por los cambios en la familia, la educación, el barrio y el aumento de la segregación urbana.
- El retiro de los servicios estatales y municipales nacionales, vinculados al aumento de la privatización, la externalización y la pérdida del espacio público.
- La globalización del consumo y su expresión diferencial entre las clases sociales y en el espacio urbano.

En definitiva, existe una compleja interrelación entre los principales componentes y dimensiones que influyen en la desigualdad social; así se puede inferir que los profundos cambios ocurridos durante las dos últimas décadas en los “agentes de socialización” tradicionales –familia, escuela, barrio y trabajo–, tienen efectos relevantes en las transformaciones de las normas, los valores y el comportamiento social, y por cierto en la reproducción de la segregación entre diferentes clases sociales.

Por otra parte, la percepción y las imágenes de la desigualdad social, tienen relevancia académica política, y están estrechamente relacionadas con las políticas públicas y los “modelos de desarrollo”, que se vienen asumiendo en varios países de América del Sur (Cf. Scalón, 2004; Reis, 2004 y Wortman, 2007). Desde esta perspectiva, existe una compleja interacción entre las desigualdades sociales y los procesos espaciales, en la medida que las percepciones de diferentes grupos y clases sociales juegan un rol significativo en la segregación y la exclusión.

Dentro de este marco de referencia, cabe mencionar varias tendencias significativas desde mediados de los noventa hasta el 2004 en el mercado laboral –aumento del desempleo, la informalidad y la precariedad– que han sido factores decisivos en la aparición de “nuevas formas de pobreza y el empobrecimiento de la “clase media”. Se sabe que, cuando estas condiciones persisten durante mucho tiempo y generaciones, los cambios en el empleo –y la falta de seguridad social– estimulan la desintegración

social y la segregación urbana. Por ejemplo, el “empobrecimiento de la clase media”, durante estos años en países como Argentina y Uruguay, asumió diversas formas y consecuencias sobre la organización de las familias, la interacción social, la inseguridad, etc. (Wortman, 2007; Minujin y Anguita, 2004; Veiga, 2010).

En este contexto, los resultados de la investigación presentada en este artículo confirman las tendencias que Montevideo comparte con otras ciudades de América Latina –como el aumento de la segregación residencial y la polarización social– así como algunas características del caso uruguayo, en función de su estructura social y demográfica peculiar en la región –menor desigualdad y población envejecida–. Para este propósito, se utilizó un enfoque clásico metodológico en los estudios sociológicos: Construcción de indicadores sociales según las principales fuentes estadísticas. (Censos y Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística).

Las desigualdades sociales en Montevideo en los años recientes

Las desigualdades sociales y la segregación urbana

Asumimos que la segregación urbana no es una simple consecuencia de las desigualdades sociales, sino que es resultado de la diferenciación social dentro de las ciudades. Por lo tanto, las diversas formas de segregación residencial y educativa representan la distribución de las clases y la exclusión social en el territorio. Así, desde una perspectiva sociológica, la segregación socio espacial puede ser caracterizada como una forma de diferenciación social, que expresa la distribución de la estructura social en el espacio. Asimismo, observamos que los factores determinantes de la segregación urbana emergen de tres niveles, correspondientes a diferentes ámbitos: el nivel colectivo de la interacción social, el físico espacial y el nivel de los procesos simbólicos y psicológicos que determinan el comportamiento individual.

La segregación socio espacial se refiere tradicionalmente a la existencia de diferencias y desigualdades sociales, entre los grupos sociales. El aislamiento espacial entre diversos grupos promueve la desintegración social, con un agravamiento de los problemas sociales, tales como el bajo rendimiento escolar, el desempleo, la falta de protección social, la vivienda precaria, la inseguridad y la pobreza. En este contexto, incluso en sociedades como Uruguay –con niveles relativamente altos de equidad en el contexto regional–, los déficits sociales alimentan el ciclo de la pobreza y la segregación urbana.

Una de las principales consecuencias de los procesos mencionados es la exclusión social. En este sentido, algunas dimensiones estratégicas, como el acceso a la educación y el conocimiento inducen el aislamiento de la población que no llega a ellos (PNUD, 2008). Desde esta perspectiva, los siguientes indicadores sociales demuestran las características distintivas de las áreas socioeconómicas en el espacio urbano. Para ello, se elaboró una tipología socio territorial –clasificando los barrios de Montevideo de

acuerdo a la estructura social y los niveles de estratificación– en cuatro áreas principales: Periferia Suburbana, Noroeste, Centro y la Costa Este (ver mapas).

En primer lugar, el cuadro 1 muestra la evolución de la estratificación social en el período 2001-2011. Los datos son elocuentes e indican los profundos cambios experimentados por los distintos estratos sociales en estos años, con el aumento de la pobreza en la primera parte de la década, y la posterior reversión de esta tendencia a partir del 2005. En segundo lugar, el cuadro 2 permite apreciar las características y evolución de las principales grandes áreas socioeconómicas en Montevideo y refleja el cambio en la distribución de las clases sociales en el espacio urbano.

**Tabla 1. Estratificación social en Montevideo
Evolución 2001-2011 (% población)**

Estrato Socioeconómico	2001	2004	2011
Bajo	16,1	19,4	7.4
Medio Bajo	23,5	25,1	15.5
Medio	29,3	28,7	31.6
Medio alto	15,5	13,5	21.0
Alto	15,6	13,2	24.6
Total %	100	100	100

Fuente: Índice de Estratificación que combina los niveles de ingreso, educación y consumo. Departamento de Sociología y Banco de Datos. FCS UdelaR, en base a las Encuestas de Hogares INE, Instituto Nacional de Estadística.

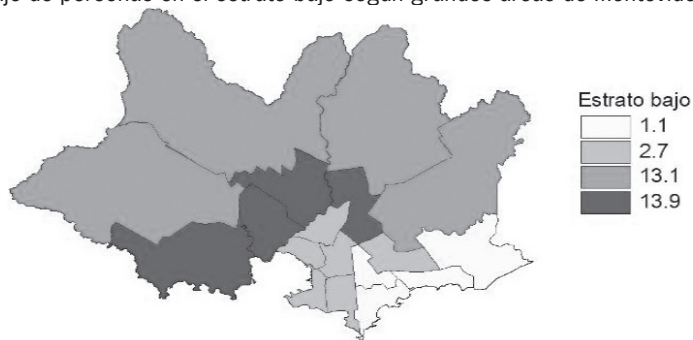
**Tabla 2. Estratificación social en Montevideo
Evolución 2004-2011 según Grandes Áreas (% población)**

Estrato Social	Noroeste		Centro		Costa Este	
	2004	2011	2004	2011	2004	2011
Bajo	31.9	13.9	10	2.7	4.6	1.1
Medio Bajo	32.5	23.4	19.9	9	11.2	3.9
Medio	27.2	41	37.7	28.3	24.4	15.3
Medio Alto	6.2	16.2	19.2	28.9	22.9	24.5
Alto	2.2	5.5	13.1	31.1	36.9	55.1

Fuente: Índice de Estratificación que combina los niveles de ingreso, educación y consumo. Departamento de Sociología y Banco de Datos. FCS UdelaR, en base a las Encuestas de Hogares INE, Instituto Nacional de Estadística.

MAPAS 1, 2, 3
% Población según niveles de estratificación 2011
Periferia suburbana, Noroeste, Centro y Costa Este

Porcentaje de personas en el estrato bajo según grandes áreas de Montevideo - 2011



Porcentaje de personas en el estrato medio según grandes áreas de Montevideo - 2011



Porcentaje de personas en el estrato alto según grandes áreas de Montevideo - 2011



Fuente: elaboración propia según Índice de Estratificación. Departamento de Sociología y Banco de Datos, FCS, UdelaR, en base a Encuesta de Hogares INE.

Por otra parte –mientras que el desempleo ha disminuido desde 2005 y sigue cayendo en 2012 a su nivel más bajo en décadas–, algunos indicadores de exclusión en el mercado laboral (Tabla 3) demuestran las tasas de desempleo de la PEA (Población Económica Activa), mostrando los altos índices de mujeres y especialmente a los jóvenes residentes en el Norte, el Oeste y las zonas periféricas.

Asimismo, la Tabla 4 ilustra la evolución de los niveles educativos de la población económica en el período 2001-2011, en las principales zonas urbanas. Si bien las cifras globales reflejan la expansión y el mejoramiento de la educación producido en estos últimos años, especialmente en el nivel terciario, los niveles de desigualdad educativa en particular entre los residentes de clase media baja y baja se pueden apreciar. Esto tiene relación directa con la situación socioeconómica imperante en sus respectivos barrios.

En resumen, estos indicadores reflejan las desigualdades entre las zonas principales de la ciudad y el capital social limitado de los residentes en las áreas periféricas, y a la vez ilustran las barreras socioeconómicas de la población residente en tales áreas.

**Tabla 3. Desempleo y niveles educativos
Según Grandes Áreas 2011(%)**

Áreas/Indicadores	Noroeste	Suburb. Periferia	Centro	Costa Este
Desempleo 14-25 años	14.1	15.7	10.1	12.6
Desempleo Femenino	9.3	9.7	6.0	5.8
% PEA C/Educación Primaria	22.7	24.7	7.2	3.9
% PEA C/ Educación Secundaria	64.5	64.1	48.9	35.6
% PEA C/ Educación Terciaria	12.8	11.2	43.9	60.5

Fuente: Elaboración propia según Departamento de Sociología y Banco de Datos, FCS UdelaR, en base a las Encuestas de Hogares INE Instituto Nacional de Estadística.

**Tabla 4. Niveles educativos (% PEA)
Evolución según Grandes Áreas 2001-2011**

Años	Áreas/Nivel Educativo	Noroeste	Suburb. Periferia	Centro	Costa Este
2001	Primaria	33,1	36,4	15,2	8,9
2011	“	22.7	24.7	7.2	3.9
2001	Secundaria	56,9	56,9	54,3	43,9
2011	“	64.5	64.1	48.9	35.6
2001	Terciaria	10,0	6,7	30,5	47,2
2011	“	12.8	11.2	43.9	60.5

Fuente: Elaboración propia según Departamento de Sociología y Banco de Datos FCS UdelaR, en base a las Encuestas de Hogares INE Instituto Nacional de Estadística.

La estratificación social y la fragmentación en el espacio urbano

Se han presentado previamente un conjunto de indicadores sociales que muestran las desigualdades socioeconómicas al interior de Montevideo y los patrones básicos de la estratificación social, para ilustrar la distribución de las clases sociales entre 2001 y 2011. Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias significativas en la estructura social y espacial de Montevideo (distribución, peso y evolución de los estratos sociales en grandes zonas de la ciudad). Cabe destacar como un fenómeno singular, la “fragmentación de la clase media”, relativa a la diferenciación de los estratos medios en diferentes áreas de la ciudad, con magnitudes que permiten caracterizar a Montevideo como una sociedad de “clases medias”, ya que representan entre el 50 y el 60% de la población, en función de los límites o definiciones operacionales utilizadas.²

Si bien durante los años de la crisis de 2001-2003, la pobreza aumentó considerablemente y las clases bajas migraron a la periferia de la ciudad; por otro lado los sectores de clase media se han extendido por diferentes barrios, lo que sugiere la fragmentación económica y social a la que estos sectores importantes de la sociedad uruguaya han sido expuestos. Los comportamientos, estilos de vida y valores de estos grupos poblacionales han cambiando profundamente y, teniendo en cuenta su influencia y el papel que desempeñan en nuestra sociedad, deben ser objeto de mayor investigación y análisis.

En esta perspectiva, los siguientes mapas ilustran como otro indicador de la segregación urbana la distribución de las categorías ocupaciones de los residentes (grupos de ocupación de categorías alta, media y baja). Ello refleja la fragmentación socioeconómica en el espacio urbano y la dispersión de los principales grupos socioeconómicos.

Por último, se incorpora –como otro indicador significativo de la desigualdad social– los niveles de consumo de la población urbana, confirmando su aumento importante en los últimos años. Como se mencionó anteriormente, la mejora de las condiciones económicas y sociales de Uruguay –incluso teniendo en cuenta las diferencias entre las clases sociales–, ilustra la evolución del nivel de vida en Montevideo (Tabla 5). En definitiva, los cambios del consumo reflejan los estilos de vida de la población y complementan tendencias socioeconómicas relacionadas con los patrones de estratificación, la movilidad social y la recuperación económica durante los últimos ocho años.

En este sentido, es interesante anotar la coincidencia de las tendencias producidas en Uruguay, con el análisis para América Latina (Franco et al., 2011), que muestra el crecimiento y los cambios que las clases medias están teniendo en muchos países, así como sus características asociadas a nuevos patrones de consumo y la redefinición

2 En este artículo, por cierto no se aborda la compleja discusión sociológica sobre estratificación y clases sociales, sino que a los efectos analíticos se utiliza el índice de estratificación social como una variable “Proxy” de clase.

de su papel en nuestras sociedades. Con una perspectiva similar, un trabajo reciente de Nora Lustig (2012), demuestra que alrededor del 36% del crecimiento de las clases medias, se debe a las políticas redistributivas realizadas durante estos últimos años en nuestros países. A pesar de las diferencias obvias de escala, resulta claro en Brasil y Uruguay, que la movilidad social entre los sectores de las clases bajas ha permitido a grandes contingentes poblacionales incorporarse a la clase media, en los últimos ocho años.

**Tabla 5. Niveles de consumo en Montevideo
(% Hogares) Evolución 1998-2011**

Niveles de consumo	1998	2004	2011
Bajo	2,1	2,2	1.4
Medio Bajo	45,5	38,5	16.6
Medio	27,2	11,3	14.2
Medio Alto	21,7	41,7	61.9
Alto	3,6	6,2	5.9
Total	100	100	100

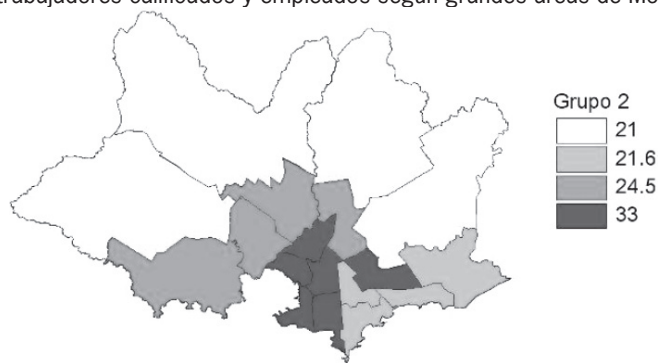
Fuente: Índice elaborado a partir de la combinación de ítems electrodomésticos.

MAPAS 4, 5, 6 (%)
Categorías Ocupacionales según Áreas 2011
Grupos Ocupacionales Alto, Medio y Bajo

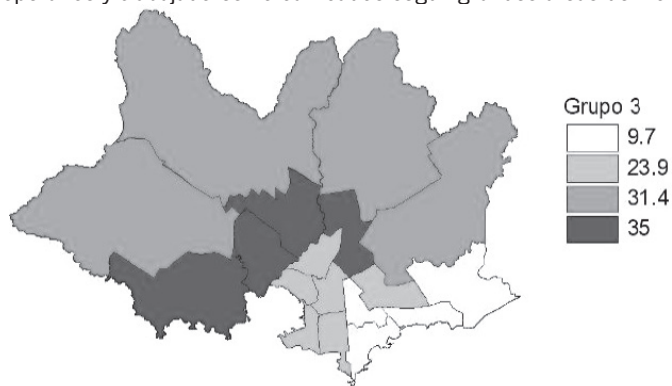
Porcentaje de directivo, profesionales y técnicos según grandes áreas de Montevideo - 2011



Porcentaje de trabajadores calificados y empleados según grandes áreas de Montevideo - 2011



Porcentaje de operarios y trabajadores no calificados según grandes áreas de Montevideo - 2011



Fuente: elaboración propia según Índice de Estratificación. Departamento de Sociología y Banco de Datos, FCS, UdelaR, en base a Encuesta de Hogares INE.

Además, como se mencionó antes, el caso uruguayo es consistente con los resultados de un análisis comparativo de otros países de América Latina, que muestra que los cambios en la estratificación social se han asociado con la reducción del sector público y el estancamiento del empleo en el mercado formal, lo cual estimuló el crecimiento del autoempleo y otras formas precarias. Ello tuvo un impacto significativo en los niveles de vida de las clases media y baja, y aunque esos procesos se produjeron durante los años noventa, algunas de sus consecuencias aún persisten (Portes y Hoffman, 2003).

Por otra parte, como Jesús Leal argumenta en relación a la segregación en las ciudades europeas, ello constituye un proceso que refleja el cambio social, y las distancias entre los grupos sociales (Leal, 2007). En este sentido, se destaca que en el caso de Montevideo, las diversas formas de segregación residencial y educativa son manifestaciones de la exclusión social en el territorio. Por otra parte, es interesante recordar en relación con la fragmentación creciente, que el aislamiento en nuestras ciudades, es generalmente más agudo en las clases superiores que entre los pobres (Preteceille, 2007). Esto tiene profundas implicaciones en las condiciones de vida de los diferentes estratos de la población, así como en el capital cultural y la interacción social, la privatización del espacio urbano, etc.

Por ejemplo, los crecientes problemas de intolerancia, violencia, inseguridad, etc., que se producen en diferentes clases sociales y zonas de Montevideo, constituyen ejemplos elocuentes de la segregación urbana. En esa medida, los diferentes niveles de discriminación identificados entre la población de Montevideo, según la Intendencia Municipal de Montevideo (Programa URBAL Unión Europea - IMM, 2007), indican que la intolerancia social es significativamente mayor entre las clases altas y medias altas residentes en los barrios de la Costa Este, en comparación con otros sectores sociales de la ciudad.

El mencionado Estudio de URBAL - IMM también analizó la percepción de los residentes en diferentes áreas, de acuerdo con su nivel socioeconómico. Esta encuesta confirma las “fronteras materiales y simbólicas” en Montevideo, donde las personas de diferentes clases sociales tienen dificultades de acceso a otras áreas de la vida urbana. Estas cuestiones complejas, sin duda son difíciles de medir empíricamente, pero en última instancia, algunas “variables Proxy”, ayudan a entender algunos de estos problemas. (Ver mapas con niveles de estratificación social en las diferentes áreas de Montevideo).

Recordamos que a partir de 2005, el gobierno uruguayo implementó una serie de políticas públicas de los “Planes de Emergencia” (alimentación, salud, educación e ingreso ciudadano) para los sectores más pobres, así como aumentos salariales y la generación de empleos, lo que alivió las dificultades y necesidades básicas de sectores importantes de la población. Sin embargo, más allá de las políticas económicas y sociales adoptadas, los efectos de la crisis junto con los problemas estructurales y los

cambios en el mercado laboral, afectaron los patrones de distribución de las clases sociales en las zonas urbanas.

Del mismo modo, otros procesos significativos conciernen a las pautas de “gentrification”, producidas en la zona central de Montevideo, a partir de la migración de la población de estratos medio altos y altos en los últimos años. Este proceso bien conocido en sociedades desarrolladas y en otras ciudades de América Latina representa un cambio significativo en la estructura social y espacial de Montevideo (Preteceille, 2009, Herzer et al., 2008).

La “gentrification tradicional”, por lo general implica el desplazamiento residencial a las viviendas existentes, mientras que la gentrification en sentido amplio incluye la remodelación de vivienda y de consumo de uso mixto que lo acompañan. En este sentido, en el contexto del postfordismo y la globalización, la gentrification se ha planteado como una característica de las “ciudades globales” emergentes (Sassen, 1991).

Por otra parte, como las ciudades experimentan transformaciones socioeconómicas vinculadas a los procesos de reestructuración económica y los cambios urbanos, una definición más amplia de la gentrification refleja la acumulación de capital y la reorganización del mercado de trabajo (Smith, 2005). Asimismo, el proceso de gentrification implica una variedad de actores, incluyendo constructores, municipios, agentes inmobiliarios, con un papel importante en la dinámica política y pública que influyen en estos procesos.

Originalmente, Smith (1979) ha argumentado que el proceso de gentrification se inició no por las preferencias de los consumidores, sino por las formas de acción colectiva a nivel de barrio. Donde el Estado inició la mayor parte de los primeros esquemas de la gentrification, y aunque juega un papel menos importante hoy día, sigue siendo importante. En este sentido, además de la demanda de vivienda de la clase media, las oportunidades en los barrios centrales y las políticas públicas, también son esenciales para inducir la gentrification. El debate académico y las implicaciones sociológicas sobre las políticas urbanas son complejos y multidimensionales y hay aportes interesantes sobre estos fenómenos y procesos (IJURR, 2008).

En tal sentido, el caso de Montevideo corresponde a este marco de referencia y elementos, en relación con las políticas públicas (municipales), conjuntamente con los intereses privados de renovación urbana y mejoramiento socioeconómico en las áreas centrales, que se han promovido en los últimos diez años. Por ello, las tendencias en la dinámica de la población y el crecimiento de estos barrios indican ciertos patrones de gentrification. En este sentido, los datos previos de tablas y mapas, ilustran el aumento de la población de estratos medios altos hacia las zonas centrales de la ciudad.

En la siguiente sección, complementando el análisis cuantitativo anterior, se analiza la percepción de las desigualdades sociales al interior de la ciudad, según los actores locales. Ambas perspectivas ofrecen enfoques diferentes y confiables sobre los cambios socioeconómicos en el espacio urbano.

La percepción de las desigualdades y la segregación urbana

Además de los indicadores sociales y las tendencias planteadas previamente, se presentan a continuación las imágenes y percepciones públicas acerca de las desigualdades sociales y la segregación urbana en Montevideo. En este contexto, se ilustran distintas perspectivas sobre diversos problemas respecto a las desigualdades socio territoriales y la segregación urbana. Estos hallazgos complementan los datos cuantitativos y ayudan a configurar el escenario que refleja los procesos sociales y los cambios urbanos (Veiga y Rivoir, 2008).

Por otra parte, la compleja interrelación entre las variables que intervienen en la percepción social sobre los cambios locales se puede ilustrar con la siguiente cita de R. Sampson (2009) –dentro de un marco similar de referencia y punto de vista, a nuestro estudio en Montevideo–, en relación a la diversidad de dimensiones que influyen en la percepción pública en la estructura social: *“Las percepciones de los problemas sociales reflejan una dimensión fundamental de la desigualdad social en los barrios, estas percepciones se forman a partir de las condiciones socio culturales, por lo que las representaciones e imágenes, refuerzan las imágenes y estigmas de la población e influyen en la trayectoria futura de los barrios”*.

En este sentido, los informantes locales del Estudio de Montevideo reconocen que durante la crisis de 2001-2003, muchas personas sufrieron problemas como el deterioro de las condiciones de vivienda, salud y educación, junto con la percepción subjetiva –sentimientos, desesperanza, la violencia, la inseguridad, la falta de entusiasmo y perspectivas de futuro–. Según ellos, estos fenómenos llevaron a la fragmentación de la sociedad y la ciudad, y se expresan como una fractura de las relaciones sociales existentes y un aislamiento de naturaleza simbólica y sensación de inseguridad.

En cuanto a las percepciones públicas en estos últimos años, las desigualdades sociales mencionadas coinciden con la dinámica de las áreas metropolitanas en otros países de América Latina (de Mattos, 2004), tales como las nuevas formas de exclusión y marginación causadas por la dinámica estructural. En este contexto, las afirmaciones ilustradas en la Tabla 6 reflejan los temas principales, las representaciones y las imágenes de la población residente en diferentes barrios del área metropolitana de Montevideo.

Asimismo, varios problemas señalados reflejan cambios socioeconómicos diversos, la migración interna y la situación de las clases bajas que agravan los problemas urbanos y saturan servicios sociales existentes. Al respecto, cabe señalar que durante los últimos veinte años, ha habido un importante crecimiento de los asentamientos precarios (a una tasa anual del 10%) y, más recientemente, de los barrios cerrados o “gated communities”, los que han contribuido a la segregación residencial y la polarización social.

**Tabla 6. La percepción de las desigualdades sociales
Área metropolitana de Montevideo**

A) Ciudad de la Costa
Infraestructura dañada por décadas de falta de políticas.
La contaminación y la falta de saneamiento.
El crecimiento de los asentamientos informales.
Las barreras sociales entre las zonas.
Escuelas sobrecargadas con el crecimiento demográfico.
B) Periferia Noroeste
La pobreza y la exclusión socio cultural.
Los problemas de contaminación industrial.
Urbanización desorganizada.
C) Periferia Central
Población dispersa y zona heterogénea.
La falta de servicios.
D) Periferia Sur Este
La falta de servicios públicos y de saneamiento.
La falta de lugares de recreación.

Fuente: Veiga, 2010.

Por otra parte, la Tabla 7 ilustra la percepción acerca de los principales cambios en los estilos de vida, en relación con los cambios identificados, que implican transformaciones relevantes en los modos de convivencia urbana. En este sentido, cabe notar que las tendencias socioeconómicas señaladas anteriormente, generan efectos a largo plazo sobre los valores familiares, las normas de convivencia, la educación, la discriminación, etc. Igualmente, las percepciones sociales sobre los cambios en estilos de vida, la cultura y el consumo, se relacionan con las transformaciones estructurales mencionadas anteriormente, tales como la recuperación económica, la movilidad social, los nuevos “arreglos familiares” y las diversas estrategias de vida.

Tabla 7. La percepción sobre los cambios y estilos de vida

La desconfianza y menos solidaridad.
La desintegración familiar.
Nuevas tecnologías y redes sociales como elementos centrales.
Disminución de la interacción social.
Cambio de los valores culturales y patrones de consumo.
El aumento de la inseguridad, la marginación y la violencia.
La pérdida de la identidad local.
La emergencia de nuevos sectores de clase media.

Fuente: Veiga, 2010.

Del mismo modo, es percibido por la opinión pública que los nuevos arreglos familiares y la pérdida de la interacción social, son en gran medida consecuencia de los patrones culturales globalizados, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Ésta es una característica central de los cambios que prevalecen en las sociedades contemporáneas, que se combinan con la exclusión social y constituyen riesgos para muchos grupos de la población. Además, otros Estudios de Caso realizados en Uruguay indican que muchas personas tienden a percibir estos cambios, como la pérdida de los valores que reflejan la compleja interacción entre las transformaciones socioeconómicas y los patrones culturales (Veiga et al., 2012).

En definitiva, los cambios en los niveles de educación, el individualismo, las nuevas pautas de consumo y la pérdida de la identidad local, se identifican como elementos relevantes durante estos últimos años. Sin embargo, la diversificación cultural y social a nivel local, tienen su origen en los procesos estructurales producidos en las últimas décadas. De modo similar, los cambios en el estilo de vida y la cultura contribuyen o refuerzan los sentimientos de inseguridad, que aún prevalecen en el mercado de trabajo y las condiciones socioeconómicas de muchas personas. En este sentido, señalamos que en el imaginario colectivo, la clase media uruguaya ha sido durante mucho tiempo un componente distintivo del país y un punto de referencia en términos socio culturales y políticos. Por lo tanto, con base en la estructura socioeconómica y el "Estado de Bienestar", la clase media ha sido siempre un referente simbólico y una gran parte de la población uruguaya "se siente como perteneciente a la clase media".

En síntesis, las percepciones de los actores locales en Montevideo, ejemplifican el proceso de la heterogeneidad social en sus dimensiones materiales y simbólicas, y en la mayoría de los casos son consistentes con los indicadores estadísticos mostrados antes. Sin embargo, la inversión de las tendencias de aumento de la pobreza y exclusión, que los indicadores sociales muestran, no necesariamente coinciden con la percepción social. Es así que, a pesar de reconocer el impacto positivo de las políticas públicas implementadas a partir de 2005, la crisis socioeconómica y el deterioro ante-

rior han sido de tal magnitud –que no obstante los resultados positivos de las políticas sociales implementadas–, algunos de sus efectos todavía siguen emergiendo, y en dicha medida son percibidos y mencionados por la opinión pública.

A modo de reflexión final

Los hallazgos y análisis previos, realizados a partir de las tendencias, datos estadísticos, indicadores sociales y las percepciones cualitativas de los actores locales en relación con los cambios urbanos, contribuyen al mejor conocimiento e interpretación de los procesos sociales y la desigualdad. Indudablemente ambas perspectivas son necesarias para configurar un mapa de la ciudad, social y geográficamente separadas. En este sentido, hay que destacar que –a diferencia de otras ciudades de América Latina–, en Montevideo, los patrones y los componentes de la segregación se explican principalmente por la clase social, la educación y los niveles de ingresos.

Los indicadores sociales muestran que Montevideo y su área metropolitana son socialmente heterogéneas y complejas, con características y dinámicas específicas. En este contexto, hemos argumentado que, aunque una de las hipótesis centrales sobre las “ciudades globales”, observaba que la transformación industrial y la expansión de los servicios, darían lugar a una estructura social dual en el empleo e ingresos de la población, la investigación llevada a cabo en diferentes países, contrasta esta tendencia a la bipolarización, y muestra un aumento de la desigualdad social entre los dos extremos de la población, pero en una estructura social fragmentada, con un aumento de las clases medias en las zonas periféricas. A la luz del caso de Montevideo, se confirman estas hipótesis.

Así por ejemplo, el análisis de ciudades en Brasil (Porto Alegre) y Argentina (Córdoba), confirman estas tendencias, donde las clases bajas y altas se asientan en áreas diferenciadas del espacio urbano, mientras que las clases medias se encuentran dispersas por toda la ciudad (Koch y Valdés, 2008). Estos resultados reflejan la influencia de procesos tales como la reestructuración económica y los cambios en el empleo, la nueva composición de los roles del hogar y la familia, la diversificación cultural y los patrones de consumo, que inducen cambios significativos en la estratificación social, sobre todo entre las clases medias.

Por último, resulta importante referir varios artículos donde se analiza la segregación social y los efectos espaciales de las desigualdades y la globalización en varias ciudades de América Latina (Buenos Aires, Porto Alegre, Córdoba, Montevideo, Río de Janeiro y São Paulo) y en Europa (Madrid, Barcelona y París) (Leal y Veiga, 2008). Analizando los efectos en la estructura social en estos Estudios de caso, los autores encontraron no sólo cambios en sus respectivas sociedades, especialmente en el espacio urbano. En este sentido apuntan las conclusiones sobre los impactos en la estructura social de cada ciudad y los cambios en el espacio urbano.

En tal sentido, en estas ciudades de América Latina y Europa, hay un proceso de clara y nítida segregación de la población, pero con dinámicas diferentes. La mayoría de los estudios mencionados apoyan la tesis de que los cambios tienen una doble naturaleza, la búsqueda de un alejamiento simultáneo de las clases sociales en los extremos de sus sociedades, con un aumento de las desigualdades sociales y espaciales, determinado por un crecimiento en el tamaño y los recursos de las clases medias y altas, que amplían su distancia con el resto, y con pautas de cambio residencial, con estrategias distintas en función de las ciudades.

En resumen, hemos asumido que la segregación urbana no es una simple consecuencia de las desigualdades sociales, sino que es resultado de la diferenciación social dentro de las ciudades. En realidad se trata de procesos donde la retroalimentación, la ubicación y la identidad de un área determinada, son condicionadas por su estructura socioeconómica. Por lo tanto, las diversas formas de segregación residencial representan manifestaciones de la distribución de las clases y la exclusión social en el territorio. Así, desde un punto de vista sociológico, la segregación puede caracterizarse como una forma de diferenciación social, que expresa la distribución de la estructura en el espacio urbano. Además, se entiende que los factores determinantes de la segregación urbana emergen de tres niveles y ámbitos: el nivel colectivo de la interacción social, el físico espacial y el nivel de los procesos simbólicos y psicológicos que determinan el comportamiento individual.

Por otra parte, las ciudades han crecido rápidamente tanto en sus aspectos físicos –como la segregación residencial–, como en dimensiones menos visibles (redes sociales, la gestión urbana, el medio ambiente, estilos de vida). En este sentido, los gobiernos locales y la sociedad civil, ante la complejidad creciente de estos problemas, han enfrentado estos desafíos urbanos desde una mirada territorial y temáticamente fragmentada.

Asimismo, en relación con la sociedad civil y el Estado se superpone otro problema: la visión de la ciudad como “una ciudad de fragmentos”, o como un conjunto de fragmentos urbanos. En muchos casos, aunque hay puntos de vista más o menos globales de la ciudad, no se expresan en un proyecto político, o incluso en un modelo territorial, y en consecuencia son imágenes parciales, fragmentadas y antagónicas de la ciudad (que apenas superan la escala de barrios), y donde no coinciden los barrios como entidades culturales y territoriales.

En definitiva, resulta necesaria la construcción de una ciudad imaginaria, y aún más para construir una ciudad integrada, inclusiva como escenario centrado en el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos y la búsqueda de una calidad más integrada y satisfactoria de vida (CLACSO GT Forum, 2008-2009 y Cuervo, 2010). En conclusión y de acuerdo con las tendencias observadas anteriormente, en cuanto a las desigualdades sociales y la segregación urbana, algunos temas requieren más investigaciones hacia la definición de un programa de intervención social que contribuya a mejorar la calidad de vida y la gestión urbana con mayor equidad e integración. Entre estas cues-

tiones surgen el análisis de: a) Los factores que refuerzan la desigualdad social; b) El proceso de desintegración social; c) La percepción de las elites y las clases medias sobre la desigualdad. Sin lugar a dudas, las implicaciones de estos problemas son muchas y complejas, teniendo en cuenta la definición e implementación de políticas adecuadas y necesarias para la población de nuestras ciudades fragmentadas.

Referencias bibliográficas

- ALVES, ARIM; SALAS y VIGORITO** (2009). Tendencias de la distribución del ingreso en Uruguay entre 1981 y 2007. I. Economía FCEA, UdelaR.
- BOADO, M. y FERNÁNDEZ, T.** (2005). "Una mirada a la crisis, las clases y la pobreza en el Uruguay 1998-2004". Paper presentado en Seminario México- Uruguay sobre Medición de la Pobreza y Políticas Sociales. FCS, UdelaR.
- CASTELLS, M.** (1998). "*La era de La Información: Economía, Sociedad y Cultura*". Vol. 3. Fin de Milenio. Alianza Ed. Madrid.
- CLACSO** (2008-2009). "Forum y Mesas Diálogo: Hacia un Proyecto alternativo para la ciudad". Declaration Working Group on Urban Development, CLACSO. Buenos Aires, Octubre 2008 y Montevideo, Agosto 2009.
- CUERVO, L. M.** (2010). "América Latina: Metrópolis en mutación". ILPES CEPAL. Paper presentado en XI Seminario Internacional Red Investigadores Globalización y Territorio. Mendoza, Argentina. Octubre.
- DE MATTOS, C.** (2004). "Redes, Nodos e Cidades: transformação da metrópole latina americana". Em *Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito*. L. C. Queiroz Ribeiro (coord.) Ed. F. P. Abramo Rio de Janeiro.
- FEATHERSTONE, M.** (1998). "A globalização de complexidade: Pós-modernismo e cultura de consumo". *Rev. Brasileira de Ciências Sociais*, Nº 32.
- FILGUEIRA, C.** (2002). "Estructura de oportunidades, activos de los hogares y movilización de activos en Montevideo. En R. Katzman y G. Wormald "Trabajo y Ciudadanía: los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de A. Latina". Ed. Cebra. Montevideo.
- FRANCO, R. LEÓN, A. y ATRIA, R.** (2007). *Estratificación y movilidad social en América Latina*. Ed. LOM, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
- FRANCO, R.; HOPENHAYN, M. y LEÓN, A.** (2011). "Crece y cambia la clase media en América Latina: una puesta al día". *Rev. CEPAL* 103 Santiago.
- HERZER, H.** et al. (2008). *Con el corazón mirando el sur*. Ed. Espacio, Buenos Aires.
- IJURR** (2008). *Debate on Gentrification*. International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 32, Nº 1. Oxford.
- IMM-U.E. Programa URBAL** (2007). *Observatorio Social de Inclusión Social*, Intendencia Municipal de Montevideo.
- KATZMAN, R. y RETAMOSO, A.** (2005). "Segregación espacial, empleo y pobreza en Montevideo". *Rev. CEPAL*, Nº 85. Santiago.
- KOCH, M. y VALDÉS, E.** (2008). Una mirada a la segregación residencial en ciudades latinoamericanas: El caso de Porto Alegre (Brasil) y Córdoba (Argentina). Paper X Seminario Internacional Red Iberoamericana Globalización y Territorio, RII, Querétaro México.

- LEAL MALDONADO, J.** (2007). *Vivienda y segregación en las grandes ciudades europeas*. Ed. Gobierno de Madrid. Área de Urbanismo, Vivienda e infraestructura. Madrid.
- LEAL MALDONADO, J. y VEIGA, D.** (2008). "Espacio social y segregación en nueve ciudades de Europa y Latinoamérica, Presentación". *Rev. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales* Vol. XL. Tercera época N° 158, invierno 2008, Madrid.
- LOMBARDI, M. y VEIGA, D.** (1989). "Las ciudades en conflicto. Una perspectiva latinoamericana". Ed. Banda Oriental, EBO CIESU, Montevideo.
- LUSTIG, N.** (2012). *Conference Latin American Association Studies International Congress LASA*, San Francisco, May 23-26. EE.UU.
- MARCUSE, P. y VAN KEMPEN R.** (2000). "Globalizing Cities: a new spatial order". Blackwell Press. London.
- MINGIONE, E.** (2009). Paper Panel 2 ISA RC21. São Paulo Conference 2009.
- MINUJIN, A. y ANGUITA, E.** (2004). *La Clase media seducida y abandonada*. Ed. Edhasa, Buenos Aires.
- MOLLENKOPF, J. y CASTELLS, M.** (1991). "Dual City" New York, the Russell Foundation.
- PNUD** (2008). *Informe Nacional de Desarrollo Humano*. Uruguay.
- PORTES, A.** (1989). "La urbanización de América Latina en los años de crisis". In Lombardi M. y Veiga D. 1989.
- PORTES, A. y HOFFMAN, K.** (2003). "Latin American class structure: their composition and change during the neoliberal era". *Latin American Research Review*, Vol. 38 N° 1.
- et al.** (2005). *Ciudades latinoamericanas: Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*. Ed. Prometeo. Buenos Aires.
- PRETECEILLE, E.** (2007). "Segregación social, inmigrantes y vivienda en el Área Metropolitana Parisina", en J. Leal Maldonado (coord.).
- (2009). Paper on Panel 2 of the ISA RC21 São Paulo Conference.
- PRETECEILLE, E. y CARDOSO, A.** (2008). *Rio de Janeiro y São Paulo: ¿ciudades duales? Comparación con París*. *Revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*. Vol. XL. Tercera época N° 158, invierno 2008, Madrid.
- REIS, E.** (2004). "A desigualdade na visão das elites e do povo brasileiro", in C. Scalón 2004, op. cit.
- RIBEIRO, A. C. T.** comp. (2004). "O rostro urbano de América Latina". Ed. CLACSO, Buenos Aires.
- RUBALCAVA, R. y SCHTEINGART, M.** (2012). *Ciudades divididas: desigualdad y segregación en México*. El Colegio de México. DF.
- SAMPSON, R.** (2009). "Disparity and diversity in the contemporary city: social (dis)order revisited". *The British Journal of Sociology*, Volume 60 Issue 1. Oxford Press.
- SARLO, B.** (2009). *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana*. Ed. Siglo XXI Buenos Aires.
- SASSEN, S.** (1991). "The Global City". Princeton Univ. Press. Princeton.
- SAUTU, R.** (2012). "Reproducción y cambio en la estructura de clase". En *entramados y perspectivas* Vol. 2, N° 02 *Revista de la Carrera de Sociología*. Universidad de Buenos Aires.
- SCALON, C.** Org. (2004). "Imagens da desigualdade" Ed. UFMG IUPERJ, Rio de Janeiro.

- SMITH, A.** (1979). Toward a theory of gentrification: A back to the city movement of capital, not people. *Journal of the American Planning Association* 45.
- (2005). *The new urban frontier: Gentrification and the revanchist city*. 2nd ed. London: Routledge.
- TASCHNER, S. y BOGUS, L.** (2000). "A cidade dos anéis: São Paulo", em *O Futuro das Metrôpoles*. L.C. Queiroz Ribeiro (Org.). Ed. Revan Rio de Janeiro.
- VEIGA, D.** (2010). "Estructura social y ciudades en Uruguay: tendencias recientes". Ed. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo.
- et. al.** (2012). *Crecimiento económico y desigualdad social en Maldonado*. Ed. I. M. Maldonado y Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
- y RIVOIR, A. L.** (2008). Fragmentación socioeconómica y segregación urbana en Montevideo. *Rev. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales* Vol. XL. Tercera época N° 158, Madrid.
- VIGORITO, A.** (1999). "La distribución del ingreso en Uruguay entre 1986-1997". *Revista de Economía*, Banco Central del Uruguay, Vol. 6 (2), noviembre. Montevideo.
- WORTMAN, A.** (2007). *Construcción imaginaria de la desigualdad social*. Ed. CLACSO, Buenos Aires.



Educación técnica y transición al trabajo entre los activos de Montevideo

Tabaré Fernández¹ - Marcelo Boado² - Virginia Lorenzo³ - Pía Pirelli⁴

La contribución de la Educación Media Técnica a la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y por ende, al proceso de movilidad intergeneracional, ha sido objeto de intenso debate en la arena de las políticas educativas durante las últimas dos décadas, tanto a nivel europeo como latinoamericano. La tesis más general de quienes sustentan las posiciones pro tecnológicas sostiene que existen diferencias en la integración al mercado de trabajo entre quienes cursaron la Educación Media General y la Media Técnica, y que estas diferencias son a favor de los técnicos. Los cursantes de la Técnica ingresarían a un empleo más calificado, estarían protegidos legalmente y permanecerían más tiempo en ese empleo, en comparación con quienes cursaron la General. En Uruguay existe poca evidencia respecto de esta teoría. Además, el país se caracteriza por dos elementos que están ausentes en el debate internacional: i) el alto abandono en la Educación Técnica y ii) la tardía equiparación formal del trayecto técnico con el trayecto general (producido en 1986). Ambas singularidades generan grupos de comparación adicionales al debate teórico. Nuestro trabajo propone explorar la tesis internacional utilizando la Encuesta de Movilidad Ocupacional y Trayectorias Educativas (EMOTE), levantada en Montevideo durante el 2010 entre 2000 activos de distintas cohortes etarias⁵.

Presentación

La Encuesta de Movilidad Ocupacional y Trayectorias Educativas (EMOTE) fue aplicada a una muestra aleatoria de personas activas entre 18 y 75 años, residentes en hogares de las ciudades de Montevideo (2010), Salto (2011) y Maldonado (2012); como parte de la implementación de la línea de investigación sobre estratificación

- 1 Profesor Agregado del Departamento de Sociología. Coordinador del Grupo de Investigación sobre Transición Educación y Trabajo (TET). tabaref@hotmail.com
- 2 Profesor Titular del Departamento de Sociología. Coordinador del proyecto "50 años de movilidad social". marcelo.boado@cienciassociales.edu.uy
- 3 Ayudante de investigación Grado 1 en el Grupo TET. vlorenzoholm@gmail.com
- 4 Ayudante de investigación Grado 1 del Departamento de Sociología y Profesora de Metodología en la Licenciatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho. mp.pirelli@gmail.com
- 5 El estudio fue realizado por el Grupo de Investigación sobre Transición Educación y Trabajo (TET).

social y movilidad del Plan de Trabajo del Grupo de Investigación sobre Transición Educación Trabajo (TET) de la Facultad de Ciencias Sociales. El levantamiento fue financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República y por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

La EMOTE indaga de forma retrospectiva la historia laboral del entrevistado en cuatro momentos en el tiempo: el primer empleo, el empleo a los 30 años, el último empleo y el empleo actual. Pregunta, además, por la fecha y los detalles de la inscripción, cambios de escuela, orientaciones, carreras, abandono y acreditación en Primaria, Ciclo Básico, Media Superior y Superior. Estas características de la EMOTE permiten establecer en forma satisfactoria relaciones de precedencia entre los eventos educativos y laborales en el denso período demográfico de la transición de la educación al trabajo. A su vez, su carácter de estudio longitudinal multicohorte permite comparar cambios en esas relaciones debido a modificaciones históricas ocurridas sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito laboral.

Este artículo utiliza estos datos longitudinales para realizar un primer contraste empírico de hipótesis rivales, generalmente propuestas para relacionar las modalidades General y Técnica de la Educación Media con el ingreso al primer empleo, teniendo presente las marcadas transformaciones institucionales que ha experimentado el sector de la Educación Técnica Pública en Uruguay (en adelante, UTU), entre 1942 y el presente. Las preguntas que nos proponemos responder en este primer trabajo son tres: i) ¿quiénes han cursado Educación Técnica?; ii) ¿tuvieron estos cursantes mayor probabilidad de acceder a un primer empleo calificado que sus pares de la General?; y iii) ¿los cambios institucionales registrados han modificado estas relaciones?

Para este ejercicio hemos adoptado cuatro decisiones metodológicas importantes. La primera ha sido restringir el estudio a la muestra de Montevideo: el estudio sobre las dos ciudades del interior requiere de una exploración previa que hemos acometido en otro lugar (Boado, Fernández, & Rey, 2013). En segundo lugar, optamos por construir tres grupos de comparación: i) quienes se inscribieron a algún curso de Técnica cualquiera sea el ciclo; ii) quienes lo acreditaron, y iii) quienes cursaron algún grado de General (Ciclo Básico o Bachillerato). En tercer lugar, los entrevistados han sido agrupados en términos de cohortes de asistencia a la Educación Media en lugar de cohortes de nacimiento, dado que esto permitirá mostrar más elocuentemente la relación entre cambios institucionales de la UTU y las transiciones. Finalmente, sólo consideraremos si el tipo de primer empleo era o no calificado, sin distinguir su carácter manual o no manual pero quitando a los trabajadores no manuales calificados para mejorar las comparaciones.

El debate

La contribución de la Educación Media Técnica (en adelante, ET) a la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y por ende, al proceso de movilidad intergeneracional, ha sido objeto de intenso debate en las últimas décadas, tanto en la arena de

las políticas educativas, como en el campo de la sociología de la educación. En esta sección resumiremos cuatro debates relativos a qué se entiende por primer empleo, los efectos teorizados de inclusión o desviación asignados a la ET, los mecanismos o formas alternativas de vinculación entre educación y primer empleo, y la especificidad de la UTU.

La noción de primer empleo

El estudio de la transición al trabajo suele abordarse en general evaluando dos conjuntos de variables de resultado, cada uno dando lugar a distintos objetos de análisis: i) primer empleo y ii) trayectoria laboral inicial.

Los estudios que se centran en el primer empleo abordan en particular cuatro propiedades: i) la edad a la que el adolescente o el joven lo obtienen (denominado “calendario”); ii) el tipo de prestaciones sociales recibidas en ese primer empleo (el “contrato”); iii) la duración del primer empleo (“la rotación”); y iv) el tipo de tareas o de ocupación desempeñada, por ejemplo, si era manual o no manual y el nivel de calificaciones requerido; denominando a este objeto como el “ajuste” o “matching” educación-trabajo.

Por otra parte, un objeto más sofisticado para el estudio de la transición está dado por la “trayectoria”, conformada por la sucesión de empleos y desempleos hasta, por ejemplo, los 25 años; se trata del primer tramo de la historia laboral que el individuo realizó a partir del primer empleo.

Los estudios de transición han estudiado con mayor detalle el primer empleo y menos frecuentemente la “primera historia” laboral del individuo entre el primer empleo y los 25 años. La elección se ha respaldado en premisas teóricas y también en limitaciones de los datos relevados.

La hipótesis que subyace a la elección del primer empleo como objeto de estudio tiene origen en lo que se denomina el “modelo normativo de transición”. Este modelo, que orientó las descripciones sobre cursos de vida durante los años sesenta y setenta (Neugarte, 1973), se puede exponer sintéticamente en cinco enunciados. Primero, sostuvo que la transición se definía por la experiencia de un conjunto de cinco eventos de transición de carácter *irreversible*: la salida de la escuela, el ingreso al trabajo, la emancipación, la unión conyugal y la paternidad. En segundo lugar, estos eventos estaban organizados en dos dimensiones: una pública que agrupaba los dos primeros y otra privada con los tres restantes. Cada dimensión refería a tres grandes esferas institucionales, la ciudadanía, el trabajo y la familia, reguladas históricamente por las leyes civiles que establecían edades para trabajar, para contraer matrimonio, para votar o estudiar. Esto implicaba que a medida que las sociedades modernas avanzaran en garantizar derechos sociales (por ejemplo, la educación), la transición se tornaría progresivamente más institucionalizada en sus calendarios y características. A su vez, esto suponía que empíricamente debería observarse *menor varianza en los calendarios*

para cada nueva generación. En tercer lugar, el modelo normativo estableció una *única secuencia* entre los eventos, de tal forma que las transiciones socialmente establecidas comenzaban por la acreditación de la educación obligatoria y concluían en la paternidad. Implícitamente la alteración de la secuencia fue tomada como un indicador de desviación social, tal como es el caso de la maternidad adolescente. En cuarto lugar, esta secuencia tenía un calendario, esto es, edades a las que típicamente se esperaba que ocurrieran los eventos. En quinto y último lugar, la teoría supuso que esta secuencia única e irrepetible de eventos tenía un carácter universal. Cada una de estas premisas (irreversibilidad, institucionalización, secuencia, calendario típico y universalidad) ha sido debatida teórica y empíricamente en prácticamente todos los estudios de las últimas dos décadas. A pesar de esto, el modelo normativo presta ciertas utilidades aunque más no sean heurísticas.

Una primera utilidad radica en que contribuye a delimitar “preliminarmente” un denso período sociodemográfico en la vida de los jóvenes, que va aproximadamente entre los 18 y los 24 años. Orientado por su tesis de la institucionalización, ubicó los 18 años como la edad crítica de comienzo de la transición, momento en que la legislación civil, penal, laboral y política establece la mayoría de edad y en que la generalidad de los sistemas educativos modernos supone que se concluye la escuela secundaria. Menos claramente, la transición concluiría en torno a los 24 años en que una alta proporción de mujeres han contraído matrimonio y han tenido el primer hijo.

Una segunda utilidad consiste en focalizar una gran atención en la experiencia de los eventos de salida de la escuela e ingreso al mercado de trabajo, como eventos claves en los que la persona añade un complejo haz de nuevas expectativas de rol (“trabajador”) y finaliza (o limita) otras expectativas de rol (“estudiante”) que definieron su posición social y sus interacciones por más de la mitad de su vida. El modelo normativo permite resaltar el hecho de fondo: que el adolescente transita de una modalidad de integración social sostenida, en distintos grados, por la afiliación educativa y la familia de origen, a una modalidad de integración social sostenida por la familia constituida y el empleo (salario, prestaciones y protecciones asociadas).

Ahora bien, tal como Cardozo (2012), entre otros, ha apuntado para Uruguay, no es empíricamente sustentable la tesis original del modelo normativo: esto es el carácter *irreversible* de ninguno de estos eventos. Más bien parecería apropiado conceptualizar la salida de la escuela y el ingreso al empleo como eventos compuestos (y no únicos) de eventos simples de salidas y entradas experimentadas en un período de tiempo. No habría, por lo tanto, un único evento que por sí solo permitiera pensar que generó un cambio de status, sino más bien habría que pensar en un estado inicial, un tiempo de transición con intermitentes entradas y salidas, donde el adolescente mantiene ambos roles (estudiante y trabajador) o incluso no desempeña ninguno, y un evento que concluye la transición y marca el comienzo de su integración social a través del trabajo. Por lo que sería necesario estudiar la desafiliación (o acreditación) de la

educación media más que el abandono, y sería necesario estudiar la primera historia laboral más que el primer empleo.

Sin embargo, se podría sostener el modelo normativo pero con una tesis más débil⁶ que, reconociendo la crítica anterior, supusiera una asimetría entre los eventos de la “primera historia laboral”, destacando el primer empleo por haber generado ese nuevo haz de expectativas en una esfera institucional totalmente nueva para el adolescente. Es claro que el primer empleo otorga un tipo de información radicalmente distinta que el adolescente utilizará en adelante para la evaluación de cursos de vida alternativos que involucran, por ejemplo, la decisión de concluir estudios, retomarlos, dedicar más tiempo al trabajo a costa del estudio, descartar cierto tipo de empleos, o incluso, migrar a otros lugares.

Sobre las anteriores consideraciones, en este artículo definiremos el primer empleo como nuestro objeto de estudio, enfocándonos sobre las cuatro propiedades indicadas y que están resumidas en el esquema 1. Es de observarse que el contrato, la duración y el “matching” son variables condicionadas a que la persona esté empleada en cada momento en que se realiza el análisis.

Esquema 1. Variables caracterizadoras del primer empleo

Propiedad	Concepto	Indicador
Calendario	Primera asunción del rol de trabajador	Edad del primer empleo
Contrato	Tipo de prestaciones sociales acordadas y recibidas por el trabajador en su primer empleo	Existencia de aportes a la seguridad social
Duración	Estabilidad en el rol ocupacional asumido en el primer empleo	Meses de permanencia
Matching	Calificaciones requeridas para el desempeño del primer empleo	Tipo de ocupación desempeñada

Fuente: elaboración propia.

En este trabajo nos interesará caracterizar el primer empleo cronológico analizando la propiedad del “matching”.

Inclusión y desviación

La tesis más general de quienes sustentan las posiciones pro tecnológicas sostiene que existen diferencias en la integración al mercado de trabajo entre quienes cursaron la Educación Media General y la Media Técnica, y que estas diferencias son favorables a los segundos. Estos jóvenes ingresarían a un empleo más calificado que

⁶ En el mismo sentido, Fernández (2009) sugirió un modelo normativo débil para interpretar los hallazgos sobre el calendario de salida de la escuela en Uruguay entre los 14 y los 18 años.

los primeros, este empleo tendería a estar regulado y los jóvenes permanecerían más tiempo en él. Las implicancias para las políticas educativas de este contraste empírico son bastante claras y tienen que ver con la relación entre el aumento de la diversificación curricular y la mayor democratización de la Educación Media a través de la inclusión de grupos de adolescentes interesados en cuestiones vocacionales⁷.

Frente a la posición “inclusiva” se ha levantado la tesis de que el desarrollo de la Educación Media a través de la diversificación y especialización curricular técnica sólo constituiría una política que genera una desviación o bifurcación en la trayectoria educativa, fundada en la herencia sociocultural que busca preservar el acceso a la Educación Superior para las clases alta y media alta. La consecuencia clara de un contraste favorable a esta hipótesis sería una política educativa que extendiera la homogeneidad curricular lo máximo posible, por ejemplo, la Educación Media Superior.

Este debate teórico y político presenta “zonas grises”, en términos predictivos, generadas por los distintos tipos de status que pueda tener la ET (Lamb, 2011). La tesis diversiva parece tener mayor plausibilidad cuando la provisión de Educación Media se hace en sistemas “binarios” en los que las modalidades General y Técnica no tienen formal equivalencia, careciendo la segunda de continuidad en la Educación Superior. La tesis inclusiva a su vez resultaría más apropiada para describir la asistencia y la acreditación cuando se puede optar por distintas modalidades de Educación Media sin perder la elegibilidad⁸ para la Educación Superior.

Mecanismos de relación entre educación y empleo

El desarrollo de las políticas de ET a lo largo del siglo XX, en todos los países, ha estado fundado en la premisa de que esa experiencia y titulación proveen a los adolescentes de un diferencial, un “plus educativo”, que debiera repercutir positivamente en particular en la rapidez, calificación y protección social durante la transición al mercado de trabajo. Por ejemplo, la reforma de la ET en Chile en el año 1998 sostuvo la relevancia de esta modalidad en los siguientes términos:

“Se ofrecerá a los alumnos y las alumnas oportunidades de realizar aprendizajes en un campo de especialización que facilite su acceso a un primer trabajo remunerado, atendiendo a sus intereses, aptitudes y disposiciones vocacionales, mediante una formación técnica en el ámbito de un sector del mundo productivo, que los prepare en forma efectiva para el trabajo y para responder con flexibilidad a la velocidad de los cambios tecnológicos” (MINEDUC, 1998, pág. 307).

7 El término vocacional refiere al interés por la formación orientada hacia el trabajo en oficios, asimilable a la alfabetización laboral, del inglés “vocational”. Tomaremos aquí el concepto como ET, en un sentido amplio.

8 Por tal entendemos aquel estudiante que cumple con todos los requisitos académicos formales para postular a carreras universitarias. De acuerdo a la Clasificación Internacional Comparada de Educación de la UNESCO (ISCED 2011), éstos son los títulos de nivel 3 y modalidad “A” (ISCED 3 A).

Los estudios sobre el retorno de los títulos técnicos (a nivel medio o superiores) en términos de salarios de mercado no suelen ser concluyentes respecto de la existencia de diferencias radicales entre trayectorias generales y técnicas (Meer, 2007). Incluso, quienes abonan una teoría de la desviación de trayectorias sostienen que participar de este tipo de educación reproduce las inequidades de sexo, género y raza, aún después de controlar los éxitos anteriores y las expectativas educacionales (Ainsworth & Roscigno, 2005).

Ahora bien, ¿por qué quienes han cursado ET tienen mayores probabilidades de emplearse en menor tiempo, hacerlo en ocupaciones calificadas y tener mayor estabilidad laboral al inicio de su carrera? Esta premisa “inclusiva”, ampliamente presente entre los fundamentos de política, genera un problema a la conceptualización sencilla en el modelo de capital humano y las credenciales escolares que lo informan. La solución podría incorporarse por medio de tres mecanismos o formas alternativas. Denominaremos a estas como: i) el modelo de dimensiones independientes de capital humano; ii) el modelo institucional de carreras y iii) el modelo de redes sociales.

El *modelo de dimensiones independientes de capital humano*, consideraría que la credencial de ET informa sobre una segunda dimensión del capital humano no contemplada en un título general de Educación Media. Esto es, mientras que la primera reporta sobre el nivel de habilidades específicas ligadas a ciertos grupos de tareas ocupacionales, el segundo informa sobre competencias cognitivas y disciplinarias generales, abstractas, que estarían débilmente relacionadas con alguna ocupación.

El *modelo institucional de carreras*, como segunda alternativa conceptual sería pensar que la credencial de ET en realidad está indicando la existencia de una “barrera a la entrada” en un segmento del mercado de trabajo. Más que informar sobre habilidades individuales, reporta la tenencia de un requisito que ciertas regulaciones han impuesto para postular a ciertos empleos semicalificados, tanto en la industria como en la administración. Quienes no tienen ET podrían aspirar a empleos del segmento no calificado o aspirar a concluir estudios superiores e ingresar al mercado de empleo profesional. La suposición de la existencia de barreras a la entrada claramente convierte el estudio del ingreso al primer empleo, en un estudio de las instituciones que delimitan los mercados de empleo para los jóvenes. Entre otros, Marsden desarrolló en los años ochenta un análisis que vinculaba las instituciones del mercado de empleo con las credenciales de ET para comparar las transiciones al trabajo en Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Básicamente, la idea central es que el tipo de transición al trabajo estaría pautado por el régimen de protección laboral y por el grado de especificidad vocacional que tienen las instituciones y programas de la educación media (Gangl, 2001); (Müller, 2005); (Eyraud, Marsden, & Silvestre, 1990). Habría dos grandes tipos de regímenes: uno ocupacional y otro organizacional o interno, estando Uruguay dentro de los segundos (Fernández, Bonapelch & Anfitti, 2013).

El *modelo de redes sociales* consiste en sostener que el plus otorgado por la ET no estaría principalmente ni en los jóvenes ni en el mercado de empleo, sino en las

redes débiles que las escuelas técnicas desarrollan en forma característica. Este enfoque sostiene que la ET contribuye sobremedida a la acumulación de capital social en la medida en que inserta a sus alumnos en aquellas redes débiles que se requieren para ingresar a puestos de trabajo semicalificados en la industria y los servicios. Es decir, no se trata de competencias cognitivas, sino de ampliar los recursos de información, reciprocidad y confianza que podrían ser movilizados con la finalidad de conseguir empleo. Este mecanismo opera a través de las relaciones que los alumnos crean con sus maestros de taller, en los oficios que están estudiando. Estos maestros a su vez, suelen ser empleados calificados en las empresas del ramo, quienes los convocan a los efectos de reclutar nuevo personal. El enfoque fue aplicado para estudiar las diferencias en la transición al empleo en Japón y Estados Unidos (Rosenbaum, Kariya, Settersten, & Maier, 1990).

Este último mecanismo postulado, fundado en la experiencia social dentro de las organizaciones escolares, es lo suficientemente genérico como para aplicarse también a la explicación desviacionista sobre las desventajas de la ET que sostienen la perspectiva reproductivista. Implica que los estudiantes de estatus socioeconómico altos evitan tanto participar de la ET como trabajar en la agricultura, oficios manuales y el área de servicio sin calificación después de la educación media. Alternativamente, los estudiantes pobres son canalizados a todos los tipos de ET, y esta participación incrementa la probabilidad de que abandonen la educación media y disminuye las posibilidades de asistir a la universidad. A su vez participar de la ET está vinculado con ocupaciones en sectores paralelos del mercado de trabajo, donde las recompensas y la calidad de los trabajos son funestos comparados con los trabajos que los graduados universitarios eventualmente obtienen. En consecuencia, la experiencia de la ET sería parcialmente responsable de las inequidades en el mundo del trabajo, y ocurre antes de la entrada al mercado laboral (Ainsworth & Roscigno, 2005).

En síntesis, estos mecanismos plantean que sería de importancia distinguir entre quienes tuvieron la experiencia social y académica de asistir a la ET de quienes la acreditaron. Las dos primeras alternativas explicarían efectos sólo para graduados, pero no para quienes abandonaron los estudios. En cambio, la última explicaría efectos para todos los alumnos de la ET.

Institucionalidad y singularidad de la Educación Técnica en Uruguay

La Educación Media de Uruguay es un caso relevante para contrastar estas dos teorías enfrentadas. En primer lugar figura la historia institucional de la ET. Ésta fue establecida en 1878 en el marco del Ministerio de Guerra y Marina bajo un sistema unificado que no reconocía carácter formativo post primario sino correctivo penal. Actualmente la UTU, imparte credenciales equivalentes a la Secundaria General, tanto en el Ciclo Básico como en la Media Superior, y forma parte de un sistema diversificado bajo la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), conjuntamente con la Educación Secundaria (Media General) (Heuguerot, 2002); (Nahúm, 2012).

Durante más de 130 años, la UTU ha tenido cambios institucionales en el modelo de provisión (Lamb, 2011) al punto que el resultado acumulado es una notoria heterogeneidad institucional y curricular de la oferta. Desde un punto de vista institucionalista, la historia de la UTU muestra un “path depece”, donde su origen como institución correccional en el último cuarto del siglo XIX ha condicionado los modelos sucesivos de reforma institucional y equiparación dentro de la educación formal, tensionados con el desarrollo de un formato razonable de diferenciación curricular frente a la Educación Media General y que genera una oferta que atiende a demandas del mercado de trabajo (Fernández & Alonso, 2012); (Fernández, 2010).

A los efectos de este trabajo y con base en nociones básicas utilizadas por la bibliografía, propondremos una periodización organizada por tres dimensiones (institucionalidad, diferenciación y equiparación). Supondremos sintéticamente que podrían identificarse siete grandes períodos de la UTU: (i) la etapa fundacional desde 1878 hasta 1916; (ii) la “época Figari” desde 1916 hasta 1942; (iii) la “época Arias” desde 1942 hasta 1973; (iv) la época de la equiparación sin diferenciación desde 1973 a 1985; (v) la época de equiparación con desdiferenciación curricular en el Ciclo Básico (1986-1996); (vi) la reforma general de la ET, desde 1997 hasta el 2006; y (vii) la “vuelta a la inclusión con equiparación y diversificación” desde 2007 hasta el presente.

La primera etapa se corresponde con la erección de la institución en 1878 en el Parque Nacional durante la Dictadura del Coronel Latorre, la prolífica dirección general del Coronel Bellinzón (hasta 1887) como instituto perteneciente al Ministerio de Guerra y Marina y su reubicación dentro del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Cultos donde pasó a denominarse Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAYO). La aprobación de la Ley de Enseñanza Secundaria en el Interior del país en 1912 y de la Ley de Enseñanza Industrial del 12 de julio de 1916 cierra la primera etapa. La segunda etapa hereda y consolida el resultado del debate entre Pedro Figari (director de la ENAYO desde 1915 hasta 1917) y José Batlle y Ordóñez (Presidente de la República) sobre la definición acerca de qué debía ser la Educación Media. La siguiente etapa, hasta 1942, se corresponde con la constitución del Consejo Superior de Enseñanza Industrial (hasta 1934) y de la Dirección General de Enseñanza Industrial (1934-1942) donde el peso gravitante lo tuvo el Dr. José F. Arias, quien elaborara las leyes de organización institucional y académica de 1916, 1919, 1934 y 1942. Se corresponde con una expansión y asociación de la UTU a la naciente industria y al desarrollo de la producción agraria intensiva, asociada a nuevos rubros sobre todo en el sur y oeste del país⁹. La etapa 1942 a 1973 se corresponde en sentido estricto con una ET post primaria, industrial y agraria, que pretende asociarse tanto práctica como teóricamente (influenciada por la CIDE) al modelo sustitutivo de importaciones y el desarrollismo de la posguerra. Sin

9 En 1942, la matrícula ascendía a 10 mil inscriptos. La UTU tenía en Montevideo 8 escuelas: la Escuela de Mecánica y Electrotecnia, Escuela de Industrias de la Construcción, Escuela de Industrias Femeninas, Escuela de Artes Gráficas, Escuela de Industrias Navales, Escuela de Artes Plásticas, Escuela de Plástica Decorativa y una Sección “Comercio y Cálculo Mercantil” (en el edificio central). En el interior, había ya 16 escuelas agrarias. En 1995 la UTU tenía 104 escuelas.

embargo, el modelo sigue asociado a la formación de oficios libres (por antonomasia, “mecánico”, “electricista”, “sanitario” y “carpintero”), aunque comienzan a registrarse formaciones profesionales asociadas a ocupaciones reconocidas en procesos industriales. En 1962, la construcción institucional y la expansión en el territorio llegaron a uno de los niveles más altos con 95 escuelas fundadas y 21.200 inscriptos¹⁰. La cuarta etapa está nuevamente definida por la preeminencia del cambio institucional generado por la política de coordinación pública en educación y la equiparación formal entre ET y General: la Ley de Educación de 1973 subordinó la UTU a un órgano superior el CONAE; luego las reformas de 1976 durante la dictadura y de 1986 con el Plan de Ciclo Básico Único, avanzaron en reconocer la igualdad de la acreditación dada por la UTU y Secundaria al Primer Ciclo de Educación Media. Fue una etapa orientada por un paradigma homogeneizador que minimiza la ET dentro de la General sobre la base de que las tempranas diferenciaciones curriculares crean desigualdades en las oportunidades educativas. La quinta etapa comienza en 1997 y se extiende hasta el 2006; está pautada por el desarrollo de la ET con los Bachilleratos Tecnológicos y los cursos terciarios no universitarios de Tecnólogos. Desde el 2007 apareció una nueva etapa que se ha organizado en torno a las políticas de inclusión (FPB, Puente, Bachillerato Profesional), más que a la ET (aunque sin descuidarla).

Dados estos antecedentes institucionales, nuestra primera reformulación del debate entre inclusión y desviación establece que para cada etapa de la UTU la relación general entre cursos técnicos y primer empleo debiera variar, según la combinación ofertada de institucionalidad, diversificación curricular y equiparación formal que la UTU ha hecho a cada generación que transitó la Educación Media.

Una segunda singularidad hace interesante el contraste en Uruguay, característica que está presente sólo marginalmente en el debate internacional: el rezago en la matriculación en la Educación Media sumado al alto abandono observado en ambos ciclos de la Educación Media (ANEP-DIEE, 2005). Ambos fenómenos se conocen en la bibliografía bajo el término de “estratificación” o más estrictamente “estratificación cuantitativa” (Allmendinger, 1989).

El país tiene un pequeño pero aún relevante grupo de adolescentes que no continúan sus estudios más allá de la educación primaria. Según estimación propia a partir de la EMOTE 2010, este grupo representaría alrededor de un 4% de los activos residentes en Montevideo. Hacia los 15 años, aproximadamente un 12% de los adolescentes nacidos a mediados de los ochenta no estaban ya en la escuela, y sólo un 67% de esas cohortes de edad acreditaron el Ciclo Básico, en tanto que la tasa de graduación oportuna sólo llega al 32,8%, hasta los 20 años y para toda la cohorte de edad (Boado & Fernández, 2010).

10 En 1995 la UTU tenía 104 escuelas.

Método y datos

Muestra

Tal como adelantamos en la presentación de este trabajo, la EMOTE es un estudio longitudinal de tipo retrospectivo levantada en muestras aleatorias de adultos activos de ambos sexos residentes en las ciudades de Montevideo, Salto y Maldonado. Forma parte de un proyecto más amplio denominado “50 años de movilidad social en el Uruguay” que coordina el Dr. Marcelo Boado.

La muestra de Montevideo, que aquí utilizaremos, tiene un total de 2021 casos. Fue relevada con base en un diseño muestral complejo con estratos definidos por las secciones censales y con los segmentos censales como unidades primarias de muestreo. Las unidades secundarias fueron los hogares residentes en viviendas particulares, los cuales fueron sorteados utilizando un muestreo sistemático hasta completar una cuota de seis casos por segmento.

La muestra fue ajustada por factores de corrección (WAF) según tasas de respuesta, computados utilizando los estratos de la muestra y la distribución de varones y mujeres entre los activos de Montevideo. La Encuesta de Hogares de 2010 fue utilizada como marco de referencia para estas correcciones, aunque las distribuciones fueron controladas por la serie completa 2006-2010, para descartar que hubiera variaciones de entidad en los WAF debido a las muestras.

Grupos de comparación

La discusión conceptual desarrollada hace más razonable reformular el debate extendiéndolo a la comparación entre cuatro grupos: i) quienes como máximo acreditan Primaria; ii) quienes inscribieron en ET; iii) quienes acreditaron ET; y (iv) quienes inscribieron Media General. Es posible que los beneficios y costos de la opción Técnica sean distintos cuando se cambia el menú de alternativas y se incluye la opción (i) equivalente a no hacer nada en Educación Media. Por otro lado, la distinción entre (ii) y (iii) permite discutir con mayor detalle la hipótesis sobre el “efecto redes” de la ET en contraposición del “efecto título”. Los cuatro grupos, combinados con las etapas institucionales de la UTU, definen una matriz general de 28 celdas, tal como se expone en el esquema 2.

Esquema 2. Grupos de comparación generados por la combinación de credenciales y periodos institucionales de la Educación Técnica (UTU) en Uruguay

	Período 1878- 1916	Período 1917- 1942	Período 1943- 1973	Período 1974- 1985	Período 1986- 1996	Período 1997- 2006	Período 2007 al presente
Máximo Primaria							
Inscripción en Educación Técnica							
Acreditación en Educación Técnica							
Inscripción en Media General							

Fuente: elaboración propia.

Limitaciones de la muestra

Desde el punto de vista de las pruebas de inferencia estadística, la matriz de comparación planteada resulta altamente demandante en información. A esto se le agregan algunos potenciales problemas de truncamiento y selección por razones de ingreso a la actividad laboral, retiro y sobrevivencia conforme a la edad.

Al tratarse de una encuesta aplicada a activos con historia laboral, quedan fuera aquellos que están buscando su primer empleo. Datos comparados informan que la tasa de actividad llega a su máximo recién a los 24/25 años para los varones. Entre las mujeres, la máxima actividad se observa más retrasada, en torno a los 28 a 30 años, y con movimientos de entrada y salida del mercado, ajustados a los ciclos de maternidad (Bucheli, 2006). Finalmente, la inactividad laboral suele prevalecer entre quienes acceden a la Educación Superior, por lo que los jóvenes con trayectorias educativas de mayor acumulación no están contemplados tampoco (Boado & Fernández, 2010). En consecuencia, la muestra tiene distintos tipos de sesgos de selección que podrían afectar la estimación de la incidencia de la ET o de sus efectos (positivos o negativos) toda vez que esa condición sea explicativa a su vez de la actividad.

La cobertura provista por la muestra de la EMOTE no contempla a la generación que podría haber asistido al primero ni tampoco al segundo período (1916-1942). Más que selección, aquí se trata de un truncamiento total por edad. Esto elimina de la matriz las dos primeras columnas esbozadas en el esquema 2.

Desde el punto de vista numérico, los restantes grupos son más bien pequeños, sobre todo en lo que respecta a la ET: entre 58 y 124 casos. Estos tamaños de muestra podrían afectar las significaciones de las pruebas de hipótesis, en particular cuando se agreguen otras variables de interés.

Variables

El cuestionario registró en seis módulos la información sobre historia laboral y sobre historias educativas con gran detalle y cubriendo todos los temas indagados relativos al empleo (tipo de ocupación, rama de industria, tamaño de empresa, supervisión, mecanismos de acceso al empleo y motivo de finalización del vínculo laboral). No se dispone del ingreso por trabajo sino únicamente para el empleo actual. En ambos temas se adoptó un criterio de doble referencia temporal (años civiles y edad). Esto permite situar y secuenciar los eventos de transición, así como también establecer relaciones entre los estados analizados.

El set de variables dependientes seleccionadas para testear las teorías esbozadas está relacionado con el primer empleo cronológico tenido por el entrevistado y quedó registrado en las preguntas 44 a la 53 (Módulo XI). De aquí se elaboraron tres variables: edad del primer empleo, duración y tipo de ocupación desempeñada (según su calificación).

El set de variables independientes comprende la clase social de origen del entrevistado, el sexo y la cohorte o generación de cursado de la Educación Media. La clase fue medida a la edad de 15 años a través de la ocupación del padre (registrado en el módulo IV). Se ha utilizado la pauta de estratificación de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (en adelante EGP) adaptada a Uruguay por Boado, Fernández, & Pardo (2006), abierta a tres clases sociales: clases de servicio (I y II), clases medias (IIIa, IIIb, IVa, IVb, y IVc); y clases trabajadoras (V, VI, VIIa, VIIb). El esquema EGP se funda en la codificación de la ocupación, de las tareas reportadas, de la posición en la ocupación y de la rama de actividad, según el manual de clasificación internacional de ocupaciones (ISCO por su sigla en inglés) elaborado por la Organización Internacional del Trabajo en 1988. Esta clasificación fue adoptada y adaptada para Uruguay por el Instituto Nacional de Estadística en 1995 bajo el nombre CNUO-95.

La cohorte del entrevistado fue establecida para todos quienes habiendo acreditado Primaria, se hubieran inscripto sea al Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria (Planes 1934, 1942, 1963 o 1976), al Ciclo Básico de Educación Media (1986, 1996), al Primer Ciclo de UTU (planes anteriores a 1986) o cursado Formación Profesional Básica (planes anteriores a 2007). En todos los casos se trata de cohortes de ingreso a la Educación Media.

El set de variables relativas al cursado de la ET se compone de tres conjuntos. El primero remite a la condición de inscripto y han sido definidas tres variables con base a la declaración hecha por el encuestado en tres momentos: a) la modalidad de primer ciclo (o ciclo básico) de Educación Media a la que se inscribió; b) la modalidad inscripta en el segundo ciclo (bachilleratos, cursos técnicos, formación profesional superior) de Secundaria o de UTU; y c) el nivel máximo cursado por el entrevistado. El segundo set refiere a la obtención de títulos. En razón de la distinción que las teorías hacen sobre inscripción y acreditación para establecer hipótesis sobre sus efectos, aquí también

distinguimos entre ambos eventos. Por lo que generamos dos variables que informan para cada nivel y modalidad si fueron completados con éxito. Finalmente, el tercer subconjunto está compuesto por: a) una variable resumen para todos los niveles de ET que informa si el encuestado declaró haberse inscripto en alguna oportunidad; y b) una variable que informa si ese curso técnico fue acreditado.

Quiénes y qué Educación Técnica hicieron los activos de Montevideo

Inscripción y acreditación de Educación Técnica

De los activos montevideanos encuestados por la EMOTE en 2010 que alcanzaron la Enseñanza Media, se habían inscripto en alguna ocasión en al menos una modalidad de ET entre los años 1942 y 2010 el 18,2%¹¹. Sólo uno de cada tres logró acreditar un curso o programa técnico. Al expandir la muestra se estima que 98570 activos habrían cursado ET en el período (Cuadro 1).

Respecto a la distribución de los activos cursantes de ET por modalidades, un 24,1% hizo Formación Profesional Básica, cuatro de cada diez hicieron Ciclo Básico Tecnológico y el 35,9% se inscribió a Bachillerato Tecnológico (primer y segundo ciclo, respectivamente) (Cuadro 2).

Cuadro 1. Grupos de comparación según cohorte de acceso a Enseñanza Media.

Grupos de comparación	Cohorte de acceso a la Educación Media				Total
	1942 a 1973	1974 a 1985	1986 a 1995	1996 a 2010	
Media General	86,0	77,5	81,4	82,6	81,6
Cursó ET	10,9	*14,2	9,7	11,7	11,7
Acreditó ET	3,1	8,4	8,9	5,6	6,6
Total	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. (*) P < 0.05.

11 Inscriptos totales a ET refiere a la sumatoria entre aquellos que sólo cursaron y quienes además acreditaron.

Cuadro 2. Modalidad de Educación Técnica cursada según cohorte de acceso a Enseñanza Media.

Cohorte de acceso a Educación Técnica					
Modalidad ET	1942 a 1973	1974 a 1985	1986 a 1995	1996 a 2010	Total
FPB	73,6	17,2	10,9	7,1	24,1
Primer Ciclo / CBT	8,9	51,7	49,0	36,4	40,0
Segundo Ciclo / BT	17,5	31,1	40,1	56,5	35,9
Total	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.

Tendencias según cohorte

Al observar las variaciones en la proporción de inscriptos para cada cohorte, vemos que la participación de montevideanos activos en el año 2010 en la ET no sigue una tendencia lineal ascendente, tal como podría esperarse en función de la progresiva equiparación y jerarquización institucional. En la primera cohorte, un 14,0% de los activos que hicieron post primaria, indican haber inscripto en alguna modalidad de UTU; la cifra aumenta al 22,6% en la segunda y vuelve a reducirse en las dos más recientes, aunque con magnitudes levemente superiores al primer período (18,6 y 17,3% respectivamente). Dicho en otros términos, la época de mayor participación de la ET en la Enseñanza Media se dio entre los años 1974 y 1985, para la generación nacida en la década de 1960, única etapa en que la probabilidad de cursar ET está asociada a la cohorte significativamente en términos estadísticos (Cuadro 1).

La acreditación de ET ha ido aumentando para cada etapa. Entre 1942 y 1973 completaban la UTU el 3,1% de la cohorte que llegara a Media, alcanzando el 8,4% entre 1974 y 1985, llegando al máximo de 8,9% entre 1986 y 1995. Para la cohorte más joven, la acreditación disminuye hasta el 5,6%. Es de notar que la magnitud de las oscilaciones observadas no resulta estadísticamente significativa. A pesar de esto, es razonable relacionarlas con las hipótesis generales. El comportamiento es consistente con la jerarquización institucional, aunque no puede descartarse que el incremento se pueda deber también a una mayor participación femenina, así como a la incorporación de clases intermedias, aspectos que contrastaremos en los siguientes apartados.

Qué educación técnica se cursa

Al analizar la distribución de quienes hacen UTU según los distintos niveles, observamos resultados que condicen con la elevación de logros educativos de la población global. Disminuye la proporción de activos que cursa Formación Profesional Básica, mientras aumentan los cursantes de Enseñanza Media para la cohorte 1974-1985 respecto a 1942-1973 (Cuadro 2). En las cohortes más jóvenes, la participación en ET se ha incrementado en mayor medida para la Educación Media Superior en detrimento del

crecimiento para Primer Ciclo. Cabe acotar que la cantidad de casos no es suficiente para realizar pruebas de hipótesis.

Características sociodemográficas según cohorte

Entre el conjunto de activos entrevistados, es notoria la subrepresentación de mujeres en ET: de cada tres inscriptos de UTU hay dos hombres y una mujer, a diferencia de la Media General cuya matrícula se reparte en mitades para cada sexo. A lo largo de las distintas etapas históricas registradas, también prevalece este perfil de género, con ligeras alteraciones en sentido contrario para la segunda y tercera cohortes (Cuadro 3).

Cuadro 3. Distribución por sexo según cohorte de acceso a Educación Técnica.

Sexo	Cohorte de acceso a Educación Técnica				Total
	1942 a 1973	1974 a 1985	1986 a 1995	1996 a 2010	
Varón	57,9	76,0	57,1	68,2	66,2
Mujer	42,1	24,0	42,9	31,8	33,8
Total	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.

Así, en lo que respecta a los posibles cambios en la composición por sexo de la matrícula según cohortes, la participación de las mujeres no muestra una clara tendencia a incrementarse para los activos de Montevideo. Las diferencias en la matriculación tampoco resultan estadísticamente significativas para las mujeres entre las distintas cohortes, una vez que se hace la prueba de hipótesis (con un 95% de confianza). Esto implicaría que la probabilidad de participar en ET para las mujeres podría no estar asociada a los grandes cambios institucionales y curriculares delineados por las cohortes de cursado sino a otras dimensiones (Cuadro 4). Entre los varones en cambio, sí se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre cohortes de acceso a la Enseñanza Media. La participación trepó del 16,0% que optó por inscribirse en la UTU entre 1942 y 1973 alcanzando un 33,4% entre 1974 y 1985, volviendo a reducirse en las dos cohortes siguientes a un mismo nivel histórico (21,5% y 22,4%). Sin embargo, es de recordar que por ser ésta una muestra de activos, el truncamiento por actividad puede inducir un sesgo de género¹².

12 Es posible pensar que una proporción de mujeres que realizaron formación técnica, lo hicieron como una estrategia coyuntural de complementariedad salarial o interés extraeconómico, y que no están activas.

Cuadro 4. Comparación de medias: inscriptos a Educación Técnica para cada cohorte según sexo.

Sexo	Cohorte de acceso a Educación Técnica				Total
	1942 a 1973	1974 a 1985	1986 a 1995	1996 a 2010	
Varón	*16,0%	*33,4%	*21,5%	22,4%	*19,6%
Mujer	11,7%	11,0%	15,5%	11,6%	*10,4%

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. (*) P<0.05.

Cuadro 5. Distribución por sexo para cada cohorte según grupos de comparación.

Grupos de comparación	Cohorte de acceso a la Educación Media								Total	
	1942 a 1973		1974 a 1985		1986 a 1995		1996 a 2010			
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Media General	88,1	84,0	88,9	66,6	84,4	78,2	88,4	77,4	87,4	76,0
Cursó ET	8,1	13,7	5,9	22,1	8,2	11,3	7,7	15,3	7,4	15,9
Acreditó ET	3,8	2,4	5,2	11,4	7,4	10,5	3,8	7,2	5,2	8,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Momios de inscripción	0,74		0,33		0,72		0,51		0,53	
Momios de acreditación	1,58		0,46		0,70		0,53		0,65	

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. M=Mujer; H=Hombre.

Entre quienes acreditan la ET, la masculinización no es tal como la brecha entre quienes cursan ET respecto a los que hacen Media General. Las diferencias relativas, dadas por las razones o momios, demuestran que las mujeres participan menos en la UTU, pero con mejores chances de acreditar que los hombres (Cuadro 5).

Existen diferencias en la edad de ingreso. Si bien para todas las edades hay más hombres que mujeres, esto es más pronunciado en la cohorte más joven. Entre los de mayor edad, disminuye la proporción de hombres, mientras una de cada diez mujeres que cursa UTU tiene 18 o más años. Esto podría reflejar una mayor participación relativa de mujeres en los niveles de Media Superior coherente con el comportamiento global de la población, que a los 18 años muestra una brecha al alza y a favor de las mujeres entre quienes asisten a establecimientos educativos (MEC, 2012, pág. 55). Para cohortes anteriores a la equiparación, daría cuenta de mujeres que realizan cursos orientados al hogar (CIDE, 1965) no relacionados al mercado de trabajo, a diferencia de los hombres que tenderían a orientarse al mercado laboral cursando ET a edades más tempranas.

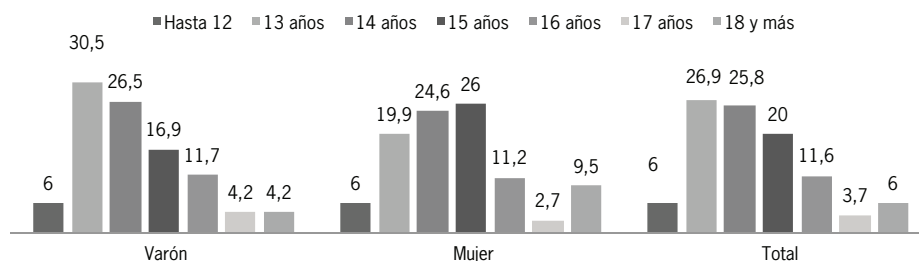
La distribución según cohorte refleja lo que podría esperarse según la situación de la institución en cada etapa. Así, quienes ingresan con 12 y 13 años tienden a concentrarse entre 1974 y 1995, períodos en que se equipara el Primer Ciclo de UTU con Secundaria. Mientras, los de 17 y más años se concentran en la cohorte 1996 a 2010 cuando se equipara el Segundo Ciclo (Cuadro 6). Esto podría dar cuenta que personas en edad de cursar cada ciclo se inscribirían mayormente cuando los cambios curriculares así lo permiten. A su vez, la mayor concentración en los 13 años para las cohortes donde se cursó mayoritariamente Ciclo Básico Tecnológico y en los 15 años donde prima Bachillerato Tecnológico, podría estar reflejando la elección de UTU como segunda opción, luego de haber fracasado en Secundaria. Para períodos anteriores a la equiparación, la concentración a los 14 años podría asociarse a otras dimensiones, como ser edades mínimas requeridas para cursar Formación Básica, donde se centran quienes hacían ET antes de 1973.

Cuadro 6. Distribución de edad de ingreso a ET por cohorte.

Edad ingreso	Cohorte de acceso a Educación Técnica			
	1942 a 1973	1974 a 1985	1986 a 1995	1996 a 2010
Hasta 12	1,4	4,9	11,5	5,3
13 años	11,2	39,2	29,2	16,3
14 años	50,1	23,1	16,8	19,6
15 años	17,7	18,8	16,7	28,6
16 años	11,2	8,1	15,6	12,9
17 años	4,8	0,7	4,4	7,3
18 y más	3,6	5,3	5,7	9,9
Total	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.

Gráfica 1: Distribución edades de ingreso a ET por sexo



Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.

Dichas variaciones no son estadísticamente significativas, por lo que omitimos presentar estos resultados, siendo que el promedio de edad de ingreso a UTU fluctúa entre los 14 y 15 años, para ambos sexos en todas las cohortes, aunque mostrando mayor dispersión entre las mujeres, que ingresarían a edades mayores (Gráfica 1). Quienes hacen el primer ciclo de ET mayormente ingresan a edades levemente superiores que para el Primer Ciclo de Enseñanza Media General, alrededor de los 13 años. Esto se observa en todas las cohortes. Las diferencias entre las distintas etapas definidas no son significativas estadísticamente. La leve mayor edad no se observa al considerar solamente quienes accedieron a Media Superior y comparar edades de cursantes de Secundaria General y UTU.

Perfil social de quienes hacen Educación Técnica según cohorte

Cuadro 7. Distribución de clases sociales según grupos de comparación.

Grupos de comparación	Clase social			Total
	I & II	III & IV	IV/VI/VII	
Media General	93,3	84,7	74,4	81,7
Cursó ET	3,0	9,3	17,4	11,8
Acreditó	3,7	6,0	8,2	6,6
Total	100	100	100	100

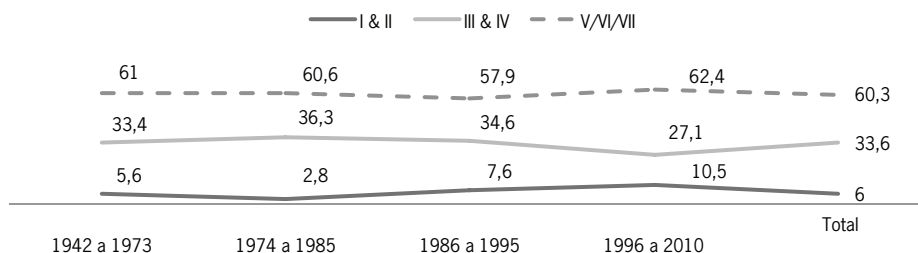
Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.

La distribución por clase social diferenciando quienes cursaron UTU de quienes hicieron Enseñanza Media General, da cuenta de que aumenta la participación en ET a medida que se desciende en la escala social. Son las clases trabajadoras las que orientan a sus hijos a una formación que creen los capacita mejor para el trabajo. Paradójicamente y respecto a la acreditación, sucede que el mayor éxito se observa entre los hijos de clases intermedias y de servicios que entre hijos de trabajadores manuales (Cuadro 7).

Al observar la tendencia por cohorte (Gráfica 2), observamos que la participación de las clases trabajadoras en la ET es alta y estable. Las clases intermedias se mantienen pero disminuyen para la última cohorte. Mientras las clases de servicios han ido aumentando su participación en los distintos períodos hasta alcanzar el 10,5% para la última cohorte (1996-2010), proporción impensada décadas atrás, siendo la única clase que aumentó su participación relativa en la UTU; esto podría vincularse con la reforma de la Media Superior Técnica en 1997. Así, la distribución de quienes hacen UTU según origen social podría reflejar los cambios de la institucionalidad. Se sostiene en el tiempo el incremento de las clases de servicios, las clases intermedias se concentran entre 1974 y 1996, etapas de la equiparación del Ciclo Básico, y los trabajadores muestran su mayor participación entre 1974 y 1986 pudiendo deberse a un refugio en

la educación provocado por el aumento del desempleo con la crisis; o bien a expectativas ante una formación orientada al trabajo.

Grafica 2: Inscritos a ET por clase social según cohorte



Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.

Estas variaciones son estadísticamente significativas, por tanto podemos afirmar que el origen social se asocia con las chances de cursar UTU o Media General, aumentando la probabilidad de hacer ET para quienes provienen de hogares cuyos jefes son trabajadores manuales (Gráfica 2). Al controlar por cohorte de cursado y sexo, no se observan valores estadísticamente significativos para mujeres, mientras que entre los hombres, la probabilidad de participar en ET sí aumenta significativamente confirmando que, tanto sexo como origen social inciden en las chances de hacer la UTU.

Para finalizar, podemos afirmar que la mayor probabilidad de cursar ET está asociada a ser hombre, de origen social trabajador manual y cursar la UTU entre 1974 y 1985; en oposición a la probabilidad más baja, dada en ser mujer, perteneciente a las clases de servicios y hacer Educación Media en las cohortes anteriores a la equiparación de Ciclo Básico, o sea antes de 1986.

Relación entre Educación Técnica y primer empleo

En este apartado analizaremos el primer empleo de los activos de Montevideo en relación al tipo de ocupación desempeñada indicado por las calificaciones que requieren las tareas. Distinguiremos entre quienes hacen ET y quienes acreditan, a la vez que respecto a quienes cursan Enseñanza Media General. Describiremos cómo se distribuyen estos grupos de comparación por cohorte, sexo y tipo de ocupación calificada o no calificada.

Tipo de ocupación desempeñada

De todos los montevideanos activos encuestados, el 34,2% obtuvo un primer empleo de tipo calificado, sea manual o no manual. Esta chance se distribuye muy desparejamente en las variables de nuestro interés. El Cuadro 8 presenta la distribución

de todos los encuestados según el tipo de primer empleo y tipo de cursado realizado. Este máximo grado de desagregación de la información permite tener un panorama completo para luego focalizar el análisis sólo en la calificación y entre los que acceden a la Educación Media.

En primer lugar, se puede apreciar comparando las columnas 1, 2 y 3 que las chances de comenzar la carrera laboral en un empleo manual no calificado están ordenadas según el tipo de cursado. Así uno de cada dos tuvo ese destino entre quienes no accedieron a la Enseñanza Media (porque abandonaron Primaria o porque, acreditándola no inscribieron el siguiente nivel).

Cuadro 8. Tipo de primer empleo según grupos de comparación por modalidad Enseñanza Media cursada.

Tipo de primer empleo	Grupos de comparación según tipo de cursado de Enseñanza Media					Total
	[1] No hizo EM	[2] Media Gral	[3] Hizo ET	[4] Sólo cursó ET	[5] Acreditó ET	
No Manual Calificada	1,8%	20,7%*	3,6%*	1,2%	8,1%*	14,2%
No Manual No Calificada	21,4%	45,3%	31,4%	30,3%	33,4%	39,0%
Manual Calificada	28,6%	15,2%	30,2%	26,5%	33,3%	20,0%
Manual No Calificada	48,2% *	18,9%*	34,9%	42,0%	24,8% *	26,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. (*) P<0.05.

En segundo lugar, se puede apreciar que el efecto principal de aversión al primer empleo no calificado manual está asociado a la acreditación pero no al cursado de la ET (columnas 4 y 5). Quienes cursaron pero no acreditaron tienen una chance estadísticamente similar al grupo con menor capital humano. En cambio, quienes acreditaron reducen significativamente su probabilidad de comenzar en este tipo de empleos. Sin embargo, debe anotarse que es el cursado de la Media General el que tendría más claro impacto para reducir este comienzo laboral.

En tercer lugar, cuando la atención se concentra en el renglón de los empleos manuales calificados, se encuentra que las probabilidades que tienen quienes no hicieron Enseñanza Media, quienes sólo cursaron ET y quienes acreditaron están ordenadas en el sentido esperado, pero las diferencias *no son estadísticamente significativas*.

En cuarto lugar, el renglón de los empleos no manuales con poca o sin calificación muestra que son los cursantes de la Media General quienes mayor probabilidad tienen de comenzar en este tipo de empleos. Lo interesante es que si bien se estima

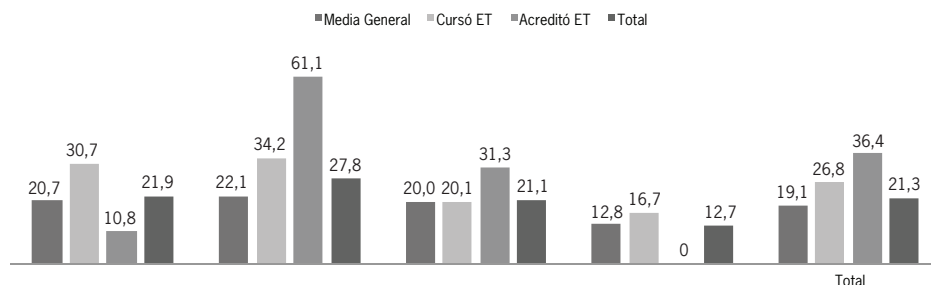
una diferencia apreciable entre este grupo y quienes acreditaron ET (45,3% a 33,4%), ésta no es estadísticamente significativa al 5%. También debe notarse que en este tipo de comienzos, tampoco hay diferencias significativas entre quienes cursaron sin acreditar ET y quienes no accedieron a ningún tipo de Enseñanza Media.

Finalmente, al considerar el primer empleo no manual y calificado, se aprecia que predominó entre quienes cursaron Media General. Le siguen en chances estadísticamente significativas, los activos que cursaron y acreditaron ET.

Tipo de empleo y cohorte

Entre quienes inscribieron alguna modalidad de Enseñanza Media, analizaremos para cada cohorte de acceso el tipo de empleo respecto a las calificaciones requeridas para desempeñarlo; con el objetivo de establecer por fin, el papel de la ET en el “matching” (o ajuste) con el primer empleo. A tales efectos, en este primer abordaje no incluiremos para el análisis aquellos empleos calificados de tipo no manual, bajo el entendido que esta decisión metodológica permite apreciar con mayor claridad los efectos de la ET, fuertemente orientada hacia empleos calificados de carácter manual.

Gráfica 3. Primer empleo manual calificado según cohorte de Educación Media y grupos de comparación



Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.

Quando controlamos por cohorte (Gráfica 3), observamos que conforme las cohortes son más próximas en el tiempo, se ha tendido a ingresar en el mercado de trabajo en empleos cada vez menos calificados, con un aumento excepcional para el período dictatorial y una baja notable en la última cohorte. En la primera cohorte (1942 a 1973) el 21,9% ingresaba al segmento manual calificado, en la siguiente (1974 a 1985) aumenta al 27,8%, vuelve a descender hasta un 21,1% para la cohorte 1986-1995 y alcanza un 12,7% para la última cohorte (1996-2010). Al diferenciar según la modalidad de Educación Media cursada, observamos que en todas las cohortes quienes hacen ET tienden a insertarse en empleos manuales calificados en mayor me-

didada que quienes cursan la Media General. No obstante, entre quienes acreditan estas diferencias presentan oscilaciones.

Quienes culminaron la UTU entre 1974 y 1985 aumentaron sensiblemente sus chances de obtener un primer empleo manual calificado, resultando la única etapa y el único grupo para el cual los entrantes al mercado de trabajo ingresan en el segmento calificado de empleo en mayor proporción que en el no calificado y con diferencia estadísticamente significativa. En la posición inversa, las chances más bajas están asociadas a la última cohorte y el único resultado estadísticamente significativo es el global, lo cual es de esperarse dado el crecimiento del sector terciario de la economía en las últimas dos décadas, en detrimento del trabajo manual (y más aún al calificado) que podría vincularse a un aumento de empleos calificados no manuales en el sector creciente de los servicios que, como dijimos, hemos dejado fuera de esta primera exploración.

Al distinguir entre hombres y mujeres, en todas las comparaciones prácticamente por cada mujer en empleos manuales calificados hay dos hombres (Cuadro 9). El 27,9% de los hombres entran al mundo del trabajo en empleos manuales calificados, bajando a 14,7% para las mujeres. Esta distribución varía apenas entre quienes hacen la Media General, pero la brecha de género cambia sustancialmente entre aquellos que hacen la UTU.

De quienes inscriben en alguna modalidad de ET y no la culminan, acceden a un primer empleo manual calificado tres de cada diez hombres y dos de cada diez mujeres. Si bien en todas las comparaciones las mujeres son menos propensas a obtener empleos manuales calificados que los hombres, la mayor diferencia ocurre entre quienes acreditan UTU, logrando ocupaciones calificadas el 44,3% de los hombres y 24,3% de las mujeres, resultando, como cabría esperarse la mayor probabilidad de acceder a puestos manuales calificados asociada con ser hombre y acreditar la ET, ya que entre quienes inscriben pero no acreditan las diferencias no son estadísticamente significativas.

Cuadro 9. Primer empleo manual calificado según sexo y grupos de comparación. Diferencia de medias.

Sexo	Grupos de comparación			Total
	Media General	Cursó ET	Acreditó ET	
Varón	25,4%	30,3%	*44,3%	*27,9
Mujer	13,5%	19,8%	24,3%	14,7

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. (*) P < 0.05.

Si tenemos en cuenta el origen social de los encuestados, observamos que obtienen primeros empleos manuales calificados el 14,2% de las clases de servicios, aumentando al 17,8% en las intermedias y alcanzando el 25,7% entre alumnos provenien-

tes de hogares de trabajadores manuales. Estas proporciones no varían sensiblemente para quienes hacen Educación Media General. Las diferencias ocurren entre quienes hicieron ET y la acreditaron. Los hijos de hogares de las clases de servicios que hicieron ET tuvieron menores chances de tener empleos manuales calificados (12,0%) que sus pares de la Media General (14,9%). En las clases intermedias las posibilidades de obtener un primer empleo manual calificado de quienes cursaron ET (29,9%) duplican a quienes hicieron la Media General (14,4%). La empleabilidad en empleos manuales calificados es de nuevo mayor entre quienes acreditaron ET (39,6%). Sin embargo, entre los activos originarios de clases trabajadoras, las chances se igualan entre los cursantes de la Media General (24,2%) y quienes hacen ET (26,8%), aumentando para aquellos que acreditan (36,4%). Interesa destacar que el único resultado estadísticamente significativo en la relación entre clase social y modalidad de Enseñanza Media cursada está en aquellos que cursan la General y vienen de origen trabajador (Cuadro 10).

Cuadro 10. Primer empleo manual calificado según clase social y grupos de comparación.

	Clase Social		
	I & II	III & IV	V/VI/VII
Media General	14,9%	14,4%	*24,2%
Cursó ET	12,0%	29,9%	26,8%
Acreditó ET	0%	39,6%	36,4%
Total	14,2%	17,8%	*25,7%

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. (*) P < 0.05.

Edad del primer empleo

Con base al *modelo institucional de carreras*, si existieran barreras a la entrada en el mercado laboral, cursar ET *debiera* retrasar el ingreso al trabajo hasta la acreditación, lo cual sería esperable que ocurra alrededor de los 17 años. A partir de los 18 años, *debiera* observarse que una mayor proporción de egresados ET comiencen a trabajar. Este efecto lo indicaría una mayor edad promedio entre quienes acreditan y una menor varianza de edades entre quienes hacen ET. En cambio, quienes cursaron Media General *debieran* experimentar una transición al mercado de trabajo menos estandarizada, que se expresaría en una mayor varianza, si bien no implica necesariamente menor edad promedio. Suponiendo los períodos definidos para la UTU, esta hipótesis generaría efectos para quienes cursaron luego de 1973. Para cohortes anteriores, podría esperarse una distribución opuesta a la sustentada.

Al analizar la edad del primer empleo, observamos que la probabilidad de acceder a un primer empleo manual calificado aumenta al retrasar el ingreso al mercado laboral para quienes acreditan ET. Entre quienes comienzan a trabajar antes de los 13 años, el 30,6% logra empleos calificados, aumentando para quienes hacen la Media

General a un 34,1% y disminuyendo a 25,5% para quienes hacen ET y más aún a 23% si acreditan. Si el primer empleo es entre los 14 y los 17 años, un 25,2% logra empleos manuales calificados, lo cual se mantiene para la Media General (23,5%) y los inscriptos a UTU (28,7%) aumentando a 32,5% si logran acreditar la ET. Esta brecha aumenta a partir de los 18 años, lo cual podría indicar que el mercado laboral reconoce mayormente la ET Media superior. El 39% de quienes comienzan a trabajar entre los 18 y 24 años consiguen empleos manuales calificados cuando acredita ET. Proporción que disminuye entre quienes sólo cursan (25,2%) y baja en mayor medida para aquellos que hacen la Media General (16,0%). Entre mayores de 25 años, no hay encuestados que hayan cursado ET sin acreditarla, por tanto la comparación carece aquí de sentido (Cuadro 11).

Cuadro 11. Primer empleo calificado según edad del primer empleo y grupos de comparación.

Grupos de comparación	Edad del primer empleo			
	Hasta 13 años	14 a 17 años	18 a 24 años	25 y más años
Media General	34,1%	23,5%	16,0%	17,8%
Cursó ET	25,5%	28,7%	25,2%	0,0%
Acreditó ET	23,0%	32,5%	39,0%	100,0%
Total	30,6%	25,2%	18,4%	19,5%

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. (*) P < 0.05.

Al controlar por cohorte y grupo de comparación, se observa que sólo en uno de los contrastes se puede rechazar la independencia estadística. Según este resultado, la edad promedio de comienzo laboral para quienes cursaron Educación Media General durante el período 1974-1985 es estadísticamente mayor a la edad promedio de quienes acreditaron ET o sólo la cursaron. Entre 1942 y 1973 quienes hicieron Media General comenzaban a trabajar en promedio a los 19,5 años, mientras quienes cursaron ET comenzaban a los 17. Para la cohorte 1974-1985, el promedio de edad disminuye en todos los casos, aunque la mayor variación se da en quienes hacen Media General, que ingresan al mercado de trabajo en promedio a los 18,6 años y aquellos que cursan ET a los 16,7. En la siguiente cohorte, 1986-1995, la mayor diferencia se da en quienes cursan ET, que entrarían al mercado de trabajo, en promedio, a los 16,2 años. Estas variaciones se diluyen para la última cohorte (1996-2010) cuando la edad promedio gira en torno a los 18 años para todos los grupos de comparación (Cuadro 12).

Cuadro 12. Promedio de edad del primer empleo según cohorte de acceso y grupos de comparación.

Grupos de comparación	Edad del primer empleo				Total
	1942 a 1973	1974 a 1985	1986 a 1995	1996 a 2010	
Media General	19,5	*18,6	18,6	18,4	*18,8
Cursó ET	17,0	16,7	16,2	17,8	*16,9
Acreditó ET	18,3	17,1	17,6	17,8	17,5

Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010. (*) $P < 0.05$.

Quando se distingue a la interna de quienes hacen ET, se observa que la acreditación retrasa el ingreso al mercado de trabajo, respecto a quienes cursaron sin lograr la titulación. Esta brecha entre promedio de edades varía para las distintas cohortes. Sin embargo, todos los intervalos de confianza se solapan, por lo cual no hay diferencias significativas sino que ambos grupos entran al trabajo en torno a los 17 años. Así, para la primera cohorte (1942-1973) quienes acreditan ET entran al mercado de trabajo en promedio a los 18,3 años, un año más tarde que quienes cursan sin titularse. Para la siguiente cohorte (1974-1985) la distancia es ínfima, aunque se mantiene que quienes cursan ingresan antes que quienes acreditan (16,7 y 17,1 respectivamente). En la siguiente etapa (1985-1995) quienes sólo cursan comienzan a trabajar alrededor de los 16,2 años, mientras quienes acreditan retrasan su ingreso hasta los 17,6 años. Para la última cohorte (1996-2010) quienes cursan la Media General muestran un promedio de edad de ingreso al mercado de trabajo a los 18,4 años igualándose quienes hacen ET en los 17,8 años. Cabe acotar que al examinar las edades de los entrantes al trabajo según el nivel de ET cursado, no hay diferencias estadísticamente significativas, por tanto decidimos omitir dichos análisis. El comportamiento de quienes asistieron a la Media General presenta en todas las cohortes menor varianza que quienes hacen UTU, lo cual representa un ingreso más estandarizado al mercado de trabajo. Podrían estar incidiendo aspectos que anteceden la modalidad de Educación Media cursada, tal como explicamos al describir el perfil de quienes hacen ET, cuestión que será tenida en cuenta en el apartado de análisis multivariado.

Análisis multivariado

En la sección anterior presentamos de manera descriptiva la distribución entre empleos calificados y no calificados para los distintos grupos de comparación, a partir de las variables que consideramos relevantes para establecer un vínculo entre el papel de la ET en el primer empleo. Aquí analizaremos de forma multivariada los efectos sobre el tipo de ocupación desempeñada a través de un modelo de regresión logística. Este tipo de análisis de matching es razonable hacerse a través de un modelo multinomial, donde la variable dependiente tiene tres o más categorías. Tal desagregación tiene la ventaja de distinguir situaciones conceptualmente distintas para las que la teoría tiene predicciones diferentes. En este caso, el empleo calificado no manual suele

corresponderse a los trabajos universitarios o de gerencia para los cuales generalmente se requiere formación terciaria o aportes sustantivos de capital. Sin embargo, el uso de estos modelos resulta en un problema numérico y otro de interpretación. El primero refiere a la gran cantidad de casos que se necesitan en cada celda de la hipertabla a conformar. El segundo, que, para entender cada efecto de una variable independiente sobre una categoría de la dependiente es necesario compararlo con el efecto que tiene sobre las restantes. Las comparaciones se multiplican si la variable independiente es a su vez pluricotómica, como es el caso de los tipos de cursado, las cohortes y la clase social.

Dado que los requisitos arriba señalados no suelen estar presentes al comienzo de la carrera laboral, la severidad de los problemas estadísticos, se resolvió simplificar la modelización excluyendo los primeros empleos de tipo “No manual calificado”, y estimar sólo los efectos sobre la obtención de un empleo calificado manual. Por lo tanto, la variable dependiente que utilizamos es dicotómica.

$$[1] P_{(y=1)} = \frac{1}{1 + e^{-g(x)}}$$

$$[2] g(x) = X\beta$$

Este modelo general permite calcular la probabilidad de haber obtenido un primer empleo manual calificado condicionado al tipo de cursado en Media (los grupos de comparación), controlando la cohorte (efecto institucional) y las desigualdades de clase y género. Presentamos cuatro estimaciones. El primer modelo sólo tiene los efectos principales de los tipos de cursado en Educación Media; será considerado la base de comparación para los tres restantes aunque en sí mismo tiene un valor fundamental a los efectos de contrastar las dos teorías que refieren a los efectos *positivos* de la ET. El segundo modelo, al añadir las cohortes de cursado, constituye la adecuación de las teorías a la historia institucional de la UTU. El tercer modelo controla las relaciones según clase social y género, a los efectos de discutir las teorías reproductivistas; si éstas fueran correctas, los efectos principales del cursado debieran desaparecer. El último modelo testea una hipótesis de efectos diferenciales de los tipos de cursado según el marco institucional vigente. El cuadro 13 reporta los resultados.

Los modelos 1 y 2 muestran evidencia parcial a favor de las teorías que refieren a la ET como factor de inclusión y movilidad social. Tanto sea que haya sólo cursado o que haya acreditado, los activos entrevistados tuvieron mayor chance de tener un empleo manual calificado que sus pares asistentes a la Educación Media General¹³.

13 Test de Wald: $\beta_1 = \beta_2$; $\chi^2 = 2.70, P = 0.104$

Este hallazgo preliminar además, hace razonable la teoría de las redes más que una interpretación clásica en términos de capital humano.

La introducción de los períodos institucionales (modelo 2) muestra que, en comparación con la cohorte que accedía a cursos sin equivalencia formal, los cambios institucionales acaecidos hasta 1997 no generaron cambios en la empleabilidad de los activos. En cambio, la cohorte más reciente (1997-2010) muestra un contexto de *disminución neta, marginal*, de la probabilidad de acceder a un empleo calificado, cualquiera haya sido *el tipo de cursado*. Es de notar, en cambio, que los efectos principales de los tipos de cursado siguen siendo ambos significativos y estadísticamente iguales¹⁴. Este comportamiento es difícil de explicar analizando sólo los efectos principales de cada set de variables, argumento que recomienda la especificación de interacciones.

Las desigualdades de sexo y clase tienen asidero razonable en la explicación del primer empleo. Así lo muestra el modelo logístico N° 3. A iguales condiciones de cursado y período histórico, las mujeres tienen sistemáticamente menor probabilidad de acceder a un primer empleo calificado manual en comparación con los varones. Nótese que este efecto sistemático opera creando una brecha de género también entre los distintos tipos de cursado en Media. El efecto de clase social es de interpretación menos simple o intuitiva. Los encuestados originarios de las clases de servicio (I y II del esquema EGP) y de las clases intermedias (III y IV) tienen las mismas probabilidades de acceder a un primer empleo calificado manual. Sólo quienes provienen de un hogar de trabajadores manuales tuvieron mayor probabilidad de acceder a un primer empleo calificado manual. La introducción de la clase social y del género tiene además la consecuencia de volver no significativo el efecto de haber cursado sin acreditar la ET. Sólo el título técnico mejora la empleabilidad; esto es, la evidencia no hace razonable la hipótesis de las redes.

14 Test de Wald: $\beta_1 = \beta_2; \chi^2 = 2.24, P = 0.135$
 $\beta_1 = \beta_2; \chi^2 = 2.24, P = 0.135$

**Cuadro 13. Modelo logístico de primer empleo calificado.
Activos de Montevideo 2010.**

Variable	Modelo log01	Modelo log02	Modelo log03	Modelo log04
Grupos de comparación (ref. Media General)				
Cursó ET	0.442**	0.426**	0.199	0.421
Cursó ET y la acreditó	0.888***	0.825***	0.643***	-0.601
Período institucional de la EM (ref. 1942-1973)				
1974-1985		0.259	0.262	0.14
1986-1996		-0.092	-0.103	-0.042
1997-2010		-0.669***	-0.754***	-0.646**
Género (ref. varón)			-0.754***	-0.742***
Clase social EGP (ref. de servicio)				
Intermedias			0.131	0.124
Trabajadoras			0.651**	0.631**
Interacción 1974-1985 con Cursados (ref. 1942-1973 y EM General)				
Cursó ET				-0.148
Cursó ET y la acreditó				2.071*
Interacción 1986-1996 con Cursados(ref. 1942-1973 y EM General)				
Cursó ET				-0.545
Cursó ET y la acreditó				0.998
Interacción 1997-2010 con Cursados(ref. 1942-1973 y EM General)				
Cursó ET				-0.227
Cursó ET y la acreditó				(empty)
Constante	-1.446***	-1.372***	-1.374***	-1.360***
Estadísticos del modelo				
N	1295	1295	1278	1263
LL	-215199	-211711	-200450	-197866
Chi	18.3	36.3	84.9	91.3
Pseudo R2 de McFadden	0.0129	0.0289	0.0608	0.0682
BIC	-5628.595	-12583.86	-25889.914	-28856.822
Referencias: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01				
Fuente: elaboración propia con base en EMOTE Montevideo 2010.				

La comparación de la bondad de ajuste entre los cuatro modelos presentados es favorable al último sea en la magnitud del Pseudo-R², sea en el cambio observado en el BIC. El modelo 4, finalmente, introduce las interacciones para despejar las dudas que podrían generar los modelos anteriores sobre la especificidad de los efectos del tipo de cursado. Tal como se puede apreciar en el cuadro 11, última columna, las interacciones vuelven no significativo al efecto principal de haber cursado y acreditado la ET. Tampoco habría efecto alguno de haber cursado sin acreditar ET. Los períodos institucionales distinguidos mantienen tanto el signo como la significación analizadas para el modelo 3. Sigue manteniéndose la brecha de género en contra de las mujeres y son los hijos de la clase trabajadora manual aquellos que tienen mayor probabilidad de acceder a un empleo manual calificado. Las interacciones muestran que sólo la titulación durante el período 1974-1985 tiene un efecto significativo y positivo sobre un primer empleo manual calificado. En los restantes períodos no se registran efectos estadísticos.

Discusión de hallazgos y conclusiones

El debate entre una perspectiva teórico política favorable a la ET y una perspectiva contraria, que hemos denominado “inclusión” y “desviación” respectivamente, muestra resultados mixtos en este primer abordaje. En tanto, la periodización hecha sobre la base de un análisis institucional de las transformaciones de la UTU resultan poco esclarecedoras de las distribuciones observadas.

Claramente, la sección descriptiva de la matrícula muestra que la ET ha sido y sigue siendo una elección académica socialmente perfilada donde predominan los varones y los hijos de las clases trabajadoras manuales. En cambio, al distinguir entre cursado y acreditación de ET, se halla una mayor proporción de mujeres y de hijos de las clases intermedias. Los cambios institucionales han generado pocas variaciones en estos indicadores y en todo caso, es difícil establecer una relación causal entre por ejemplo, el incremento de la participación femenina y la diversificación curricular ocurrida durante los años noventa. La participación de las clases de servicio parecería haberse incrementado luego de la equiparación de la Media Superior Técnica (la introducción de los nuevos programas de bachilleratos tecnológicos y de las nuevas escuelas). Hasta aquí, la perspectiva reproductivista parecería tener plausibilidad, al menos para explicar las inscripciones diferenciales según clase social.

Al movernos al análisis de los determinantes de obtener un primer empleo calificado manual, los hallazgos resultan favorables a quienes acreditan la ET pero no a quienes sólo la han cursado, aún contando con la persistente desigualdad de género y clase social. Este hallazgo aporta plausibilidad a la teoría del capital humano y contrasta la teoría de las redes sociales. Sin embargo, estos efectos son diferentes según el período histórico considerado. El último modelo logístico ajustado mostró también que los efectos de la titulación técnica sólo se aprecian en el período 1974-1985. Ni antes ni tampoco después, se identifican efectos del título. Hallazgo que a su vez,

torna relativas ambas interpretaciones en juego: la teoría del capital humano y la teoría institucionalista.

Estas conclusiones deben ser tomadas en forma provisional por al menos tres razones. La primera relativa al diseño muestral de la EMOTE; en tanto que las dos últimas tienen que ver con la especificación del modelo. Por un lado, sería conveniente examinar los efectos de las variables independientes utilizando un modelo multinomial para mostrar también las diferencias entre los dos tipos de empleos no calificados comparados (manuales y no manuales). Por otro lado, es posible pensar que la comparación entre las modalidades técnica y general debieran ser hechas distinguiendo los niveles de Ciclo Básico y de Media Superior.

Bibliografía

- AINSWORTH, J. W. & ROSCIGNO, V. J.** (September de 2005). Stratification, School-Work Linkages and Vocational Education. *Social Focus*, 84(1), 259-286.
- ALLMENDINGER, J.** (1989). Educational systems and labour market outcomes. *European Sociological Review*, 5, 231-250.
- ANEP-DIEE.** (2005). *Panorama de la Educación en el Uruguay. Una década de transformaciones (1992-2004)*. Montevideo: Administración Nacional de Educación Pública.
- ANEP-UTU.** (2009). *Formación Profesional Básica - Plan 2007*. Montevideo: UTU.
- BERNSTEIN, B.** (1989). *Clases, códigos y control* (Vol. I). Madrid: AKAL.
- BLOSSFELD, H. P.** (2009). *Education Across the Life Course*. Germany: German Council for Social and Economic Data.
- BOADO, M. & FERNÁNDEZ, T.** (2010). *Trayectorias académicas y experiencias laborales de los jóvenes uruguayos evaluados por PISA 2003*. Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
- BOADO, M.; FERNÁNDEZ, T. & PARDO, I.** (2006). *Aplicación de la pauta de estratificación Erikson Goldthorpe Portocarero al Uruguay mediante la Cnuo95 y Cota70. Decisiones Metodológicas*. Montevideo: Serie Documentos de Trabajo N° 179. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República.
- BOADO, M.; FERNÁNDEZ, T. & REY, R.** (2013). *Empleo, educación y capacitación laboral en Maldonado y Salto*. Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República / Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
- BOUDON, R.** (1983). *Education, Opportunity and Social Inequality*. New York: John Wiley.
- BOURDIEU, P.** (2000). *Poder, Derecho y Clases Sociales*. Bilbao: Editorial Desclée de BrouwerSA.
- BRALICH, J.** (2008). Antecedentes y marco institucional. En B. Nahúm, *Historia de la Educación Secundaria 1935-2008*. Montevideo: CES.
- BREEN, R. & GOLDTHORPE, J.** (1997). Explaining educational differences. Towards a formal rational action theory. *Rationality & Society*, 9(3), 275-305.
- BUCHELI, M.** (2006). *Mercado de trabajo juvenil: situación y políticas*. Montevideo: Bucheli, M. (2006). Mercado de trabajo juvenil: situación y políticas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

- CARDOZO, S.** (2012). Trayectorias alternativas en la transición Educación-Trabajo. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.*, 10(1), 108-127.
- CIDE** (1965). *Informe sobre el Estado de la Educación en el Uruguay. Dos tomos.* Montevideo: Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.
- CNPS** (2008). *Plan de Equidad.* Montevideo: Presidencia de la República.
- De Armas, G. & Retamoso, A. (2010). *La universalización de la educación media en Uruguay. Tendencias, asignaturas pendientes y desafíos.* Montevideo: UNICEF - Oficina de Uruguay.
- EYRAUD, F.; MARSDEN, D. & SILVESTRE, J. J.** (1990). Occupational and internal labour markets in Britain and France. *International Labour Review*, 129(4), 501-518.
- FERNÁNDEZ, T.** (2009). La desafiliación en la educación media de Uruguay. Una aproximación con base en el panel de estudiantes evaluados por PISA 2003. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 7(4), 165-179.
- FERNÁNDEZ, T.** (2010). El peso del origen institucional : una hipótesis sobre las políticas de inclusión en la Educación Media de Uruguay (2005-2009). *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 19.
- FERNÁNDEZ, T. & ALONSO, C.** (2012). Dos modelos de inclusión educativa: PAC y FPB en Uruguay (2007-2011). *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 21(1).
- FERNÁNDEZ, T. & BENTANCUR, N.** (2008). La Enseñanza Media en Uruguay: cuatro problemas estructurales y tres líneas de política para su rediseño institucional. *Revista Electrónica sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la Educación*, 6(4), 98-126.
- FERNÁNDEZ, T.; BOADO, M. & BONAPELCH, S.** (2008). *Reporte Técnico del Estudio Longitudinal de los estudiantes evaluados por PISA 2003 en Uruguay.* Montevideo: Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
- FERNÁNDEZ, T.; BONAPELCH, S., & ANFETTI, V.** (2013). Regímenes de transición al primer empleo: Chile, México, Estados Unidos y Uruguay comparados. *Inédito.*
- GANGL, M.** (2001). European patterns of labour market entry. A dichotomy of occupationalized vs. non-occupationalized systems? *European Societies*, 3(4), 471-794.
- GRANOVETTER, M.** (1974). *Getting a Job.* Cambridge: Harvard University Press.
- HEUGUEROT, M.** (2002). *El origen de la Universidad del Trabajo del Uruguay (1879-1916).* Montevideo: Banda Oriental.
- INFAMILIA** (2011b). *Perfil de los estudiantes y resultados del FPB en el primer semestre de 2011.* Montevideo: MIDES-Infamilia / ANEP-UTU.
- LAMB, S.** (2011). Pathways to School Completion: An International Comparison. En S. Lamb, M. Eifred, R. Teese, N. Sandberg, & J. Polesel, *School Dropout and Completion. International Comparative Studies in Theory and Policy* (págs. 21-75). London: Springer.
- MARSDEN, D.** (2009). *The decline of occupational labour markets and the spread of prolonged entry tournaments: labour market segmentation in Britain.* Geneve: ILO.
- MEC** (2012). *Anuario Estadístico de Educación.* Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura.
- Meer, J.** (2007). Evidence on the returns to secondary vocational education. *Economics of Education Review*, 26, 559-573.
- MINEDUC** (1998). *Objetivos mínimos y contenidos transversales de la Educación Básica y Media.* Decreto Supremo N° 40. Santiago de Chile: Ministerio de Educación.

- MÜLLER, W.** (2005). Education and Youth integration into European Labour Market. *International Journal of Comparative Sociology*, 46(5-6), 461-485.
- NAHÚM, B.** (2012). *Medio siglo de historia uruguaya 1960-2010*. Montevideo: Banda Oriental.
- NEUGARTE, B.** (1973). Pattern of aging: past, present and future. *The Social Service Review*, 47(4), 571-280.
- ROSENBAUM, J., KARIYA, T., SETTERSTEN, R., & MAIER, T.** (1990). Market and Network Theories of the Transition from High School to Work: Their Application. *Annual Review of Sociology*, 16, 263-299.
- SAAR, E., UNT, M., & KOGAN, I.** (2008). Transition from Educational System to Labour Market in the European Union. A Comparison between New and Old Members. *International Journal of Comparative Sociology*, 49(1), 31-59.
- SPENCE, M.** (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.
- VAN DE WRFHORST, H.** (2004). Systems of Educational Specialization and Labour Market Outcomes in Norway, Australia and the Netherlands. *International Journal of Comparative Sociology*, 45(5), 315-335.
- VENN, D.** (2009). *Legislation, collective bargaining and enforcement: updating the OECD employment protection indices*. Paris: OECD.
- WOLBERS, M.** (2007). Patterns of Labour Market Entry. A Comparative Perspective on School-to-Work Transitions in 11 European Countries. *Acta Sociologica*, 50(3), 189-210.



La reducción de la brecha digital en sectores pobres de la población

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Ceibal

Ana Laura Rivoir¹ - Ruy Blanco² - Santiago Escuder³

Desde mediados de la pasada década, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros escolares de Uruguay se ha transformado en una prioridad por parte del gobierno mediante el impulso del “Plan Ceibal”, culminando éste su primera etapa, ha llegado prácticamente al total de las escuelas en todo el territorio, y se ha comenzado su implementación progresiva en educación media. La brecha y oportunidades en el acceso pasa a ser un problema menor, recayendo la mayor dificultad en la conectividad y el “uso con sentido” que se le pueda dar a la laptop de Ceibal (XO) como recurso del hogar. Es decir en nuevos procesos de aprendizaje donde la información sea transformada en conocimiento para satisfacer necesidades de la vida cotidiana. En este sentido la alfabetización digital y el uso de la TIC no deberían tener un carácter meramente instrumental. En el artículo se analizan los resultados de una encuesta realizada en Barrios considerados de Atención Prioritaria (BAP). Entre otros resultados se muestran hallazgos en cuanto a la tenencia, cuidados, frecuencia y tipo de uso de la XO y cómo la tenencia de otras tecnologías en el hogar repercute en el uso de la laptop Ceibal por parte de los niños y adultos en estos contextos. Esto permite concluir acerca de los factores que inciden en el proceso de apropiación y aprovechamiento de las TIC en un contexto desfavorable con políticas de inclusión digital.

- 1 Doctora y Máster en Sociedad de la Información por la Universidad Oberta de Catalunya. Magíster en Desarrollo Regional y Local por la Universidad Católica del Uruguay. Licenciada en Sociología de la Universidad de la República. Investigadora y docente en régimen de Dedicación Total y Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. anarivoir@gmail.com
- 2 Licenciado en Sociología y Maestrando en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Profesor Ayudante de grado del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. cx1abl@yahoo.com
- 3 Licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay. Máster en Sociedad de la Información por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Investigador y Docente de grado del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Compone el grupo de investigadores del Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación (ObservaTIC). santiagoescuder@gmail.com

Introducción

Si bien es clave conocer el contexto socioeconómico donde es utilizada la tecnología y el tipo de uso que de ella se hace, se ha carecido hasta el momento de datos al respecto. Por esta razón, el análisis de la Encuesta “Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación” realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2010 y de la Encuesta “Relevamiento a usuarios beneficiarios del Plan Ceibal en 12 barrios de Montevideo” realizada en Barrios considerados de Atención Prioritaria (BAP) en 2011, son una oportunidad para avanzar en este conocimiento.

En el artículo se analizan resultados de los estudios mencionados relativos a la tenencia, cuidados, frecuencia y tipo de uso de la Ceibalita, y se muestra cómo variables socioeducativas, económicas y de tenencia de otras tecnologías en el hogar repercuten en el uso de la Ceibalita por parte de los niños y adultos de estos contextos. Esto permite concluir acerca de los factores que inciden en el proceso de apropiación y aprovechamiento de las TIC en un contexto desfavorable con políticas de inclusión digital.

La Sociedad de la Información y la multidimensionalidad de la brecha digital

Cada vez más las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un rol central en la economía, política y en la sociedad en general, y están presentes en la vida cotidiana de las personas. Esta creciente importancia se debe a que facilitan el flujo de grandes volúmenes de información y facilitan la generación de conocimiento. (Acevedo, 2004).

La brecha digital es la desigualdad por excelencia de la Sociedad de la Información y el conocimiento (SIC). Ésta fue caracterizada durante un período en forma dicotómica entre los que tenían y no acceso a las TIC (Sassi, 2005). Esto derivó en que las políticas se centraran en crear infraestructura y acceso, bajo la creencia de que se disminuiría la desigualdad existente y generaría beneficio directo para el desarrollo social (Mansell, 2002). Éstos son medidos a través de indicadores de índole cuantitativa como “acceso a un computador por hogar”, “conexión a Internet”, entre otros y reducen a estos aspectos las desigualdades y el desarrollo en la SIC. Sin embargo, el avance de las políticas orientadas por este enfoque tecnologicista, no solucionan la reducción de desigualdades y el desarrollo humano. Según lo planteado por Amartya Sen (2000), el desarrollo humano consiste en expandir las capacidades, derechos y libertades humanas, e implica la acción deliberada de los individuos para su consecución.

Zheng y Walsham (2008), analizan la privación predominante para la exclusión en la sociedad de la información y el conocimiento y concluyen que puede manifestarse de formas y en condiciones diversas, o sea como privación de diferentes capacidades. Por lo tanto, desde una perspectiva de desarrollo humano no está basada únicamente en la distribución de las TIC entre las personas. No es la tecnología la que hace la diferencia, sino la utilización del flujo de información y canales de comunicación que

permiten aumentar la libertad de las personas para lograr la vida que desean –incluida su participación en actividades económicas, sociales y políticas– y su contribución a los procesos sociales y colectivos. Esto da cuenta de que, como afirman otros autores, la brecha digital se encuentra en interacción con otras desigualdades y por lo tanto las acciones que busquen atacarla deben articularse con acciones que ataquen otras desigualdades. Está en interacción con otras desigualdades como las económicas y sociales. (Norris, 2001; Mística, 2003; Hargittai, 2004).

El no acceso no explica la desigualdad, se comienza a hablar de brechas de segundo orden. Se empieza a prestar atención al uso que se hace de las TIC. Es necesario conocer cuáles son los aspectos educativos y culturales que promueven el “uso relevante” y significativo de las nuevas tecnologías por parte de los individuos, al igual que explorar cuáles son los principales obstáculos que impiden usos complejos, o el propio uso efectivo (Warschauer, 2003; Selwyn, 2004).

Si bien el acceso y la conectividad son elementos básicos a tener en cuenta para la definición de la brecha digital o el avance en la democratización de las TIC, es necesario que el análisis se complemente con los usos que se hacen de las mismas. En tal sentido, como afirma Castells et al. (2007) es tan importante analizar cuántos usan y qué usan, como para qué se usan las TIC.

A su vez se ha destacado por otros autores que si se desea que los usos tengan fines de desarrollo humano esto tiene que ser buscado especialmente mediante acciones y políticas. (Mansell, 2002; Gascó et al. 2007).

En América Latina la irrupción de estas tecnologías se inscribe en un viejo proceso de “esquizofrenia” entre la innovación, el desarrollo de la SIC, y las posibilidades de vivir una real “apropiación” social y cultural de aquello que nos moderniza (Barbero, 1987).

En esta área no se alcanza a implementar plenamente una tecnología, cuando se está obligado a asumir otra. Esto significa que las tecnologías, al no poder ser referidas a su contexto de producción, son consumidas desde un “vacío” y una mera suerte instrumental (Acevedo 2004). El mejor uso de la información no pasaría necesariamente sólo por el mero acceso, sino por plantear la plena integración a los procesos de desarrollo humano.

Esto se consolida en forma de un nuevo enfoque que inspira a las políticas y estrategias, que es denominado como enfoque “complejo” (Rivoir, 2009). Considera a las TIC como habilitadoras y no portadoras del desarrollo socioeconómico.

Las políticas para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el conocimiento contribuyen al desarrollo humano cuando consideran sus necesidades. “Para este segundo enfoque, lo fundamental no es “información” sino “sociedad” (Burch, 2005: 6).

En tal sentido, la reducción de la brecha digital estará definida por el hecho de que los beneficios de las TIC alcancen a la comunidad completa y más allá de la cantidad de computadores conectados (Camacho, 2002).

En suma, analizar estas desigualdades en las estadísticas nacionales para comprender la contribución de las acciones y políticas, pero también en los sectores más desfavorecidos en particular, puede brindarnos información a los efectos de conocer mejor los factores que están dificultando una reducción de la brecha digital en su acepción multidimensional. Esto es lo que permitirá conocer a su vez el alcance de los cambios en las desigualdades específicas que pueden contribuir al desarrollo humano de estos sectores de la población.

Expansión de las TIC y las políticas en Uruguay

El uso de las TIC en Uruguay se ha extendido considerablemente en la primera década del siglo XXI. En parte, se relaciona al crecimiento del mercado de las TIC, pero no únicamente. Se evidencia en la mejora de sus principales indicadores fundamentalmente de penetración y acceso, sobre todo a partir de la mitad de esta década.

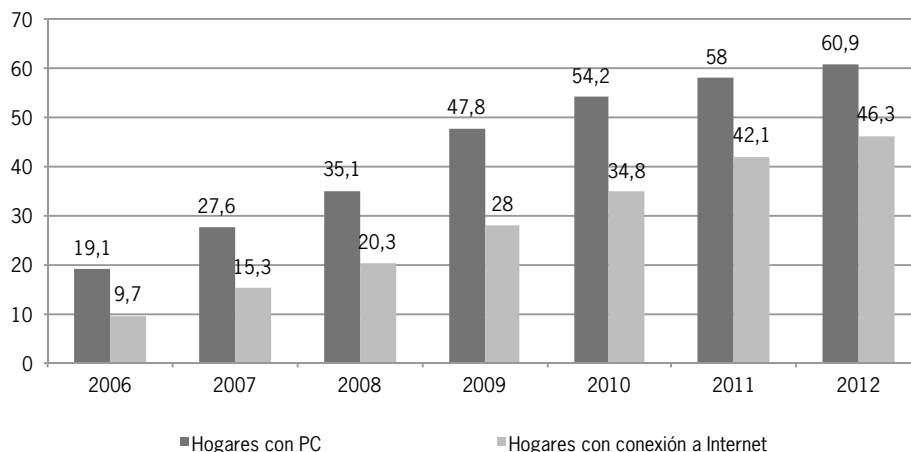
Este crecimiento coincide con el inicio de políticas para la SIC, en particular a partir del 2006 cuando se empezaron a implementar políticas para la reducción de la brecha digital y se fortalecieron las existentes.

Se formuló una agenda digital, que a la fecha cuenta con su tercera versión, con la Agenda Digital Uruguay 2011-2015, impulsada y coordinada por la Agencia de Gobierno Electrónico para la Sociedad de la Información (AGESIC). Asimismo, se fortaleció la política de telecentros, tanto a nivel del Ministerio de Educación y Cultura con los Centros MEC, como de los Centros de Acceso a la Sociedad de la Información (CASI) de ANTEL, entre otras iniciativas. El Plan Ceibal es una de las más significativas, por su extensión y por su originalidad.

El Plan se inició en el 2007 con finalidades de inclusión social, fundamentalmente a partir de la reducción de la brecha digital. A la fecha, ha entregado laptops (aproximadamente 600.000), realizado cursos para docentes y creado contenidos disponibles en sus páginas web, entre otras múltiples actividades.

Esta evolución se muestra en el Gráfico 1 que indica la penetración de las computadoras e Internet en los hogares uruguayos.

Gráfico N° 1: Nivel de acceso a PC y conectividad a Internet de hogares para todo el país (en %; 2006-2012)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Hogares.

De acuerdo a lo que muestra el Gráfico 1, en el año 2006 la cantidad de hogares con acceso a algún tipo de computador personal (PC) era de 19,1% para todo el Uruguay, según la Encuesta Nacional de Hogares y tan solo el 9,7% de los hogares contaban con conexión a Internet. Ya en el año 2012, un 60,9% de los hogares contaba con computadora y un 46,3% con conexión a Internet.

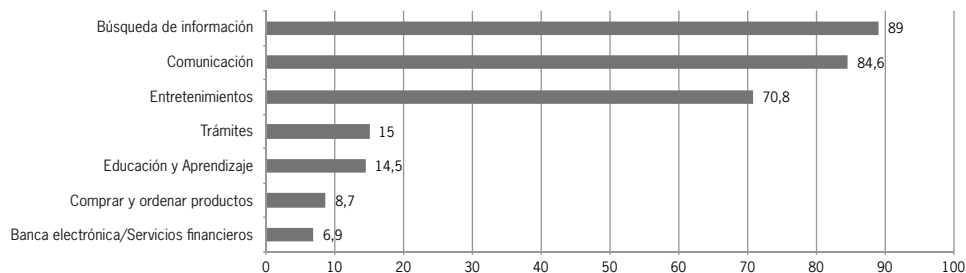
A su vez, de los hogares con acceso a computadora, el 60,1% dispone exclusivamente de un PC particular, el 23,3% de un PC además de laptop Ceibalita, y el 16,1% cuenta exclusivamente con la laptop Ceibalita⁴.

Según la Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) y AGESIC, el 57,8% de los hogares del primer quintil de ingreso accedían a una computadora, pero 29,7% de esos hogares sólo lo hacían a través de la Ceibalita.

Si se analiza el tipo de uso, se puede afirmar que la población de Uruguay realiza usos “precarios” o no complejos de las TIC, como se demuestra el Gráfico 2.

4 Según elaboración propia en base a Encuesta de Hogares, Instituto de Estadística, año 2012.

Gráfico N° 2: Principales usos de Internet medidos en personas para todo el país (en %, 2012)

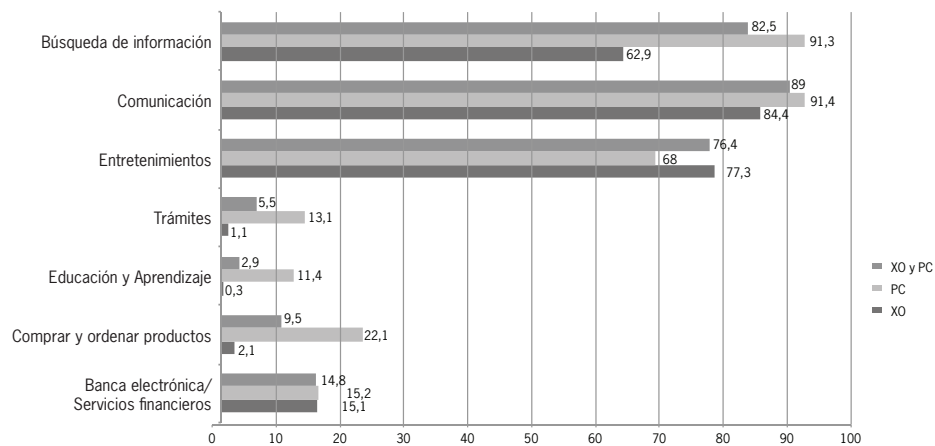


Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Hogares.

Los tres principales usos dados a las computadoras son para comunicarse con otras personas, buscar información; y entretenimiento.

Por último, las variaciones entre usos resultan ser significativas para cierto tipo de usos si éstos se controlan de acuerdo al tipo de computadora utilizada. Según el Gráfico N° 3, los integrantes de los hogares que acceden exclusivamente a la Ceibalita como su único recurso tecnológico (hogares "Ceibal"), muestran menor predisposición a utilizar las TIC sobre aquellos que acceden también a una PC o disponen de ambos recursos (Ceibalita y PC común).

Gráfico N° 3: Principales usos medidos de personas según tipo de computador al cual accede. Para todo el país, (en %; 2012)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Hogares

Para el caso de usos como búsqueda de información esto resulta claro. Un 91,3% de las personas que acceden sólo a PC común desde su hogar utilizan su computadora para buscar información, mientras que para los hogares Ceibal este porcentaje disminuye al 62,9%. No obstante, en el caso de usos para entretenimiento, los hogares Ceibal superan a aquellos que acceden sólo a PC común (77,3% y 76,4%, respectivamente). En cuanto a usos más complejos, los hogares Ceibal prácticamente no registran usos en cuanto a realizar trámites, acceso a contenidos de Educación y Aprendizaje y comprar y vender productos.

En suma, en Uruguay se han expandido las TIC en forma acelerada y reciente. Esto no se puede atribuir únicamente al desarrollo del mercado pues el salto de esta expansión coincide con la implementación de estrategias y programas para la reducción de la brecha digital y la expansión de las TIC a los distintos sectores de la población.

El Plan Ceibal es uno de estos programas y estuvo especialmente orientado a resolver problemas de inclusión social. En tal sentido, analizaremos cómo ha contribuido en los sectores a los que iba dirigido.

Objetivos y población de estudio

El “Relevamiento a usuarios beneficiarios del Plan Ceibal en 12 barrios de Montevideo”, a pedido del Centro Ceibal, llevado a cabo en 2011 en el Departamento de Sociología tuvo como objetivo central relevar y explorar los usos que daban a sus laptop Ceibalitas, tanto los niños y jóvenes beneficiarios del Plan Ceibal como los adultos encargados de los mismos⁵ en 12 Barrios de Atención Prioritaria (BAP’s) de la ciudad de Montevideo.

La población que los habita forma parte del sector que el Plan Ceibal buscaba beneficiar para su inclusión social. A tales efectos, se analizará cuál es la brecha de acceso y cuáles los usos que dan a las mismas.

En este sentido resultaba de especial interés conocer la frecuencia y el tipo de usos dados a las laptop, medir el nivel de uso de las Ceibalitas en relación a las otras computadoras que eventualmente existieran en el hogar y eventualmente identificar los motivos de “no uso” de la Ceibalita por otros integrantes del hogar.

Por otra parte, se buscó determinar el alcance de la conectividad, es decir cuando debían recorrer los estudiantes para obtener conexión a Internet a través de la red inalámbrica de Ceibal.

A partir del seguimiento realizado por el propio Plan Ceibal como por otros estudios, se sabía que la conservación de las máquinas era un tema relevante. En tal sentido, se relevó el estado de conservación del parque tecnológico Ceibalita (cantidad

5 Como resultaba imposible a priori determinar si la madre, el padre o algún otro integrante de cada hogar se encargaba de los niños, se utilizó la categoría “encargado de los niños” para identificar en cada caso a la persona que desempeñaba ese rol en el hogar.

de máquinas en funcionamiento o rotas) y el conocimiento que tienen niños y familiares de los servicios de reparación y reclamo de conectividad para las Ceibalitas.

Se realizó un censo en doce barrios elegidos por el Centro Ceibal cuyas características eran infraestructura edilicia precaria, bajo nivel socioeconómico y educativo, y ubicados mayormente en la periferia de Montevideo.

Se relevaron todos los hogares de estos barrios en los que hubiera al menos un niño/joven beneficiario del Plan Ceibal.

Se aplicaron dos formularios en modalidad administrada, diseñados específicamente para estas instancias. El primero era el formulario "Hogar" que fue aplicado al encargado de los niños en cada hogar en el que existiera (como ya se mencionó) al menos un beneficiario del Plan Ceibal y que constaba de seis bloques temáticos con un total de treinta preguntas. El segundo era un formulario individual "Niño", aplicado a cada niño/joven que tuviera una Ceibalita y que constaba de cinco bloques temáticos repartidos en veintidós preguntas.

Se censaron 555 hogares, lo que implicó igual número de encargados de niños y jóvenes. Asimismo se censaron 861 niños y jóvenes que estuvieran cursando entre tercer año de escuela y tercer año de liceo.⁶

Una vez creada la base de datos con la información relevada se procedió a un análisis crítico mediante rutinas establecidas de verosimilitud y análisis de las distribuciones de cada una de las variables. Luego se realizó la recodificación necesaria de los datos básicos para poder llevar adelante, en los casos que fue posible, los procesamientos relativos a la comparación con el resto de la población usuaria del Plan Ceibal, tanto a nivel departamental como nacional, obtenida de la encuesta "Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación", realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2010.

Análisis de los datos

A continuación se presentan los principales hallazgos producto del relevamiento realizado y que busca determinar aspectos que explican los distintos usos de las Ceibalitas en estos barrios de nivel socioeconómico bajo de la ciudad de Montevideo y en los hogares de los mismos donde hay beneficiarios del Plan Ceibal.

Acceso y conectividad

De acuerdo a los datos obtenidos, en un 67,5% de los hogares censados la Ceibalita era su único recurso TIC, mientras que un 32,5% accedía a una PC común, además de alguna Ceibalita. El total de Ceibalitas censadas ascendía a 982.

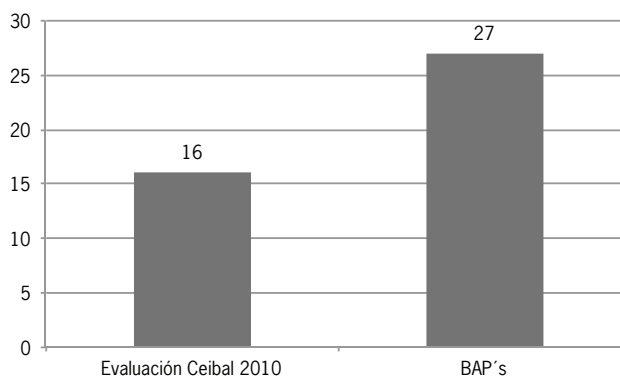
⁶ Se censaron niños de tercer año de escuela (al menos 8 años de edad) en adelante debido a las dificultades inherentes a generar un cuestionario apto para relevamiento en niños de muy corta edad y que a su vez fuera comparable en sus resultados con los de los demás niños y jóvenes.

Del total de hogares el 52,3% contaba con una Ceibalita, el 27,4% con dos, el 18,6% entre tres o cuatro y 1,6% cinco o más. Se trata de una diferencia que se conforma a partir de la cantidad de niños beneficiarios del Ceibal existentes en el hogar. Esto constituye una peculiaridad pues casi la mitad cuenta con más de una computadora en su hogar siendo que se trata de hogares de nivel socioeconómico muy bajo, para los cuales sería imposible acceder vía el mercado.

El uso de las Ceibalitas y de la mayoría de las TIC se vincula a las características tecnológicas del dispositivo en cuestión (tanto software como hardware). No obstante, más allá de esas diferencias, el contar con acceso a Internet es una muy importante y distinguible en términos de los beneficios y oportunidades que brinda. La búsqueda de información, ni el acceso a las redes sociales o el simple envío de un correo electrónico entre otras tantas actividades son posibles sin una adecuada conectividad a las redes de comunicación que las hacen posibles.

En tal sentido, relevar el nivel de conectividad a la red Ceibal que existe en los barrios estudiados y contrastarlo con datos nacionales para poder ver la capacidad de los allí residentes de acceder a Internet desde sus Ceibalitas, adquirió relevancia fundamental en el estudio.

Gráfico N° 4: Nivel de conectividad a Internet con la XO en hogares (en %; 2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011 y Segundo Informe de Evaluación y Monitoreo del Plan Ceibal, año 2010.

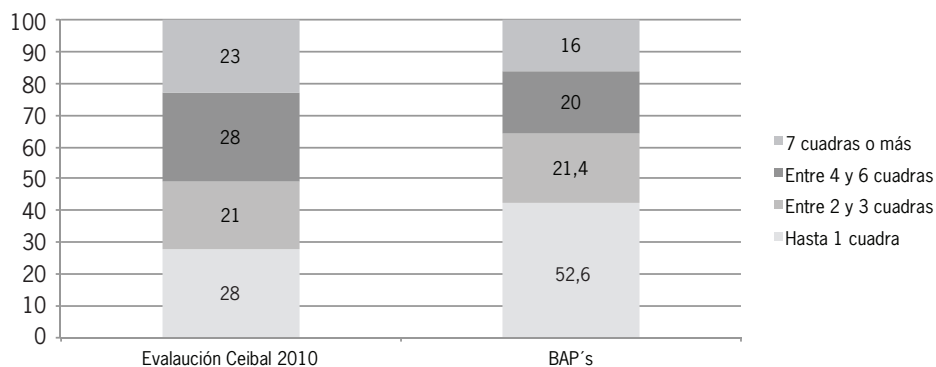
Como se observa en el Gráfico N° 4, el 27% de los hogares de los BAP's tiene acceso a Internet con sus Ceibalitas a través de la señal del Plan Ceibal. A nivel nacional, este mismo acceso alcanza al 16% de los hogares en el segundo informe de evaluación y monitoreo del Plan Ceibal.

Esto es especialmente destacable por las características de la población de los barrios y da cuenta de la reducción de la brecha de conectividad en los sectores más desfavorecidos. Probablemente este acceso mayor, se explique por la cercanía a la escuela o a otros centros públicos con señal instalada por el propio Plan Ceibal. Más allá de esta diferencia, la señal dista mucho de alcanzar a un porcentaje mayoritario de los hogares.

En orden, si bien es cierto que las Ceibalitas fueron introducidas a nivel del sistema educativo y sus beneficiarios directos son los niños y niñas, también se propuso brindar posibilidades de acceso a los adultos de dichos hogares. De esta manera, la falta de acceso a la red en buena parte de los hogares estaría implicando una limitación en la utilización de todo el potencial de las Ceibalitas en el hogar, aunque las mismas puedan usarse allí para tareas que no impliquen la conectividad.

También existe la posibilidad de que los usuarios, además de poder conectarse en su local de estudios y eventualmente en sus hogares, se trasladen a otro lugar donde llega la señal. Para profundizar en el análisis de las oportunidades para el acceso, se indagó acerca de la distancia necesaria a recorrer para obtener señal inalámbrica y por ende acceso a Internet. Esto se demuestra en el Gráfico N° 5.

Gráfico N° 5: Cercanía a la conectividad a Internet con la XO en hogares (en %; 2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

Como se observa en el Gráfico N° 5, el 42,6% de los usuarios de las Ceibalitas de los BAP's tienen acceso a la red a una cuadra o menos de su hogar (incluye al 27% que accede en su hogar), el 21,4% tiene acceso entre dos y tres cuerdas y el resto a más de tres cuerdas de sus hogares.

Esto explica la existencia de niños o grupos de ellos en la vía pública, plazas o muros del entorno de las escuelas o en las calles de los barrios y localidades reuni-

dos en torno a sus Ceibalitas, como fue descrito en investigaciones anteriores (Rivoir, 2010).

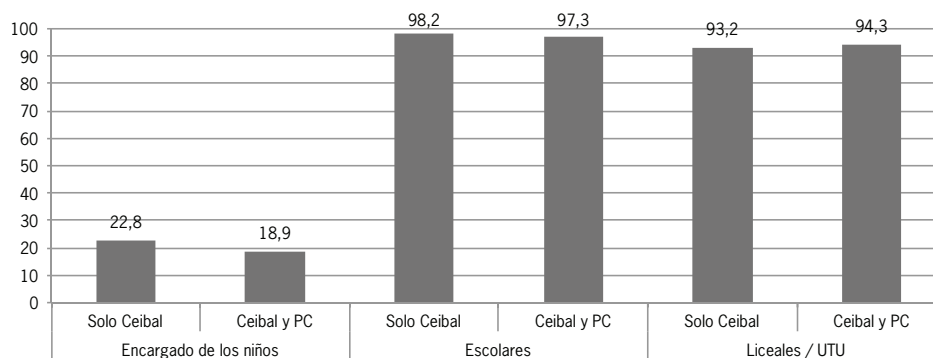
En suma, es claro que la conectividad en los BAP's está más extendida, alcanza a más hogares y se encuentra a menor distancia de los usuarios que en el resto del país. Esto significa una ventaja a la hora del uso de estas tecnologías para una población que es la que menos probablemente acceda por otra vía.

Uso de las Ceibalitas

En este estudio resultaba muy relevante determinar el uso o no uso que se da a las Ceibalitas por parte los niños y jóvenes usuarios, así como por los adultos responsables de ellos. Asimismo, conocer la existencia o no de otras computadoras en el hogar y su eventual relación con el mayor o menor uso que su tenencia podría implicar en el uso de las Ceibalitas.

El Gráfico N° 6 muestra el porcentaje de personas que usan la Ceibalita según la categoría de usuario.

Gráfico N° 6: Acceso de las personas a las XO en los BAP's (en %; 2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

En el Gráfico 6 se observa que tanto en los hogares en los que existen otras computadoras como en los que sólo poseen la Ceibalita, ésta es usada por cerca de uno de cada cinco de los encargados de los niños y jóvenes. También se observa que el uso es levemente superior en aquellos casos en que la Ceibalita es la única computadora en el hogar.

De todas maneras, más allá de la presencia o no de otras computadoras, el uso de las Ceibalitas por parte de los adultos de los hogares es bastante reducido (casi 21%) y en la mayoría de los casos nunca las han utilizado.

En el caso de los escolares así como en aquellos jóvenes que concurren al liceo o UTU, vemos que el uso de las Ceibalitas está generalizado, alcanzando a la casi totalidad de los usuarios de las mismas. En los escolares el uso de las Ceibalitas abarca a casi todos los niños, no existiendo diferencias significativas entre aquellos que tienen o no otras computadoras en sus hogares.

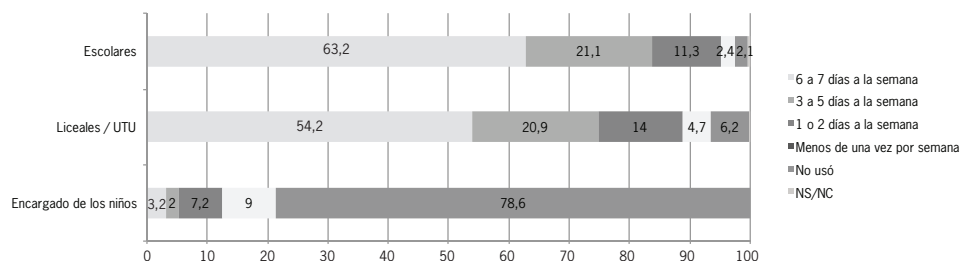
En el caso de los alumnos de UTU y liceo, si bien el uso de las Ceibalitas es algo menor que el mostrado por los escolares, alcanza niveles muy significativos llegando a más del noventa por ciento de ellos sin tampoco encontrarse aquí diferencias significativas por la tenencia o no de otras computadoras en el hogar.

Frecuencia de uso de las Ceibalitas en los BAP's

Tan relevante como establecer cuántos y quiénes usan la Ceibalita y cuántos y quiénes no lo hacen, es conocer la frecuencia de uso de los distintos integrantes del hogar.

En el Gráfico 7 se presenta la frecuencia de uso según grupo de personas del hogar.

Gráfico N° 7: Frecuencia de uso de las XO en los BAP's (en %; 2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

Los adultos encargados de niños y jóvenes son quienes utilizan menos las Ceibalitas en el hogar. Como se vio en el apartado anterior, 78,6% de ellos no usan las Ceibalitas en tanto que quienes lo hacen a lo sumo las utilizan dos días por semana, siendo muy pocos los que las usan más frecuentemente.

El caso de los escolares es bien diferente. El 62,7% la utiliza todos o casi todos los días en tanto que el 21,1% lo hace entre tres y cinco días a la semana. Esta tendencia aunque más atenuada se repite en los asistentes a liceos y UTU siendo el 53,9% quienes usan las Ceibalitas casi todos los días, el 20,9% quienes las usan entre tres y cinco días a la semana, mientras que el resto en general las usa al menos una vez a la semana.

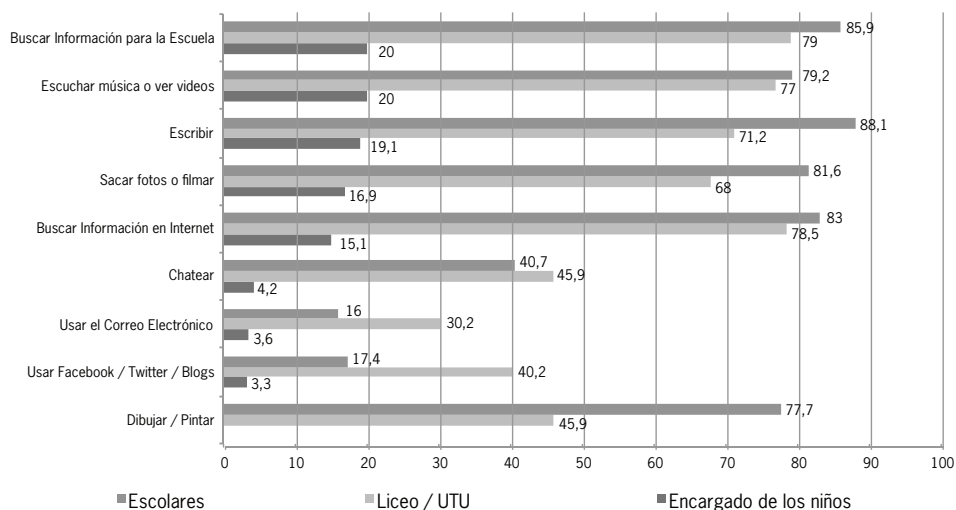
En suma, se puede afirmar a partir de los datos analizados que en estos barrios los beneficiarios directos y sus hermanos adolescentes son los que más usan las Ceibalitas, mientras que el uso por parte de adultos es bajo. Los primeros son también los usuarios más intensos siendo que un poco más de la mitad usa la Ceibalita a diario.

Tipo de uso de las Ceibalitas

Como fue planteado al inicio de este artículo, es fundamental conocer no sólo la conectividad y el acceso sino también el uso. En particular, se analiza para qué utilizan los distintos integrantes del hogar las Ceibalitas. Esto nos permitirá abordar, aunque sea en forma aproximativa, la brecha digital de segundo orden.

En el Gráfico 8 se presentan los porcentajes de uso por parte de los distintos integrantes de los hogares.

Gráfico N° 8: Tipo de uso de las XO en los BAP's de acuerdo a condición estudiantil y/o posición en el hogar (en %; 2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

Los datos del Gráfico 8 reflejan el bajo porcentaje de uso en los adultos, lo que es congruente con el bajo uso que los mismos hacen de la Ceibalita.

Los usos que registran estos encargados de los niños, refieren a la búsqueda de información para la escuela (20%). Esto puede explicarse por lo encontrado en otras investigaciones (Rivoir, 2010) que refieren a la ayuda que brindan estos adultos a sus hijos para la realización de tareas domiciliarias para la escuela. Si bien no lo evidencian

estos datos, es muy probable –por la investigación mencionada como por otras sobre la temática (Peña et al., 2012)– que se trate de las madres de los niños y niñas, pues son las que mayormente se encargan de esta tarea. Lo que brinda otro flanco de análisis en términos del uso según género.

En este sentido, un 15,1% manifiesta utilizarla para buscar información en Internet, lo cual puede estar vinculado con buscar información para la escuela. Otros usos destacados refieren a contenidos lúdicos como escuchar música o ver videos, escribir, o sacar fotos y filmar, los cuales rondan entre el 15 y el 20%. Por último, los usos vinculados a comunicarse en Internet (chatear, correo electrónico, redes sociales electrónicas), resultan ser marginales, siendo mencionados por menos del 4% de los adultos.

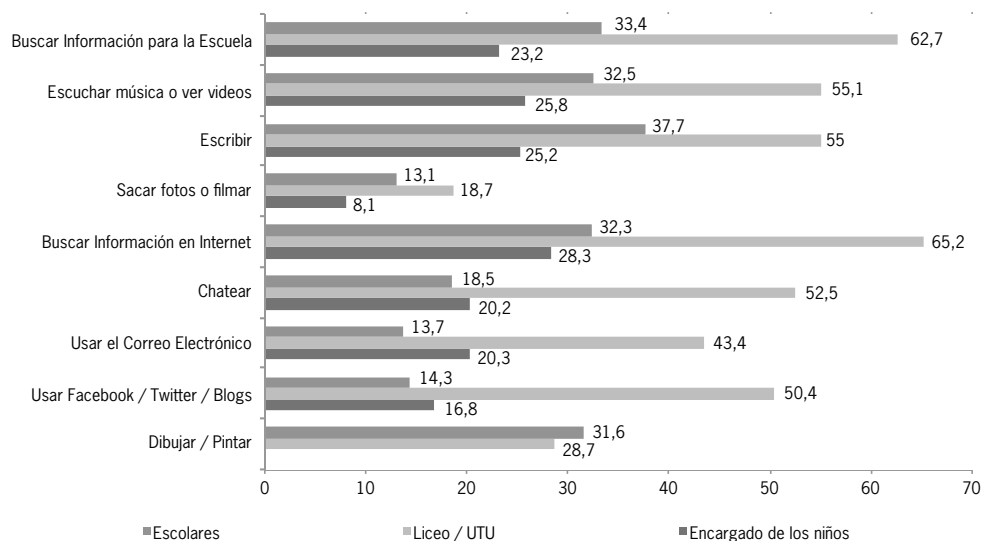
En cuanto a los jóvenes que acuden a Liceo o UTU, el uso resulta masivo, alcanzando a más del 70% de los jóvenes que utilizan su computadora para buscar información tanto para la escuela como en Internet; escuchar música; escribir; o sacar fotos y filmar. En el caso de los usos vinculados a la comunicación entre pares, aunque éstos registran porcentajes menores de acuerdo a la búsqueda de información, son los que mayor interés generan respecto a los adultos y a los escolares, alcanzando porcentajes que rondan entre el 30 y el 40%. Hay que tener en cuenta que los jóvenes son más asiduos y que tienen mayor conocimiento de cómo y dónde buscar conectividad que los adultos.

Respecto a los niños que acuden a la escuela, el porcentaje de usos respecto a la búsqueda de información tanto para la escuela, como en Internet alcanza porcentajes que rondan el 80%. Más del 75% de los niños también utiliza su Ceibalita para escribir, ver videos, y dibujar, superando a los jóvenes liceales. Por último, las aplicaciones vinculadas a la comunicación con pares se encuentran en un punto intermedio entre los adultos y los jóvenes, rondando entre 15 y 18% para el caso de usar correos electrónicos y redes sociales. Para el caso de chatear alcanza un 40,7%.

Con respecto al uso de la PC común, los niveles de utilización descienden sensiblemente. Para el caso de los adultos encargados de los niños, si bien los tipos de usos siguen siendo marginales y sin variaciones significativas, la PC común es más utilizada que la Ceibalita para comunicarse, pese a que el porcentaje de adultos que utilizan su PC para comunicarse por redes sociales, chat y correo electrónico no supera el 20%.

El porcentaje de niños escolares que también utiliza la PC común para diversas tareas y usos es muy bajo, no superando el 30%. Contrario al uso masivo de la Ceibalita, los niños no parecerían realizar con la misma intensidad los mismos usos en la PC común. Esto puede deberse a varios motivos, como el no permitirles acceder a los niños a la PC en el hogar, o no acceder desde otros ámbitos, como por ejemplo un cibercafé. Contrariamente, los adolescentes que acuden al liceo, son aquellos que utilizan en mayor medida la PC común.

Gráfico N° 9: Tipo de uso de la PC en los BAP's de acuerdo a condición estudiantil y/o posición en el hogar (en %; 2011)



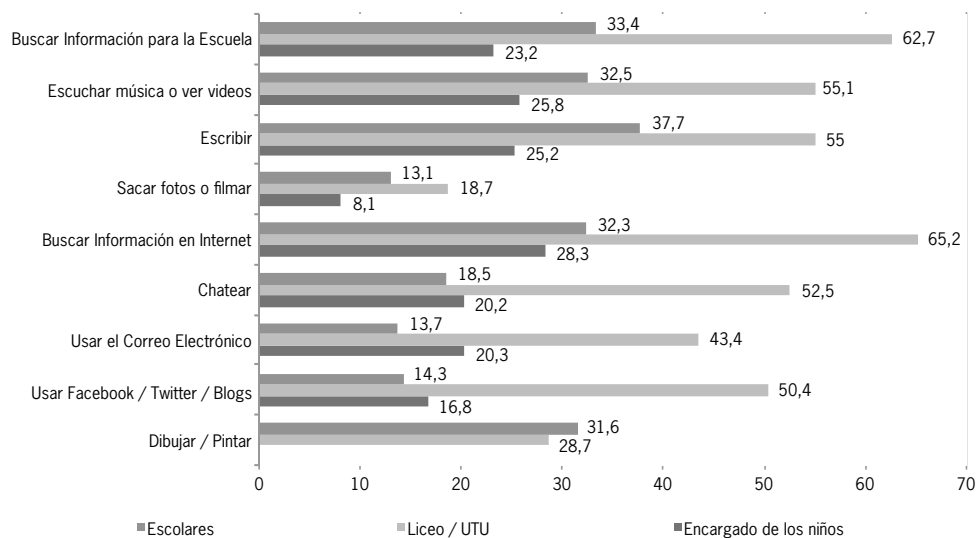
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

Uno de los factores que puede diferenciar el uso de las Ceibalitas es la conectividad a Internet en el hogar, bajo el supuesto de que aquellos usos realizables en Internet deberían incrementarse en aquellos niños que pueden acceder desde el hogar con su Ceibalita a la conectividad Ceibal. Por lo tanto, observamos los usos en los hogares sin conectividad.

Respecto a los niños de los hogares que acceden a la conectividad Ceibal, no existen diferencias significativas en el uso sobre aquellos niños en hogares que no acceden a conectividad. Si bien los niños que acceden a Internet utilizan con mayor frecuencia los distintos tipos de aplicaciones, las diferencias son más de 10%, inclusive en aquellas aplicaciones que necesariamente funcionan en Internet, como chatear o usar el correo electrónico.

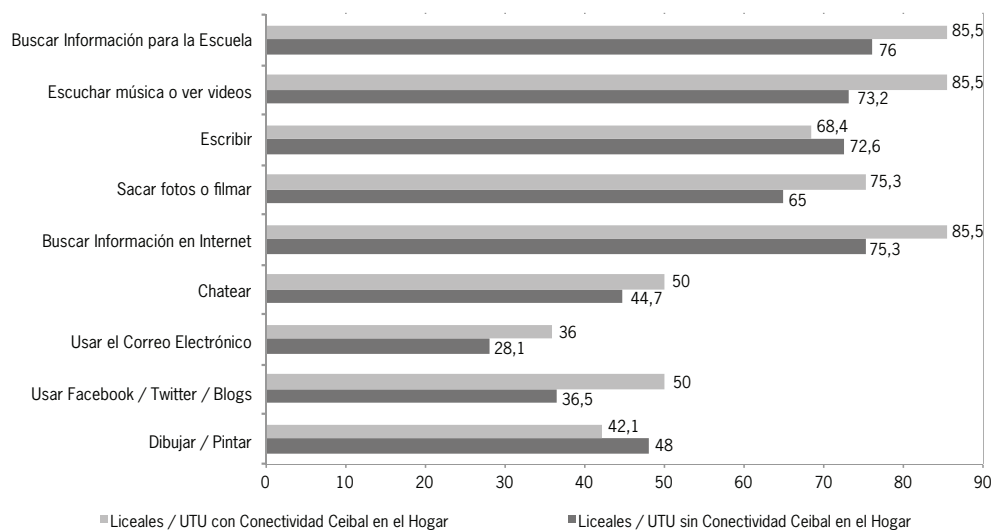
Por otra parte, las diferencias mayores se encuentran en buscar información en Internet y buscar información para la escuela. Un 87,8% de los niños que acceden a la conectividad Ceibal desde su hogar manifiestan buscar información en Internet, mientras que este porcentaje se reduce al 79,3% en los niños que no tienen conectividad en el hogar. Aquellos niños que manifiestan buscar información para la escuela representan un 91,4% de los que acceden a la conectividad, y un 84,4% de los que no acceden.

Gráfico N° 10: Tipo de uso de la XO en escolares de los BAP's que acceden a conectividad en su hogar (en %; 2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

Gráfico N° 11: Tipo de uso de la XO en liceales de los BAP's que acceden a conectividad en su hogar (en %; 2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

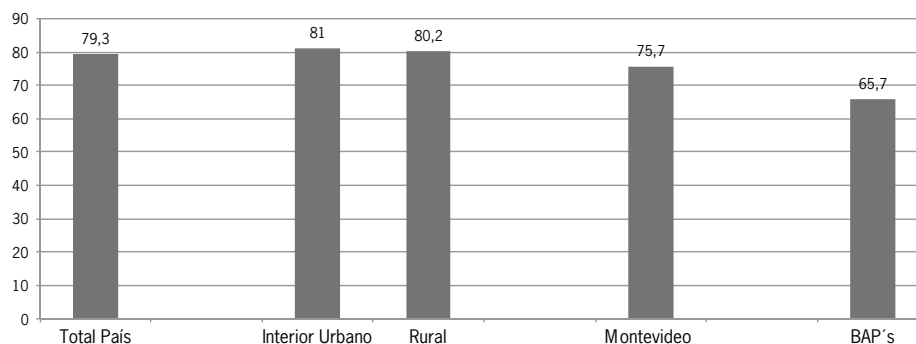
La situación entre los liceales tampoco resulta diferente. Aquellos jóvenes que acceden a la conectividad desde su hogar, no presentan mayores diferencias en los usos respecto aquellos que no acceden a Internet, siendo también las diferencias en torno al 10%. En el uso de las redes sociales electrónicas es donde se ven las mayores diferencias. Aquellos jóvenes que acceden a Internet desde el hogar y usan estas redes representan el 50%, mientras que los jóvenes que no acceden a Internet desde el hogar son un 36,5%.

Estado de las Ceibalitas

La disponibilidad de la tecnología tiene como base que ésta esté en condiciones de ser usada. Esto constituye por lo tanto una de las premisas más duras del acceso. Haber recibido la Ceibalita o que ésta sea contabilizada en la Encuesta de Hogares, no implica que la XO esté en uso o en condiciones de ser usada.

Uno de los problemas que ha afectado al Ceibal es la rotura, bloqueo o inutilización de las Ceibalitas por otros motivos. Esto ha afectado particularmente a los sectores de la sociedad con mayor problemática social y educativa. (Evaluación Ceibal, 2010; Rivoir y Lamschtein, 2012). Constituye por lo tanto un problema clave a resolver en términos de no conformar una nueva brecha al interior del propio plan, entre quienes tienen la computadora en estado adecuado para su uso y quienes no.

Gráfico N° 12: Porcentaje de máquinas en funcionamiento según área geográfica/lugar de residencia. Año 2011



Fuente: Resultados del monitoreo del estado del parque XO primaria, Junio 2012. Elaboración propia en base a Encuesta en BAP's, año 2011.

Como se observa en el Gráfico 12 para el año 2011 y según la Evaluación anual del Plan Ceibal, un 79,3% de las Ceibalitas se encontraban en funcionamiento, en el interior urbano esta cifra ascendía a un 81% y en el Interior Rural a 80,2%. La cifra más baja era en la capital con 75,7%.

En relación a estos datos generales, los datos de estos barrios de nivel socioeconómico bajo, confirman que este problema es más grave en este contexto. El porcentaje de máquinas en funcionamiento alcanzaba al 65,7% de un total de 982 máquinas encontradas. Es en este sentido que son considerados por Ceibal como de atención prioritaria, lo que constituye una problemática a seguir atendiendo y buscando soluciones diferenciales en términos de cuidado, reparación y otros trabajos comunitarios y educativos.

Conclusiones

El trabajo se propuso analizar la brecha digital existente en la población de nivel socioeconómico bajo, que es la población objetivo en términos de inclusión social pero también la que mayores dificultades presenta para la apropiación de las TIC por la interacción de las desigualdades sociales con la desigualdad digital.

De acuerdo al análisis proveniente del relevamiento censal en doce barrios de Montevideo, definidos por Ceibal como Barrios de Atención Prioritaria, es que surgen los siguientes hallazgos y conclusiones.

En primer lugar, se puede definir que el impacto del Plan Ceibal ha resultado significativo en estos contextos en cuanto a la reducción de la brecha digital en lo que refiere al acceso de las TIC. Esto es particularmente relevante por tratarse de una población vulnerable donde la laptop de Ceibal es la única computadora disponible del hogar.

Sin embargo, a esta constatación de la reducción de la brecha de acceso, determinada no sólo a partir de datos de este relevamiento sino también de la Encuesta de Hogares, le caben dos precisiones. Una refiere al acceso real, pues se constata que las máquinas fuera de uso en estos barrios es alta y esto constituye un factor que restringe el acceso. La otra es que si bien en estos barrios hay que destacar que la conectividad (alcance de la señal Ceibal) se encuentra por encima del promedio y esto constituye una ventaja para estimular el acceso y uso, todavía constituye un factor de atención, pues se trata de un poco más de una cuarta parte. Esto se evidencia en que la brecha de conectividad no se ha reducido en forma tan significativa como la de acceso a TIC.

En segundo lugar, se analizó la conectividad como estímulo al uso. En este sentido, se halló que tener conectividad en el hogar intensificaba en aproximadamente un 10% el uso. Si bien es un aumento poco despreciable, no parece ser un factor determinante sino que estarían incidiendo otros estímulos. Ésta no implicaba usos diferenciales de las Ceibalitas tanto en frecuencia, como en tipos de usos. Es decir, aquellos hogares que disponían de conectividad, no se comportaban de manera muy distinta a aquellos que no llegaba la señal de Ceibal.

En estos doce barrios, la señal del Ceibal llegaba y era más cercana en mayor porcentaje que la media del país. En este sentido, muchos de los lugares censados disponían de lugares comunitarios de encuentro, como espacios de comisiones de fomento, comunales municipales, con señal de Ceibal.

En tercer lugar, se analizó el uso para comprender la reducción de la brecha digital más allá del acceso y la conectividad. Se encontraron diferencias significativas entre niños y adolescentes por un lado, y adultos por el otro, en el tipo de uso que realizan. Mientras que el uso de la Ceibalita por parte de niños escolares y adolescentes liceales es prácticamente total, el uso por parte de los adultos integrantes de estos hogares es muy bajo. Siendo esto uno de los objetivos de Ceibal, también constituye un factor a atender en términos del aprovechamiento de este recurso en estos contextos.

Es particularmente significativo por constituir probablemente el único lugar donde esta población adulta accede a las TIC. Esto requiere de acciones específicas orientadas a este sector, teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones y dificultades con las tecnologías.

Controladas estas diferencias por la tenencia de otro computador en el hogar (además de la Ceibalita) tampoco se registran mayores diferencias en el uso de la XO. El uso de la Ceibalita no parecería competir con el resto de computadoras en el hogar, ya que habiendo o no otras computadoras, no se registran variaciones en el uso de la Ceibalita. Estos efectos pueden deberse a que los niños se sientan dueños de sus máquinas, y no accedan a otro tipo de TIC.

Por último, y a los efectos de profundizar en los usos por parte de los integrantes de los hogares, se relevó y analizó para qué usan los distintos integrantes la Ceibalita. Se encontró que los niños y adolescentes priorizan los usos educativos (escribir, pintar, buscar información para la escuela) y búsqueda de información en Internet, respecto a los usos interactivos y de comunicación entre pares (redes sociales, mail o chat). En el caso de los adultos, cabe destacar el uso declarado para la búsqueda de material escolar. Sin dudas esto se debe a que, como se ha constatado en otras investigaciones, se trata de un uso por parte de las madres que son quienes se encargan mayormente de ayudar a los niños en esta tarea. En este sentido, cabe destacar que según lo relevado en estos barrios, la Ceibalita es utilizada con fines didácticos, más que lúdicos.

En síntesis, se constata a partir del análisis realizado que si bien la reducción de la brecha de acceso ha sido importante en los últimos años y que esto se debe a la implementación del Ceibal, se evidencian particularidades en los contextos socioeconómicos más bajos que ponen de manifiesto nuevas desigualdades a atender. Es así que hay una desigualdad referente a la conectividad y al acceso real, debido al alto porcentaje de máquinas rotas. El beneficio principal para estas poblaciones resulta el acceso a la información y el uso más destacado es el de fines educativos, tanto de los niños y adolescentes como de los adultos. Siendo estos últimos integrantes de los hogares los que menos se han beneficiado del Ceibal para fines propios. Este factor, que limita su aprovechamiento y que sin dudas puede relacionarse a diversos otros aspectos como el cuidado de las máquinas, resulta prioritario atenderlo.

Bibliografía

- ACEVEDO, M.** (2004). Las TIC en las políticas de cooperación al desarrollo: hacia una nueva cooperación en la Sociedad Red. Cuadernos Internacionales de TIC para el Desarrollo. Disponible en: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1465/1/16_Las_TIC.pdf [3-6-2013]
- BARBERO, Jesús Martín** (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona, Editorial Gustavo Gili. S.A.
- BURCH, Sally** (2005). Sociedad de la Información / Sociedad del Conocimiento. Disponible en: <http://www.analfatecnicos.net/archivos/76.SociedadDeLaInformacionYConocimiento-SallyBurch.pdf> [3-6-2013]
- CAMACHO, Kemly** (2002). Para el proyecto Holística: Trabajando la Internet con una visión social". Agosto. Disponible en: <http://ticjorgerodriguez.blogspot.com/2012/08/trabajando-la-internet-con-una-vision.html> [3-6-2013]
- CASTELLS, M.** (2000). Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal of Sociology, enero 2000, vol. 51, num. 1, p. 5-24.
- CASTELLS, M.; TUBELLA, I.; SANCHO, T.; DÍAZ, M. y WELLMAN, B.** (2007). Proyecto Internet Catalunya: La Sociedad Red en Catalunya. En: http://www.uoc.edu/in3/pic/esp/sociedad_red/informe.html [3-6-2013]
- GASCÓ-HERNÁNDEZ, M.; EQUIZA-LÓPEZ, F. y ACEVEDO-RUIZ, M.** (2007). Information Communication Technologies and Human Development: Opportunities and Challenges. Idea Group Publishing.
- HARGITAI, E.** (2004). Internet access and use in context, *New Media and Society*, 6 (1): 115–21.
- MANSELL, R.** (2002). From Digital Divides to Digital Entitlements in Knowledge Societies. *Current Sociology*, Vol. 50, No. 3, 407-426.
- MÍSTICA, Comunidad Virtual Mística** (2003). Comunidad Virtual Trabajando la Internet con visión social. En: *Otro lado de la Brecha: Perspectivas latinoamericanas y del Caribe ante la CMSI*. RedISTIC, Caracas.
- NORRIS, P.** (2001). Digital Divide Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. En: <http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Books/Digital%20Divide.htm> [3-6-2013]
- PEÑA, P.; GOÑI MAZZITELLI, M. y SABANES PLOU, D.** (2012). Las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones en la economía y el trabajo. CEPAL, LC/W.476 abril 2012. Santiago de Chile. Disponible en: <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/46542/P46542.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/elac2015/tpl/top-bottom.xsl>
- RIVOIR, A.** (2009). Políticas de Sociedad de la Información para la Inclusión Digital y el desarrollo en América Latina. Revisión de los Distintos Enfoques. En *Revista Temas de Comunicación, Desafíos Digitales*, N° 18. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
- RIVOIR, A.** (Coord.) (2010). El Plan Ceibal: Impacto comunitario e inclusión social 2009 – 2010. Informe de Investigación. ObservaTIC, Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República. En: <http://www.observatic.edu.uy/wp-content/uploads/2011/04/Informe-Final-CEIBAL-inclusi%C3%B3n-social-Rivoir-Pittaluga.pdf> [3-6-2013]

- RIVOIR, A. y LAMSCHTEIN, S.** (2012a). "Plan Ceibal, un caso de usos de las tecnologías de información y de las comunicaciones en la educación para la inclusión social". En: Sunkel, G., Trucco, D. (Ed.): Las tecnologías digitales frente los desafíos de una educación inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas prácticas. CEPAL, Santiago de Chile. Disponible en: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48484/LasTecnologiasDigitales.pdf>
- SUNKEL, G. y TRUCCO, D.** (Ed.) (2012). Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América Latina. Algunos casos de buenas prácticas. Comisión Económica para América Latina. LC/L.3545, Noviembre 2012, Santiago de Chile. Disponible en: <http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48484/P48484.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl> [3-6-2013]
- SASSI, S.** (2005). Cultural differentiation or social segregation? Four approaches to the digital divide. *New Media & Society*, 7(5), 684-700.
- SELWYN, N.** (2004). Reconsidering Political and popular understanding of the Digital Divide. *New Media & Society*, 6 (3) 341-362.
- SEN, A.** (2000). *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta, Barcelona.
- WARSCHAUER, M.** (2003). *Technology and social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. Massachusetts Institute of Technology Press.
- ZHENG, Y. y WALSHAM, G.** (2008) Inequality of what? Social exclusion in the e-society as capability deprivation. *Information, Technology & People*. Vol. 21, N° 3, p. 222-243.



2

Género y sistema de cuidados



El cuidado de las personas mayores en Uruguay: una mirada de género a las representaciones sociales

Karina Batthyány¹ - Natalia Genta² - Valentina Perrotta³

Este artículo presenta los principales hallazgos de la Encuesta Nacional sobre Representaciones Sociales del Cuidado, centrándose en lo obtenido para las personas mayores. Dicha encuesta forma parte del proyecto “Hacia un Sistema Nacional de Cuidados: representaciones sociales de la población y propuestas para el cuidado de dependientes”, perteneciente a la convocatoria 2010 de Proyectos de Alto Impacto Social de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación⁴. El objetivo general del proyecto fue avanzar en el conocimiento y la comprensión del cuidado como elemento constitutivo del bienestar social desde una perspectiva de género y derechos, de forma tal de facilitar la implementación de un sistema nacional de cuidados en Uruguay. La Encuesta abordó las siguientes dimensiones: a. necesidades y demandas de cuidado; b. percepciones sobre el cuidado; c. percepciones sobre responsabilidades de cuidado; d. percepciones sobre obligaciones de cuidado; e. disponibilidad para brindar cuidado; f. valoración del tiempo destinado al cuidado.

Introducción

Actualmente el tema del cuidado se encuentra formando parte de la agenda pública a partir de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados. Como política social, la construcción de este sistema tiene un gran potencial para impactar en: la equidad en la distribución del ingreso; la equidad entre varones y mujeres; la promoción de procesos de cambio poblacionales (natalidad, envejecimiento), en las familias (división sexual del trabajo, déficit de cuidados) y en el mercado de trabajo (aumento en la tasa de actividad femenina y condiciones equitativas en el trabajo).

1 Doctora en Sociología. Profesora Agregada Grado 4 del Departamento de Sociología. FCS, Udelar. kbattyany@gmail.com

2 Máster en Sociología. Asistente Grado 2 del Departamento de Sociología. natalia.genta@gmail.com

3 Socióloga. Ayudante Grado 1 del Departamento de Sociología. vperrotta@gmail.com

4 Contó con el apoyo adicional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), de la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres) y de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Dicho proyecto se realizó en articulación con el Instituto Nacional de las Mujeres.

El tema del cuidado y las responsabilidades familiares, principalmente el cuidado de los niños y las personas dependientes, plantea de manera directa la interrogante acerca de la posición de las mujeres y su igualdad en distintos ámbitos de la sociedad, pero principalmente en la esfera de la familia y el trabajo.

El aumento generalizado de la tasa de actividad femenina, particularmente de las madres, la emergencia de los hogares monoparentales, la reducción de los hogares biparentales tradicionales de varón proveedor y mujer ama de casa a tiempo completo, entre otras transformaciones familiares, replantea la pregunta acerca de cuáles son las obligaciones familiares respecto al cuidado y la forma de compartirlas con otros agentes. La distribución de los costos, roles y responsabilidades del cuidado de las personas dependientes (niños/as, personas mayores, discapacitados) entre Estado, familias, mercado y comunidad es lo que se pone en juego en la definición del cuidado como política pública.

La intervención y articulación de diferentes actores en el cuidado de las personas dependientes, impacta en la posición de las mujeres en las familias y en el mercado de trabajo, así como determina la efectiva capacidad de ejercer los derechos vinculados a su ciudadanía social.

Concepto de cuidados

En la actualidad no existe un concepto de cuidados teóricamente acabado y consensuado sino que persisten conceptualizaciones y estudios empíricos centrados en algún aspecto de los cuidados. Para este artículo, los cuidados se definen como la atención de las necesidades cotidianas de las personas dependientes realizadas en el marco de relaciones domésticas, pudiendo ser realizadas por una persona remunerada o no remunerada, en una institución o en el ámbito del hogar. Es la acción de ayudar a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. El cuidado contiene un componente material y otro aspecto afectivo. (Aguirre, 2009, Batthyány, 2009, siguiendo a Letabier). Engloba, por tanto, hacerse cargo del cuidado material que implica un “trabajo”, del cuidado económico que implica un “costo económico”, y del cuidado psicológico que implica un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental”.

El componente afectivo se refiere al vínculo emocional, usualmente recíproco, entre la persona que brinda el cuidado y la que lo recibe. En el marco de ese vínculo, la persona que brinda el cuidado se siente responsable por el bienestar de otros y lleva a cabo un trabajo mental, emocional y físico, a fin de cumplir con esa responsabilidad. Por consiguiente, cuidar a una persona implica interesarse por ella (Hochschild, 2003), aunque medie una relación económica. La especificidad del trabajo de cuidado es la de estar basado en lo relacional, ya sea en el marco de la familia o por fuera de ella. En el marco de la familia, su carácter a la vez obligatorio y desinteresado le otorga una dimensión moral y emocional.

Puede ser realizado de manera honoraria o benéfica por parientes en el marco de la familia, o puede ser realizado de manera remunerada en el marco o no de la familia. La naturaleza de la actividad variará según se realice o no dentro de la familia y también de acuerdo a si se trata o no de una tarea remunerada (Batthyány, 2005). Es una tarea esencialmente realizada por mujeres, ya sea que se mantenga dentro de la familia o que se exteriorice por la forma de prestación de servicios personales.

El debate en torno al tema de los cuidados se complejizó y se desplazó de la esfera estrictamente privada de la familia para pasar a la esfera pública de los estados de bienestar.

Parte importante del problema de brindar bienestar y protección social de calidad a los miembros de una sociedad radica en una adecuada distribución de esas responsabilidades entre sus distintos miembros. La solución de este problema de distribución del cuidado ha asumido distintas formas en función del momento histórico, social, cultural y económico. Si bien estos factores han determinado que en la distribución de la responsabilidad social del cuidado hayan tenido participación distintos actores sociales como el Estado, el mercado, las familias o formas comunitarias, parte significativa de esta carga ha recaído y recae en las familias, lo que equivale a decir en la mayoría de los casos en las mujeres de las familias.

Los cuidados a las personas se han resuelto históricamente en el seno de las familias, pero las necesidades de cuidado no son las mismas ni tampoco las personas que pueden prestarlos. Esto tiene consecuencias de género relevantes para la condición de las mujeres en la sociedad, pues cuando las mujeres de las familias son las principales proveedoras del bienestar, éstas deben o bien excluirse del mercado laboral o bien enfrentar mayores dificultades que sus pares masculinos para conciliar trabajo productivo y reproductivo. Los cambios en la fecundidad, los procesos de envejecimiento de la población, las migraciones, impactan en el tamaño de los hogares, en las estructuras familiares, en la composición de los hogares, en las relaciones entre sus miembros y en el bienestar de las familias.

Crisis de cuidados

Actualmente asistimos a lo que se denomina “crisis del cuidado”, la que se define como el momento histórico en que existe un desajuste entre la oferta disponible de cuidados y la demanda o necesidades de cuidados, generando un “déficit de cuidados”. Por tanto en cuanto a las condiciones económicas para el sostenimiento de la forma en que se distribuye la carga de cuidado, el aumento sostenido desde los años 70 de la incorporación de las mujeres en el mercado de empleo, junto con una mayor búsqueda de autonomía, reducen el número de mujeres disponibles en forma exclusiva para estas tareas. En forma paralela se producen ciertas transformaciones familiares caracterizadas por la reducción de la proporción de hogares biparentales con hijos, donde el varón es el único sostén económico del hogar y ella es ama de casa a tiempo completo, lo que también reduce la cantidad de personas disponibles para brindar cuidado.

En cuanto a las condiciones demográficas, existe un incremento de la demanda de necesidades de cuidado. Se están procesando ciertas transformaciones socio demográficas a nivel mundial relacionadas con el envejecimiento de la población, debido a la reducción del número de hijos y a la mayor expectativa de vida de las personas a partir de los cambios en las condiciones de salud.

El envejecimiento es creciente en el país: Uruguay presenta la estructura demográfica más envejecida de América Latina, asimilable a los países desarrollados, ya que el 14,1% tiene más de 65 años, según datos del censo 2011. Adicionalmente se presenta en el país “el envejecimiento dentro del envejecimiento”, fenómeno definido como el aumento de la proporción de personas mayores de 80 y 90 años dentro de la proporción de personas mayores de 65 años, lo que trae consecuencias directas en el aumento de las necesidades de cuidados requeridas.

Durán (2012) realiza una estimación de la necesidad de cuidados basada en la cantidad de personas dependientes, la que viene determinada por: la emigración, que provoca que existan menos jóvenes disponibles para el cuidado, el descenso en la natalidad, el aumento de la longevidad y la alta incidencia de la monoparentalidad. En el caso de Uruguay se prevé que se mantengan 1.5 unidades de cuidados necesarios por cada persona, 1 para su cuidado y media para el cuidado de otra persona. (Durán y Milosavljevic, 2012). Además, se modifica la composición de la demanda de cuidados, la tendencia es que se incrementa la demanda de adultos mayores, como lo hizo hasta el momento, mientras que se reduce la de niños. Asimismo se prevé (Durán y Milosavljevic, 2012) que para 2050, aumente la proporción de necesidades de cuidado de adultos mayores al 33,1% y que el 41% de esta demanda provenga de personas que tienen más de 80 y 90 años.

Actualmente, las mujeres tienen mayor autonomía económica pero enfrentan grandes problemas para articular los tiempos de trabajo pago y los tiempos que requieren los cuidados, debido al desbalance en la dedicación de madres y padres y a la insuficiencia de políticas que atiendan al cuidado de las personas mayores.

La necesidad de un sistema de cuidados

Ante la persistencia de la división sexual del trabajo que carga a las mujeres por la responsabilidad principal de los cuidados y, a través de ellos, de la provisión del bienestar, el nivel de obligación que asuman los otros agentes de provisión son determinantes para el ejercicio de derechos de las mujeres.

Por tanto, las características de los regímenes de bienestar, tienen consecuencias diferentes para las trayectorias, desarrollo y para el ejercicio de los derechos de ciudadanía de varones y mujeres (Batthyány, 2009; Aguirre, 2009; Arriagada, 2008; Milosavljevic 2007). Un Estado con poca intervención en la provisión de cuidados y que deje exclusiva o principalmente a las familias la cuestión de proveer bienestar, perjudica particularmente y diferenciadamente a las mujeres.

El estudio de los regímenes de cuidado tiene en cuenta la división del cuidado de niños, enfermos y mayores dependientes entre el Estado, las familias, el mercado y la comunidad, en cuanto al trabajo, la responsabilidad y el costo. Supone analizar empíricamente los servicios, las transferencias de dinero, de bienes y de tiempo, proporcionados por las distintas esferas y la distribución de la provisión entre ellas. En este marco, es importante desagregar las funciones que realizan las familias para poder ver con mayor claridad cuáles y cómo es posible desfamiliarizarlas y ver qué implicancias tienen para las relaciones de género.

Al respecto, Aguirre (2008) en el texto “El futuro del cuidado” retoma los planteos de las analistas feministas de los regímenes de cuidado presentando dos escenarios opuestos: familista y desfamiliarizador.

En el régimen familista la responsabilidad principal del bienestar corresponde a las familias y a las mujeres en las redes de parentesco. El trabajo de cuidado es no remunerado y la unidad que recibe los beneficios es la familia. Es el más extendido en América Latina y los países mediterráneos. Los supuestos de este régimen son la centralidad de la institución del matrimonio legal y una rígida y tradicional división sexual del trabajo.

En el régimen desfamiliarizador hay una derivación hacia las instituciones públicas y hacia el mercado. No existe en forma pura y absoluta, sino que son regímenes de lo más variados y con diferentes ritmos. El trabajo de cuidado es remunerado, siendo la unidad que recibe los beneficios el individuo.

Tal como se sostiene en el texto mencionado, otro escenario posible para la equidad social y de género es que se desarrollen políticas de corresponsabilidad entre familias, Estado y mercado, de forma tal de favorecer la ampliación del ejercicio de derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres.

En definitiva, la discusión sobre el cuidado ha conducido a colocarlo como un problema de política pública al que deben responder los Estados. No se trata por tanto de un problema individual y privado al que cada persona responde como puede y en función de los recursos de los que dispone, si no que se trata de un problema colectivo que requiere de respuestas colectivas y sociales. Por tanto reducirlo a una dimensión individual deja a las mujeres expuestas a negociaciones individuales y desventajosas.

La importancia de las representaciones sociales del cuidado

En los diversos regímenes de bienestar, el mercado, el Estado o la familia, pueden cumplir un rol en la provisión de cuidado, pero la cantidad y calidad del mismo depende de elementos como: la disponibilidad de los servicios, su calidad, a quiénes están dirigidos, las regulaciones del Estado, la disponibilidad, precio y calidad de estos servicios en el mercado, pero también y de manera importante, de las percepciones sobre lo que se considera ideal en términos de quién debe cuidar, cómo y en qué con-

diciones. Es decir de las normas y valores que permiten y obligan que algunas, todas o combinaciones de estas instituciones o personas, provean estos servicios.

Esta investigación pretende aportar algunos elementos a un vacío de conocimiento identificado y reclamado de manera reiterada por diversos actores vinculados a la temática del cuidado, aportes que se consideran centrales para avanzar hacia la conformación de un sistema de cuidados: conocer las representaciones sociales de la población uruguaya en relación al cuidado.

Repasando el concepto de representación social, recordemos que Moscovici propuso este concepto en 1961. Desde entonces, el desarrollo de la teoría sobre las representaciones sociales ha permeado las ciencias sociales porque constituye un enfoque que unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción.

Las representaciones sociales dan cuenta de un conocimiento práctico productor y constructor de una realidad social compartida por un colectivo y a través de las cuales se intenta dominar ese entorno, comprenderlo y explicarlo. Son al mismo tiempo producto y proceso de construcción de la realidad y de su elaboración psicológica y social.

De lo anterior se deriva la importancia de conocer, desentrañar y cuestionar el núcleo de una representación social, en la cual se articulan creencias ideologizadas, pues ello constituye un paso significativo para la modificación de una representación y por ende de una práctica social. En este caso abordaremos las representaciones sociales sobre el cuidado en la sociedad uruguaya.

La importancia del estudio de las representaciones sociales de género radica en hacer visibles las creencias, los valores, los supuestos ideológicos que construyen, con base en las diferencias biológicas, las desigualdades sociales entre mujeres y hombres. En tal sentido, estas representaciones constituyen un sistema que genera procesos de clasificación social, los cuales son claves para delimitar creencias compartidas, imágenes, sentimientos y comportamientos adecuados. El conocimiento de estos elementos es clave para su transformación y su consideración en las políticas públicas que promueven la equidad de género.

Particularmente en lo que refiere a las representaciones sociales del cuidado desde una perspectiva de género, es importante su estudio por dos razones. En primer lugar para construir una línea de base o punto de partida antes de la implementación del sistema de cuidados en Uruguay. Así como por medio de la Encuesta del Uso del Tiempo (EUT) se ha medido la carga de trabajo, el tiempo y la división sexual del trabajo de cuidado, es importante considerar las representaciones sociales antes de la implementación del sistema, para poder luego analizar cambios y permanencias en el sistema de género. En segundo lugar, es importante conocer las representaciones sociales sobre el cuidado para considerarlas al momento de la formulación de los servicios y prestaciones que se incluyan en el sistema de cuidados y para al mismo tiempo promover las transformaciones culturales necesarias para favorecer la equidad de género.

Apartado metodológico

La estrategia de investigación se orientó a conocer las distintas representaciones de las personas sobre el cuidado y su relación con variables como nivel socioeconómico, edad, nivel educativo, contacto con situaciones de cuidado, convivencia con población dependiente, entre otras.

Para dar cuenta de estas dimensiones se realizó una encuesta “cara a cara” de la población uruguaya en base a una muestra representativa estratificada por ingresos y por región de 800 casos, con un adicional de 200 casos de adultos/as mayores. El universo de la encuesta fueron varones y mujeres mayores de 18 años residentes en conjuntos urbanos mayores a 5.000 habitantes.

Con el objetivo de realizar un análisis específico de los/as adultos/as mayores y debido a su baja proporción en la población total, se decidió agregar 200 casos a la muestra representativa de 800 casos, con personas mayores de 70 años.

En los dos últimos bloques se obtuvo información socio demográfica sobre las personas encuestadas, composición del hogar y sobre el nivel socioeconómico. Para la construcción de este último se utilizó el “Índice de Nivel Socioeconómico para estudios de mercado y opinión pública” (INSE).

Situaciones deseables para el cuidado de personas mayores

En este apartado nos centraremos en exponer los principales resultados de las representaciones sociales sobre el cuidado de las personas mayores. Particularmente sobre la situación más deseable para el cuidado de los/as adultos mayores, el “deber ser” de los hijos e hijas en su cuidado así como las posibilidades de articular trabajo-familia que tienen los familiares para satisfacer su cuidado.

Al consultar a la población acerca de las opciones deseadas de cuidado para los y las adultos/as mayores, se dividió a la población en dos subgrupos. Para los/as menores de 70 años, se les pidió que se refirieran a sus padres y para las personas de 70 años y más, se les pidió que refirieran al cuidado de su pareja. Por este motivo, se presentan los datos de forma separada, dado que se trata de dos situaciones distintas al momento del análisis de los resultados.

Cuadro I
Uruguay, 2011. Situación más deseable para atención cotidiana de adultos/as mayores por sexo. (Población hasta 69 años, en porcentaje)

Cuidados familiares	Varones	Mujeres	Total
Cuidado exclusivamente familiar.	47	48	47
Que le cuidara una persona contratada con participación de la familia.	30	34	32
Que le cuidara principalmente una empleada doméstica que viviera en el hogar.	7	5	6
Que le cuidara una persona o varias personas especializadas todo el tiempo.	6	4	5
Subtotal cuidado domiciliario	90	91	90
Cuidados institucionales	Varones	Mujeres	Total
Que estuviera atendido en una residencia de calidad.	8	7	8
Que fuera a un centro de día de calidad.	1	1	1
Subtotal cuidado institucional	9	8	9
No sabe/ No contesta.	1	1	1
Total.	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

Como observamos en el cuadro anterior, la gran mayoría de la población, 90%, opina que la situación más deseable para el cuidado de las personas adultas mayores son los cuidados domiciliarios, es decir los cuidados que son brindados en la vivienda. Dentro de esta modalidad de cuidados domiciliarios, la población se divide entre los/as que opinan que la situación más deseable son los cuidados exclusivamente familiares (47%) y los que opinan que lo deseable es la contratación de una o varias personas contratadas con participación de la familia (43%).

Las opciones vinculadas al cuidado exclusivamente por parte de instituciones es la minoritaria, alcanzando al 8% de la población menor de 69 años, pero no es despreciable en el contexto de reducidos y costosos servicios de cuidado destinados a las personas adultas mayores.

Ahora bien, uno de los factores que inciden en la elección por el cuidado institucional de los/as mayores es el nivel socioeconómico, ya que éste determina las posibilidades de costear una institución de calidad. Al considerar la opinión sobre la situación más deseable según nivel socioeconómico, encontramos que incide en la mención sobre los cuidados domiciliarios y familiares de los varones. Así, a mayor nivel socioeconómico menor es la mención por los cuidados domiciliarios y familiares, siendo los varones de nivel alto y medio-alto los que más se inclinan por el cuidado institucional (14,3%).

En el caso de las mujeres, el nivel socioeconómico no altera su elección por los cuidados domiciliarios para las personas mayores, pero sí incide en la mayor elección por los cuidados exclusivamente familiares. En este caso, a mayor nivel socioeconómico menor es la elección por los cuidados exclusivamente familiares. La modalidad de cuidado familiar compartido con personas contratadas es la mayoritaria en el caso de las mujeres de nivel alto y medio-alto (6 de cada 10), mientras que para las mujeres de niveles más bajos, la opción mayoritaria es la de cuidado exclusivamente familiar.

En las opciones sobre con quiénes compartir el cuidado de los adultos/as en el domicilio, surgen diferencias según el sexo y el nivel socioeconómico. Los varones de nivel alto y medio-alto eligen más el cuidado de personas especializadas todo el tiempo para sus padres o madres que las mujeres del mismo nivel socioeconómico (11,2% vs 4,2%). Las mujeres por su parte se inclinan en mayor medida por la opción de cuidado por parte de una empleada doméstica que viva en el hogar (8,3% vs 4,1%).

La modalidad de cuidado con participación de una empleada doméstica implica un mayor involucramiento de las mujeres, quienes suelen asumir la tarea de supervisar el cuidado, lo cual sucede con menor intensidad en el caso del cuidado especializado todo el tiempo. De esta forma, parecería que estos varones se inclinan más por el tipo de cuidado que no los involucra directamente al elegir en mayor medida que las mujeres la opción del cuidado por parte de personas especializadas.

¿Dónde es más deseable que residan las personas mayores cuando necesitan cuidado?

El siguiente cuadro muestra las elecciones sobre el lugar de residencia de los mayores de 70 años en el caso de que éstos necesitaran ayuda para la vida diaria. El 60,5% de la población menor de 69 años elegirían convivir con su padre o madre adulto/a mayor si tuvieran que cuidarlo/a la mayor parte del día, no presentándose diferencias por sexo.

Cuadro II
Elección sobre lugar de residencia de adultos/as mayores en situación de dependencia. (Población hasta 69 años, en porcentaje)

	Varones	Mujeres	Total
En su casa	60,4	60,7	60,5
En la casa de él/ella (padre/madre)	23,7	22,6	23,1
Le es indiferente	13,0	15,6	14,3
No opina	3,0	1,1	2,0
Total	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

A pesar de que la opción de convivir con el/la adulto/a mayor es la más mencionada por la población general, existen diferencias cuando lo analizamos según grupos de edades de la población y nivel socioeconómico. A mayor edad, es mayor el porcentaje de quienes opinan que el padre o madre viva con sus hijos/as. Es decir, que las personas de mayor edad en la actualidad identifican como más deseable convivir con sus padres/madres mayores en mayor medida que los jóvenes. Hasta los 50 años, el 58% de los varones creen que la situación ideal es que el adulto o adulta viva con ellos/as, mientras que este porcentaje aumenta a 66% luego de los 51 años.

En el caso de las mujeres, es una constante que en todas las edades mencionen que la situación ideal es convivir con sus padres/madres, lo que daría cuenta de un compromiso mayor con el cuidado de la generación anterior que en el caso de los varones.

Ahora bien, cuando tenemos en cuenta el nivel socioeconómico del encuestado/a, encontramos que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, disminuye la elección de vivir en la misma casa de la persona que requiere cuidados y aumenta la elección porque viva en una casa distinta del encuestado/a.

En el caso de los varones, el 32,3% de los encuestados de nivel alto y medio alto, eligen que el adulto/a viva en su propia casa (del adulto/a), mientras que ese porcentaje se reduce a 16,1% en el nivel bajo y medio bajo. En el caso de las mujeres, mientras el 28,1% de las que pertenecen al nivel socioeconómico alto y medio alto, consideran que la situación ideal es que los mayores de 70 años vivan en otra casa, esto ocurre con el 20,2% de las mujeres de nivel socioeconómico bajo y medio bajo.

Esto se vincula claramente con la experiencia y las posibilidades de las familias. Está evidenciado que los hogares unipersonales de personas mayores son integrados por personas no pobres en mayor medida que por personas pobres (SIG, 2011), con lo que la conformación de hogares unipersonales puede entenderse como una elección de las personas mayores cuando tienen los recursos económicos para hacerlo.

Sin embargo, en el caso de las mujeres, las diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos no son tan marcadas como en los varones, siendo los varones de nivel socioeconómico bajo y medio bajo los que consideran en mayor medida como situación ideal la convivencia con sus padres y madres mayores.

Es decir, inclusive dentro del mismo nivel socioeconómico, las mujeres muestran elecciones menos familistas que los varones respecto a dónde preferirían que vivieran sus padres y madres, lo que da cuenta de valoraciones más tradicionales de parte de éstos en este aspecto.

¿Qué cuidados se esperan de la familia y qué modalidades les parecen más deseables?

Una de las preguntas de la encuesta requería que la población pensara cuál sería la solución que adoptaría su familia para su cuidado cotidiano al momento de tener

70 años. El 41% de los varones y el 37% de las mujeres creen que serán cuidados/as sólo por personas de la familia. Las mayores expectativas masculinas respecto al cuidado familiar probablemente recaen en la confianza en que las mujeres de la familia realizarán este cuidado. Además la cuarta parte de varones y mujeres creen que les cuidará alguien de la familia junto con una persona contratada. Si sumamos estas dos categorías, encontramos que 6 de cada 10 personas espera que la familia participe directamente en el cuidado, y 4 de cada 10 que lo haga de forma exclusiva. Por otra parte, sólo 2 de cada 10 creen que la familia no se haría cargo de su cuidado bajo ningún formato.

Como puede observarse, es muy alta la expectativa que la población tiene respecto al rol de las familias en el cuidado de los/as adultos/as mayores, lo cual indica un fuerte arraigo de esta función familiar en las representaciones sociales sobre el cuidado. Como ya ha sido señalado, esta función que históricamente han brindado las familias se vuelve cada vez menos viable en un contexto de importantes cambios demográficos y culturales.

Cuadro III

Expectativa sobre solución que adoptaría su familia si Ud. tuviera 70 años o más y necesitara cuidados diarios según sexo. (Población hasta 69 años, en porcentaje)

Si Ud. necesitara cuidados a partir de los 70 años de edad para realizar las actividades básicas de la vida diaria (asearse, vestirse, cocinar, limpiar, etc.) ¿qué solución cree que adoptaría su familia?			
	Varones	Mujeres	Total
Contratarían una persona para que le proporcione la mayor parte de los cuidados.	11,9	17,1	14,6
Le llevarían a una residencia de calidad	11,6	11,5	11,5
Le cuidaría alguien de la familia y una persona contratada	24,6	24,9	24,8
Le cuidarían sólo personas de la familia	40,4	37,8	39
No se harían cargo	1,2	2,5	1,9
Le cuidaría alguien de la familia y un vecino	0	0,3	0
No sabe / No contesta	10,4	5,9	8,1
Total	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

Al considerar el nivel socioeconómico, encontramos que a menor nivel socioeconómico es mayor la expectativa de que sea cuidado/a por la familia. La expectativa respecto al futuro cuidado probablemente esté mediada por las experiencias anteriores con respecto a lo que se hizo en el caso de otros/as familiares, el tipo de cuidado que se eligió, lo cual explicaría en parte las diferencias encontradas para los distintos niveles socioeconómicos. Las personas con mayores niveles socioeconómicos tienen

mayor acceso al pago de servicios de cuidado de calidad para los adultos/as de sus familias, no teniendo necesariamente que hacerse cargo en forma exclusiva o directa de su cuidado.

El 50% de los varones de nivel socioeconómico medio y el 45,6% de los de nivel socioeconómico bajo y medio bajo creen que los cuidarán sus familias, mientras que esto ocurre en tan solo el 22,4% de los de nivel alto y medio-alto.

El cuadro siguiente presenta información sobre la solución que adoptaría su familia en caso de que el/la encuestada fuera mayor de 70 años junto con lo que el/la encuestado desearía para su cuidado futuro, es decir, cuáles serían sus deseos con respecto a cómo solucionar su propio cuidado. Casi la mitad de los varones, y más de un tercio de las mujeres optarían porque le cuidaran exclusivamente personas de la familia.

Cuadro IV
Expectativa sobre solución que adoptaría su familia si Ud. tuviera 70 años o más y necesitara cuidados diarios y elección del encuestado/a según sexo. (Población hasta 69 años, en porcentaje)

Si Ud. necesitara cuidados a partir de los 70 años de edad para realizar las actividades básicas de la vida diaria (asearse, vestirse, cocinar, limpiar, etc.) ¿qué solución cree que adoptaría su familia?	Y Ud. ¿qué desearía?					
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Contratarían una persona para que le proporcione la mayor parte de los cuidados.	11,9	17,1	14,6	10,0	14,0	12,1
Le llevarían a una residencia de calidad	11,6	11,5	11,5	16,2	18,7	17,5
Le cuidaría alguien de la familia y una persona contratada	24,6	24,9	24,8	23,6	28,5	26,1
Le cuidarían sólo personas de la familia	40,4	37,8	39,0	47,2	36,9	41,9

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

Al comparar las expectativas sobre lo que haría su familia y lo que el/la encuestado/a elegiría para su propio cuidado, se observa que en el caso de los varones la elección porque sea su familia quien lo cuide (47.2%) es mayor al porcentaje que cree que su familia lo cuidaría en exclusividad (40.4%). Es decir, que se produciría lo que puede denominarse una demanda insatisfecha de cuidados familiares en los/as adultos/as mayores, ya que las personas demandarían más cuidados familiares que los que sus familias brindarían.

Debe destacarse que alrededor de una cuarta parte de la población optaría porque le cuidara su familia con participación de personas contratadas (23,6% de los varones y el 28,5% de las mujeres) presentando cifras similares para las expectativas sobre lo que haría la familia.

Al considerar el nivel socioeconómico, observamos que a menor nivel socioeconómico hay una tendencia a aumentar las opciones por el cuidado familiar. El 28,9% de los varones y el 24,2% de las mujeres de nivel socioeconómico alto optarían porque les cuiden exclusivamente personas de la familia, mientras que esta cifra crece al 48,9% y 40,4% para varones y mujeres de nivel medio y al 58,7% y 42,3% para varones y mujeres de nivel socioeconómico bajo y medio bajo.

Cuadro V
Solución que desearía el encuestado/a si tuviera 70 años o más y necesitara cuidados diarios según sexo. (Población hasta 69 años y Población mayor de 70 años, en porcentaje)

	Población menor de 69 años			Población mayor de 70 años		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Que contrataran a una persona que le proporcionara la mayor parte de los cuidados	10	14	12,1	10,2	19,9	15,9
Que le llevaran a una residencia de calidad	16,2	18,7	17,5	11,9	11,7	11,8
Que le cuidara alguien de la familia y una persona contratada	23,6	28,5	26,1	17,8	25,1	22,1
Que le cuidaran sólo personas de la familia	47,2	36,9	41,9	51,7	41,5	45,7
Total	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANIL.

El cuadro anterior presenta los datos sobre las opciones que elegirían para su propio cuidado en la población menor de 69 años y en la población mayor de 70 años. Como puede observarse, los adultos/as mayores optarían más que los menores de 69 años por el cuidado familiar, (45.7% vs 41.9%).

¿Cuál es el “deber ser” de varones y mujeres en el cuidado de las personas mayores?

En el apartado anterior abordamos las elecciones sobre el cuidado de las personas mayores dando cuenta de que la opinión predominante es la opción por el cuidado domiciliario (exclusivo familiar y con personas contratadas) por sobre el institucional. En esta parte nos centramos en las expectativas y obligaciones percibidas por la población en torno al cuidado de sus padres y madres adultos/as mayores.

Cuadro VI
Expectativa de la familia y obligaciones percibidas respecto al encuestado si su padre/madre tuviera 70 años y más y necesitara cuidados permanentes según sexo.
(Población hasta de 69 años, en porcentaje)

Supongamos que su padre/madre tuviera 70 años y más y necesitara cuidados permanentes ¿qué esperaría su familia de Ud.? (piense en lo que esperaría de Ud., no en lo que Ud. cree que debería o podría hacer)				¿Y Ud. sentiría la obligación de...?		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Colaborar ocasionalmente en algunas tareas de cuidado	15,4	14,2	14,8	18,9	16,0	17,4
Compartir regularmente las tareas de cuidado con otras personas	26,0	32,4	29,3	23,4	26,6	25,0
Asumir casi todas las tareas de cuidado	32,5	38,0	35,3	38,2	46,5	42,4
No cuidarle directamente, pero supervisar su cuidado	10,7	5,9	8,2	8,6	4,5	6,5
No cuidarle directamente ni supervisar el cuidado, sólo aportar dinero	3,0	0,8	1,9	3,8	1,4	2,6
No cuidarle directamente, pero supervisar su cuidado y aportar dinero	0,6	0,0	0,3	0,6	0,8	0,7
Nada concreto	8,6	4,2	6,3	4,7	2,2	3,5
No sabe / no contesta	3,3	4,5	3,9	1,5	2,0	1,8
Total	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

En la parte izquierda del cuadro presentamos lo que espera la familia del encuestado (desde la perspectiva del encuestado/o) sobre lo que debería hacer en el cuidado de sus madres y padres mayores, mientras que en la parte derecha encontramos la

obligación sentida por el/la encuestado/a sobre lo que debería hacer en el cuidado de sus padres/madres mayores.

Si observamos el sector izquierdo del cuadro anterior, notamos que prácticamente el 80% de la población menor de 69 años piensa que su familia espera que participe directamente del cuidado de padres y madres adultos mayores (suma de las tres primeras categorías). La expectativa de la participación directa está más presente en las mujeres que en los varones. El 70,4% de las mujeres considera que sus familias esperan de ellas compartir las tareas regulares de cuidado o asumirlas casi todas, mientras que esto le ocurre al 58,5% de los varones.

Dentro de las modalidades de cuidado directo, la más frecuente es la de asumir casi todas las tareas de cuidado. Más de un tercio de la población menor de 70 años piensa que su familia espera que asuman casi todas las tareas de cuidado de sus padres y madres. Esto le ocurre algo más a las mujeres (38% vs. 32,5%).

Cuando observamos las obligaciones sentidas por los propios encuestado/as, en el sector derecho del cuadro, notamos que es más alta la proporción de personas que siente que su obligación es asumir casi todas las tareas de cuidado. Así, el 46,5% de las mujeres sienten la obligación de asumir casi todas las tareas de cuidados de su padre o madre, mientras que para los varones esta obligación está presente en el 38,2% de los casos.

¿Cuáles son los roles de las hijas y de los hijos en el cuidado de sus padres y madres mayores?

En este apartado se presentan los datos sobre las obligaciones sentidas en el cuidado de los padres y madres mayores a través del nivel de acuerdo con las frases que aparecen en los siguientes cuadros. Tanto para el caso de las hijas como de los hijos, más del 60% de la población no está de acuerdo con que hijos e hijas estén obligados a cuidar personalmente a sus padres y madres mayores.

Sin embargo, 5 de cada 10 varones y 6 de cada 10 mujeres están de acuerdo en que las hijas mujeres y los hijos varones deben garantizar el cuidado de sus padres y madres. En los/as adultos/as el mandato de género del cuidado directo no aparece claramente aunque sí lo es el garantizar el cuidado de la generación anterior.

Como observamos en el siguiente cuadro, en el “deber ser” sobre los padres y madres mayores, el sexo no incide tan significativamente como lo hace el grupo de edad al que se pertenece. Así las diferencias en el “deber ser” sobre las obligaciones de hijos e hijas se encuentran de forma significativa entre la población menor de 69 años y la población mayor de 70 años. Mientras que sólo un tercio de la población de hasta 69 años piensa que hijas e hijos están obligados a cuidar personalmente a sus padres y madres, entre la población de 70 años y más esta postura aumenta, siendo apoyada por 6 de cada 10 personas (59%).

Al igual que lo que muestran los datos anteriores, existe una fuerte demanda de cuidado familiar directo en la población adulta mayor, que no es acompañada con las valoraciones acerca del cuidado que tiene la población menor de 69 años.

De esta forma, se percibe una fuerte discordancia entre la expectativa de adultos y adultas de 70 y más años de edad sobre quiénes deben proporcionar su cuidado frente a la opinión de las generaciones menores. Por lo tanto, nos surge la siguiente interrogante: ¿Estos resultados están evidenciando cambios en los valores sobre las pautas tradicionales de distribución de cuidado o se trata de una diferencia producto de la edad y la distancia respecto a la situación de ser cuidado/a que tienen los más jóvenes?

Cuadro VII
Opinión respecto al rol de las hijas mujeres e hijos varones en el cuidado de sus padres según sexo. (Población hasta 69 años y Población mayor de 70 años, en porcentaje)

		Población hasta 69 años			Población de 70 años y más		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Nivel de acuerdo con la siguiente frase: "Las hijas mujeres están obligadas a cuidar personalmente a sus padres cuando éstos son mayores o necesitan ayuda para la vida diaria", por sexo	De acuerdo	28	30	29	63	63	63
	En desacuerdo	68	68	68	33	35	34
	No opina	4	2	3	4	2	3
	Total	100	100	100	100	100	100
		Población hasta 69 años			Población de 70 años y más		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Nivel de acuerdo con la siguiente frase: "Los hijos varones están obligados a cuidar personalmente a sus padres cuando éstos son mayores o necesitan ayuda para la vida diaria", por sexo	De acuerdo	32	32	32	59	60	59
	En desacuerdo	64	65	65	36	39	38
	No opina	4	3	3	5	1	3
	Total	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

¿Cuáles son las posibilidades de articular trabajo y cuidados de personas mayores?

La situación deseable que predomina para el cuidado de adultos/as mayores es el cuidado domiciliario y particularmente familiar y el deber ser del cuidado implica una obligación de parte de los hijos e hijas de participar activamente del cuidado en la adultez. En este apartado presentamos los datos sobre las posibilidades de articular trabajo y familia, siendo que existe como dijimos, una demanda insatisfecha de cuidados familiares de adultos/as mayores.

Cuadro VIII
Uruguay, 2011: Principal dificultad para no cuidar a familiares de 70 años y más según sexo. (Población hasta 69 años en porcentaje)

En su caso, ¿cuál sería la principal dificultad para no cuidar a sus familiares de 70 años y más que necesitaran ayuda para la vida diaria?			
	Varones	Mujeres	Total
El empleo o los estudios	63,1	45,6	54,0
Otras responsabilidades familiares	5,7	13,1	9,5
Los conflictos familiares	2,4	3,3	2,9
Las distancias respecto a su lugar de residencia	7,4	6,4	6,9
No sabría cómo hacer este tipo de tareas	3,3	2,8	3,0
No cree que sea su responsabilidad	0,3	1,1	0,7
Otros familiares lo asumirían directamente	1,2	1,4	1,3
No habría causas	15,8	23,3	19,7
Incapacidad física	0,6	0,6	0,6
No sabe / No contesta	0,3	2,5	1,4
Total	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

El cuadro anterior presenta el dato sobre la principal dificultad que tienen las personas menores de 69 años para no cuidar a los padres y madres adultos/as mayores. El empleo o los estudios aparecen como la principal dificultad, lo que es mencionado por más de la mitad de la población (54%). Esta dificultad es percibida en mayor medida por los varones (63,1%) que por las mujeres (45,6%).

Asimismo se observa que las mujeres son quienes en mayor medida responden que no hay causas para no hacerse cargo del cuidado de sus padres o madres, 23,3% vs 14,8%. La respuesta “no habría causas” está asociada a que no hay justificación

posible para evitar la obligación de cuidar a sus padres o madres. Además, las mujeres plantean como tercera causa de dificultad “otras responsabilidades familiares”, lo que ocurre con el 13,1% de éstas y con el 5,7% de los varones.

En definitiva, estos datos muestran por un lado, las dificultades que tiene para la población conciliar la obligación y expectativa del cuidado directo a las personas mayores, que quedaron evidenciados en los apartados anteriores, con las posibilidades reales de la población. Por otra parte, encontramos que 1 de cada 5 personas identifica que no habría causas para no cuidar a sus padres o madres, lo cual da cuenta del importante peso que tiene esta responsabilidad, que se sobrepondría ante cualquier obstáculo, lo cual es más frecuente en las mujeres.

Para afrontar el cuidado de personas mayores, ¿qué decisiones toman varones y mujeres en el mercado de trabajo?

En este apartado consultamos a los y las ocupadas en el mercado laboral sobre las decisiones que tomaría respecto a su situación laboral, si su madre/padre/pareja mayor de 70 años necesitara ayuda para realizar las actividades de la vida diaria.

El siguiente cuadro presenta los datos para la población ocupada total y para la que tiene contacto con situaciones de cuidado. Los datos indican que el 17% de las mujeres estarían dispuestas a abandonar el empleo provisoriamente en caso de no poder cuidar a su madre, padre o pareja mayor por razones laborales, mientras que sólo el 7,6% de los varones tomaría esta decisión. Además, el 6% de las mujeres decidiría abandonar definitivamente el empleo ante esta situación, en cambio sólo el 2% de los varones harían lo mismo.

Cuando existe presencia de mayores de 70 años en el hogar, las mujeres están más dispuestas a abandonar el empleo provisoria o definitivamente. Así el 29,2% de las mujeres que residen con adultos/as mayores están dispuestas a abandonar el empleo, mientras que lo están el 23% de las mujeres de la población total. En el caso de los varones las cifras se mantienen prácticamente incambiadadas.

Cuadro IX
**Porcentaje de varones y mujeres según qué decisiones tomarían si su madre/padre/
 pareja de 70 años y más necesitara ayuda para realizar las actividades de la vida
 diaria y en su trabajo no se lo permitieran. (Población ocupada total y población
 ocupada que convive con presencia de personas mayores de 70 años, en porcentaje)**

Si Ud. tuviera madre/padre/pareja de 70 años y más y necesitara ayuda para realizar las actividades de la vida diaria (salir de casa, vestirse, asearse, comer desplazarse, limpiar la casa, o cocinar) y en su trabajo realmente no se lo permitieran ¿Qué haría?					
	Población ocupada total			Población ocupada con presencia de mayores de 70 años en el hogar	
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Mantendría su empleo con el horario actual	33,5	26,0	30,1	10,3	12,5
Seguiría con el empleo aunque reduciría horario e ingresos	53,5	48,0	51,0	69,0	54,2
Abandonaría provisoriamente el empleo para dedicarse al cuidado	7,6	17,0	11,8	13,8	16,7
Abandonaría definitivamente el empleo para cuidar a su madre/padre	2,2	6,3	4,0	0,0	12,5
Vería cómo hacerlo	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0
Cambiaría el horario de trabajo	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0
No puede cuidar a nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No Opina	2,9	2,2	2,6	6,9	4,2
Total	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta Nacional sobre Representaciones de cuidado. FCS-Inmujeres-ANII.

Adicionalmente en este cuadro puede observarse que la mitad de los varones y de las mujeres continuarían con el empleo, pero reducirían horarios e ingresos. Por lo tanto, la gran mayoría de los varones (66.5%) y sobre todo de las mujeres (74%) tomaría acciones que modificarían sus vínculos laborales en caso de que sus padres o parejas tuvieran necesidades de cuidado ya que no les parece posible continuar con el mismo vínculo laboral que mantienen teniendo que hacerse cargo del cuidado de sus padres y madres mayores. Es decir, este dato da cuenta de la imposibilidad actual de hacerse cargo del cuidado de dependientes manteniendo incambiadas las condiciones laborales que se les presentan a los y las trabajadore/as.

Cuando observamos estos mismos datos por nivel socioeconómico, notamos que el mismo influye más en la decisión de las mujeres, teniendo menores impactos en el caso de los varones.

Las mujeres de nivel socioeconómico más bajo tienen una mayor disposición a abandonar el empleo -en forma transitoria o definitiva- para cuidar a sus padres o pareja mayor de 70 años, que sus pares de los otros niveles socioeconómicos. El 27% de ellas están dispuestas a abandonarlo en forma transitoria o definitiva, mientras que esto ocurre con el 20% de las de nivel alto y medio. Por otra parte, el 55% de las mujeres de nivel alto y medio alto continuarían con el empleo y reducirían horario e ingresos mientras esto lo haría el 38% de las de nivel bajo y medio bajo.

En el caso de los varones, las cifras de abandono del empleo provisorio o definitivo es muy pequeña, comparada con las mujeres. De todas maneras, se observa una mayor tendencia de quienes pertenecen al nivel socioeconómico bajo a abandonar transitoriamente o definitivamente el empleo para cuidar a sus padres o pareja mayores de 70 años que sus pares de otros niveles socioeconómicos, pero el porcentaje es notoriamente inferior al de las mujeres del mismo estrato, llegando al 17%. Así los varones que abandonarían provisorio o definitivamente el empleo son el 13% de los varones de nivel medio, el 8% de los de nivel bajo y el 9% de los de nivel alto. Estos últimos abandonarían el empleo solo provisoriamente.

Por otra parte, en el caso de las mujeres de menores niveles socioeconómicos, la opción de seguir con el empleo con reducción de horario e ingresos para dedicarse al cuidado es menos frecuente que en los niveles altos y medios. Éstas optan en mayor medida por abandono provisorio o definitivo del empleo.

Principales conclusiones

Una primera constatación es la fuerte presencia del “familismo” en las representaciones sociales del cuidado de la población uruguaya. Para la mayor parte de la población uruguaya la situación más deseable para el cuidado de los/as adultos/as mayores es la que se brinda en el domicilio (90%). Dentro de esta opción por el domicilio, la población se divide entre quienes consideran que la situación más deseable es que el cuidado sea brindado exclusivamente por las familias y quienes opinan que la situación más deseable es que el cuidado sea compartido entre familiares y personas contratadas que cuiden en el domicilio. Se entiende que, al no existir una experiencia tan generalizada de servicios institucionales de cuidado, la población ve limitadas las valoraciones por los cuidados institucionales para la población adulta.

En segundo lugar, se constata una relación directa entre el “familismo” y el nivel socioeconómico. Así, a menor nivel socioeconómico se observa mayor “familismo”. Esta relación está vinculada a la experiencia vivida con modalidades de cuidado más cercanas. En el caso de las personas con nivel socioeconómico más alto, la presencia de instituciones o personas especializadas es mayor, lo cual incidiría en la elección

señalada, dado que es una experiencia conocida. Por el contrario, para la población perteneciente a niveles socioeconómicos más bajos, la experiencia cercana es la del cuidado familiar, debido a la escasez de recursos económicos para costear servicios de cuidado de calidad para adultos/as mayores. Evidencia de esto, es que existe una tendencia mayor de las personas de niveles socioeconómicos más bajos, a optar por la convivencia con los padres y madres mayores en la misma vivienda, que en el caso de las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos altos, quienes probablemente cuenten con la experiencia de padres y madres con la autonomía económica necesaria para elegir vivir en hogares distintos.

Se constata entonces, que las representaciones sociales del cuidado están mediadas por el nivel socioeconómico, lo cual entendemos se vincula a las experiencias de cuidado vividas o conocidas. El Sistema Nacional de Cuidados, mediante la oferta de nuevos servicios deberá generar una distribución más equitativa de los cuidados institucionales de calidad que transformen las representaciones actuales de forma de reducir la carga de trabajo de cuidados realizado por las familias. A pesar de lo dicho, todas las diferencias señaladas son más relevantes en el caso de los varones, no así en el de las mujeres para quienes las respuestas no varían tanto en función de las variables estudiadas como se mencionará en el siguiente punto.

En tercer lugar, se constata la fuerza del mandato de género respecto al rol cuidador en la identidad femenina, que trasciende las distintas posiciones sociales de las mujeres. Si bien las mujeres no son un grupo homogéneo, los resultados muestran mayor similitud como grupo que entre los varones, presentando comportamientos similares de forma independiente de su edad, nivel socioeconómico y educativo.

En cuarto lugar, se observa la persistencia de la división sexual del trabajo en relación al “deber ser” del cuidado. Encontramos que en el “deber ser” que la población atribuye a los varones, hay una tendencia a que sean percibidos como los responsables de garantizar el cuidado, así como del cuidado indirecto, aludiendo a su rol de proveedores económicos. Por otro lado, en el “deber ser” de las mujeres éstas son asociadas a su rol de cuidadoras directas, lo cual implica un vínculo íntimo, evidenciándose la vigencia de la división sexual del trabajo. Evidencia de esto es la mayor expectativa de la familia porque sean las mujeres las que asuman regularmente las tareas de cuidados de sus padres y madres mayores.

En quinto lugar, se evidencia la tendencia de las mujeres a flexibilizar su situación en el mercado laboral, en función de las necesidades de cuidado de las personas dependientes. Así, las mujeres declaran en mayor medida que los varones modificar su situación en el mercado de trabajo respecto a la reducción de la jornada laboral, ampliación de licencias o incluso abandono del empleo, independientemente de su nivel socioeconómico, nivel educativo y categoría de ocupación. Se observa entonces uno de los impactos del deber ser atribuido a las mujeres en su inserción y permanencia en el mercado de trabajo.

En sexto lugar, se aprecia la existencia de una demanda insatisfecha del cuidado familiar para la población adulta mayor expresada a través de las diferencias encontradas entre lo que las personas mayores creen que sus hijas e hijos están obligados/as a hacer respecto a su cuidado y lo que hijos e hijas consideran que es su obligación. La amplia mayoría de los menores de 69 años no considera que están obligados/as a cuidar de sus padres y madres, a diferencia de lo que la mayoría de las personas mayores piensan.

Bibliografía

- ARAYA UMAÑA, Sandra** (2002). Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de Ciencias Sociales No. 127, Flacso, Costa Rica.
- AGUIRRE, Rosario** (2009). Uso del tiempo y desigualdades en el uso del tiempo del trabajo no remunerado. En Aguirre, Rosario (editora) *Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay*. INE/INMUJERES/UDELAR, FCS, DS/UNIFEM/UNFPA. Montevideo.
- AGUIRRE, Rosario** (2008). "El futuro del cuidado". En: *Futuro de las familias y desafíos para las políticas*. Irma Arriagada (editora). CEPAL, SIDA, UNIFEM, UNFPA. Santiago de Chile.
- AGUIRRE, Rosario; BATTHYÁNY, Karina** (2005). Uso del tiempo y trabajo no remunerado. Encuesta en Montevideo y área metropolitana 2003. Universidad de la República-UNIFEM. Montevideo.
- BATTHYÁNY, Karina** (2004). "Cuidado infantil y trabajo: ¿un desafío exclusivamente femenino?", Montevideo, Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR)/ Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
- BATTHYÁNY, Karina** (2009). "Cuidado de personas dependientes y género", *Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay*, Rosario Aguirre (ed.), Montevideo, Instituto Nacional de Estadística (INE)/ Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)/ Universidad de la República (UdelaR)/ Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
- BATTHYÁNY, Karina** (2010). "Envejecimiento, cuidados y género en América Latina", ponencia en Seminario internacional "Experiencias internacionales y propuestas para consolidar la red nacional de cuidado de las personas adultas mayores en Costa Rica" <http://www.cepal.org/dds/noticias/paginas/3/41413/batthyany.pdf>
- DURÁN, María Ángeles** (2003). "El trabajo no remunerado y las familias". Unidad de género y salud y Unidad de políticas y sistemas de la Organización Panamericana de la Salud. Consulta técnica sobre contabilización de la producción no remunerada de servicios de salud en el hogar, Washington D.C., diciembre.
- DURÁN, M. A.** (2012). *El trabajo no remunerado en la economía global*. Bilbao. Fundación BBVA.
- DURÁN, M. A. y MILOSAVLJEVIC, Vivian** (2012). *Unpaid work, Time Use Surveys and Care demand forecasting in latinamerica*. Documento de trabajo Nro. 7, Madrid. Fundación BBVA.
- GUZMÁN, V.; SALAZAR, R.** (1992). *El Género en el debate de las políticas públicas*. Ponencia presentada al II Congreso Nacional de Ciencia Política. IQUIQUE. Noviembre de 1992.
- GUZMÁN, V.** (2002). *Género en las Políticas Públicas*. Disponible en: http://www.sernam.cl/pmg/documentos_apoyo/GeneroPresentacionVirginiaGuzman.pdf

- HOCHSCHILD, Russell** (2003). *La mercantilización de la vida íntima: Apuntes de la casa y el trabajo*. Madrid, Katz.
- MILOSAVLJEVIC, Vivian** (2007). "Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y tendencias en América Latina" Cuadernos de la Cepal, Nro. 92, CEPAL/UNIFEM, Santiago de Chile.
- MONTAÑO, S.** (2010). *El cuidado en Acción*, Cuadernos de la CEPAL No. 94. CEPAL-UNIFEM, Santiago de Chile.
- PAUTASSI, Laura** (2010). "Cuidado y derechos: la nueva cuestión social", *El cuidado en acción: entre el derecho y el trabajo*. Sonia Montaña Virreira y Coral Calderón Magaña (coords.). *Cuadernos de la CEPAL*, N° 94 (LC/G.2454-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- PAUTASSI, Laura** (2007). "El cuidado como cuestión social: una aproximación desde el enfoque de derechos". Serie Mujer y Desarrollo N° 87, CEPAL: Santiago de Chile.
- SIG - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GÉNERO** (2011): "Estadísticas de Género, 2011". Inmujeres-MIDES-UNFPA. Montevideo. Disponible en: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/20979/1/estadisticas_de_genero_2011_final.pdf



La dimensión de género en el saber experto en cuidado infantil

Karina Batthyány¹- Natalia Genta²- Valentina Perrotta³

La adjudicación de una mayor responsabilidad en la provisión de cuidados a las mujeres impacta sobre sus posibilidades de desarrollo y de ejercicio de sus derechos en las diversas esferas de la vida social. La demanda del movimiento feminista de instalar esta temática en la agenda desde una perspectiva de género y derechos, ha sido recogida desde la institucionalidad pública a partir de la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Para poder garantizar la inclusión de la perspectiva de género en esta política, resulta clave indagar sobre los significados presentes en torno a la concepción del cuidado, los que guiarán las definiciones de la misma. Este artículo indaga sobre los significados que otorgan al buen cuidado los y las expertos/as, quienes diseñarán e implementarán en gran medida dicha política. El análisis del saber experto desde la perspectiva de género y derechos se propone profundizar en las implicancias que los significados sobre el buen cuidado infantil tienen para las representaciones y prácticas de varones y mujeres. Se visualiza de qué manera la división sexual del trabajo está presente en estas representaciones.

Introducción

Este artículo presenta los principales resultados del módulo cualitativo del proyecto “Hacia un Sistema Nacional de Cuidados: representaciones sociales de la población y propuestas para el cuidado de dependientes”, coordinado por la Dra. Karina Batthyány, llevado adelante durante 2011 y 2012, por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, y financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)⁴.

- 1 Doctora en Sociología. Profesora Agregada Grado 4 del Departamento de Sociología. FCS, Udelar. kbattyany@gmail.com
- 2 Máster en Sociología. Asistente Grado 2 del Departamento de Sociología. natalia.genta@gmail.com
- 3 Socióloga. Ayudante Grado 1 del Departamento de Sociología. vperrottag@gmail.com
- 4 Contó con el apoyo adicional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), de la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres) y de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Dicho proyecto se realizó en articulación con el Instituto Nacional de las Mujeres.

El módulo cualitativo de esta investigación, se propuso indagar las claves del buen cuidado infantil en base al saber experto, y analizarlas desde la perspectiva de género. Profundizar en las representaciones sociales, en este caso las de los y las expertas en cuidado infantil, permite reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación positiva o negativa de las actitudes. Partiendo de la gran influencia que tiene el saber experto sobre infancia en las representaciones y decisiones de las familias, así como en las de la política pública, el discurso experto resulta de mucho interés para el estudio sociológico y particularmente para la perspectiva de género.

De esta manera, este estudio busca analizar a la luz de este enfoque teórico los códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que rigen con fuerza normativa las prácticas y representaciones sobre el cuidado que tienen mujeres y varones. Por tanto, se buscó dar cuenta de los significados presentes en el discurso experto que refuerzan estereotipos de género en el cuidado infantil, así como de aquellos que posibilitan una transformación de los roles asignados a partir de una distribución más equitativa del cuidado.

Para alcanzar este objetivo, se realizaron 20 entrevistas en profundidad con expertos y expertas en infancia de diversas disciplinas como la psicología, la psiquiatría infantil, la pediatría, la educación, así como autoridades de las políticas de infancia de las áreas salud, educación y desarrollo social.

Las dimensiones de análisis abordadas abarcan la definición del buen cuidado o cuidado de calidad, las cualidades requeridas para las personas que cuidan, los ámbitos preferenciales para el cuidado (familias, centros infantiles, cuidadoras remuneradas), las edades adecuadas para que los niños/as concurren a los centros infantiles o para que queden al cuidado de personas contratadas, las ventajas y desventajas de diversas modalidades de cuidado, el rol de los padres y las madres en el cuidado infantil, las soluciones adecuadas para armonizar el cuidado con la jornada laboral remunerada y la opinión sobre las medidas y servicios que deben crearse desde la política pública.

Tres enfoques del cuidado infantil en el saber experto

Uno de los hallazgos principales de este estudio es la identificación de tres enfoques dentro del saber experto a la hora de definir el cuidado de calidad y sus dimensiones centrales, en los que se identifican énfasis diferenciados, así como diversas posturas sobre el ejercicio del derecho a cuidar desde una perspectiva de género y derechos.

En primer lugar, encontramos el enfoque que llamamos “psicológico- educativo”, proveniente de la psicología, psiquiatría y educación, luego se encuentra el enfoque “médico” y un tercero denominado “político”, proveniente de los/as actores con poder de decisión en las políticas públicas de infancia. Importa destacar que no se trata de enfoques cerrados o perfectamente coherentes, o de enfoques que se encuentran en

estado puro en la realidad. Estos enfoques son construcciones analíticas a partir de grandes regularidades a modo de tipos ideales que permiten comprender mejor el saber experto. En este sentido, los/as entrevistados/as se mueven en mayor o menor medida entre ellos, presentando contradicciones naturales en un mismo discurso y en una misma disciplina. De esta manera, los nombres con los que denominamos a los tres enfoques no se corresponden exactamente con las disciplinas, sino que seleccionamos estos nombres por designar mejor las características que queremos destacar en los tres casos y no a partir de una correspondencia directa con las disciplinas.

El enfoque psicológico-educativo

El enfoque psicológico- educativo es el más problematizador a la hora de las definiciones conceptuales o de las recomendaciones para el buen cuidado. En este sentido, este enfoque es de los tres el más enfocado en lo singular, evitando las generalizaciones o recomendaciones para toda la población. Es también el que aparece más cercano a la perspectiva de género, dado que logra problematizar los estereotipos de género reconociendo la heterogeneidad de situaciones familiares así como la importancia del varón en el cuidado infantil. Por otra parte, es el enfoque más profundo y denso conceptualmente, permitiendo un análisis más vasto.

El enfoque psicológico-educativo hace un fuerte hincapié en que el cuidado debe garantizar la seguridad emocional del/la niño/a, generada a través de los vínculos con los adultos/as referentes. Esta condición es percibida como decisiva para el desarrollo infantil.

“Sabemos que si bien el niño viene con una impronta depende mucho del ambiente que él pueda desarrollar su potencial, entonces desde ahí todo lo que tenga que ver con los vínculos y el ambiente en el cual ese desarrollo se produce es lo que va a permitir realmente que se dé un desarrollo integral y todas sus capacidades se potencien”. (Mujer, profesional de la salud mental).

La importancia que se desprende de los discursos respecto a los vínculos que se establecen con el/la niño/a en esta etapa, está muy vinculada a quiénes son las personas que deben desarrollar este vínculo. Aquí encontramos muy presente en el discurso psicológico el concepto de apego. Un aspecto interesante desde la perspectiva de género -y consensuado en el discurso de los/as entrevistados/as psicólogos/as- es que la figura de apego puede desarrollarse con más de una figura adulta. Esta posibilidad, involucra a otros/as adultos/as responsables del cuidado como los padres varones, permitiendo compartir el cuidado directo con la madre, desde una posición que no coloca toda la responsabilidad en el rol materno, sin desconocer su importancia.

“(…) lo que es crucial es que haya un ambiente de seguridad afectiva que se establece a través de los vínculos cercanos que tiene el niño, que le brinden esa seguridad; habitualmente eso está conceptualizado más en lo que tiene que ver con las figuras de apego, que pueda desarrollar un apego seguro es lo que le permite al niño tener interés en desarrollarse”. (Mujer, profesional de la salud mental).

“Una figura, puede ser una abuela. En general en los jardines está el referente porque no es que varíen las maestras todo el tiempo, pero hay dos o tres que para el niño también son un referente. La estabilidad en la persona que lo atiende para el niño es muy importante porque el niño se desarrolla en el vínculo con el otro, que no necesariamente es la mamá, de repente la mamá no está y hay otra persona que oficia ese rol”. (Mujer, psicóloga).

“El niño no sólo desarrolla ese apego con su mamá, es innegable el lugar que tiene la mamá para el niño, hablamos también de otras figuras que se van constituyendo en figuras de apego para el niño, lo que también es cierto es que el niño es capaz de desarrollar vínculos de apego con otras figuras referentes en la medida en que se dé cierta continuidad y cierta correspondencia”. (Mujer, psicóloga).

Esta noción de seguridad emocional, se logra a partir de vínculos estables en el tiempo con pocos/as adultos/as referentes. La seguridad emocional, que adquiere un rol fundamental en esta etapa, debe darse tanto si el cuidado es desarrollado en el hogar o en un centro infantil. Desde este discurso, la centralidad está puesta en los vínculos de calidad y la seguridad afectiva más que en una definición a priori de quiénes deben ser los/as adultos/as o los espacios ideales de cuidado. De esta manera, no se da por sentado que los padres o que las familias sean el ámbito seguro por naturaleza sino que el buen cuidado dependerá de los vínculos seguros que se establezcan con el/la niño/a.

“(…) el componente central para que el desarrollo se dé es el ambiente de seguridad emocional y de estímulos apropiados para las distintas etapas, eso es bastante común en toda la primera infancia (...) un vínculo afectivo que estimule al niño en sus competencias, que lo reconozca como sujeto, que lo reconozca como persona capaz de, eso es lo que hace la diferencia en los cuidados adecuados y no adecuados”. (Mujer, profesional de la salud mental).

La importancia de que el niño/a establezca vínculos seguros con adultos o adultas referentes también está asociada a la coherencia en el cuidado, a que el niño/a pueda integrar un estilo de cuidado que no presente variaciones constantes. La posibilidad de integrar este cuidado seguro se da a partir de cuidados coherentes, repetitivos, estables afectivamente donde se remarca la integralidad del mismo, en contraposición a un sujeto que nace no integrado psíquicamente.

Por lo tanto, este cuidado seguro puede brindarse tanto en el hogar como en un centro infantil siempre que reúna ciertas características. En este sentido, este discurso al centrarse en otros factores como la estabilidad del/la referente y no en el vínculo familiar, también abre posibilidades para compartir el cuidado con centros infantiles, relativizando el rol insustituible que tendrían madres, padres o familiares en el cuidado.

La idea de que sólo las familias pueden garantizar el cuidado de calidad para los/as niños/as pequeños/as está muy presente en la población uruguaya, tal como lo evidencia la Encuesta sobre Representaciones Sociales del Cuidado (FCS, Inmujeres, ANII,

2011), que muestra una fuerte presencia del “familismo” en las situaciones ideales que la población expresa para el cuidado infantil. Recordemos que el 65% de la población opina que la situación ideal para el cuidado infantil de los niños/as menores de dos años es que familiares cercanos proporcionen el cuidado, lo cual como es sabido recae en que las mujeres de las familias asuman la mayor carga del cuidado. De esta manera, el discurso psicológico- educativo habilita otras posibilidades de cuidado de calidad, al destacar que lo que determina el buen cuidado son los vínculos seguros que pueden ser desarrollados con otros adultos/as referentes incluso con cuidadores/as remunerados en domicilio o que trabajen en centros infantiles. Queremos destacar la posibilidad de compartir el cuidado infantil que brinda este enfoque donde está presente la participación de varios sujetos en el cuidado. El cuidado deja de ser exclusivamente familiar, exclusivamente materno, para ser asumido por otros actores, donde está también incluido el Estado. El compartir el cuidado no significa sólo dedicar algo de tiempo al mismo, sino asumir como otro actor su responsabilidad.

En este sentido es que decimos que este discurso se muestra más cercano a la perspectiva de género, posibilitando otras opciones de cuidado infantil al mismo tiempo que otros ámbitos de desarrollo para las mujeres.

Otra de las claves del buen cuidado infantil desde el enfoque psicológico educativo es la dimensión afectiva del cuidado. Como es sabido, la noción de cuidado abarca al menos tres dimensiones: la dimensión material que implica un “trabajo”, la dimensión económica que implica un “costo”, y la psicológica que implica un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental”. Esta tercera dimensión es la más destacada en el discurso experto proveniente de la psicología y educación, como dimensión central del cuidado de calidad. En el cuidado brindado en el ámbito familiar, las dimensiones afectivas como el amor, la compasión o la gratitud y las dimensiones morales como el deber, la abnegación o el sacrificio, adquieren una cualidad distinta dado que intervienen factores normativos. Desde la perspectiva de género resulta muy relevante subrayar esta dimensión del cuidado remarcada por el discurso psicológico educativo, en este momento donde se está diseñando la política pública del cuidado, dado que el aspecto afectivo debe considerarse en todas las etapas de implementación de la misma.

“(...) tiene que tener contención afectiva, para poder generar hábitos, los chicos no aprenden a los gritos, ellos tienen que aprender a vincularse entre sí, a manejar sus emociones y también poder superar sus propios conflictos, hay que sostenerlo en las frustraciones, que es lo que hace cualquier mamá, eso es cuidado, no es poco porque requiere cierta capacitación, disposición interna (...)”. (Mujer, profesional de la salud mental).

En esta cita aparecen varios aspectos que son relevantes de destacar en este análisis. En primer lugar se otorga una fuerte centralidad al afecto en el desarrollo infantil, del cual depende el desarrollo vincular, afectivo y psíquico del niño/a.

Por otra parte aparece la idea de contención y de sostén, que nos parece clave visibilizar dado que, como se desprende de nuestro marco teórico, este aspecto suele

ser subvalorado en lo que refiere al esfuerzo que implica para la persona que cuida. Retomando a Hochschild (1990, en Batthyány 2009), el cuidado se define como un vínculo por el cual el que brinda cuidados se siente responsable del bienestar del otro y hace un esfuerzo mental, emocional y físico, para poder cumplir con esa responsabilidad. Por lo tanto, para esta autora cuidar a una persona es hacerse cargo de ella. Así, el cuidado es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se pueden considerar que sean completamente naturales o sin esfuerzo, donde las mujeres ponen mucho más que naturaleza en el cuidado: sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo.

La subvaloración del esfuerzo que implica el cuidado viene dada por el hecho de que la afectividad suele estar asociada a la naturaleza femenina, a una cualidad innata de las mujeres que no les exige demasiado esfuerzo. Claramente esta asociación se observa en la frase *“es lo que hace cualquier mamá”*. Lo que está detrás de esta afirmación es que el hecho de ser madre implica necesariamente saber cuidar y hacerlo con afecto.

En este caso, el hecho de asociar naturalmente la afectividad a cualquier mamá, hace muy difícil pensar en otros/as cuidadores/as posibles, ya que se asume como dada la sabiduría y capacidad de las mujeres madres de cuidar con afecto. Como hemos mencionado, la tendencia observada en este enfoque es a distanciarse del imprescindible cuidado maternal, asumiendo que el padre u otras figuras adultas cercanas pueden también ejercer esta función.

Pero al finalizar la cita, la entrevistada problematiza que esta cualidad sea innata al hacer mención a la necesidad de cierta capacitación y disposición interna de la persona cuidadora. De esta manera, observamos contradicciones en los discursos que resultan relevantes de señalar, porque dan cuenta de aspectos muy internalizados en los/as expertos/as respecto a la centralidad del rol de la madre en los cuidados, más allá de que luego racionalicen y argumenten a favor de los cuidados compartidos.

Vinculado a esto, una noción que surge del discurso es la de *“función materna”*. Al indagar sobre los roles que madres y padres cumplen en el cuidado infantil, se acepta por un lado que la figura de apego pueda darse tanto con la madre como con el padre así como con otra figura adulta, pero siempre y cuando ésta cumpla la *“función materna”*. Observamos en este término cómo conviven en el mismo discurso símbolos que refuerzan el carácter único del rol materno con argumentos que abren otras posibilidades que permiten una distribución más equitativa del cuidado.

“(…) uno ve padres excelentes y a veces madres con dificultades, lo veo en la práctica cotidiana, no es cuestión de si se es mujer o se es hombre, sino con la capacidad que un individuo tiene de materner, que viene de cómo uno fue maternado, si uno fue como hijo sostenido, cobijado, criado en forma más o menos adecuada; luego uno va a poder darle lo mismo y te va a surgir espontáneamente seas hombre o mujer”. (Mujer, profesional de la salud mental).

Otra dimensión central del buen cuidado, para psicólogos/as, psiquiatras y educadores/as es la singularidad de cada niño/a y la de su familia.

"(...) cada niño es diferente y eso no es sólo literatura. Los engarces neuronales que se hagan en cada ser humano dependen de factores genéticos y ambientales, por eso ninguna persona es igual a la otra y hay que ser capaz de establecer un vínculo con cada niño como es cada niño". (Mujer, autoridad educación).

Este punto tiene especial relevancia a la hora de pensar en los cuidados de calidad que puedan ofrecer los centros infantiles ya que está fuertemente vinculado a la cantidad de adultos por niño/a en cada centro, si bien abarca también otros aspectos.

La importancia de respetar la singularidad de cada niño/a también implica pensar en las ofertas de cuidado que mejor se adapten a esta singularidad y a la realidad familiar. En este sentido, se problematiza la idealización y la solución de política masiva aplicada a toda la población, contrapuesta a una propuesta personalizada.

El enfoque médico

El enfoque médico, sobre todo el de los y las pediatras no psiquiatras, tiende a ser más dogmático, y es aquel que presenta mayor homogeneidad. Este discurso se presenta más rígido en comparación con el que denominamos psicológico- educativo, en el que suele aparecer un nivel mayor de flexibilidad. En este enfoque, a la hora de las recomendaciones sobre el buen cuidado así como en la de definición del mismo, la centralidad está puesta en los aspectos sanitarios del cuidado: el garantizar la lactancia materna y la prevención de enfermedades.

La centralidad que tiene para este enfoque la lactancia materna, y las recomendaciones acerca de la importancia de que los/as niños/as menores de dos años permanezcan cuidados en el hogar para prevenir enfermedades, lleva a que este enfoque sea más "familista" que el anterior, y que sea entonces menos habilitador para la perspectiva de género y derechos, dado que refuerza en mayor medida que el anterior los roles de género tradicionales, manteniendo a las mujeres como principales cuidadoras.

"yo creo que las madres tendrían que estar más tiempo con los hijos, por lo menos seis meses con los hijos, entonces ya ahí es otra cosa que dejar al niño con quince días en una institución, habría que respetarlos, la lactancia materna es fundamental; además en un país chico como éste con poca gente tendría que apostar a la primera infancia". (Mujer, profesional de la salud mental).

"El jardín es algo bueno por el estímulo pero a partir de la primera dosis de vacunas completa, con los refuerzos. (...) Tenés la problemática de las enfermedades respiratorias, tenés que manejarlo con eso. Tenés que ver los pro y los contra. A mí me encantaría que estuviese en casa, y si le puedo dar todo yo mejor." (Varón, profesional de la salud).

Como observamos en esta cita, los componentes centrales del cuidado para el enfoque médico no son los mismos que para el enfoque psicológico educativo, en el que se remarcaba la importancia de la afectividad y los vínculos estables. En este caso, el enfoque médico destaca la promoción de hábitos como elemento central del cuidado, despersonalizando el vínculo entre cuidador/a - niño/a.

La anterior cita deja la impresión de que la importancia del/la cuidador se basa en un saber que hay que transmitir al niño/a, pero no incluye la afectividad como aspecto central. Por otra parte, este enfoque a diferencia del anterior, no enfatiza en la singularidad de cada niño/a y en los procesos individuales, sino en la generalidades que presentan todos/as los niños/as según su edad. En este sentido, se trata de un enfoque que se centra en las regularidades más que en las singularidades, por lo que tampoco se observa un énfasis en el proceso de construcción del sujeto como en el enfoque anterior.

“Los componentes del cuidado siempre son los mismos, sólo dependen del grupo etario: promoción de hábitos saludables, promoción del aseo, prevención de accidentes, estimulación oportuna para el desarrollo integral. Van cambiando en función de la edad”. (Varón, profesional de la salud).

Es importante tener presente que el discurso médico goza de importante respeto y legitimidad en la sociedad, incidiendo fuertemente en las prácticas, sobre todo en los aspectos de crianza de la primera infancia, por lo que las consecuencias en las prácticas de cuidado, tanto si es posible llevar adelante sus recomendaciones como si no lo es, pesan fuertemente en la experiencia de las familias respecto a las decisiones y estrategias de cuidado. Asimismo, es probable que en la mayoría de las familias, el contacto con el saber experto en la etapa de 0 a 3 años, se dé fundamentalmente con el personal médico –a partir de los controles sanitarios– de forma más frecuente que con el resto de las disciplinas que forman el saber experto.

En este punto es relevante señalar que, según evidencia la Encuesta sobre Representaciones Sociales del Cuidado, si bien un tercio de la población consulta en primer lugar a sus madres sobre los aspectos de crianza, la cuarta parte de las mujeres consulta en primer lugar a los médicos o personal de la salud, lo que muestra el lugar de privilegio que tiene este saber en las prácticas y representaciones del cuidado infantil.

El enfoque político

El enfoque de los/as decisores de política pública o expertos/as en políticas de infancia focaliza en aspectos macro de la política en construcción, siendo menos problematizador respecto a la conceptualización sobre el cuidado infantil. Al indagar acerca de los significados del cuidado de calidad en los niños/as, las respuestas se centran en las grandes decisiones que se están discutiendo en el marco del Sistema de Cuidados.

“La calidad está dada por tener la máxima cobertura posible, los servicios y en eso está incluida la infraestructura, y cuestiones vinculadas obviamente a la retribución de la gente que eventualmente participe en cualquiera de las modalidades”. (Varón, autoridad infancia).

“Estamos convencidos de que necesariamente hay que avanzar, descentralizar, desconcentrar, la mayor territorialización, la coordinación interinstitucional; son para nosotros una cuestión de calidad en este sistema y la posibilidad real de tener decisiones relativamente ágiles, eso iría en una línea de desburocratización; la gestión de los servicios y la supervisión externa e interna de los mismos son presupuestos elementales”. (Varón, autoridad infancia).

Por otra parte, en este enfoque se observa al cuidado como inversión social, más que como derecho de todas las personas. Se aprecia una visión del cuidado que podríamos llamar economicista, que basa su interés en los frutos que tendrá la implementación de una política de cuidados en la reducción del gasto futuro debido a que la sociedad afrontará menores costos. En este sentido, desarrollar políticas de cuidado contribuirá a afrontar de mejor manera los grandes problemas sociales presentes, y por tanto es racional invertir en ellas. Es en este sentido que señalamos que no hay una conceptualización del cuidado como derecho que el Estado debe garantizar porque es su deber, sino más bien una visión instrumental donde el Estado debe afrontar estas políticas con la finalidad de solucionar futuros problemas.

“En el grupo de 0 a 3 años es donde se gana el partido, donde la inversión tiene su mayor fruto en el futuro, las oportunidades que no le das al chico son oportunidades que muchas veces dejan marcas para el resto de la vida”. (Varón, autoridad salud).

“(..) las enfermedades crónicas no transmisibles, los problemas del aprendizaje, el estudio, el rezago, la adicción, son los problemas que nos abruman y tenemos evidencia de que estos problemas se generan en la primera infancia, por tanto es criminal no pensar en políticas a promover cosas buenas en la primera infancia”. (Varón, autoridad salud).

En este caso, es importante tener en cuenta que las decisiones últimas sobre la política de cuidados recaen en estos actores, por lo que es crucial identificar cómo dialoga este enfoque con la perspectiva de género y derechos. Del análisis de este enfoque, parece presentarse cierta dificultad para que la perspectiva de género y derechos esté garantizada en el marco de estas macro decisiones centradas en la reducción de costos y problemas futuros, y no en los sujetos del cuidado. Este enfoque podría incidir en la definición de políticas que resuelvan las necesidades de cuidado de la población desde un supuesto ideológico de protección a las madres y no de garantía de derechos. Estos serían los supuestos ideológicos de un régimen familista de provisión del bienestar (Aguirre, 2008). De esta manera, podrían desarrollarse estrategias de conciliación trabajo y cuidados pero que mantengan la responsabilidad del bienestar familiar en las familias, así como la división sexual del trabajo a partir de políticas subsidiarias. En otro sentido, abordar los cuidados como derecho y desde un modelo desfamiliariza-

dor implica asumir la responsabilidad del Estado como garante de este derecho, siendo la unidad del beneficio el individuo (ciudadano o ciudadana) y no las familias.

“(...) nosotros tenemos clara la necesidad social de cuidados de menores de un año, no necesariamente en los sectores más pobres, pero sí en las mujeres que tienen la necesidad de salir a trabajar”. (Varón, autoridad infancia).

De acuerdo con esta concepción, el cuidado es un derecho universal, y no un derecho particular, de mujeres que cuidan o de grupos de personas dependientes. Así, Pautassi (2010) señala que no se trata de reconocer la existencia de ciertos sectores sociales que tienen necesidades no cubiertas, sino de reconocer la existencia de personas que tienen derechos que pueden exigir o demandar, esto es, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas de parte de otros y, por consiguiente, al establecimiento de mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad.

Para esta autora, tampoco se trata de promover únicamente una mayor oferta de cuidado –de por sí indispensable– sino universalizar la responsabilidad, la obligación, la tarea y los recursos necesarios para el cuidado. Será la única forma que trascienda los compromisos inmediatos y que se inserte como un derecho humano fundamental: el derecho a ser cuidado y a cuidar.

Cuadro I. Tres enfoques en el discurso experto sobre el cuidado infantil

	Psicológico-educativo	Médico	Político
Conceptualización	Profundo	Homogéneo	Pragmático
Dimensiones claves	Singular (niños/as y familias)	Regularidades	Cuidado como inversión
	Vínculos estables y de calidad	Aspectos sanitarios del cuidado	Visión economicista
	Importancia de la dimensión afectiva	Importancia de aplicar conocimientos	Desarrollo infantil como fin
	Alta valoración del cuidado como función social		
Recomendaciones	Problematizador	Poco flexible	Soluciones macro
Dimensión de género	Más cercano a la perspectiva de género	Niños/as como centro	Derechos de infancia

Fuente: elaboración propia.

Cuidado familiar, en domicilio o en centro infantil ¿hay recetas unánimes?

El cuidado familiar

El rol de las familias en el cuidado infantil fue abordado con los/as expertos/as para conocer cuáles son las recomendaciones respecto a las funciones que deben ser llevadas adelante por las familias, independientemente de que los/as niños/as concurren a un centro infantil.

Una tendencia que aparece con claridad es la de otorgarle a las familias ciertas funciones exclusivas. Pero esta tendencia se contrapone con la idea de que cuidadores/as estables y formados/as en el marco de instituciones de calidad pueden también brindar cuidados de calidad. La primera respuesta es asumir que hay funciones que son propias de la madre y el padre, pero luego, al indagar más sobre éstas, se hace difícil identificar o expresar claramente cuáles son.

“Es que hay cosas que tienen que estar los padres. Desde que les cambiás un pañal, hasta que lo vestís y lo bañás. El contacto que puede tener con el padre aunque sea dormirlo, son cosas básicas que tienen que estar los padres. El hecho de que el niño desarrolle el apego le va a permitir después desarrollar confianza. Cómo puede enfrentar al mundo si el padre no lo mimó y no lo cuida, si no es seguro dentro de la casa. Son funciones básicas, que lo toque el padre, la madre. Si le duele algo, que esté la madre, el padre, y bueno si no un familiar”. (Varón, profesional de la salud).

Si bien existe esta dificultad de mencionar funciones exclusivas de madres y padres, surge con mucha fuerza en el discurso experto, el papel central que tiene el tiempo diario que madres y padres destinen al cuidado directo como elemento de calidad del cuidado. En la siguiente cita se observa cómo aún en el marco de jornadas extensas de trabajo de los padres y madres, se valora muy necesaria la dedicación de éstos/as al cuidado directo. En lo que se resume como “función materna” (que luego es relativizada como función de un/una referente familiar), se expresa una función familiar que aparece como insustituible, donde importa la calidad y la cantidad de tiempo destinado.

“La cantidad hace a la calidad. Las pocas horas tampoco son la calidad. Las cosas que se ven en la consulta, cuando la madre llega a las siete de la tarde, el nene llora porque no los vio en todo el día, se genera una relación de tirantez. La función de madre, es la función de madre, la función materna: cariño, empática comprensión, sostén, tiempo de jugar, tiempo de no tener que estar a la orden. Tiempo que si quiero veo la tele, que no la uso como niñera, tiempo que no es de agenda completa sino de cariño. En definitiva es sentido común que se tiende a perder por cosas de la cultura. La cultura también colabora a hacer creer que cumple con mandarlos a un buen colegio. Una madre sabe que el niño necesita de la función materna. El tiempo de afecto y de no hacer nada, no se sustituye con un buen colegio”. (Mujer, profesional de la salud mental).

Esta cita y la siguiente claramente responden a la situación que viven principalmente las clases medias y medias altas, aunque no exclusivamente, donde padres y madres están insertos/as en el mercado laboral a tiempo completo.

"(...) son niños de agenda, desde las 8 de mañana hasta las 7 de la tarde con muchas actividades y no tienen una relación de calidad con los padres. Hay madres que piensan que el único rol es darle de comer, acompañarlo a las reuniones de padres y llevarlos a un jardín nombrado". (Mujer, profesional de la salud mental).

"(...) hay que apostar a la calidad pero tiene que haber horas de exposición con los hijos, en dos horas puedes tú sacarte las ganas y sentir el rol materno pero para el niño no alcanza dos horas con los padres, por mucha calidad no va a sustituir las otras 22 horas". (Mujer, profesional de la salud).

Por otro lado, observamos cómo si bien se menciona la realidad laboral de padres y madres, al culpabilizar o hacer alusión a quién está fallando en el rol cuidador, se hace hincapié en la madre, evidenciando una mayor asignación de responsabilidad y falta en el caso de las mujeres que en el de los varones. Claramente esta mayor culpabilización femenina deriva de la división sexual del trabajo que en el caso del cuidado exige de las mujeres el cuidado directo, con dedicación de mayor tiempo que en el caso de los varones. El hecho de que el discurso experto, en este caso el discurso médico, refuerce este mandato de género, tiene su impacto en el comportamiento de las mujeres. Como ha sido evidenciado en las Encuestas de Uso del Tiempo así como en las Encuestas Continuas de Hogares, son las mujeres quienes dedican más tiempo al cuidado de dependientes así como las que se abstienen, retiran o limitan su participación en el mercado laboral para afrontar el cuidado de dependientes con importantes consecuencias en su desarrollo profesional y en su autonomía económica actual y futura. De esta manera, son ellas quienes asumen los costos de la escasa oferta de cuidados, sobre todo de niños/as menores de tres años. Partiendo de que estas representaciones sociales se encuentran hoy tan presentes en el discurso experto y en las prácticas de cuidado, se hace necesario que las políticas de cuidado contemplen la realidad de muchas mujeres trabajadoras que tienen serias dificultades para armonizar por razones de tiempo el trabajo de cuidados con el trabajo remunerado, y muchas otras que deciden no participar del mercado laboral debido a la escasez de tiempo.

Como se observa, el tiempo es una dimensión destacada por el discurso experto que hace al cuidado de calidad. Siguiendo a Ramos Torre (2011), las relaciones sociales en su conjunto y la igualdad de género, en concreto, justamente se juegan en ese plano decisivo en el que el tiempo se muestra como un entorno exigente al que se acopla la acción y sus actores. De ahí que las políticas sociales y las políticas de género deban ser diseñadas como políticas del tiempo. Para este autor, los cuidados están temporalizados de una forma que no resulta trivial. Pensando en el tiempo como recurso, en el caso del cuidado este recurso- tiempo no sólo se concibe en términos económicos, sino también en otros términos, ya sean morales o políticos. De esta manera, señala que el recurso- tiempo no se puede limitar a ser dicho y vivido como un puro recurso *económico*. Es también, y de forma muy principal, un recurso *moral* que no se administra según la lógica de la utilidad, la rentabilidad y el beneficio, sino según las determinaciones de un código en el que priman las distinciones que enfrentan lo

que se debe y no se debe hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Así, cuando alguien utiliza su tiempo en los cuidados no lo hace necesariamente sólo según un cálculo de utilidades, sino también en cumplimiento de ciertas normas morales en las que cree o por las que es creído.

Esta concepción del tiempo nos es muy útil para comprender la incidencia que el discurso experto, desde su posición de prestigio, tiene en las decisiones de las familias y particularmente de las mujeres a la hora de dedicar tiempo a una u otra actividad. Lo que queremos señalar es que este mandato del tiempo diario de cuidado directo, significa para muchas mujeres un motivo de tensión, dado que existe una imposibilidad real de disponer de tiempo para el cuidado, debido al tiempo que insume el trabajo remunerado así como el resto de las actividades de trabajo no remunerado, que como es sabido está desigualmente distribuido entre varones y mujeres.

Según la Encuesta de Uso del Tiempo realizada en 2007 en Uruguay, las mujeres destinan en promedio 36,3 horas semanales al trabajo no remunerado mientras que los varones tan solo 15,7; lo que implica que las mujeres invierten más del doble del tiempo que los varones a este trabajo. Por otra parte, las mujeres de las familias en etapa inicial, es decir, aquellas que tienen hijas/os menores de 6 años, son las que presentan el mayor tiempo de dedicación al trabajo no remunerado (57,2 horas semanales promedio). Cabe señalar también que el trabajo no remunerado de las mujeres se incrementa en 28 horas al pasar de la pareja joven sin hijos a la familia en etapa inicial (con hijos/as pequeños/as). Específicamente respecto al tiempo dedicado al cuidado infantil, la dedicación de las mujeres ronda las 17 horas semanales, mientras que para los varones alcanza las 10 horas semanales promedio (INE, 2008). Por tanto, la evidencia indica que el deber ser del cuidado que mandata a las mujeres a encargarse en mayor medida del cuidado directo, tiene un impacto claro en las prácticas de varones y mujeres.

Roles de madres y padres, entre el discurso políticamente correcto, la reproducción de roles tradicionales y la ansiada equidad de género

Como ya fuera mencionado, el discurso experto presenta diversas tendencias sobre el rol de las madres y los padres en el cuidado infantil. Aun dentro de un mismo enfoque se observan contradicciones sobre este tema, todo lo cual da cuenta del momento de transición en el que nos encontramos, donde ciertas posturas rígidas en torno a los roles femeninos y masculinos en los cuidados parecen no tener sostén desde el saber experto, el cual recomienda la participación de ambas figuras.

“(...) esto también ha ido cambiando, cuando se empiezan los primeros estudios en relación a los primeros vínculos eso estuvo muy centrado en la madre directamente, eso también tuvo que ver con el mito del amor maternal, es un mito, es una construcción y de alguna manera lo que tiene que haber son figuras referentes, estables, de relación continua con la cual el niño pueda desarrollar esas conductas de apego”. (Mujer, profesional de la salud mental).

En general, el discurso experto desnaturaliza el “amor materno” reconociendo su historicidad como noción construida culturalmente, y aceptando que las mujeres no son necesariamente buenas cuidadoras o expertas cuidadoras. Respecto a las funciones exclusivas de las madres, la única que se identifica es la lactancia, si bien se sostiene que no debe asumirse como algo dado que las mujeres desean naturalmente amamantar o que disfruten de hacerlo. Por lo tanto, el amamantamiento no debería constituirse en una tarea forzada para todas las mujeres.

“La única función que sólo puede hacer la madre es la lactancia, después tanto madre como padre pueden hacerlo todo. Sin duda que los demás cuidados son compartidos. Es recomendable”. (Varón, profesional de la salud).

“La teta como cosa biológica, pero si la teta es dada a disgusto y una mamadera es dada con amor, dale la mamadera”. (Mujer, profesional de la salud mental).

Encontramos en la última cita, la presencia nuevamente de la afectividad como el elemento más importante en el vínculo o cuidado de calidad, el cual se sobrepone a las condicionantes biológicas.

Sobre las funciones de los varones, el discurso experto señala que el rol que el padre pueda jugar durante la lactancia es muy importante.

“No hay diferenciación, salvo la de amamantar, pero que el papá puede colaborar con esa instancia para que el entorno sea en paz (...). En la medida que se entienda que son complementarios mejor para todo el mundo”. (Mujer, autoridad educación).

Por otra parte, se habilita la posibilidad de que el padre sea el adulto referente en algunos casos, sin que ello afecte el cuidado de calidad.

“Veo el vínculo de los niños con los padres, depende del trabajo de cada uno, hay niños que su vínculo más fuerte es con el padre. Si alguien lo va a tocar (en la consulta) mira al padre primero. No creo que sea mejor o peor para el niño, el rol está”. (Mujer, profesional de la salud).

“(...) el niño necesita a ambas figuras, pero para su desarrollo es importante ambas figuras. La institución tiene que promover esto, forma parte de los derechos que tiene el niño”. (Mujer, autoridad educación).

El discurso experto reconoce que hay perspectivas más biologicistas que subrayan que hay ciertos aspectos biológicos que podrían establecer una diferencia en el cuidado que puede brindar el padre o la madre, más allá de la lactancia. Estas diferencias estarían relacionadas con la experiencia del embarazo. Pero el propio discurso, sobre todo el psicológico sostiene que este aspecto biológico ha sido enfatizado por la cultura, negando a los varones el poder desarrollar las mismas cualidades a partir de la práctica, lo cual es posible. En este sentido, se reconoce y recomienda que el padre

varón, aun sin haber experimentado el embarazo pueda recuperar esta desventaja a partir del contacto cercano con el recién nacido/a. Se visualiza claramente entonces, siguiendo este argumento, la necesidad de licencias paternales más extensas de las que actualmente existen en Uruguay (que otorgan tres días en el caso de los empleados privados y diez días para los públicos), para posibilitar el contacto íntimo recuperando las posibles desventajas respecto a la experiencia del embarazo que tiene la madre.

“(...) lo que se da inicialmente con la madre por la propia cuestión biológica que viene ya como predeterminada por todo lo que implicó el embarazo, y después quizás hay algunos estudios que muestran que desde esa impronta más biológica hay capacidad en la preocupación maternal primaria que permite que a la madre le sea más fácil empezar a comprender esas señales del bebe con respecto a sus necesidades, pero, si eso es bastante acompañado en la diaria por el padre él fácilmente puede empezar a entenderlo y a desarrollarlo”. (Mujer, profesional de la salud mental).

Por otro lado, reconociendo el carácter social y construido de los roles y competencias de género, se afirma que varones y mujeres son complementarios en el cuidado de los niños/as.

“(...) realmente ves los beneficios que tienen para el papá, para el niño y para la madre, hay aspectos que se comparten y aspectos que se complementan desde las propias particularidades del género, que enriquecen al desarrollo, hay estudios que han mostrado que el juego del padre, ese juego más físico que tiene que ver con el juego de lucha, eso que las madres no nos animamos a hacer, tiene una función en la autoregulación en los impulsos del niño que se ve potenciada con ese juego que hace con el padre; con la madre desarrolla otras competencias que tienen que ver con el vínculo que establece la mamá que es más de hablar, de lo que tiene que ver con el contarle, y que se complementan (...). (Mujer, profesional de la salud mental).

Simultáneamente a esta posición más favorable a la equidad de género en el cuidado –que está presente en el discurso psicológico educativo–, se observa la presencia de ciertos mandatos tradicionales de género que suelen escapar del discurso políticamente correcto, expresándose en cierta terminología o naturalización del saber materno. Claramente la posibilidad de las mujeres de amamantar, aparece como la razón principal que le otorga centralidad a su presencia.

“Hay roles insustituibles como el de la mamá, más allá de que el padre pueda y deba, hay temas biológicos como el tema de que las mujeres tengan la posibilidad de dar la teta tiene que ver con el desarrollo de la mamá y también con la salud”. (Mujer, experta infancia sociedad civil).

En este sentido, la posibilidad del amamantamiento se plantea como obligación y no como opción, dado que se le asigna un rol determinante en la salud del niño/a y en el propio desarrollo de la mujer. Estas posiciones están más presentes en el caso del enfoque médico.

Encontramos entonces cómo conviven discursos más habilitadores de la presencia masculina y de la posibilidad de que la lactancia sea sustituida cuando no están dadas las condiciones para que se lleve a cabo de la mejor manera, con discursos que enfatizan en que es insustituible y determinante para la vida del niño/a.

Cuidado en centro infantil, ¿hay una edad adecuada?

El primer año de vida es señalado como central para el posterior desarrollo del niño/a, por lo que el discurso experto remarca la importancia de garantizar cuidados de calidad en esta etapa. Ahora bien, respecto a quiénes deberían proporcionar ese cuidado, la tendencia más marcada es que sea el entorno familiar, destacando sobre todo la importancia de la atención personalizada. En este sentido, se establece una clara separación entre el primer año de vida y lo que suceda a partir de este momento. Parecería que el mayor consenso se ubica en que durante el primer año de vida el cuidado se desarrolle dentro del domicilio, aunque como veremos más adelante, algunos/as expertos/as tienden a relativizar esta postura más que otros/as.

“El primer año es fundamental en la estructuración psíquica. Lo ideal es que esté en su casa, no en guarderías por más mejor calidad que tengan y sofisticadas que sean”. (Mujer, profesional de la salud mental).

“(...) hay que tener en cuenta el grupo etario, no es lo mismo el cuidado en el primer año de vida donde el niño siempre es dependiente de la familia, los cuidados están muy centrados en el hogar o la familia. Hay que favorecer el cuidado familiar en el primer año”. (Varón, autoridad salud).

“Una cosa es entre cero y uno o entre uno y dos y en segundo lugar vendría el bloque de dos a tres. Esta diferenciación marca en principio algunas prácticas recomendadas, ¿no?; claramente entre cero y uno todo indicaría que es mejor el cuidado dentro del hogar”. (Varón, autoridad infancia).

“Antes del año es impensable la institucionalización de un niño, ahí hay discusiones (...). Antes del año es discutible, después del año no se discute más”. (Varón, autoridad infancia).

El discurso médico plantea como situación ideal que los/as niños/as concurren a un centro infantil luego de los dos años cuando hayan finalizado la primera dosis de vacunas.

“Ideal sería que lo cuidaran sólo los padres. Yo tengo un bebe de dos meses. Lo ideal es que estemos los dos, pero somos los dos médicos. Como segunda opción sería un familiar. El jardín es algo bueno por el estímulo pero a partir de la primera dosis de vacunas completa, con los refuerzos. A los dos años”. (Varón, profesional de la salud).

El enfoque médico se centra en los beneficios del cuidado en el hogar, asociados a la prevención de enfermedades. En este sentido, nos interesa señalar que la posibilidad del cuidado exclusivo en el hogar durante los primeros dos años de vida, no es viable para muchas familias y que es muy probable que las mismas vivan esta situación con culpa.

Desde el enfoque psicológico- educativo aparece más claramente la relatividad en la postura respecto a la edad de concurrencia de los niños al centro infantil. Se problematiza en mayor medida que en el discurso médico los recursos con los que cuentan las familias para sostener el cuidado familiar, anteponiendo factores como la estimulación, el ambiente saludable, la generación de hábitos, entre otras ventajas de los centros infantiles cuando las familias no cuentan con los recursos para brindar este tipo de contención.

“No hay una fórmula. Yo voy construyendo con el otro. Hay veces en que es mejor que se quede con la mamá y otras veces no. Por ejemplo, una mamá muy aprensiva con el hijo, esto uno lo ve en los centros infantiles, se intenta y si no funciona que vaya al jardín y se está sufriendo es mejor que se quede con la mamá, no lo forzás porque es un lugar de sufrimiento para ella y para el niño también”. (Mujer, profesional de la educación).

“Hay familias que es más saludable que el niño vaya dos tres horas a la guardería, por el vínculo patológico con la madre. Es más saludable que que esté todo el día con la mamá. No sabría decirte qué es lo mejor en términos generales, ni siquiera como madre. Cada situación es muy particular”. (Mujer, educadora).

Resulta claro que los ámbitos de inserción profesional de los/as entrevistados/as influyen en el tipo de respuestas sobre la edad ideal de concurrencia a un centro infantil. Aquellos/as que tienen mayor contacto con población más vulnerable en términos socioeconómicos, suelen problematizar más la idea de la casa como lugar ideal para el cuidado infantil. Esto en términos de la infraestructura del hogar como de las capacidades de estímulo que puedan brindarse.

“En determinadas condiciones de vida sería muy bueno que el niño tuviera la posibilidad de tomar contacto con otros, hay contextos muy pobres y violentos, necesariamente se va a los espacios sociales más colectivos”. (Mujer, profesional de la educación).

“Es todo muy delicado, si vos decís que con dos años, pero si en el hogar no están en buenas condiciones y el chico no está bien cuidadito”. (Mujer, profesional de la salud mental).

Sin embargo, en general también en este discurso está presente la idea de que antes del año y medio o dos años la situación ideal es que niños y niñas sean cuidados/as en su casa.

“(...) hay que pensar qué recursos tiene la familia, por lo general uno tiende a pensar que el ámbito de los niños de cero a tres años es la casa, con sus pertenencias, su cama; lo

ideal sería que pudiera ser criado dentro de su casa, con una persona que esté dedicada a él y a algún otro niño". (Mujer, profesional de la salud mental).

En este sentido, se identifica también a este momento entre el año y medio y dos años como la edad más adecuada para el ingreso de los niños al centro infantil, en este caso por motivos vinculados a su desarrollo psicomotriz, al desarrollo del lenguaje oral, a su desarrollo emocional y a la necesidad de la socialización.

"(...) es diferente al niño de dos años que tiene otro nivel de autonomía y la socialización está en otro nivel, ya habla y juega con otros, tiene la capacidad también para jugar solo; es un salto impresionante, hay cosas que el niño va logrando que tiene que ver con poder tolerar mejor". (Mujer, autoridad educación).

La posibilidad del habla también se considera importante dado que permite al niño/a expresarle a sus cuidadores/as sus necesidades, así como a sus padres aspectos del cuidado en el centro infantil. Esto brindaría mayor seguridad a los padres que en el caso de niños/as que no tienen esta capacidad desarrollada.

"Ante todo está accediendo al lenguaje, tiene la posibilidad de (a su estilo) transmitir algo de lo que le sucede a los cuidadores y a los padres". (Mujer, profesional de la salud mental).

Como se observa en la siguiente cita, si bien los dos años aparecen como la edad que presenta mayor consenso para la entrada de los/as niños/as al centro infantil, siempre desde este discurso psicológico- educativo, se relativiza más al respecto de establecer una edad aplicable a todos/as los/as niños/as.

"Los dos años es por fijar una edad, porque en esta edad es tan variado el proceso, el niño puede empezar a hablar a los 16 meses o capaz que empieza a los 2 años, en unos meses cambia mucho por lo cual el ideal es fijarse en cada caso". (Mujer, profesional de la educación).

Por otra parte, en el caso del discurso que hemos denominado psicológico- educativo, se incluye la satisfacción de la persona cuidadora como factor fundamental del cuidado de calidad. En este sentido, aun cuando estén dadas las condiciones para el cuidado domiciliario o familiar, si quien está a cargo del cuidado no se encuentra satisfecho/a con la tarea o con los costos de la misma, es preferible que el cuidado se desarrolle en un centro infantil. En este sentido, se entiende que puede ser negativo para los niños/as que la persona a cargo del cuidado, por ejemplo las madres o abuelas no estén satisfechas con la decisión de relegar su participación en el mercado laboral para dedicarse exclusivamente al cuidado.

"(...) si dejan de trabajar pero en realidad están pensando que están perdiendo su carrera profesional, no pudiendo tener el ingreso que desearían, ahí se genera una situación que el niño la percibe y eso también complica el desarrollo". (Mujer, profesional de la salud mental).

Si bien como se ha señalado hay algunas variaciones respecto a la edad ideal de concurrencia de los/as niños/as al centro infantil, hay consenso en que los centros de cuidado infantil son beneficiosos para el desarrollo de los niños/as así como para quienes asumen el cuidado en las familias. En primer lugar, se señala que el centro infantil ofrece la posibilidad de la socialización y estimulación, que es definida como una necesidad propia del desarrollo infantil. En segundo lugar, los centros infantiles brindan la posibilidad de realizar un trabajo de apoyo a las familias en el que se transmiten pautas de crianza saludables. Esta ventaja es señalada sobre todo en el caso de los centros CAIF, que como es sabido están orientados a la población de bajos recursos económicos y es remarcada fundamentalmente en el caso de las mujeres que tienen a cargo de forma exclusiva el cuidado infantil. Los beneficios que aporta el centro infantil dependen también de las características que ofrezca éste, pero además de que estén dadas ciertas condiciones en el desarrollo del niño. Estas condiciones tienen que ver fundamentalmente con la edad y nivel de desarrollo, pero también con haber experimentado una afectividad segura. De esta manera, hay ciertas condiciones afectivas que tienen que estar dadas para que los centros infantiles impacten positivamente.

El cuidado domiciliario remunerado

Respecto a la posición sobre el cuidado en el hogar realizado por un/a cuidador/a contratado/a, los/as expertos/as se encuentran divididos entre quienes recomiendan esta opción porque mantiene al niño/a en su hábitat y entorno cercano, no exponiéndolo además a los riesgos en su salud, y quienes entienden que el cuidado de una persona que está sola con el niño/a no representa la opción más segura.

“Con las condiciones necesarias, también lo digo como madre yo opté por esa opción porque es el hábitat del bebé, su siesta, su cunita, sus olores, lo que representan las cosas de sus padres, los libros que miró con la madre el día anterior, está en su micro mundo. Estando las condiciones óptimas, en cuanto a los recursos de los padres para contratar una persona de confianza y estable que esté en su casa, para mí es lo ideal pensando como profesional y como madre”. (Mujer, profesional de la salud mental).

Quienes no recomiendan esta opción, argumentan por un lado que frente al centro infantil, la persona en el hogar ofrecería menos oportunidades de estímulo para el/la niño/a.

“Yo te diría que cada caso es muy particular, eso es lo que la clínica me ha mostrado; cuando entrevistás a una persona para dejarle a un niño es muy difícil darte cuenta si esa mujer, podrás darte cuenta de cosas muy groseras, pero lo fino es muy difícil de notar, por eso creo que cada vez la gente los lleva más a instituciones. Un bebé agota, por eso a veces cuando una persona se queda con un niño y tiene además un montón de cosas para hacer, capaz que el niño no está bien atendido, a veces en un instituto pueden apoyarse mutuamente”. (Mujer, profesional de la salud mental).

"(...) todo depende de con quién lo dejes, aun en situaciones económicas buenas se sientan a mirar la televisión y los niños quedan en el cochecito, y ese es un riesgo que se corre, si no se está muy atento". (Mujer, profesional de la educación).

Como ya fue mencionado, la idea de que la persona en el hogar ofrece menos seguridad a los padres es otra de las desventajas de esta modalidad de cuidado. Esto también es percibido por la población uruguaya como evidencia la Encuesta sobre Representaciones Sociales del Cuidado antes mencionada, que muestra que la población enviaría a sus hijos/as a centros infantiles antes de lo que los dejaría al cuidado de otras personas en el hogar.

"(...) también un adulto solo en un hogar con un niño que no habla, es un tema. Si no está preparado, si no hay un control bien hecho. Es un terreno que no lo ve nadie. Sólo el que está. Hay que pensarlo mucho. Yo creo que es mejor la institución, en todos los contextos. La empleada doméstica en estratos altos se ha visto de todo (...). En términos de políticas, si tuviera que poner el peso en algo, lo haría en lo institucional, yo sé que es más caro, pero sin duda". (Mujer, profesional de la educación).

"Si yo puedo tener a un familiar, prefiero a un familiar. En mi caso tengo la suerte de tener las dos abuelas. Esto va mucho en la confianza, va en cada uno, yo en este momento, capaz que porque es chiquito pero me parece que no sería mi primera opción". (Varón, profesional de la salud).

Se sostiene que si bien la formación es un aspecto que ayudará a establecer dicha confianza, la misma no se generará automáticamente. De esta manera, el centro infantil aparece como una opción más segura dado que permite mayores controles por la presencia de varios adultos/as.

"(...) respecto a las cuidadoras, según lo que yo vengo estudiando siempre hay como un riesgo mayor, en una institución educativa puede pasar que haya una educadora que en algún momento no cumpla la función como la tiene que cumplir, pero siempre hay otros adultos que pueden percibir la situación, que están en la vuelta y son capaces de cambiar esa situación; en cambio cuando estás solo con una persona que la familia no conoce, tengo varias experiencias de familias que vienen al jardín con situaciones muy complicadas en ese sentido (...)". (Mujer, profesional de la salud mental).

Por otra parte, también en este caso, encontramos que los ámbitos de inserción profesional inciden en la preferencia por este tipo de cuidado. Quienes tienen experiencia de trabajo con población de menores recursos, tienden a pensar que esta opción no es la deseable ni la posible, sobre todo en contextos de extrema pobreza.

"Me vuelvo a ubicar en el cantegril y pienso ¿cómo si viven ocho en esa habitación puedo pensar en una figura que vaya a cuidar a un bebé? No pasa por la estigmatización, pero mientras no se solucione el tema de la vivienda ¿cuál es la estrategia?". (Mujer, profesional de la educación).

Sobre el rol y cualidades de los y las cuidadores/as

La falsa oposición entre cuidadores/as y niños/as

La calidad de los cuidados está profundamente relacionada a las cualidades de las personas que cuidan y a las condiciones en las que se encuentran. Este binomio cuidador/a - niños/as suele estar presente en el discurso experto, pero se observan distintos grados de énfasis respecto a la mención e importancia que se le otorga a quienes cuidan.

Observamos que el enfoque proveniente de la psicología y educación suele desarrollar más la idea del aspecto relacional del cuidado, mostrando una preocupación más evidente en las personas que cuidan que la observada en los otros enfoques.

En el enfoque proveniente de los/as decisores/as de política pública de infancia, encontramos que si bien los dos sujetos que participan del cuidado están presentes, finalmente se hace un claro énfasis en los/as niños/as desde lo que consideramos una falsa oposición.

“(...) el núcleo es el desarrollo infantil, lo que debería prevalecer a la hora de definir políticas; independientemente del arreglo en términos de cuidados, ese tiene que ser el objetivo, el desarrollo infantil”. (Mujer, autoridad educación).

“(...) el sujeto central para nosotros son los niños y las niñas, hay otra postura donde se pone como centro a la mujer, no deja de ser importante; tenemos claro que hay una perspectiva de género, pero nosotros entendemos que el centro de nuestro planteo está en los niños”. (Varón, autoridad infancia).

Sin embargo, tal como señalan sobre todo quienes provienen de la psicología, centrar la atención sólo en los/as niños/as implica caer en una falsa oposición, dado que el cuidado de calidad implica necesariamente condiciones óptimas para las personas que cuidan. Desde esta perspectiva, no invertir en generar las mejores condiciones para quienes cuidan implica no invertir en el bienestar de los/as niños/as. Desde la perspectiva de género esto implica además no reconocer a los/as cuidadores/as también como sujeto de las políticas de cuidado.

Esta falsa oposición puede ser fácilmente saldada si retomamos la noción del cuidado como derecho. Habíamos señalado que el derecho al cuidado debe ser considerado en el sentido de un derecho universal de toda la ciudadanía, desde la doble circunstancia de personas que precisan cuidados y que cuidan, es decir desde el derecho a dar y a recibir cuidados. Esto implica por un lado el derecho a recibir los cuidados necesarios en distintas circunstancias y momentos del ciclo vital, evitando que la satisfacción de esa necesidad se determine por la lógica del mercado, la disponibilidad de ingresos, la presencia de redes vinculares o lazos afectivos. Por otro lado, el cuidado como derecho implica el derecho de elegir si se desea o no cuidar en el marco del cuidado familiar no remunerado; se trata de no tomar este aspecto como una obligación

sin posibilidad de elección. En este sentido, las políticas de cuidado no deberían entenderse como una prestación dirigida a las mujeres que buscan trabajar, bajo la falacia de que se debe “apoyar a las mujeres” que necesiten o quieran trabajar. Retomando a Pautassi, desde la perspectiva de derechos el cuidado es un derecho de todos y todas y debe garantizarse por medio de arreglos institucionales y presupuestarios, ser normado y obtener apoyo estatal. No es, por tanto, un beneficio para las mujeres y sí un derecho de quienes lo requieren (Pautassi, 2010).

Otro aspecto que se vincula con este binomio cuidador/a- persona cuidada refiere a los derechos de las personas que trabajan en el sector cuidados y al hecho de que el cuidado de calidad dependerá de que el/la trabajador/a tenga buenas condiciones de trabajo, realidad que actualmente no es la más frecuente. Según ha evidenciado Aguirre (2011), el 96% de las personas ocupadas en cuidados son mujeres, siendo los cuidados uno de los sectores de los servicios sociales donde hay mayor predominio femenino. Señala la autora que la segregación que caracteriza estos empleos se acompaña de su desvalorización, la cual se deriva de la división sexual del trabajo. Así, la asignación de las mujeres a la esfera familiar y doméstica ha legitimado su desventaja en la esfera laboral y su ubicación en empleos poco calificados. De esta manera, las cualidades que se reconocen como específicamente femeninas no se corresponden con una valoración en el mercado de trabajo, debido a que son atribuidas a las mujeres en función de su “naturaleza” o porque fueron adquiridas por socialización. Según Aguirre, la literatura especializada muestra que en muchos países la creación y expansión de los servicios sociales de atención a la dependencia mantiene la feminización de las ocupaciones del sector, no mejora la valoración del trabajo de cuidados y los niveles salariales permanecen bajos. En Uruguay se trata de un sector desvalorizado, mal pago, con un nivel de aporte a la seguridad social significativamente menor al de otras ocupaciones (6 de cada 10 cuidadores/as no realizan aportes).

Profesionalización vs sensibilidad y amor

Respecto a cuáles son las cualidades que deben tener las personas que cuidan para brindar un cuidado de calidad a los niños y niñas, encontramos por un lado quienes hacen un fuerte énfasis en la formación mínima necesaria y quienes destacan otras cualidades vinculadas a la sensibilidad de las personas para comprender las necesidades de los/as niños.

“El cuidado de calidad no depende sólo de una formación particular, de prepararte, hay algo propio de la naturaleza humana, del perfil sensible del adulto cuidador, de poder contactar con la infancia por tener muy bien resuelta su propia infancia, que tallan claramente en la calidad de los cuidados”. (Mujer, autoridad educación).

Observamos cómo no resulta claro identificar con precisión cuáles serían las cualidades que permitan establecer un perfil de cuidador/a más allá de lo formativo. Esta dificultad que presenta el discurso experto para poder objetivar las cualidades necesarias para poder brindar un cuidado de calidad no es alentadora desde la perspectiva

de género, dado que la asociación con lo natural e intangible, tiende a mantener a las mujeres atadas al cuidado, dado que son a quienes socialmente se les ha asignado este don innato del cuidado como ya sido mencionado.

Por otra parte, encontramos quienes sí enfatizan en la profesionalización del oficio, que debe pesar más que el aspecto más intangible.

“la buena madera no alcanza, mas sin buena madera no se puede, hay algo que debería poder permitir comprender cuál es este lugar en relación al niño y en relación a la familia, es como complejo, va con una profesionalidad en cierta forma más que con una cuestión amorosa y de responsabilidad”. (Mujer, autoridad educación).

“Tiene que tener capacidad de observación, de comunicación, de relacionarse afectivamente en un vínculo sano, positivo, que se enfoque al crecimiento del niño. No que sea, es mío, tengo a quien mimar, lo agarro lo aprieto y no lo dejo crecer”. (Mujer, autoridad educación).

En síntesis, podemos señalar que el perfil de los/as cuidadores/as infantiles se encuentra en construcción, donde aún no es posible distinguir claramente las exigencias formativas ni surge con claridad las cualidades requeridas. De esto se desprende que para poder valorar esta tarea y legitimarla como trabajo atractivo, es preciso realizar los esfuerzos para poder objetivar esas cualidades, visualizar las exigencias de las tareas y remunerarlas adecuadamente, de forma de que tanto varones como mujeres puedan sentirse atraídos a llevarlo a cabo.

Reflexiones finales

El objetivo principal de este estudio consistía en comprender los significados del buen cuidado infantil e identificar las dimensiones claves del mismo presentes en el discurso experto. Uno de los hallazgos más importantes es la identificación de tres enfoques diferenciados dentro del discurso experto, con diversas conceptualizaciones y niveles de profundización teórica sobre el cuidado, así como con diversos énfasis respecto a las claves del cuidado de calidad, es un hallazgo de gran relevancia de este estudio. De esta manera, el discurso experto no es homogéneo respecto a los componentes claves del cuidado de calidad, lo cual representa un desafío importante para el diseño del Sistema de Cuidados.

Este estudio también se propuso analizar cómo dialoga el discurso experto con la perspectiva de género y derechos. En este sentido, si bien los tres enfoques presentan diferencias respecto a la cercanía con esta perspectiva, se destacan algunas claves sobre todo en el discurso psicológico educativo que abren la posibilidad del ejercicio del cuidado desde una visión que respeta los derechos de todos los actores involucrados. En este sentido, uno de los aspectos destacados es la centralidad de la dimensión vincular de los cuidados infantiles. En la dimensión vincular quedan incluidas las dimensiones de afectividad, sostén emocional y la habilitación de la construcción del niño/a

como sujeto. La posibilidad de establecer vínculos estables y de calidad entre niños/as y cuidadores/as se presenta como uno de los componentes centrales del cuidado de calidad en la primera infancia. Este hallazgo resulta de particular importancia para la perspectiva de género al menos por dos razones.

En primer lugar, la centralidad de lo vincular se desplaza de las familias, ya que el saber experto reconoce la posibilidad del establecimiento de vínculos de calidad con otros sujetos cuidadores que no sean familiares. De esta manera, no ata la función cuidadora exclusivamente a las familias, lo cual permite compartir el cuidado con otros actores sin que el mismo pierda en calidad. Además de las familias, el cuidado puede ser llevado a cabo con otros actores como los centros infantiles y cuidadores/as remunerados/as y, al mismo tiempo, puede ser compartido entre varones y mujeres.

En segundo lugar, establecer vínculos de calidad conlleva buenas condiciones para ambos sujetos de la relación, por lo que la mejora en las condiciones de quienes cuidan es condición sine qua non del cuidado de calidad. En este sentido, no es concebible un vínculo de calidad, y por lo tanto el cuidado de calidad, si quienes brindan el cuidado no se encuentran en buenas condiciones emocionales, sanitarias, económicas, de realización personal, entre otras. Esta condición se presenta tanto si se trata de cuidadores/as remunerados como de no remunerados, ya sean familiares o no familiares.

Esta segunda consecuencia de la importancia de la dimensión vincular en el cuidado infantil, se conecta con el segundo gran hallazgo que se desprende del saber experto: la imposibilidad de pensar sólo en un sujeto del binomio cuidador/a-niños/as a la hora de las políticas públicas. El discurso experto se fragmenta en este caso, ya que los enfoques médico y político le otorgan el papel más importante a los niños y niñas a la hora de pensar en las políticas de cuidado. Pero el enfoque psicológico, al destacar el aspecto vincular del cuidado, enfatiza en ambos sujetos, lo cual tiene consecuencias claras para las decisiones de política pública.

Otro hallazgo que queremos destacar es que el perfil de los/as cuidadores/as infantiles remunerados/as se encuentra en construcción. Se observan dificultades en el discurso experto para objetivar las cualidades requeridas para las personas que cuidan. La necesidad de una buena formación específica es destacada, pero ésta debe combinarse con otras cualidades y competencias que aparecen difíciles de definir, distinguir y medir. Para esta construcción resultará clave cómo se articularán los distintos enfoques del saber experto, dado que implican distintas miradas sobre la función y lugar de los/as cuidadores/as en el cuidado infantil.

Por otra parte, el saber experto señala que es imprescindible la presencia del Estado ejerciendo la función del cuidado desde diversas modalidades y para todos los sectores sociales. De esta manera, los y las expertos/as enfatizan en la responsabilidad del Estado en el acompañamiento de las familias para que éstas desempeñen esta función en mejores condiciones desde una visión universalista. Se subraya además la necesidad de que se implemente un abanico amplio de propuestas variadas que

permitan la posibilidad de elección para las familias según sus condiciones, recursos y expectativas en torno al cuidado. Se sostiene la necesidad de que el Estado regule al mercado laboral para que éste asuma al cuidado desde una posición corresponsable.

Por último, entendemos que desde el enfoque de género y derechos, desde el cual partía este análisis, es necesario destacar la convivencia de visiones más propensas al cuidado compartido y a una distribución más equitativa del cuidado infantil, con la participación de varios actores y basada en la deconstrucción de estereotipos de género, con visiones más rígidas sobre rol materno insustituible en la primera infancia. Desde esta visión más tradicional, se percibe también la falsa contraposición de derechos que opone los derechos de infancia a los de las mujeres, desde una conceptualización del cuidado que desconoce el aspecto relacional del mismo.

Bibliografía

- AGUIRRE, R.** (2008): El futuro del cuidado, en Arriagada, I. (Ed.): Futuro de las familias y desafíos para las políticas. CEPAL - Serie Seminarios y Conferencias N° 52.
- AGUIRRE, R.** (2011): El trabajo remunerado de cuidados a personas dependientes. Avance para ser presentado al Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de Cuidados. MIDES, ONU Mujeres, OIT.
- BATTHYÁNY, K.** (2009): Cuidado de personas dependientes y género. En Aguirre, R. (Ed.): Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay, Montevideo.
- BATTHYÁNY, K.; GENTA, N.; PERROTTA, V.** (2012): La población uruguaya y el cuidado: Persistencias de un mandato de género. Encuesta nacional sobre representaciones sociales del cuidado. Principales resultados. CEPAL - Serie Mujer y Desarrollo N°117.
- HOCHSCHILD, A.** (1990): "The second shift: working parents and the revolution at home" Nueva York, Viking . En Hochschild, A. (2008): "La mercantilización de la vida íntima: apuntes de la casa y el trabajo". Katz Editores, Madrid.
- HOCHSCHILD, A.** (2008): "La mercantilización de la vida íntima: apuntes de la casa y el trabajo". Katz Editores, Madrid.
- INE** (2008): Uso del tiempo y trabajo no remunerado: informe sobre el Módulo de la Encuesta Continua de Hogares. UNIFEM/INE/INMUJERES/UDELAR, Montevideo. Disponible en: www.ine.gub.uy.
- PAUTASSI, L.** (2010): Cuidado y Derechos: la nueva cuestión social. En: Montañó, S., Calderón, C. (coord.). El cuidado en Acción. Entre el Derecho y el Trabajo. CEPAL/ AECID/ UNIFEM.
- RAMOS TORRE, R.** (2011): Más allá de las cifras: la dimensión teórica y cualitativa del cuidado, en Durán, M. (2011). El trabajo de cuidado en América Latina y España. Documento de Trabajo N° 54. Fundación Carolina. Madrid.

Anexo metodológico

La muestra se compuso de 20 entrevistas a informantes claves expertos/as en diversas disciplinas que abordan la primera infancia. Respecto a las profesiones, la muestra se compuso de 4 profesionales de la Pediatría, 2 profesionales de la Psiquiatría infantil, 7 profesionales de la Educación, 3 profesionales de la Psicología infantil, 1 profesional de la Sociología, 1 de la Economía, 1 del Derecho y 1 psicoterapeuta familiar.

En relación a los ámbitos de inserción, 4 entrevistados/as se desempeñan en el ámbito privado, 5 se desempeñan en el ámbito público, 3 lo hacen en ambos ámbitos, 6 son autoridades de infancia pertenecientes a las instituciones que están involucradas en el Grupo de Trabajo del Sistema de Cuidados y 2 pertenecen a la sociedad civil.

La distribución por sexo indica una clara mayoría femenina, 16 mujeres y 4 varones.

3

Acción colectiva y élites



El desarrollo local cañero en Bella Unión

Territorios en disputa y construcciones emergentes en distintos contextos históricos

Anabel Rieiro¹

El objetivo del artículo será contrastar dos propuestas de desarrollo local –emergentes de dos contextos históricos diferentes– para la localidad de Bella Unión. Se partirá de una perspectiva que entiende al desarrollo local como proceso económico-social, en el que se ponen en juego relaciones sociales y recursos para construir un proyecto productivo que ‘propone’ aumentar la calidad de vida de las personas que habitan en el territorio. Para ello, se abordará el complejo azucarero hegemónico en el primer período por la cooperativa de productores CALNU (Cooperativa Agraria Limitada Norte Uruguay) y la propuesta local de diversificación productiva ensayada a principios de los años noventa, contrastándola con la actual propuesta de producción de azúcar refinado y etanol, hegemónica por la empresa pública con derecho privado ALUR (Alcoholes del Uruguay Sociedad Anónima) dentro de una política nacional de diversificación de la matriz energética.

Se retomará: por un lado, el antecedente sociológico de investigación *“Maldonado y Bella Unión: dos casos ejemplares de transformaciones en la reestructura social del país”*, coordinado por Gerónimo de Sierra en 1992, en el que se analizaron los efectos que el crecimiento y proyecto de reestructuración y diversificación productiva representaba en la población, a través de sus actores sociales y políticos en Bella Unión.

Por otro lado, se abordará la situación actual a partir del proyecto interdisciplinario de investigación financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (Programa de Vinculación Universidad-Sociedad y Producción - 2010) llamado *“Desarrollo local, encadenamientos y potencial asociativo en Bella Unión: estrategias económico-productivas desde la participación de los trabajadores”*². En dicho marco, se retomará

1 Profesora adjunta, coordinadora de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio de la Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Asistente de investigación y docencia del Departamento de Sociología, FCS, Udelar. Magíster en sociología y aspirante a Doctora. rieiro.anabel@gmail.com

2 Dicha investigación fue llevada a cabo por un equipo interdisciplinario conformado por: Gerardo Sarachu y Gonzalo Bandera (Asistentes sociales), Virginia Rossi, Juane Riet y Gimena Echeberriorda

un taller sobre mapeamiento de actores que contribuirá al análisis de las relaciones sociales y el complejo entramado que supone la localidad hoy, además de retomarse las entrevistas realizadas a los distintos actores locales a lo largo de la investigación.

El estudio comparado se justifica ya que en ambas oportunidades se recabó el discurso de los sujetos sociales mediante entrevistas, rescatando tanto las estructuras productivas como subjetividades que componen la localidad, lo que permite analizar la construcción de los discursos y las concepciones de desarrollo de los distintos sujetos colectivos. El contraste permitirá resaltar la importancia en las formaciones locales relacionales, es decir, en la propia construcción histórica del “otro” y del “nosotros”, de la alteridad y del conflicto que se estructura a través de los conglomerados productivos.

Introducción

En esta sección se retomarán algunos conceptos del marco teórico general y se contextualizarán los dos momentos históricos que se desean contrastar, para enmarcar las “restricciones y oportunidades políticas” (Tarrow, 1994) que los caracterizan, así como los distintos proyectos de desarrollo local defendidos por los actores económicos, políticos y sociales en cada momento.

De manera muy general, retomando las etapas del sistema agrario uruguayo propuestas por Piñeiro (2004), encontramos para el territorio de Bella Unión coincidencias y desfases. Piñeiro propone tres etapas-procesos: la modernización conservadora hasta la década del 30, la modernización bajo el modelo de sustitución de importaciones hasta los años 60 y por último, la liberalización y globalización económica con la implementación de un nuevo patrón de acumulación, que atravesaría la dictadura cívico militar y los gobiernos posteriores.

El pasaje de la modernización conservadora a la modernización bajo el modelo de sustitución de importaciones coincide con la implantación y consolidación del sub-complejo cañero, la cual comienza a darse a partir de la década de los 40 hasta los 60. Moraes (1990) ha analizado profundamente cómo se dio el tránsito de las formas familiares de producción a estructuras económicas locales de tipo capitalistas durante este período.

La segunda etapa, no coincide con el tercer período de liberalización experimentada en el sistema agrario uruguayo, proceso que recién empezaría a darse en Bella Unión en los años 90 con el proceso de reestructuración productiva. En contraste, entre 1965 y 1990 se configura, bajo una política que continúa presentando un carácter

(Ingenieros agrónomos), Carla Assandri, Victoria González y Milton Torrelli (Licenciados en economía) y Anabel Rieiro (Socióloga). El objetivo general de dicha investigación fue abordar la territorialidad y el desarrollo local en Bella Unión, desde sus propias dinámicas productivas involucrando a colectivos de trabajadores que las conforman. Para ello, se utilizó una estrategia flexible, en la que se combinaron métodos cuantitativos y cualitativos, en tres fases: 1. aproximación y colectivización diagnóstica, 2. análisis en profundidad de cadenas productivas, y 3. finalmente, análisis prospectivo hacia la construcción de escenarios.

proteccionista y un fuerte apoyo estatal, un polo cooperativo-empresarial, hegemonizado por productores locales cooperativizados en CALNU.

Es recién en los años 90, en un contexto signado por el fin de protecciones arancelarias causadas por el Mercosur, que comienza el modelo aperturista unilateral con un proyecto de reestructuración y diversificación productiva. A finales de la década comienza a darse una fuerte crisis y deterioro productivo que termina con altos grados de fragmentación social. Es en el inicio de este modelo productivo donde se sitúa el antecedente sociológico que se utilizará para contrastar con el modelo actual de desarrollo en Bella Unión.

El período contemporáneo -a partir de los dos gobiernos frenteamplistas- se caracteriza por la recuperación del complejo sucroalcoholero por parte del sector público, como proyecto neurálgico en la zona. La empresa ALUR es el proyecto local hegemónico en la localidad, la cual hace parte de un proyecto a escala nacional en el marco global del crecimiento de ANCAP (Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland).

En el presente artículo nos propondremos contrastar las concepciones de desarrollo que emergen de los distintos actores locales en el modelo de reestructuración y diversificación productiva ensayado a inicios de los 90, y veinte años más tarde en el modelo actual de gestión público-privada del proyecto sucroalcoholero ALUR.

A nivel general, se puede analizar la historicidad que presenta el territorio de Bella Unión para los dos períodos a contrastar, a través del abordaje de territorio y escala propuesto por Sassen (2007). A través de estas categorías, la autora aborda la globalización entendiéndola como un proceso en el cual el territorio pasa a operar a escala mundial, y no como instancia superadora/neutralizadora del territorio. La especificidad de las prácticas y actores locales, se definen por una espacialidad multiescalar en el territorio donde convive la escala de Estado-nación, la escala subnacional y supranacional. Estas nuevas dinámicas habilitan la concepción de lo local, lo nacional y lo global como entidades que no se excluyen mutuamente.

A principios de los noventa, observamos la fuerte influencia en el territorio de Bella Unión a escala supranacional ejercida por la integración regional y conformación del MERCOSUR y también por los organismos internacionales como ser el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que permite observar cómo los actores locales redefinen sus posiciones en el desarrollo local tomando como marco de referencia su articulación con los poderes centrales y extranjeros.

Mientras que, en el proyecto actual de ALUR, el Estado-nación adquiere un protagonismo mayormente relevante a nivel local, a través de las políticas económico-productivas planteadas por ANCAP, que declaran como áreas estratégicas para el desarrollo la búsqueda de mayor autonomía y desarrollo a través de la diversificación energética a escala nacional.

En el estudio de los discursos y subjetividades no pueden perderse de vista los distintos condicionamientos que operan a través de estructuraciones múltiples de escalas, espacios y relaciones no lineales y que toman “cuerpo” en las subjetividades³ locales.

Es así, que se partirá de una concepción ampliada de trabajo, retomando dicho concepto desde De la Garza (2010), quien propone discutir tanto al estructuralismo como al subjetivismo, entendiendo al trabajo como interacción y relación social, lo que significa reivindicar un concepto abierto de estructura que si bien condiciona, no determina a los sujetos, abriendo espacios de posibilidades para la creación de significados y acciones.

Respecto a la perspectiva de desarrollo, priorizar la dimensión territorial no significa abordar las relaciones sociales locales invisibilizando el conflicto social global y relacional que las atraviesan, sino retomarlas y comprenderlas a partir de un enfoque más amplio del sistema-mundo (Wallerstein, 1997) al cual pertenecen.

Se tomará al desarrollo local como fuerza endógena que no debe perder de vista el desarrollo a gran escala o escala nacional y las relaciones sociales existentes. Como plantea Coraggio (2000), el desarrollo local se convierte en una guía de trabajo, de pensamiento y de acción, que incluso es una de las bases más importantes para el desarrollo nacional.

En primera instancia, se desechan las definiciones que tienden a igualar el desarrollo local al crecimiento económico de la localidad y la adopción de pautas culturales típicas de la sociedad de consumo. Dicho enfoque encuentra su correlato en el viejo paradigma de la modernización, para el cual el desarrollo es entendido como un estado de carácter progresista y evolutivo lineal que va desde la sociedad tradicional a la sociedad moderna (ver Germani, 1962; Inglehart 1999).

Se intenta introducir una perspectiva relacional que dé cuenta de la complejidad creciente de nuestra realidad contemporánea abordando e incorporando los procesos de autonomía individual, colectiva y local como dimensiones clave en los procesos sociales. Emerge desde esta visión la importancia en abordar los procesos de concentración y extranjerización de la tierra y los procesos de resistencia de trabajadores rurales para los que la tierra significa un lugar para radicarse y vivir de las fuerzas de trabajo propias.

Las teorías decolonizadoras (Mignolo, 2007; Quijano, 2000) nos permiten retomar la cuestión neurálgica del desarrollo humano despojándonos de concepciones que automáticamente asocian el “buen vivir” con la adopción de pautas culturales de la sociedad de consumo. Se recentra la discusión en los sujetos, su capacidad de vincularse, construir comunidad y mejorar su calidad de vida. El territorio es visto como

3 De la Garza (2010) propone entender el concepto de subjetividad como proceso social que incorpora los códigos acumulados creando configuraciones subjetivas en cada situación concreta.

“lugar de vida” en el que se desarrollan las capacidades humanas de producción y reproducción⁴.

Primer contexto

Los noventa y el proyecto de reestructuración y diversificación productiva

En los años sesenta se presenta a Bella Unión como un “polo de desarrollo” a partir de un modelo que partía de la asociación cooperativa de los productores locales, para lo cual recibieron un préstamo de 7 millones y medio de dólares del Banco República para la construcción del ingenio CALNU; en los años 80, la localidad recibió del Banco Interamericano de Desarrollo 14 millones de dólares para CALAGUA (cooperativa de riego), 8 millones para Greenfrozen (planta de congelado) y 5 millones para CALVINOR (planta de vinos).

En la década del noventa, con la firma del tratado de libre comercio del MERCOSUR y la subsiguiente desgravación de la caña, las reglas de juego externas cambian y localmente se fortalece la visión de que el azúcar no podrá competir contra los menores costos y los mayores índices de productividad que presentan otros países de la región, en especial Brasil.

La reestructuración apunta entonces a retomar la trayectoria cooperativista de la localidad en torno al azúcar, abandonando el monocultivo y extendiendo el asociativismo hacia la diversificación productiva. Buscando dichos objetivos, se encamina el primer Fondo de Reconversión priorizando los sectores del vino, el arroz y la horticultura⁵.

CALNU como complejo agroindustrial en la zona y como socio financiero de otras experiencias cooperativas sigue teniendo un rol predominante y hegemónico. Según De Sierra (1993) se trataba de 420 productores asociados que disponían de voto en las asambleas. En este contexto la cooperativa elabora un plan de ajuste y reconversión para el quinquenio 91-95 que se plantea en conjunto con Greenfrozen y VIBOBUSA. En 1993 CALNU se endeuda con el BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay) y se asocia con la transnacional MAN de capitales ingleses.

“Bella Unión a través de CALNU implementó un programa, un modelo de desarrollo rural muy propio que, en realidad, era un modelo agroindustrial cooperativo. Por eso tantas cooperativas por todos lados, como desarrollo económico y social de la zona, como forma de hacer más equitativa la distribución de la riqueza que se estaba gene-

4 Partir de esta noción implica la búsqueda de nuevos indicadores de calidad de vida que trasciendan la distribución del producto bruto interno y el trabajo, sino que den cuenta de la evolución en las condiciones de vida (salud, educación, pautas demográficas, acceso a servicios, necesidades básicas, etc.).

5 Según el informe presentado a la Comisión de Hacienda del Senado del 3 de abril de 2001, de los 17.360.000 dólares el 48% se destinó a Greenfrozen y el 41% al saneamiento de deudas de productores.

rando a través de esos emprendimientos agro- industriales”. (Entrevista a Francisco Moraes, productor de la zona y dirigente de CALAGUA, 2012).

De las entrevistas realizadas en los noventa por el equipo de sociólogos (De Sierra, 1993) a los dirigentes de CALNU –coincidentalmente también dirigentes de las otras entidades cooperativas como CALAGUA, CALPICA y CALVINOR- se deja también entrever el discurso de “progreso” que este grupo de empresarios agrícolas defiende y se autoadjudica. El “proyecto modelo” de desarrollo local de CALNU y el “Norte Uruguayo en Marcha” generó un mito y una percepción positiva como dirigentes de un proyecto, que defiende ser no sólo un proyecto corporativo privado, sino un proyecto de desarrollo para toda la localidad.

Lo que fue claro, es que las ambiciosas estrategias productivas de dichos dirigentes fueron acompañadas de un lobby político que, independientemente de las administraciones estatales, logró recursos y apoyo financiero de organismos nacionales e internacionales.

“Los dirigentes de la zona no se agrupan por colores políticos sino por características sociales, por afinidad, por amistad, por capacidad empresarial”. (Entrevista a un productor tomada de De Sierra, 1993).

La identidad de estos productores que lograron controlar la producción, extendiéndose al control de los procesos de industrialización y comercialización, se basó en la defensa de la producción agrícola, en oposición a la producción ganadera. A pesar de estar ensayando la política de reconversión, se puede ver que la caña de azúcar forma en el imaginario una idea de desarrollo local como actividad principal. Así, aunque se propone que deje ser el único centro de producción, existe una tendencia a centralizar la producción en la caña.

Al decir de Leonardo De León (actual director de ALUR), hablar de reconversión fue un error, porque los productores estaban pensando en un proyecto de diversificación.

“Recuerdo que en los primeros años del 90, ya con la crisis de la caña, la gente empezó a tener invernaderos, pero igual, siempre tenían un pedacito de caña. Porque la caña siempre está presente, es algo cultural. Entonces creo que se le erró en el enfoque cuando se habló de “reconversión”. (...) O sea, siempre estuvieron pensando que se iba a volver a la caña y mantuvieron cierta infraestructura para esperar el momento”. (Entrevista a De León, 2012).

Así, reafirma el discurso de un productor en los noventa, que decía:

“En tres gobiernos vi caer la caña de azúcar y en tres gobiernos la vi resurgir con más bríos”.

La elite dirigente estructura y defiende en su discurso, una identidad local solidaria que legitima su rol social en la comunidad y fuera de ella. Así, propone que sus accio-

nes son orientadas por una solidaridad entre sus socios y no exclusivamente por fines lucrativos, lo que garantizaría estructuras de crecimiento con equidad. Se presenta, de esta manera, la formación cooperativa como una alternativa local que a diferencia del capital extranjero (al que se identifica fuertemente guiado por la lógica de rentabilidad y ganancia) prioriza el trabajo colectivo en el territorio.

Sin embargo, podemos observar que dicho modelo, más allá de haber recibido en el 2001 un segundo fondo de reconversión, nunca pudo ser sustentable ni cumplir sus promesas de crecimiento con equidad. En el 2001, durante la interpelación que se realizó al Ministro de Economía, Alberto Bensión, se expone que la sociedad ha trasladado a tres o cuatro empresas del grupo CALNU, cerca de 60 millones de dólares.

“El proceso por el cual se ha transferido una serie de recursos (...) especialmente a la industria azucarera y, en menor medida, a la comunidad de Bella Unión en su conjunto, hasta ahora no ha logrado desarrollar un proceso de crecimiento sostenible que permita además generar un nivel de empleo estable y de progreso.” (Aguirrezabala, interpelación 2001).

A este discurso, se le contraponen la visión de los productores locales, quienes se sintieron afectados por la desgravación del azúcar y tomaron los fondos como una política de inclusión. Como lo sintetiza el productor Francisco Moraes:

“Estaba la cosa bien armada porque era un grupo cooperativo que era el que había tomado el préstamo para las inversiones (...) con respecto a las obligaciones derivadas del proyecto de diversificación, cuando ocurre la desgravación del azúcar importada, se empieza un período de negociaciones planteándole al Estado que no se iba a poder hacer frente a las obligaciones porque si disminuían las protecciones, si se desestimulaba el cultivo y prácticamente no iba a haber azúcar nacional, ¿con qué se iba a hacer frente? De parte del Estado se nos dijo que en realidad el préstamo no se nos iba a cobrar, el país lo iba a asumir como un costo país para la inclusión, el ingreso en el MERCOSUR. Cosa que no ocurrió porque en realidad las deudas están planteadas hasta el día de hoy...” (Entrevista a Francisco Moraes, 2012).

En estos discursos se deja entrever la tensión que comienza a radicalizarse a principios del siglo, entre la política gubernamental y los productores locales. Ernesto Agazzi, dirigente del Frente Amplio declara:

“En realidad el Estado ponía, ponía y volvía a poner, y en verdad el consumidor de azúcar también ponía, porque el fondo viejo era un plus sobre el precio del azúcar. (...) No era un fondo que se aplicaba, era un fondo sin devolución (...) ¡Si ustedes vieran los millones de dólares que fueron! (...). Eso generó hábitos en los receptores de esta ayuda: ‘total si viene de arriba’. (...) Empezamos a exigir, cuando llegamos nosotros, que sean con devolución. Porque en realidad cuando se asigna un fondo que es un bien público, hay que hacerlo con mucha responsabilidad”. (Entrevista a Ernesto Agazzi, 2012).

Lo cierto es que, a pesar de los fondos públicos, la reconversión hacia otros rubros fue muy lenta y nunca logró absorber a la totalidad de los trabajadores de la caña. En 1995, un informe de los sindicatos (ver: SOCA-SUTRA-UTAA. 1995:5) propone que se había planificado alcanzar 1.000 hectáreas de horticultura en 1995 y apenas se llegó a 349 hectáreas. En el área tradicionalmente cañera se plantaron 2.000 hectáreas de arroz y toda la zona de Bella Unión contaba con 9.000 hectáreas de arroz. Según datos de SUTRA y SOCA de 1991 a 1995 las hectáreas de caña pasaron de 9.500 a 4.000, la producción pasó de 600.000 a 220.000 toneladas, el número de cortadores pasó de 2.000 a 600, los trabajadores de las chacras pasaron de 900 a 200 y los trabajadores industriales pasaron de 740 a 612.

A finales de los noventa y principios del 2000 la peor crisis económica, un gran endeudamiento y la mayor fragmentación social estallan en el territorio de Bella Unión. Más allá de las razones económicas y productivas, ¿podríamos decir que “el modelo cooperativo” ha fallado en Bella Unión?

Para contestar dicha pregunta, hay que analizar las estructuras organizativas de dichas cooperativas, más allá de los discursos de sus dirigentes. En este sentido, se encuentran contradicciones y fisuras en los propios cooperativistas. Para algunos productores, ya en 1992, en los hechos aparece como falsa la propuesta cooperativa dada por la cohabitación y participación de los pequeños y medianos productores en la propiedad y gestión de la dirección del complejo agroindustrial. Los cargos de dirección en las cooperativas (sobre todo CALNU) daban status y poder en la localidad, por lo que se denunciaba una lucha interna fuerte entre algunos pocos.

Así, expresa un productor:

“Al interior de las cooperativas se distinguen 15 productores fuertes, que ocupan las directivas de las cooperativas, se benefician del estatuto cooperativo en lo que hace a las exenciones impositivas, facilidades crediticias y financieras, pero que se orientan en su comportamiento de acuerdo a normas de funcionamiento capitalista.” (Entrevista a productor en De Sierra, 1993).

Sobre esta cohabitación horizontal entre productores de distinto tamaño, ya a principios de los años noventa, comenzó a plantearse al interior de las cooperativas la necesidad de selección interna de productores de acuerdo a productividad, capitalización y endeudamiento, lo que afectaba fuertemente a los productores más pequeños. Recordemos que de los 420 productores que componían CALNU, 114 plantaban en menos de 10 hectáreas.

Por otro lado, la naturaleza cooperativa también se ve cuestionada cuando 420 cooperativistas contrataban cerca de 3.000 personas: 150-200 estables y hasta 600 zafrales en la planta industrial, y entre 2.000 y 2.500 durante el período de corte de

caña de azúcar⁶. Recordemos que la ley permite a las figuras cooperativas contratar trabajo asalariado hasta el 20% del total de los trabajadores asociados.

Ante el endeudamiento y la reestructuración productiva, los productores presionaron para que se dé la baja de salarios de los trabajadores. Inclusive un productor expresa que le había planteado a los sindicatos en aquella época: “acá estamos ante una opción, o mantenemos el nivel del salario o mantenemos la fuente de trabajo”⁷.

Por su parte, los trabajadores ya en esa época veían con desconfianza la diversificación y el pasaje de la caña a la horticultura, dado que las condiciones laborales de los trabajadores rurales del país en ese rubro eran muy precarias y la caña había representado y representaba la posibilidad de mantenerse juntos en el sindicato rural.

En este sentido, queda delineado el eje de mayor conflicto a nivel local entre los sindicatos y los productores cooperativistas. Un dirigente de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) planteaba: “nosotros decíamos que éramos un sindicato revolucionario, pero no hay sindicatos revolucionarios, los sindicatos son clasistas o no clasistas”.

El sacerdote de la zona planteaba, frente a este conflicto:

“No se pensó la reconversión laboral y social, sino se aceptó la miseria de los trabajadores y sus familias, tras el rótulo de costo social de reconversión productiva.” (Entrevista en De Sierra, 1993).

Para finalizar, en la reconstrucción de las relaciones sociales de este período, es relevante notar que algunos actores gubernamentales locales, el sacerdote y algunos trabajadores sindicalizados mantenían un discurso crítico frente a las propuestas de crecimiento local. Así, anunciaban que bajo la construcción de una “mística” de polo de desarrollo cooperativista durante los años 70 y 80, se logró convencer a la población de un proyecto que beneficiaba económicamente a unos pocos. Una “elite dirigente” que pasa los costos a los pequeños productores y los trabajadores, ejerciendo un gran poder local⁸ derivado de su capacidad directriz en las cooperativas.

Puede retomarse la noción de violencia simbólica propuesta por Bourdieu (2005) para analizar esta construcción mítica de “polo de desarrollo” tan apropiada y corporizada por gran parte de los actores locales, que explica cómo las relaciones de dominación se legitiman o naturalizan de forma que los propios dominados se adhieren al orden dominante, en un doble proceso de reconocimiento y desconocimiento. *“Por ello, las élites de poder (económico) serían a su vez las responsables de la reproducción del campo del “desarrollo” como campo de poder (simbólico), ya que persiguen el interés*

6 Datos sacados de De Sierra (1993).

7 Entrevista a productor de la zona, De Sierra (1993).

8 “La política” en vida cotidiana de la comunidad ronda en torno a los problemas cooperativos, inclusive cuando las personas hablan de “políticos” muchas veces se refieren a los directivos de las cooperativas. (De Sierra, 1993).

de conservar su lugar privilegiado de dominación en el espacio social.” (Rossi, 2010 :9).

La pérdida salarial entre 1991 y 1992 fue de un 50% para los trabajadores por hora. Los trabajadores sindicalizados en SUTRA y UTAA van a la huelga, paralizando la zafra durante dieciocho días, seguida por una huelga de hambre que duró ocho días.

Desde este conflicto, puede retomarse la visión de desarrollo local, el cual más que ser visto como un proyecto global desde el cual encaminar las acciones y los intereses de todos los habitantes del territorio, pasa a ser entendido como un campo de poder y como sistema de creencias que se despliega generando un conjunto de conflictos. Conflictos derivados a su vez, de relaciones asimétricas entre los actores sociales y su posición en cuanto al poder político, el acceso a los recursos y la apropiación de éstos.

Si bien durante la década de los 90 Greenfrozen atraviesa por un crecimiento ininterrumpido, esta tendencia se ve revocada en el 99, cuando Brasil devalúa su moneda y afecta directamente las exportaciones de la empresa. A fines de los 90 las subsidiarias de CALNU creadas para procesar producción alternativa, hortalizas congeladas por Greenfrozen, riego a través de CALAGUA, y vitivinicultura por COVIBUSA presentaban pérdidas por más de 2 millones de dólares anuales. Hoy, no aparecen como alternativas para la generación de puestos de trabajo ni redinamización de la producción en la zona.

Segundo contexto

Bella Unión hoy: el complejo sucroalcoholero hegemonizado por ALUR

En el 2004, luego de la peor crisis vivida en la zona, con la baja actividad productiva de la caña de azúcar y el leve impacto de la reconversión productiva, los actores sociales comienzan a movilizarse para defender la reactivación de la caña.

El Frente Amplio toma la demanda de las organizaciones y, al llegar al gobierno en 2005, promueve el aumento de la superficie de caña de azúcar, a partir de la financiación del Fondo de Reconversión del Sector y el otorgamiento de 2 millones de dólares en créditos reembolsables por parte del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca).

Ante la inicial reactivación local, la multinacional MAN asociada a CALNU manifiesta su intención de invertir nuevamente en la zona para reactivar la industria; sin embargo, las organizaciones sociales se movilizaron para que dicha reactivación se diera con un cambio de dirección a favor del Estado.

“CALNU debía más de 30 millones de dólares al Banco República. Muchos gobiernos seguían dando dinero, seguían dando recursos, etc. y a su vez se metió una transnacional MAN de origen inglés que era la que los financiaba, les compraba crudo, estaba en la entrada de dinero y materia prima, etc. o sea, era la que gestionaba. Los

gobiernos de turno dejaban que eso funcionara así. Acá lo que pasó es que el gobierno dijo 'bueno, hasta acá llegamos. Eso tiene que pasar al Estado, en el marco de una política'". (Entrevista a Leonardo De León, director de ALUR, 2012).

Así es que en 2006, ALUR, empresa pública que se rige con derecho privado⁹, logró acordar -mediante una ardua negociación entre el Estado y CALNU- el alquiler del local, mientras los activos pasaban a manos del Estado, a cambio de la cancelación de la deuda que los productores tenían con el BROU.

Desde el 2006 al 2012 los propietarios de ALUR: ANCAP y PDVSA hicieron aportes de 114 millones de dólares, los cuales se han ido capitalizando¹⁰. Además, la empresa cuenta con líneas de crédito de 65 millones de dólares otorgadas por instituciones financieras como ser: BROU, BANDES, el Santander, el HSBC, etc.

La estrategia industrial, dentro de una política nacional más amplia de diversificación de la matriz energética, ha sido de ampliación de los productos que la planta azucarera procesa. Así, además del azúcar, se produce etanol para la generación de biocombustibles, energía eléctrica y comida animal¹¹.

Entre 2006 y 2009 se produjo sólo azúcar y a partir de 2009 se agregó la producción de biodisel. Según una entrevista a De León (Brecha 26/04/13), es a partir de esta etapa que los ingresos y la facturación crecieron rápidamente, pasando de 25 a 82 millones de dólares en 2010, 116 en 2011 y 139 en 2012. Entre tanto el azúcar pasó de ser el 100 % de la facturación a representar el 22%.

El conglomerado sucroalcoholero a partir de la llegada de ALUR, puede definirse como un complejo con una serie de fases productivas que van desde la producción de bienes primarios hasta la comercialización, todas las fases fuertemente relacionadas. ALUR ejerce desde la fase industrial control y subordinación sobre la fase agrícola, negociando con los productores, prestándoles crédito e inclusive operando directamente a través de AGROALUR. También la fase de comercialización y distribución está subordinada a ALUR.

¿Cómo se plantea el mapa relacional dentro de este conglomerado local? Durante el taller sobre mapeo de actores, realizado en 2012 con distintas organizaciones sociales y agentes locales en el marco del proyecto de investigación "*Desarrollo local, encadenamientos y potencial asociativo en Bella Unión: estrategias económico-productivas desde la participación de los trabajadores*", emergió como el eje histórico y actual del

9 ALUR pertenece en un 90% a ANCAP y 10% a Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) hasta 2008, año a partir del que dicho 10% pasa a manos de PDVSA (Petróleos De Venezuela Sociedad Anónima).

10 Según De León, la deuda actual de ALUR con ANCAP no llega a 2 millones de dólares (Brecha, 26 de abril 2013).

11 Según datos oficiales la inversión total en 2009 fue de 22.000.000 de dólares (8.500.00: compra de caldera; 3.000.000: mejoras en el proceso de azúcar; 2.500.000: rubogenerador e instalaciones; 7.000.000: destilería y 1.000.000: cuidado del medio ambiente). Datos según www.presidencia.gub.uy/web/noticias.

conflicto la relación, caracterizada por ser de explotación, entre los trabajadores (representados por UTAA) y los productores (representados hoy por APCANU –Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar–). El eje de contradicción aparece así entre los dueños de la tierra (que en su momento también fueron dueños del ingenio industrial - CALNU) y los que le venden su fuerza de trabajo.

Así, manifestaba un trabajador del SOCA - Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar:

“CALNU vive, sigue existiendo e influye en la política hoy, se configura como un actor que por momentos actúa a través de APCANU y otras veces en forma directa”.

Si bien históricamente el conflicto entre trabajo y capital se planteó entre los trabajadores de UTAA y los propietarios de la tierra e ingenio (que coincidían en CALNU), con la llegada de ALUR, la fase industrial no es vista tan claramente por los trabajadores en un eje de oposición. También debido a la mejora de salarios y condiciones de trabajo que implicó para los trabajadores del complejo industrial agrupados en el sindicato del SOCA.

Inclusive algunos trabajadores de UTAA piensan que para alcanzar mayor protección en las condiciones de trabajo y salario, sería conveniente que ALUR se encargara directamente de la cosecha contratándolos en forma directa. Sin embargo, los trabajadores de AGROALUR que trabajan en la fase agrícola, si bien superan los acuerdos salariales alcanzados entre APCANU y UTAA y cuentan con algunas mejoras en las condiciones laborales, siguen siendo los salarios más bajos de todo el complejo, presentándose muchas veces también en condiciones de extrema precariedad (ver Otero, 2011).

La relación entre la UTAA y ALUR es planteada por parte de los trabajadores como una relación menos densa vincularmente otorgándosele a ALUR, en algunas instancias, una función de mediación entre la UTAA y APCANU, por lo que representa también un espacio donde se plasman las disputas locales.

Un trabajador de UTAA expresa:

“La relación de UTAA con ALUR es solamente por el plus, bolsa de trabajo, experiencias colectivas, etc. APCANU es la que negocia con ALUR directamente. Por momentos ALUR media en la relación entre APCANU y UTAA. (...) Si UTAA o los sindicatos de trabajadores quieren negociar o presionar para que no entren los camiones, siempre es afuera de ALUR”.

Para 2010 se calculó que trabajaron en ALUR 500 empleados aproximadamente, de los cuales una gran parte no poseían contratos estables.

La relación entre ALUR y APCANU aparece como una relación fuertemente comercial, dada su mutua dependencia productiva (comprador-vendedor de la caña). En la perspectiva de los trabajadores, si bien el Estado a través de ALUR no se planteó

explícitamente favorecer a las patronales (identificadas con APCANU) indirectamente se piensa que los ha fortalecido por su dependencia para obtener la materia prima.

Cada vez que se plantean conflictos entre estos dos actores (esporádicos y en general referidos a negociaciones comerciales y el precio del azúcar que se define antes de la zafra), las fuerzas sociales identificadas en UTAA, SOCA y los pequeños productores tienden a jugar en el conflicto a favor de ALUR.

Sin embargo, se percibe desde los trabajadores una relación entre los dos actores, caracterizada por un vínculo de diálogo desde el cual se llega a acuerdos económicos.

Así lo sentía un pequeño productor rural, al decir:

“La relación entre ALUR y APCANU es como una ‘luna de miel’ con algunos roces como en cualquier matrimonio.”

Esta situación de ‘alianza’ se delata también en la poca información comparada sobre los subsidios que ALUR otorga a los productores, cuestión que puede actuar de amortiguadora en la disputa distributiva de los trabajadores con los productores.

Por otro lado, se plantea como altamente controversial la posición ocupada por los pequeños productores en el campo de conflicto dentro del conglomerado productivo azucarero.

En el 2006, los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pequeños productores comienzan a realzar la cuestión de la tierra, realizando una ocupación. Así, la UTAA, el SOCA y APAARBU (Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión) promovió la organización de sus trabajadores para acceder a la tierra. Luego de largas negociaciones con el Estado, las organizaciones accedieron a las fracciones 43 y 46 de la Colonia España, Itacumbú, Colonia Raúl Sendic y Campo Placeres.

Si bien podría preverse que la relación entre las organizaciones con dichas experiencias sería muy estrecha y de fuerte de alianza, los trabajadores consideran que en algunos casos se recrean las alianzas por nuevas luchas o reivindicaciones concretas para trabajadores y pequeños productores, mientras que en otros casos se producen distanciamientos por el hecho de dejar de ser asalariados y el desprendimiento que genera con la organización pasar a ser pequeño productor (en algunos casos contratante de trabajo asalariado). Así es que, en algunos casos los proyectos de obtención de tierra, que empiezan como herramientas de lucha de las organizaciones sociales, terminan en manos de las familias colonizadoras, sin dirección de sus organizaciones de base.

Si bien según la definición de la posición que ocuparían en el campo del conflicto los pequeños productores (más cercana a los trabajadores que a los grandes productores) podría dar cuenta de una disputa interna dentro de las mismas organizaciones de

productores, los trabajadores observan que estas tensiones no se generan dados los favores generados entre la dirección y los socios.

La naturaleza altamente heterogénea de los pequeños productores (trabajadores asalariados que se convierten en productores, pequeños productores familiares independientes, productores de producción única o mixta, etc.) hace que la posición de los pequeños productores aparezca como altamente paradójica.

En síntesis, la mítica idea de “polo de desarrollo” ahora basado en el proyecto sucroalcoholero en Bella Unión, es retomada desde ALUR, siendo presentado como “buque insignia” del “paradigma del modelo productivo progresista” (ver Neves, 2009).

Así lo expresaba la senadora Topolansky en el 2009:

“hay que hacer 20 ALUR en todo el país (...) ha permitido el resurgimiento de un polo de desarrollo, un complejo educativo investigativo, productivo en el que la comunidad está involucrada” (Brecha 27/02/09).

También el intendente de Canelones Marcos Carámbula diciendo:

“se nos había convertido en el lugar tal vez más crítico en materia de pobreza. Sin embargo, con una intervención del Estado la zona se ha recuperado y se ha recreado un polo de desarrollo” (Brecha 13/02/09).

Este imaginario de desarrollo asociado a la producción azucarera reaviva la asociación que dicha producción tiene con la idea de “progreso” y es fuertemente apoyado en la localidad. Como plantea Mariana Contreras (2009) “hay que buscar profundo para encontrar a alguien en estas tierras que no reconozca el papel que jugó el proyecto sucroalcoholero en la dinamización de Bella Unión”.

Inclusive en el discurso de los trabajadores rurales se señala el mayor acceso a ciertos bienes, como lo expresa el histórico trabajador Cholo González (ver Contreras, 2009):

“si antes en la puerta de la asociación de cultivadores se veían bicicletas, ahora se ven varios autos. Y eso también cambió el estado de ánimo”.

Sin embargo, a pesar de la reciente incorporación de algunas máquinas cosechadoras, la mayoría de la cosecha de la caña se realiza a mano, en base a la contratación de 1200 personas “peludos” que riegan y cortan con machete los tallos durante la zafra (aproximadamente por cinco meses).

Encontramos como representante de este sector el mítico sindicato UTAA, el cual negocia los convenios colectivos por el precio a cobrar por tonelada de caña cosechada con los representantes productores APCANU. A pesar de que ALUR presione a los productores a formalizar y cumplir con los convenios con los trabajadores, la participación de los propios trabajadores locales en la gestión del proyecto sucroalcoholero es mínima.

Así lo expresan Colacho y Rodas -dirigente histórico y dirigente actual de UTAA-: “hay mejores condiciones para discutir (...) pero ALUR actúa como una patronal”. “Hay una cultura de la caña que se impuso por más de 60 años, hay gente con mucha experiencia y pareciera que acá nadie sabe nada”.

Por otro lado, si bien las condiciones laborales han mejorado para los “peludos”, éstos siguen estando insertos en una estructura precaria, de gran desgaste físico y poca remuneración.

Como expresa un trabajador del SOCA (ver Contreras, 2009):

“ellos, que fueron los que más pelearon, son los menos beneficiados, los que tienen peores sueldos, los que siguen siendo explotados”.

Por último, el director de ALUR, define el proyecto productivo como una “cadena agroindustrial inclusiva”. Dentro de las políticas de tierra que buscaron un crecimiento productivo con inclusión social, pueden destacarse dos: por un lado, ALUR subarrienda 390 hectáreas de tierra para que puedan producir caña las organizaciones sociales (UTAA, Gremial Granjera y APAARBU); por otro lado, el Instituto Nacional de Colonización (INC) dispuso dos mil hectáreas para la Colonia Raúl Sendic, que se otorgaron con iguales fines a dichas organizaciones más trabajadores del SOCA.

“ALUR podría haber dicho nos encargamos de la industria, pero no, nosotros asumimos que nos teníamos que meter en la cadena. Entonces, hoy en Bella Unión hay tres o cuatro emprendimientos de inclusión productiva de trabajadores rurales y pequeños productores (...) Había que dar posibilidades de que la cadena fuera con pequeños productores, medianos productores y lo que históricamente se reclamó y que nosotros estamos convencidos que es la participación de los trabajadores rurales en el proceso.

Hoy, si vos hablás con dos productores grandes, te resuelven en seguida todo lo que falta de caña. Con un arrocero, por ejemplo, hacés un contrato de suministro con condiciones y te lo resuelve en un minuto. Pero si vos querés crecer así como hemos crecido, donde había 150 productores y hoy hay casi 400 es un proceso más lento y complejo”. (Leonardo De León, 2012).

El proceso de organización colectiva y gestión de la producción, para individuos que poseen cultura laboral de matriz salarial-dependiente, sumado a políticas de tierra que muchas veces no han sido pensadas de manera global e integral, con el soporte técnico necesario para el perfil de trabajadores a quienes está dirigida, han presentado algunas dificultades para estas experiencias precoces.

Sin embargo, más allá de las políticas de inclusión, el principal problema de la desigualdad en la apropiación de la riqueza, parece descansar en una estructura caracterizada por la alta concentración de la tierra en Bella Unión. Según cálculos de nuestro equipo de investigación, el índice de Gini es de 0,818, siendo que de los 215 produc-

tores que se calculaban existían en 2009, una cuarta parte de ellos poseía más de 27 hectáreas, siendo que las tres cuartas restantes poseían menos de 27 hectáreas.

Reflexiones finales

Hemos partido de la construcción de un mapeo de actores en la localidad de Bella Unión como ejercicio para tomar una foto de cómo los trabajadores reconstituyen sus relaciones sociales y el entramado social a nivel local, a lo cual se ha contrastado, mediante la realización de entrevistas, las distintas concepciones de desarrollo a nivel local.

Dicho análisis transversal a partir de las interacciones actuales se contrastó con las configuraciones relacionales del territorio veinte años atrás, permitiendo objetivar ciertas autoevidencias dentro de las que trabajadores e investigadores locales asociados en nuestra investigación se mueven, enmarcando su comportamiento y la posible dinámica social.

A través del abordaje histórico, la dinámica social encuentra especificidades particulares al contexto en el que se analiza, y, por lo tanto, puede interpretarse continuamente en transformación.

Por ello, hemos recurrido a esta estrategia de abordaje para analizar las percepciones de la interacción social resultante del proceso local de desarrollo, como expresión de identidades que en interacción subjetiva recomponen sus marcos de objetividad, y por lo tanto en ellos enmarcan su campo de acción.

Es así, que la propuesta de Bourdieu entre el ajuste entre disposiciones y posiciones que se dan a través de las relaciones sociales de dominación, no es abordada desde su carácter reproductivista sino desde un telón de fondo donde los agentes resisten, luchan y “hacen historia”.

Se trata de conocer las estructuras sociales donde se distribuye y reproduce el poder para luego plantearse la transformación social, la cual *“se manifiesta y concretiza en cada una de las comunidades territoriales a través de la vida cotidiana (...) Son estos mecanismos de relación social los que realmente importan para el funcionamiento de una comunidad”* (Villasante, 1984 :12).

Sobre estas estructuras, encontramos que los trabajadores y actores locales participantes en el mapeo objetivan críticamente la estructura que habilita y favorece una injusta y desigual distribución de la riqueza. Las relaciones de dominación material y simbólica se expresan sobre todo en el eje de conflicto entre UTAA y APCANU. Este es el eje sobre el cual lo que se ve como sumisión de algunos trabajadores se intenta transformar en subversión y acción para cambiar la antinomia dominante.

Sin embargo, la violencia simbólica -según Bourdieu (2005 :239), sería la violencia que se ejerce sobre un agente con su complicidad-, que de manera intrínseca el

propio modelo agroindustrial de la caña encierra desde el punto de la sustentabilidad social y ambiental, no se hace manifiesta en las posiciones discursivas.

Más allá de la profunda crítica que los trabajadores hacen al funcionamiento del modelo y el “poder sobre” que se les impone y explica la desigual distribución de la riqueza, el sistema global de producción basado en la caña emerge desde la totalidad de los discursos y actores como una hegemonía sin disputa. En los años noventa se planteaba un modelo de desarrollo local basado en el asociativismo de los productores locales y la diversificación de la caña, mientras que veinte años más tarde se plantea un modelo agroindustrial sucroalcoholero hegemonizado por el Estado.

La historicidad y subjetividades que fueron conformándose en el proceso histórico, han constituido un contexto hegemónico que imprime en los cuerpos locales valores de progreso y bienestar asociados a la plantación de la caña. Desde allí son orientadas las prácticas y acciones hacia las relaciones sociales de dominación en las que participan.

En la historia de Bella Unión, una de las transformaciones de mayor trascendencia consistió en la disminución de diversas prácticas agrícolas tradicionales con la introducción de prácticas de monocultivo basadas en la cadena cañera. La producción de azúcar ha experimentado diferencias históricas en el relacionamiento social y la apropiación de los recursos dentro de la cadena productiva a nivel territorial. Así, encontramos interesantes procesos de asociatividad en lo que respecta a la producción del azúcar, apropiación del ingenio agroindustrial, y estatización del mismo.

Sin embargo, estas profundas dinámicas y variaciones asociativas-productivas en el control del proceso agroindustrial sucroalcoholero, han sido acompañadas de persistentes relaciones de precariedad y explotación a los trabajadores que realizan el corte de caña de manera manual-artesanal.

De esta manera, más allá de las tensiones con el complejo ALUR y de reconocer cierta inmutabilidad para los más explotados y precarizados del proceso (cortadores de caña), en general existe un “consenso” entre los actores locales que reconoce al emprendimiento como el actor clave orientador del desarrollo local. Ante lo cual se espera por parte de los agentes populares (y también de los agentes representantes de la burguesía local) mayor participación para la estructuración de dicho modelo de producción hegemónico.

Como reflexión general, se observa que en el discurso de los que llevan adelante el proyecto productivo a nivel local (burguesía local en los 90 y el Estado a través de ALUR en 2010) se plantea la noción de desarrollo local haciendo énfasis en las posibilidades que los distintos proyectos económico-productivos representan para la localidad y el territorio entendido como una totalidad.

Sin embargo, por parte de los trabajadores rurales asociados a la UTAA, quienes cuentan con una larga historia y “ciclos de luchas”¹² y reivindicaciones, se encuentra un énfasis en la existencia de relaciones de poder que se establecieron entre los actores locales a partir de la implantación de los distintos proyectos, resaltándose con mayor énfasis el conflicto social y la desigual repartición de los costos y los frutos que cada proyecto concita.

Desde una concepción bourdieuana, se retoma esta concepción territorial como espacio de lucha entre actores que procuran apropiarse de los recursos de un campo específico a través de la apropiación de capitales económicos, culturales, sociales y simbólicos desigualmente distribuidos. Así, el conflicto se establece como una variable clave a la hora de analizar las subjetividades y las propuestas de desarrollo, rescatando los distintos intereses y proyectos de desarrollo según el lugar ocupado en el campo social y las relaciones de poder.

En este sentido, podríamos pensar que no existe un proyecto o un solo espacio social en un territorio, sino que en él se producen distintos escenarios conflictivos que producen espacios y subjetividades en tensión manifiesta o latente dependiendo de la estructuración del campo y la violencia simbólica que caracterice sus relaciones sociales y acciones colectivas construidas históricamente.

La conflictividad es lo que habilita mantener las contradicciones que posibilitan desentrañar la “colonialidad del poder” (Quijano, 2000), entendida como el dispositivo que produce y reproduce clasificaciones que marcan diferencias que actúan como legitimantes de relaciones de poder.

El presente artículo ha abordado los proyectos de desarrollo local sin querer ocultar las contradicciones que atraviesan los territorios, sino partiendo de ellas, para analizarlas desde un punto de vista crítico, que habilite la discusión sobre proyectos realmente inclusivos e intersubjetivos, con capacidad de dislocar las estructuras económicas y subjetivas más profundas, trascendiendo la lógica del capital y priorizando las necesidades de los habitantes.

12 “Un ciclo supone un conjunto de coyunturas de luchas sociales que pueden agruparse alrededor de una lógica central, los protagonistas de estas luchas son organizaciones y movimientos sociales”. (Panizza:13, 2012 retomando a Falero, 2005).

Bibliografía consultada

- ABRAMOVAY, Ricardo** (2006). *Para una teoría de los estudios territoriales* en Manzanal, Mabel; Neiman, Guillermo e Lattuada, Mario. *Desarrollo rural: Organizaciones, instituciones y territorios*. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
- BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Loïc** (2005). *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Editorial Siglo XXI.
- CORAGGIO, J.** (2000). *La agenda del desarrollo local*. Buenos Aires: UNGS.
- DE LA GARZA, Enrique** (2010). *Hacia un concepto ampliado de trabajo*. México: Anthropos.
- DÍAZ, Pablo** (2009). *Sociología de las ocupaciones de la tierra. Acción colectiva de los trabajadores rurales de Artigas. Uruguay 2005-2007*. Montevideo: Editorial Nordan.
- GERMANI, Gino** (1962). *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires: Paidós.
- INGLEHART, R.** (1999). *Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: CIS.
- QUIJANO, Aníbal** (2000). "Colonialidad del poder y clasificación social" en *Journal of world-systems research*, VI 2, Summer. Páginas: 342-386.
- MIGNOLO, Walter** (2007). *La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Gedisa.
- MORAES, María Inés** (1990). *Bella Unión: de la estancia tradicional a la agricultura moderna*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- PIÑEIRO, Diego** (2004). *En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- SASSEN, Saskia** (2007). *Una sociología de la globalización*. Buenos Aires-Madrid: Katz Editores.
- TARROW, Sydney** (1994). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- TOMMASINO, Humberto, GUEDES, Emiliano, FABREAU, Martín** (2006). "Mapeo de actores sociales: una metodología de visualización relacional y posicional. Introducción a un enfoque reticular en el marco del desarrollo local", en Tomassino, Humberto y De Hegedus, Pedro (Ed.) (2006). *Reflexiones para la intervención en el medio urbano y rural*. Facultad de Agronomía, UdelaR.
- VILLASANTE, Tomás R.** (1984). *Comunidades locales - análisis, movimientos sociales y alternativas*. Madrid: Hombre sociedad Ciudad. Tesis, documentos de trabajo y artículos periodísticos:
- CONTRERAS, Mariana** (2009). "La Bella Unión de la caña y la gente: el proyecto sucroalcoholero en el Norte" en Brecha, 13 de marzo. Pág. 2-3.
- DE SIERRA, Gerónimo (Coord); BOADO, Marcelo; SERNA, Miguel; FILARDO, Verónica** (1993). *Informe del Proyecto "Maldonado y Bella Unión: dos casos ejemplares de transformaciones en la reestructura social del país"*. Serie informes de investigación N° 2. Universidad de la República, FCS, DS.
- NEVES, Salvador** (2009). "¿ALUR como paradigma del modelo productivo progresista?" en Brecha, 13 de marzo. Pág. 4-5.
- NEVES, Salvador** (2013). "Los números y las ideas" en Brecha, 26 de abril de 2013. Pág. 18.

- OTERO, Martina** (2011). *“De la lucha a la fábrica: la intervención del Estado en el complejo sucroalcoholero. Una aproximación a los diversos modos de uso de la fuerza de trabajo”*. Monografía de grado. Departamento de Trabajo Social - Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo: UdelaR.
- PANIZZA, Milva** (2012). *Bella Union: luchas sociales en el primer gobierno del Frente Amplio*. Departamento de Sociología- Facultad de Ciencias Sociales. Monografía de grado.
- ROSSI, Virginia** (2010). *“Territorio como campo de poder- Una lectura de la lucha de los productores familiares uruguayos contra el agronegocio”*. Trabajo final del Seminario: Territorios y desarrollo rural en América Latina, dictado por Mançano Fernandes Bernardo, en el marco del Doctorado en Estudios Sociales Agrarios - Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba.
- WALLERSTEIN, Immanuel** (1997). *Después del liberalismo*. México: Siglo XXI.

Cartografías, generaciones y acontecimiento

A propósito del movimiento social juvenil

Verónica Filardo¹ - Sebastián Aguiar²

Varias decisiones políticas uruguayas acaparan en estos dos últimos años las portadas de los medios noticiosos en el mundo: la aprobación de una tríada de medidas, la despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario y de la regulación del cannabis, colocan al país en la vanguardia internacional en cuanto a estas demandas de nuevos derechos. ¿Cómo acercarse a estos fenómenos que tienen lugar en el escenario social uruguayo?, ¿en qué formas se desarrollan estas nuevas demandas?, ¿qué cohesiones, qué dispersiones, aparecen tras ellas? Estas tres interrogantes ordenan el presente trabajo, y la reflexión se ordena en tres síntesis gráficas que apuntan a un ejercicio de abstracción no sintética, sin clausuras, sin reducir complejidad.

La primera síntesis gráfica se concentra en un nivel más bien abstracto. Se presenta la teoría de la acontecimentalidad, partiendo de un diagnóstico epistémico, paradigmático, del campo de los acercamientos dominantes en ciencia social sobre los movimientos sociales (MS). Se propone como una estrategia flexible, que permite considerar apropiadamente estas inesperadas emergencias, y que se asocia con un método topológico, interpretativo.

La segunda síntesis cartografía los movimientos y organizaciones sociales juveniles uruguayos, teniendo en cuenta el carácter heredado o construido por los jóvenes, por ciertos jóvenes. De este modo, las demandas por el aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana quedan ocupando una posición relativamente equivalente, donde el clivaje generacional parece tener una relevancia considerable en la catalización de estos procesos.

1 Doctora en Sociología (Universidad de Granada, España). Máster en Desarrollo Local y Regional, Universidad Católica del Uruguay (UCU). Maestría en Sociología y Socióloga (UdelaR). Profesora Agregada del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI – ANII). filardo.veronica@gmail.com

2 Doctorando, Maestría en Sociología y Sociólogo (UdelaR). Profesor efectivo del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI - ANII). aguiar.sebastian@gmail.com

La tercera gráfica ordena a las organizaciones y movimientos juveniles en los ejes de organicidad y de “thelos”, de apuesta y discurso “político”. Esto permite, además de la clasificación, localizar orientaciones de las demandas de igualdad de los movimientos y organizaciones sociales, con implicancias en su potencial de acontecimiento.

Introducción

Este trabajo es un ensayo, en un doble sentido: un experimento comprensivo, intentando echar luz sobre lo que sucede y además en su forma, que siguiendo el ánimo –no el estilo disciplinar– con el que C. Geertz (1980) la defiende, apunta a un desafío teórico e interpretativo al estado del arte.

No se alude más que marginalmente a datos empíricos específicos, pero un importante volumen de información anterior soporta estas reflexiones. Por una parte, en el marco del proyecto de investigación “Juventudes sudamericanas” (2008-2011), desde el que se realizaron a lo largo de cuatro años grupos de discusión, entrevistas, una encuesta representativa a nivel nacional en seis países simultáneamente, actividades de intervención participativa y un amplio conjunto de publicaciones sobre activismo juvenil. Por otra parte, en el diseño y análisis de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (2010) se incluyeron diversas dimensiones sobre participación juvenil, que informan las consideraciones aquí presentadas. Además, investigaciones específicas sobre movimientos sociales juveniles alimentan estas hipótesis (Aguiar, 2012).

Una premisa fuerte, punto de partida, consiste en la existencia de un conjunto amplio de organizaciones y espacios de movimiento juvenil. Algunos estudios sobre participación política y social juvenil, por ejemplo Mieres y Zuasnábar (2012) señalan una disminución de la misma en los últimos lustros; se desprende de ellos que o bien estamos ante una tendencia general, o bien ante una “ola de contención” (R. Koopmans, 2004) del activismo juvenil. De otros trabajos se desprende otra hipótesis, que nosotros consideramos plausible en base a varias investigaciones antecedentes: existe un importante conjunto de organizaciones y movimientos sociales de corte más o menos juvenil, muchos de ellos nuevos en el tiempo, con incidencia en la explicación del sustrato de la adopción de estas tres medidas innovadoras. Ninguna de las tres son, aunque pueda parecerlo, gestos que emerjan del vacío o desde el gobierno: tienen su fundamento, el soporte sumergido del iceberg, en el trabajo de años de un conjunto de organizaciones sociales, muchas de ellas “nuevas” que crearon las condiciones de posibilidad para estas medidas. La importancia de esta situación amerita un análisis capaz de acercarse sin miopía a los procesos, las trayectorias, que fundan la emergencia de estas novedades³.

3 La novedad no está en las demandas en sí mismas que tienen rastro de existencia anterior, y en alguna de décadas. Sino en la forma de confluencia simultánea de las tres, y de la organicidad con que funciona la articulación entre ellas a las que probablemente puedan sumarse otras más (no a la baja de la edad de imputabilidad penal; lenguaje no racista y medidas hacia la población afrodescendiente, etc.).

Enmarcados en definiciones que se expresan más abajo en tanto entroncan con la perspectiva teórica del documento, en lo que sigue se consideran en concreto el Movimiento Scout, la Juventud del Pit-Cnt, las Juventudes cooperativistas (en particular la Juventud de FUCVAM), Murga Joven (participantes y no participantes del concurso), Movimiento voluntario (en particular la organización Techo), Movimiento estudiantil (en particular la FEUU), las juventudes político partidarias, el Movimiento feminista juvenil (que incluye, con algunas especificidades, el movimiento por la legalización del aborto), Movimiento de Derechos Humanos juvenil, Movimiento Afro juvenil, Colectivos artísticos (en particular circo, clown, payasos, teatro independiente), Tribus urbanas, Redes Frenteamplistas, Movimientos basados en medios de comunicación (Radios comunitarias, Árbol), Movimientos basados en informática (Software libre, Anonymous), Movimiento por la diversidad sexual y Movimiento por la regulación de la marihuana. Estos movimientos implican a varias decenas de organizaciones y agrupamientos, y a varios miles de jóvenes⁴.

En principio, este listado largo y relativamente indiscriminado incluye algunas grupalidades a las que sería polémico calificar como “movimiento social”, por ejemplo las Redes Frenteamplistas, los Scouts o las tribus urbanas; el primero demasiado cercano a la política, los dos últimos demasiado lejanos. En otros lugares se han presentado en cierto detalle estos agrupamientos, sosteniendo que las Redes no pueden comprenderse sin considerar ingredientes más allá de la política partidaria, y las tribus sin tener en cuenta elementos “políticos”, de posicionamiento crítico activo frente al sistema social. Más adelante se agrega a estas explicaciones la defensa de una definición más laxa, que no cierre de antemano las posibilidades de interpretación y pensamiento.

En este marco, teniendo en cuenta a este conjunto amplio de activismos, el artículo se concentra particularmente en el hecho de que durante el 2012 y el 2013 se han discutido en el Parlamento tres leyes (dos de ellas ya han sido aprobadas y la otra está aún siendo deliberada en este ámbito). Una segunda premisa fuerte en lo que sigue es que es preciso acercarse a la comprensión de estos procesos, relativamente inéditos, y en particular a las formas en que innovan en el “hacer política”. En este marco, si bien las tres demandas y en particular la despenalización del aborto han sido tratadas en Uruguay durante varios años, pensar este resultado implica considerar la acción de la generación actual de activistas sociales jóvenes: la forma articulada en que funcionan; las redes que establecen entre sí y las alianzas que han sido capaces de construir tejen un soporte sólido pero difícilmente visible para el resto de la sociedad frente a quien aparecen los “rostros conocidos” tomando partido en el debate.

En tercer término, como tercera premisa, la necesidad de pensar nuevamente. Los recientes acontecimientos en Brasil, Chile, en el norte de África, el movimiento de

4 En esta enumeración es necesario mencionar una ausencia: no se considerará el movimiento “ambientalista” o ecologista; aún no disponemos de estudios específicos en este sector. Asimismo, cabe señalar que no se colocarán en las gráficas analíticas a las diversas juventudes político partidarias estudiadas, en la medida en que existe una gran diversidad entre ellas, complejizan la representación.

los indignados, ebulliciones sociales imprevisibles, en alguna medida azarosas, de objetivos difusos, con una gran capacidad de movilización, invitan a reflexionar, más bien obligan a una academia que no gusta verse a sí misma desconcertada y sin palabras, sobre los movimientos sociales. ¿Cómo comprender, cómo explicar, estos procesos, sus apariciones, sus derivas? Las teorías clásicas se ven superadas e incapaces, sólo apropiadas para la consideración de fragmentos de la totalidad, o demasiado generales y torpes en su aprehensión. Es necesario incorporar formas de decir que sin "paranoia determinista" ni "parálisis funcionalista", sin pretender ajustar los fenómenos a un marco teórico predefinido ni perder la apuesta del movimiento social en la descripción de sus dinámicas, permitan conceptualizar estos sucesos.

Más allá de las especificidades de cada uno de los emergentes nombrados antes, aparecen un conjunto de lecciones aprendidas. Todos fueron estallidos relativamente inesperados. Posteriormente, pueden rastrearse líneas genealógicas que vuelvan explicable la historicidad de lo sucedido, pero una característica es una cierta imprevisibilidad. Como en la lógica browniana, tras un conjunto de situaciones que aparentemente son aleatorias, un movimiento rápido de las partículas, una aceleración de su dinámica, y surgen eventos, acontecimientos, inesperados y de gran potencia.

En todos estos casos, la conformación de movimiento social es a la vez indudable y cuestionable. Indudable porque el nivel de participación, la existencia de demandas, su apuesta de transformación social, recorrieron las portadas de los medios de prensa a escala global, acaparando la atención a nivel internacional. Por otra parte, cuestionable desde el punto de vista de su fundamento ideológico, su operativa emancipatoria: no se presentan como eventos organizados, con jerarquías y liderazgos, con propuestas estructuradas ni planificadas de cambio social.

En todos los casos, sus resultados son de algún modo indecibles. ¿Qué logros, qué relaciones de poder alteradas, qué sucede ahora, tras el estallido, en Túnez o Egipto, con la educación chilena, con el 15M o con Occupy Wall Street?

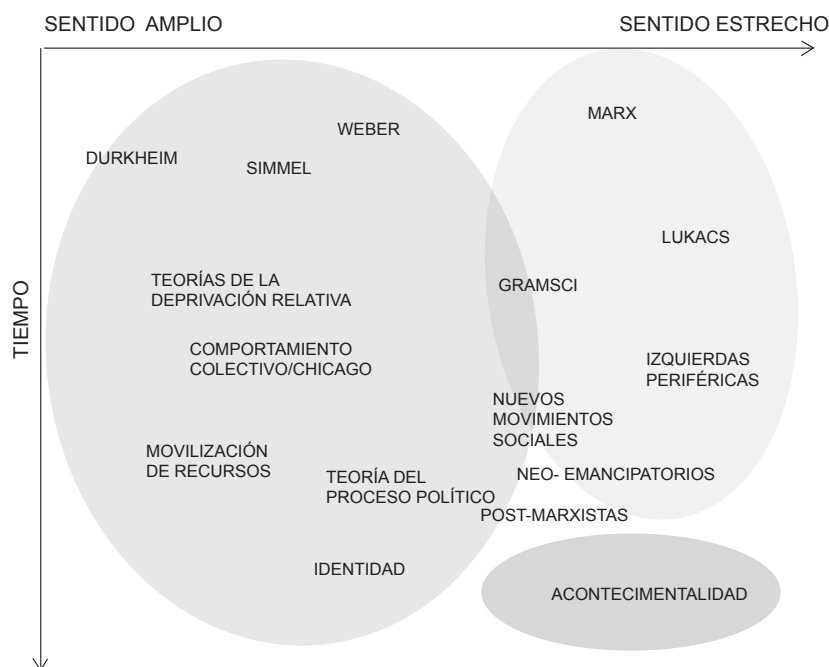
No se pretende en las líneas que siguen explicar estos eventos, ni se los considerará en específico. Sólo muestran la radical importancia de nuevos abordajes comprensivos, que partan de postulados diferentes de aquellos que han resultado insuficientes para una conceptualización. Estas situaciones operan como tipo polar del pensamiento, como aquello sucedido que puede servir para pensar nuevamente.

Situación teórica

La producción académica sobre movimientos sociales en teoría social es extensa. Más allá de sus aportes concretos, puede dividirse en dos grupos, en dos momentos, dos grandes posiciones analíticas. De un lado, en lo que C. Filgueira (1985) denominaba un sentido estrecho de la noción, puede distinguirse un conjunto de perspectivas concentradas en el potencial de cambio social de los MS, con un basamento más o menos directo en el pensamiento marxiano sobre la revolución social. En sus

mejores versiones esa acepción se concentra en las condiciones de posibilidad de la apuesta emancipatoria, en su ejecución, en su incidencia en el cambio de las relaciones de dominación generales. En segundo término, otro conjunto de perspectivas, con fundamento en las versátiles definiciones de agrupación y organizaciones de M. Weber o en los análisis de las organizaciones intermedias de Durkheim, pero con un importante desarrollo posterior, se concentran en un nivel del grupo, más cerca del funcionamiento concreto, de la operativa, de diversas organizaciones sociales.

Ambos “paradigmas” han dado lugar a estudios muy valiosos y han albergado a lo largo del siglo XX un amplio conjunto de teorías específicas –en el gráfico 1 se presentan las principales– e interrogantes sumamente pertinentes. De una parte entonces varios estudios se acercan a las organizaciones sociales, intentando comprender sus dinámicas, sus demandas, sus mecanismos, incluso las redes y situaciones en que se insertan. Así, por ejemplo, los abordajes desde la teoría de la movilización de recursos. De otra parte, reflexiones sobre el cambio social, donde el foco no está puesto tanto sobre la operativa de algunos grupos específicos como en la necesidad y estrategias necesarias para una transformación. Los movimientos sociales no son aquí tanto organizaciones, sino conjuntos particularmente relevantes, envueltos en procesos de modificación social general. Podríamos adjudicar a la primera posición una lógica atomista, donde los movimientos sociales son entendidos como unidades, análogas, equivalentes, con relaciones definidas entre ellas y con el exterior; y a la segunda una perspectiva “holística”, centrada en el todo, ya sea éste “el” movimiento social o “el” sistema.

Gráfico 1. Principales perspectivas teóricas sobre los movimientos sociales.

Fuente: elaboración propia

Entre ambas, tiene lugar un conjunto de perspectivas que apuntan a la convergencia, híbridos, que reflexionan a la vez sobre el potencial revulsivo de los movimientos sociales e incorporan la lógica atomista. Los enfoques de los nuevos movimientos sociales de por ejemplo M. Castells (1974) y A. Touraine (1990), los nuevos abordajes emancipatorios, incluso acercamientos identitarios, se sitúan en ese tenso equilibrio entre totalidad y atención a las partes; sólo en este marco pueden entenderse textos como “Hegemonía y estrategia socialista” (Laclau y Mouffe 2004), y su intento de elevarse a la contingente construcción de totalidades, o abordajes como los de Fraser (1997) o de Melucci (1999), que proponen el carácter estratégico para el cambio social general de las nuevas luchas identitarias.

En términos generales, podría proponerse un primer momento, fundacional en la comprensión del MS, donde éste era entendidos predominantemente desde la lógica holística, centrada en el todo; y luego, quizás a la vez, un segundo momento donde se pasa del estudio de “el movimiento social” al de “los movimientos sociales”. Esa deriva, en su momento acertada pues esquivaba determinaciones, y particularmente vigente desde la caída de los “grandes relatos”, permitía entender las muy distintas formas de

funcionar y de ser de las organizaciones, así como las nuevas demandas, que de otro modo quedaban fuera del marco interpretativo.

Pero la lógica atomista pierde algo central: despoja a los movimientos de su potencial transformador. Esto es, las demandas y reivindicaciones parecen quedar acotadas a asuntos puntuales, propios del grupo que eleva la protesta (con particular claridad los reclamos “identitarios”), y con excepciones, queda desatendida esa aura, ese potencial de impacto. Es apropiado desontologizar el movimiento social entendido como un todo: la realidad, las relaciones potenciales, superan en mucho los abordajes sintéticos, las clausuras de la teoría. La deriva a la perspectiva atomista parece a tono con el devenir de la teoría social y filosófica desde la segunda mitad del siglo pasado, pautada por la caída del “fundacionalismo”. Pero a su vez la desontologización implica una imposibilidad de considerar la totalidad.

Puede percibirse una tercera inflexión en la actualidad: la interrogación acerca del “suplemento” necesario para dirigirse al todo desde las partes. Parafraseando a A. Badiou: *“Siempre hay reivindicaciones en un movimiento, hay pedidos. Pero el acontecimiento político es más que esos pedidos, que esas demandas. No hay política sin este elemento suplementario que la situación no nos permite prever. Entonces vamos a decir que no hay política sin acontecimiento. Por eso puede tratarse de un movimiento obrero, un movimiento de trabajadores, un movimiento de jóvenes, de mujeres, de trabajadores extranjeros. En todos los casos existe este elemento suplementario, que hace que algo vaya más allá del grupo involucrado y que ese algo se dirija a todos. Por eso hay más en un movimiento que en una reivindicación”* (Badiou, 2000:6).

El acontecimiento

La acontecimentalidad se soporta en una perspectiva pluralista. Varios autores, en particular A. Badiou y M. Lazzarato han popularizado este enfoque, que describe las modalidades en las cuales las singularidades se componen y se descomponen, se unen y se separan, se cartografían y diagraman en lógicas mayoritarias y minoritarias.

Como señala Lazzarato en referencia a James, *“el pluralismo no niega los procesos de unificación y de composición sino que, al reconocer que las vías por las cuales se realiza la continuidad de las cosas son innumerables y contingentes cada vez, se plantea las preguntas siguientes: ‘El mundo es uno: pero ¿de qué manera es uno? ¿Qué especie de unidad posee? ¿Y qué valor práctico tiene su unidad para nosotros?’”* (Lazzarato, 2006: 25).

En este marco, la perspectiva de la acontecimentalidad permite acercarse de un modo nuevo a los movimientos sociales. Siguiendo la presentación de Lazzarato:

“Nuestra hipótesis es que los movimientos políticos, después de 1968, rompieron radicalmente con el objetivo unificador de la política occidental que funcionó en el siglo XX como represión y bloqueo del poder de la multiplicidad. Esta nueva dinámica vuelve opacos a los comportamientos de los movimientos y de las singularidades,

incomprensibles para los politólogos, para los sociólogos, para los partidos políticos y los sindicatos. Se habla entonces de despolitización, de individualismo, de clausura sobre lo privado, constatación desmentida con regularidad por la emergencia de luchas, de formas de resistencia y creación". (Lazzarato, 2006:181).

¿Cómo entender a los movimientos sociales desde la perspectiva del acontecimiento? En términos de Badiou: *"yo voy a llamar movimiento a una acción colectiva que obedece a dos condiciones. En primer lugar no está prevista ni regulada esta acción por la potencia o el poder dominante y sus leyes. Entonces, esta acción tiene algo imprevisible. Es decir, es una acción colectiva que rompe con la repetición. Vamos a llamar movimiento a algo que rompe la repetición colectiva, social. Es la primera condición. Y la segunda condición para un movimiento es que proponga hacer un paso más, hacia delante, con respecto a la igualdad. Es decir, si lo decimos en otras palabras, la consigna de un movimiento, lo que dice, lo que está proponiendo, va de una manera muy general en el sentido de una mayor igualdad". (Badiou, 2000:2).*

¿Cómo trabajar entonces los movimientos sociales desde la perspectiva de la acontecimentalidad? ¿Cómo reunificar las partes?

"La unificación se hace a partir de la forma red y los "sistemas" constituyen un "número incalculable de redes" que se superponen unas con otras. El "modo de unión" es muy diferente de la "unidad perfecta", "absoluta", implicada en la "forma todo". En el universo de la multiplicidad, las diferentes maneras de ser "uno" implican una multiplicidad de modalidades a través de las cuales se practican estas unificaciones. ¿Cómo se mantienen juntas las cosas, cómo hacen cohesión las redes, cómo se construye el mundo? De este modo, el universo pluralista se construye por "concatenamiento continuo" de las cosas y por "conocimiento concatenado" de los conceptos. Las redes establecen así cohesiones, "confluencias parciales", a través de la conexión entramada entre pedazos, partes y extremos del universo. Las partes componentes están ligadas entre ellas por relaciones cada vez particulares y específicas. Un movimiento, como todo elemento, puede participar de varios sistemas a la vez, tener varias relaciones, experimentar diferentes funciones. Esto entrañará estrategias políticas que permanecen completamente opacas a las fuerzas políticas y sindicales, precisamente porque estas últimas consideran "la unidad de las cosas como superiores a su multiplicidad". (Lazzarato, 2006:26).

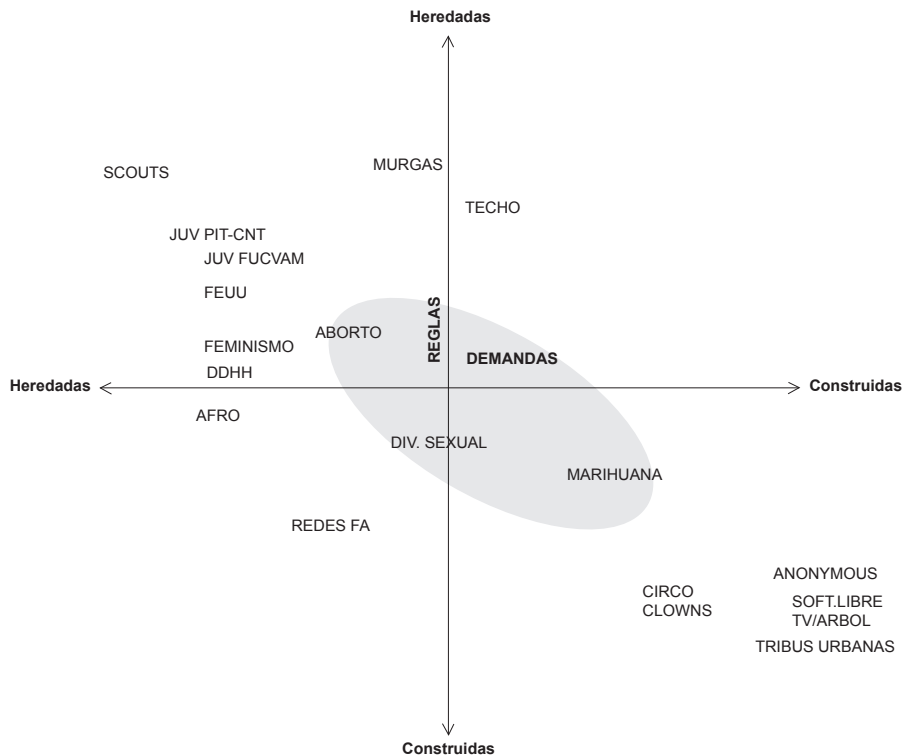
Tenemos entonces un universo irrealizado, un universo incompleto cuya realidad y conocimiento se hace poco a poco, por adición, por colección de las partes y de los pedazos. Un universo donde la composición debe seguir la cartografía de las singularidades, de los pequeños mundos, de los diferentes grados de unidad que lo animan. Un mundo aditivo donde el total no está hecho y que "crece aquí y allá".

Reglas y demandas

El gráfico 2 condensa una clasificación de diferentes movimientos juveniles en función de dos ejes: las reglas de funcionamiento u organización del movimiento juvenil, y las demandas que portan; en ambos casos los extremos son “heredados” o “construidos” para/por la generación joven actual.

Los extremos refieren a si es la generación actual que hoy integra el movimiento quien ha definido tanto reglas como demandas o si éstas fueron definidas por generaciones anteriores y los jóvenes actuales que integran el movimiento social juvenil (MSJ) las reencarnan en tanto históricas o construidas por “otros” jóvenes en un momento histórico diferente al actual. Que hayan sido construidas por generaciones anteriores no evita que tanto reglas como demandas puedan ser resignificadas y/o actualizadas por los jóvenes actuales.

Gráfico 2. “Movimientos sociales juveniles” según el carácter “heredado” o “constuido” de sus reglas y demandas.



Fuente: elaboración propia

Siendo ésta la composición de la clasificación se ubican detenidamente en el primer cuadrante (reglas de funcionamiento y demandas heredadas) los Scouts; las Juventudes del Pit-Cnt y de Fucvam y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). En los cuatro casos son movimientos que tienen sus orígenes en momentos históricos anteriores. Quienes crearon estas organizaciones (siendo jóvenes) lo hicieron en el pasado; y los jóvenes que integran los movimientos hoy, de alguna forma “heredan” o son “sucesores”; las organizaciones los preceden. Entre estos casos, no obstante, se puede establecer un gradiente en función de la capacidad de “reinención” tanto de reglas como de demandas, de adecuación del propio movimiento a condiciones sociohistóricas actuales. Por ejemplo, puede colocarse a los Scouts como en un extremo del cuadrante (máximo nivel de “Sucesión” tanto de reglas de funcionamiento como de demandas que la organización sostiene), en la medida en que la pertenencia a este movimiento es ritualizada, las prácticas son relativamente fijas entre generaciones y lleva como marca la permanencia de las mismas.

La estructura de funcionamiento de la FEUU requiere la adaptación de sus reglas a las condiciones históricas –internas y externas-, aunque el lugar institucional (integración en el cogobierno universitario, por ejemplo), permanece fijo a lo largo del tiempo en la estructura universitaria, a partir de la generación del 58 y la consagración de la Carta Orgánica de la Universidad de la República.

Por su parte las comisiones de Jóvenes del Pit-Cnt y la de Fucvam participan en instituciones que a lo largo de diferentes generaciones ocupan un lugar de relevancia política y social, con gran valor simbólico a la interna. El trabajo de los jóvenes se enmarca en el de la organización en general, con una fuerte asimilación de las agendas políticas, y sólo algunos matices etarios, en general asociados a otras demandas generacionales.

En el segundo cuadrante que representa a los MSJ caracterizados por reglas de funcionamiento y organización heredadas y demandas relativamente construidas, se ubica paradigmáticamente Techo, una organización internacional, con sedes en 19 países, que hasta el 2011 se denominaba Un techo para mi país. Éste es un movimiento también generacional, reciente, y que convoca a un número importante de jóvenes (en Uruguay se estiman en 10.000). Se asocia con el perfil católico y universitario, con signos de “movimiento global” en sus reglas y estructura, también en el discurso y formato de la acción, asociado al voluntariado tradicional, por lo que es considerado dentro de aquellos con reglas “heredadas” dado que no responden a la elaboración autónoma de los jóvenes uruguayos que integran el movimiento hoy. De corte de “servicio” tiene como motivación fundamental la “acción” orientada a la construcción de casas para familias pobres y carentes de vivienda. Techo ha sido estudiada como movimiento de voluntariado por Cajaraville, Martínez y Pérez (2011), quienes colocan el “encuentro” con los destinatarios de la “acción” como uno de los elementos más relevantes de cohesión y resignificación de la pertenencia, continuidad y sentido para sus integrantes.

Con reglas heredadas y demandas relativamente construidas se puede ubicar también la Murga Joven. Las reglas del formato artístico de la murga en general, y en particular del concurso de Murga Joven, producto de una política pública, explican que a los jóvenes se les presenta como heredada. Sin embargo, Murga Joven ha tenido una serie de modificaciones en relación al funcionamiento que ha derivado en una apropiación de este espacio por las murgas juveniles que permiten pensar que en gran medida y como resultado de la práctica de los propios sujetos, el espacio se ha convertido en un producto generacional. Las demandas sí son propias de la generación de los jóvenes actuales.

En el cuadrante III, que comprende los MSJ de reglas de funcionamiento y demandas construidas por los jóvenes actuales, identificamos al movimiento por la regulación de la marihuana, compuesto por más de una decena de organizaciones de distintos tipos, que adquieren su expresión pública organizada con esta generación. En esta medida es que su demanda es construida, y también son los jóvenes de esta generación quienes definen las reglas de funcionamiento que se dan para llevar adelante este reclamo. Su accionar conduce al posicionamiento del sistema político en relación al tema, así como a otras organizaciones de derechos y de jóvenes.

Se colocan en este cuadrante varios MSJ de índole básicamente cultural: los clowns, que en diversas expresiones que van desde lo representacional y estético hasta formatos asociados a la salud (payasos medicinales o saludarte) con una propuesta concreta de aplicación de combinatoria de técnicas lúdicas y trabajo con pacientes y familiares hospitalizados, son producto de esta generación y con ella surgen los formatos bajo los cuales se organizan. Así también todos aquellos vinculados al movimiento de software libre; altamente contestatario de la producción mercantil del desarrollo, uso y acceso vía mercado capitalista de los recursos informáticos, proponen un ambiente de acceso libre y sin derechos de autor (copy-left), con procesos de generación y desarrollo comunitario, cooperativo voluntario y anónimo. Este constituye uno de los movimientos generacionales de mayor impacto revolucionario en el siglo XXI; global, con millones de usuarios y desarrolladores a lo largo del mundo (Sennet, 2009). Por otra parte es no sólo un producto sino que establece condiciones de producción generacionales; es capaz de lograr “condiciones históricas nuevas” para definir un contexto de socialización de las generaciones siguientes, realmente determinante de un quiebre con las anteriores, y de impacto aún desconocido en sus consecuencias en la forma de concebir el mundo y las formas sociales de organización posible a nivel de ciudadanía global. Sin duda el desarrollo del software libre y en general el espacio virtual, con organizaciones como Anonymous, es condición singular de las nuevas generaciones.

El movimiento por el reconocimiento del derecho a la diversidad sexual, si bien no esgrime una demanda propia de esta generación, se consolida en ésta, adquiere mayor expresión pública a partir de la generación actual, no obstante se presenten mayormente defensores y protagonistas que no son jóvenes, es joven en tanto “movimiento”

que adquiere masividad, coloca su reclamo en la agenda pública, y convoca a miles de adherentes en sus eventos.

La demanda contra racismo y equidad de derechos raciales (no discriminación y demostración de efectos de la raza en desigualdad social en resultados) tampoco es nueva, ni pertenece a esta generación. No obstante, el movimiento afro ha logrado en este momento histórico una visibilidad que no se encontraba en otras épocas en el país. Un ejemplo es la difusión de la campaña por la modificación del lenguaje y sus contenidos racistas, estrategias relativamente novedosas que abren nuevos frentes de lucha y habilitan otras conquistas y formas de planteamiento social de viejos temas.

Otro ejemplo es la reciente aprobación de una ley de cuotas para empleos públicos.

En el cuadrante IV correspondiente a demandas heredadas y reglas construidas, se sitúan más típicamente las Redes Frenteamplistas, el uso de las nuevas tecnologías de la información ha posibilitado que la generación actual encuentre a través de las redes sociales nuevos mecanismos para difundir actividades y organizar eventos, aunque las demandas sigan siendo formuladas a través de los carriles partidarios.

Clivaje generacional

Cada generación puede ser considerada, hasta cierto punto, como perteneciente a una cultura diferente, en la medida en que incorpora en su socialización nuevos códigos y destrezas, lenguajes, categorías cognitivas, formas de ser y estar en el mundo: nuevas tramas de significaciones.

Virilio (1989, cfr. Margulis y Urresti, 1996) propone la noción de “generaciones de realidad”, en referencia a los cambios en las formas de percibir y apreciar, al cambio en el tiempo social, en velocidad, en la sensibilidad, en los ritmos y en los gustos. Cada época tiene su episteme, y las variaciones epistémicas son percibidas y apropiadas, con toda su intensidad, durante el proceso de socialización por los nuevos miembros que va incorporando la sociedad. Por lo tanto las generaciones comparten códigos, pero también se diferencian de otras y, al coexistir en el interior de un mismo grupo social, por ejemplo una familia, las diferencias generacionales, éstas se expresan frecuentemente “bajo la forma de dificultades y ruidos que alteran la comunicación y, a veces, constituyen abismos de desencuentro que en gran parte tienen que ver con que no se comparten códigos” (Margulis y Urresti, 1989).

Dadas las propiedades compartidas por una generación, entre las que se destacan formas de percibir la realidad y de vincularse con la política, organizarse y articular demandas, es posible apreciar con intensidad variable, rupturas con las anteriores que compartían otras formas. Las generaciones están definidas, y también distanciadas y/o enfrentadas entre sí, por ello. Así como Margulis y Urresti mencionan a la familia como institución o ámbito en que estas diferencias y distancias se expresan, también es posible verlo en los movimientos sociales, o más en general en las organizaciones

sociales. Existen estudios antecedentes de varias organizaciones en que se expresa el conflicto generacional, en los partidos políticos, los sindicatos, la cooperativas, las gremiales, el movimiento feminista (Filardo et al., 2009).

La cartografía del gráfico sugiere varias consideraciones interesantes, varias relaciones exteriores a cada movimiento, ya sean más o menos voluntarias. Por ejemplo la posición cercana entre la demanda feminista, de derechos humanos y de reivindicación afrodescendiente, con demandas y reglas relativamente heredadas, en términos de presencia, de presente, para la generación joven actual.

En particular, se vuelve evidente una convergencia. Con matices, las tres demandas que nos ocupan en mayor medida, aparecen juntas en una posición de “bisagra generacional”. Ninguna de ellas antecede en mucho en sus demandas o sus reglas organizativas a la generación joven actual, que las ha tomado como suyas, como propias.

Como característica que denota la existencia de una “generación” por detrás de este “movimiento” en el sentido de agitación, de temblor o estado social, debe destacarse la adhesión de un grupo importante de jóvenes a tres demandas, diferentes, de relevancia global que se articulan entre sí, con un “sentido histórico generacional”. Esto se plasma en diversas expresiones que producen sinergias múltiples entre sí: amplían el espectro de adherentes convocando a instancias de proclamación de sus reclamos asociadas a eventos que se colocan en el ámbito de la cultura popular con claras connotaciones de/para jóvenes (musicales, de expresiones callejeras y a través de redes sociales principalmente). Bandas de música, reconocidas por el público juvenil, participan de estos eventos, dotando de legitimidad y de reconocimiento simbólico a dichas demandas, básicamente en el conjunto de los jóvenes de esta generación. Las multitudes de jóvenes que logran congregarse en los eventos que organizan supone a su vez dos elementos centrales para un parlamento como el uruguayo: debe prestarse atención (en primer lugar porque son electores y/o futuros electores) a las demandas que planteen los jóvenes, y a la demografía del país, en el que el envejecimiento poblacional es un signo ineludible. El discurso actual reivindica la voz de los jóvenes, y el discurso de éstos a su vez dirige el debate hacia resultados que se realizan en leyes, lo que obliga al Estado, y previamente al parlamento a considerar estos temas.

Por otro lado, consolidan la difusión de los reclamos a través de una estrategia de menciones cruzadas a los otros aliados (las proclamas de la regulación de la marihuana, otorgan un “lugar” a la diversidad sexual y a la despenalización del aborto y así reciprocamente). Esto hace posible una plataforma común, sobre la que se apoyan estos tres movimientos, más allá de las especificidades de cada uno. Si bien el movimiento por la despenalización del aborto es anterior a esta generación y tiene un respaldo y sostén indiscutible desde las organizaciones de mujeres y movimiento feminista, así como el movimiento de la diversidad sexual agrupa GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y transgénero) que no pueden clasificarse como “jóvenes”, ambos adquieren una significación diferencial para esta generación que impulsa a ambos reclamos, otorgándole un respaldo social nuevo, abierto y sobre todo generacional.

Si bien no puede afirmarse que las dirigencias sean las mismas, puede identificarse una *conexión generacional* en estos tres movimientos (despenalización del aborto, matrimonio igualitario y regulación del cannabis) en el sentido de Mannheim (1993) es decir de participar activamente en/por un *destino común*⁵. No sólo comparten contemporaneidad, y posición generacional sino que articulan sus reclamos, intercambian y establecen vínculos recíprocos de solidaridad. Si bien pueden encontrarse matices entre ellos, conforman una sinergia producto de un proyecto, o un destino común.

Producen así un contexto histórico, marcado por esta *conexión generacional*, en Uruguay⁶. La información circula entre ellos, con uso privilegiado de las redes sociales, pero además contactos cara a cara. Los “defensores”⁷ en muchas ocasiones son los mismos para los tres movimientos, y establecen entre sí alianzas y complicidades.

Una de las cuestiones centrales es que la multiparticipación, si bien consigue agrandar la masa social de cada uno, no así necesariamente la de todos. Hay un techo en el conjunto de jóvenes militantes y que participan o se vinculan con al menos uno de ellos. Sin embargo, esto no supone que todos los jóvenes participen, y si bien hay una defensa a lo específico y particular, los adherentes potenciales de los tres movimientos crecen más sumando por solidaridad (sumando adhesiones) que sumando adherentes. Para decirlo de forma sencilla: muchos activistas participan de las tres demandas. Un militante que se suma a alguno, probablemente suma para los tres.

En este sentido las tres demandas (legalización del aborto; del cannabis y matrimonio igualitario) conforman una plataforma común, convocan una masa social, y consiguen una visibilidad que coloca al Uruguay como pionero en la discusión parlamentaria casi simultánea de los tres proyectos de ley, en la vanguardia internacional. Puede sostenerse, en este marco, que la discusión en pocos meses de estas tres medidas

-
- 5 La conexión generacional es más determinante que la mera posición generacional, de la misma forma que la mera situación de clase no puede equipararse a una clase que se autoconstituye. La posición sólo contiene posibilidades potenciales que pueden hacerse valer, ser reprimidas, o bien modificarse en su realización al resultar incluidas en otras fuerzas socialmente efectivas. Nos hemos acercado ya lo suficiente al fenómeno sobre el que vamos a tratar a partir de ahora, como para que tengamos que reconocer que la mera contemporaneidad biológica no basta para constituir una posición generacional afín. Para estar incluido en una posición generacional, para soportar pasivamente los frenos y las oportunidades de esa posición, pero también para poder utilizarlos activamente, tiene uno que haber nacido en el mismo ámbito histórico social -en la misma comunidad de vida histórica- y dentro del mismo período. Sin embargo, la conexión generacional es algo más que esa mera presencia circunscrita en una determinada unidad histórico social. Para que se pueda hablar de una conexión generacional tiene que darse alguna otra vinculación concreta. Para abreviar, podría especificarse esa adhesión como una participación en el destino común de esa unidad histórico social. (Mannheim, 1993:221).
- 6 No obstante no debe perderse de vista el contexto internacional y global en el que los jóvenes participan de forma privilegiada. Las demandas de matrimonio igualitario, despenalización del aborto y regulación del cannabis, son debatidos y están en la agenda pública contemporáneamente en muchos países desarrollados y varios de la región. Lo que singulariza a Uruguay es la cuasi simultaneidad de los tres debates y los resultados obtenidos.
- 7 Esta categoría fue desarrollada en el texto Movimiento por la legalización del cannabis (Filardo, Aguiar, Muñoz, 2007), a partir de una analogía con el planteamiento de Seidman (1994); pag 35-36.

tiene un fuerte potencial de acontecimiento, revulsivo, que en gran medida estriba, se sostiene, en la peculiar conexión generacional de estas demandas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, como señala Mannheim (1993), pueden coexistir diferentes conexiones generacionales en una misma generación o posición generacional dada por la contemporaneidad. Lo cual no es difícil de percibir en la gráfica; entre los jóvenes actuales (coetáneos, por tanto no sólo son contemporáneos sino que tienen una posición generacional común) conviven *destinos* diferentes (tanto se encuentran los pro-despenalización del aborto como los pro-vida).

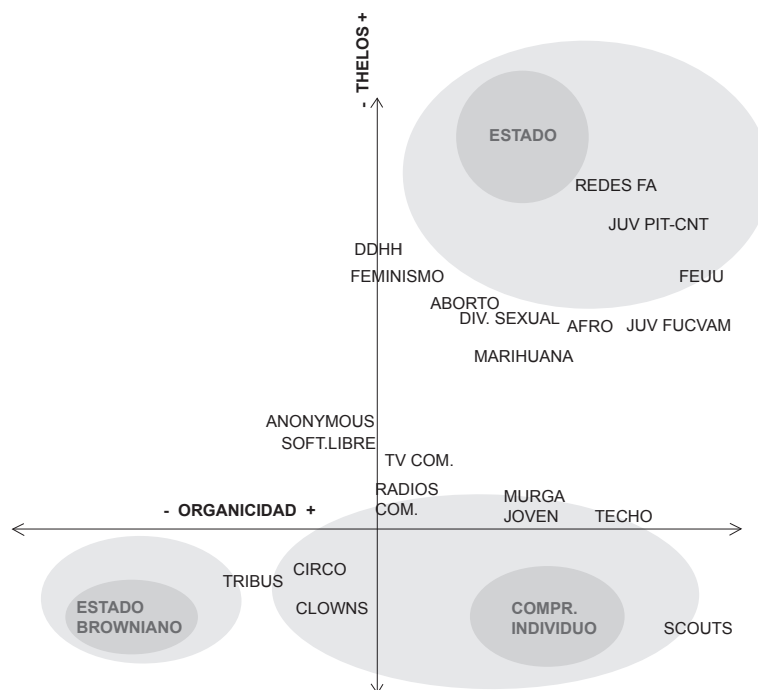
Organicidad y thelos

La gráfica 3 considera como una de las coordenadas la “organicidad” de los movimientos sociales juveniles. Con esto nos referimos a varios niveles: la existencia de organizaciones al interior del movimiento; de jerarquías e institucionalidad en esas organizaciones; y de articulación reglada entre ellas.

Como segunda coordenada se ordenan los movimientos sociales juveniles en torno a la existencia de un thelos, de una apuesta política integral. Esto implica también distintos elementos: la existencia de un discurso general sobre la sociedad, de un fundamento ideológico en la acción, de esa apuesta hacia una mayor igualdad que aparecía ya en la definición de los movimientos sociales desde la perspectiva del acontecimiento. Los diferentes movimientos sociales juveniles uruguayos (MSJU) pueden ordenarse en función de un mayor o menor componente teleológico, de orientación a futuro entendiendo la participación como una apuesta a mediano o largo plazo (que es análoga a la noción de *destino común* que utiliza Mannheim, y que toma de Heidegger). La noción de thelos implica la idea de finalidad: ¿Qué se busca con el activismo, qué objetivos se persiguen? En términos generales, corriendo el riesgo de parecer reduccionistas, algunos grupos, en un extremo, apuntan con su activismo a un cambio social total, a una “sociedad nueva”; otros, en el otro extremo, no plantean metas más allá de la propia participación.

Como es de esperar, la mayor parte de la movilización tiene lugar con algún nivel de organicidad y de apuesta compartida hacia la igualdad. En el primer cuadrante, de forma un tanto tautológica no se encuentra movimiento social que presente demandas de justicia en el espacio público sin organicidad alguna. Quizá Anonymous, la organización internacional que ataca objetivos informáticos seleccionados por votación, con el apoyo de distintos computadores que aceptan participar de la actividad, sea la que en mayor medida puede ocupar este espacio. En un sentido parecido, menos nítido, también el movimiento por el software libre, donde numerosos programadores acumulan en herramientas de software, con un discurso de oposición al sistema privativo.

Gráfico 3. “Movimientos sociales juveniles” según su nivel de organicidad y de “thelos”



Fuente: elaboración propia

Ya más definidamente ubicados en el segundo cuadrante, el movimiento sindical o el estudiantil, por ejemplo, presentan fuertes niveles de organicidad. Con organizaciones dominantes de gran importancia y relevante trayectoria, como son el Pit-Cnt y la FEUU, pese a la existencia de algunas pequeñas organizaciones que compiten con ellas, su centralidad es definida e indiscutible. En particular, las normas o reglas y estatutos son rígidos, producto de largas discusiones, llevan varios años en vigor y establecen normas para la elección de representantes, el funcionamiento cotidiano e incluso para las situaciones excepcionales. Además, aunque existen divergencias internas y distintas tendencias, éstas se administran en el interior de la organización, de acuerdo a mecanismos previstos de resolución de conflictos.

Por su parte, pese a que su principal característica fuese en oportunidad de su formación el carácter no sectorizado, horizontal abierto y emergente de su organización y lo espontáneo de las actividades que convocaban, las Redes Frenteamplistas en la actualidad cuentan con un mayor nivel de organicidad; en particular en cuanto a su

papel en el partido de gobierno, las actividades evidencian una mayor preparación a pesar de continuar trabajando mayormente en forma de red y mantener las jerarquías y liderazgos en el terreno de la informalidad.

La FEUU; la Comisión de Jóvenes del Pit-Cnt, y las redes frenteamplistas presentan además un discurso amplio, que trasciende, al menos en ocasiones, la temática particular y se refiere al todo social. Se posicionan respecto a asuntos políticos varios, aunque no haya una homogeneidad entre sus integrantes respecto a las posiciones en concreto. Con una organicidad importante, pero en un segundo escalón en cuanto a la posesión de un discurso global, se sitúa el movimiento cooperativo.

En el tercer cuadrante, el movimiento Scout y el de voluntarios presentan características similares entre sí y específicas respecto al resto. En ambos casos puede distinguirse un variado número de organizaciones, y pese a que la coordinación entre ellos es limitada, la dinámica interna de cada organización suele caracterizarse por estar fuertemente pautada, altamente reglada. En ambos casos además no existe un “thelos”, una apuesta política integral, aunque en el voluntariado puede localizarse con facilidad una organización dominante, que supera a las demás en forma destacada tanto en número de participantes como en institucionalidad y presencia política, la organización Techo, que presenta un cierto discurso sobre lo social, bastante heterogéneo, y que aunque no integral o totalmente explícito se expide sobre varios niveles.

En un nivel parecido de discurso social no fuertemente definido puede ubicarse a la Murga Joven, aunque muchas de las murgas más importantes se posicionan en temas de interés general, en forma bastante definida. En cuanto al grado de organicidad, al interior de cada murga las relaciones son variadas y las formas de organización pertenecen a cada agrupación. Por otra parte, como se señalaba arriba, al enmarcarse en un género preexistente, que de algún modo pauta el producto, en tanto delimita los integrantes del coro, los ritmos predominantes, la estructura de la presentación, hay una cierta normatividad heredada, contra la que se puede en ocasiones combatir, que algunas murgas pueden desafiar, pero que sin duda impera. Además, como también se apuntaba, es crucial la característica de que gran parte de la normatividad emerge de espacios oficiales, en particular de la IMM o el Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP), que regulan la instancia de competencia y los procesos de inscripción, los talleres, etc.

Los movimientos que se organizan en torno a medios de comunicación como radios comunitarias, producciones audiovisuales y otros, presentan un nivel de estructuración medio en términos relativos. Existen numerosos grupos y organizaciones, por una parte, pero los espacios de articulación ente ellos son restringidos. Si bien existen por ejemplo coordinaciones de radios comunitarias, el funcionamiento de cada una es relativamente autónomo e independiente. Por otra parte, en todos los casos existen normativas internas, en particular en Árbol y las radios comunitarias más importantes, con instancias de decisión definidas y actividades plenarios. En cuanto al nivel de ideología, de discurso sobre mundo, muchas radios y televisiones comunitarias tienen

posiciones fuertes, ideológicas y globales. Otras no. El proceso en curso de discusión de un marco regulatorio tensará el ambiente, generará movimiento aún imprevisible.

En el cuarto cuadrante, los colectivos artísticos o las tribus urbanas aparecen como formas con un leve nivel organizativo y de thelos, de apuesta, que se destacan sobre el espacio browniano de lo social. Este núcleo, que también se marca en la gráfica, merece una mayor atención de la que puede prestársele en estas páginas. Presenta un alto potencial de acontecimiento (Aguiar 2012); el discurso público de los jóvenes emerge de una parte del espacio social, con cierta organicidad y thelos, que no representa el discurso de “la juventud”, auténticamente opaco en la actualidad, sometido a tensiones y fracturas, brechas sociales agudas.

En el segundo cuadrante, con un nivel de discurso político integral medio alto, en tanto emergen desde una demanda específica pero con implicancias para el todo social, el movimiento de los derechos humanos y el feminista en Uruguay tienen una organicidad media. Existe un amplio conjunto de organizaciones, varias de ellas de referencia (Familiares, Ielsur, Serpaj, Mysu, Cotidiano Mujer, pero muchas otras), algunas presentan una participación juvenil relevante a su interior, y también existen varias agrupaciones juveniles específicas. Sin embargo, son demandas ampliamente esparcidas en la sociedad, sin instancias de coordinación o decisión centralizadas. En un sentido similar, así como el software libre se mantiene en las fronteras de la organicidad, el movimiento feminista o de derechos humanos se mantiene “al borde” de lo social, esparcido, no tan centrado en las organizaciones que sostienen las demandas.

De cualquier modo, en cuanto a Derechos Humanos, eventos recientes como el posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia, la realización de denuncias organizadas, las marchas anuales del 20 de mayo, muestran la importancia de este espacio.

En concreto, el movimiento por la despenalización o legalización del aborto se despega del espacio feminista general, con algunas características específicas, como la existencia de una coordinación y de organizaciones que enfatizan en este asunto concreto, y con una composición donde los activistas juveniles tienen una mayor presencia. Un deslinde similar podría hacerse respecto a la violencia doméstica, como un tema sin duda derivado de la lucha feminista, pero con una relativa independencia, aunque ya con un peso menor de lo “juvenil”.

Los movimientos por la legalización de la marihuana y la diversidad se mantienen relativamente juntos en el espacio social, con un nivel de organicidad medio, en tanto existe un buen número de organizaciones en cada caso. El movimiento no heteroconforme, con varias décadas de existencia, en la actualidad está fuertemente liderado por Ovejas Negras en cuanto organización de referencia, pero existen varias otras; algunas en el interior del país, otras específicas, como las de personas trans, espacios de coordinación, como la Fudis o la coordinadora de la diversidad.

El movimiento por la regulación de la marihuana es más reciente, e incluye a organizaciones con una incidencia similar, aunque presentan algunas diferencias entre

ellas en cuanto a líneas argumentales, a posicionamientos ideológicos y a estrategia general. Así, por ejemplo, algunas se centran más en la posición del cultivador, otras en la de los usuarios, otras tienen un corte más regional. Pese a que su dinámica ha sido irregular, en la actualidad el movimiento articula en forma estable a través de la Coordinadora por la regulación de la marihuana. En este primer eje, y comparando ambos movimientos entonces, hay menos centralidad de una organización que integre a la mayoría de los activistas, pero un conjunto algo más amplio de grupos relevantes y activos, y una mayor coordinación.

En términos ahora del segundo eje, en los tres casos recién mencionados, aborto, diversidad y marihuana, aunque las demandas son específicas, relativas a la situación de discriminación por orientación sexual, al aborto, al consumo de marihuana, en los tres casos se detecta con claridad que en los últimos años han logrado politizar el debate, derramarlo en el espacio social: en particular entre las organizaciones más relevantes, la asociación de sus causas con otras en el espacio social y su “politización”, ha permitido un discurso que integra este conflicto en una más amplia línea de reivindicaciones de derechos.

Articulación y dirección de las demandas

En muy grandes rasgos, los distintos MSJU pueden agruparse en función del espacio al que en forma dominante dirigen su demanda. Un conjunto de ellos se orientan en forma prioritaria hacia el Estado, sin que esto quiera negar que en simultáneo se apunte a otros espacios. En cambio, otro conjunto de MSJU tiene otra orientación prioritaria: apuntan más bien al compromiso individual, ya sea priorizando el trabajo voluntario o teniendo como centro la imbricación personal de los militantes. Esos dos “polos de la acción” se presentan en la gráfica. Evidentemente no son polos excluyentes, ni los únicos objetivos de las acciones, ni el único espacio donde tienen efecto.

Pero por ejemplo, aunque las demandas de la juventud del Pit-Cnt sin duda pueden tener múltiples referentes, ya sea cámaras empresariales, sindicatos específicos o el propio Pit-Cnt, incluso la opinión pública, la sociedad toda, en forma prioritaria se dirigen al Estado, operan hacia él. Cerca del otro polo, el Movimiento Scout, el de voluntarios, apuntan más bien al compromiso de los participantes.

La gráfica pretende hacer visible que el conjunto de organizaciones que coinciden, que han desarrollado una cadena de equivalencias, que de algún modo se han coaligado en torno a las demandas por aborto, matrimonio igualitario y marihuana, por “nuevos derechos” concentran su acción hacia el Estado.

Los tres movimientos han remitido sus demandas al sistema político y en este sentido buscan alianzas en agentes parlamentarios y partidos políticos. Muchos de los activistas en los tres movimientos son a su vez militantes de distintos sectores de izquierda, y por tanto es relativamente “natural” y posiblemente directa esta conexión, que a su vez habilita lazos con muchos otros movimientos sociales, a partir de alguno

de los círculos de pertenencia (movimiento estudiantil, partidos políticos, movimientos sociales). La cohesión se da por la vía de la conexión generacional, se sostiene además en posiciones sociales comunes, que habilitan la construcción de diálogos y confianza, en el proyecto o destino común. Las actividades públicas y las demostraciones de apoyo sirven como argumentos, como pruebas que sustentan la pertinencia de la demanda.

El posicionamiento de algunos grupos y sectores políticos (en principio aquellos de pertenencia de muchos de los activistas de estos movimientos) desencadena la puesta en debate y en agenda pública de estas demandas. Una vez que se produce esto, como efecto inmediato el resto de los sectores y partidos no pueden no participar del debate, lo que termina en el posicionamiento de todos y cada uno de los actores del sistema político. Cuando esto se consigue, los movimientos se vuelven nuevamente a las bases sociales, para encontrar el apoyo requerido que respalde lo que de alguna forma puede lograrse en el lobby entre parlamentarios.

Esta dirección de la acción tiene un conjunto de consecuencias o implicancias. Se mencionarán dos de ellas. En primer término, las tres demandas aluden y se fundamentan en una perspectiva de derechos. Sin embargo los derechos a los que remiten no son los tradicionalmente entendidos como civiles, políticos, sociales (Marshall, 1998) y los que posteriormente se extienden a derechos económicos, sociales y culturales. Estos movimientos desde una lógica liberal aluden al derecho individual de decisión sobre el cuerpo y la no injerencia del Estado en ello, mediante la represión, el control o la sanción. En segundo término, las tres demandas configuran una articulación similar, orientada al Estado. Y esto tiene un efecto “amortiguador” sobre el potencial revulsivo del acontecimiento, sobre su suplemento, que parece ahogarse frente a la biopolítica.

Puede entenderse que detrás de la propuesta de la regulación del cannabis, se encuentra el derecho a consumir esta sustancia; como de hecho en Uruguay no está prohibido el consumo, sino la comercialización, el argumento es aún más claro. Se entiende fundamental el derecho a consumir, es decir ingerir o introducir en el cuerpo lo que el individuo decida, sin que intermedien pautas sociales, y particularmente legales, en la decisión. En el caso de la despenalización del aborto, se defiende “el derecho a decidir” (slogan que forma parte de la campaña de difusión), y la decisión involucra el cuerpo (de la mujer); lo mismo ocurre al lazo sexual con quien se desee, con independencia del sexo propio y el del otro (“el mismo amor”).

Son demandas que no se anclan en las necesidades vitales (alimentación, vivienda); políticas (votar, ser votado, libertad de expresión), o sociales (educación, trabajo), ni culturales (respecto a los diferentes credos, razas, etnias, etc.). Estas demandas aluden a ser libres respecto al cuerpo. Lejos de los derechos de acceso igualitario a recursos, bienes o servicios, estos reclamos se vinculan a la libertad del individuo relativa a lo inmaterial y a la posibilidad de decidir sin ataduras cuestiones que tienen que ver con su propio ser, también definido individualmente.

Sin embargo, estos derechos se inscriben también en una conceptualización de la ciudadanía que dista de la tradicional basada en los derechos universales. Los derechos a comprar legalmente marihuana, abortar y casarse entre los del mismo sexo, suponen por definición la no-universalidad. Implican el reconocimiento a lo que estaba fuera de la norma (tanto jurídica como social), como el dar cuenta de hechos sociales (existen abortos en la clandestinidad, tal situación supone riesgos individuales y públicos, se distribuyen desigualmente entre la población, etc.; así también el consumo de la marihuana crece, el mercado es negro, no existen controles sobre la calidad del producto, hay riesgo en el consumo, se favorece a las organizaciones de narcotráfico, etc.); no existe diferencia en el amor en función del sexo, se reclama igualdad para el reconocimiento y las posibilidades legales conyugales en caso de homosexualidad.

La diferencia radica entonces, en que si en la concepción tradicional de la ciudadanía los derechos se constituyen como un “homogeneizador” de la población, y se atribuye su carácter universal, en estas tres demandas prevalece el derecho a la excepción. En los derechos universales se debe asegurar el acceso igualitario; se debe garantizar que todos los ciudadanos puedan hacer uso del ejercicio de ese derecho (pensemos en el derecho a la educación y cómo se llega a posteriori a la “obligatoriedad” de su cumplimiento). En cambio, en ninguno de los tres casos analizados se promueve el ejercicio del derecho (ni ser homosexual y casarse, ni consumir marihuana y comprarla, ni embarazarse y abortar). En todos, justamente, el reconocimiento supone lo contrario a la obligación. La obligación de reconocer estas situaciones recae sobre el Estado y no sobre los ciudadanos el ejercicio del derecho.

El tener un marco legal al que acudir en estas situaciones, no obstaculiza incluso regulaciones por parte del Estado para prevenirlas (el proyecto de ley de la regulación de la marihuana supone disponer del sistema educativo para prevenir situaciones de consumo no responsable; en el caso de la despenalización del aborto un protocolo de las instituciones sanitarias para detectar la indeclinable voluntad de la mujer a interrumpir el embarazo, y asegurar que disponga de información completa sobre las alternativas a ello; en el caso del matrimonio igualitario, las parejas deben decidir su contrato matrimonial (institución que está en firme declive en la sociedad posmoderna y líquida).

Pasando al segundo elemento que se proponía discutir desde la configuración que adquieren los movimientos ordenados en la gráfica, se constata como se señalaba arriba la construcción, tanto en la despenalización del aborto como en la aprobación del matrimonio igualitario o la legalización de la marihuana, de alianzas exitosas, de un proceso de articulación similar en los tres casos y altamente eficiente.

Pero este direccionamiento al Estado, al sistema político, si bien maximiza los resultados en términos de legislación, también impacta en los resultados de la demanda a nivel social. La discusión en pocos meses de estas tres medidas no ha configurado un acontecimiento, más bien ha tenido un limitado poder revulsivo sobre la sociedad. Respecto a esta inmediata constatación, que se plasma en la relativamente escasa conciencia de estar de algún modo protagonizando un proceso histórico por parte incluso

del movimiento social, pueden formularse cinco hipótesis. En primer lugar, la estructura de la demanda en términos de derechos no universales sino de excepción, podría no permear, no tener impacto sustantivo sobre la sociedad en su conjunto. Tampoco son demandas históricamente legitimadas como lo sería el desempleo juvenil, o la educación laica y gratuita (del movimiento estudiantil chileno, por ejemplo). En este sentido, podrían quedar encapsuladas en espacios reducidos de activistas y no percibirse a nivel más masivo como procesos exitosos, como victorias.

O bien, en segundo término, la amortiguación del potencial de acontecimiento puede situarse en la sociedad, donde Real de Azúa colocaba esa dinámica que encontraba central, paradigmática en Uruguay.

La tercera hipótesis estriba en el carácter biopolítico que comparten estas demandas, en la medida en que la referencia presente en las tres, al cuerpo y a la libertad de las personas sobre sí mismas, se dirige a que el Estado regule las conductas, y la administración estatal castra el potencial de acontecimiento (Lazzarato 2006).

La cuarta hipótesis, en términos de conflicto de clases de edad, surge del basamento generacional de la articulación actual de estas demandas: los activistas se enfrentan a un contexto adultocéntrico (Aguiar 2012), que frena las implicancias de los postulados juveniles.

La quinta posibilidad interpretativa, partiendo del hecho de que el incremento de las brechas socioeconómicas y culturales y de las distancias entre los jóvenes, es una de las constataciones más relevantes de la configuración social del Uruguay actual, es que este conjunto de jóvenes, la conexión generacional que articula estas demandas, no sean “representativos” de “la juventud”, que no representen prioridades movilizadoras, no sólo para la generación de activistas centrados en el compromiso individual, sino que tampoco permeen el espacio browniano, no permitan fijarlo, ordenarlo.

Conclusiones

En la primera frase anunciábamos un ensayo; una interpretación del *movimiento* (algo que se mueve) que existe en la sociedad y que involucra a los jóvenes.

En este marco, en primer término, se postula la importancia del clivaje generacional para entender la emergencia casi conjunta de estas temáticas, en el entendido de que una generación es tal en la medida que es producto de -y a su vez produce- determinadas condiciones en el contexto histórico que la vuelven particular. Así, se habilita la interpretación en clave generacional de algunas de las variaciones que se identifican en Uruguay en torno a la movilización social, el tipo de demandas y sobre todo las estrategias que se despliegan en torno a la puesta en agenda de algunos temas y el impulso al posicionamiento de distintos agentes y actores políticos y sociales en relación a ellos.

Hemos distinguido un conjunto de jóvenes entonces que comparten no sólo la contemporaneidad (viven en el mismo momento histórico) sino la posición generacio-

nal (lo hacen siendo jóvenes, pertenecen a las mismas cohortes de nacidos), y se ubican en las mismas coordenadas en la distribución del poder que se otorga en este momento histórico en una sociedad dada al ser joven, adulto o viejo⁸. Pero además de lo anterior, esos jóvenes, comparten una conexión generacional: participan de un destino común (Mannheim, 1993). En este sentido distinguimos, dentro del amplio conjunto de movimientos analizados, tres que consolidan una plataforma común, un thelos, pero también una estrategia de acción y van a su vez convergiendo en resultados: la despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario y la discusión del proyecto de regularización del cannabis.

Sin embargo, por otro lado hemos dado cuenta de la existencia de otro conjunto de jóvenes (contemporáneos y con la misma posición generacional) que no sólo no participan de esta conexión (de este destino común) sino que su participación y acción colectiva se dirige por otros andariveles. Desde una lógica más centrada en el compromiso individual en la acción, con objetivos sociales asistencialistas y de voluntariado, de escala micro, se mueven con un thelos más difuso y aunque se sugiere oposición al primer grupo (por ejemplo en las organizaciones pro-vida) no se detecta aún una conexión generacional intensa, aunque de forma latente compartan un discurso e incluso una práctica (más cercana a la actuación juvenil católica tradicional de organizaciones de voluntariado y “ayuda social”). Podríamos incluir en este segundo grupo a los scouts, Techo, Castores, Emaús, Tacurú. Con menos espectacularidad y publicitación que las que presenta el primer grupo, los adherentes son miles.

En tercer lugar, se distingue un tercer espacio; un movimiento difuso, sin thelos, sin organicidad, pero particularmente sin conocimiento de lo que ahí ocurre. Es un espacio opaco, donde sí pasan cosas, aunque no se sepa bien qué, al que se dirigen muchas de las intervenciones de política pública porque ahí se colocan los “problemas sociales”. Es un espacio de relativa resistencia a la institucionalización, a la integración a los mecanismos de participación pública (ni los conocidos del segundo grupo, ni los novedosos pero institucionalizados al fin, del primero). En cierta medida ajenos a la dinámica “conocida”, este tercer conjunto opone una resistencia por lejanía e indiferencia: se desafilian del sistema educativo, tienen prácticas culturales que van por la “cuneta de la ruta” (captados escasamente por el mercado que por otra parte los segmenta).

En consecuencia se desprende de este ensayo una serie de preguntas y en este sentido es abierto. ¿Es este espacio opaco, browniano, el que tiene en sí un mayor potencial de acontecimiento, de estallido indecible, imprevisible? Este conjunto de jóvenes se sitúa en el punto ciego de la academia, de la clase política, de los técnicos que diseñan políticas sociales, de la propia sociedad que no lo reconoce más que en la amenaza y desde el miedo.

8 Esto no implica que la distribución del poder pueda actualizarse en diferentes campos, momentos y lugares (de ahí que las clases de edad son nociones relativas, situadas y contingentes necesariamente).

¿Constituye el primer conjunto de jóvenes la generación que lidera un cambio generacional que coloca a Uruguay en la vanguardia internacional en torno al reconocimiento de derechos?

Existen “dos generaciones” en el activismo juvenil actual (en la medida que existan dos conexiones generacionales, y por tanto dos destinos comunes diferentes) en los jóvenes contemporáneos?, ¿se enfrentan sus proyectos?

Bibliografía

- AGUIAR, Sebastián** (2012). Movimientos sociales juveniles en Uruguay: situación en las últimas décadas y escenarios prospectivos. RECSO. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 3, n° 3, pp 38-66.
- BADIOU, Alain** (1999). El ser y el acontecimiento. Buenos Aires: Manantial.
- BADIOU, Alain** (2000). Movimiento social y representación política. www.grupoacontecimiento.com.ar. Acontecimiento N° 19-20.
- BAUMAN, Zygmunt** (2006). Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil. Siglo XXI, Madrid.
- CAJARAVILLE, D.; MARTÍNEZ, N.; PÉREZ, M.** (2011) “Mucho más que una casita: Construyendo subjetividades. Un techo para mi país. (en prensa)
- CASQUETTE, Jesús** (1998). Política, cultura y movimientos sociales. Bakeaz, Bilbao.
- CASTELLS, Manuel** (1974). La cuestión urbana. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A.
- COHEN, Jean L.** (1985). “Strategy or Identity: New Theoretical paradigms and contemporary social movements”, *Social Research*, 52 (4) pp 663-716.
- DIANI, Mario.** (2004). Networks and participation. En *The Blackwell companion to social movements*, Oxford.
- EDWARDS, Bob y MCCARTHY, John.** (2004). Resources and social movements mobilization. En *The Blackwell companion to social movements*, Oxford.
- FALERO, Alfredo.** (2008). Las batallas por la subjetividad. Construcción de derechos, luchas sociales y dominación simbólica en Uruguay, Montevideo, CSIC, Fanelcor.
- FILARDO, Verónica** (coord.). (2010). Encuesta nacional de adolescencia y juventud. Segundo informe. Infamilia, Montevideo.
- FILARDO, Verónica** (coord.). (2009). Jóvenes y adultos en Uruguay, cercanías y distancias. Cotidiano mujer, Montevideo.
- FILARDO, Verónica** (coord.). (2008). ¿Qué ves cuando me ves? Rosgal, Montevideo.
- FILARDO, V., AGUIAR, S., MUÑOZ, C.** Movimiento por la legalización del cannabis (2007). <http://www.geug.edu.uy/?p=37>
- FILARDO, Verónica** (coord.). (2000). Tribus Urbanas en Montevideo. Nuevas formas de sociabilidad juvenil. Trilce, Montevideo.
- FILGUEIRA, Carlos** (comp). (1985). Movimientos sociales en el Uruguay de hoy. Ciesu, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
- FILGUEIRA, Carlos; RAMA, Germán.** (1991). Los jóvenes de Uruguay: esos desconocidos. Análisis de la encuesta Nacional de Juventud. CEPAL, Montevideo.

- FOUCAULT, Michel** (2006). Seguridad, territorio y población. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- FRASER, Nancy** (1997). *Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”*, Siglo de Hombres Editores, Santa Fe de Bogotá.
- GEERTZ, Clifford** (1980). *La interpretación de las culturas*. Gedisa, Barcelona, España.
- GOFFMAN, Erving** (1974). *Frame Analysis: An essay on the organization of experience*. New York, Harper & Row.
- HALL, Stuart; DU GAY, Paul** (comp.). (1996). *Cuestiones de identidad cultural*, Amorrortu, Buenos Aires.
- KOOPMANS, Ruud** (2004). *Protest in Time and Space: The Evolution of Waves of Contention*. En *The Blackwell companion to social movements*, Oxford.
- KRIESI, Hans** (2004). *Political context and opportunity*. En *The Blackwell companion to social movements*, Oxford.
- LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal** (2004). *Hegemonía y estrategia socialista*. FCE, Buenos Aires.
- LAZZARATO, Mauricio** (2006). *Políticas del acontecimiento*. Tinta Limón, Buenos Aires.
- LAZZARATO, Mauricio** (2006). *Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de control*. Creative Commons, Madrid.
- MAFFESOLI, Michel** (2004). *El tiempo de las tribus*. Siglo XXI, Madrid.
- MANNHEIM, Kart** (1993). *El problema de las generaciones*. En REIS N° 62, abril – junio, pp 193-242.
- MARGULIS, Mario** (1996). *La juventud es más que una palabra*. Biblos, Buenos Aires.
- MARSHALL, T. H. Y BOTTOMORE, T.** (1998). *Ciudadanía y Clase Social*. Alianza, Madrid.
- MC CARTHY, John y Zald, MAYER** (1987). *Social movements in an organizational society*, Transaction books, New Jersey.
- MELUCCI, Alberto** (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El colegio de México, México.
- MELUCCI, Alberto** (2001). *Vivencia y convivencia*, Trotta, Madrid.
- MELUCCI, Alberto** (1989). *Nomads of the present. Social Movements and individual needs in contemporary sociology*. Hutchinson, Londres.
- MIERES, Pablo y ZUASNÁBAR, Ignacio** (2012). *La participación política de los jóvenes uruguayos*. Fundación Konrad Adenauer, Universidad Católica del Uruguay Montevideo.
- OFFE, Claus** (1988). *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*, Madrid, Sistema.
- RODRÍGUEZ, Ernesto** (1985). “La juventud como movimiento social. Elementos para el estudio del caso uruguayo”. En Filgueira, Carlos (comp): *Movimientos sociales en el Uruguay de hoy*. Ciesu, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
- ROMERO, Juan** (2010). *Participación social de la juventud uruguaya en los últimos 20 años*. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Año 15, N° 50; julio setiembre; pp. 117-128.
- SEIDMAN, S.** (1994). *The end of sociological theory*. En Seidman, S. (compilador): *The postmodern turn. New perspectives on social theory*. Pp. 119-139. Cambridge University Press, Cambridge.

- SENNET, R.** (2009). El artesano. Anagrama, Barcelona.
- SNOW, David; SOULE, Sarah y KRIEISI, Hanspeter** (eds.). (2004). The Blackwell companion to social movements. Oxford.
- TILLY, Charles** (2004). Social Movements, 1768-2004. Paradigm Publishers.
- TOURAINE, Alain** (1987). El regreso del actor. Buenos Aires: Editorial Universal de Buenos Aires.
- TOURAINE, Alain** (1990). Movimientos sociales de hoy. Barcelona, Ed. Hacer.
- TOURAINE, Alain; MELUCCI, Alberto** et. al. (1988). Teoría de los movimientos sociales. Cuadernos de Ciencias Sociales N° 17. Costa Rica: FLACSO.
- WALLERSTEIN, Immanuel** (1999). Movimientos antisistémicos. (con Arrighi, G. y Hopkins, T. K. Madrid: Akal.
- ZIBECHI, Raúl** (1999). La mirada horizontal, movimientos sociales y emancipación. Nordan, Montevideo.

El papel de la responsabilidad social empresarial en la regulación del tejido social

Aperturas analíticas para el caso uruguayo

Alfredo Falero¹

Una empresa genera una bolsa de trabajo y actividades de capacitación para personas que viven en el entorno. Otra realiza un programa de apoyo a diversas organizaciones sociales y educativas. Otra integra un conjunto de actividades de voluntariado corporativo en la comunidad. Son ejemplos posibles de una idea que se ha venido extendiendo también en Uruguay: la responsabilidad social empresarial o corporativa. Naturalmente, no todas las empresas integran programas de este tipo y otras lo hacen con programas distintos a los antes señalados y relacionados por ejemplo al medio ambiente o a las condiciones de trabajo dentro del propio lugar de trabajo. ¿Cómo se explica esa gama de acciones? ¿Una simple cuestión de imagen? ¿Es una moda que lleva a emular lo que hacen otros? ¿Se trata acaso de un mero mecanismo de exención de impuestos? El presente trabajo propone un análisis sociológico de este tema haciendo una introducción a dimensiones posibles del mismo, pero focalizándose en el aspecto de la empresa interviniendo directamente en el tejido social y ejemplificando en el final con un caso en la zona metropolitana de Montevideo.

Un examen sociológico de la temática puede admitir varios caminos, al comienzo es necesario tener en cuenta los lineamientos teórico-metodológicos que se seguirán:

Se establecerá una visión relacional del problema despegada de los discursos apoloéticos habituales de la literatura empresarial sobre el tema.

Se considerarán tales prácticas a partir de diferentes escalas de análisis (global, regional, nacional, subnacional) desde quienes las proponen y desde los receptores. Se asumirá, en consecuencia, que se trata de un proceso global del capital, pero que siempre presenta especificidades locales en su cristalización.

Se abrirán diversos planos de análisis del problema pero focalizándose en su capacidad de reconfigurar el tejido social.

¹ Doctor en Ciencias Sociales, especialización Sociología. Docente e investigador Departamento de Sociología, Co-coordinador Núcleo Interdisciplinario de Pensamiento Crítico. alfredofalero@gmail.com

Los lineamientos anteriores se relacionan con objetivos que van más allá del objeto específico del artículo y que refieren a la conexión entre procesos globales en curso y a las transformaciones en el tejido social. En ese sentido, y considerando de fondo esa perspectiva de investigación más ambiciosa, la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE) constituye una dimensión de análisis de un problema más vasto.

Existen numerosas definiciones de RSE. Por ejemplo, las siguientes: “la RSE puede definirse como el compromiso de las empresas a contribuir con el desarrollo económico, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad y la sociedad en general, para mejorar la calidad de vida de todos”. O esta otra: “la RSE es el mecanismo mediante el cual las organizaciones contribuyen a la estabilidad del medio social y muestran su “rostro humano” a la comunidad. Sus fundamentos son maximizar la contribución de la empresa a la sociedad y minimizar los impactos adversos”².

Como se observa, son definiciones que evitan toda complejización del tema, se mantienen en el terreno de naturalizar lo dado sin problematizarlo, en que la consistencia sólo se aprecia en la perspectiva de afirmación que contribuye positivamente a la sociedad. Se podría decir que la secuencia del razonamiento es la siguiente: un agente social con poder construye y reproduce ideas en base a sus prácticas e intereses que luego la academia transforma en definiciones generales que se ofrecen a la sociedad con carácter apolítico, fuera de toda ideología, y rodeadas de visiones de armonía social.

Se podría argüir –ahora más allá de esas referencias específicas–, que se trata por lo regular de literatura empresarial y que como tal está dirigida a un público determinado (empresarios, directores, ejecutivos) que en todo caso ha aumentado en las últimas décadas, pero no requiere mayor atención detenerse en el mensaje. Lo importante serían las prácticas.

Después de todo, se trata de una contribución de algunos sectores empresariales y que ningún partido político estaría dispuesto a ponerla en cuestión más allá de posiciones diferentes aquí y allá. En el fondo subyace una visión pragmática que se relaciona con lo posible en el Uruguay de hoy y además por la cual se asume de hecho que nadie pierde y si no es así, al menos se trata de un fenómeno limitado. Aquí ya se identifica un problema: un análisis sociológico no puede asumir como válida tal cómoda postura ni quedar reducido al mero registro empírico espacio-temporalmente acotado.

La tesis que subyace a este trabajo es que no se trata de un fenómeno menor o coyuntural sino un indicador más de cambios profundos por los que la empresa tiende a posicionarse en una instancia concentradora de poder no sólo económico sino político y simbólico y en tanto tal, pasa a erigirse como un referente social más activo que

2 Fuente: definiciones extraídas de la presentación en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE): “La Responsabilidad Social de las Empresas en Uruguay. La percepción de los ciudadanos”, de Giorgina Piani, Zuleika Ferré y Máximo Rossi del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales.

antes en la conformación de las relaciones sociales. Es decir, que quizás haya cambios de nombres y de imagen en el futuro, probablemente se observen valles y mesetas en torno al dinamismo del tema, pero el proceso social que sostiene las prácticas es de carácter transcoyuntural.

Contextualización sociohistórica

Lo que se aglutina bajo el rótulo puede ser diverso, pero un mínimo rastreo histórico de la idea general muestra que no se trata de un tema nuevo. Se han distinguido tres etapas en su evolución (Leal, 2007). La tesis que se sustenta en este trabajo es que la tercera de ellas, la contemporánea, representa una inflexión con respecto a todo lo anterior y constituye un elemento adicional de las mutaciones globales en curso.

En una primera etapa, se comienzan a integrar inquietudes como salarios y condiciones de trabajo que nacen con el propio desarrollo de la economía en el siglo XVIII y se desarrollan notoriamente en el siglo XIX. Aquí no hay un concepto desarrollado sino elementos sueltos, emergentes a partir de los problemas causados por la revolución industrial.

En una segunda, hay un ideal de RSE más moderno y extensivo integrando más problemáticas como la inseguridad social o el desempleo y se desarrolla en el siglo XX. Se ha señalado específicamente a Rockfeller (conocido gran empresario del petróleo) y a Carnegie (del acero) a principios del siglo XX, popularizando la filantropía y la creación de fundaciones propias en Estados Unidos (Ramiro, 2009).

Como concepto actual, el año clave suele ubicarse en 1953 con la publicación del trabajo de Howard Bowen "Social Responsibilities of the Businessmen", que formaba parte de una colección sobre "Ética cristiana y vida económica", del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en América. En una comparación con la cooperación internacional para el desarrollo, Rafael Domínguez Martín (2011) marcaba cómo Bowen apelaba a la responsabilidad social de las corporaciones para producir no sólo bienes y servicios, sino devolver a la sociedad parte de lo que ésta les había facilitado. Un año después, Peter Drucker, devoto cristiano episcopaliano, incluía la responsabilidad pública como una de las áreas clave del management: los ejecutivos también tenían que promover "el bien público" y "contribuir a la estabilidad, el fortalecimiento y la armonía sociales", decía en "The Practice of Management" de 1954.

La conexión con el management representa la expansión de la RSE, pero todavía podía ubicarse ésta en su segunda fase. En la tercera fase, la actual, los temas que abarca se han ampliado en forma significativa –el medio ambiente, por ejemplo– generándose paralelamente una conexión estrecha con la publicidad y la mercadotecnia. En general, las grandes corporaciones no pueden escapar del tema, asumiendo, por distintas razones, una intervención más fuerte en la sociedad.

Ahora bien, ¿por qué ocurre este cambio? Pueden esbozarse varias razones pero en principio no debe dejar de tenerse en cuenta lo que se explicaba en otro lugar

en relación a las batallas por la subjetividad colectiva en las que participan grandes empresas (Falero, 2008). A fines de la década del noventa, si bien se estaba en un contexto de expansión capitalista, también había una crisis de confianza hacia las grandes corporaciones, de denuncias y críticas de organizaciones sociales globales hacia sus acciones, y de consecuencias visibles de retiro del Estado en la intervención social y la regulación económica.

Ya antes del sonado caso de la empresa Enron en Estados Unidos, otros grandes escándalos contables se habían hecho públicos. Así es que no es casual que en este contexto el debate sobre la ética –y sobre la ética en los negocios– comenzara a instalarse. Las agencias globales instalan oficinas que estudian la relación entre ética y negocios. Hay un problema de crisis de legitimidad que –recuérdese además– en América Latina supone desde la segunda mitad de la década del noventa un mayor protagonismo de los movimientos sociales.

A nivel global, para lograr que los empresarios se establecieran como interlocutores válidos, la recomendación era –y lo sigue siendo– que deben trabajar primero para cambiar la percepción de una población “decepcionada de los resultados de la participación del sector privado en los servicios de infraestructura”. “Hay que mejorar la imagen del sector privado en América Latina”, decía Antonio Vives del BID en una Cumbre en Salamanca ante 200 influyentes empresarios (convocados por Enrique Iglesias, por la Secretaría General Iberoamericana), al citar una encuesta según la cual la mayoría de los latinoamericanos “no está satisfecha con la economía de mercado, pero al mismo tiempo cree que es necesaria”³.

A comienzos del siglo XXI, el primer documento oficial de la Unión Europea donde existen referencias a la RSE, corresponde al del Consejo Europeo de Lisboa del año 2000. Poco tiempo después, ya se había convertido en una cuestión clave de su agenda, recuerda Perdiguero (2003). En esa línea, la Unión Europea publicó el “Libro verde” sobre responsabilidad social de las empresas (2001) y las Naciones Unidas normas sobre la “Responsabilidad de las Empresas Transnacionales y otras empresas Comerciales” (2003).

A partir de lo anterior, se podría decir entonces que la primera etapa está vinculada al surgimiento de la revolución industrial y la segunda a la consolidación de la misma, específicamente a la expansión del conocimiento aplicado a la industrialización posterior a la segunda guerra mundial. Es decir, lo que se conoce en general como “fordismo” en cuanto a organización hegemónica del trabajo con efectos en la organización general de la sociedad. La tercera etapa, la actual, puede entonces ubicarse de la mano del cambio del papel del empresario –es decir, no sólo de imagen aunque

3 Fuente: artículo: “Enrique Iglesias pretende crear un consejo que ayude a jefes de Estado y de gobierno. Buscarán empresarios de Iberoamérica incidir en políticas públicas de la región”, La jornada: 17.10.05. Ver Falero, 2008, pág. 183 y siguientes.

naturalmente por lo expresado implica ésta–, que muchos decisores globales buscan afirmar. Sobre este punto se volverá específicamente en el siguiente apartado.

Nueva cultura empresarial y formación de las elites

Muchos autores han estudiado la nueva cultura de un capitalismo más “global”. Por ejemplo, Richard Sennett que entre otras cosas analiza lo que significa la crisis en los individuos de no sentirse “útiles” (Sennett, 2006) o el monumental estudio de Boltanski y Chiapello (2002) sobre “el nuevo espíritu del capitalismo”, entendiendo esto como un conjunto de creencias asociadas al nuevo orden y que contribuyen a justificarlo y mantenerlo y que por tanto también conforman lo que las elites de las sociedades pueden entender mayoritariamente por virtud, justicia o bien común.

Uno de los aspectos particularmente estudiados es la expansión de la literatura empresarial en la que se analiza la normatividad que subyace. Es decir, naturalmente existen tecnologías sociales que hacen a la organización y gestión empresarial, pero también comportan al mismo tiempo una fuerte tonalidad moral. Como señalan los autores “la literatura de gestión empresarial no puede estar únicamente orientada a la obtención de beneficios, sino que debe también ser capaz de justificar el modo en que éstos son obtenidos, dar a los cuadros los argumentos necesarios para resistir las críticas que arrearán desde el momento mismo en que traten de plasmar en la práctica las recomendaciones prodigadas y para hacer frente a las exigencias de justificación con las cuales se verán confrontados, frente a sus subordinados o en otras arenas sociales en las que participen. La literatura de gestión empresarial debe, por lo tanto, mostrar de qué modo la manera de obtener beneficios prescrita puede ser deseable, interesante, excitante, innovadora o meritoria” (Boltanski y Chiapello, 2002: 99).

Es decir, a los efectos de este trabajo, la tercera etapa de la RSE se corresponde con una mucho mayor y elaborada sistematización del manejo de los negocios en un marco en que florece la literatura empresarial y las “business schools” (escuelas de negocios, precisamente) y en la que los programas de “Master of Business Administration” o MBA se han vuelto algo corriente. La mención en inglés no es antojadiza, es que existen estudios que demuestran que las business schools estadounidenses pasaron a ser el modelo, tanto como para imponer una terminología en inglés. Una dimensión de un proceso mayor de dinámicas globales con mayor presencia de las transnacionales.

Naturalmente a nivel local y a su escala, también el fenómeno del “saber managerial” ha adquirido creciente relevancia. Particularmente desde instituciones privadas (Instituto Superior de Especialización en la Dirección de Empresas de la Universidad Católica y Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas –ACDE–, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo –el IEEM– o la de la Universidad ORT, entre otros). A nivel de la Universidad de la República, no es casual que una de las facultades que más se ha acoplado rápidamente al nuevo orden sea Ciencias Económicas. Y como puede entreverse para todos los casos, no se trata simplemente de formación

en términos de contenidos, sino de socialización en un espacio particular en el que se tejen redes.

El hecho es que en estos ámbitos y en la literatura específica, cada vez aparece más claro que para favorecer el interés de la empresa se debe interactuar con un conjunto de actores sociales que no son sólo los habituales (funcionarios estatales, otros empresarios, sindicalistas).

Es decir, que mediante la RSE, las corporaciones transnacionales intervienen en muchos más aspectos de la vida de las personas que simplemente en la compra de un producto o en el suministro de un “servicio”. Si las fronteras entre empresa y tejido social se hacen cada vez más porosas, la RSE debe ser visualizada como una dimensión más de ese proceso.

Una dimensión más que se complementa con la visión utilitarista de capital social que han popularizado autores como Putnam y Coleman desde la década del noventa, pero de la que también ha hablado el Banco Mundial, con los desarrollos del concepto de confianza, de las ideas de eficiencia y eficacia empresarial aplicadas a los más diversos ámbitos sociales y con la expansión del voluntariado y la especificidad del voluntariado corporativo. Es preciso dar algunos elementos rápidos en tal sentido para mostrar que se trata de un cuadro más amplio en el que se inserta la RSE.

Recuérdese entonces muy someramente que capital social en autores como los mencionados –y a diferencia de la perspectiva desarrollada por Bourdieu por la que el concepto adquiere una perspectiva relacional que contribuye a explicar la reproducción de la desigualdad social– se asocia a recursos con los que se puede disponer para potenciar intereses individuales o –en nuestro caso– empresariales. Por ejemplo, Putnam en su trabajo sobre el norte de Italia (1993) encuentra en la capacidad de asociarse un elemento central del desarrollo. Tener capital social para una empresa pasa a ser una cuestión central⁴.

Y la conexión de “lo social” comienza a tener otro sentido en la acumulación. Es decir, la pregunta a los efectos de este trabajo podría ser formulada entonces como sigue: ¿cómo la búsqueda de capital social lleva a plantearse acciones en RSE y a la vez cómo la RSE contribuye a la reproducción del capital social? Y esto lleva a la confianza. De hecho es uno de los “valores sociales” planteados por el mismo Putnam.

También se puede hablar mucho sobre la confianza como concepto sociológico, pero el punto aquí es que implica un aprendizaje de los actores y la creación de una

4 El concepto de capital social se encuentra disperso en la obra de Bourdieu. Interesa señalar que ya estaba presente en su trabajo junto con Passeron sobre el acceso a la universidad y el éxito académico de 1964 (reimpreso en Argentina en 2003, con introducción de Ricardo Sidicaro). Para visualizarlo en textos más recientes se remite a Bourdieu 2000 y 2001. En cuanto a Putnam y más allá de su obra muy difundida (1993), véase también “Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam’s Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy” de Carles Boix y Daniel N. Posner en el siguiente link: <http://www.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/96-04.pdf>

relación social con tal componente, todo lo cual exige tiempo y funciona en términos de expectativas de futuro. Por tanto, se enmarca en un par con la desconfianza. No puede estudiarse una sin la otra. Una relación basada en la confianza puede transformarse en desconfianza y con ello la cooperación se limita a lo imprescindible o directamente desaparece. Y en una era donde la posibilidad de la comunicación y la información se han expandido y hacen al proceso de acumulación, las transnacionales buscan operar creando relaciones de confianza y de aceptación. Y ello exige operar con estrategia de futuro y no sólo con objetivos inmediatos.

En consecuencia, la RSE puede contribuir a generar expectativas de confianza y a la aceptación en general de la empresa en un contexto donde los elementos oscuros e invisibilizados del capital bien pueden muy rápidamente visibilizarse y generar lo contrario: desconfianza y escasa o nula aceptación de una empresa o –peor aún– asociar la desconfianza con una marca corporativa. Esto exige imaginar lo que significa si se generaliza como proceso y paralelamente se genera la convicción colectiva de ser engañado por quien tiene el poder. Para quien conoce algo de procesos sociohistóricos el punto no le es ajeno. Lamentablemente no es el caso, en general, de las nuevas generaciones de sociólogos.

Por colocar un ejemplo entre muchos posibles. Chiquita Brands International –empresa en la que desde fines de los noventa se implementó un modelo de RSE– puede asociarse poco en las representaciones sociales en América Latina en su negocio de productora y distribuidora global de bananas. Pero en verdad es la continuación de United Fruit Company, empresa más conocida por ser un actor directo de golpes de Estado en el siglo XX. El más conocido, Guatemala en 1954, ante la reforma agraria del presidente Arbenz. Sin embargo, hay una línea de continuidad que no se ha perdido considerando el financiamiento de “Chiquita” a grupos paramilitares en Colombia⁵.

Por no recordar que seguramente el golpe de Estado en Honduras del año 2009 seguramente fue bien recibido en el consejo corporativo de Chiquita Brands que se había venido quejando por el aumento del salario mínimo en el período del presidente Zelaya (en un 60 %) y que afectaba sus beneficios en sus plantaciones, habitualmente consideradas “campos de concentración” siguiendo la expresión utilizada por la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros.

Es decir, ese esfuerzo de replanteamiento de responsabilidad social –que en su momento se expresó en cómo la empresa decidió replantear su visión, misión y códigos de ética estableciendo guías de comportamiento para su personal y la redefinición de sus principios y valores– resulta bastante poco efectivo cuando aparecen elementos como los mencionados en su accionar cotidiano. En tal sentido, la conexión entre confianza colectiva y RSE aparece clara: perdido lo primero, lo segundo puede tener pocas

5 Chiquita Brands trata de que no se difunda su vinculación con el paramilitarismo en Colombia. Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Fuente: Público, Sábado 18 de mayo de 2013. Véase <http://omal.info/spip.php?article5485>

posibilidades y por tanto ya no tener objeto. Lo cual a su vez puede abrir a otras acciones de organizaciones sociales y a cambios fuertes en una corporación transnacional.

Otra dimensión de análisis asociada a la RSE son los criterios de reclutamiento de “recursos humanos”, en tanto ahora incluyen cualidades personales que hacen a la capacidad de comunicación y relacionamiento. Y frente a la imagen clásica del funcionario estatal asociado a lo estático e inactivo aparece el modelo del “hombre managerial” asociado a lo contrario, lo dinámico y lo activo. De la mano de la construcción de un nuevo referente social de las élites empresariales y de gestión asociado a la acción y el inconformismo, ahora la búsqueda de poder o la ambición desmesurada –antes percibidas negativamente– pasan a ser cualidades.

Quizás las expresiones de Carlos Slim (el conocido empresario mexicano, que posee una de las mayores fortunas del mundo) señalando a Forbes que los hombres de negocios y los empresarios tienen más experiencia que los políticos manejando recursos y pueden resolver más fácilmente los problemas que ellos, dan cuenta no sólo de su percepción “personal” sino de las representaciones colectivas del espacio social que comparte con multimillonarios y élites políticas y tecnocráticas globales⁶.

En el mismo sentido, expresiones incorporadas habitualmente en la sociedad –incluso por quienes no comparten esa perspectiva “managerial”– como eficiencia, eficacia, innovación y emprendedurismo, pueden ser explicadas como parte del poder simbólico de las élites globales naturalizado en las distintas sociedades por los referentes locales de las mismas y que cruzan partidos políticos y sectores sociales.

En ese enfoque, ¿por qué no pensar que los empresarios pueden ser más efectivos que los políticos en el asistencialismo social? ¿Por qué no pensar que de esa forma se eliminan intermediarios estatales que suelen percibirse bloqueando permanentemente lo que se considera la eficiencia y eficiencia empresarial? ¿Por qué no liberarse de costosas ataduras de políticos a la hora de actuar socialmente y, de paso, ahorrar dinero en impuestos, mejorar la imagen pública e intervenir en el tejido social?

La empresa privada aparece así como el agente que muestra hoy el camino de la “eficacia” de la gestión al resto de la sociedad, es decir, de proceder en general con el método óptimo para ir de un punto a otro. Todavía no se llega a entender que para algunos medios de comunicación este mensaje es mucho más importante que apostar por –o favorecer a– el partido político A, B o C. Incluso puede existir el mismo mensaje de eficiencia y eficacia con una cobertura de progresismo y ser aún mucho más efectivo socialmente.

En ese marco –y volviendo luego del largo paréntesis– a la tercera fase de la RSE, es que puede decirse que la expansión de la misma está vinculada a las mutaciones globales en curso en el marco de las emergentes transformaciones informacionales

6 Fuente: “Empresarios resuelven mejor los problemas que los políticos: Slim”, La Jornada: 08.03.2012, página 29, sobre declaraciones a la revista Forbes.

del capitalismo por las que el control de lo social incorpora nuevas prácticas. Pero, como esto puede parecer un razonamiento sin fundamentación (o peor aún, se puede denigrar el análisis asumiendo que respira cierto aire conspirativo), es necesario apresurarse a señalar que en esta fase del capitalismo las dimensiones vinculadas a la información y la comunicación adquieren un rol más importante para la acumulación de capital. La postura se enmarca en la discusión sobre capitalismo cognitivo que a su vez implica líneas de trabajo y perspectivas diferentes en su desarrollo en centros académicos europeos.

Como se ha desarrollado en un trabajo anterior (Falero, 2011), las mutaciones actuales permiten hablar de una emergente revolución informacional en el capitalismo que tiene un triple carácter: científico técnico, organizacional y territorial. Una tesis que no es posible desarrollar aquí en todo lo que implica. Solamente corresponde señalar dos elementos. Uno, que desde la perspectiva que se procuró establecer en el libro mencionado y en trabajos posteriores, lo organizacional sugiere nuevos formatos de relacionamiento entre instituciones estatales, empresas –particularmente aquellas con posiciones dominantes– y tejido social. Y en segundo lugar, que esa nueva cultura o espíritu del capitalismo mencionados anteriormente, debe ser visualizada en dialéctica con los cambios en las fuerzas productivas y su despliegue global.

En este sentido organizacional, también se ha identificado que en los últimos años en América Latina, sectores empresariales han ensayado estrategias para modificar condiciones de funcionamiento y organización de instituciones del Estado. En menor o mayor medida dependiendo de las sociedades, se ha demostrado el ensanchamiento de sus espacios de participación combinando acciones como grupos gestores en lo económico, como agentes sociales con penetración ideológica y como actores políticos a través de los partidos.

Debe recordarse entonces que en Chile –de la mano de la dictadura del general Pinochet– ocurrió una fuerte mutación en la figura del empresario. Allí no sólo promovieron e impulsaron los procesos de reformas neoliberales, sino que se constituyeron en actor privilegiado del modelo de la concertación. De forma individual o colectiva, apoyaron las estrategias de política económica de los gobiernos y cumplieron funciones de asesoría institucional (Flores, 2006).

En otro trabajo se ha explicado cómo se generó una verdadera operación de integración simbólica que remodeló fuertemente las batallas por las subjetividades colectivas y que puede ser establecida esquemáticamente como sigue: los individuos pueden y deben resolver con eficacia sus problemas en el “mercado”, inmejorable asignador de recursos. A ello contribuyó el acercamiento entre posiciones políticas de izquierda y sectores del empresariado y ello fue la base de la “Concertación”.

En un trabajo de la socióloga Cecilia Montero (con prefacio de Alain Touraine) sobre Chile, se concluye en una serie de causas que explican la conformación de ese nuevo orden empresarial como la que ocurrió en ese país en el período reciente: a)

un sistema de incentivos económicos (a empresarios) y la capacidad del Estado para implementarlos (probablemente el término más adecuado sea imponerlos), b) un proyecto ideológico en el entendido de un sistema de ideas que le dio contenido y valor al quehacer empresarial y que configuró un proyecto cultural neoconservador, c) la oferta de “recursos humanos”, es decir profesionales y técnicos altamente calificados, considerando además que profesionales de clase media se transformaron en empresarios de la mano del punto anterior y, finalmente, d) redes sociales de apoyo en términos de contactos y relaciones de una clase media profesional (Montero, 1997).

Si bien el trabajo termina bastante alineado con una perspectiva acrítica de búsqueda de “actores del desarrollo”, tiene el mérito de atravesar la simplona idea frecuente que considera el éxito asociado a las elites económicas compuestas casi inevitablemente por individuos racionales –incluso a veces visualizados como excepcionales, como la construcción social que se hizo recientemente de la figura de Steve Jobs– en contextos en que se abren oportunidades de ganancia.

No es casual que en Chile haya florecido tempranamente –en relación a América Latina– una sistematización y divulgación de ideas y prácticas sobre responsabilidad social empresarial. Desde la perspectiva de este trabajo, no puede entenderse el tema sin abrirse a un cuadro más amplio de investigación. Corresponde este comentario, pues desgraciadamente, en tanto se aprecia una “chilenización” de las ciencias sociales en el sentido de su tendencia a la conformación de este campo académico como mero conjunto de unidades de negocios, también se multiplican los problemas de captación de la realidad y la capacidad para elaborar cuadros analíticos relacionales y antireduccionistas que permitan ofrecer otro tipo de hallazgos.

La RSE en la sociedad uruguaya

Si se observa el recorrido que hace la implantación del tema en la sociedad uruguaya, se observará una tendencia creciente a la expansión de la misma. No existen estudios empíricos importantes que den cuenta del efectivo arraigo. En tal sentido, puede acompañarse la afirmación que realizó Oscar Licandro del Programa de Investigación sobre Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad Católica, en el sentido de ausencia de conocimiento sobre el número real de empresas que están trabajando en RSE, así como sobre el avance experimentado por cada una de las distintas dimensiones del concepto⁷.

No obstante, existen elementos provenientes de un índice anual que elabora ACDE (con apoyo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales), así como evidencias indirectas que abonan la posición de expansión anotada. El soporte del índice mencionado es un formulario autoadministrado sustentado en la autopercepción de directivos y ejecutivos de empresas y que luego envían a ACDE. Considerando

7 Fuente: Oscar D. Licandro en revista *Empresarial* de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. N° 93, Montevideo, ACDE, setiembre 2010.

las empresas participantes y el año que se comenzó a realizar el índice –en el 2003– se observa una tendencia a un dinamismo creciente de la RSE.

Es decir –asumiendo las limitaciones de la herramienta– si bien puede anotarse alguna caída en el índice en un año (así lo marca el informe del 2011), se nota un proceso de “aprendizaje” general en el tema. En cuanto a protagonismos, las empresas transnacionales tienen un desarrollo más importante pero también se ha notado un avance en empresas nacionales, incluyendo estatales, en estos últimos años. Considerando los sectores de actividad –la muestra clasifica en comercio, servicios e industria– el sector más rezagado es el primero⁸.

Otras evidencias de expansión de la RSE la señalan actores que cotidianamente trabajan con ello. Desde DERES, organización civil que tiene el tema como centro de atención, se observa un creciente involucramiento de las empresas a nivel local aunque en una dinámica comparativamente lenta en relación a lo que ocurre incluso regionalmente (particularmente se considera el caso de Brasil y Chile). Desde la actividad que comienza, paradójicamente, en plena crisis de comienzos de siglo en Uruguay, se registra el incremento creciente de prácticas de RSE. Para la organización, el conocimiento y seguimiento de tales prácticas es importante para transformarlas en insumos de difusión y de formación así como de generación de herramientas que puedan ofrecer a los empresarios. La visión que subyace y se reproduce es de pragmatismo y de que todos ganan si se incorporan prácticas de RSE⁹.

Cabe mencionar que esta organización empresarial forma parte del Forum Empresa, una alianza de organizaciones empresariales enfocadas en la Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial creada en el 1997. Según indica su propia página web, “su meta es la promoción de prácticas de negocio responsable y la creación de una comunidad empresarial innovadora y sostenible en el continente americano, desde Estados Unidos hasta Chile”¹⁰.

Es decir, que la dinámica general ha mostrado su expansión en cuanto a actores, propuestas, modalidades y acciones a escala global, regional y nacional. Esto ha implicado también el desarrollo exponencial de organizaciones encargadas de monitorear, difundir, formar, etc. el proceso.

8 Fuente: índice de Responsabilidad Social Empresarial. Ver página web de ACDE: <http://www.acde.org.uy/rse.php>

9 Fuente: entrevista realizada al Director Ejecutivo de DERES, Eduardo Shaw, en mayo 2013. La página web es: www.deres.org.uy Corresponde agradecer la disposición del entrevistado para mostrar las actividades y la perspectiva de la organización en torno al tema. Sobre marcos de referencia elaborados por DERES para empresas socias, véase el suplemento de El Observador: “RSE. Un compromiso del presente pensando en el futuro”. 14.12.2012.

10 Véase: http://www.empresa.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=354. Figuran como sponsor del Forum Empresa, CEMEX (empresa global proveedora de materiales de construcción) y Bank of America – Meryll Lynch.

Finalmente, otra evidencia indirecta de la expansión local es lo que aparece en diversos medios de comunicación en torno al tema. La acumulación en la prensa de separatas, informaciones y publicidad, incluyendo la publicidad que es presentada como noticia, tanto de informes sobre casos concretos como artículos de reflexión y análisis en torno a la RSE, permite visualizar algunos ejes centrales.

Entre los ejemplos de situaciones concretas aparecen transnacionales que, como se dijo pueden tener ya incorporadas disposiciones de actuación global en ese sentido. O comprar activos locales que tenían acciones de RSE en el entorno y ser continuadas bajo la nueva administración. Considerando empresas globales conocidas, se presentan casos como Coca Cola y su vínculo con Un Techo para mi País o el programa Aprender a Emprender en el Medio Ambiente; Pepsico y “seamos protagonistas” en el área de calidad de vida laboral; IBM y prácticas en apoyo a la comunidad y “calidad de vida laboral” para hijos de empleados; Telefónica y el “programa Proniño de fundación telefónica”, entre muchos otros casos¹¹.

También aparecen marcas locales. Cutcsa es una de las más evidentes y de hecho ha impulsado un cambio fuerte de imagen en relación a su pasado y la asociación que inmediatamente generaba en relación a los problemas de transporte urbano de Montevideo. Así es como en su suplemento por los setenta años, integra en el rubro de RSE numerosas acciones: atención personalizada, cuidado del medio ambiente, promoción en salud (por ejemplo el boleto solidario para el Hospital de Clínicas, la donación de un ómnibus a Teletón, etc.), seguridad vial, enseñanza y cultura (el más conocido es el “rock en ruedas”) y servicios comunitarios (actividades a nivel barrial enmarcadas en “convivencia”, voluntariado, etc.)¹².

También las empresas públicas se han sumado y así por ejemplo “Antel reafirma su compromiso con el país con una gestión responsable”, integrando prácticas de responsabilidad social tanto a nivel interno de la empresa como externo¹³. ¿Existe diferencia entre una empresa privada y una pública en cuanto a considerar el tema? Cabría un examen más allá de las posibilidades de este artículo, pero en principio debería tenerse en cuenta un elemento que es uno de los ejes centrales de análisis: una empresa estatal puede coordinar más fluidamente con otras instituciones estatales su foco en lo social en el marco de una línea estratégica. En el caso que nos ocupa, se postula por ejemplo la responsabilidad de acceso gratuito a internet a todos los centros educativos de ANEP. En las empresas privadas, el foco y la gestión de esa responsabilidad –en tanto voluntaria– queda en manos de su conveniencia en el marco de sus objetivos estratégicos particulares y las oportunidades políticas.

Por eso se decía antes que es un eje central de análisis, pues refiere al papel del Estado. De hecho, por una parte sigue existiendo una operación simbólica sobre lo

11 Fuente: los ejemplos son tomados de la lista del suplemento de El Observador “Una apuesta empresarial, responsable y sólida”. 20.07.2012.

12 Fuente: Suplemento de CUTCSA 70 años: 1937 – 16 de agosto – 2007.

13 Fuente: Suplemento El Observador. 02.09.2011.

que antes hacía mal el Estado en intervención social –que naturalmente, también tiene elementos atendibles– y una representación colectiva que se construye desde los gobiernos del Frente Amplio en la línea de una solidaridad sustentada en términos morales pero desanclada de proyecto sociopolítico alguno (compárese esto con el siglo XX). Este punto es complejo, pues hace a los límites de lo “voluntario” de las empresas y sus acciones específicas y paralelamente habla de la incapacidad-indisposición institucional de actuar sobre el capital para captar excedente para la redistribución social.

Entre los argumentos de actores políticos que legitiman este estado de situación, en principio se han encontrado dos tipos: el liberal y el conciliador. Ejemplo del primero, puede señalarse el caso del entonces ministro de Industria Jorge Lepra, al señalar en una instancia relacionada a la discusión del tema general el problema de las “chacras” y el corporativismo a nivel estatal y la necesidad de quienes creen en la RSE de trabajar junto con los privados. Es decir, escapar del intrínseco corporativismo estatal de Uruguay requiere también del empresario. Ejemplo del segundo, es la idea conciliadora de “todo suma” sin importar de dónde provenga la ayuda ni sus intereses (políticos, filosóficos, religiosos, económicos, etc.) que es lo más identificado en el segundo gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, en ambos casos la posición resulta igualmente sustentada en el pragmatismo y en la no visualización de alternativas¹⁴.

Finalmente, cabe establecer para este apartado el fenómeno de expansión del tema en términos de su presencia a nivel de publicidad, reflexión, análisis o discusión de herramientas de gestión no sólo en revistas empresariales o suplementos empresariales de periódicos o semanarios, sino a nivel más general. El abanico es muy variado y pueden encontrarse artículos que abonan la idea de rentabilidad para el empresario, de las exigencias o misión de la empresa, sobre los problemas de la implementación, aquellos que implican específicamente a la pymes, sobre el tipo de acciones, sobre la especificidad del voluntariado corporativo (movilización de empleados a nivel social amparados en un programa empresarial específico), entre otros ejemplos posibles¹⁵.

Territorio, tejido social y el mercado de la solidaridad

Toda transformación importante del territorio requiere cierto consenso social, particularmente de los más directos involucrados. Naturalmente, como es conocido, muchos reajustes espacio temporales del capital implicaron la directa imposición y por tanto la coerción. En América Latina esto supuso muchas veces el desplazamiento de poblaciones enteras con débil o nula atención a las mismas con objetivos de

14 Fuente: “Un camino para recorrer juntos” sobre convocatoria de ACDE, ADM, Asociación Cristiana de Jóvenes, BID y DERES sobre RSE, revista Mercadeo de ADM, noviembre / diciembre 2007, páginas 46 y 47. Sobre el segundo caso, las argumentaciones pragmáticas conciliadoras sobre el tema son frecuentes en una parte importante de actores políticos del segundo gobierno del Frente Amplio, aunque no necesariamente aludiendo a la RSE en particular.

15 Fuente: para este registro, se tomó principalmente el suplemento El Empresario de El País y El Observador.

explotación agrícola o ganadera, para generación de infraestructura, para dinámicas extractivas o para establecer un emprendimiento productivo. Pero ello supuso fuertes conflictos ante la expropiación territorial.

Se ha vuelto muy recurrente la expresión de David Harvey “acumulación por desposesión” (2004) para dar cuenta de lo que ocurre hoy en la región con las dinámicas extractivistas. Sin embargo, las tecnologías sociales de implantación de las mismas han sufrido un cambio importante de la mano de la RSE.

Por ejemplo, ahora distintos actores pero principalmente pertenecientes a las empresas directamente involucradas hablan de “minería responsable”. Como explica la investigadora argentina Mirta Antonelli (2009), la perspectiva implica conectar la idea de compromiso con el ambiente y con la filantropía a través de profusas prácticas a nivel local comunitario en instituciones como escuelas, hospitales, dispensarios, talleres comunitarios. Esto se acompaña con todo un universo iconográfico en que se registran, por ejemplo, escenas de donaciones donde aparecen juntos integrantes de empresas y de la comunidad donde se instala¹⁶.

En Uruguay, el tema acompañó el proyecto de la planta de celulosa de Botnia –hoy UPM– con infinidad de reuniones con organizaciones sociales y ongs, con seminarios públicos y otras instancias, y destinando recursos a nivel comunitario. Más allá de que fue un conocido proceso conflictivo con Argentina, resultaba igualmente importante la aceptación local en Uruguay. Lo mismo puede señalarse de Montes del Plata en Conchillas. El proyecto de explotación de yacimientos de hierro en la zona de Valentines, ha incluido la publicación y distribución de lujosos folletos por parte de Zamin Ferrous que incluyen una serie de programas integrados en el “Plan de Gestión Social y RSE”.

El punto va más allá de lo que la normativa exige de audiencias públicas o similares, hace a la directa intervención en el tejido social para hacerlo funcional al proyecto. Éste es el punto que se quiere desarrollar en este apartado final: la importancia que ha adquirido la RSE como mecanismo de dominación socioterritorial. Nuevamente hay que decirlo: se trata de un fenómeno de carácter global aunque varía de acuerdo a la sociedad de la que se trata. Pero para anular resistencias, y como siempre ocurrió en la historia, es necesario conocer lo mejor posible la especificidad local. Así es que ese entramado de fundaciones y ongs que se genera tiene muchas veces ese objetivo.

La zona metropolitana noreste de Montevideo –un territorio en rápida transformación– es un buen caso para ver en acción una dinámica de intervención social que parte de los propios agentes del capital en el marco de acciones de RSE. En trabajos anteriores se ha examinado esto con el caso de Zonamérica y el eje de camino Maldonado - ruta 8 (Falero, 2011 y 2012). Ya sea mediante la captación de la fuerza de trabajo no calificada o mediante acciones de apoyo a organizaciones sociales, se ha ido reconfigu-

16 La expansión del término responsable también ha llegado al agronegocio y se habla desde hace años de “soja responsable”. Esto ha provocado acciones, encuentros y declaraciones de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de movimientos urbanos.

rando el tejido social. En el mismo sentido preventivo de actuación se proyecta la zona franca “Parque de las Ciencias” sobre la ruta 101, así como otros emprendimientos.

Otros actores con influencia en el territorio son los barrios privados, importantes reconfiguradores del territorio. En algunos de ellos también se trabaja activamente a nivel social con un “exterior” que aparece complejo socialmente. Naturalmente los residentes no tienen que mostrar preocupación alguna si hay un entorno vigilado y se accede y se sale sólo con vehículos, pero también puede haber nociones vagas de beneficencia y asistencialismo con ese entorno exterior socialmente diferente, tal como también se ha visto en Argentina (Svampa, 2008). Y tales nociones pueden ser sistematizadas en comisiones directivas que las transforman en dinámicas más actuales similares a la RSE.

Este aspecto que se ha visualizado en el caso de Canelones, resulta de interés comparativo con otros casos, pues también la separación del barrio privado con el exterior puede darse en forma de mero muro de separación, donde el control social recae en la vigilancia o integrando formas más sutiles. En el caso que se analiza, no sólo existe una apuesta a la vigilancia –como todo barrio privado– aunque con una separación interno-externo poco marcada (claramente no es un muro), sino de acción a nivel social en el territorio inmediato¹⁷.

Las organizaciones sociales de base territorial pueden comportarse de forma diferente respecto a las acciones en el marco de RSE. Entre la aceptación acrítica y el rechazo total hay una vasta gama posible dependiendo de la coyuntura, de la oportunidad política, del actor empresarial que se trate, de la situación o urgencia ante la que se encuentran, de la ausencia mayor o menor de las instituciones estatales. Se ha encontrado un fuerte pragmatismo en este sentido. Por ejemplo, una solicitud a una empresa, puede verse como la expectativa de quitarle algo al capital a favor del barrio. Para la empresa puede significar la compra de confianza y de seguridad socioterritorial. En todo caso es muy difícil para organizaciones que viven muchas veces en la urgencia de lo inmediato advertir la complejidad de este “mercado de la solidaridad” que la RSE contribuye a crear.

Pues de eso se trata, es un verdadero mercado de la solidaridad actual en el que participan como “clientes ciudadanos” organizaciones sociales en el entendido de búsqueda de mejoras socioterritoriales de la población implicada. El tema va más allá de lo puntual. Mediante los cambios en curso ya aludidos, debe considerarse la capacidad de la empresa para reestructurar el tejido social cercano. Como ha señalado la investigadora Ana María Kirschner examinando la RSE, la empresa adquiere una función identificadora en la sociedad y se constituye en verdadera institución social que

17 Estos datos corresponden a un avance del estudio interdisciplinario en curso: “Tejido social, acciones colectivas y dinámicas de segregación en el área de influencia de las rutas 8 y 101”. Respecto a la comparación entre barrios privados en el cono sur, también existe un trabajo en curso de Marcelo Pérez –al momento en que se escriben estas líneas– en el marco de la Maestría Bimodal de Estudios Contemporáneos de América Latina.

instaura un conjunto de relaciones sociales y culturales y produce identidades nuevas. De modo que de la mano del “empresario ciudadano”, se está ante una nueva forma de regulación de las relaciones sociales (Kirschner, 2006).

En ese mercado de la solidaridad que también integran –además de empresas e institucionales estatales– iglesias de distinto tipo, fundaciones y ongs, se generan clientelas como en cualquier mercado. En este caso, se trata de clientelas de pobres. De alguna manera, todos contribuyen a la reproducción de lo dado, como lo único posible. Sin embargo, se trata de un mercado invisibilizado que tiene incidencia –igualmente invisibilizada– en el bloqueo de otras formas sociales y la conformación de acciones colectivas.

Reflexiones finales

El tema es vasto y –se adelantó desde el comienzo– el objetivo de este trabajo era abrir planos de análisis en sus distintas escalas –desde lo global a lo subnacional–, a efectos de visualizar un proceso con perspectiva sociológica. De fondo, no se trata de un seguimiento de prácticas de RSE como fenómeno en sí mismo y se enmarca en la continuación de dos preocupaciones de investigación desarrolladas en otros trabajos: las transformaciones globales y regionales en curso y cómo incorporar las mismas en el estudio de la sociedad uruguaya y, en segundo lugar, las posibilidades y los bloqueos con los que se encuentran organizaciones y movimientos sociales al momento de desarrollar prácticas colectivas.

Un trabajo de Colin Crouch de la Warwick Business School de Gran Bretaña que reúne varias de sus contribuciones revisadas, lleva el llamativo título de “la extraña no-muerte del neoliberalismo” (2012). Si bien la RSE es un elemento más –y de hecho, menor– de otras preocupaciones del autor sobre la absorción del “mercado” por las corporaciones y la transformación del Estado, la observa como parte de un juego en el que las empresas producen su propia regulación y no actúan como meros grupos de presión sino como parte integral de la toma de decisiones públicas.

En ese razonamiento, la RSE también puede ser vista como la consecuencia “natural” de la mayor capacidad política y social de las corporaciones económicas fuera del alcance de los gobiernos. Como se ve, el tema bien puede llevar de nuevo a uno de los centros de atención de las Ciencias Sociales y Humanas en general a lo largo de su historia. En ese sentido, también levanta la pregunta sobre los cambios sociales por los cuales se están desensamblando y reensamblando vínculos en función de intereses que en principio parecían sólo acotados al juego del “mercado” y la incesante búsqueda de maximización de beneficios.

También aparece otro aspecto clave que supone repreguntarse por las funciones del Estado. Comparado con la década de los noventa, el Estado se ve en América Latina como más regulador general y generador de dispositivos institucionales para establecer condiciones económicas y sociales. Sin embargo, ¿hasta dónde procesos

como el de la RSE de las grandes empresas en su capacidad de intervenir en el tejido social, de generar confianza y legitimación social, no se vuelve un eficaz mecanismo regulador del tejido social?

Ahora bien, para los operadores locales de la RSE siempre aparece la pregunta en cuanto a qué ocurriría con las empresas y la RSE en época de crisis o de estancamiento. Porque este trabajo se escribe en un período de crecimiento del PBI a nivel regional, ¿pero qué ocurriría en época de crisis? ¿Al final podría tratarse de una simple herramienta de moda del management que los cambios del viento pondrán en su sitio? La postura que se trató de fundamentar es que se trata de un fenómeno transcuyntural y por tanto hace a mutaciones del capitalismo.

Sin embargo no puede extraerse de aquí un llamado a una actitud pasiva hacia lo irreversible o hacia lo pragmático en relación a lo que puede hacer el Estado y las organizaciones sociales. Para los que se encuentran en posiciones sociales vinculadas a la gestión de formas de RSE, la visualización y la reproducción de la narrativa “todos ganan” parece razonable, por más que el centro de atención sea el beneficio empresarial. Es decir, considerando la profusión de cursos y literatura de gestión empresarial global, regional y nacional no cabría esperar discursos públicos diferentes desde este espacio social. Más preocupante, sin embargo, es el cómodo “todo suma” de decisores políticos y la conformación de un mercado de la solidaridad sin mayores cuestionamientos.

Se trató de delinear un cuadro que procuró mostrar la complejidad de factores a analizar en ese sentido. También se intentó llamar la atención sobre la importancia de actualizar el conocimiento en cuanto a cómo la capacidad de conformación de prácticas colectivas de base territorial se inscriben en un tejido social donde se superponen con mayor fuerza que antes distintos intereses que aspiran a la regulación del mismo. Numerosas preguntas quedan abiertas.

Bibliografía

- ANTONELLI, Mirta Alejandra** (2009), “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable” y el desarrollo sustentable”, contenido en “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”. Buenos Aires, Editorial Biblos.
- BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, Eve** (2002). *El nuevo espíritu del capitalismo*. Madrid, Akal ediciones (1ª edición en francés: 1999).
- BOURDIEU, Pierre** (2001). *Las estructuras sociales de la economía*. Buenos Aires, editorial Manantial.
- BOURDIEU, Pierre** (2000). *Poder, derecho y clases sociales*. Barcelona, editorial Desclée de Brouwer.
- BOURDIEU, Pierre y Jean-Claude PASSERON** (2003). “Los herederos. Los estudiantes y la cultura”. Buenos Aires, Siglo XXI editores (primera edición en francés: 1964).
- CROUCH, Colin** (2012). “La extraña no-muerte del neoliberalismo”. Buenos Aires, Capital Intelectual.

- DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael** (2011). “La Responsabilidad Social Corporativa y la Cooperación Internacional para el Desarrollo: caminos convergentes (ARI)” en Real Instituto Elcano, véase: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari6-2011:
- FALERO, Alfredo** (2012). “Zonamérica y Jacksonville: conexiones globales, aislamiento de prestigio y luchas por el territorio en la zona noreste de Montevideo”, en “El Uruguay desde la Sociología” N° 10, Montevideo, Departamento de Sociología - FCS - UdelaR.
- FALERO, Alfredo** (2011). Los enclaves informacionales de la periferia capitalista: el caso de Zonamérica en Uruguay. Un enfoque desde la Sociología. Montevideo, CSIC - Universidad de la República.
- FALERO, Alfredo** (2008). Las batallas por la subjetividad. Construcción de derechos, luchas sociales y dominación simbólica en Uruguay. Montevideo, UdelaR - CSIC - FCS - Fanelcor.
- FLORES ANDRADE, Anselmo** (2006). “Empresarios e izquierda: dos mundos que se acercan”, en Revista Nueva Sociedad N° 202. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, marzo/abril.
- HARVEY, David** (2004). *El nuevo imperialismo*. Madrid, Akal Ediciones.
- KIRSCHNER, Ana María** (2006). “Sociologia da empresa e responsabilidade social das empresas” en Revista Nueva Sociedad N° 202, Buenos Aires, Nuso, marzo-abril (disponible también en www.nuso.org).
- LEAL CARRETERO, Fernando** (2007). “La responsabilidad social de las empresas: una propuesta de modelo” en Revista Mexicana de Sociología, UNAM – IIS, México, N° 3 Julio – setiembre.
- MONTERO, Cecilia** (1997). “La revolución empresarial chilena”. Santiago de Chile, Cieplan/Dolmen Ediciones.
- PERDIGUERO, Tomás** (2003). *La responsabilidad social de las empresas en un mundo global*. Barcelona, editorial Anagrama.
- PUTNAM, Robert** (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (con Robert Leonardi y Raffaella Nanetti), Princeton University Press, New Jersey.
- RAMIRO, Pedro** (2009). “Las multinacionales y la Responsabilidad Social Corporativa: de la ética a la rentabilidad”, contenido en “El negocio de la responsabilidad. Crítica de la responsabilidad social corporativa de las empresas transnacionales. Barcelona, Icaria Editorial.
- SENNETT, Richard** (2006). “A cultura do novo capitalismo”. Rio de Janeiro, Editora Record.
- SVAMPA, Maristella** (2008). “Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados”. Buenos Aires, Editorial Biblos (primera edición: 2001).

Nuevas elites empresariales y legitimación del poder económico en el Uruguay

*Miguel Serna*¹

La temática del papel de las elites empresariales en el desarrollo capitalista de las últimas décadas y las transformaciones en la estructura de poder en la sociedad ha tenido una creciente visibilidad en la agenda pública y académica. El objeto del presente artículo es realizar un doble recorrido, de corte teórico interpretativo sobre las elites empresariales y los cambios en las formas de poder económico, así como, de corte empírico comparado de los hallazgos y aportes de estudios concretos sobre los perfiles de las elites y sus transformaciones recientes. En función de ello, se propone una revisión de la literatura sociológica sobre las elites económicas; así como de los principales estudios en Uruguay, con miras de identificar los principales enfoques, hipótesis y aportes existentes.

En las últimas décadas la temática de las elites y el poder económico ha vuelto a estar en el debate en la escena pública y académica a nivel internacional. Las dinámicas aceleradas y contradictorias de la globalización en su ciclo económico neoliberal y los impactos en diversos campos de la vida social, cultural y política han puesto en cuestión las transformaciones de las estructuras de poder en la sociedad.

Por una parte, varios enfoques señalan la concentración en la distribución de poder en las estructuras de propiedad del capital económico y la conformación de sistemas de autoridad y gobierno a nivel mundial. Por otra parte, otros enfoques señalan que en forma paralela, se producen mecanismos de poder anclados en procesos organizacionales y relaciones sociales tanto en el ámbito nacional como subnacional. En este sentido, se trata no sólo de comprender la naturaleza estructural del poder, sino también relacional, de las consecuencias psicológicas y organizacionales y su importancia para comprender las nuevas formas de legitimación del capitalismo contemporáneo.

1 Licenciado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. Doctor en Política Comparada e Integración Latinoamericana en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) – Brasil. Profesor Agregado del Área de Sociología Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. Investigador Nivel II, Sistema Nacional de Investigadores (SNI). miguel.serna@cienciassociales.edu.uy

Las transformaciones del capitalismo organizado han concitado creciente atención, en especial los cambios organizacionales separando funciones entre dirección y propiedad de las empresas y sus consecuencias en la formación de nuevos elencos dirigentes. El desarrollo de organizaciones empresariales complejas genera nuevas fuentes de poder vinculadas a la gestión empresarial, al tradicional empresario propietario, se suma la figura de la alta gerencia en la cabeza de las empresas. No obstante, a diferencia de las empresas de la primera mitad del siglo XX, organizadas en la férrea estructura jerárquica de la organización taylorista del trabajo, las últimas décadas han centrado su desarrollo en innovaciones de nuevas formas de organización flexible, basadas en el funcionamiento y control de redes sociales y digitales.

La reproducción del capitalismo contemporáneo como sistema económico dominante no sólo funciona a partir de las lógicas estructurales y empresas en tanto organizaciones complejas para la obtención de capital, sino también ha producido nuevas formas de legitimación micro en la vida cotidiana de los individuos y la generación de nuevos valores relacionados al mundo de la economía y el trabajo. Así pues, al decir de algunos autores, emergen nuevos sujetos y clases globales que encarnan estos cambios de comportamientos, actitudes, creencias y valores. Se destacan así consecuencias psicológicas en los individuos que ocupan los cuadros directivos y de alta gerencia que incorporan y legitiman las nuevas éticas de trabajo del capitalismo en estilos de vida cotidiana (en el trabajo y en el consumo). Por tanto, el capital social y cultural aparecen como factores claves en la legitimación del poder de las nuevas elites económicas.

Sin embargo, la emergencia de nuevos elencos dirigentes de empresas y las nuevas formas de poder económico no se legitiman mecánicamente en las sociedades, entran en disputa o asociación con viejas formas de reproducción del poder en la sociedad. Los nuevos elencos empresariales por un lado, desafían las fuentes tradicionales de prestigio social asentadas en clubes sociales exclusivos, gremiales empresariales tradicionales y el peso del patrimonio heredado familiarmente y por otro lado, proponen nuevos ámbitos de encuentro (foros internacionales), activan redes locales (responsabilidad social empresaria), estilos de vida promovidos a través de canales y medios de comunicación específicos (lugares de residencia en barrios de medio y alto nivel socioeconómico con gran oferta de servicios, inversión en infraestructura tecnológica, patrones de alto consumo, experiencias de formación educativa, laboral y de placer en el exterior) y símbolos de estatus legitimados en circuitos internacionales y globales.

Además, la emergencia de nuevas elites económicas abre nuevas interrogantes sobre su influencia y relación con el campo político.

En Uruguay la temática adquiere fuerte relevancia si se tiene en cuenta que se trata de una economía de escala pequeña y que en los últimos años ha atravesado múltiples transformaciones en el modelo de desarrollo económico con la emergencia de nuevos actores sociales y creencias en la escena nacional.

Teoría de las elites y transformaciones de las elites empresariales

La propia definición de elite ha recibido múltiples connotaciones en la genealogía y uso histórico que se ha dado al concepto, refiriendo a los individuos que ejercen una posición de gobierno y desempeño de tareas de dirección en estructuras de poder objetivadas en un tiempo y espacio determinado.

Los autores clásicos de las elites (Pareto, Mosca, Michels) fundaron una perspectiva donde las elites tenían un papel central en la organización del orden social. La concepción de las elites estaba fundada en una visión aristocrática de la sociedad. La definición de elites parte de la idea que son un estrato superior de individuos destacados por cualidades o talentos superiores, y por su competencia dirigente. En esta perspectiva las elites se constituyen en sujetos colectivos con fuerte cohesión en tanto minorías con fuerte capacidad de auto organización e intereses comunes orientadas en función de la búsqueda del control monopólico del poder. En contraposición a las elites están las masas inorgánicas, atomizadas e irracionales plausibles de manipulación y control, e incapaces de tomar decisiones colectivas. Esta tesis elitista fundacional centraba su foco en el papel dirigente de las elites en la constitución del orden político de la sociedad y su vínculo con la reproducción del poder en la sociedad. Paradójicamente, este paradigma tenía un sesgo elitista conservador con una concepción jerárquica en momentos de cambio histórico con las primeras experiencias de modernización social y democratización política.

La literatura posterior se ocupó de abordar en profundidad y en diversos contextos cuáles eran las fuentes de poder, los rasgos principales de los grupos dirigentes y el papel que cumplían en una estructura y contexto determinado.

La expansión de los procesos de industrialización y del desarrollo capitalista organizado en el siglo XX reorientó los debates sobre las elites hacia la relación entre política y economía, así como a las lógicas propias del poder económico.

De los múltiples enfoques y debates en la literatura consagrada sobre las elites (Grynszpan, 1996), a efectos de este artículo se abordan seis tópicos recurrentes en la academia y de gran pertinencia pública para comprender el papel y rasgos de las elites económicas.

Relaciones de proximidad entre elites económicas y políticas, un debate abierto

Uno de los temas que más debate ha producido ha sido las relaciones interelites y sus capacidades de dirigir en forma coordinada.

Por una parte desde la tradición académica norteamericana (Ruiz Sánchez, 2009) Floyd Hunter y Wright Mills constituyeron pilares de la tesis de la unidad de las elites dirigentes en el poder.

En la perspectiva de Wright Mills los hombres que ocupan los puestos superiores de decisión de la economía –accionistas y altos ejecutivos de las grandes corporacio-

nes—, el directorio político y el estado mayor del ejército componían un grupo social unificado con una movilidad e intercambio fluido horizontal entre el poder político, el militar y el económico.

La definición de elite parte de una minoría de individuos que ocupan posiciones de poder decisorio en instituciones claves de la estructura social (Wright Mills, 1989: 336). Sobre la base de esas posiciones estructurales se establecen oportunidades e intereses, así como estilos de vida, educación y tipos de personalidad que van conformando la unidad psicológica y social de los altos círculos. Las afinidades psicológicas y sociales provienen no tanto de su origen sino de los círculos de poder y formas de reclutamiento que define un tipo social. Sin embargo, ello no supone una teleología histórica de la supremacía de las elites, ni la conciencia y homogeneidad a priori de sus intereses. Por tanto, hay que investigar en cada contexto histórico los vínculos entre tipos de estructuras y papeles que cumplen las minorías (Wright Mills, 1989: 30).

En contraposición a esta tesis se plantearon enfoques de la escuela pluralista (Ruiz Sánchez, 2009) entre los más destacados las investigaciones y argumentos de Robert Dahl. Los pluralistas no niegan la existencia de elites, sin embargo cuestionan la idea de una elite unificada porque sostienen que lo propio de las poliarquías es la competencia por el gobierno entre múltiples líderes y grupos de intereses con diversas formas de control e influencia. Lo que predomina es una forma de elitismo democrático (Bachrach), que supone la existencia de un método (Schumpeter) y reglas para la competencia y elección entre diversas elites. En la visión de los pluralistas en sus múltiples variantes (Grynszpan, 1996) un argumento central que esgrimen es que si bien el gobierno es ejercido por una minoría lo propio del régimen democrático estaría por el carácter abierto y plural en el acceso a la elite. Asimismo, señalan la existencia de una multiplicidad de grupos sociales de veto, así como de la influencia de la movilización de los sectores sociales no pertenecientes a la elite que funcionarían de mecanismos de reducción de poder y que imposibilitarían un monopolio unificado de control del poder.

También aparecieron posiciones intermedias como las de William Domhoff y James O'Connor (Ruiz Sánchez, 2009) que combinan análisis de clase e institucional, destacando la influencia de la elite corporativa y financiera en la elite de poder, con múltiples influencias de sus intereses y movilidad de personal hacia posiciones en el ámbito político y de gobierno.

Poder económico y especialización de tareas dirigentes

Algunas teorías han buscado evitar entrar en las discusiones sobre los presupuestos de las elites como actores colectivos con capacidad dirigente, ni tampoco en las consecuencias sobre los regímenes y sistemas políticos, para centrarse en una definición de grupos funcionales (Bottomore, 1967) de acuerdo a las posiciones jerárquicas que ocupan y la función de poder que cumplen. Este tipo de definición pragmática de las elites posee al menos dos méritos relevantes, por una parte se orienta a identificar en forma precisa las diversas instituciones y estructuras de poder, con

una descripción clara de criterios objetivos que determinan posiciones y categorías sociales en la cúspide del sistema; y por otra parte, se avanza en establecer distintos grupos de elites diferenciando funciones que cumplen, relaciones entre elites y clases, así como circulación de las elites en los diversos ámbitos de la sociedad.

Un ejemplo que puede citar de este tipo de enfoque es el de François-Charles Mougel (1990) que realizó un estudio interesante sobre las elites y el sistema de poder en Gran Bretaña. Se trata de un estudio que busca describir todos los grupos de elites nacionales según las diversas estructuras y sistemas (políticas, económicas, función social –sistema normativo y de socialización–). En cuanto a las elites económicas, las diferencia entre elites propietarias y de la gestión y las elites sindicales. Las elites propietarias y de la gestión las clasifica a su vez en grandes sectores, terratenientes, financieras, industriales y comerciales.

La reproducción de las elites económicas y el orden social

Desde otras perspectivas, tanto la tradición marxista como de corrientes más europeas, en especial la escuela francesa, la problemática de las elites dirigentes se relacionó con el papel en las formas y estructuras de dominación económica y social. Por un lado, autores marxistas (Paul Sweezy, Ralf Miliband) dirigieron múltiples críticas a los enfoques previos señalando que las elites no podían ser entendidas en forma independiente de las posiciones de clase social y en el sistema capitalista. Por otro lado, la escuela sociológica francesa más reciente a partir de la influencia de la perspectiva de Bourdieu plantea la importancia de entender cómo los campos de poder producen elites y estas reproducen relaciones de dominación.

Para Bourdieu la dominación en las sociedades de capitalismo organizado no se ejerce simplemente por una clase o elite dirigente, sino que supone el efecto de grupos e instituciones que acumulan diversas especies de capital y reproducen posiciones de privilegio en el espacio social (*Escuelas de poder*), y que están en relación de antagonismo para conservar sus posiciones privilegiadas sobre los agentes dominados. El poder y la dominación en las sociedades contemporáneas se estructura en función de un entramado del capital económico y el capital simbólico en sus diversas modalidades: escolar (educativo), cultural (arte y consumo cultural), social (relacional y estilos de vida), informacional (informático, estadístico), jurídico (Estado), etc., a través de multiplicidad de lógicas propias e interconexión conflictiva entre los campos.

En este proceso el autor le da un papel central a las Escuelas de poder, como ámbitos espacios de formación, de socialización de cuadros dirigentes y de producción de mecanismos de legitimación que combinan estatus provenientes del campo económico, con títulos del campo escolar.

La dominación no sólo tiene aspectos estructurales sino también relacionales (habitus) de los grupos dominantes mediante la incorporación de estrategias de reestructuración de inversiones y reconversión de los capitales para mantener y ampliar el pa-

trimonio. Ello supone por parte de las elites estrategias y prácticas de reproducción de las diversas formas de capital (económico, cultural y social): patrones de fecundidad, de parentesco, matrimoniales, de sucesión, inversiones económicas, patrimoniales; educativas en instituciones y títulos; institucionales, mecanismos jurídicos; de inversión en capital social y estilos de vida propios y reglas interpersonales de reconocimiento mutuo (de inclusión, cooptación y exclusión).

El desarrollo de las sociedades capitalistas en el siglo XX produjo una diferenciación entre capital económico y simbólico, y al mismo tiempo, nuevas formas de legitimación por medio del capital cultural y social. En su perspectiva la burguesía se reproduce con mecanismos sociales análogos a la antigua aristocracia de sangre, pero con un principio de legitimación social diferente, la meritocracia escolar produjo una nueva nobleza de toga (reconocida por los títulos educativos y competencia racional).

Múltiples estudios dentro y fuera de Francia siguieron estos conceptos e hipótesis de trabajo. Un ejemplo pertinente para este proyecto, la investigación realizada por Michael Hartmann (2000) que analizó altos ejecutivos de empresas en Alemania y Francia para mostrar la influencia en la selección social de los miembros del habitus de clase (capital social) y la existencia de reclutamiento exclusivo por parte de instituciones educativas específicas que legitiman capital cultural. Otro estudio interesante (Harvey, Maclean, 2008) es una investigación sobre directores de las principales empresas de Inglaterra y Francia que muestra la relevancia del capital social, entendido como un entramado de redes sociales y culturales, de instituciones educativas, lazos familiares y organización que contribuye a la reproducción de las elites en cada país.

Mecanismos simbólicos y subjetivos de legitimación del poder económico

Las transformaciones del capitalismo tardío en el ciclo de desarrollo de las últimas cuatro décadas han reorientado algunos debates. Por una parte, hacia las consecuencias de los cambios en la propiedad de las empresas y las nuevas formas de gestión empresarial sobre las fuentes de poder del capital económico. Por otra parte, comprender el papel de factores socioculturales (ética capitalista y capital social) sobre las nuevas formas de legitimación del capital en la vida social cotidiana. Ambos aspectos tendrían repercusiones relevantes para conformación de nuevas elites empresarias en el capitalismo contemporáneo.

Boltanski (2002) señala que la ética y la cultura han sido mecanismos relevantes para la reproducción y legitimación del capitalismo como modo de producción. Él distingue capitalismo como modo de producción de las empresas y empresarios en tanto agentes responsables de la reproducción de la lógica del capital (accionistas, inversores, directores), sujetos con un compromiso personal en el proceso de acumulación.

A su vez, denomina “espíritu capitalista” (retomando la acepción original de Max Weber) como los elementos éticos morales de adhesión al capitalismo, conjunto de creencias y representaciones que contribuyen a justificar el orden capitalista (regu-

lación moral), un “ethos” orientado a un modo de acción que busca el beneficio y el cálculo instrumental.

En cada ciclo de desarrollo capitalista aparecen y se transforman nuevas formas de espíritu capitalista, de mentalidades y compromisos normativos que contribuyen a la reproducción del régimen económico capitalista. El autor distingue tres grandes ciclos.

El Capitalismo Racional original hasta finales del siglo XIX, que se personifica en la figura del burgués emprendedor individual, cuyos valores se asocian a la asunción de riesgo, espíritu innovador, la capacidad de contabilidad y cálculo económico en la vida cotidiana.

El Capitalismo Organizado que tiene su período de auge entre 1930 y 1960, traslada el énfasis a la organización, la gran empresa industrial centralizada y burocrática (organización taylorista). En la cúspide emerge la figura del Director que conduce la organización racional del trabajo y la planificación de largo plazo.

El Nuevo Espíritu capitalista aparece entre 1970 y 1990, tiene como epicentro de desarrollo la ciudad, como locus espacio/temporal del capitalismo, y a la administración de empresas como saber privilegiado, que moldea el gusto social y la estética. El nuevo espíritu capitalista tiene como rasgos propios el compromiso de las personas con la producción y los negocios, se presenta como un vínculo positivo entre la aspiración de “seguridad” y bienestar material de las personas y el estímulo a la acumulación de capital. Se trata de un espíritu que orienta la acción con una cara bifronte, de deseo e insaciabilidad del consumo y de disciplinamiento económico.

En claves paralelas Richard Sennet (2000, 2006) coincide con la transformación de un nuevo capitalismo y una nueva cultura capitalista. La aceleración de la circulación económica de bienes, servicios y fuerza de trabajo hacia finales del siglo XX tuvo consecuencias en la distribución del poder económico. Por una parte se constata una transferencia de poder de los directores a los accionistas y a la circulación internacional del capital financiero. Los inversores están preocupados por resultados de corto plazo, se trata de un poder anónimo y omnipresente el “capital impaciente”, que genera presión permanente a producir cambios institucionales en las empresas “dinámicas”, para desarrollar innovación y flexibilidad a los cambios en el entorno económico. Por otra parte, se expande el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación y la fabricación que traslada el centro hacia el control de flujos de información e incorporación de tecnología avanzada, produciendo una deslocalización del lugar de trabajo y la reducción de los cuerpos burocráticos intermedios de las empresas.

Se producen pues cambios en la organización del trabajo, orientada globalmente y tecnológicamente compleja. Priman formas modernas flexibles de organizaciones: a) la reinención discontinua de las instituciones (reingeniería empresarial, técnicas de reducción de puestos, mayor control, tareas múltiples); b) la especialización flexible de la producción (productos más variados y más rápido, pos fordismo); c) la concentración sin centralización de poder (redes menos jerárquicas).

La nueva arquitectura institucional reduce los niveles jerárquicos, produce precarización del empleo y secuenciación no lineal de empresas, lo que permite múltiples funciones y tareas, tiempos de trabajo y contratos de corta duración para obtener resultados rápidos y flexibles. Como consecuencia se produce un mayor control central de las decisiones pero con una menor autoridad institucional. Se convive con una renovación permanente de los equipos dirección de las empresas, menos cuadros intermedios de trabajo autodisciplinado y operaciones fragmentadas en el espacio.

Estos cambios sistémicos y organizacionales promueven nuevas figuras empresariales, los “barones de las tecnología”, los “capitalistas del riesgo”, y “expertos en reingeniería de empresas”². Nuevos sujetos para un régimen de producción y trabajo más flexible, que convive con la asunción de riesgos, que supone posibilidad de movimientos en redes amorfas y organizaciones flexibles; el empleo a corto plazo, redes de asistencia más cortas e imprevisibles, la pérdida de controles institucionales sobre el tiempo, el trabajo rutinario y las reglas fijas de la burocracia nacional.

La nueva ética tiene impactos subjetivos en la forma de representación del trabajo y legitimación del capitalismo. La relevancia del prestigio moral del trabajo cambia de significado. De una parte se erosiona la ética protestante, del trabajo autodisciplinado, el pensamiento estratégico y la gratificación diferida. De otra es sustituida por una nueva ética, del trabajo en equipo, en tareas específicas inmediatas (capacidades individuales blandas) y la superficialidad degradante (desorganización del tiempo, ruptura con la rutina y el programa a corto plazo). Las redes interpersonales informales y la sensación de independencia son valorizadas como la clave del éxito laboral.

Como contracara la nueva ética trae consecuencias psicológicas negativas, se pasa del temor a la dependencia, a la preocupación por la pérdida de control de sí mismo y vergüenza de sometimiento a otros. Los individuos conviven con una sensación de desorientación personal de vivir en ambigüedad e incertidumbre, pautada por riesgos pesados y recompensas escasas, fuente de depresión y aprensión (ansiedad por lo que pueda ocurrir). Asimismo, se produce un déficit social en la baja lealtad y compromiso institucional.

Las nuevas élites empresariales globales

Una de las transformaciones en los procesos de globalización contemporánea ha sido la progresiva conformación de clases capitalistas transnacionales (Sklair, 2005), entre las cuales se han identificado cuatro fracciones importantes: i) la fracción corporativa, aquellos que controlan las grandes corporaciones transnacionales, ii) la fracción estatal, los políticos y burócratas globalizados, iii) la fracción técnica, compuesta por profesionales en redes globalizados, iv) la fracción del consumo, comerciantes y medios de comunicación responsables por el marketing y moldear los gustos de consumo.

2 López Ruiz (2002) analiza cómo se expresan estas diversas contradicciones en los elencos ejecutivos directivos de las empresas transnacionales.

Teorías contemporáneas de la globalización sostienen que estos procesos traen nuevas clases globales (Sassen, 2007) que se estructuran a partir del posicionamiento y control estratégico de redes mundiales. En ese sentido, se destacan las posiciones claves en la gestión en empresas multinacionales, el comercio intraempresarial y transfronterizo.

Estas nuevas clases globales tienen una posición ambivalente entre los ámbitos nacionales y globales, participando en los procesos de desnacionalización parcial. Estas clases se asientan en una variedad de redes globales de estructuras económicas, políticas y subjetivas (interpersonales, redes globales). Sassen distingue entre las clases globales privilegiadas a los profesionales y ejecutivos de empresas transnacionales que comparten pautas de cosmopolitismo cultural, expectativas y orientaciones prácticas hacia búsqueda de rentas económicas; el desarrollo de trabajos en ámbitos transnacionales y de organización en redes globales. Otra clase social privilegiada según la autora está compuesta por redes transnacionales de funcionarios públicos que están vinculados a la gobernabilidad en dominios globales –redes intergubernamentales y transnacionales–.

La elite corporativa global se organiza en redes globales fuertemente centralizadas que entrelazan múltiples directorios de grandes corporaciones y organizaciones, individuos a lo largo del mundo (Carroll, Carson, 2003) que coordinan políticas grupales en ámbitos de gobernanza global y contribuyeron a la construcción de un consenso y hegemonía de las ideas neoliberales. La elite corporativa transnacional desarrolla sus nexos entre grupos corporativos y financieros en las economías nacionales a través de una progresiva incorporación a redes de engranajes globales, que deben ser estudiadas en sus articulaciones nacionales e inserción en una red jerárquica de organizaciones y agentes globales.

Si bien estos enfoques son todavía emergentes en cuanto a sus evidencias empíricas de la existencia de la clase capitalista transnacional (Staples, 2006), son bastante promisorios en cuanto a la posibilidad de entender e investigar la expansión de redes multinacionales y conexiones entre directorios de empresas transnacionales de diferentes países.

Los estudios comparados de elites

En los últimos tiempos se han desarrollado estudios de casos históricos y comparados de elites en diversos contextos históricos y países³. Estos estudios llaman la atención sobre la relación entre las elites y el contexto histórico social de conformación y desarrollo. Así pues, concentran los esfuerzos en comprender la conformación histórica social de largo plazo de los grupos dirigentes, y abordan en profundidad las

3 La expansión de empresas multinacionales fuera de los países centrales hace cada vez más necesario el emprendimiento de investigaciones comparadas en países emergentes de la semiperiferia o periferia. Un ejemplo reciente Fleury et al. (2012).

relaciones sociales, las redes y capital social de los miembros de las elites empresariales. En función de ello, se ha revitalizado el uso de método proposográfico para la reconstrucción de las trayectorias biográficas de los miembros de las elites.

Varios de estos estudios se han centrado en los impactos de las reformas estructurales neoliberales en la composición de las organizaciones empresariales. Uno de los aspectos que se ha analizado es sobre el declive relativo del peso de las sociedades rurales –símbolos del prestigio tradicional de la propiedad de la tierra– y la creciente influencia del capital financiero internacional, y el saber experto sobre el campo económico –asociaciones de banco y económicas (Heredia, (2003)–. En estos momentos, hay algunos proyectos en curso en esta línea en Argentina, Brasil y Chile que serán utilizados de referencia para la comparación de resultados posteriores.

Poder económico y elites empresariales en el Uruguay en tiempos de globalización neoliberal

Uno de las referencias clásicas sobre la configuración de la elite dirigente del país y sus transformaciones a partir del agotamiento del modelo batllista en la década del sesenta es el estudio de Carlos Real de Azúa (1969). Real de Azúa aborda el período 1958-1968 como un proceso de circulación de elencos políticos tradicionales y diferenciación de elites con el ascenso de elites políticas no partidarias (clases agrarias y económicas, elites burocracia civil y militar) y la reducción de la capacidad política de amortiguación de los conflictos sociales. El autor señala procesos contradictorios, por una parte un proceso de diversificaciones funcionales y especialización de tareas dirigentes, e internacionalización, por otra parte, la fragmentación de las elites, el debilitamiento de las instituciones y recursos de poder en un contexto de creciente crisis de legitimidad y antesala del quiebre institucional.

En este contexto, el personal político, desarrollado autónomo por el sistema de compromiso, participación electoral y fortalecimiento de clases medias urbanas –profesionales– y rurales, el prestigio social fue en declive, por liderazgo carismático y jaqueos provenientes del poder económico. En este marco, señala la aparición de diversas elites emergentes y contraelites (religiosa, intelectual y educativa, sindical, agraria, bancario-comercial, industrial).

El análisis apunta a mostrar la creciente diversificación funcional y especialización de tareas dirigentes, así como la influencia de los procesos de internacionalización. En la élite económica distingue varios componentes. La elite agropecuaria, definida en torno a la concentración y propiedad de la tierra y con organizaciones gremiales históricas (Asociación y Federación Rural). Luego la elite mercantil, con tradición mercantil portuaria y la bancaria (Asociación de Bancos) con creciente influencia en la órbita de la política económica (especialmente, del Banco Central). Las clases agraria ganadera y comercial se destacan por la continuidad familiar personal de sus cuadros dirigentes en el poder. También identifica a la elite industrial, pero en una posición de mayor debilidad debido al declive de la industrialización sustitutiva y la creciente extranjerización, y que

no logró imponer una ideología industrialista. Además, señala la presencia de la elite de los medios de comunicación, aunque en una relación dependiente con la política –prensa– y con el resto de las élites económicas, la bancaria, agraria e industrial.

Estas capas dominantes de la riqueza (las élites agraria, bancario-comercial, e industrial) poseen concentración de mando, siendo las más consistentes y fijas. Las élites económicas dominantes tienen como fuerzas unificadoras la educación, el estilo de vida y compartir ideologías comunes. Según el autor, la clase económica alta posee mecanismos de socialización interna, de lugares escogidos y participación de estilos de vida y consumo comunes (zonas vivienda, lugares veraneo, clubes y centros, viajes, gustos adquisitivos, bienes). Asimismo, señala que los titulares del poder económico buscan reforzar su cohesión mostrando formas de snobismo social asociadas al prestigio social de la riqueza privada.

En el plano político señaló que poseen una fuerte influencia en capacidad de veto, y que se observaba una creciente cercanía de los grupos empresariales con centros económico financieros, así como la presencia de Estados Unidos.

Luego de la dictadura, de la transición democrática y con el nuevo impulso de la globalización económica neoliberal con las reformas estructurales de los noventa, el tema de los cambios en la estructura de poder económico y los empresarios volvió a estar en agenda. Un trabajo interesante (Bértola, Rodríguez, Stolovich, 1987) presentó una descripción pormenorizada de la estructura de propiedad del capital económico y su organización. Los autores plantean que los procesos de acumulación capitalista refuerzan la concentración y centralización del capital pero que ya no se da solamente por empresas sino en estructuras más amplias de Grupos Económicos, que controlan la gestión y propiedad de grandes empresas. La noción de grupo económico, además de ser una unidad económica de concentración de capital, posee algunos aspectos sociológicos relevantes dentro del marco de los enfoques teóricos del artículo. Los grupos responden a asociaciones supraempresariales cuyos vínculos de cohesión son relaciones de grupos sociales y familiares dentro del ámbito nacional. Otro aspecto de interés, son las relaciones entre los grupos económicos nacionales y la participación de grupos y empresas transnacionales.

Desde perspectivas sociológicas se abordaron otros aspectos relacionados sobre los tipos de empresarios y desarrollo en el país. Así, una tipología en la materia fue la elaborada por Errandonea y Supervielle (1991) de empresarios rentistas, especuladores e integrados, estos últimos de creciente importancia en el marco de la integración regional por tener una mayor flexibilidad y vinculación con los mercados internacionales.

Algunos estudios se centraron en la relación entre Estado, sistema político y empresarios (De Sierra, 1988) en un momento donde reaparecían algunos vínculos visibles entre personalidades y representantes del mundo empresarial y gobierno.

Otro tipo de enfoques que aparecieron, fueron nuevos y viejos estudios sobre cámaras y gremiales empresariales a inicios de los noventa. Por un lado, haciendo nuevas preguntas, de las actitudes y opiniones de los colectivos empresariales en el contexto de creación del Mercosur y de mayor liberalización económica. Por otro lado, estudios de corte historiográfico, Caetano (1992), Beretta (1994, 1998), Da Cunha (1992), Miriela (1992); politológico, Lanzaro (1992) o sociológico, Bruera (1992, 1994), Riella (1994), Piñeiro (1994), que se interrogaron sobre las características de organización colectiva, y cambios de las gremiales tradicionales (Asociación y Federación Rural, Cámara de Industrias, entre otras).

En la última década, reaparecieron estudios sobre empresarios. Algunos de ellos retoman la investigación de las relaciones entre empresarios como sujetos colectivos, modelos de desarrollo y Estado (Zubrigen, 2006).

También se desarrollan estudios desde la historia social y económica (Beretta, 1998, 1993; Bertino 1994) que se preguntan sobre las características de las empresas y empresarios emblemáticos del desarrollo agropecuario e industrial, así como de la formación de ethos burgués en el siglo pasado.

Otra línea de trabajo es la aplicación en forma anual de una encuesta a elites por parte del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. Dicha encuesta releva actitudes y comportamientos políticos de una muestra por cuotas rotativas a miembros de elites políticas, alta burocracia, empresariales y sindicales. La encuesta se centra en opiniones sobre temáticas de la agenda pública y variables típicas de cultura política.

El trabajo de Constanza Moreira (1996) sobre los cambios en la cultura política analiza las opiniones y actitudes de los empresarios, en particular sobre la igualdad y los modelos de desarrollo.

En los últimos años, buena parte de la atención se dirigió a los cambios en la estructura económica. El Informe sobre Desarrollo Humano en el Uruguay (PNUD, 2008) analiza varias tendencias de transformación productiva. La declinación relativa del peso del agro y la reactivación de la industria en los últimos años. No obstante, se advierte también una “primarización” del sector industrial, con menor capacidad de valor agregado industrial, y de asociación con cadenas del sector primario de la economía. Asimismo, constata un incremento del sector servicios, particularmente en los sectores de las comunicaciones y transporte, del sector no transable inmuebles, y hoteles y restaurantes.

Entre los cambios en la estructura económica del país se destaca también el incremento de la inversión de capital externa directa. Esta inversión externa (Bittencourt et al., 2009: 20) se dirigió a varios sectores, fundamentalmente el sector agropecuario, las comunicaciones, la intermediación financiera, los hoteles y restaurantes.

En el sector agrario se estima que alrededor del 30% de la tierra es extranjera –principalmente capitales brasileños y fondos de inversión financiera–, y la inversión

externa productiva es particularmente significativa en sectores como el complejo forestal, cerealero –el boom de la soja–, algunas en el sector lácteo y en partes del sector cárnico –frigoríficos– (Murialdo, 2009).

Una parte de la inversión extranjera fue promovida por incentivos y políticas específicas (Bittencourt, 2009:21) orientada hacia la industria manufacturera –especialmente de forma intensiva en recursos naturales–, el comercio y los servicios –electricidad, gas y agua; los servicios logísticos y portuarios–, y las zonas francas.

Los cambios registrados en los últimos años no sólo son en la propiedad de las empresas, sino también en los modelos organizativos y de gestión de las mismas (Errea, Peyrou, Secco, Souto, 2011). La noción de complejos agroindustriales es enriquecida por modelos de organización empresarial para captar la naturaleza de los cambios. Dentro de los cambios organizativos uno de los elementos recurrentes señalados en la literatura es el papel de las estrategias empresariales y la innovación (Massera, 2003).

Estudios sociológicos recientes analizan los cambios de las empresas, empresarios y redes sociales. En el estudio del sector forestal de Diego Piñeiro y Matías Carámbula (2012) llama la atención en cómo las nuevas empresas forestales generan nuevas redes locales a través de la intervención de la responsabilidad social empresarial, sustituyendo el prestigio tradicional local de los empresarios ganaderos. Otra investigación realizada por Rosario Radakovich (2011) muestra que los profesionales y altos ejecutivos poseen altos niveles de capital cultural y tienen patrones específicos de consumo cultural altamente internacionalizados. Por su parte Alfredo Falero (2011) focaliza un estudio de caso de una zona franca para mostrar la influencia de procesos de globalización económica y la formación de nuevos empresarios con un tipo de capital social y localización espacial determinada.

Una agenda abierta para la investigación

En resumen, el estudio sobre las élites económicas y empresariales en particular, es una temática persistente tanto en la literatura académica clásica como la contemporánea y tiene una enorme trascendencia para comprender las transformaciones en la estructura de poder de la sociedad, y particularmente los cambios en el modo de desarrollo del Uruguay de las últimas décadas.

El propósito inmediato del artículo fue realizar una revisión sobre enfoques y análisis comparados a nivel internacional y nacional sobre la temática. De la misma, se identificaron varias temáticas de interés. La relevancia del estudio de las élites para comprender las relaciones de convergencia y divergencia entre el campo del poder económico y el poder político. A su vez, la importancia de estudiar al interior del poder económico los procesos de especialización de funciones y diferenciación de las diversas tareas dirigidas de las diversas posiciones, instituciones y empresas. Se señaló también la creciente relevancia de mecanismos de legitimación simbólica y subjetiva

por parte de los empresarios en la reproducción cotidiana de los valores y prácticas que fundamentan el capitalismo contemporáneo. Los impactos de la globalización aparecen recurrentemente relacionados con los cambios de los elencos empresariales que emergen como clases globales que impulsan y reproducen los procesos, redes y dispositivos de la globalización a nivel micro y macro. Por último, aunque no por ello menos importante, la necesidad en avanzar en estudios empíricos comparados sobre las elites empresariales.

En este marco, la intención de mediano y largo plazo es contribuir a nuevos estudios para investigar los cambios recientes en la composición de las elites empresariales y los dirigentes de empresas del Uruguay. Con ese horizonte, nos preocupa indagar los orígenes y trayectorias de los empresarios, analizar los tipos de formación, espacios de socialización y redes sociales que establecen, así como su interrelación con otros campos de poder de la sociedad. Asimismo, nos preguntamos en qué medida los procesos de transnacionalización y globalización de las empresas han transformado los mecanismos de reclutamiento y formación de los elencos dirigentes empresariales en el país.

Bibliografía

- BERETTA CURI, Alcides** (1993). *Pablo Varzi: un temprano espíritu de empresa*. Fin de Siglo, Montevideo.
- BERETTA CURI, Alcides** (1994). *Gremiales empresariales del agro e integración regional: una perspectiva histórica, 1945/1960*. Revista Encuentros N° 3, abril 1994. Montevideo.
- BERETTA CURI, Alcides** (1998). *Empresarios y gremiales de la industria. Asomándonos a medio siglo de historia: de la Liga Industrial a la Unión Industrial Uruguaya (1879-1928)*, Cámara de Industrias del Uruguay, Montevideo.
- BERTINO, Magdalena** (1994). *Capitales y empresarios en los orígenes de la industria textil uruguaya y sus relaciones con la región*. FCS-UM, UdelaR, Montevideo.
- BÉRTOLA, Luis; RODRÍGUEZ, Juan Manuel; STOLOVICH, Luis** (1987). *El poder económico en el Uruguay*. CUI, Montevideo.
- BITTENCOURT, Gustavo** et al. (2009), *Tendencias recientes de la Inversión Extranjera Directa en Uruguay. Documento N° 27/09*. Departamento de Economía, FCS, UdelaR, Montevideo.
- BOLTANSKI, Luc; CHIAPPELLO, Eve** (2002), *El nuevo espíritu del capitalismo*. Akal, Madrid.
- BOTTOMORE, Tom** (1967). *Elites and Society*, Routledge, New York.
- BRAGA, Sergio; NICOLÁS, María Alejandra, SILVÉRIO TERRA, França Andressa** (2007). "Prosopografía a partir da Web: avaliando e mensurando as fontes para o estudo das elites parlamentares brasileiras na internet". 31° Encontro Anual da ANPOCS, Caxambú.
- BRUERA, Silvana** (1992). "La cámara y los empresarios de la industria: encuentros y desencuentros ante la integración". En *Organizaciones empresariales y políticas públicas*. Trilce, UdelaR, FCS-ICP, CIESU. Montevideo.
- CAETANO, Gerardo** (1992). "Partidos, Estado y cámaras empresariales en el Uruguay contemporáneo: 1900-1991". En *Organizaciones empresariales y políticas públicas*, Trilce, UdelaR, FCS-ICP, CIESU. Montevideo.

- CARROLL, William; CARSON, Colin** (2003). *The network of global corporations and elite policy groups: a structure for transnational capitalist class formation?* Global Networks 3, University of Victoria.
- CARROLL, William** (2007). *From Canadian Corporate Elite to Transnational Capitalist Class: Transitions in the Organization of Corporate Power*, University of Victoria.
- CASSIS, Youssef** (1994). *Business elites*. Edward Elgar Publishing; Aldershot.
- CERUTTI, Mario** (coord.) (2006). *Empresas y grupos empresariales en América Latina España y Portugal*, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Alicante, México.
- DA CUNHA, Nelly** (1992). *Federación rural: gremiales empresariales*. Textos auxiliares para el estudio de la historia. N° 4, FHCE, Montevideo.
- DE SIERRA, Gerónimo** (1988). *Estado y empresarios en el Uruguay postdictadura*. En: Revista de Ciencias Sociales N° 3, Montevideo.
- DOGAN, Mattei** (ed.). (2003). *Elite Configuration at the Apex of Power*, Brill, Leiden.
- DUPUY, François** (2006). *La fatiga de las elites: el capitalismo y sus ejecutivos*, Manantial. Buenos Aires.
- DURAND, Francisco** (2010). "Empresarios a la Presidencia". Revista Nueva Sociedad N° 225, enero-febrero de 2010, ISSN: 0251-3552, pp. 68-85.
- ERRANDONEA, Alfredo; SUPERVIELLE, Marcos** (1991). *Tipos de empresarios, agroindustrialización y Mercosur: reflexiones sobre un desafío inminente*. Revista de Ciencias Sociales N° 6, setiembre 1991. Montevideo.
- ERREA, Eduardo** et al. (2011). *Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial*, UCUDAL, Montevideo.
- FALERO, Alfredo** (2011). *Los enclaves informacionales de la periferia capitalista: el caso de Zonaamérica en Uruguay. Un enfoque desde la sociología*. CSIC-UdelaR, Montevideo.
- FLEURY, Afonso y María Tereza LEME FLEURY** (2012). *Multinacionais brasileiras. Competências para a internacionalização*, FGV, Rio de Janeiro.
- GRYNSZPAN** (1996). "A teoria das Elites e sua genealogia consagrada". En *Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, ANPOCS N° 41, 1er semestre, pp. 35-83.
- HARTMANN, Michael** (2000). *Class-specific habitus and the social reproduction of the business elites in Germany and France*, The sociological Review.
- HARVEY, Charles; MACLEAN, Mairi** (2008). *Capital theory and the dynamics of elite business networks in Britain and France*. The Sociological Review. Oxford.
- HEREDIA, Mariana** (2003). *Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital*. Revista Mexicana de Sociología, Año 65, N° 1, enero-marzo, México.
- LACUESTA, Miriela** (1992). *Cámara mercantil: gremiales empresariales*. FHCE, Montevideo.
- LANZARO, Jorge** (1992). "Las cámaras empresariales en el sistema político uruguayo: acciones informales e inscripciones corporativas". En *Organizaciones empresariales y políticas públicas*, Trilce, UdelaR, FCS-ICP, CIESU. Montevideo.
- LÓPEZ RUIZ, Osvaldo** (2002). *Los ejecutivos de las transnacionales De trabajadores de altos ingresos a capitalistas en relación de dependencia*. Nueva Sociedad N° 179 mayo-junio, pp. 45-59.

- MARCUS, George** (1980). *Law in the development of dynastic families among american business elite: the domestication of capital and the capitlization of family*, Law & society Review, volumen 14, Number 4 (Summer, 1980).
- MASSERA, Ema** (2003). *Estrategias empresariales de conocimiento y desarrollo productivo*. FCS - Departamento de Sociología, Universidad de la República, Montevideo.
- MOREIRA, Constanza** (1996). *La construcción de la agenda pública en Uruguay: una visión desde las elites*. En: Mallo, Susana (comp): Ciudadanía y democracia en el Cono Sur. Trazas, Montevideo.
- MOUGEL, François-Charles** (1990). *Elites et système de pouvoir en Grande-Bretagne 1945-1987*. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux.
- MURIALDO, María Inés** (2009). *La incidencia de la inversión extranjera en la industria cárnica*. UCUDAL, Facultad de Ciencias Empresariales, Montevideo.
- PIÑEIRO, Diego; CARÁMBULA, Matías** (2010). *Impactos locales de una industria global: el caso de la agroindustria forestal en el Uruguay*.
- PNUD** (2008). *Desarrollo Humano en Uruguay. Política, Políticas y Desarrollo Humano*.
- PUJADAS MUÑOZ, Juan José** (1992). *El método biográfico: El uso de las historias de vida en Ciencias Sociales*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- RADAKOVICH, Rosario** (2011). *Retrato cultural. Montevideo entre cumbias, tambores y óperas*. Investigaciones en Comunicación. LiCCom-UdelaR, Montevideo.
- REAL DE AZÚA, Carlos** (1969). *La clase dirigente*. Nuestra Tierra N° 34, Montevideo.
- RUIZ SÁNCHEZ, Joel** (2009). *Teoría política norteamericana sobre las elites. Su vigencia en el contexto político y económico actual*. Espacios Públicos. Vol. 12, N° 26, diciembre 2009, Universidad Autónoma de México.
- SASSEN, Saskia** (2007). *La sociología de la globalización*. Editorial Katz. Buenos Aires.
- SENTÉ, Richard** (2006). *La cultura del nuevo capitalismo*. Editorial Anagrama. Barcelona.
(2000). *La corrosión del carácter*. Editorial Anagrama. Barcelona.
- SERNA, Miguel** (coordinador); Eduardo Bottinelli; Cristian Maneiro; Lucía Pérez (2012) *Giro a la izquierda y nuevas elites en Uruguay: ¿renovación o reconversión?* Publicaciones CSIC-UdelaR, Montevideo.
- SERNA, MIGUEL** (2013). "Globalización, cambios en la estructura de poder y nuevas elites empresariales: una mirada comparada de Uruguay". en *Revista de Sociología e Política*, junio 2013, Vol. 21, N° 46, pp. 93-103. Curitiba, Brasil.
- SKLAIR, Leslie** (2005). *The Transnational Capitalist Class and Contemporary Architecture in Globalizing Cities*, Volume 29.3 September 2005 485-500. International Journal of Urban and Regional Research, New York.
- STAPLES, Clifford** (2006). *Board Interlocks and the Study of the Transnational Capitalist Class*, journal of world-systems research, xii, 2, december.
- WRIGHT MILLS, Charles** (1989). *La elite del poder*, México, Ediciones FCE.
- ZUBRIGGEN, Cristina** (2006). *Estado, empresarios y redes rentistas durante el proceso sustitutivo de importaciones: los condicionantes históricos de las reformas actuales*. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo.

4

Ruralidad y Agricultura Familiar



El impacto de la agriculturización sobre los pueblos rurales

Un estudio de caso: “los pueblos de la línea 2” en el departamento de Soriano

Alberto Riella¹ - Rossana Vitelli² - Jessica Ramírez³

En Uruguay, al igual que en los otros países de la región –Argentina y Brasil– se está produciendo en las últimas décadas una nueva ola de expansión de la intensidad del capital global en el agro, que ha impulsado un proceso de fuerte agriculturización en el uso del suelo. Esta modalidad de producción implica la expansión de la superficie productiva destinada a la agricultura a gran escala, la que conlleva un mayor uso de insumos industriales, inversión en maquinaria y equipamiento de alta complejidad, dispositivos de precisión para aumentar el rendimiento, sistemas de posicionamiento geográfico satelital, que en conjunto transforman las prácticas de manejo agronómico convencionales. Esta forma de producir impacta de forma relevante en los territorios rurales, particularmente en el empleo agropecuario, en las nuevas demandas de servicios y en la dinámica social de los pequeños pueblos rurales.

Introducción

Estos poblados rurales estaban en un letargo desde las décadas del estancamiento y falta de dinamismo del sector, comenzando a partir de la mitad de la década anterior un proceso de dinamismo. Estas localidades se convierten en el soporte del desarrollo de las nuevas actividades agrarias, brindando una plataforma para la gestión logística y suministro de bienes, servicios y mano de obra.

Para poder captar estas posibles transformaciones de la dinámica social en los pueblos es necesario un estudio cualitativo que permita observar los cambios en el

-
- 1 Doctor en Sociología por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Profesor Titular del Departamento de Sociología, Área Sociología Rural y Desarrollo. FCS, Udelar. albertoriella@gmail.com
 - 2 Doctora en Sociología por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente e investigadora en el Departamento de Sociología, Área Sociología Rural y Desarrollo. FCS, Udelar. vitellirossana@gmail.com
 - 3 Candidata a Magíster en Sociología. Profesora Asistente Departamento de Sociología. Área Sociología Rural y Desarrollo. FCS, Udelar. jessiramirez03@gmail.com

terreno y captar el punto de vista de los sujetos y sus percepciones sobre estos fenómenos; con este objetivo se seleccionó un grupo de poblados ubicados en una de las áreas de mayor intensificación de la agriculturización del país. Los mismos se ubican sobre la Ruta Nacional N° 2, entre los kms. 220 y 260 y conforman en sí mismos un micro sistema urbano rural que nutre de mano de obra, servicios y apoyo a las actividades agrícolas de la zona.

En este artículo, en primer término, se destaca la importancia del estudio de los pequeños pueblos en tanto constituyen un eje central de la ruralidad contemporánea. En el siguiente apartado se realiza de forma sintética una revisión de los efectos sociales en los pueblos que introducen las transformaciones productivas. En tercer lugar, se presenta la metodología y posteriormente se delimita y caracteriza la zona de estudio. El cuarto apartado se centra en la presentación y análisis de los datos recogidos en la investigación para, finalmente, terminar con algunas reflexiones.

La valorización del papel de los pueblos rurales en el desarrollo rural

Ante el debilitamiento permanente de la población rural en el país, se observa concomitantemente una permanencia y en algunos casos crecimiento de los centros poblados menores que tienen un vínculo integral y simbiótico con los territorios rurales que los albergan. Estos pequeños pueblos aparecen cada vez más como un objetivo de investigación y preocupación de académicos y especialistas en desarrollo regional y rural. Asimismo, últimamente los planificadores de las políticas públicas están poniendo especial atención en estos poblados para fortalecer la territorialización de sus acciones y lograr mayor eficacia en sus objetivos. A este tipo de centros poblados, los estudios que hacen referencia a ellos, los designan como “pueblos rurales”. En Uruguay, en particular, presentan las mayores situaciones de vulnerabilidad social, mostrando niveles de pobreza y desempleo mayores que el resto del país. Esta situación no es novedosa ya que estos centros han mantenido estas características a lo largo del siglo pasado (Claeh, 1963; Chiarino y Saraleguy, 1944).

Desde la sociología rural, también se destaca la importancia de una visión integrada de los territorios rurales que abarque más allá de los productores y predios rurales propiamente dichos. Desde los primeros trabajos realizados por la escuela norteamericana en la década de los 50 hasta hoy, muchas han sido las transformaciones en el mundo, las que han obligado a una reflexión permanente sobre estos temas. Si bien esta preocupación se verificó desde esos primeros trabajos, sumamente empíricos y descriptivos, donde la “sociología agraria” intentaba superar esas debilidades planteando la necesidad de enmarcar los datos empíricos en un contexto más general y con sustento teórico; en estos últimos 30 años los cambios han sido tan acelerados que han determinado un debate continuo y fermental entre las distintas visiones y enfoques.

La expansión e intensificación de los procesos señalados exigen más que nunca un replanteo conceptual que pueda dar cuenta de los intensos cambios en los procesos sociales que se verifican en un espacio cada vez más indeterminado y que no responde

al denominado tradicionalmente como rural. Así se puede considerar que “el abordaje actual de los procesos sociales agrarios debe hacer un esfuerzo por tratar de separar conceptualmente la ruralidad, como una forma de vida estructurada por los procesos sociales agrarios, de lo que comúnmente se denomina rural, como concepto demográfico que indica población dispersa”. (Riella, 2000: 171).

Definitivamente, los procesos de globalización, la generación de nuevos mercados de inmenso volumen –sobre todo China y otros países asiáticos– así como la demanda de materias primas para biocombustibles y la incorporación de importantes cantidades de capital a la producción agraria, han impactado de forma profunda en la ruralidad, transformando la forma de vida, de consumo y valores en el mundo rural, lo que deviene en la centralidad que los pueblos rurales asumen en la ruralidad contemporánea.

En tal sentido, investigaciones realizadas por la RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, han podido probar que uno de los elementos identificados –y que inciden en que algunos territorios rurales tengan mayores niveles de desarrollo que otros–, es justamente la existencia de pequeños poblados que ofrecen en dichos territorios centros de encuentro y culturales, servicios en general y para la producción agrícola en particular, centros de salud para la población circundante y mano de obra para los trabajos que se desarrollan en la región. (RIMISP, 2012). Asimismo, la creciente urbanización de los trabajadores rurales se concreta en las pequeñas localidades que mantienen una fuerte ligazón con su entorno circundante sobre todo vinculado a la fuerte demanda de trabajo estacional de la agricultura (Kay, 2001; Craviotti, 2008). Demanda de mano de obra que se ve satisfecha oportunamente por las facilidades que actualmente brindan las innovaciones en las comunicaciones y el desarrollo del transporte.

Pueblos rurales y transformaciones productivas

Varios autores de la región encuentran que las profundas transformaciones productivas en el medio rural, en tanto procesos de modernización, no sólo afectan los circuitos de capital –vinculándose a su hipermovilidad–, sino que alcanzan a la configuración de regiones, al sistema de ocupaciones, la residencia y movilidad territorial de los trabajadores y a la propia dinámica societal de los territorios. Lo que se redefine a partir de los procesos de transformación en el agro y de la reprimarización de las economías de la región son las tramas societarias, el hábitat y comunidades rurales (Bendini, 2006; Bendini y Steimbregger, 2011 y Murmis y Bendini, 2003).

En este sentido, un estudio realizado en la región pampeana argentina (Coppi, 2007), concluye que la transformación productiva tuvo varias implicancias en lo que hemos dado aquí por designar como pueblos rurales, entre ellas, la emergencia de nuevos actores en el proceso productivo y la dinámica económica que originó en la zona.

Los agentes que producen un efecto observable en el entramado socioeconómico de estos poblados son los contratistas de servicio, proveedores de insumo, copiadores, empresarios agropecuarios y nuevos empresarios vinculados a otros sectores originariamente. También se destaca la importancia que asumen en estos poblados los pequeños productores que dejan el ámbito productivo obteniendo una renta anual importante y convirtiéndose en moradores permanentes de estos centros poblados.

En otros estudios, en la misma región argentina⁴ se constata que desde el punto de vista de los actores se enfatiza en la dinámica y crecimiento que han tenido los pueblos rurales a partir de los cambios producidos en esa región. Estas opiniones se sustentan en el vínculo que existe entre el aumento de la productividad en el agro en tanto origen del proceso de generación de divisas con los niveles crecientes de inversión pública y privada. Esto genera también un auge de la construcción particular, el comercio local, las obras públicas y el alto nivel de ocupación. (Arrillaga y Delfino, 2009 y Delfino et. al., 2010).

Asimismo, Arrillaga y Grosso (2010) señalan una reconfiguración de actores que da lugar a procesos de transformación y diferenciación en los pueblos de la pampa. Dan cuenta de la alteración sustantiva en los requerimientos de cualificación, lo que se asocia a la expansión de mano de obra profesional y a la emergencia de mano de obra 'operativa' alfabetizada informáticamente. También constatan la emergencia de propietarios rentistas o aquellos que conforman fondos de inversión con terceros, contratistas prestadores de servicios y productores empresariales.

Sobre estos procesos Bendini (2006:205) también alerta que se constatan diferentes niveles de inclusión exclusión de trabajadores y productores, a la vez que se da una inserción diferencial de las regiones agrícolas, algunas adquiriendo una gran dinámica en tanto otras quedan al margen del proceso.

También se observa en los estudios ya citados, la pérdida del empleo rural en la ganadería y en general la disminución de la mano de obra necesaria para los trabajos del campo, dada la introducción de prácticas ahorradora de este recurso, desplazamiento de producciones tradicionales y de pequeños productores, lo que aumenta los niveles de desocupación. (Arrillaga y Delfino, 2009; Delfino et. al., 2010; Arrillaga y Grosso, 2010). Esto implica parte del crecimiento de los centros poblados rurales en tanto los pequeños productores desplazados, que no pudieron reconvertirse o ampliar su establecimiento, componen el flujo desde la población de la zona rural dispersa a los pueblos.

También existen indicios de que estos procesos producen fragmentación y polarización de los ingresos, mostrando que los cambios productivos tienen impactos tanto en sentido positivo como negativo, producto de la irradiación sumamente diferencial

4 Uno concentrándose en una comunidad rural del límite de la región pampeana de la Provincia de Santa Fe; en tanto otro estudio se realiza en las pequeñas localidades de las zonas centro de la provincia Santa Fe y centro este de la provincia de San Luis.

del crecimiento económico derivado del proceso de agriculturización. Lo que los lleva a mantener que en determinadas zonas los fuertes procesos de cambio han impactado diferencialmente reforzando las desigualdades estructurales a medida que se generan nuevas diferencias en grupos que antes mantenían grados relativos de homogeneidad. Desigualdad creciente entre, por un lado, aquellos productores que pudieron incorporar tecnología y expandir sus plantaciones y nuevos rentistas, y por otro, productores y trabajadores no vinculados a la producción agrícola. (Arrillaga y Delfino, 2009; Delfino et. al. 2010).

Por otra parte, estos efectos negativos también repercuten en la matriz socioeconómica y cultural de los pueblos rurales dependiendo de la región en la que se encuentren cambiando así su forma de vida, llegando a veces a resquebrajar los lazos sociales establecidos. Se da así una superposición de diferentes lógicas societales que llevan a una fragmentación de los lazos sociales que, alejándose de las formas más conocidas en los pueblos rurales, introducen nuevas formas de vincularse al trabajo, nuevas prácticas de consumo y de sociabilidad.

Estos antecedentes dan cuenta de la dinámica y las transformaciones de los procesos sociales que viven los poblados rurales. En la actualidad éstos son escenarios no de una vida bucólica y tradicional sino que, por el contrario, es un escenario donde se confrontan diferentes estrategias de desarrollo y resistencias, dando lugar a un espacio donde existen conflictos y se recrean tensiones sociales al interior de cada comunidad.

A partir de esta revisión, se elabora un conjunto de dimensiones para ser observadas en el territorio seleccionado para el estudio, con el fin de comprender la magnitud de los cambios que operan en estos pueblos en Uruguay.

En primer lugar, se propone analizar el dinamismo poblacional que han tenido estas localidades en el marco de la región y del país para contextualizar los cambios. En un segundo paso se indagará sobre el impacto que han tenido los cambios en la agricultura en la zona sobre el mercado de empleo, la emergencia de nuevos actores, la diferenciación social y el desarrollo de los servicios y la institucionalidad en estos pueblos.

Aspectos metodológicos

La investigación fue de carácter exploratorio, usando un abordaje de corte cualitativo. Se conformaron visitas de campo y observación en cada pueblo. A la vez se realizaron entrevistas en profundidad con actores representativos de los diversos sectores de actividad en la localidad, entre ellos productores agrarios, técnicos, agrónomos, integrantes de cooperativas agrarias, directora y maestras rurales y director y profesores de liceo, ediles, alcaldes y profesionales de la salud. Las entrevistas fueron seguidas a partir de una pauta que preestablecía las dimensiones sobre las que debía indagarse.

Asimismo se complementó esta información con datos estadísticos provenientes de los censos nacionales de población y los censos agropecuarios.

Delimitación y caracterización del área de estudio: 'la línea 2' en el departamento de Soriano

Soriano, uno de los departamentos que cuenta con los suelos de mayor fertilidad en el litoral, es cruzado por la Ruta 2 desde el límite con el departamento de Colonia en el sureste de su territorio hasta su capital –Mercedes–, próxima al límite territorial con Argentina.

Los lugareños la denominan la “línea 2” y reconocen que existe una realidad territorial marcada por dicha ruta, en cuyo entorno se ubican varias poblaciones pequeñas. Si bien el espacio que se conforma con la ruta 2 como eje tiene en un extremo a la ciudad de Cardona, limítrofe con el departamento de Colonia, y en el otro a Palmitas, próximo a la capital departamental, se reconocen como “los pueblos de la línea 2” a Rodó, Riso, Egaña y Palmitas.

Figura 1: Departamento de Soriano



En tanto el total de la población del departamento de Soriano registra un aumento del 3,97% en el período 1985-2011, el conjunto de pueblos de la línea 2 muestra un

crecimiento relativo pronunciado, pasando de 4313 habitantes en el año 1985 a 5583 en 2011, lo que representa una variación de 29,45%.

El crecimiento de la población de los pueblos rurales puede deberse en alguna medida a la residencia de una proporción de los pequeños y medianos propietarios rentistas que dejan el mundo productivo por una mayor rentabilidad de la tierra bajo arriendo y a la radicación de algunos de los nuevos actores emergentes en el proceso productivo, prestadores de servicios, empresas de servicio al agro, plantas de acopio, venta de insumos agroindustriales, entre otros, a los cuales estas pequeñas localidades con fuerte vinculación con el medio rural le son funcionales en el proceso productivo.

Tabla 1. Variación de población, 1985-2011

	1985	2011	Variación % 1985-2011
Risso	431	557	29,23
Egaña	690	783	13,48
José Enrique Rodó	1661	2120	27,63
Palmitas	1531	2123	38,67
Total Localidades 'línea 2'	4313	5583	29,45
Población rural dispersa Soriano	17062	6612	-61,25
Total departamento Soriano	79439	82595	3,97
Total pequeñas localidades en el país	192417	262725	36,54

Fuente: Censos de Población 1985 y 2011.

En lo que respecta a la matriz productiva predominante, la zona de estudio se caracterizó hasta hace un par de décadas por la ganadería, la lechería y algo de agricultura de granos, tratándose básicamente de producción de tipo familiar.

La cantidad de explotaciones de menos de 100 hectáreas pasaron de 1163 en 1990 a 913 en el año 2011, lo que muestra una retracción del 21,5%. El peso de las pequeñas explotaciones en el total de establecimientos del departamento se reduce un punto porcentual, pasando de 49,8% a 48,9%.

La concentración de la propiedad queda evidenciada, mostrando aun una intensificación en el período 1990-2011. El peso de los establecimientos con más de 1000 hectáreas en 1990 era del 9,3% y concentraba el 53,7% de la superficie explotable del departamento; en tanto en 2011 el 11,5% de los establecimientos del departamento controlan el 65,5% del total de superficie explotable.

Por otro lado, los datos de los Censos Agropecuarios muestran una retracción en las explotaciones que hacen lechería comercial, pasando de 556 en el año 1980

a 425 en el 2000⁵. No obstante esta disminución en la cantidad de establecimientos dedicados a esta actividad, la producción de leche se multiplicó por 4 en este período de 20 años; lo que puede estar relacionado con cambios en la escala de producción e incorporación de tecnología.

Actualmente el paisaje en el departamento de Soriano evidencia claramente algunos de los cambios productivos más importantes, siendo la soja el grano que concentra la mayor cantidad de tierras para su producción. Manifiestamente, la importante demanda de soja por parte los países asiáticos que llevaron a vastas zonas de Argentina, Brasil y Paraguay a reconvertirse a este cultivo, termina por avanzar hacia Uruguay, incorporando actores nuevos y características diferentes en las formas de producir. Se trata de importantes capitales en su mayoría argentinos, aunque también hay de origen nacional, controlando superficies muy importantes de tierra, incorporando maquinarias de gran porte, costo y sofisticación tecnológica; a la vez que se introducen innovaciones de manejo relacionadas con los métodos de cultivo y las técnicas de manejo agronómico.

La percepción de las transformaciones en los pueblos de la 'línea 2'

Los elementos más relevantes que surgen de las entrevistas refieren a los efectos en el mercado de empleo que se han dado en la zona en los últimos años. Los discursos de los residentes en los pueblos dan cuenta de un aumento del empleo en general asociado directamente a la expansión del sector agropecuario y al dinamismo generado en las empresas de servicios conexas. Según un entrevistado *"la tasa de desempleo es ínfima, no está medida, pero seguramente si ustedes dan alguna vuelta por las localidades van a poder percibir..."* (E2). Otro sostiene que *"...laboralmente ha crecido, casi todo el mundo tiene trabajo, no hay un nivel de desempleo... vos observás que todos mal o bien tienen trabajo"* (E3). Como indica también este nuevo testimonio ha habido *"...una baja notoria de lo que fue el desempleo. Tanto es así que se escuchan comentarios en el pueblo de que la gente no quiere trabajar, pero no es que nadie quiera trabajar es que por suerte la gente tiene empleos, o posibilidades de empleo"* (E4).

A su vez, el aumento de empleo constatado es acompañado de una mejora en las condiciones de trabajo en los puestos vinculados a las empresas agrícolas consolidadas, donde se observa mayor formalidad, básicamente en lo que refiere a las formas de pago y la cobertura de seguridad social, lo que influye en una mejora de la calidad de algunos empleos.

Como afirma un entrevistado: *"Acá, directa o indirectamente, justamente por esta bonanza agropecuaria, se ha producido un impacto muy grande. En uno de los aspectos que a mí me parece que ha impactado mayormente es en lo laboral, pero creo que no solamente en cuanto a manejar aspectos cuantitativos de mejora laboral,*

5 No puede incluirse este dato para el año 2011 dado que aún no está disponible. Del Censo General Agropecuario del año 2011 sólo se realizó una publicación con algunos recuentos preliminares.

sino también cualitativos. Ha mejorado la cantidad pero también la calidad del trabajo en esta población y en todas las poblaciones". (E2).

Según la opinión de otro informante esto se debe en buena parte a que *"En el caso de las empresas prestadoras de servicios, creo que la informalidad es prácticamente muy poca. Porque el demandante del servicio requiere calidad y para darla hay que estar a tono y en regla. Son inversiones grandes". (E1).* Otro agrega que en general *"...ha mejorado el salario, y han dignificado el medio de trabajo. El peón rural atado a la ganadería, hasta hace muy poco tiempo dormía en unos galpones donde, por decir una cosa, que hubiera ratas no era nada extraño, en un rincón... ahora una gran parte de los extranjeros ha construido instalaciones para los asalariados, ha puesto sistemas de ducha, ha dignificado la tarea". (E2).*

No obstante, dichos logros respecto a la calidad del empleo, son incompletos ya que también los entrevistados hacen referencia al incumplimiento por parte de muchos empresarios de la nueva ley que limita la jornada de trabajo a 8 horas de los trabajadores rurales. Existe una profunda naturalización de que la jornada laboral depende de los elementos vinculados al proceso productivo y no al respeto de los derechos del trabajador⁶. *"En zafra no podés hacer 8 horas. ¡Por favor! Aparte que no empezás a las 8 de la mañana, el rocío de ahora no te permite entrar a cosechar. Vos estás entrando a las 12 de mediodía a cosechar una soja. Porque si está mojada no la podés cosechar. Y a veces estás hasta la 1 o 2 de la mañana, hasta que el tiempo lo permita. Por el rocío. Por la humedad ambiente. Entonces acá te manejas mucho en función del clima. Si el primero de mayo pudiste trabajar, trabajás. Porque después tenés 5 días parados cuando llueve. Eso la gente lo sabe y lo entiende". (E6).*

Otro aspecto vinculado con el mercado de trabajo es el surgimiento de nuevos perfiles de trabajadores asociados a los puestos creados en la agricultura para el manejo de las sofisticadas maquinarias que cada vez con mayor frecuencia se utilizan en las grandes superficies cultivadas. *"... todo eso conlleva al manejo de instrumentos tecnológicos que la mano de obra rural tradicional no estaba habituada a manejar". (E2).* Otro sostiene que *"cada vez más (las empresas de servicios) requieren de personal más especializado". (E5).*

El alto contenido técnico de éstas ha obligado al desarrollo de habilidades específicas que habiliten el manejo apropiado, con lo cual se crean puestos de trabajo calificado que en su mayoría –según los entrevistados– son ocupados por los jóvenes. Al respecto cabe apuntar que, de acuerdo a los discursos de los actores, existe una demanda insatisfecha en el requerimiento de mano de obra calificada. Un entrevistado menciona que por ejemplo en *"la siembra directa se requieren máquinas diferentes, especiales, con un alto costo y no se consigue gente. Hay una demanda insatisfecha*

6 Esto muestra que los procesos de modernización e innovación tecnológica importantes no necesariamente están asociados a las mejoras de las condiciones de trabajo. Sobre este tema ver, entre otros, a Mascheroni, 2011 y Riella y Ramírez, 2009.

en cuanto a conseguir gente de calidad...” (E5). Se enfatiza en este aspecto también la necesidad de capacitación para ampliar las oportunidades de la población para que pueda acceder a estos nuevos puestos de trabajo. Como menciona un entrevistado, estos procesos *“han puesto sobre el tapete algunas cuestiones que parecen paradójicas, hay una oferta de trabajo al que un sector de la población que no puede acceder”* (E2).

Un segundo aspecto indicado por todos los entrevistados, que acompaña al aumento del empleo, es el desarrollo en la mayoría de estos pueblos de los servicios y logística necesaria para la expansión agrícola y el aumento del dinamismo comercial. Todos los discursos hacen referencia al establecimiento de nuevos emprendimientos en la zona, básicamente de aquellos que se convierten en el soporte para el funcionamiento de la actividad agrícola: prestadores de servicios, entre ellos plantas de acopio; proveedores de insumos; asistencia técnica; mantenimiento de maquinarias; logística y transporte. El establecimiento y desarrollo de estas nuevas actividades en la zona, pautan el dinamismo económico que se constata en las pequeñas localidades. Como se ilustra en la siguiente cita *“el desarrollo agrícola y el crecimiento del área agrícola hizo que desembarcaran en nuestro país todas las multinacionales de granos habidas y por haber y... después hay una cantidad de nuevas empresas que empiezan a manejar grano y empiezan a tornar muy competitiva la logística”* (E5). Esto ha implicado para la zona, como lo agrega otro entrevistado, crecimiento de la cantidad de servicios para la producción: *“los servicios cada vez tienen más protagonismo... fundamentalmente todo lo que se refiere a insumos, depende cuál sea pero, tema de veterinaria, llevar cajas, todo ese tipo de negocio, y a su vez también un trabajo extra, no tan directamente asociado a la producción, pero por decirte una cosa, los gomeros, indudablemente al producir más, de una forma más intensa, hay desgaste, trabaja la metalúrgica, no necesariamente un impacto únicamente sobre los negocios que trabajan los servicios, a veces aumentan otros rubros. Le da dinamismo a la economía”*. (E2).

Además, como indican varios entrevistados, esto genera un movimiento comercial vinculado al transporte y su logística que agrega mayores impactos a las localidades, *“... el permanentemente tránsito de camiones, es impresionante el tránsito en estos últimos años... la cantidad de plantas de silos en el medio del campo, de la nada, ya sea por esto de agrícola del plata o algo parecido, pero mirá desde aquí, de Rodó a Palmitas, que tenés 40 kms. y tenés en la ruta por lo menos tres plantas de silos, y en la propia ruta 14 que va de Mercedes a Palmar”*. (E4). Esta cita ilustra con claridad el cambio en el paisaje de la zona y el aumento de la circulación y movilidad en este nuevo escenario. A esto se le debe agregar, además, el impulso que ha tomado en los pueblos la construcción, tanto para la edificación de nuevas viviendas dado la escasez de viviendas disponibles, como para el mejoramiento del stock existente; a lo que se suma también una creciente ampliación del mercado de alquileres dado el crecimiento poblacional en los últimos años. El diagnóstico que realiza a continuación uno de nuestros entrevistados, muestra la falta de adecuación de la infraestructura de estos pueblos a los procesos de dinamismo a los que se enfrentan. *“En el tema vivienda tenemos un importante déficit. No hay disponibilidad de terrenos. Porque la población ha*

crecido. En base a que ha aumentado, por el aumento demográfico mismo y a la gente que ha venido de otros lados... En unos pocos años han subido de forma que una casa que valía U\$S 15.000 hoy piden U\$S 70-80.000". (E1). Otro factor que influye en este déficit inmobiliario es que "La gente del campo se está yendo y vienen a vivir al pueblo, en el caso de José Enrique Rodó no hay casas para alquilar". (E6).

Este fenómeno ha generado otro impulso dinamizador a la economía local, pero ha tenido como contraparte una presión en el mercado inmobiliario produciendo un aumento de los precios, tanto de alquileres como de venta de viviendas.

Otro aspecto que también es reiteradamente señalado por los entrevistados hace referencia a que este proceso de crecimiento económico que se ha dado en la zona presenta por detrás como rasgo más sobresaliente una lógica creciente de concentración de empresas que acompaña la tecnificación y racionalización de los procesos y su aumento de escala para lograr la mayor rentabilidad. Este fenómeno es identificado por los entrevistados tanto en las áreas rurales como en las urbanas, haciendo inviable la pequeña empresa. Dejando al descubierto que este dinamismo también implica una fuerte concentración de recursos expresado principalmente en el ámbito rural por la desaparición de los pequeños establecimientos y en las áreas urbanas de las localidades por el cierre de las pequeñas empresas de comercio y servicios.

Para el caso rural, como sostiene el entrevistado, han desaparecido muchos pequeños productores, pero de los que quedan *"hay un núcleo de productores más pequeños, de mínimo 200 há. Y ya después pasamos a otros más medianas 500, 700, 1000 há, pero tenemos, por ejemplo, algunos que se habla de 20.000 há de soja. Hay unas cuantas mega empresas que tienen toda la herramienta y la logística, como una empresa argentina que maneja más de 100.000 há."* (E1).

En los pueblos la concentración se visualiza, por ejemplo, en los aspectos que señala este testimonio: *"a partir de esta evolución (crecimiento) toda la empresa chica se hizo bastante inviable... (en transporte) hay una sola empresa, que se ha mantenido, es una empresita chica, creo que es la única empresa de transporte chica que tiene dos camiones chicos. Después son todas más grandes"*. (E1). Otro ejemplo de esta lógica diferenciadora y excluyente es señalado en relación a los pequeños comercios y también entre las empresas de mayor porte: *"los talleres más pequeños han desaparecido, ahora están los más grandes, pero trabajan mejor. Trabajan más. Las (primeras) empresas que se instalaron en los pueblos a partir de estos cambios... se instalaron con una oferta de buena maquinaria y han ido evolucionando indudablemente, y otras se han ido formando, pero el nivel tiene que ser bueno porque si no, no sobreviven. La exigencia es muy alta"*. (E1).

Asimismo, se constata una suerte de adecuación de los servicios, gestiones y procedimientos administrativos a la gran empresa y gran producción que no resultan funcionales para los pequeños productores que se encuentran con obstáculos para operar cotidianamente, desde la operación bancaria hasta la compra y transporte de in-

sumos que se manejan con volúmenes mínimos no accesibles a la pequeña producción. Por ejemplo, un pequeño productor de la zona señala, respecto a la nueva normativa del BROU, que *"... al productor (como yo) hay cosas que lo complican cada vez más... Nada, hacer un giro, sabrán por qué lo hacen, yo no, porque a mí me provoca un problema, y como a mí a la mayoría, yo le pregunto en Rodó ¿cuántas operaciones por encima de 160 mil pesos se hacen por día? Una o dos, nada más, entonces quiere decir que sólo para extranjeros nomás, pero el banco es uruguayo". (E7)*. El mismo productor señala también que en la compra de insumos la situación es bastante compleja para ellos ya que su escala de compra es muy baja comparada con la de las megaempresas, sostiene que mientras ellos compran por kilos, estas empresas compran a precio de toneladas; señala que *"hay que facilitarle al productor chico más que nada, porque uno va a comprar un kilo de fertilizante para el predio, pero precisa un kilo, no mil, es el productor chico". (E7.)*

Otro elemento sobre el que se esperaban cambios refiere a la emergencia de nuevos agentes sociales. Al respecto, se constata que efectivamente, la consolidación de nuevas actividades económicas y productivas genera la emergencia de nuevos actores económicos, entre ellos inversionistas extranjeros, contratistas de mano de obra, empresarios prestadores de servicios agrícolas, mediadores en el mercado financiero y arrendatarios.

Esto se da también en forma conjunta con la reconfiguración de otros agentes, que comienzan un proceso de movilidad social ascendente transformándose de pequeños productores con problemas de escala a empresarios de venta de servicios, fundamentalmente de maquinaria, para la producción. *"Ese (proceso) mecanismo lo que hizo fue transformar a muchos productores, que vendieron su establecimiento, y a otros que antes eran medianeros, en contratistas de maquinaria".(E5)*.

En tanto otro grupo de pequeños y medianos productores se transforma en arrendatarios de sus tierras, conformando una capa de pequeños rentistas que en general residen en estos pueblos rurales.

Por otra parte, aparecen nuevos agentes vinculados sobre todo a los cambios en la estructura agraria, como lo señala un entrevistado, *"hoy hay un negocio de la cantidad de campos, que cambiaron de mano, cambiaron de mano a nuevos propietarios, nuevos inversores, con una característica diferente a los que estaban antes... entró un nuevo productor, un tipo de productor que básicamente no lo conocemos". (E6)*.

Finalmente, en las entrevistas surge un conjunto de elementos que muestran que la dinámica económica ha ido generando también mayor diferenciación social en estos pueblos rurales.

En primer lugar, hay una percepción muy extendida de que en estos años ha ido cambiando la composición social de los pueblos por diversas razones. Una de ellas y quizás la más notoria ha sido la llegada de nuevos trabajadores que se han radicado en los pueblos atraídos por la demanda de trabajo en la producción agraria, que por el

desarrollo de las comunicaciones y la accesibilidad de los medios de transporte logran el desplazamiento diario, desde sus hogares en los pueblos a sus trabajos en el medio rural.

Estos nuevos moradores de los pueblos generan, en cierta medida, tensión con los antiguos habitantes, quienes se ven invadidos –y así lo transmiten– por cierta ansiedad y preocupación ante esos ‘desconocidos’ que llevan a que se pierda el sentimiento de *familiaridad existente en los pueblos previo a su llegada*. Una entrevistada cuenta que *“hay gente que es desconocida. Hay caras raras. Antes capaz que se conocía todo el mundo, pero todo esto ha llevado a que otra gente venga. Ahora no sé quién es hasta mi vecino del campo”*. (E6).

El flujo de población hacia los pueblos no sólo se conforma de estos nuevos trabajadores, sino que –como ya se señaló– existe un grupo de pequeños y medianos productores convertidos en rentistas que pasan a residir en los pueblos; con lo que de alguna manera puede señalarse que el crecimiento poblacional del pueblo es la contracara del despoblamiento rural. Un entrevistado claramente lo señala: *“Quisiera puntualizar que a partir de este cambio ha habido un cambio literal en cuanto a lo que es la población rural... Esta transformación ha traído que la gente autóctona del campo se ha venido a las ciudades o los pueblos. Los pequeños productores fueron vendiendo a las empresas grandes y hoy están en los pueblos”*. (E1).

Ahora bien, esta nueva configuración económica deja ver aspectos que pueden relacionarse con un proceso de profundización de la diferenciación social en los pueblos. Un entrevistado relata que nota *“que los que realmente han mejorado son los sectores que ya estaban acomodados, o sea que como que en realidad te diría que la brecha ha aumentado”*. (E4). Asimismo se encuentra una distinción importante, por ejemplo, entre las dos escuelas de la localidad de Rodó, una maestra comenta: *“se empezó a generar una distinción, una escuela A y una escuela B, entonces eso también se transformó en una cuestión de status, entonces, es status concurrir a esta escuela y no a la otra y bueno... a su vez hay un poco de falta de valorarse de la zona donde está esa escuela y ver cómo la pueden jerarquizar”*. (E3).

A la vez, se percibe cierta segregación, entre los trabajadores de la zona que accedieron a los empleos más formales de la agricultura con los trabajadores recién llegados –particularmente desde la frontera– y con aquellos de la zona que ocupan los puestos más precarios, ya sea en la ganadería o en las zafras. Un entrevistado señala sobre este segmento de la población que *“son gente que no tienen la posibilidad de manejar un camión o de trabajar en la barraca, son gente que hacen trabajos informales, que de repente son de bajo nivel cultural, entonces, algunos están con fragilidad. Son gente que están ahí. Sobreviven nomás... (Alguna posibilidad) en la zafra si. Las zafras ahora son muy cortas, en la zafra falta mano de obra. Y esta gente trabaja en estas cosas”*. (E1).

Por otro lado, producto de la dinamización de la economía en general, se reconoce el aumento de los ingresos en algunos hogares lo que, a su vez, se asocia con una mayor diferenciación que se expresa en el equipamiento de los hogares, consumo y también en la posibilidad de movilidad y vinculación con los centros urbanos de mayor porte como la capital departamental y Montevideo.

Otro conjunto de elementos que surge en las entrevistas evidencian que en el marco de este dinamismo de agriculturización en la zona, persisten muchas carencias de equipamiento urbano y de servicios de estos pueblos, que se agudiza dado el crecimiento que han tenido. Por un lado, lo más sentido por los entrevistados es la ausencia de una oferta educativa técnica, particularmente de aquella formación adecuada y articulada con el sector productivo de la región; y por otro, también la ausencia directa de capacitación específica para lograr habilidades para insertarse en el mercado de empleo de la zona. Un entrevistado entiende que *“Acá en realidad no se ha encarado frontalmente el tema de la capacitación. Las empresas se ocupan de traer a alguien o a veces se da algún curso el cual hay que pagarlo, pero es muy de tanto en tanto. En ese sentido sería bueno que tuvieran un enfoque más intenso. Que se capacitara a la gente”*. (E1).

La inexistencia de oportunidades educativas, según señalan los actores, vacía a los pueblos de los jóvenes que emigran buscando la continuidad de la formación. Un entrevistado señala que *“Hay una franja que desaparece que son de los 18 a los 30, 35 años, esa franja tiene muy escasa presencia en la población y en otras poblaciones es peor. Uno de los aspectos que incide en eso es la falta de oferta educativa”*. (E2). Asimismo se encuentra que no hay capacidad para retener a los docentes y maestros en el pueblo, que terminan siendo actores que no se involucran con la realidad de los pueblos ya que están de paso.

Otro de los aspectos invariados refiere al acceso a servicios básicos que hacen a la calidad de vida de los habitantes. Un entrevistado señala que *“la demanda de la población en esta localidad es la de universalizar el sistema de saneamiento que está solamente previsto para las viviendas que construyó MEVIR (que) es una pequeña proporción de lo que es la población y una demanda que hace es el tema de saneamientos, que viene atado a la calidad de vida”*. (E2). En otro testimonio se da cuenta de que la salud es atendida en un servicio del sistema privado y en una policlínica de Salud Pública, mencionando al respecto que *“la Policlínica tiene importantes carencias. Sólo funciona en horario matutino, tiene dos médicos pero de tarde está cerrado, aunque están trabajando para que amplíen el horario. En medicamentos también tiene deficiencias. En esos aspectos tendría que mejorar”*. (E1).

Finalmente, es necesario hacer referencia a la débil institucionalidad y falta de actores locales equilibrados. En las localidades más importantes que conforman esta línea, Rodó y Palmitas, no hay junta local. Por otro lado se constata la ausencia de sindicatos en las grandes empresas, por lo que la representación colectiva de intereses de la zona sigue en manos de las organizaciones rurales. Esto oculta otro tipo de

intereses y necesidades en estos poblados. Sigue habiendo una lógica de dominación tradicional, donde el sindicalismo es mal visto, lo que lleva a una falta del cumplimiento de derechos de los más vulnerables de la zona. En palabras de un entrevistado: *“ me parece que acá somos localidades débiles y por lo tanto más permeables que, o somos en los primeros en que repercuten estos períodos de estancamiento, de crisis o incluso de crecimiento y recuperación; no sé, yo lo veo como muy atado a que no tenemos una cultura de participación, o sea, a veces reclamamos la participación y cuando nos dan la oportunidad de participar no ocupamos los espacios, nos pasa al nivel por ejemplo de las organizaciones sociales, el llamado a asambleas para a nivel de club deportivo, comisión de fomento en las escuelas, hasta los propios padres (de los alumnos)... no tenemos cultura de la participación”*. (E4).

Debe consignarse, por último, que si bien las constataciones respecto a la dinamización económica se refieren a todos los pueblos indagados que conforman la denominada 'línea 2', no todos muestran estos efectos en la misma medida. En este sentido hay un factor clave, los pueblos que son atravesados o están próximos a la Ruta 2 (Rodó y Palmitas), lograron capitalizar en forma diferencial los beneficios de este dinamismo regional. En tanto las localidades Risso y Egaña, más distantes de la ruta, antes con la comunicación a partir del trazado ferroviario, si bien se han visto beneficiadas por el crecimiento, lo han hecho en menor medida.

Reflexiones finales

El proceso de agriculturización sin duda tiene luces y sombras. En este trabajo se trata de incursionar en este proceso mediante el análisis de la percepción y representaciones de los actores locales. Como estas transformaciones aún están transcurriendo es pronto para sacar conclusiones acabadas sobre los impactos que podrían llegar a tener éstas a mediano y largo plazo.

Sí es posible constatar que las actividades económicas han crecido de manera muy significativa en los pueblos analizados y que este crecimiento ha dado lugar a una matriz socioproductiva muy distinta a la que tenían a fines del siglo XX. En general esto ha dado como resultado más virtuoso la dinamización del mercado de trabajo con una reducción del desempleo y un aumento de los puestos de trabajo de calificación media ocasionando en muchos casos una mejora en los ingresos de los hogares y una mayor formalización del empleo. Por otro lado, las rápidas transformaciones en la dinámica de la vida cotidiana, alteraron rutinas y generaron relaciones de interacción con nuevos actores que resquebrajan los modos de vida y trabajo en las comunidades locales. Este proceso en algunos casos es percibido como una pérdida de un mundo social de vecindad y cercanía que altera la seguridad y la confianza de las antiguas redes sociales que conformaban estos poblados.

Si bien esta vitalización económica se da en todos los planos, tanto aquellas que están directamente vinculadas al sector agrícola como aquellas que no lo están tanto, como los servicios públicos, transporte, comunicaciones y comercio minorista, esto

ocurre con un incipiente proceso de diferenciación social como uno de los rasgos más salientes del efecto de la agriculturización en los pueblos analizados.

A la vez, es importante señalar que en este proceso de cambios acelerados se producen transformaciones con efectos muy negativos en los territorios rurales articulados con estos pueblos. La estructura agraria se concentra produciendo una reducción significativa de la pequeña y mediana producción, a la vez que una disminución de la diversidad productiva. Estos efectos también tienen su correlato en la dinámica de los poblados, donde se van extinguiendo los servicios articulados con estas formas de producción y gestión de una agricultura a escala más pequeña y familiar.

También se percibe la falta de un adecuado desarrollo de la institucionalidad en estas localidades que permitiría atenuar la fuerte asimetría de poder entre los actores sociales de estas localidades. Un aumento de la institucionalidad que ampliara los espacios públicos de concertación y negociación de conflictos entre los actores podría contribuir a mejorar la distribución de los beneficios del crecimiento en la zona, e impulsar la ampliación de los servicios urbanos para mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos y hacer más sustentable el desarrollo que muestran estas localidades.

En síntesis, los pueblos rurales analizados muestran los cambios que ha sufrido su matriz socioproductiva para adaptarse al desarrollo de las nuevas actividades agrarias de la zona, desencadenando un proceso de transformaciones y de diferenciación social al interior de las localidades, evidenciando que sus dinámicas económicas y sociales conforman una unidad entre el ámbito rural y urbano. En este sentido, se puede afirmar que los efectos más positivos de la agriculturización en esta zona del país se pueden percibir en las localidades a impulso del crecimiento del empleo y de la actividad económica, mientras que los efectos más negativos se encuentran en las áreas rurales donde se ven con mayor claridad procesos de desplazamiento de producciones con concentración de la tierra y exclusión de las formas familiares de producción.

Por último, con este estudio también se intentó mostrar la necesidad de tener una visión más amplia de la problemática rural, aplicando una estrategia de análisis que incorpore al mismo tiempo los procesos agrarios en las áreas rurales y la dinámica de los pueblos vinculados a ellas, para poder dar respuestas a los desafíos contemporáneos que nos plantea el desarrollo rural del país.

Bibliografía

- ARRILLAGA, Hugo y DELFINO, Andrea** (2009). "Agriculturización, inequidad distributiva y fractura del tejido social" en Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo, N°5, p. 225-250. Disponible en Memoria Académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4527/pr.4527.pdf
- ARRILLAGA, Hugo y GROSSO, Susana** (2010). "Reconfiguración de actores sociales en un territorio: El caso del agro pampeano argentino, en un contexto de globalización", en Globali-

- zación y Perspectivas de la Integración Regional, Sánchez Vera, A. y Riella, A., (editores), Universidad de Murcia, Murcia.
- BENDINI, Mónica** (2006). "Procesos de cambio en la construcción social de un territorio" en *Globalización, Desarrollo y Territorios menos favorecidos*, Riella, Alberto (Compilador), Departamento de Sociología, FCS, UdelaR, Montevideo.
- BENDINI, Mónica y STEIMBREGER, Norma** (2011). Ocupaciones y movilidades en pueblos rurales de la Patagonia. Una mirada desde lo agrario, *Revista Mundo Agrario*, Vol. 12, N°23. Disponible en Memoria Académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5034/pr.5034.pdf
- CHIARINO, Juan y SARALEGUI, Miguel** (1944). *Detrás de la ciudad*, Impresora Uruguaya SA, Montevideo.
- CLAEH** (1963). *Situación económica y social del Uruguay rural*, Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Montevideo.
- COPPI, Gabriel** (2007). Implicancias del proceso de agriculturización en el Departamento Río Primero de la Provincia de Córdoba, en Primer Congreso de Geografía de Universidades Nacionales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2007. Disponible en: <http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/alfilo-18/pdf/coppi.pdf>
- CRAVIOTTI, Clara** (2008). Empleo agrario y ruralidad ampliada, *Geograficando*, Año 4, N°4, pp. 99-116. Disponible en Memoria Académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3741/pr.3741.pdf
- DELFINO, Andrea; BECERRA, Evelyn; OLGUÍN, Jorge y TROCELLO, Gloria** (2010). Transformaciones productivas e impactos en el entorno social próximo. Una lectura comparada en pequeñas localidades del centro y del borde pampeano, en IV Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales. Disponible en: <http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/M3-21-%20Delfino%20y%20otros.pdf>
- KAY, Cristóbal** (2001). El excluyente desarrollo rural latinoamericano en un mundo neoliberal. In: Alberto Riella y Mauricio Tubío (comp.) "Transformaciones agrarias y empleo rural" FCS. DS. UER. Montevideo.
- MASCHERONI, Paola** (2011). *Democracia y ciudadanía en el campo: los primeros Consejos de Salarios Rurales en Uruguay*. DS, FCS. UdelaR. Montevideo.
- MURMIS, M. y BENDINI, M.** (2003). Imágenes del campo latinoamericano en el contexto de la mundialización. En Bendini, Cavalcanti, Murmis y Tsakoumagkos (comp.). *El Campo en la Sociología Actual. Una perspectiva Latinoamericana*. Buenos Aires. Editorial La Colmena.
- RIELLA, Alberto** (2000). *Desafíos teóricos y empíricos de la Sociología Rural contemporánea: una mirada desde Uruguay*. En: 30 años de Sociología Rural en Latinoamérica. Diego Piñeiro (Compilador). Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Montevideo, Julio.
- RIELLA, Alberto y RAMÍREZ, Jessica** (2009). "Una mirada comparativa del perfil de los trabajadores de la forestación y de la ganadería en Uruguay" en *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, Argentina, Vol 30, pp. 45-73.
- RIMISP** (2012). Centro latinoamericano para el desarrollo rural. Pobreza y desigualdad. Informe Latinoamericano 2011. RIMISP/IDRC/FIDA Santiago de Chile.



Producción familiar y acción colectiva: la agenda de la Comisión Nacional de Fomento Rural en la era progresista

Alberto Riella¹ - Adrián Silveira² - Paola Mascheroni³

La llegada al gobierno nacional de una coalición de partidos de izquierda en marzo del 2005 generó un cambio en la orientación de las políticas públicas afectando de manera significativa la relación entre los diversos actores u organizaciones de la sociedad civil y el Estado (De Armas, 2009). En este sentido, es sumamente pertinente indagar cómo se posicionan los actores rurales, cuáles han sido sus principales demandas y acciones y qué medidas del gobierno entrante suscitaban su apoyo o resistencia. En este artículo se busca realizar un aporte en esa dirección, brindando una primera mirada sobre la relación entre la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que es la principal gremial de los agricultores familiares en el país, con el gobierno progresista⁴.

Introducción

Desde el punto de vista de la acción gremial, las corporaciones agrarias de Uruguay han utilizado una pluralidad de estrategias para transmitir sus demandas al sistema político. La acción política de gremios y sindicatos ha estado dirigida a ejercer influencia sobre las decisiones de políticas públicas, ya sea por medio de contactos directos con miembros del Poder Ejecutivo, la Administración Pública y el Poder Legislativo; o mediante contactos menos públicos con integrantes del gobierno que deciden las políticas públicas (Bertoni, 2008). En este marco, la llegada del primer gobierno de izquierda en el año 2005 produjo una rearticulación de las demandas, posiciones

- 1 Doctor en Sociología por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Profesor Titular del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Área Sociología Rural y Desarrollo Territorial. albertoriella@gmail.com
- 2 Licenciado en Sociología. Ayudante de investigación en el Proyecto “Organizaciones Agrarias, Políticas Públicas y Desarrollo Rural en el Gobierno Progresista (2005-2010)”.
- 3 Magíster en Sociología. Candidata a Doctora en Sociología por la Universidad de Granada, España. Profesora Asistente del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Área Sociología Rural y Desarrollo Territorial. paola.mascheroni@cienciasssociales.edu.uy
- 4 Este estudio forma parte del Proyecto CSIC I+D: “Organizaciones Agrarias, Políticas Públicas y Desarrollo Rural en el Gobierno Progresista (2005-2010)”. Para la elaboración de este artículo se contó con el apoyo de Sofía Angulo.

y estrategias de los principales actores sociales del campo; y de su papel en la construcción del desarrollo rural. Las diferentes iniciativas del gobierno en el campo del desarrollo rural han producido un nuevo contexto donde estos actores sociales entran en conflicto, y compiten por la voluntad de los *policy makers*, presionando para modificar las políticas públicas a su favor.

En este contexto, este estudio busca identificar los principales elementos que conforman la agenda de la CNFR, analizar el posicionamiento de la gremial frente a las políticas públicas vinculadas al desarrollo rural durante el gobierno progresista y señalar las principales estrategias de relacionamiento con el Estado ante el cambio de signo político en el gobierno nacional.

En la primera parte se presenta brevemente la gremial de productores familiares. A continuación se describe la metodología utilizada para el estudio y las fuentes de información relevadas. En los apartados siguientes se analizan los principales elementos que conforman la agenda de la institución y su relacionamiento con el gobierno. Finalmente se realiza una reflexión final en torno a estos hallazgos.

La Comisión Nacional de Fomento Rural

Desde el punto de vista organizacional, la CNFR es una gremial rural de segundo grado, de cobertura nacional, que actualmente -según información de la institución- nuclea a 98 entidades de primer grado. Su base de representación reúne a Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias y otras formas organizativas, las que a su vez agrupan e irradian su acción sobre unos 15.000 productores familiares de todo el Uruguay. Desde su creación se proyecta como la principal organización representativa de pequeños y medianos productores del medio rural, a través de las organizaciones de base que los nuclean en todo el país. Pese a su carácter nacional, históricamente ha agrupado a los productores del sur y oeste del país, debido a que es en estas zonas donde se encuentra la mayor densidad de productores dedicados a los rubros más intensivos.

La CNFR se funda el 15 de agosto de 1915, auspiciada por el primer gobierno batllista como base de su impulso al proceso de agriculturización. Su surgimiento puede interpretarse como un esfuerzo por construir desde el gobierno un actor que pudiese contrapesar al poder gremial de los ganaderos, representados históricamente por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) creada en 1875 y la emergencia de la Federación Rural (FR) en el mismo año de creación de la CNFR.

El sistema de representación de intereses de los sectores agrarios ha sido hegemónico por la representación de las dos gremiales ganaderas, dejando muy poco espacio para la participación e incidencia de la CNFR en las políticas públicas, especialmente después de la década de los 70 (Astori, 1979; Panizza, 1988; Piñeiro, 1991; Riella, 2003). La CNFR y las otras organizaciones que tienen como base social la pequeña producción familiar, siempre han tenido dificultades para unificar su acción y

presentarse como un interlocutor válido frente a los distintos gobiernos del país durante el siglo XX. Si bien a la salida de la dictadura se intentó crear una organización en el marco de la Comisión Nacional Programática (CONAPRO) que diera visibilidad a la heterogeneidad de intereses en el sector, esta experiencia rápidamente fracasó justamente por falta de apoyo de las organizaciones gremiales que se apoderaron de los espacios de intermediación con el gobierno y ocuparon directamente los puestos ministeriales (Piñeiro, 1985).

Durante las últimas décadas del siglo XX, si bien la representación de las grandes organizaciones ganaderas se vio debilitada por el surgimiento de otras organizaciones empresariales vinculadas a los rubros más dinámicos de la época, de igual forma la CNFR y las otras organizaciones que representan los actores subalternos no lograron mayores avances en su capacidad de presión y de su legitimación frente al Estado. Es en este escenario en el cual asume el nuevo gobierno progresista, cuyos principales líderes mantenían un vínculo importante con la CNFR y otras organizaciones de representación sectorial de los pequeños productores⁵.

Consideraciones metodológicas

Para profundizar en el discurso de la CNFR durante el primer gobierno de izquierda del país, el estudio se centró en el análisis de la agenda de la gremial a partir de documentos emitidos por la propia institución en el período 2005-2011⁶.

Las tres fuentes de información seleccionadas son: las transcripciones de los discursos de cierre de las Asambleas Anuales; "El Noticiero", publicación oficial de la gremial; y los Comunicados y Boletines Especiales. Estos últimos tienen como objetivo principal ahondar en temas de interés específico de sus agremiados y del sector, con el fin de mostrar la posición institucional frente a dicho asunto.

La Comisión Nacional de Fomento Rural y su relación con el gobierno progresista (2005-2011)

En este apartado se presentan los principales elementos que constituyen las prioridades para la CNFR, como representante de los intereses la agricultura familiar frente al nuevo gobierno. En este sentido, el análisis busca desentrañar los elementos centrales de sus reivindicaciones, sus principales preocupaciones institucionales y su

5 Ejemplo de ello es que el designado Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, tiene una larga producción científica sobre la agricultura familiar y los problemas agropecuarios nacionales que es de referencia para los dirigentes de la CNFR. También es relevante la designación del Ing. Agr. Martín Buxedas al frente de la Oficina de Política y Programación Agropecuaria (OPYPA) del MGAP, quien trabajó también junto a Astori en esta temática en la década del 80 desde el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) y realizó varios estudios para la propia CNFR.

6 Si bien la primera gestión del gobierno transcurrió entre 2005 y 2010, se ha considerado relevante la inclusión del 2011 a los efectos de observar la continuidad y/o cambio de la agenda institucional ante el cambio de gobierno.

visión sobre los procesos que repercuten en su relación con el Estado y sus instituciones y agencias vinculadas al sector agrario.

El análisis se presenta en función de tres ejes principales que a nuestro entender son los que articulan el posicionamiento y acción colectiva de la CNFR durante el gobierno progresista. El primero hace referencia al relacionamiento con el gobierno, el segundo al fortalecimiento de la gremial y el tercero a los principales temas de agenda de la CNFR.

Relacionamiento con el gobierno

En los siete años estudiados, el vínculo con el gobierno estuvo signado por la búsqueda de una forma y status de diálogo novedoso para la vida de la institución, basado en lograr la mayor legitimación y reconocimiento por parte del Estado como un agente privilegiado de intermediación de intereses con la agricultura familiar y la pequeña producción agropecuaria. Durante este periodo, que abarca dos administraciones, se pueden distinguir diferentes etapas en el relacionamiento entre la gremial y el gobierno.

En una primera etapa, las fuertes expectativas ante las promesas electorales, llevaron a que la gremial mostrara un explícito apoyo al gobierno entrante, como no sucedía desde hacía muchos años de distanciamiento entre la gremial y aquel “ideario batllista” que había alumbrado su fundación. Éste es el momento de mayor alineamiento entre la CNFR y el gobierno, en especial con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Ante la asunción del gobierno progresista, la CNFR mostró fuertes expectativas abriendo de forma explícita una carta de crédito importante hacia el nuevo gobierno nacional. Consecuentemente, ante el inminente cambio de gobierno, la gremial procura ubicarse en oposición al gobierno saliente. En este sentido, en el discurso de la gremial se evidencia su rechazo a la política económica que atravesó el país desde principios de los años noventa hasta la fecha, la cual –a su criterio– ha generado el más reciente principal efecto negativo en el agro nacional: la concentración y la extranjerización de la tierra. Estos procesos, han impactado directamente a los pequeños y medianos productores, su principal base de representación social.

“En los últimos años a partir de las políticas neoliberales aplicadas, se generó un marcado proceso de concentración y también de extranjerización de nuestras tierras, a costa de la desaparición de muchos pequeños y medianos productores”. (El Noticiero, N° 5, abril de 2005).

El cambio de gobierno y de los cuadros políticos y técnicos al frente de las políticas vinculadas al sector, generará fuertes expectativas en la CNFR. Desde la gremial se considera que este cambio genera una serie de oportunidades en tanto renueva la posibilidad de “convencer a los hombres del gobierno” de apostar a la CNFR como legi-

timo interlocutor entre el gobierno y los pequeños y medianos productores, calificando este momento como *"histórico"* para el país.

La CNFR ve con buenos ojos la renovación del equipo técnico político que el cambio de gobierno implica y celebra que los técnicos que ocuparán cargos de dirección de oficinas públicas vinculadas al sector sean *"viejos conocidos de la CNFR"*.

Este contexto favorable les permite avizorar mayor diálogo con el gobierno, lo que alimenta uno de los principales objetivos de la organización: legitimar y consolidar su posición como interlocutor válido ante el Estado "[se buscarán]... *más espacios para interactuar con quienes dirigirán el destino del sector y de la nación*". Este sentir de cambio político y coyuntura favorable, los impulsa a afirmar incluso que la función de la gremial también radica en articular programas públicos para el sector: *"...nos encontramos en una coyuntura más que favorable para transformarnos no sólo en interlocutores, sino también en ejecutores de los Programas dirigidos a los productores familiares"*. (El Noticiero, N° 5, abril de 2005).

Por otra parte, se menciona en los discursos de esta época otro efecto de las políticas de los gobiernos salientes que impactó negativamente en el sistema de la agricultura familiar, vinculado al sistemático debilitamiento del Instituto Nacional de Colonización (INC). Esto mantuvo a la CNFR en clara oposición a estas medidas por considerarlas perjudiciales para el productor familiar, en un intento de constituirse en los actores con el deber de 'defender' los intereses del agricultor familiar y la 'función social de la tierra'.

"CNFR, fiel al mandato de los Congresales del 45, enfrentó duramente estas intenciones, contando para ello con el respaldo de parlamentarios, otras gremiales afines y la propia UdelaR. Ya en el 2005 y con el país bajo un nuevo gobierno (...) la Mesa Ejecutiva reafirmó la necesidad de revitalizar el debate sobre la función social, el uso y la tenencia de la tierra". (El Noticiero, N° 6, setiembre de 2005).

La cita precedente expresa dos elementos presentes a lo largo del período de estudio del discurso de la gremial. Por un lado, la jerarquización de la capacidad de la institución de articular alianzas con sectores políticos, gremiales e incluso la Universidad de la República (UdelaR). Sobre esta capacidad de vínculo con otras instituciones se sustenta su reclamo fundamental: ser el legítimo representante de los intereses de los agricultores familiares. En segundo término, el fragmento evidencia cómo la CNFR apela a sus principios fundacionales: *"CNFR, fiel al mandato de los Congresales del 45, enfrentó duramente estas intenciones..."* como mecanismo reforzador de su discurso legitimador. En efecto, plantear *"...la necesidad de revitalizar el debate sobre la función social, el uso y la tenencia de la tierra"* constituye su interés de poner en Agenda un tema de vital importancia para la CNFR: el uso y tenencia de la tierra.

7 Por ejemplo, desde la gremial se ve como positiva la mencionada designación del Ing. Agr. Buxedas al frente de OPYPA - MGAP.

Cumplido el primer año de gobierno de izquierda, la institución reafirma su explícito apoyo a su gestión. Este apoyo se sustenta fundamentalmente en el fluido relacionamiento con diversos actores del nuevo gobierno, principalmente con las autoridades del MGAP y de los organismos e instituciones vinculados al sector. *“Con referencia a la actual administración, nobleza obliga reconocer que hemos establecido una comunicación muy fluida y que hemos logrado -siempre que lo estimamos pertinente- el contacto directo...”*. (Asamblea 91^a; año 2006).

Esta ubicación como *‘interlocutores válidos’* les permite exaltar su capacidad de diálogo y negociación como un valor diferencial de la institución. Hacia el año 2006 la institución también destaca que se han logrado algunos avances en la dirección de una Política Diferenciada para la Agricultura Familiar, lo que es entendido como una de las principales señales positivas del gobierno (El Noticiero, N° 7, abril de 2006). En ese año el MGAP aprueba su documento sobre lineamientos generales para la institucionalidad pública agropecuaria para el periodo 2006-2011, en el cual define a la agricultura familiar como población prioritaria⁸. Se crea un grupo de trabajo coordinado por la Oficina de Política y Programación Agropecuaria (OPYPA) para realizar un registro de Empresas y Productores. También en el 2006 se crea (por resolución ministerial) la *‘Unidad de Fomento de la Agricultura Familiar’* con el objetivo de coordinar, promover y articular el diseño e implementación de una estrategia de desarrollo para la agricultura familiar a partir de políticas sociales diferenciadas⁹.

El anuncio de la *“...formalización de una instancia específica con el objetivo de la instrumentación de las políticas específicas para la agricultura familiar”* alimenta las expectativas de la CNFR de obtener respuesta a su histórica demanda de políticas diferenciadas. Estas *“...señales positivas...”* reconocidas, durante el primer año de gestión del nuevo gobierno, se sustentan en una diferente concepción del rol de las organizaciones sociales en la gestión de programas públicos, y este cambio de rol de las organizaciones fortalece su capacidad de representación de –en términos de la institución- *la sociedad civil organizada*.

8 “La atención de este importantísimo sector social, cultural y económico con acciones aisladas e inconexas será sustituida por una estrategia global, conducente a apoyar sus iniciativas apuntando a su permanencia en el mundo rural y sostenibilidad como productores”. (Lineamientos estratégicos para la institucionalidad pública agropecuaria para el periodo 2006-11”. MGAP, 2006: 5). En ese marco se define a los *‘productores familiares’* (Resolución ministerial de julio de 2008) y se elabora un *‘Registro de Productores Familiares’* con el objetivo de delimitar claramente este grupo para la aplicación de políticas públicas y acciones diferenciadas para este sector. Una de las primeras medidas en base a este registro es la Ley 18.043 que recoge esta definición de productor familiar para la aplicación de un subsidio del 50% del aporte mínimo patronal al BPS (Sganga y otros, 2009).

9 La misma es integrada por cinco miembros: un Director nombrado por el Ministro, un miembro de OPYPA, un miembro del Proyecto Uruguay Rural, un miembro de la Junta Nacional de la Granja y un miembro el Programa de Apoyo a la Productividad y Desarrollo de Nuevos Productos Ganaderos. Para el cumplimiento de sus cometidos la Unidad de Agricultura Familiar coordinará sus acciones con las Unidades Ejecutoras, Proyectos, Organismos, Entes e Institutos de la Institucionalidad Pública Agropecuaria y podrá convocar a participar a otras instituciones que considere convenientes.

“Nuestra Institución viene reivindicando históricamente la necesaria participación de la sociedad civil organizada, en la ejecución de los programas gubernamentales y la necesidad de que los mismos se transformaran en herramientas para el fortalecimiento de las organizaciones y no a la inversa, como lamentablemente se había venido constando en las anteriores administraciones”. (El Noticiero, N° 7, abril de 2006).

Esta consolidación de la CNFR como interlocutor y representante de los agricultores familiares del país se basa no sólo en el reconocimiento que le brinda el gobierno sino también en su capacidad de articulación con otras instituciones sociales, gremiales y educativas. La gremial destaca que realiza un esfuerzo permanente tendiente a concretar acuerdos con otras instituciones vinculadas al sector agropecuario de diversa índole, como gobiernos municipales del interior, Universidad de la República (UdelaR), Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y otros Organismos e Instituciones lo que según la propia CNFR les permite *“...concretar ambiciosos proyectos de desarrollo local y la reactivación y fortalecimiento de Sociedades de Fomento Rurales y Cooperativas ubicadas en diversos rincones de nuestro país rural”.* (Asamblea 93^a; año 2008).

En esta primera etapa de relacionamiento de la gremial con el gobierno, que si bien como se ha mostrado se caracteriza por la aprobación explícita a las primeras medidas del mismo hacia la agricultura familiar, también pueden apreciarse algunas señales de discrepancia de la CNFR con las autoridades que conducirán paulatinamente a una segunda etapa marcada por el distanciamiento de las posturas del gobierno.

La principal preocupación de la gremial se origina en los primeros pasos que el gobierno comienza a dar para la instalación de la Reforma Tributaria, proceso que marca la primera discordancia con la política que impulsa. A su entender, con estas medidas el gobierno entra *“...en franca contradicción con su permanente prédica a favor del movimiento cooperativo, el asociativismo y el propio proyecto de Uruguay Productivo”*, (El Noticiero, N° 7, abril de 2006), el cual sólo es posible con la participación de la agricultura familiar y el movimiento cooperativo del país.

Es así que hacia 2006 comienza a evidenciarse cierto descontento ante la forma en que el gobierno está manejando algunos temas clave del sector, en particular, aquellos temas en los que la CNFR no ha sido considerada pese a ser un legítimo interlocutor. Por ejemplo, ante la presentación de la propuesta del proyecto de “Uruguay Productivo”, la gremial lamenta no haber sido convocada y enterarse del mismo a través de la prensa *“... ya que incomprensiblemente, para muchos de estos actos de anuncios y promoción de propuestas, las autoridades nacionales siguen convocando a las “grandes Cámaras”...”.* (El Noticiero, N° 7, abril de 2006).

Este desconocimiento de la gremial y por tanto de los productores familiares del país, genera a su juicio incertidumbre en el sector y falsas expectativas, a la vez que lleva a la CNFR a adoptar una postura más confrontativa y menos propositiva con el gobierno.

“Lo que es más grave aún, es que algunas de las propuestas que se quisieron y se quieren aplicar, han provocado gran preocupación en el sector, no sólo por lo inadecuadas en algunos casos, sino también por las incertidumbres que generan en otros; lo que nos ha llevado a desarrollar una gestión gremial mucho más enfocada hacia “la defensiva” que a la “propuesta”, lo que de por sí nos parece muy grave”. (El Noticiero, N° 9, diciembre de 2006).

Otro de los procesos que suscitan la atención de la gremial es la Reforma del Estado que tiene un lugar destacado en la agenda del gobierno en esos años y que es una oportunidad para que la CNFR exprese su posición sobre el rol del Estado, sus funciones y cometidos. En este tema, *‘muy relevante’* a su criterio, la gremial vuelve a resaltar la necesidad de la participación de la sociedad civil organizada aportando propuestas para evitar que *“...se aplique la irracional fórmula de la “tijera”, cortando o recortando “sin ton ni son”, cosa que puede implicar serias limitaciones para la ejecución de actividades ineludibles del Estado”.* (El Noticiero, N° 8, setiembre de 2006).

Es pertinente destacar que, a diferencia del discurso tradicional de las organizaciones rurales representantes de los estancieros (ARU y FR), en la concepción de la CNFR, el carácter de *impostergable* de la reforma estatal, no sólo se encuentra en la disminución de costos o la aplicación de recortes *“sin ton ni son”*, sino que aboga por una reformulación de sus roles y objetivos.

“...Creemos que es impostergable asumir esta reforma estatal, con la finalidad de disminuir esa pesada carga que todo el país productivo soporta, pero no sólo en base a los recortes, sino a partir de una adecuada redefinición de sus roles y una eficaz y eficiente ejecución de los mismos”. (El Noticiero, N° 8, setiembre de 2006).

Hacia el año 2007, y luego de los acuerdos y apoyos a la gestión gubernamental, puede apreciarse una segunda etapa en el relacionamiento de la gremial con el gobierno, signado por el *‘distanciamiento’* o *‘desencanto’*. La CNFR comienza a articular un discurso, que si bien se encuentra alejado de la crítica confrontativa, empieza a evidenciar los primeros matices en cuanto a que no se logran los compromisos asumidos por el gobierno en la campaña electoral y que afectan directamente los intereses de la gremial.

Ejemplo paradigmático de ello es la no concreción de un antiguo reclamo de la institución: una Política Diferenciada para la Agricultura Familiar. A lo largo del período es posible identificar varias políticas específicas para el sector familiar, en concreto, a través de la ejecución de acciones, programas y proyectos puntuales y de corto alcance, sin lograr consolidarse en una verdadera política específica dirigida a la producción familiar. En este punto la gremial marcará su posición de disonancia con estas acciones aunque reconocerá siempre los avances obtenidos en la materia. Se desarrollaron hacia 2008 algunas acciones del gobierno que provocaron una enérgica reacción de la CNFR, como la crítica sobre la forma *“inconsulta”* con que el gobierno llevó adelante el proceso de descentralización en el cual son creados el Consejo Agropecuario Nacional,

los Consejos Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo Rural¹⁰. Para la CNFR, estas acciones amenazaron con socavar la representatividad de la institución, uno de los puntos centrales de su discurso en el último año, a la vez que ponen en duda el propio proceso de descentralización que se quiere implementar. La discrepancia fundamental no es con la propuesta de descentralización en sí, sino con la forma en la cual se llevó adelante.

“Justo es reconocer que en su momento la CNFR y las otras gremiales nacionales del sector, hicieron saber de su discrepancia, no con la propuesta de descentralización en sí, sino por la forma inconsulta con que la ley de creación de dichas instancias fue aprobada y por el desconocimiento que se hacía en su integración, del rol que pueden cumplir en el debate de políticas para el sector (...) ¿Quedará algún trasnochado que dude sobre nuestra representatividad? Sin participación de la sociedad civil organizada no habrá descentralización”. (El Noticiero, N° 12, abril de 2008).

El otro aspecto problemático del relacionamiento con el gobierno refiere a los “desencuentros” de las autoridades del MGAP y la gremial en casi todo el periodo. La gremial señala que con el primer Ministro las discrepancias surgieron “como consecuencia de medidas tomadas en conjunto con otras gremiales” dejando de lado a la CNFR mientras que con el segundo Ministro los desencuentros se basaron en “su desconocimiento de acuerdos mayoritarios entre las gremiales involucradas y a partir de ello su incomprensible postergación a CNFR en la renovación de la Junta del INIA”. (Asamblea 95^a; año 2010)¹¹.

Pero la dificultad para “encausar las relaciones institucionales con las autoridades del MGAP” se debió no sólo a las diferencias con aspectos políticos con los Ministros, sino también a discrepancias en la ejecución de proyectos. En todo caso lo que está en evidencia refiere a los intereses del MGAP de evitar el relacionamiento con instituciones de segundo grado como la CNFR y por tanto a un “interés especial en relacionarse directamente con las entidades de base”. (El Noticiero, N° 12, abril de 2008).

Sobre el final del período de estudio se observa una tercera etapa en el relacionamiento entre la gremial y el gobierno que puede catalogarse como de ‘realineamiento’. El contexto de campaña electoral brinda el marco para renovar las “esperanzas”, en palabras de la CNFR, acerca de la profundización de los planes desarrollados por el gobierno para el desarrollo rural y en el discurso de la gremial vuelven a mencionarse los logros obtenidos por éste.

10 El Sistema Nacional de Descentralización creado por la Ley de “Descentralización y coordinación de las políticas agropecuarias con base departamental” (Ley 18.126) de 2007, promueve la descentralización en el territorio y la articulación interinstitucional a nivel territorial a partir de la creación de una nueva institucionalidad: Dirección Departamental, Mesas de Desarrollo Rural (participación ciudadana), Consejos Agropecuarios Departamentales (participación de institucionalidad pública local), Consejo Agropecuario Nacional (institucionalidad pública nacional).

11 Ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca en el periodo: José Mujica (03/2005 a 03/2008); Ernesto Agazzi (03/2008 a 10/2009); Andrés Berterreche (05/2009 a 03/2010) y Tabaré Aguerre (desde 03/2010).

Asimismo, la designación de un nuevo Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca permitió reencausar las expectativas de la gremial con las propuestas del gobierno. Las cualidades personales y políticas del Ministro posibilitaron recomponer el diálogo y la confianza de la gremial con sus interlocutores del gobierno, “... *ya que en forma permanente y en la medida de sus posibilidades, acompañó todas y cada una de nuestras actividades y mantuvo un franco y fructífero intercambio directo con los integrantes de nuestro Consejo Directivo y la dirigencia de nuestras entidades de base*”. (El Noticiero, N° 15, mayo de 2009).

Nótese en la cita precedente, que el elemento distintivo respecto al nuevo Ministro refiere a un trato “*franco y fructífero*” y “*directo con los integrantes de nuestro Consejo Directivo*”, lo que parece haber cambiado la percepción de la gremial sobre las expectativas en el relacionamiento con el MGAP.

Es la vinculación directa, “*esos contactos*”, lo que permitió a la gremial evidenciar su capacidad de elaboración de propuestas y posicionarse como una institución abierta, horizontal y propositiva. De esta forma, el Ministro pudo constatar que la “*CNFR no es una organización dirigida por una élite de dirigentes más o menos iluminados, sino que detrás de la misma hay una legión de productores provenientes de entidades ubicadas en todos los rincones de nuestro país*”. (El Noticiero, N° 16, diciembre de 2009).

Ya en el escenario de una nueva campaña electoral, la CNFR asumirá una posición de respaldo a la gestión del saliente gobierno, destacando los avances realizados en materia de atención al pequeño y mediano productor.

“...*Debemos reconocer que en la presente administración no sólo se fortaleció – aunque no en la medida de lo necesario- al INC; sino que también se aplicaron en forma diferenciada algunos proyectos y programas del MGAP; se encontraron salidas al crónico endeudamiento del sector con apoyos preferenciales para los pequeños y medianos productores; se aplicó una estrategia diferencial en las apoyaturas para enfrentar los efectos de las catástrofes climáticas y se realizaron importantes esfuerzos para promover los agrupamientos de pequeños productores*”. (El Noticiero, N° 15, mayo de 2009).

Este conjunto de acciones mencionadas evidencia la sintonía de las medidas implementadas por el gobierno con la visión de la CNFR de aplicar una “*estrategia diferencial*” con los pequeños productores. Estos elementos refuerzan la idea de que “*se están dando pasos*” hacia una política para el sector que trascienda las acciones, programas y proyectos que se ejecutan de forma aislada, hacia una forma más articulada en una verdadera política diferenciada dirigida al productor familiar.

Fortalecimiento institucional: la revitalización de su base social y la reactivación de la participación

En el periodo estudiado, el establecimiento de un vínculo y diálogo más fluido con el gobierno, y consecuentemente la creciente capacidad de interlocución que irá adquiriendo la CNFR en las esferas de decisión, genera en la gremial un proceso de

fortalecimiento institucional. Ello se refleja en la revitalización de la participación de su base social y en el proceso de reactivación de muchas sociedades de fomento de base y la apertura de otras nuevas. En efecto, la conquista de nuevos espacios de relacionamiento con el gobierno, gremiales del sector y otras instituciones fortalecen las capacidades de acción colectiva de la CNFR.

Es hacia finales del primer año de gobierno que comienzan a autopercebirse cambios en las características de la participación de sus bases sociales, dada la creciente participación de mujeres y jóvenes en las diversas actividades de la gremial. Como se refleja en la siguiente cita, ello genera la convicción de que efectivamente la CNFR es representativa de la agricultura familiar del país.

“Un capítulo especial para la numerosa y hasta sorprendente presencia de mujeres y jóvenes y por el protagonismo que asumieron en todas y en cada una de las actividades. Con esta presencia especial y tan dinámica, revitalizamos nuestro sentimiento de que allí estaba representada la AGRICULTURA FAMILIAR”. (El Noticiero, N° 6, setiembre de 2005).

En el año 2007 el discurso de la CNFR se orienta a destacar los logros de la institución en términos de la revitalización de su base social, expresada en *“el constante -y diríamos que hasta sorprendente- crecimiento de nuestro padrón social”* y en *“la llegada de una legión de nuevos dirigentes y líderes potenciales”*. (El Noticiero, N° 11, diciembre de 2007).

El crecimiento del padrón social permitió aumentar la base social en cantidad y también en cuanto a su composición, integrando una mayor diversidad de grupos a partir de la conformación y/o reactivación de nuevas Sociedades de Fomento Rural y Cooperativas Agropecuarias, extendiendo su influencia a aquellas zonas donde tradicionalmente no tenía tanta cobertura. En palabras de la gremial, el incremento de las entidades afiliadas tiene *“el “valor agregado” de que buena parte de las mismas se encuentran ubicadas en el basalto superficial y en el noreste del país, e integran mayormente a pequeños productores ganaderos y en algunos casos asalariados rurales...”*. (El Noticiero, N° 18, octubre de 2010).

Para la CNFR este proceso *“Indudablemente aporta y mucho a la indiscutida representatividad de nuestra Institución”*. (El Noticiero, N° 14, diciembre de 2008). En este escenario de revitalización, la gremial fortalece sus reclamos de ser reconocidos como legítimos representantes de los productores familiares y consecuentemente resaltan su capacidad de constituirse en interlocutores ante el Estado y ser representantes de la *“la sociedad civil organizada”*.

Asimismo, este proceso de crecimiento en su padrón social, mayor representatividad, autonomía y capacidad de negociación, ha generado incluso que la CNFR pueda ganar espacios de interacción en ámbitos que históricamente estaban reservados para otras instituciones. Ejemplo de ello son las acciones llevadas adelante para integrar la

junta directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC), espacio históricamente dominado por las organizaciones ganaderas tradicionales.

El fortalecimiento de su base de representación es percibido por la gremial como consecuencia de una política institucional orientada a intensificar el relacionamiento con su base social y por tanto, es producto del *‘acierto en la estrategia definida por el Consejo Directivo desde tiempo atrás’*. (El Noticiero, N° 11, diciembre de 2007). De hecho, la CNFR destaca haber diseñado de forma deliberada una estrategia de salida *“hacia sus bases”* que incluyó actividades varias como el desarrollo de sesiones del Consejo Directivo en el interior, la formación, capacitación y jornadas de trabajo con sus instituciones afiliadas y masivas Asambleas Anuales. Como relata la gremial:

“...Esto no surge por generación espontánea, esto es el resultado del cumplimiento cabal de la estrategia definida institucionalmente, para profundizar el contacto directo con los productores familiares, tratando de llegar en forma muy especial a aquellos que se encuentran en los lugares más apartados y que subsisten superando, además de las dificultades que tienen todos nuestros productores familiares, la situación de aislamiento por carencias en comunicaciones, caminería, energía eléctrica, salud, educación, etc.”. (El Noticiero, N° 11, diciembre de 2007).

En este periodo de referencia, el Consejo Directivo de la CNFR promovió cambios en la organización de las Asambleas Anuales y sesiones de su Consejo Directivo tendientes también a incrementar la participación de los dirigentes en estas actividades. Esta *“línea estratégica de trabajo definida por el Consejo Directivo”* implicó que a partir del año 2007 se realizaran sus sesiones en diferentes regiones del país, y en forma ampliada para permitir la participación de los dirigentes de las entidades de base. Asimismo, se cambió el formato de las sesiones pasando a tener más de dos días de duración lo que a juicio de la CNFR *“permitió fortalecer el grupo a partir de los gratos momentos de convivencia, así como también por su formación y capacitación en los talleres grupales con el objetivo de analizar los temas de interés coyuntural”*. (Asamblea 95ª; año 2010).

La presencia del Ministro del MGAP y otras autoridades nacionales en estos ámbitos no sólo dan cuenta de la efectividad de estos cambios sino también son destacados como elementos de jerarquización de estos espacios.

“Nos consta además que los sucesivos Ministros que nos han acompañado en dichas instancias, han tenido la oportunidad de “conocer desde adentro” a la representatividad de CNFR y a la vez comprobar que nuestras propuestas, (...) provienen de un permanente y fermental proceso participativo...”. (Asamblea 95ª; año 2010).

Por otra parte, el incremento de la base social impone a la gremial un nuevo *“desafío”* y la necesidad de traducir este apoyo, compromiso y participación de su base social en resultados concretos. Para la CNFR, una forma de lograr resultados tangibles es promover la participación activa de la dirigencia de las entidades de base en las recientemente creadas Mesas de Desarrollo Rural. La participación en estos espacios

supone un desafío tanto para la gremial como para el propio proceso de descentralización impulsado desde el gobierno, en tanto *“Si la gente no constata rápidamente los resultados de esta participación, a la vista de experiencias anteriores negativas, se va a ir desgastando y va a dejar de concurrir, con lo que lamentablemente no habrá descentralización posible y estaremos ante un nuevo intento fracasado a poco de nacer”*. (El Noticiero, N° 11, diciembre de 2007).

En este sentido, el fortalecimiento institucional de la gremial pone sobre la mesa la necesidad de obtener *“resultados de esta participación”* y trascender el discurso meramente reivindicativo, retroalimentando el *“espíritu propositivo”* que la institución pretende imprimir en su accionar colectivo.

Finalmente, cabe señalar que este contexto de rebrote participativo no sólo ensancha su base de representación social, sino que además incrementa la legitimidad de la institución en la negociación pública y por tanto, potencia las capacidades de accionar colectivo de la institución. Permite mayores *“libertades”* de expresar aciertos o discrepancias con el accionar de otros actores, entre ellos, el gobierno.

“(...) Nadie podrá reprochar que nos limitamos a la mera reivindicación y a la crítica, ya que en forma sistemática y fieles a la tradición de nuestra CNFR, acompañamos y destacamos lo que se estaba haciendo bien desde nuestro Gobierno Nacional, así como también señalamos nuestra discrepancia con sus desaciertos”. (El Noticiero, N° 14, diciembre de 2008).

La construcción de una agenda propia: la problemática de la tierra y la política diferenciada para la producción familiar

Como toda organización gremial, uno de los principales ejes de su accionar se centra en la construcción de una agenda propia con temas y reclamos de su interés. En el periodo analizado en particular, y en función del estrecho vínculo entre la CNFR y el gobierno progresista como se ha mostrado, la elaboración de una agenda propia se vuelve una necesidad imperiosa que permita trascender la relación con el gobierno y reforzar los reclamos históricos de la gremial que no habían sido debidamente atendidos.

Si bien la agenda de la gremial en el periodo comprende una variedad de temas que abarcan aspectos como reforma tributaria, endeudamiento, atraso cambiario, apertura comercial, además de los ya mencionados, en este apartado se desarrollan los dos temas que tienen un tratamiento especial en la agenda de la CNFR, en tanto ocupan mayor espacio en los documentos analizados y, como se ha visto en los apartados anteriores, son articuladores del discurso de la institución en el periodo de referencia.

Uno de los principales ejes de la agenda es la demanda de una política diferenciada para el sector de la agricultura familiar. La gremial elaboró un documento *“Políticas Diferenciadas para una Agricultura Familiar al Servicio del País”* que, según la propia gremial:

“Se trata de un ambicioso documento que abarca los aspectos productivos y todo lo que tiene que ver con la dignificación de las condiciones de vida de los pobladores de nuestro medio rural, elementos ineludibles si se pretende configurar una propuesta de desarrollo inclusivo”. (El Noticiero, N° 16, octubre de 2009).

Como se ha mencionado, la necesidad de una política diferenciada para la agricultura familiar fue uno de los principales puntos de acuerdo con el gobierno entrante. Es por ello que la CNFR apelará con frecuencia al compromiso del gobierno con el desarrollo de la producción familiar, compromiso asumido desde el periodo electoral, cuando el entonces candidato a la Presidencia, Dr. Tabaré Vázquez, afirmaba que “comparte plenamente y suscribe el documento de ‘Políticas Diferenciadas para una Agricultura Familiar al Servicio del País’ que ustedes nos hicieron llegar oportunamente”. (El Noticiero, N° 13, setiembre de 2008).

Desde finales de 2007 la gremial afianzó un discurso orientado a destacar los elementos distintivos del reclamo de la CNFR, centrado en la demanda por un paquete de propuestas específicamente diseñadas para el desarrollo rural a través de la Agricultura Familiar. En este sentido, la no consecución de una política diferenciada para el sector se transformó en un elemento de permanente referencia en los reclamos de la institución.

“Las Políticas Diferenciadas: una deuda pendiente y una oportunidad perdida. Es con ese ánimo que planteamos en presencia del Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, nuestra preocupación e incluso nuestra desazón por el hecho de que la actual Administración de Gobierno, no obstante contar con mayorías propias, se había “quedado corta” en la definición e instrumentación de las tan anunciadas Políticas Diferenciadas para la producción familiar”. (Asamblea 93ª, año 2008).

Este reclamo es el elemento reivindicativo central de la CNFR y la principal deuda que el gobierno tiene con la institución, por lo que se constituye en un tema de relevancia en la vida de la gremial que continuamente es puesto sobre la mesa.

El 2009 está marcado por la trascendencia de la nueva campaña electoral. Este suceso está presente en el accionar de la institución de forma que los temas de histórico reclamo, y con un lugar destacado la necesidad de políticas diferenciadas para la Agricultura Familiar, aparecerán nuevamente en el tapete y serán considerados como asuntos clave que los partidos políticos deberán satisfacer, o al menos proponer, en sus políticas para el sector. En este marco, el documento elaborado por la CNFR es enviado a los distintos partidos políticos para que sea puesto en consideración en sus programas de gobierno.

Pero más allá de la importancia de integrar este tema permanentemente en la agenda política, CNFR advierte sobre la distancia entre las promesas electorales y la efectiva ejecución de las acciones y medidas de fomento de la producción familiar. En palabras de la gremial:

“A lo largo de la historia se ha reiterado el hecho de que si bien la producción familiar “aparece” en los discursos de campaña preelectoral y en muchos casos con bastante notoriedad, lamentablemente después esta “importancia” no es llevada a la práctica en los hechos, mediante la aplicación de verdaderas políticas de fondo dirigidas al sector”. (El Noticiero, N° 15, mayo de 2009).

Un segundo eje que articula los reclamos de la CNFR refiere a la problemática de la concentración y extranjerización de la tierra. El tema inclusive fue de tanta relevancia para la institución que lo consideró *“el centro de nuestra acción gremial en los últimos tiempos”*. Es en este aspecto donde la CNFR encontrará uno de sus puntos de mayor desencuentro con las políticas del gobierno y donde se impone la necesidad de una agenda propia con contenidos de su interés.

Esta problemática tiene un lugar destacado en el discurso de la gremial, ya que el fuerte proceso de concentración y extranjerización de la tierra que ha vivido el país en los últimos años, ha sido *“a costa de la desaparición de muchos pequeños y medianos productores”*. (El Noticiero, N° 5, abril de 2005). Estos procesos se vinculan al crecimiento de *“la gran empresa agropecuaria, a partir de la evolución de la forestación y la expansión del monocultivo”* (El Noticiero, N° 13, setiembre de 2008), lo que genera a su entender serios perjuicios para el productor familiar y sus capacidades de reproducción. Si bien reconocen que estos procesos no fueron originados con el gobierno progresista, destacan que se han visto acentuados en estos años sin tener una respuesta adecuada por parte del gobierno.

Pero los efectos negativos de la extranjerización y concentración de la tierra no sólo afectan a los productores familiares sino que también tienen un impacto negativo sobre el país en su conjunto. Para la gremial, estos procesos entran además en franca contradicción con el modelo de desarrollo productivo que se pretende impulsar desde el gobierno, por lo cual *“Nos resistimos a creer que estas comprometidas situaciones en rubros tan importantes, formen parte del proyecto de “Uruguay Productivo”*. (El Noticiero, N° 13, setiembre de 2008).

Por tanto, desde la CNFR se insiste en la *“urgente necesidad de que nuestras autoridades nacionales tomen conciencia del asunto y actúen en consecuencia, legislando con la premura necesaria, ya que la tenencia de la tierra está muy relacionada con la soberanía nacional y con la sustentabilidad del Uruguay Productivo”*. (92ª Asamblea Anual, año 2007).

En este sentido, promover la agricultura familiar y considerar las propuestas que la propia CNFR ha realizado en reiteradas oportunidades, se encuentra en la línea de la visión de Uruguay Productivo y Uruguay Social que promueve el gobierno¹².

12 Ello es destacado desde el propio gobierno quien reconoce que la “inmensa mayoría de las propuestas contenidas en el documento” elaborado por la gremial están presentes en su programa de gobierno. “En particular, las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la Agricultura Familiar, desde una perspectiva integral e integradora, ocupan un sitio relevante en el desarrollo de nuestros

Lo que está en juego para la gremial es una discusión más de fondo que tiene que ver con el modelo de desarrollo del país que el gobierno quiere impulsar y la pregunta subyacente es sobre cuál modelo de país productivo se desea impulsar.

¿El modelo de la gran empresa, concentrador (en muchos casos extranjerizante) y excluyente, o el de la agricultura familiar que supone equilibrio demográfico, generación de más empleo y productividad por unidad de superficie, respetuoso de los recursos naturales y como garantía de la soberanía alimentaria?». (El Noticiero, N° 14, diciembre de 2008).

Indudablemente, desde la gremial, la respuesta a esta pregunta es el fortalecimiento de las formas de producción familiar¹³. Ello permitirá un “verdadero desarrollo con inclusión de los más débiles”. (El Noticiero, N° 15, octubre de 2009).

Según la visión de la CNFR, la agricultura familiar encuentra hoy un contexto excepcionalmente favorable para su desarrollo, lo que la posiciona en un lugar destacado para el desarrollo del agro nacional.

“La actual coyuntura nacional, regional –y por qué no internacional–, con una creciente e insatisfecha demanda de alimentos; implica una excelente oportunidad para la Agricultura Familiar (AF), reconocida universalmente como alternativa sustentable para la producción de alimentos y la soberanía alimentaria”. (El Noticiero, N° 13, setiembre de 2008).

En efecto, el discurso de la CNFR encontrará sustento en un modelo de desarrollo agrario donde la “sustentabilidad alimentaria, conservación de los recursos naturales, equilibrio demográfico y reducción de la pobreza” aparecen como objetivos plausibles de obtenerse a través de la agricultura familiar. Es a estos productores que ‘resisten’ los embates de las formas de producción a gran escala, vinculadas a empresas transnacionales, que debe dirigirse el apoyo del gobierno.

“Aún quedan miles de pequeños y medianos productores familiares que aferrados con uñas y dientes a la tierra, han venido superando con enormes sacrificios estos desafíos de la desigual lucha contra la gran empresa por la tenencia de la tierra, agravados con las inclemencias climáticas cada vez más frecuentes y severas. Muchos de ellos ya están al límite de sus posibilidades, por lo que es urgente generar políticas de fondo para respaldarlos, ya que el país no ofrece otras alternativas para ellos”. (El Noticiero, N° 15, mayo de 2009).

Ejes Uruguay Productivo y Uruguay Social”. (El Noticiero, N° 13, setiembre de 2008).

13 Es importante señalar que los reclamos de la CNFR no pasan por erradicar el modelo del Agronegocio, sino que se demanda establecer límites a este tipo de emprendimientos. Y al mismo tiempo, diseñar políticas que respalden al agricultor familiar. “No pretendemos demonizar a los grandes emprendimientos ni a la inversión extranjera en el sector, a los que consideramos como un aporte indiscutible al crecimiento. Nuestro planteo pasa por exigir el ineludible rol que el Estado debe cumplir, para que el vertiginoso crecimiento de esas grandes empresas no comprometa la sobrevivencia de las empresas familiares, tal cual se ha venido constatando en estos últimos años”. (El Noticiero, N° 15, octubre de 2009).

En síntesis, los principales elementos articuladores de una Agenda propia de reclamos y temas de interés para la CNFR se refieren a la construcción de un modelo de desarrollo rural con énfasis en la producción familiar como elemento clave. La construcción de un discurso que rescate y jerarquice al productor familiar frente a los avances del modelo del agronegocio exportador, se constituye en el elemento más radical en el reclamo de la gremial.

Consideraciones finales

La llegada del Frente Amplio al gobierno nacional con un discurso de nuevas políticas orientadas hacia una concepción integral del desarrollo rural, significó para la CNFR la posibilidad de adquirir un renovado rol de interlocución y articulación con el gobierno.

En efecto, una significativa parte del discurso oficial de la institución se dedica a resaltar las capacidades de la CNFR de transformarse en un actor fundamental como co ejecutor y articulador de políticas y programas públicos orientados al sector. De hecho, durante el período analizado la institución fue ganando terreno en su capacidad negociadora y de articulación con el Estado, lo que se tradujo en una activa participación en los diversos programas y acciones destinados al sector, permitiendo a la gremial avanzar en su intención de legitimarse y consolidarse públicamente como un actor de importancia en el escenario de las organizaciones sociales agrarias.

El relacionamiento estuvo centrado en tres ejes fundamentales. Primero, el reconocimiento desde el Estado de la CNFR como un actor de significación en el escenario rural recuperando el protagonismo que gobiernos anteriores habían intentado invisibilizar de forma deliberada. Segundo, durante este primer gobierno de una coalición de partidos de izquierda la gremial protagonizó una creciente participación en instancias estatales recuperando y ampliando sus representaciones en varios espacios estatales. Tercero, como producto de estos dos elementos anteriores, se produce un notorio fortalecimiento de su legitimidad institucional, en tanto logran presentarse públicamente como representantes nacionales de los intereses de la producción familiar en el agro nacional.

La coyuntura política favorable estimuló la creación y reapertura de Sociedades de Fomento Rural y Cooperativas Agrarias, lo que significa una gran ebullición participativa en la vida de la institución¹⁴. La conjunción de estos elementos generó un efecto de revitalización y fortalecimiento de la institución, que se evidenció en un histórico incremento en su base de representación social. Durante todo el gobierno progresista ha habido un refloreamiento de la vida social de la gremial, esta etapa refiere a

14 A partir del año 2005 se produce un 'fuerte reflote' de organizaciones de productores y revitalización de las sociedades de fomento en diferentes partes del país, mediante la acción estatal principalmente a través de la redefinición del Programa Uruguay Rural del MGAP que brindó apoyo socioorganizacional, financiero y subvención de servicios de asistencia técnica y extensión rural interdisciplinaria a estas organizaciones.

la reactivación de la participación de sus bases y un incremento significativo en sus instituciones afiliadas. En efecto, la conquista de nuevos espacios de relacionamiento con el gobierno fortaleció las capacidades de acción colectiva de la gremial. Además una estrategia institucional de mayor acercamiento con sus bases sociales a través de una apertura de la institución basada en visitas al interior, jornadas de trabajo y masivas Asambleas significó un proceso de revitalización de la gremial y sus bases de representación social.

Estos logros generales se dan a lo largo de un período que tiene diferentes puntos de inflexión en torno al relacionamiento con el gobierno, y es importante comprender las características de cada uno de ellos para ver en qué circunstancias fueron contribuyendo a estos logros generales.

Como ya se mencionó, al comienzo del período de análisis (2005) la llegada al gobierno nacional del Frente Amplio significó un momento de crecientes expectativas de la CNFR sobre la orientación que el nuevo gobierno podría imprimir al sector. El gobierno progresista había indicado como uno de sus principales puntos programáticos la implementación de políticas públicas con una concepción integradora del desarrollo rural. Por esta razón, desde el comienzo del gobierno se puede encontrar una primera etapa de alineamiento muy fuerte entre la CNFR y el gobierno en torno a las propuestas de este último. En efecto, la propuesta de incluir como protagonista del desarrollo rural a la producción familiar fue muy bien recibida por la gremial. Es por ello que esta gremial procuró inicialmente ubicarse como interlocutor válido y como necesario co ejecutor de diversas políticas públicas y programas para el sector. Ciertamente, el relacionamiento con el gobierno mostró, desde su inicio, un vínculo renovado y fortalecido.

A mediados del período, luego de esta etapa inicial que se puede llamar “alineamiento” y que significó la aprobación explícita de la gremial sobre la llegada del nuevo gobierno y sus primeras acciones de conducción, se identificó un momento de “distanciamiento” o “desencanto” con el gobierno producido por la lentitud en la cual se procesaban las propuestas electorales que afectaban directamente los intereses de la gremial. Comienzan así a generarse matices entre la CNFR y el gobierno nacional, referidos a la forma de conducción del gobierno sobre asuntos concernientes al sector y, especialmente, en las señales de retroceso respecto a los compromisos electorales asumidos sobre las políticas diferenciadas para la producción familiar. Este distanciamiento se materializa en varios elementos claves: el proceso de descentralización que atravesó el MGAP y el proceso de Reforma Tributaria que comenzó a gestarse y, lo que es más importante, las claras señales de falta de avances en la concreción de un compromiso electoral que había asumido el gobierno: una Política Diferenciada para la Agricultura Familiar.

Este momento evidenció la necesidad institucional de marcar una Agenda propia de temas de interés que trascendieran la relación con el gobierno y logaran obtener los reclamos históricos que no se habían concretado. Se identifican dos elementos que la gremial destacó con insistencia: por una parte, la CNFR buscó instalar en la discusión

pública el proceso de transformación sobre los factores productivos que ha vivido el país en los últimos años y que tiene que ver con el cambio en la estructura de posesión y uso de la tierra. Por otra parte, la gremial pretendió colocar en su Agenda y en el debate público, la demanda por un paquete de propuestas específicamente diseñadas para el sector de la agricultura familiar.

El uso y tenencia de la tierra tiene un vínculo estrecho con los productores familiares no sólo en sus efectos económicos sino también en lo que la CNFR denomina como “la función social de la tierra”. La institución advirtió constantemente sobre el reciente, pero fuerte, proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se ha experimentado en el agro nacional en los últimos años. Éste es un tema sensible para la institución, dada la importancia que este factor productivo tiene para este tipo de producción y el vínculo con el desarrollo de la agricultura familiar, ya que esto constituye parte central del proceso de consolidación del agronegocio a gran escala. Este proceso sumado a los cambios en el uso de la tierra, son los “disparadores” para construir un discurso de jerarquización de la agricultura familiar como elemento clave para el desarrollo rural.

El otro elemento central en la Agenda de la CNFR es la demanda por un paquete de propuestas específicamente diseñadas para el desarrollo rural a través de la Agricultura Familiar: Política diferenciada para el Productor Familiar. Como hemos mencionado, este reclamo se presenta como una “necesidad” del sector. Es sin dudas “el motor” de la acción colectiva de la gremial, y ha sido la principal propuesta que la CNFR ha presentado al gobierno. A pesar de haber sido “aprobada” durante la campaña política del Frente Amplio, nunca logró concretarse, por lo que se constituye en la principal demanda pendiente del gobierno.

Finalmente, el período cierra con un “relineamiento” entre la gremial y el gobierno sobre sus intereses y apoyo, en el marco de un nuevo período electoral y la superación de las diferencias coyunturales entre ambos actores. Sobre finales del período, el vínculo con el MGAP era de explícita aprobación, y las diferencias observadas un tiempo atrás parecieron superarse ante la integración de nuevas instancias de negociación, la generación de soluciones ad-hoc a problemáticas de su sector y las exoneraciones logradas en el nuevo marco tributario. El final del período encontró a la gremial con las expectativas electorales renovadas frente a las demandas históricas incumplidas. Por otra parte, su intención de hacer un “gremialismo propositivo” más que “confrontativo” y su capacidad de articulación con el Estado en la co ejecución de algunos programas públicos permitieron un rápido realineamiento con el gobierno frente a la amenaza de una derrota electoral de su principal aliado político.

En síntesis, lo que ha quedado afirmado en el conjunto de estas tres etapas es la fortaleza y coherencia de la agenda constituida por la CNFR en este primer gobierno progresista, que logra ubicar la gremial en un espacio propio dentro del campo de las representaciones agrarias. La necesidad de concretar una política pública diferenciada a los productores familiares como los asuntos relacionados con la problemática de la

propiedad de la tierra, constituyen los elementos centrales orientados a favorecer un modelo de desarrollo rural que privilegie la producción familiar y que consecuentemente limite las transformaciones recientes en el modelo agroexportador. Al mismo tiempo, el escaso éxito en estas demandas se transforma en uno de los principales elementos de vitalización de la confrontación con las políticas del gobierno progresista permitiéndole una autonomía relativa para ejercer su acción gremial.

En definitiva y como reflexión final hemos encontrado elementos que evidencian que la llegada del Frente Amplio implicó para la CNFR un cambio favorable en su forma de relacionamiento con el gobierno, marcando un creciente empoderamiento de la institución y generando nuevos espacios de negociación pública, antes vedados para la CNFR. Al mismo tiempo, la CNFR logró dinamizar su funcionamiento, incrementar y diversificar su base de representación, y por tanto, atravesar un impulso de fortalecimiento institucional que amplía su legitimidad y sus capacidades de acción colectiva.

Pero a pesar de este contexto favorable de relacionamiento con el gobierno nacional y de la ampliación y activación de la base social de representación, los elementos de la agenda de la CNFR aún siguen siendo la problemática del uso y propiedad de la tierra y las políticas públicas diferenciadas para la producción familiar, transformándose en uno de los principales elementos de confrontación con la política del gobierno.

Bibliografía

- ADINOLFI, L.** (2008). "Los dirigentes de las organizaciones de agricultores familiares. El caso de la Comisión Nacional de Fomento Rural". En: Riella, A. y Vitelli, R. (comp.): "Organizaciones Rurales y Acción Colectiva en Uruguay: estudios en tiempos de crisis". DS. FCS. UdelaR. Montevideo.
- ASTORI, D.** (1979). La evolución tecnológica de la ganadería uruguaya 1930- 1977. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- BERTONI, M.** (2008). "Las organizaciones colectivas del agro: sus demandas en el Parlamento uruguayo". En: Riella, A. y Vitelli, R. (comp.): "Organizaciones Rurales y Acción Colectiva en Uruguay: estudios en tiempos de crisis". DS. FCS. UdelaR. Montevideo.
- BUXEDAS, M.** y **PÉREZ ARRARTE, C.** (1988). La agroindustria uruguaya: rasgos básicos y potencial comercial. CIEDUR. Montevideo.
- DE ARMAS, G.** (2009). La relación entre Estado y sociedad civil en el área de las políticas sociales en el primer gobierno de izquierda en Uruguay: ¿de la emergencia a un nuevo régimen de bienestar? En: Arnson, C. y otros (comp.): La "Nueva Izquierda" en América Latina: Derechos Humanos, Participación Política y Sociedad Civil. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington, DC.
- ENTRENA, F.** (1988). Cambios en la construcción social de lo rural. De la autarquía a la globalización. Editorial Tecnos, España.
- ERRANDONEA, A.** (1989). Las clases sociales en el Uruguay. Ed. CLAEH. Montevideo.
- LATORRE, R.** y **KMAID, G.** (1991). "Las clases agrarias uruguayas: una aproximación cuantitativa". Cátedra de Sociología y Extensión. FAGro - UdelaR, Montevideo.

- PANIZZA, F.** (1988). "Poder estructural y hegemonía: Estado y ganaderos en la década del 60". En: Revista N° 3 de Ciencias Sociales. FCU. Montevideo.
- PIÑEIRO, D.** (1985). "El plenario de pequeños y medianos productores: un intento de crear un movimiento de agricultores familiares". En: Filgueira, C. (comp.): "Movimientos sociales en el Uruguay de hoy". CLACSO. CIESU. EBO. Montevideo. Uruguay.
- PIÑEIRO, D.** (editor). (1991). Nuevos y no tanto. Los actores sociales para la modernización del agro uruguayo. CIESU. Ediciones Banda Oriental. Montevideo, 1991.
- PORRAS, I.** (1999). "Reformas Estructurales, institucionalidad y dilemas en la acción colectiva del empresario agrícola en América Latina". F.A.O.
- RIELLA, A. y TUBÍO, M.** (comp.) (2001). Transformaciones Agrarias y Empleo Rural. DS - FCS - UdelaR. Montevideo.
- RIELLA, A.** (2002). Las Organizaciones Rurales y el proceso de Integración Regional. En: Revista de Ciencias Sociales. Año XV, N°20. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Montevideo, Junio de 2002.
- RIELLA, A.** (2003). "Agricultores Familiares: ¿agentes de transformación agraria?. En Revista de Ciencias Sociales N° 9. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Montevideo.
- RIELLA, A.** (2003b). "Poder, Luchas Simbólicas y Democracia: Las Gremiales Ganaderas en Uruguay (1985-2000)". Tese de doutorado. PPG – IFCH – UFRGS. Porto Alegre.
- RIELLA, A.** (2004). "Poder, Luchas Simbólicas y Democracia: las Gremiales Ganaderas en Uruguay (1985-2000)". En: Mazzei, E. (comp). El Uruguay desde la Sociología II. DS - FCS - UdelaR. Montevideo.
- SGANGA, F. et al** (2009). Registro de productores familiares: una herramienta para las políticas diferenciadas hacia este sector. En: Anuario OPYPA 2009. MGAP. Montevideo.
- TOMASSINO, H.** (2006). Avances en agricultura familiar. En: Anuario OPYPA 2006. MGAP. Montevideo.



5

Trabajo y Gestión del Riesgo



Análisis de la cultura organizacional de una empresa agroindustrial uruguaya

Marcos Supervielle¹ - Rafael Rey²

El presente artículo cuenta con dos objetivos, por una parte reflexionar sobre el empleo de la etnografía sociológica como técnica de investigación para el estudio de las organizaciones y por otra presentar los resultados obtenidos en una reciente investigación sobre la cultura organizacional de una empresa agroindustrial uruguaya, en la cual se emplea expresamente la etnografía sociológica como técnica de investigación. Este dispositivo fue escogido principalmente por sus conocidas ventajas en términos de obtención de información de primera mano, de registro de diferentes puntos de vista en un determinado contexto, de hallazgos difíciles de ser pensados antes del trabajo de campo, y de análisis de razonamientos y circunstancias que encuentran explicación, fundamentalmente, al ser observados en situación natural. Las reflexiones en torno a la cultura organizacional se orientan a indicar elementos para la gestión de los recursos humanos, que permitan alivianar las tensiones entre empresa y trabajadores, y que puedan ser aplicados oportunamente por los distintos agentes de la organización.

Introducción

Los sociólogos, en las investigaciones, nos vemos enfrentados a la necesidad de dar cuenta de “problemas sociológicos” que son los que nos estructuran nuestros estudios. Pero muchas veces ya tenemos de antemano certezas o cuasi certezas de los resultados de nuestras investigaciones. En estas ocasiones lo relevante de ellas está en la descripción que realizamos a través de la información obtenida. Es un procedimiento muy útil para darle solidez a las aseveraciones que realizamos. Otras veces en este tipo de procedimiento nos encontramos con “hallazgos”, es decir resultados no previstos que nos obligan a proponer nuevas interpretaciones que en algunas ocasiones nos conducen a realizar nuevas investigaciones. Hay veces que el problema al que nos enfrentamos resulta ser un auténtico enigma. Y es en este tipo de situaciones en donde

1 Profesor Titular de Sociología del Trabajo en el Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. marcos.supervielle@cienciasociales.edu.uy

2 Licenciado y Magíster en Sociología. Doctorando en Sociología. Profesor Asistente del Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. rafael.rey@cienciasociales.edu.uy

auténticamente la investigación sociológica muestra toda su valía, su originalidad y su estilo específico de investigación dentro de las Ciencias Sociales (Lemieux, 2010).

¿Por qué, siendo los suicidios actos voluntarios, libres y de tipo individual, generan tasas que son relativamente constantes en el tiempo? Los seres humanos, durante un larguísimo período histórico –de la antigüedad al medioevo– consumieron o atesoraron sus “sobreproducciones”. ¿Entonces por qué en el capitalismo, a partir del siglo XVII, este comportamiento se modifica? En efecto, a través del intento de organizar de forma más racional el trabajo, y en consecuencia, luego de haber obtenido una sobreproducción mayor, se niegan a consumirla, pero tampoco la atesoran, dando pruebas de un fuerte ascetismo, reinvirtiéndola en la maquinaria económica para aumentar así –aun más– la “sobreproducción” que van generando. Las investigaciones de Durkheim sobre el suicidio y las de Weber sobre la ética protestante y el espíritu capitalista son dos formidables propuestas para resolver problemas sociológicos que fueron dos auténticos enigmas en su época. De hecho, estas dos investigaciones, posiblemente sean la imagen sobre la que se ha construido el estilo sociológico de investigación de mayor referencia, en la búsqueda de resolver enigmas.

En esta ocasión justamente nos encontramos frente a un problema/enigma sociológico al que nos hemos visto enfrentados al intentar dar cuenta de las grandes tensiones en las relaciones laborales en una empresa agroindustrial líder en nuestro país.

En efecto, los propios actores de un complejo agroindustrial nos solicitaron que estudiásemos la cultura laboral de su empresa, que es una de las más eficientes del Uruguay. Que tiene una extraordinaria aceptación de sus productos, que logra exportar a varias decenas de países, que a su vez tiene una situación económica altamente solvente. Y que además, tiene un muy fuerte reconocimiento de todo el sistema político y también de la clase empresarial, que muchas veces la considera líder en múltiples dimensiones. Que a su vez tiene salarios relativamente altos con respecto a lo que se paga en el medio y, para los trabajadores de planta, hay una fuerte estabilidad laboral y condiciones de trabajo aceptables.

Sin embargo, se constata que es una de las empresas en el país que tiene en el largo plazo las relaciones laborales más tensas, que desembocan de forma muy recurrente en agudos conflictos laborales y la mayoría de las veces con una significativa repercusión pública.

Esta situación se presenta como un auténtico enigma ya que nadie logra dar una explicación consistente de la misma. Es por ello que se nos solicitó realizar una investigación específica para comprender esta situación en su total cabalidad para poder comenzar a reflexionar sobre cómo mejorar este clima laboral.

Desde el inicio de nuestra investigación nos dimos cuenta que sería necesario elaborar un “punto de vista” específico sobre el problema/enigma, distinto del enfoque sindical y también diferente del planteado por la empresa, ya que ambas perspectivas, en términos generales, son muy terminantes y crispadas, y por lo tanto, no podían

ser la base para comprender el problema y menos para establecer elementos para resolverlo.

En efecto, la presencia de un sindicato organizado y cohesionado, dispuesto a sostener con energía las demandas de los trabajadores frente una dirección empresarial considerada por el propio sindicato como rígida y refractaria a sus planteos por un lado, y por otro la consideración muy negativa de la acción sindical por parte de la empresa, aun reconociendo su fuerte implementación entre sus trabajadores, genera un clima tensionado y siempre al borde del conflicto como señalábamos. Pero que a su vez, la solución al problema, no podía concebirse sin involucrar al sindicato por su fuerte arraigo entre los trabajadores de la empresa.

Es en este marco que se desarrolló el trabajo de investigación del cual deriva este artículo. El tipo de problema/enigma al que nos vimos enfrentados, nos obligó por un lado a tomar una serie de decisiones sobre la elección de la metodología que se debía adoptar y también a tomar algunas decisiones en cuanto al enfoque teórico de cómo abordar el problema. En los apartados siguientes describiremos los fundamentos de la metodología y de la teoría finalmente adoptada, para luego presentar sucintamente el análisis realizado, culminando con unas conclusiones y proyecciones de nuevas preguntas de investigación.

Metodología

A partir de las primeras entrevistas con la gerencia de la empresa y con miembros del sindicato de la misma, pudimos constatar lo que ya señalábamos, que los puntos de vista sobre la situación eran totalmente divergentes en cuanto a la definición de la situación en que se encontraban. Y que posiblemente, estos puntos de vista fuesen excesivamente sesgados por el grado de exacerbación de estos mismos actores. Ello nos llevó rápidamente a descartar las técnicas tradicionales de estudio de clima laboral a través de sondeos y a partir de un “lenguaje basado en variables” y a optar por realizar un estudio de tipo etnográfico “in situ” para poder construir un “punto de vista” autónomo de los “puntos de vista” tan distanciados de los actores antes mencionados.

En términos generales la observación directa se utiliza para dar cuenta de prácticas y conceptualizaciones que para los actores involucrados se dan “de hecho” y que, por lo tanto no requieren para ello ninguna necesidad de detenerse en dar una explicación ni siquiera reflexionar sobre ellas. Pero la problematización explícita de estas prácticas y conceptualizaciones, realizadas por un actor externo, pueden generar que los propios actores involucrados se vean obligados a reflexionar sobre los mismos y eventualmente cambiar sus “puntos de vista” primarios. (Mendras y Oberti, 2000).

Nuestra posición epistemológica es que este “punto de vista” que aportamos como investigadores, es uno entre otros posibles, pero que incorpora nuestra propia experiencia y trayectoria biográfica como sociólogos. Lo que en tanto que científicos sociales, nos obliga a darle un fundamento y coherencia que lo haga consistente. Y, en

relación a la información sobre la que nos basamos para construir nuestro “punto de vista” la utilizamos solamente a título de ejemplo de nuestros desarrollos conceptuales y no como evidencia capaz de falsear ningún tipo de hipótesis. No nos instalamos en el espacio popperiano sino más bien en las posturas de Passeron (2006).

Para dar cuenta de las decisiones metodológicas que se fueron tomando en el diseño de la investigación y durante ella, partimos de un análisis bibliográfico de las investigaciones realizadas que utilizan la Observación como principal técnica y que fueron publicados por la *American Sociological Association*, que muestran que en términos generales la presentación de los artículos sigue el esquema de tratar primero las decisiones epistemológicas y luego la de los problemas prácticos de recopilación de datos, para culminar discutiendo los aspectos éticos de la misma, antes de pasar a la parte analítica en sí. (White Riley y Nelson, 1976). Seguiremos este esquema para describir las decisiones tomadas en este campo metodológico.

La tarea de identificar los desencadenantes de las tensiones e intentar comprender los motivos subyacentes del particular clima laboral en las plantas industriales que investigamos, requería de un abordaje que permitiera captar las relaciones interpersonales y las representaciones sociales de los agentes en situación natural, es por ello que entendimos que la técnica más adecuada sería la etnografía sociológica.

En este plano es importante señalar que se optó por la etnografía sociológica y no por la observación participante, otra corriente de investigación muy cercana a la primera (Angrosino, 2009). En términos generales se distinguen estas dos corrientes porque la primera se asocia al trabajo de investigación que realizan los antropólogos sobre sociedades primitivas y se utilizan las técnicas de observación participante más bien cuando se están observando las sociedades contemporáneas. Sin embargo optamos por denominar a nuestro enfoque metodológico como etnográfico y no de observación participante por sutiles razones epistemológicas. En efecto, la observación participante en América Latina se asocia muchas veces a las posturas de autores como Orlando Fals Borda (1971) y Rodrigues Brandão (1984) que optan a priori por los actores a defender y apoyar en sus investigaciones. Más allá del respeto de esta posición en el contexto latinoamericano, en nuestro caso esta postura no era posible, dado que no podíamos definir a priori a qué actor privilegiábamos y “tomábamos partido por” en la investigación, porque la misma surgía de un acuerdo entre la empresa y el sindicato y porque además, a priori, no compartíamos el punto de vista adoptado por ninguno de los agentes. Por lo tanto, nuestra posición epistemológica obligaba necesariamente a un “distanciamiento” de ambas partes lo que suponía –como ya hemos señalado– la creación de un “punto de vista” diferente del de los actores involucrados en el sistema productivo. Sabíamos de antemano que este nuestro enfoque distinto, en el corto plazo podía generar una decepción, porque no coincidiría con el que los agentes sostenían con mucha vehemencia, pero que posiblemente en el mediano plazo generase cambios que permitiesen un proceso de aproximación de las partes más sustantivo.

A su vez el diseño del proyecto fue concebido para realizarse en dos etapas lógicamente sucesivas, en primera instancia se buscó describir el mundo social que se observaba “in situ” para luego realizar una observación de segundo nivel, es decir observar las categorías que estructuran las observaciones que se realizaron al primer nivel. Es obvio que en la práctica de la investigación estas dos etapas se intersectaron de forma continua.

Consideramos por lo tanto que el modelo de observación que realizamos es de tipo etnográfico, aunque es necesario diferenciar de la etnografía antropológica, y como veremos más adelante de sus prácticas investigativas, que presuponen una inmersión en el terreno de investigación por plazos muy largos.

En cuanto a las decisiones relacionadas a la captura de los datos, se recurrió a lo que se denomina “observación directa” como señalábamos, eliminando cualquier tipo de instrumento que intermediase al observador del objeto a observar. No utilizando ni cuestionarios, pautas de entrevista, ni grabadoras o filmadoras (Arborio y Fournier, 1999). A su vez se siguió el principio de “la observación directa consistente en ser testigo de comportamientos sociales de individuos o de grupos en el lugar mismo de sus actividades o de sus residencias, sin modificar el desarrollo ordinario de sus actividades” (Peretz, 1998). En sentido estricto, consideramos que la definición más correcta es “observación directa de interacciones”, ya que éstas solamente pueden captarse directamente, sólo a través de la observación. En sentido estricto no realizamos una observación directa de forma totalmente ortodoxa, ya que como veremos enseguida, generamos una pauta de observación a priori para orientar a los investigadores de terreno y reducir su eventual perplejidad en su inmersión, en una situación totalmente nueva para ellos.

En efecto, para realizar una investigación de estas características nos fue necesario tomar una serie de disposiciones, tanto protocolares como metodológico prácticas. Protocolares, ya que decidimos incorporar a dos jóvenes sociólogos, uno recién graduado y el otro faltándole solamente la tesis, para que se integraran a dos plantas de la empresa con el fin de realizar un estudio etnográfico pero con el consentimiento de la empresa por un lado y del sindicato por otro, y además que los trabajadores supiesen exactamente lo que estos dos investigadores estaban realizando.

La forma de integrarse a la planta fue a partir de contratos zafrales, modalidad de contratación corriente en esta empresa que como veremos más adelante va a ser crucial en la explicación del clima que se vive en la misma.

Nos parecía central que los jóvenes investigadores que iban a realizar el trabajo de campo fuesen contratados como obreros en una situación “normal” de contratación o lo más cercano a ello, más allá de que todo su entorno supiese que estaban haciendo un trabajo de investigación, lo que permitió su integración sin dificultades en las dos plantas donde trabajaron.

Fue claro en el diseño del proyecto de investigación que no podíamos seguir los protocolos tradicionales de la investigación etnográfica que suponen una inmersión del investigador durante un plazo no menor al año como ya habíamos señalado, ya que la investigación se realizaba para dar respuestas a los actores involucrados en el “clúster” productivo: Directivos, Alta gerencia, Asociación de productores rurales y el Sindicato de trabajadores, y ello no permitía darse plazos tan largos. Por ello fue necesario en ese marco, idear un dispositivo novedoso, al introducir a dos observadores en las factorías de la empresa; romper en buena medida con otra tradición de la investigación etnográfica que hace que sea un único investigador el que realiza todas las tareas de recopilación y análisis de la información recabada (Beaud y Weber, 1998).

A su vez al reducir notablemente los plazos de recopilación de la información en el terreno de investigación por lo anteriormente expuesto, se les instaló una suerte de supervisión continua de la captura de la información a partir de un supervisor externo y de medios de comunicación informática de forma continuada. Por las mismas razones, complementariamente, se concibió realizar la captura de la información a partir de pautas de observación diseñadas “a priori”, rompiendo nuevamente con algunas tradiciones en la observación directa que por lo general construyen sus categorías de observación “in situ” como señalábamos anteriormente. Todo ello nos llevó a inscribir la observación y descripción de la realidad en una etnografía sociológica y no antropológica ya que esta postura nos llevaba a realizar una descripción con objetivos más acotados que la que realizan comúnmente los antropólogos que buscan realizar una descripción lo más exhaustiva posible. (Becker, 2005) y (Supervielle y Robertt, 2013).

Pero la fundamentación de estas decisiones metodológicas no solamente se agota en la forma de resolver el problema del corto tiempo de trabajo de campo. También tenían que ver con las características de los investigadores que realizaron este trabajo en el terreno. Por las peculiaridades de su objeto de observación y del contexto en el que se desarrollaba, necesariamente debían ser hombres y jóvenes capaces de soportar jornadas de ocho horas de trabajo obrero y ello durante varias semanas seguidas. Esto nos obligó a recurrir a investigadores sin gran experiencia y sin una formación especializada en observación etnográfica de tipo sociológico, que entre otras cosas, no forma parte de las tradiciones de investigaciones en sociología en el Uruguay. Pero además, el diseño del proyecto tuvo como finalidad potenciar al máximo la reflexividad de los participantes de la investigación a partir de un diálogo continuo sobre lo observado, diálogo cotidiano en primera instancia entre sí, de los propios investigadores en el terreno, diálogo con el supervisor de forma continua a través de medios informáticos de comunicación y finalmente diálogo con los coordinadores generales del proyecto a partir de reuniones colectivas de debate sobre la experiencia que iban adquiriendo. Se trataba de “agregarle valor” a las informaciones primarias recabadas por los investigadores de terreno.

Pero a su vez, y en el mismo proceso descrito, se buscó maximizar los controles para no caer en sesgos fruto de tomar partido por alguno de los actores involucra-

dos en el sistema social productivo. Se realizó por lo tanto un constante esfuerzo de mantener la neutralidad valorativa de los investigadores acerca de la realidad en que vivían y particularmente de las distintas posiciones en el juego de interacciones de los actores sociales tal cual lo definimos como postura epistemológica. Por ello, el diálogo en sus diversas fases antes mencionadas también cubría este requerimiento de “distanciamiento”, como del mismo modo, el haber planificado la observación en dos factorías de la misma empresa pero con características diametralmente distintas, como forma de llevar a los investigadores a tomar distancia de la experiencia realizada en cualquiera de factorías individualmente consideradas, se trataba por lo tanto que el punto de vista tuviese un carácter más global.

Finalmente consideramos además que el haber generado a priori una grilla de atributos a observar, también contribuyó a mantener el “distanciamiento” que buscábamos.

En cuanto a los aspectos éticos que mencionábamos, este tipo de investigación genera dos imperativos éticos contradictorios que obligan a tomar posiciones. Por un lado el hecho de que se viva en un ámbito social reducido y de una fuerte interacción continua entre los distintos actores individualmente considerados hace que los mismos muchas veces sean fácilmente reconocibles a partir de las posiciones de los actores que se describen en el trabajo. Es entonces quizás algo poco ético explicitarlo porque mucha de esa información se brindó en confianza a los investigadores de terreno.

Pero por otro lado, muchas veces esa propia información está en la base de los razonamientos que fundamentan los resultados de la investigación e incluso las recomendaciones a los actores que surgen de la misma. Y no hacerlos explícitos debilitarían entonces los resultados del trabajo de investigación y le hacen perder fuerza a las recomendaciones que se realizan. Este fenómeno no es nuevo, William Whyte Foote (1943), que escribió una de las investigaciones más reconocidas utilizando la técnica de observación directa, cuenta que años después de haber publicado su investigación en un exitoso libro, se reencontró con uno de los actores que aparecían referidos en el mismo. Este actor había leído y se había reconocido a pesar de los maquillajes que había ideado Whyte Foote para hacerlo no reconocible. El primer comentario que le hizo al autor era que para él el trabajo no era demasiado constructivo y el segundo es que nunca se había esperado ese resultado, reconoció que el mismo era fiel a la situación pero aun así, había relevado excesivamente la intimidad de los participantes del grupo.

Éste es un riesgo real y de hecho las primeras reacciones ante el informe presentado estrictamente a los distintos firmantes del acuerdo de investigación generaron el mismo tipo de reacciones en algunos actores. Sin embargo consideramos que la ética de decir lo más honestamente las formas de cómo resolver el enigma al que nos vimos enfrentados prima sobre la de transgredir de alguna forma la confianza en la que se generó la información.

Dos posiciones teóricas que orientaron la investigación

Además de haber tomado una serie de decisiones de diseño, se asumieron dos posiciones teóricas que orientaron el proyecto: la teoría de la racionalidad ordinaria y la sociología de los dispositivos de acción.

La racionalidad ordinaria

El centro del trabajo se orientaba a elucidar el enigma de la “cultura” del trabajo de los operarios de las factorías, que aparecía como el centro del problema en el funcionamiento de la empresa agroindustrial. Por un lado ello implicaba poder describir la cultura en todas sus dimensiones. Para ello se realizó la pauta que mencionábamos previamente y que presentaremos en el próximo apartado. Pero además fue necesario adoptar una postura teórica de cómo abordar la información obtenida por las observaciones y por las entrevistas y conversaciones informales que se realizaron con los distintos actores del proceso productivo.

Se nos presentaban dos opciones, o bien partíamos de la base de que la cultura de los trabajadores se transmitía de alguna forma por procesos de socialización y por lo tanto lo que importaba era el origen, la forma y el contenido de socialización a las que habían sido sometidos los trabajadores, lo que implica concebir a los mismos como relativamente pasivos porque son receptores de estas ideas que vienen “de otro lado”, o bien podíamos partir del supuesto de que la cultura que desarrollaban los trabajadores era auténticamente autóctona y además en cierta medida racional. Ello si entendemos como Boudon (2012) a la racionalidad como las razones por las cuales un individuo percibe una acción como legítima. Ello supone la asunción de cuatro principios.

El primero, que son las ideas y no los intereses los que están en el origen de la acción humana. Este principio rompe con toda una tradición anglosajona que, partiendo de Hume y de Bentham, le dan una primacía a los intereses sobre cualquier tipo de ideas. En realidad muchas veces las acciones humanas están orientadas por ideas que no tienen nada que ver con los intereses de las personas y en ese sentido ideas e intereses aparecen como contradictorias. Pero por otro lado los intereses se expresan a través de ideas y por lo tanto las ideas engloban a los intereses o al menos los complementan. En este plano Boudon de alguna forma está tomando una postura de cómo se coordinan “las acciones racionales con arreglo a fines” y “las acciones racionales con arreglo a valores” de Max Weber.

El postulado fuerte es que el utilitarismo debe ser enmarcado en procesos conceptuales más amplios y que no toda perspectiva antiutilitarista es irracional y debe ser desdeñada. Este punto es importante porque uno de los problemas que tenemos al analizar las informaciones recabadas es que los actores internos de la empresa interpretan las acciones del “otro” de una forma reduccionista, sistemáticamente como resultados de intereses, perdiendo así otras dimensiones y perspectivas de la acción

de los actores que son fundamentales y por lo tanto generando interpretaciones muy sesgadas y definiciones de la situación erróneas o parcialmente erróneas.

El segundo principio postula que las causas de las creencias son razones presentes, de forma consciente o metaconsciente en el espíritu del creyente (la idea de Boudon de “metaconsciente” es que la persona que realiza una acción no siempre explicita sus razones pero si se ve obligada a hacerlo, puede perfectamente darlas). Este principio se opone a todas las tradiciones que atribuyen las creencias a las fuerzas irracionales de origen biológico o psicológico. Y ello es válido tanto en el orden científico como en el orden de la propia empresa. Toda incompreensión del otro culmina atribuyéndose a causas irracionales o al menos a racionales, provenientes de los más diversos orígenes y sin intentar entender cómo dichas acciones pueden tener racionalidad para las personas que las realizan.

El tercer principio sostiene que la racionalización de las ideas juega un papel central en la vida colectiva. Este principio es crucial en nuestra investigación. Primero porque las ideas pueden ser verdaderas o falsas, sin embargo, si se basan en razones y a su vez estas ideas son aceptadas por un colectivo, su legitimidad será mucho mayor que si son admitidas por una sola persona. Como veremos en la investigación, importa más para la acción la convicción en una idea, que si ésta es verdadera o falsa, y que esta convicción se fortalece si la idea es adoptada colectivamente.

El cuarto principio sostiene que, al igual que las creencias relativas a una determinada representación del mundo, las creencias normativas (los valores) tienen su origen en razones y que ellas también están sometidas a un proceso de racionalización. Este principio es fundamental en dos sentidos. En primera instancia porque le da, a las razones que se dan los actores para actuar, el estatuto de motivos de la acción. Lo que hace que la racionalidad sea autosuficiente para la explicación en el sentido de que no necesita apelar a ningún factor externo (biológico, físico, cultural o social) para explicar la acción. Y por otro, esta perspectiva puede aplicarse a las creencias pero también a los valores. Defendemos los valores si tenemos buenas razones para hacerlo.

Partimos por lo tanto de la siguiente definición de Boudon acerca de la Teoría de la Racionalidad Ordinaria: sea X un valor, una representación, una preferencia, una creencia o una opinión. Se sostendrá que X se explica por la racionalidad ordinaria, si X es a los ojos del individuo que adhiere a X , consecuencia de un sistema de razones (S) en el cual todos los elementos le son aceptables y que, no existe a su conocimiento un sistema (S') preferible que lo lleve a elegir X' más que X . Si se dan estas condiciones diremos que S es la causa de la adhesión del individuo a X .

Por lo antedicho, el esfuerzo de lo que intentamos elucidar en la investigación como núcleo duro de la misma, es el sistema de razones que los trabajadores se dan para actuar como actúan.

La sociología de los dispositivos de acción

Dicho lo anterior es con todo necesario partir de la constatación de que las relaciones de poder entre los empresarios y su cuerpo gerencial y los trabajadores, es asimétrica, sea cual sea la categoría de los mismos.

Esto nos lleva a ver en los trabajadores el sistema de causas que le llevan a desarrollar ciertas creencias, y acciones acorde a estas creencias, a partir de un contexto de subalternidad de los mismos. Esto se traduce por tener que actuar por reacción a las medidas –fundamentalmente de gestión– que toman los empresarios en relación a los trabajadores en el contexto del trabajo que realizan los gestores (managers). En términos generales nuestra mirada se traduce en dar cuenta de sus objetivos racionalizadores y de sus pretensiones de eficiencia, las condiciones generales en las cuales se toman las decisiones de gestión, y finalmente, los efectos humanos y sociales que estas decisiones generan. Es éste el punto en el que más hacemos hincapié en este trabajo. (Maugeri, 2001).

Estas medidas de gestión las denominaremos “dispositivos de gestión”. Para entender a qué nos referimos con los dispositivos de gestión, primeramente tenemos que mencionar a los útiles o herramientas de gestión. Éstos son un conjunto de procedimientos de gestión estandarizados y codificados en un lenguaje técnico y cuyo acceso es público, que apuntan a maximizar un fin en el área de la gestión. Desde un punto de vista sociológico, las herramientas de gestión son relevantes porque contienen por lo general una sociología implícita, es decir, suponen que al instalarse estos útiles de gestión los actores se comportarán de determinada manera. El nivel de generalidad de los mismos y su muy diferente naturaleza, pueden ser propuestos por especialistas en gestión o pueden ser de tipo jurídico, llevan a que sea necesario que se tomen mecanismos de gestión para aplicarlos a situaciones concretas que por definición son únicas y por lo tanto conducen a adecuaciones mayores o menores de los útiles de gestión o de su entorno, para que sean realmente viables. Se le agrega entonces a la sociología implícita de los útiles de gestión una segunda sociología implícita que surge de la mezcla de las constricciones y las incitaciones a los trabajadores que se encuentra en la base de toda acción de gestión. Se puede decir que impulsados por las tecnologías de la comunicación e información, los dispositivos se están transformando en la encarnación de la nueva filosofía de gestión.

Pero estos dispositivos de gestión no siguen las sociologías implícitas que las motivaron de forma total y perfecta. Por el contrario, siempre están acompañadas de desviaciones e incluso de efectos paradójicos en cuanto a las conductas esperadas por parte de los trabajadores. Y ello porque éstos van construyendo a partir de la información que procesan cotidianamente un sistema de razones que los llevan a creencias muy distintas a las sociologías implícitas que supuestamente conllevan los dispositivos puestos en marcha. Y por lo tanto muchas veces es necesario “desnaturalizar” el discurso managerial y reinscribirlo en su historicidad y contingencia, de relevar su violencia implícita y su fragilidad en relación a toda construcción humana. Y, como

veremos más adelante con respecto al dispositivo de la utilización de los trabajadores zafrales como categoría estable y central de la estrategia de gestión de los recursos humanos de la empresa, cómo ello ha ido generando identidades distintas en el seno del colectivo de los trabajadores. Siendo estas identidades de carácter defensivo y en ciertas circunstancias de carácter ofensivo, particularmente durante los conflictos. Es en este contexto específico en el que debemos analizar el sistema de relaciones altamente conflictivo de la empresa agroindustrial que analizamos.

Las valoraciones de la cultura de los trabajadores dominada por la tensión

El cúmulo de información aportada por los observadores fue, en principio, aluvional. Se hizo necesario organizar la información en torno a ciertas dimensiones indicativas que permitieran reconstruir la trama e identificar las situaciones problema. Se trabajó sobre la base de siete bloques:

1. Diferenciación Social,
2. Tipo de Gestión,
3. Identidad,
4. Clima Organizacional,
5. Relación supervisores/ operarios,
6. Reclutamiento de supervisores y mecanismos de ascensos,
7. Doble regulación: producción de reglas formales y producción de reglas tácitas.

En cuanto a la diferenciación social, el principal hallazgo da cuenta de la existencia de un proceso de oposición social interno que involucra tanto clivajes verticales (trabajadores “fijos y zafrales” o “efectivos y contratados”, diferenciación que se refuerza con el ser “viejo” o el ser “joven”), como horizontales, pero especificando que éstos son muy distintos según las personas y/o los lugares de trabajo, el cual tiende a generar la percepción de que la empresa se rige por normativas arbitrarias, esto es, por un lado, ilógicas, y por el otro basado en fuertes particularismos.

En relación al tipo de gestión, comprobamos que se caracteriza por el debilitamiento del paternalismo. En la percepción de los trabajadores, el paternalismo fue substituido (aunque puedan encontrarse aún reminiscencias) por una lógica de gestión instrumental en la que lo único que interesaría a la empresa es el aumento de la productividad. La gestión mantiene algunas herencias tayloristas y fordistas que se expresan en el carácter repetitivo y monótono de las tareas. Aunque, debe subrayarse que varios elementos como la importancia del conocimiento tácito, herencia de lógicas de oficio, y por tratarse de una industria de flujo continuo, hacen de la empresa una entidad donde es necesario contar con trabajadores que desplieguen determinadas calificaciones específicas, más allá del modelo productivo dominante.

Con respecto a los hallazgos relativos a la identidad laboral, lo que percibimos es una identidad con el trabajo afirmada en principios éticos, mucho más sólida y generalizada, que una posible identidad histórica o reciente con la empresa. Tales principios identitarios implican fundamentalmente un compromiso con la producción y con el producto por sobre cualquier otro valor: el orgullo del trabajo bien hecho y la preocupación por un producto alimenticio consumido por buena parte de la población, son dos de los ejes de esta identidad laboral identificada. Sin embargo, comprobamos también, que esta identidad no es reconocida directa y explícitamente por la dirección de la empresa.

El clima organizacional que impera en las factorías resulta particularmente relevante para entender los procesos sociales que se producen en el cotidiano. Existen múltiples tensiones que atraviesan la organización social de la empresa. Desde las tensiones originadas en el proceso de trabajo, en las cuales se percibe como el interés principal y prácticamente excluyente de la empresa, el aumento de la productividad; pasando por las tensiones intra trabajadores, ya sea por la cuestión de la estabilidad/ inestabilidad laboral o por los acuerdos tácitos presentes en diversos sectores productivos; hasta las que derivan del autoritarismo de las relaciones jerárquicas; de las percepciones de riesgo en el ejercicio de la tarea; y de las que involucran todo el sistema de contratación y de ascensos. Todas ellas apuntan hacia la percepción de un mundo social gobernado por la arbitrariedad, o dicho de otra manera, por la ausencia de construcción de normas generales. Si bien existe la percepción de que las normas generales de producción se cumplen. No obstante, éstas son subordinadas, según la visión de los trabajadores, a los imperativos de la productividad.

Existe también en los obreros la percepción de que los conflictos, particularmente entre sindicato y empresa, son inminentes, que se está siempre al borde de una situación crítica en las relaciones entre ambos actores.

Predomina a su vez la percepción de que la empresa no escoge bien a su personal de supervisión, al seleccionar mandos medios que no tienen una carrera interna dentro de la empresa. Las características de los supervisores son percibidas más a través de atributos de personalidad que de capacitación o competencia técnica. Esto muestra la ausencia de una carrera profesional entre los supervisores.

También se ha desarrollado la apreciación de que el sistema de contratación de trabajadores efectivos y el sistema de carreras internas no son claros para los trabajadores. Esto lleva a hipotetizar que la dirección de la empresa evita explicitar abiertamente los criterios de contratación de los trabajadores y de los ascensos para categorías superiores, tal vez para no abdicar de su prerrogativa de tomar las decisiones que precisa tomar en cada lugar y en cada momento con la mayor discrecionalidad. Esa política gerencial tiene como costo el aumento de las tensiones entre empresa y trabajadores.

La empresa está atravesada por acuerdos tácitos, principalmente aquellos que se procesan al interior de cada sector en cada planta. Los acuerdos tácitos permiten

una reducción de la rigidez organizacional permeada por reglas formales. No obstante, en esta empresa la proliferación de reglas tácitas por sector (justificada, en parte por las características de cada uno de ellos) tiene como efecto la percepción de un mundo social en el cual las compensaciones y las condiciones de trabajo de cada empleado son fuertemente dependientes del sector de trabajo en el cual le toque desempeñar sus tareas y del supervisor de turno que controle sus actividades.

En su conjunto hemos observado que la empresa se presenta como un mundo social regido por la discrecionalidad en sus decisiones y por la escasa explicitación de sus normas. Autoritarismo en las jerarquías intermedias (supervisores en una de las plantas, por ejemplo) o ciertos paternalismos con el personal en relaciones de dependencia directa (caso de otra de las plantas) adquieren su fundamento en formas pretéritas de producción artesanal donde las jerarquías podían ser mucho más autoritarias/paternalistas, en función de que la dimensión del conocimiento tácito era mucho más estratégica que hoy en día y por lo tanto los procesos de aprendizaje se realizaban mucho más por copia de rutinas que por comprensión de la racionalidad de los procesos y su seguimiento, a partir de las informaciones brindadas por instrumentos cada vez más sofisticados que implican y que exigen cada vez mayores capacidades de interpretación. De una forma u otra el autoritarismo aparece cada vez menos aceptable para los jóvenes, por un lado, y por el otro el temor de los viejos a ser desplazados, genera las condiciones de un sindicalismo muy fuertemente contestatario de la autoridad en la empresa pero dentro de los límites fijados por la ética del compromiso con la producción y con el producto.

Consecuencias en la acción colectiva

La puesta en práctica por parte de la empresa de un particular dispositivo de gestión que lleva a distinguir dos tipos de trabajadores en el mismo proceso de producción ligado a distintos tipos de contratos: los permanentes y los zafrales, genera singulares problemas de articulación de los trabajadores con proceso productivo y promueve una fragmentación en la construcción identitaria de los mismos. Entendemos que esta situación es uno de los principales factores de las disfuncionalidades descritas anteriormente. En la medida en que los denominados trabajadores “zafrales” son contratados en forma alternativa por períodos de seis meses, pero durante todo el año, se han transformado en trabajadores eventuales. Durante todo el año, buena parte de la plantilla de la empresa es cubierta con operarios contratados, que dependiendo de su rendimiento, son convocados posteriormente. Algunos de ellos logran ser incorporados a la plantilla estable de la empresa, luego de varios contratos, pero no todos, situación que coloca en incertidumbre permanente a estos trabajadores y en buena medida altera las relaciones interpersonales al interior de las factorías. En la medida que este dispositivo se aplica de forma regular, continua, y desde hace mucho tiempo, ha generado y cristalizado dos tipos de identidades de trabajadores en la empresa.

A la empresa, desde el punto de vista económico le es redituable la puesta en marcha de este dispositivo de gestión en la medida que lleva a que los trabajadores zafrales estén sometidos a una mayor cadencia y se vean obligados a aumentar la productividad en su búsqueda de estabilidad o de recontractación. Pero simultáneamente este dispositivo crea una serie de distorsiones sociales como hemos descrito, que generan las condiciones de esta conflictividad latente pero constante y un clima laboral tenso.

En efecto, mientras que los trabajadores de planta mantienen su estabilidad a través de su contratación efectiva y solamente son despedidos si cometen faltas graves y, aun así en esos casos, son muy fuertemente defendidos por el sindicato. La contratación de otros trabajadores en condición de eventualidad en las plantas, genera que estos últimos sientan que su potencial estabilidad futura, pase por su transformación en estables o al menos en ser recontractados, y que esto depende fundamentalmente de su esfuerzo individual y de la evaluación a corto plazo de la autoridad inmediata superior. El sistema legal vigente obliga a que para ser eventual un trabajador debe trabajar no más de seis meses y no puede volver a trabajar en la empresa antes de que pasen otros seis meses desde que terminó su contrato. Y, en función de este micro contexto, la empresa evalúa con un sistema de puntaje a los eventuales y los obliga a alcanzar ciertos mínimos para ser recontractados seis meses después.

Este contexto laboral genera un aumento del ritmo de los trabajadores eventuales, porque las condiciones del mercado de trabajo hacen que aun el ser eventual es para muchos una opción deseada y además es muy posible que guarden la ilusión de ser pasados a la situación de trabajadores estables algún día.

Esto implica para los trabajadores, distintas posibilidades de acción colectiva. Los trabajadores de planta están muy fuertemente sindicalizados y los eventuales no. Y no es que el sindicato no defienda a los trabajadores eventuales si la empresa trasgrede alguno de los acuerdos que se ha establecido con el sindicato, el problema de la sindicalización de los eventuales tiene otros motivos. Durante la estadía de los investigadores de campo se vieron algunos conflictos con la participación del sindicato en la defensa de una trabajadora eventual. Aun así, entre los eventuales existe la creencia muy compartida, de que si se les ve cerca del sindicato o de dirigentes sindicales, ello puede repercutir para que nunca se les dé la oportunidad de ser permanentes y, eventualmente no se les llame más como zafrales/eventuales. Y por ello no solamente no participan en el sindicato sino que tampoco se afilian, por lo menos hasta lograr la condición de trabajador permanente, porque piensan que los supervisores, que los controlan permanentemente, también distinguen entre quienes se aproximan al sindicato y quienes no.

Pero esta situación también repercute entre los trabajadores permanentes que creen, con fundamentos o sin ellos, poco importa, que la empresa respetará mucho más sus derechos laborales, si ellos pertenecen al sindicato, en la medida que ante la sospecha de que alguno de sus derechos han sido vulnerados, el sindicato reaccionará

con dureza frente a la empresa. Este contexto muy particular hace que la dirección del sindicato tenga mucha autonomía en relación a sus afiliados, en las definiciones de los conflictos y en el desarrollo de los mismos, en particular en la definición de la intensidad con que los encararan. Tenemos la impresión que este sindicato a pesar de tener la virtud de lograr una gran disciplina en cuanto a las normas que impone a sus trabajadores en relación a la empresa, no ha logrado generar ningún tipo de carisma en torno a sus dirigentes sindicales más allá de que nadie se les enfrente. Esta actitud obviamente es más clara entre los trabajadores con contratos estables que entre los eventuales, que están totalmente alejados de la vida sindical y pesan muy poco en ella.

Ésta es la hipótesis que proponemos para comprender lo que sucede en esta empresa y que nos permite entender el porqué será de muy difícil solución en la medida en que la misma no encuentre una forma compatibilizar los éxitos económicos que está teniendo, con un modelo de gestión de sus recursos humanos, tan exitoso como el anterior.

Conclusiones y proyecciones

La zafralidad como nodo problemático

Del conjunto de observaciones y dimensiones analizadas, surge la posibilidad de desarrollar una reflexión para políticas de largo y de mediano plazo. Las políticas de largo plazo tienen mucho que ver con la cultura del trabajo que la empresa considera que debe impulsar. La dirección de la empresa pretende orientarse a un trabajo más enriquecido en materia de participación de los trabajadores en el proceso de producción, pero que se ve muy fuertemente limitado por el modelo existente actualmente. Este proceso de producción es fundamentalmente de flujo continuo y al que se acopla más fácilmente el modelo fordista, que en términos generales no admite un enriquecimiento de las tareas.

En primera instancia nos parece que uno de los elementos más tensionantes de la organización actual del trabajo en la empresa, tiene que ver, como mencionamos, con la categoría de los zafrales (eventuales). La condición de los zafrales estaría en el origen de varias disfuncionalidades del funcionamiento de las plantas industriales, por al menos dos razones complementarias, primero por la incertidumbre que tienen los que ocupan estos puestos de trabajo, para lograr la estabilidad laboral en la empresa, que aparece como una aspiración (proyecto de vida) muy generalizada entre ellos. La segunda que quizá se derive de la primera, es que no se presentan en forma coherente, ni las políticas de reclutamiento para los puestos de planta, ni las herramientas de gestión (sistema de puntajes, etc.) existentes. Es más, a partir de las observaciones, en este campo existen grandes incongruencias, y por sobre todas las cosas, un desconocimiento de los trabajadores zafrales, de las políticas de reclutamiento, y las exigencias para que cada trabajador pueda lograr su integración estable a la empresa. Hay una fuerte percepción de discrecionalidad al respecto, muchas veces totalmente desvincu-

lada de factores objetivantes de la productividad deseada, cuestión que impacta en el clima organizacional y en las relaciones sindicato/empresa.

Recursos humanos, el gran ausente

Una segunda cuestión que nos parece muy importante, es la escasa presencia (casi nula) del staff de la Gerencia de Recursos Humanos en las plantas industriales, lo que lleva a que cualquier malestar se transforme rápidamente en un conflicto, antes de poder ser prevenido convenientemente por un equipo técnico con las competencias específicas para abordar estos emergentes en el propio terreno. Además, que la política de recursos humanos aparezca como escasamente congruente, y por lo tanto diferente en cada planta o en cada sector, al menos es así que la perciben los trabajadores, propicia un clima de desconformidad generalizado, que es el caldo de cultivo de los sucesivos conflictos. Aquí estaría, en buena medida, el origen del fuerte grado de diferenciación social observado y una de las fuentes de la excesiva conflictividad.

En relación al papel de los supervisores, el perfil del cargo no parece bien diseñado, por un lado, y por otro surgen de las observaciones, fuertes lagunas en su formación técnica. En el diseño de las funciones de supervisor, debe quedar claro cuáles son sus competencias y cuáles no deberían serlo. No es posible que un conflicto nazca de la toma de decisiones de un supervisor, como fue observado durante el transcurso de la investigación. Tampoco es posible que cada supervisor tenga su propia estrategia de asignación de trabajadores a distintos puestos, al menos debería estar instruido y conducirse con criterios generales de la propia empresa. Finalmente las observaciones orientan a pensar que los supervisores han tenido escasa o ineficiente formación en recursos humanos, en liderazgo y en otras dimensiones de relacionamiento con los trabajadores bajo supervisión. En este sentido, consideramos que sería muy importante establecer un plan de formación de supervisores, que aparte de los temas específicos de su especialidad, tenga capacitación para la gestión de recursos humanos.

Proyecciones

La experiencia de esta empresa pujante y moderna en muchos planos, muestra relevantes carencias y distorsiones en el plano de las relaciones laborales que llevan a reflexionar acerca de cuáles deberían ser estas relaciones en el proyecto de país productivo que el Uruguay encara. ¿Cuáles deben ser los dispositivos de gestión que se deben impulsar y cuáles las estrategias de Gestión de recursos humanos que logren eficacia productiva pero a su vez, orientada a la justicia social? ¿Cómo evitar las disgregaciones de las identidades laborales en un mismo proceso productivo, en particular cuando sobre ellas se construye el modelo de producción? Estas preguntas se vuelven más relevantes en la medida que la empresa que hemos estudiado no es un caso aislado, este modelo de diferenciación de trabajadores estables y trabajadores inestables, o al menos potencialmente inestables, como mecanismo de aumentar la productividad a partir de la incertidumbre, es una práctica muy generalizada en buena parte de las

empresas de nuestro país. Nos parece que una interesante pregunta de investigación para el futuro sería: ¿cuánto tiempo en las condiciones descriptas se puede mantener una ética de trabajo, es decir una construcción de normas internas de los propios trabajadores de buscar mejorar su producción, como hemos visto entre algunos de los trabajadores observados en esta investigación, manteniendo estos mecanismos de contratación? ¿Hasta qué punto este tipo de sindicalismo, como el que hemos visto y creemos haber comprendido, es funcional a los propios trabajadores en el mediano y largo plazo?

Las respuestas a estas preguntas quizás algún día puedan transformarse en un auténtico programa de investigación.

Bibliografía

- ANGROSINO, M.** (2009). Etnografía e Observatão participante. En Flick Uwe. Coleção Pesquisa Qualitativa, Brasil.
- ARBORIO, A.; FOURNIER, P.** (1999). L'Enquête et ses méthodes: l'Observación Directe Ed. Nathan Université. Francia.
- BEAUD, S. y WEBER, F.** (1998). Guide de l'enquête de terrain. Ed La Decouverte coll. Repères. Francia.
- BECKER, H.** (2005). Epistémologie de la Recherche Cualitative. En Blanc A. y Pessin A. L'Art du Terrain. Mélanges offerts a Howard Becker Ed. Francia
- BOUDON, R.** (2012). Croir et Savoir. Ed. La Dispute, Francia.
- FALS BORDA, O.** (1971). Ciencia propia y colonialismo intelectual. Ed. Nuestro tiempo 2ª edición. México.
- LEMIEUX** (2010). Problematizer. En Paugam Serge L'enquete sociologique Ed. Puf (págs. 27-52) Francia.
- MAUGERI, S.** (Compilador) (2001). Introducción de Délit de Gestion. Ed. La Dispute. Francia.
- MENDRAS, H. y OBERTI, M.** (2000). Le sociologue et son terrain. Ed. Armand Colin. Francia.
- PASSERON, J. C.** (2006). Le raisonnement sociologique. Albin Michel. Francia.
- PERETZ, H.** (1998). Les methodes en Sociologie, l'observation. Ed. La Découverte Francia.
- RODRIGUES BRANDÃO, C.** (org.) (1984). Repensando a Pesquisa participante. Ed. Brasiliense. Brasil.
- SUPERVIELLE, M. y ROBERTT, P.** (2013). Observación etnográfica en un contexto industrial. Aplicación práctica de algunos principios de investigación. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social. N°5. Año 3. Abril-setiembre 2013. Buenos Aires.
- WHITE RILEY, M. y NELSON, E.** (1976). A Observação Sociológica. Ed. Zahar Brasil.
- WHYTE FOOTE, W.** (1943). Street Corner Society, la structure d'un cartier italo- américain. Ed. la Découverte. 1995.



Culturas de seguridad y gestión del riesgo en la empresa CONAPROLE

Francisco Pucci¹ - Soledad Nión²

El trabajo se propone explorar los modelos de seguridad que se implementan en la empresa CONAPROLE, principal productora de leche en el país. Estos modelos se diferencian de acuerdo a la mayor o menor exposición a los riesgos que comportan para los trabajadores. A su vez, estos modelos se asocian al desarrollo de culturas de seguridad específicas, que organizan las prácticas cotidianas de la empresa. En el caso de CONAPROLE, se observa un desfase entre los valores declarados en relación a la seguridad y los supuestos básicos interiorizados por los actores, que se articulan en torno a la prioridad que la empresa le da a la calidad de la producción, lo que genera contradicciones en los procesos de gestión del riesgo, que terminan descansando en la cultura de oficio de los trabajadores.

Introducción

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) fue fundada en 1936, para asegurar, por un lado, la venta de un núcleo importante de productores de leche del Uruguay y, por otro lado, para garantizar el consumo de leche a la población del país. Con el paso del tiempo, la empresa se fue modernizando y la producción se fue diversificando hacia diferentes productos derivados de la leche, como el queso, el dulce de leche y los helados, entre otros. Este proceso de modernización permitió que CONAPROLE trascendiera el abastecimiento local y exportara sus productos a mercados regionales e internacionales. En la actualidad, CONAPROLE, si bien no tiene el monopolio de producción láctea, es la empresa claramente hegemónica en esta rama de actividad.

Este trabajo se desarrolló en el marco de un convenio entre el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República, Uruguay), la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Obreros y Emplea-

- 1 Doctor en Sociología. Profesor Titular del Departamento de Sociología. Área de Investigación: Sociología de la Gestión de los Recursos Humanos. francisco.pucci@cienciasociales.edu.uy
- 2 Máster en Sociología. Profesora Asistente del Departamento de Sociología. Área de Investigación: Sociología de la Gestión de los Recursos Humanos. msnion@gmail.com

dos de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. El objetivo del convenio fue realizar un diagnóstico de la organización del trabajo y de las relaciones laborales en la empresa CONAPROLE, para generar insumos que permitan superar dificultades de funcionamiento y de relacionamiento entre los diferentes actores y miembros de la organización.

En el marco del convenio, se comenzó un estudio sobre el sistema de seguridad laboral de la empresa, cuyos objetivos específicos fueron:

1. Describir cuáles son los riesgos relevantes en la empresa CONAPROLE, desde la percepción de los distintos actores involucrados.
2. Explorar cuáles son las estrategias de los distintos actores involucrados (seguridad, gerencia general, jefes/as, operario/as) frente a esos riesgos percibidos.

El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados de este estudio, que tuvo lugar a mediados del año 2012. Para lograr este objetivo, el trabajo se compone de tres partes: a) una discusión en torno a los principales modelos de seguridad que se implementan a nivel internacional; b) una definición y una discusión sobre el concepto de cultura de seguridad y de sus diferentes tipos; y c) el análisis del modelo y de la cultura de seguridad para el caso de CONAPROLE. También se realizará una breve reseña metodológica y al final se desarrollarán las conclusiones del trabajo.

1. Del modelo de Reason al enfoque sistémico de la seguridad

El análisis de las políticas de seguridad implementadas por CONAPROLE requiere un breve desarrollo de la discusión más reciente respecto de los diferentes modelos de seguridad, sus ventajas y dificultades. El arquetipo de los modelos de seguridad sigue siendo el célebre modelo de placas o modelo de Queso Suizo (Swiss Cheese Model), desarrollado por Reason (1990). Dicho modelo mostró el valor de introducir los factores latentes en la representación de un sistema sociotécnico complejo, considerando todos los niveles estructurales que lo componen, dirección de empresa incluida (Marchitto, 2011). Desastres como el de Chernobyl, del Challenger, de Bhopal y de Three Miles Island (y sus sucesivas investigaciones), revelaron cómo el axioma implícito en el seno de muchas empresas, que definía la seguridad como la suma de una buena ingeniería, una tecnología fiable y unos buenos procedimientos, era antes que nada peligroso por el hecho de ignorar el componente humano de gestión y las habilidades de rescate del ser humano con respecto a la máquina. Asimismo, dicho axioma resultaba peligroso al ignorar la falta de investigación sobre las condiciones (latentes) en las cuales las acciones de los operadores se llevaban a cabo (Marchitto, 2011).

El modelo *del queso suizo* de Reason se apoya en tres supuestos:

- Que no se pueden suprimir por completo los errores de las personas que están en contacto con el trabajo.

- Que se necesitan defensas profundas para evitar la propagación de estos errores.
- Que hay que desconfiar de los errores de la organización y de gestión, que sin ser causa directa de los accidentes, ponen en peligro a las personas y a las defensas que están en contacto con el trabajo, privándolas de su eficacia.

Sin embargo, este modelo se ha vuelto obsoleto frente a la complejidad de los sistemas actuales. Como indica Alamberti (2013), dicho modelo se apoya en una descomposición del trabajo e ignora por completo los efectos del todo. Describe un modelo de accidente demasiado simplista que sólo toma en consideración los efectos de la propagación del riesgo y transmite el concepto de un modelo de seguridad único para todos. El enfoque sistémico, por su parte, plantea que la gestión de los riesgos en una empresa no se limita a la eliminación o reducción de accidentes (Alamberti, 2013). La gestión abarca también todo aquello que pueda poner en peligro su supervivencia, ya sean factores económicos, políticos, sociales y de credibilidad. La reducción de riesgos de un sistema socioprofesional es de hecho un concepto complejo que admite diversas definiciones: reducción de accidentes, reducción de riesgos laborales (despidos, carreras profesionales), y reducción de riesgos económicos. Todas son legítimas aunque a menudo se produce un antagonismo entre ellas. Incluso, muchas veces la reducción de los accidentes industriales es independiente o incluso presenta una correlación negativa con la reducción de accidentes laborales.

Siguiendo a Alamberti, el modelo de Reason adolece de cuatro defectos principales:

- Refleja un esquema de accidente lineal basado en la propagación de los fallos de las estructuras y de los componentes del modelo.
- Presupone que los accidentes son el resultado de fallos de un modelo de seguridad construido para ser, ante todo, estable. Esto genera un enfoque cartesiano porque descompone el universo profesional en partes y defiende la verificación de los puntos débiles de cada uno como posible origen del fallo total del sistema.
- Sugiere un progreso de seguridad orientado a buscar y eliminar las causas del fallo, dando prioridad a las causas latentes sobre las patentes, y frenar la propagación de los fallos aplicando placas de defensa. El sistema se orienta hacia un modelo basado en evitar o reducir la exposición a los riesgos para aumentar la seguridad. No obstante, vivir con la exposición voluntaria al riesgo forma parte de la estrategia de muchas empresas.
- Comparte implícitamente el concepto de un modelo único de seguridad basado en la eliminación progresiva de los errores y los accidentes hasta su total eliminación. Cuanto más seguro se vuelve un sistema, más difícil será sobrevivir a posteriores accidentes, aumentando la probabilidad de que estos accidentes se vuelven acontecimientos anómalos.

Buscando superar el modelo clásico de seguridad, Alamberti propone una visión sistémica de los riesgos, sobre el supuesto de que la puesta en práctica de los modelos de seguridad acarrea un conjunto de problemas que no son contemplados por la teoría clásica de los riesgos. El problema más complicado para este autor es el de la migración progresiva del sistema y el aumento mecánico de las violaciones conforme la seguridad mejora. La migración de las prácticas es inherente a todos los sistemas. Ningún modelo de seguridad puede absorber desde su concepción todas las transformaciones de su coyuntura económica, por lo tanto, es normal que un sistema de prácticas migre para adaptarse a estas nuevas coyunturas y, en consecuencia, resulta lógico tener que readaptarlo periódicamente relajando en ocasiones las obligaciones, en lugar de reforzarlas. Las condiciones técnicas y laborales introducen progresivamente nuevas obligaciones laborales. La degradación constante de las condiciones, no se traduce inmediatamente en malos resultados o incidentes, al tiempo que estandarizan las migraciones, generando un estándar ilegal-legal que permea el cumplimiento de las normas de seguridad (Alamberti, 2013).

Desde esta perspectiva, si la exigencia es grande pero la demanda de producción se mantiene o aumenta, el número de violaciones crece mecánicamente y el sistema empieza a migrar. La migración de las prácticas en ese ámbito ilegal-legal abre brechas para la tolerancia social a las violaciones de procedimiento. Si no se pone remedio, algunos individuos, más propensos que otros a ser autónomos, extienden rápidamente estas autorizaciones locales a todas las prácticas. La manera de controlar estos procesos es a través de la autoridad del grupo, en base a un sistema de vigilancia recíproca, acordado entre los miembros del grupo con la complicidad de los supervisores.

2. La teoría de la resiliencia

Otro enfoque alternativo a la teoría de Reason es la teoría surgida de la ingeniería de la resiliencia. Este modelo propone definir a los sistemas técnicos como sistemas sociotécnicos, en los cuales su rendimiento se basa en la interacción entre factores sociales y factores técnicos. A diferencia de los enfoques tradicionales del riesgo, que se basan en las descripciones detalladas de los componentes del sistema, resumidos en un mapa de riesgos, la ingeniería de la resiliencia busca formas de mejorar la capacidad de organización para generar procesos resistentes y flexibles (Hollnagel, E; 2011). Dado que los sistemas sociotécnicos son siempre poco específicos, los individuos y las organizaciones deben ajustar su actuación a las condiciones existentes para lograr sus objetivos. Estos ajustes siempre son aproximados, por lo que, en la perspectiva de la ingeniería de la resiliencia, los accidentes o fallos no representan una avería o un mal funcionamiento de las funciones normales del sistema, sino más bien representan la falta de adaptaciones necesarias para hacer frente a la complejidad del mundo real (Hollnagel, E; 2011).

Mientras que las prácticas tradicionales especifican las condiciones de rendimiento bajo la premisa de que la seguridad se puede lograr mediante el cumplimiento de

normas y procedimientos, la teoría de la resiliencia supone que los individuos y organizaciones deben ajustar sus actividades a las exigencias y recursos disponibles. En muchos sistemas sociotécnicos, debido a su carácter inflexible, las condiciones laborales nunca coinciden exactamente con lo prescrito. Los trabajadores y las organizaciones adaptan su rendimiento a las condiciones existentes, pero dado que los recursos son siempre finitos, dichos ajustes son aproximados. Los ajustes aproximados son la razón por la cual el sistema funciona, pero también por la cual tiene fallos (Hollnagel, E; 2011).

Otra diferencia con las teorías tradicionales es que éstas suponen que las fallas o los accidentes se deben a un mal funcionamiento de los componentes del sistema, en tanto la teoría de la resiliencia entiende los accidentes como el resultado de combinaciones inesperadas del sistema. A diferencia de los métodos tradicionales, que asumen que los fallos y los buenos resultados son de naturaleza diferente, y que alcanza con estudiar los fallos, la ingeniería de la resiliencia reconoce que las cosas van mal y bien de la misma manera. El hecho de que los resultados sean diferentes no significa lógicamente que los procesos subyacentes también deban ser diferentes. La variabilidad de múltiples funciones puede combinarse de manera inesperada, lo que conlleva a consecuencias desproporcionadas y hace que se produzca un efecto no lineal (Hollnagel, E; 2011).

Los accidentes pueden ocurrir sin que haya habido fallos anteriores. Estos resultados son fenómenos emergentes, que no se pueden atribuir ni predecir a partir de las características de los componentes. La variabilidad de una serie de funciones puede resonar, es decir reforzarse entre sí y conseguir que la variabilidad de una función se vuelva inusualmente alta. Las consecuencias pueden extenderse a través de combinaciones muy ajustadas, más que por vínculos de causa efectos identificables y numerables. La analogía de la resonancia hace hincapié en que este es un fenómeno dinámico, por lo tanto, no atribuible a una combinación simple de los vínculos causales. La resonancia funcional se puede definir como la señal detectable que emerge de la interacción no intencionada de las variabilidades cotidianas de muchas señales.

La tercera gran diferencia es que las teorías tradicionales plantean que la seguridad de un sistema es un tema específico que no debe mezclarse con los problemas de productividad y rendimiento del sistema, en tanto la teoría de la resiliencia plantea que no se puede aislar el tema de la seguridad del proceso productivo central, por lo que la seguridad debe implicar mejoras y no restricciones del sistema (Hollnagel, E; 2011).

Estas perspectivas ancladas en la ingeniería y en las ciencias duras tienen sus correlatos en perspectivas más sociológicas. En este sentido, el trabajo clásico de Perrow (1999) mostró cómo determinados sistemas sociales inducen inevitablemente la presencia de riesgos, debido a su propia estructura. En cada sistema social, la presencia de estos riesgos sistémicos es un indicador de la cultura de riesgo de dicho sistema. Perrow trata la organización como un sistema abierto, es decir, un sistema para el cual los intercambios con el medio ambiente son esenciales para su viabilidad. En este plano, considera que los sistemas poseen propiedades específicas que son los vectores de

su infiabilidad. Una de estas propiedades es la presencia de interacciones complejas, que define como interacciones de secuencias anormales, no planificadas, y no atendidas y que no son ni visibles ni comprensibles inmediatamente por los operadores. Otro elemento es el acoplamiento entre tecnología y proceso de trabajo, que califica como acoplamiento ajustado. Siguiendo a Bourrier (2001), esta propiedad tiene implicaciones precisas: las secuencias del proceso de trabajo son invariantes y no hay espacios dentro del mismo. Sólo hay un método para alcanzar un fin, y hay pocas alternativas en el suministro de material, equipamiento o personal. El conjunto de estos elementos determina capacidades de sustitución limitadas y dificultades de adaptación frente a elementos imprevistos.

Numerosas consecuencias se desprenden de esta perspectiva. Primero, es imposible protegerse de las miles de formas a través de las cuales el sistema se puede derrumbar. Tampoco es útil ni tiene sentido analizar a fondo la organización, ya que no aporta posibilidades de cambio. Por último, los defectos de concepción son irremediables debido a que la tecnología empleada en estos sistemas requiere de una perfección inalcanzable en los intercambios de información (Bourrier, M.; 2001). La única posibilidad para los trabajadores es acomodarse a una organización cuyos principios no aseguran performances seguras. Las formas de redundancia que existen en los sistemas de alto riesgo aumentan las complejidades del sistema aumentando las fuentes de fallos o accidentes.

La segunda corriente de análisis organizacional se centra en el estudio de los procesos a partir de los cuales las organizaciones de alta fiabilidad logran reducir los márgenes de accidentalidad en su funcionamiento concreto. Estas organizaciones actúan sobre la base de la construcción de relaciones de confianza con el público y entre los grupos e individuos que participan de la misma. En relación a las organizaciones de alta fiabilidad, La Porte (2001) define las características que distinguen a las llamadas H.R.O (High Reliability Organizations): a) un uso flexible de la noción de autoridad y una estructura organizativa específica para situaciones de crisis; b) el reconocimiento activo, en todos los niveles, de las competencias, de los trabajadores y de su dedicación a la tarea; c) los esfuerzos constantes de formación; d) la existencia de un sistema que recompensa la detección de errores y valoriza la trasmisión y puesta en común de las informaciones al respecto; e) la presencia de actitudes que favorecen o frenan el cambio técnico u organizacional, de acuerdo a los juicios positivos o negativos que sus efectos producen en la fiabilidad organizacional.

El eje de estas organizaciones de alta fiabilidad es lograr la confianza institucional tanto a nivel interno de la organización como en relación a otros organismos públicos y privados y al público en general. Junto a la noción de confianza institucional, La Porte enfatiza las condiciones que garantizan la constancia de esta confianza a lo largo del tiempo. En este sentido, debe existir la voluntad política e institucional de la organización y su determinación de conservar esta confianza y la capacidad de la organización de mantener intactos sus compromisos a lo largo del tiempo.

Alamberti (2013) propone una síntesis de esta discusión definiendo la seguridad de los sistemas complejos como el resultado de la suma de dos entidades: el de la seguridad derivada de las normas y procedimientos (seguridad regulada), y el de la inteligencia adaptativa de los operadores y los profesionales del sistema (seguridad gestionada).

Los sistemas artesanales poseen una escasa regulación: su seguridad total es bastante modesta y depende básicamente de las cualidades y competencias de los operadores, por lo que hay que tener en cuenta las fuertes variaciones inherentes a las mismas. En cambio, la capacidad de adaptación a las condiciones fortuitas de estos expertos es destacable y forma parte de su día a día. Un ejemplo clásico de este tipo de sistemas es el hospital, donde la seguridad de los pacientes depende en buena medida de las capacidades profesionales de los médicos.

En cambio, los sistemas muy seguros cuentan con numerosos procedimientos y prohibiciones. Su nivel de seguridad es elevado, pero la capacidad de adaptación de sus operadores es muy reducida puesto que no se exponen a situaciones riesgosas y, por lo tanto, carecen del entrenamiento necesario para trabajar fuera del marco procedimental. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el de la aviación, en la cual los pilotos deben seguir estrictamente procedimientos y normativas sin margen para la experimentación en situaciones de riesgo.

En esta línea, Alamberti sostiene que la idea de un modelo único de seguridad aplicable a todos los sistemas es inocente. La seguridad es una construcción social que se adapta a la demanda. Existen varias respuestas posibles que generan distintos modelos de seguridad (resiliente, HRO, ultraseguro) que poseen su propia lógica de seguridad, sus ventajas y sus límites. Estos modelos se diferencian unos de otros en función de la balanza que muestren entre el nivel de seguridad y el de adaptabilidad.

- La primera solución consiste en suprimir la exposición a los riesgos. Ejemplos: industria aeronáutica y nuclear.
- La segunda solución consiste en aceptar la exposición aceptando las normas y los procedimientos.
- La tercera solución es aceptar la exposición al riesgo en condiciones no reguladas.

De estas tres premisas se deducen tres modelos de seguridad:

El modelo resiliente: la búsqueda de la exposición al riesgo constituye la esencia misma del modelo económico. La seguridad está asociada a ganar, sobrevivir, y sólo los ganadores transmiten sus conocimientos sobre seguridad a través de sus relatos.

El modelo de la HRO: hay que gestionar los riesgos diariamente aunque el objetivo principal sea controlarlos y no exponerse a ellos. La seguridad depende del grupo,

de la organización, de los roles y las competencias de cada uno. El modelo analiza sus fracasos e intenta comprender sus causas.

El modelo de los sistemas ultraseguros: requiere operadores equivalentes, intercambiables. Apuesta a las cualidades de supervisión que son las que van a evitar que estos operadores se expongan a los riesgos más fortuitos, limitando dicha exposición a una lista finita de fallos y dificultades.

Estos tres modelos de seguridad son radicalmente diferentes, responden a condiciones económicas distintas, tienen su propia lógica de optimización, su propio sistema de formación, sus ventajas y sus límites. Esto implica que estos modelos no son miscibles, por lo que las empresas u organizaciones deben necesariamente optar por alguno de ellos. Tampoco es sencillo el pasaje de un modelo a otro en la misma organización: las intervenciones que se realizan pueden mejorar o modificar aspectos del modelo pero no su lógica básica. Para pasar de un modelo a otro se precisa de un elemento de fractura que abarque toda la profesión y su economía.

3. La cultura de seguridad

Los modelos de seguridad reseñados anteriormente implican diseños organizacionales diferentes, lo que también comporta que los trabajadores y responsables le den diferentes significados a sus conductas y a sus comportamientos. Esto implica que los diferentes modelos de seguridad generan también diferentes culturas de seguridad. El concepto de la cultura de seguridad, según Simard (1998) comprende: a) los valores, creencias y principios en los que se basa el sistema de gestión de la seguridad, y b) la serie de comportamientos y prácticas que ilustran y refuerzan esos principios básicos. Estas creencias y prácticas constituyen *significados* generados por los miembros de la organización en la elaboración de estrategias aplicables a cuestiones como los riesgos profesionales, los accidentes y la seguridad en el trabajo. Estos significados (creencias y prácticas), no sólo son compartidos en cierta medida por los interlocutores en el lugar de trabajo, sino que constituyen una fuente primordial de actividad motivada y coordinada en el campo de la seguridad en el trabajo.

La cultura de seguridad forma parte de la cultura general de la organización. En este sentido, Schein (1992) propone tres niveles para el análisis de la cultura en una organización:

- a. los *artefactos* son las estructuras y procesos organizacionales visibles. Incluyen el ambiente físico de la organización. Estos fenómenos, aunque son fáciles de observar, son más difíciles de descifrar, pero nos dan claves para estudiar la cultura existente en la empresa;
- b. los *valores aceptados y declarados* incluyen las estrategias, objetivos, filosofías (justificaciones adoptadas), validados por un proceso social compartido en la organización. Los valores aceptados y declarados predicen buena parte del comportamiento de sus miembros, ya que se traducen en reglas y normas de

comportamiento que reflejan racionalizaciones y aspiraciones de los mismos. Sin embargo, algunas veces pueden ser contradictorios entre sí, o en relación al comportamiento observado. Esta es la razón de que en las organizaciones existan grandes áreas del comportamiento que, aparentemente, permanecen sin explicar;

- c. los *supuestos básicos* son aquellas medidas que han solucionado problemas de adaptación externa o de integración interna y que, a fuerza de repetirse con éxito, llegan a asumirse por los miembros de la organización en forma automática hasta convertirse en creencias, percepciones, pensamientos y sentimientos. Estos supuestos son interiorizados y tomadas como verdaderas por los miembros de la organización de manera automática, constituyendo la fuente última de los valores aceptados y declarados y de los artefactos.

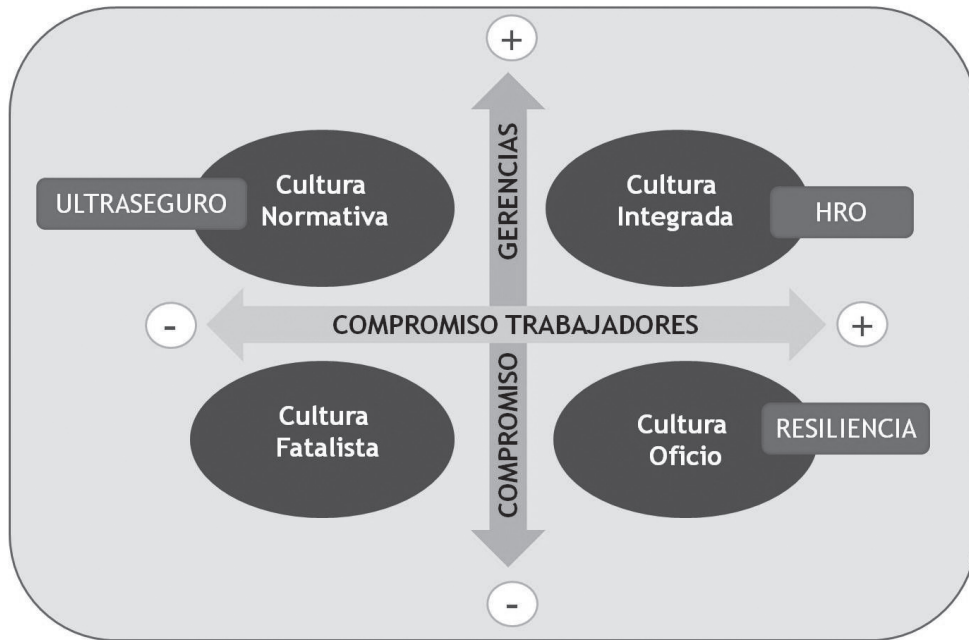
Los *supuestos básicos* de una organización no están sujetos, generalmente, al debate o la controversia, de manera que son muy difíciles de cambiar, lo que introduce estabilidad y permanencia a la organización. Más aún, el conjunto de supuestos básicos tanto en el plano individual como en el grupal son mecanismos de defensa psicológica y cognoscitiva que permiten a la organización continuar funcionando. Los supuestos básicos se relacionan con aspectos fundamentales de la vida organizacional como: la naturaleza del tiempo y del espacio, la naturaleza humana y las actividades humanas, la naturaleza de la verdad y cómo es descubierta, la forma correcta en que los miembros de la organización deben relacionarse entre sí, la importancia relativa del trabajo, la familia y el desarrollo personal, entre otros aspectos fundamentales (Schein, 1992). En suma, para Schein la cultura organizacional se constituye por un patrón de supuestos básicos subyacentes e inconscientes, mientras que los artefactos y los valores son sus manifestaciones. Cuando los valores no permiten explicar algunos patrones de comportamiento de grupos o áreas de la organización, se tiene que descubrir los supuestos básicos que integran la cultura organizacional para entenderlos y explicarlos. Si los integrantes de una organización comparten un supuesto básico de manera firme, cualquier comportamiento que se aleje del mismo, es considerado como no aceptable. De esta manera el autor señala que, en muchas ocasiones, el tratamiento de la cultura como variable se remite al ámbito de los artefactos y los valores, es decir en las manifestaciones superficiales y observables de la cultura, pero no se llega al elemento que genera dichas manifestaciones: los supuestos básicos, que no son observables.

Profundizar en la comprensión de los supuestos básicos en las organizaciones, implica conocer los modelos interpretativos compartidos que caracterizan la gestión del riesgo y de la seguridad en una organización. Por ejemplo, la selectividad y contradicciones en las actitudes hacia el riesgo y la seguridad, pueden ser vistas no tanto como elementos no percibidos sino como comportamientos tendientes a tratar de proteger valores y formas institucionales aceptados por la organización y/o por el colectivo de trabajadores (Douglas, 1996). La gestión de la seguridad se encuentra enmarcada en la cultura organizacional general de las empresas e instituciones, donde las cons-

trucciones de poder entre los miembros, la definición de los objetivos productivos, como así también el relacionamiento con el medio, serán contexto y condición para su desarrollo.

En términos más específicos, el ICSI (Instituto para la Cultura de la Seguridad) desarrolló cuatro grandes tipos de cultura de seguridad, en función de la mayor o menor participación de los dos actores más involucrados en esta temática: la dirección de la organización y los trabajadores ligados directamente a la producción. Estos cuatro tipos de cultura de seguridad son: a) la *cultura fatalista*, que presupone que los accidentes son producto del destino o de la fatalidad, ningún actor se preocupa por el tema de la seguridad; b) la *cultura de oficio*, que se caracteriza por una débil participación de la dirección en los temas de seguridad; los trabajadores autorregulan sus comportamientos en relación a la seguridad, sobre la base de la elaboración de normas de grupo de aplicación cotidiana, sustentadas en el conocimiento técnico del oficio; c) la *cultura normativa*, sustentada en el respeto a las normas y procedimientos definidos por los expertos y por las gerencias. Este tipo de cultura implica un rol preponderante de la dirección en la elaboración y desarrollo de medidas de seguridad; y d) la *cultura integrada*, basada en una situación en el cual la dirección asume el liderazgo en materia de seguridad, pero favorece la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y en la aplicación de medidas concretas.

Estos diferentes tipos de cultura de seguridad se pueden asociar a los modelos de seguridad analizados anteriormente (salvo el primero, que se corresponde con la ausencia de políticas de seguridad y de acciones generales o locales tendientes a mejorar la seguridad del sistema (Ver figura 1).

Figura 1: Tipos de cultura y modelos de seguridad

Fuente: elaborado en base a investigaciones del Programa PREFALC.

La *cultura de oficio* se articula con los modelos artesanales escasamente regulados, basados en las competencias y habilidades de los operarios que deben adaptar sus conductas a los diferentes riesgos a los cuales se enfrentan. La lógica de este tipo de cultura se acerca a la teoría de la resiliencia, en la cual la exposición a los riesgos es la que genera las capacidades del sistema para superarlos. La *cultura normativa* se asocia a los modelos ultraseguros, en los cuales la seguridad está fuertemente regulada a través de numerosos procedimientos y prohibiciones, pero en la cual la capacidad de adaptación de los trabajadores es reducida. Por último, la *cultura integrada* se asocia al modelo de la HRO, que se basa en la gestión continua de los riesgos a través de una buena interacción y comunicación entre los diferentes segmentos laborales y jerárquicos de la organización.

4. Aproximación metodológica

La discusión desarrollada hasta aquí nos permitirá analizar la situación concreta de la empresa CONAPROLE en la temática de la seguridad. Desde el punto de vista metodológico, la investigación utilizó una aproximación cualitativa, basada en la comprensión de la experiencia de los individuos desde su propia perspectiva, tomándolos como sujetos portadores y productores de significado. El diseño fue exploratorio y abierto, en

la medida en que se reservaba la posibilidad de que se produjese información no contemplada de antemano en el diseño original (Ibáñez, 1992). Asimismo, tuvo un componente básico de corte exploratorio-descriptivo. La técnica de recolección de los datos se basó en la utilización de entrevistas semiestructuradas a una muestra de trabajadores de los diferentes puestos y áreas a cubrir. Se contó con una pauta mínima que guió la conversación, contemplando los ejes analíticos de interés, pero conservando la libertad de profundizar en aspectos que pudiesen emerger en las mismas y fuesen considerados pertinentes para la investigación.

La estrategia de aproximación al campo, dadas las dimensiones de la empresa y la multiplicidad de procesos de trabajo en ella, se inició con una primera entrevista exploratoria con la Gerencia de seguridad de la empresa, en la cual se definieron los lugares específicos de interés para el estudio: 1) Taller de mantenimiento ubicado en García Morales (Montevideo); 2) Algunas de las áreas de producción del Parque Industrial n° 21 –llamado también SIM– (Montevideo). Al momento de finalización del presente trabajo, se realizaron 14 entrevistas en el Taller de mantenimiento, quedando pendiente la realización del trabajo de campo en el Parque Industrial. En este trabajo realizaremos una síntesis de los resultados de las entrevistas, sin un análisis textual de las mismas, el cual resulta imposible de realizar por razones de espacio.

5. Los modelos de seguridad en CONAPROLE

Las políticas implementadas por la dirección de CONAPROLE se acercan, en su diseño original, a los modelos ultraseguros reseñados más arriba, en los cuales la regulación y el desarrollo de procedimientos son los dispositivos para alcanzar los máximos niveles de seguridad en una organización. Las normativas de seguridad tienen diferentes fuentes nacionales e internacionales, a los que se suman procesos de construcción de procedimientos, mapas de riesgo, y diferentes modos de control y supervisión.

Este modelo de seguridad tiene su correlato en el desarrollo de una fuerte cultura normativa a nivel de dirección. El diseño de seguridad comprende una supervisión permanente del cumplimiento de la normativa y de los procedimientos a través de reportes de los jefes o encargados de sección. Este sistema se aplica para las diferentes normativas vinculadas a la producción, calidad y seguridad. Sin embargo, en la práctica, los informes sobre seguridad tienen menor presencia que los vinculados a los temas de calidad y producción. Esta diferencia de énfasis tiene relación con una dimensión relevante para comprender la política de seguridad en la empresa: la priorización de la calidad de la producción en relación a la seguridad, aspecto que permea también la elaboración de normas y valores ligados a la seguridad. La empresa ha desarrollado una política de certificación en ese tema, que no tuvo su correlato en el tema de la seguridad.

La preocupación por la seguridad en un componente importante de las políticas de la empresa, pero la misma queda a nivel de valor declarado. En la dinámica cotidiana, las normas de seguridad quedan relegadas frente a los requerimientos de calidad y

productividad, aunque no exista necesariamente una oposición entre ambas exigencias. Siguiendo a Schein, si bien la seguridad constituye un valor explícito en el discurso gerencial de CONAPROLE, los supuestos básicos de funcionamiento se articulan en torno a la productividad y a las exigencias de calidad en la producción. Este desfase entre valores declarados y supuestos básicos en relación a la seguridad, se expresa en que la empresa invierte en la compra de elementos de protección personal y en dispositivos de seguridad, pero no se preocupa por desarrollar un sistema normativo dotado de los dispositivos necesarios para obligar a los trabajadores a utilizar los mismos de manera correcta. Las dificultades para aplicar sanciones en caso de transgredir las normas de seguridad es un claro indicador de las dificultades que tienen los encargados de seguridad para implementar una cultura normativa que acompañe al diseño de seguridad del tipo ultraseguro centrado en normas y procedimientos de seguridad.

La cultura de seguridad de la empresa CONAPROLE hay que comprenderla en el marco de lo que constituye la cultura general de la empresa. Como plantean Supervielle y Robertt (2012), el proceso de trabajo en CONAPROLE está atravesado por diferentes tensiones, entre las que se destaca la fuerte presión por lograr altos niveles de productividad. Las normas generales de producción se cumplen cuando la misma sigue un ritmo rutinario. Cuando la demanda del mercado requiere que se aumente la productividad, muchas normas relacionadas con la producción, entre ellas, las normas de seguridad, no son cumplidas. En otras palabras, las normas se cumplen hasta que el imperativo de la productividad diga lo contrario.

Esta *presión productivista* señalada por Supervielle y Robertt es una de las causas de la tendencia a la normalización del desvío en términos de seguridad laboral. Como lo indica Boissières (2012), este fenómeno se presenta cuando la transgresión de reglas importantes de seguridad no sólo es ampliamente conocida sino además tolerada y aceptada por los pares y la jerarquía. La fuerte tensión entre las presiones económicas y las exigencias de seguridad favorece este proceso, en el cual los actores administran esta tensión desviándose habitualmente de ciertas normas de seguridad porque estiman que su aplicación rigurosa es negativa para el desempeño económico de la empresa. Estas características del proceso de trabajo en CONAPROLE son resaltadas por los responsables de seguridad de la empresa.

La segunda fuente de normalización del desvío, según Boissières (2012), se produce cuando las reglas y los procedimientos formales de seguridad son establecidos sin consultar a quienes los van a utilizar. En estos casos, es probable que a los supervisores y empleados les parezca normal transgredir esas reglas para poder continuar haciendo su trabajo. Esta fuente de normalización del desvío, en el caso de CONAPROLE, se puede analizar a través de las relaciones entre el sindicato y los directivos.

Supervielle y Robertt (2012) muestran que en la empresa CONAPROLE hay una fuerte oposición entre las jerarquías de la empresa y el sindicato, que supera la clásica oposición empresa / trabajadores que estructura la sociedad capitalista moderna. En el caso de CONAPROLE, la oposición implica altos grados de desconfianza entre ambas

partes para todos los temas vinculados a la actividad productiva. A diferencia de otros contextos, en los cuales la acción sindical se remite a la discusión de temas salariales o de condiciones de trabajo puntuales, en el caso de CONAPROLE el sindicato interviene en temas tan diversos como los de producción, calidad y reclutamiento de trabajadores. El marco de desconfianza general que atraviesa las relaciones entre gerencia y sindicato no constituye el mejor espacio para articular acciones conjuntas de prevención de los riesgos laborales. La implementación exitosa de políticas de seguridad se basa en la recuperación y comunicación del saber práctico de los trabajadores y de su capacidad de generar, de manera colectiva, reglas cotidianas adecuadas a los contextos de incertidumbre. Estos procesos requieren de un marco de confianza institucional que no está presente en CONAPROLE, al menos en un análisis macro-organizacional.

En los temas de seguridad, el sindicato tiene una actitud de reivindicación permanente para que la empresa renueve los equipamientos de seguridad personales, los materiales y la tecnología para incrementar los niveles de seguridad. Sin embargo, la preocupación por la utilización de los elementos de protección personal está presente en algunos dirigentes sindicales, pero no parece ser una actitud generalizada en todos los niveles del sindicato. De alguna manera, el sindicato de CONAPROLE, más allá de valorar explícitamente la seguridad, también parece haber asumido como supuesto básico de su accionar, la lógica productivista dominante en la empresa. Este desfase entre valores y supuestos, en el sentido de Schein, puede explicar las ambivalencias observadas en la actitud del sindicato hacia la seguridad.

Un clima social tenso también propicia el desvío normalizado, debido a que los supervisores no insisten demasiado en la aplicación de los procedimientos de seguridad para evitar crear un mayor descontento y para mantener la cooperación necesaria para el logro de los objetivos de producción (Boissières, 2012). En el caso de CONAPROLE, Supervielle y Robertt (2012) observan una fuerte oposición entre supervisores y trabajadores; las jefaturas inmediatas son percibidas por los trabajadores como fuertemente autoritarias y con componentes importantes de arbitrariedad. La evolución de los modelos de gestión del personal de CONAPROLE llevó a un abandono paulatino del clásico paternalismo que permeó originalmente a la empresa, asentado en un conjunto laxo de controles sociales basados en la idea de pertenencia a una entidad común. La modernización de la producción y el cambio generacional típico de las grandes empresas de larga duración sustituyó gradualmente el paternalismo por una relación más utilitaria, orientada casi exclusivamente al aumento de la productividad, sin una preocupación por las condiciones de trabajo a las cuales son sometidos los trabajadores. Las múltiples tensiones que atraviesan la organización social de la empresa apuntan a la construcción de un mundo social en el cual no existen normas generales que regulen la convivencia.

Sin embargo, pese a todas las dificultades señaladas para implementar una cultura normativa desde la dirección, la tasa de accidentes de trabajo no es muy alta, aunque ocurrieron algunos accidentes graves en el pasado. Como indican Supervielle y Robertt (2012), un aspecto resaltable de las relaciones sociales en CONAPROLE es

que las mismas están atravesadas por múltiples acuerdos tácitos, los que suplen la ausencia de normas formales en la organización. Estos acuerdos tácitos se expresan, en el campo de la seguridad, en procesos de construcción de normas informales que permiten el desarrollo de conductas y actitudes que minimizan la exposición al riesgo de los trabajadores.

Este aspecto lo podemos relacionar con otra dimensión que también señalan Supervielle y Robertt (2012). Los autores destacan la presencia, en los trabajadores de CONAPROLE de una identidad con el trabajo afirmada en principios éticos. Tales principios implican un compromiso con la producción y con el producto, el orgullo del trabajo que se realiza y la preocupación con un producto alimenticio consumido por buena parte de la población.

Las observaciones de campo indican la presencia predominante de una cultura de oficio como mecanismo de regulación de la conducta de los trabajadores en relación a la seguridad, como prolongación de las normas informales que regulan la producción. Las normas de protección de los trabajadores de los riesgos laborales no se imponen desde la dirección o desde las jefaturas, sino que se construyen en la interacción cotidiana de los trabajadores.

También en este plano podemos observar una disociación entre valores y supuestos básicos en la cultura de seguridad de la empresa. Desde la dirección, los valores explícitos se orientan al desarrollo de una cultura normativa que privilegia los controles y procedimientos y el respeto a las normas de protección y de seguridad. Sin embargo, el supuesto básico sobre el que se asientan las políticas de seguridad es la capacidad de los trabajadores para autorregular su conducta en función de sus conocimientos técnicos y su pericia laboral. Este supuesto también es asumido por los trabajadores, los cuales, si bien reivindican elementos de protección personal y mejoras en la infraestructura, depositan su confianza en las normas informales de grupo como mecanismo de regulación frente a las situaciones de riesgo laboral.

Conclusiones

La principal evidencia que surge del análisis de la cultura de seguridad en CONAPROLE es que la preocupación por el aumento de la productividad y de la calidad de la producción no se acompaña de una preocupación similar por las condiciones de seguridad en las cuales se desarrolla el trabajo. La información relevada muestra la ausencia de políticas de seguridad integrales y sustentables, que abarquen no sólo el suministro de materiales de protección sino también el desarrollo de normativas claras y de políticas de capacitación del personal en esta materia, de forma proactiva más que reactiva.

Las normas vinculadas a la seguridad laboral surgen de las directivas de la empresa, pero tienen una legitimidad difusa, dependiendo de las dinámicas específicas de los diferentes sectores o grupos de trabajo. El cumplimiento de las normas tampoco

está asegurado por los supervisores, dadas las distancias que imponen en la interacción con los trabajadores y la arbitrariedad en la aplicación de las mismas que ejerce cada supervisor. A su vez, la acción del sindicato está orientada a rentabilizar las situaciones de riesgo sin preocuparse por reforzar los comportamientos de prevención y de cuidado de la salud de los trabajadores. Si bien el sindicato participa activamente de los espacios bipartitos de discusión sobre la seguridad en el trabajo, su acción parece más orientada a obtener logros reivindicativos puntuales que a demandar una política de seguridad de largo plazo en consenso con la empresa.

En este sentido, el modelo de seguridad de CONAPROLE se acerca a los modelos artesanales definidos por Alamberti, en los cuales encontramos una escasa regulación de la seguridad, que depende sustantivamente de las cualidades y competencias de los operadores. Esto implica que las prácticas de seguridad se inscriben en una brecha donde la escasa separación entre lo "legal y lo ilegal" genera espacios para la tolerancia social a las violaciones de las normativas y de los procedimientos de seguridad. La estandarización de este espacio difuso entre lo permitido y lo tolerado requiere, como lo plantea el enfoque de la resiliencia, de un proceso continuo de adaptación y un permanente ajuste de los individuos y de la organización a las situaciones de riesgo.

Desde el punto de vista de la cultura de seguridad de la empresa, si bien los valores de seguridad son aceptados y declarados, no expresan la verdadera situación de la empresa, que resolvió su adaptación al mercado sustancialmente a través de medidas que mejoraron la calidad y eficiencia del proceso productivo. Estas medidas se constituyeron en los supuestos básicos de la organización, fueron internalizados por sus miembros y articularon las creencias y percepciones dominantes. Los supuestos interiorizados que se construyeron en torno a la mejora de la calidad de la producción, se constituyen en la fuente más importante de valores para la organización, desplazando a un segundo plano a los valores construidos en torno a la seguridad. Esta situación involucra tanto a los directivos como al sindicato, los cuales participan, más allá de los conflictos cotidianos, de una cultura organizativa común.

La cultura de seguridad basada en el oficio que desarrollan los trabajadores de CONAPROLE es el resultado de esta articulación entre un modelo artesanal de seguridad, que requiere de una adaptación permanente de los operadores directos a las situaciones de riesgo, y una cultura organizativa cuyos supuestos básicos se estructuran en torno a la importancia de la producción para la adaptación externa de la organización. Si bien existen normas y procedimientos de seguridad, que tienen su origen en un diseño de seguridad altamente regulado, la normalización del desvío se transforma en una práctica permanente, por lo que la seguridad en la organización se desplaza hacia la capacidad de los operadores directos para exponerse y adaptarse continuamente a las situaciones de riesgo inherentes al proceso de trabajo en la organización. Las normas de seguridad de la empresa existen como una construcción autónoma de los diferentes grupos de trabajadores, en base a la solidaridad de grupo, pero sin referentes gene-

rales que le den el marco apropiado para transformarse en normas consensuadas por todos.

Bibliografía

- ALAMBERTI, R.** (2013). Construir la seguridad. Compromisos individuales y colectivos para afrontar los grandes riesgos. Editorial Mondus laborandi. Madrid.
- BOISSIÈRES, Iván** (2012). La cultura de seguridad. Libro de actas, Safetygranada. Los factores humanos de la seguridad operacional en los sistemas complejos de alto riesgo. Parque de las Ciencias de Granada, 16-18 de mayo 2012.
- BOURRIER, Mathilde** (2001). La fiabilité est une question d'organisation. En: Organiser la fiabilité. Sous la direction de Mathilde Bourrier. L'Harmattan, París.
- DOUGLAS, Mary** (1996). La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Paidó Studio, Barcelona.
- HOLLNAGEL, Erik** (2011). Prologue: The scope of resilience engineering. In E.Hollnagel, J. Paries, DD Woods and J. Wreathall (Eds.). Resilience engineering in practice: A guidebook. Farnham, UK, Ashgate.
- IBÁÑEZ, Jesús** (1992). "Perspectivas de la investigación social". En: García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Comp.) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Editorial Alianza Universidad Textos, Madrid.
- LA PORTE, T.** (2001). "Fiabilité et légitimité soutenable". En organiser la fiabilité. Sous la direction de M. Bourrier, l'harmattan.
- MARCHITTO, Mauro** (2011). El error humano y la gestión de seguridad: la perspectiva sistémica en las obras de James Reason. Revista Laboreal. Volume VII n°2. 2011, pp. 56-64.
- Programa **PREFALC**. Dispositivo Regional de Cooperación Universitaria Francia América Latina. Programa de Investigaciones, Formación y Difusión sobre Prevención del Riesgo Tecnológico. ICSI, Universidad de San Andrés, ITBA. Toulouse, Buenos Aires.
- PERROW, Charles** (1999). Normal accidents. Princeton University Press.
- REASON, James** (1990). Human Error. Nueva York: Cambridge University Press.
- SCHEIN, Edgar** (1992). Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- SIMARD, Marcel** (1998). Cultura y gestión de la seguridad. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Págs. 59.4- 59.8 OIT, Génova.
- SUPERVIELLE, Marcos, ROBERTT, Pedro** (2012). Análisis organizacional de la cooperativa de productores de leche. Primer informe. Mimeo.



Desafíos para una nueva gestión de recursos humanos: el caso de la industria del software

Mariela Quiñones¹ - Marcos Supervielle² - María Julia Acosta³ - Erika Van Rompaey⁴

En la medida en que nuestras sociedades se transforman y complejizan, también lo hace el trabajo y, en consecuencia, su gestión requiere de renovadas miradas para abordarlo. De esta forma, la gestión del trabajo y los Recursos Humanos (RR.HH.) como problemáticas empiezan a ser asumidas por las propias organizaciones y/o empresarios, muchos de los cuales han comenzado a desarrollar departamentos o perfiles profesionales orientados a esta actividad. Pero por otro lado, dicha cuestión empieza a ser visualizada también por el trabajador/a, que individual y/o colectivamente, organizados/as o no en sindicatos, la toman como un punto de referencia en la construcción de sus trayectorias laborales. El objetivo de la investigación es aportar conocimiento sobre esta problemática sociológica, a partir del análisis de las dinámicas que operan en un sector específico de la realidad productiva: el software.

Introducción

Dadas las características del trabajo en la industria del software, vinculadas a la producción eminentemente inmaterial, donde la incorporación de conocimientos es un componente predominante (también llamado trabajo cognitivo o producción simbólica), así como a un tipo de organización del trabajo que privilegia la producción por proyectos –en oposición a un mundo del trabajo organizado verticalmente en torno a un proceso productivo fuertemente racionalizado en sus tiempos y tareas de los trabajadores y muy centrado en el control directo–, este sector expresa una situación bastante inédita

- 1 Doctora en Sociología, Profesora Adjunta en régimen de dedicación total. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Sociología del Trabajo. mariela.quinones@cienciassociales.edu.uy
- 2 Profesor Titular de Sociología del Trabajo en el Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. marcos.supervielle@cienciassociales.edu.uy
- 3 Magíster en Sociología de la FCS. Asistente de investigación del Grupo de Investigación I+D Sociología de la Gestión de los Recursos Humanos. Proyecto: Lógicas de gestión en la industria del software. Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. majuac@gmail.com
- 4 Candidata a Doctora en Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona (España). Asistente de investigación del Grupo de Investigación I+D Sociología de la Gestión de los Recursos Humanos. Proyecto: Lógicas de gestión en la industria del software. Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. evrgiuria@gmail.com

en el mundo del trabajo uruguayo en cuanto a su organización y gestión, así como de los/as trabajadores/as que en él se ocupan, que abre un campo de interrogación y de problematización para la Sociología del Trabajo.

Mirado desde el punto de vista del/a trabajador/a, los mecanismos de gestión del trabajo que se aplican en sectores tradicionales como la industria resultan bastante ineficaces e inadecuados a sus experiencias laborales. Por ejemplo, al ser una actividad donde en muchas ocasiones el cliente asume un rol integrado al proceso de producción, especificando su demanda y/o requiriendo plazos, el trabajo se impregna de elementos de complejidad inéditos a resolver, que inciden en las condiciones en que se desempeña el trabajador/a. Definiciones estándares de calidad⁵ y/o eficiencia no se ajustan a estas modalidades de trabajo. Cuestiones centrales en la organización del trabajo tales como el control de tiempos y la división del trabajo, se ven modificadas frente a la necesidad de manejar la incertidumbre que se añade al trabajo de carácter cognitivo en la producción de software de manera inherente (ya que el mismo requiere la realización de actividades no emprendidas con anterioridad)⁶.

En la medida que se trata de una actividad que se sustenta en el desarrollo de la capacidad de adaptación a cambios tecnológicos muy rápidos, calidad y/o eficiencia en muchos casos quedan entonces ligadas a la capacidad de adecuarse a demandas cambiantes y diferenciadas. Esto junto al fuerte componente cognitivo, implican una fuerte disposición de los/as trabajadores/as a la autogestión, tanto de sus trayectorias internas en las empresas o proyectos, como de su carrera profesional.

Mirado desde el punto de vista de la empresa, se ensayan múltiples estrategias para alcanzar estos estándares de desempeño. Recursos como la externalización (*outsourcing*) de fases significativas del proceso productivo, o el polifuncionalismo (al interior de una empresa o proyecto) o la multiplicidad de formas de contratación, aparecen como prácticas frecuentes a las que éstas apelan para hacer frente a estas situaciones⁷.

Características tales como el fuerte componente de autogestión, la centralidad de la dimensión cognitiva en el contenido del trabajo realizado, la fuerte presencia del cliente (como tercer actor en la relación laboral), junto a la modalidad de organización típica del trabajo de este sector por proyectos, dan cuenta de un contexto objetivo bien diferenciado del modelo industrial que para la Sociología tiene amplias implicancias en

5 Por ejemplo, mientras en la industria la no conformidad del cliente con la calidad de un producto repercute sobre el productor por medio de la baja de precios o la devolución del producto, en la industria del software existe un lazo recursivo que implica nuevamente la intervención del trabajador.

6 Gómez, G. (2006:9) sostiene que “dominar el tiempo” en la industria del software implica “desarrollar elementos que hagan viable su manipulación. Es decir que puedan ordenarse las actividades en series temporales, cuyos límites sean pasibles de estimaciones probables. Para este fin las empresas desarrollan dispositivos de geometría variable, que se traducen en la forma de métricas. Éstas no sólo tienden a reducir el margen de error sino que también permiten la negociación con el cliente en tanto fijación de plazos de entrega y finalización del trabajo.”

7 Para un desarrollo de estas características del sector ver Novick et. al. (2004).

cuanto a la comprensión del mundo del trabajo. En este sentido, cabe preguntarse qué rupturas implican estos cambios en el contexto objetivo en que se desempeñan los trabajadores del software en el contexto subjetivo de actuación. Contextos objetivos que se especifican además por sostener interacciones tanto dentro como fuera del proceso de trabajo, en forma cara a cara y/o virtual, entre trabajadores/as que construyen relaciones sociales, centrados siempre en la búsqueda de conocimientos y en el mejor posicionamiento respecto a la actividad y a su dinámica y, por lo tanto, producen configuraciones subjetivas muy diferentes de las del mundo industrial⁸.

Por otra parte, esta definición de situación conlleva que en el proceso de producción del software aparezcan diversas tensiones entre aspectos que muchas veces pueden estar expresándose contradictoriamente aunque no necesariamente se vivan en forma problemática por los sujetos. Por ejemplo, el proceso de construcción de una dimensión colectiva del trabajo y el de una dimensión individual, inherentes a toda actividad laboral; o entre una autogestión hacia dentro de la empresa y otra para la trayectoria laboral, son aspectos que abren muchísimas interrogantes acerca de los cambios sociales en el mundo del trabajo y en la subjetividad de los/as trabajadores/as.

Estas reflexiones nos conducen a abordar la investigación a partir de una hipótesis de trabajo referida a que *“la gestión del trabajo y del/a trabajador/a en el sector se apoya menos en la acción de empresarios o gerencias de recursos humanos, para pasar a cumplir un rol mucho más preponderante la autogestión de los/as trabajadores/as individual y colectivamente considerados/as”*. Este fuerte componente de autogestión en la industria del software, modifica las condiciones bajo las cuales se desarrolla la gestión de RR.HH., siendo relevante conocer, desde el punto de vista sociológico, las problemáticas que se generan en torno a la misma.

La gestión del trabajo como problemática sociológica

Si analizamos los distintos abordajes del trabajo a través de la historia, podemos observar que junto a estos desarrollos aparece una mirada distinta sobre su gestión y la del trabajador. Resumidamente, el cambio de enfoque más evidente está ligado a la superación de la mirada del trabajo desde la perspectiva del esfuerzo físico, presente en los trabajos de Adam Smith en su estudio sobre la división del trabajo físico y mental en una fábrica de alfileres y retomada por Marx al señalar las contradicciones de esta división y la problemática del “trabajo objeto”, donde la desvalorización del trabajador está en relación directa con el valor atribuido a las cosas, al producto realizado, a su utilidad.

Dicha visión se rompe con Simon (1980), en la medida en que el trabajo pasa a ser observado bajo la perspectiva de la *resolución de problemas*. Con este cambio, el trabajo ya no se observa desde la mirada modélica del trabajo industrial, sino que

8 En este sentido, es una actividad donde las relaciones no se caracterizan por ser estructuradas, jerárquicas o rígidas, así como tampoco quedan restringidas al ámbito laboral.

empieza a adquirir importancia –incluso en este último- el carácter de prestación de un servicio. En la medida en que pasamos de un abordaje del trabajo bajo la perspectiva del esfuerzo a una mirada que lo concibe como una actividad que exige movilizar conocimientos orientados a la resolución de problemas, todo trabajo pasa a tener una dimensión de servicio.

El trabajo de servicios es para Offe (1992) una actividad de restitución de la normalidad. Frente a los riesgos estructurales de una sociedad que ya no puede coordinar “espontáneamente” su creciente diferenciación, las sociedades desarrollan reacciones estratégicas, tales como una nueva modalidad de trabajo y, junto a esto, no por casualidad, un crecimiento exponencial del sector servicios respecto al sector industrial.

El trabajo de servicio también se caracteriza por ser un trabajo reflexivo que requiere competencias interactivas y se encuentra orientado a la resolución de situaciones problemáticas. Por consistir fundamentalmente en actividades de control de riesgos y de desviaciones de la normalidad, no es estandarizable y, en este aspecto, también se distancia del trabajo productivo industrial⁹.

El trabajo de servicio requiere entonces márgenes de actuación laboral amplios, ya que el contenido del mismo depende de factores situacionales. En contraste con el modelo de racionalidad industrial, donde los fines y medios son altamente especificados los controles sociales directos, y la iniciativa fuertemente programada, en el trabajo de servicio encontramos dificultades para el establecimiento de unas reglas técnicas claras y de validez reconocida que indiquen qué tipo y qué cantidad de acciones instrumentales son necesarias y suficientes para llegar al resultado deseado (piénsese en el referente de la salud o de la educación: curación de enfermedades, formación de escolares,¹⁰).

Esta incorporación de una dimensión de servicio inherente al trabajo ha tenido implicancias para la gestión del trabajo y de los trabajadores. Desde la mirada del trabajo como esfuerzo sobre la que se forjó el trabajo estandarizado, taylorista, bajo el modelo de trabajo industrial, la gestión se centró en temas como el control, el rendimiento, la disciplina y respecto a los/as trabajadores/as las contrataciones o los despidos asu-

9 Lazzaratto y Negri (2006:48) indican: “para expresarlo de manera diferente podríamos decir que cuando el trabajo se transforma en trabajo inmaterial y el trabajo inmaterial es reconocido como base fundamental de la producción, ese proceso no envuelve tan solo a la producción sino a la forma íntegra del ciclo ‘reproducción-consumo’.”

10 A decir de Offe (1992:316): “Toda acción de trabajo puede descomponerse en una secuencia de medios, objetivos y funciones. Este argumento debería dejar en claro que en el ámbito del trabajo de servicios tanto la relación entre medios y objetivos de la acción de trabajo (‘indeterminación de inputs’) como la que existe entre objetivos y funciones (‘indeterminación de outputs’) por regla general es menos directa y evidente que en la esfera de la producción (...) el trabajo de prestación de servicios ofrece en ambas direcciones mayores márgenes para criterios decisorios normativos, no derivables inequívocamente de la lógica de la acción racional- teleológica, diferenciándose de esta manera de lo que es el caso en el trabajo de producción.”

mían centralidad. La función de recursos humanos era una simple actividad operativa y se desarrollaba bajo los denominados departamentos de personal.

En los años 60 y 70, en el marco de una crisis internacional de la producción, se rompe también teóricamente con el modelo taylorista¹¹ como referencia de base, pero es recién en la década de los 80 y comienzos de los 90 que empieza a reconocerse la importancia de este cambio de paradigma a la luz de los resultados empresariales. La introducción de un nuevo paradigma productivo que incorpora poco a poco la revolución tecnológica de la informática, de la biotecnología, entre otras áreas del conocimiento, articula a estos desarrollos una creciente incorporación de herramientas de gestión de los Recursos Humanos (estrategias de reclutamiento, selección, desarrollo de carreras, retribución, retiro, etc.) y, por ende, de departamentos de recursos humanos, relegando a los de administración de personal. Este cambio de denominación supuestamente implicó evolucionar hacia una nueva concepción de la función que, aunque no siempre se produjo en la realidad, ha instalado un nuevo campo de reflexión organizacional¹².

Muchas organizaciones insisten en que el éxito de la aplicación de las nuevas tecnologías depende entre muchos factores de la gestión eficiente de los recursos humanos. Se indica que los activos de propiedad intelectual y los recursos humanos pueden ser utilizados de forma mucho más eficiente y eficaz si las organizaciones aplican los conocimientos de técnicas de gestión para potenciar los conocimientos disponibles y mejorar su gestión de personal. En tal sentido, los departamentos de recursos humanos deben ser promovidos y valorizados como estratégicos para garantizar el éxito de los programas de gestión del conocimiento que están dirigidos a la captura, utilización y reutilización de sus empleados, por medio de la gestión no sólo de tales recursos, sino de las variables culturales que permitan el libre desarrollo y flujo de los conocimientos para el cumplimiento de objetivos organizativos. Su rol comenzaría con la detección del personal adecuado para llevar a cabo este proceso (selección y reclutamiento), la detección de lagunas de conocimientos y la capacitación adecuada para llenarlas, la motivación del personal, su valorización en función del aporte (planes de carreras), el reconocimiento de su desempeño por medio de sistemas de remuneración que le tengan en cuenta, entre otros (Soliman y Spooner, 2000). Este proceso, que si

11 La nueva concepción tiene su origen en Elton Mayo (1880-1949), en cuyas investigaciones se empieza a ver al hombre como un ser social con una serie de necesidades psicológicas. Mayo demuestra cómo la productividad de las empresas depende enormemente de la actitud de las personas en el trabajo y de las relaciones informales que se generan. En ese momento se empieza a estudiar la motivación y se producen aportaciones muy relevantes como las de Maslow (que propone su ya célebre jerarquía de las necesidades humanas), las de Herzberg (que intenta explicar el comportamiento de las personas en el trabajo y propone la teoría de los dos factores, higiénicos y motivacionales) o las de McGregor (que formula su famosa Teoría Y, centrada en la automotivación).

12 Incluso desde las políticas de transformación productiva que se suceden a partir de los noventa en Uruguay, aparece explicitada la prioridad respecto al desarrollo de los recursos humanos que, junto al desarrollo del trabajo calificado, se constituirían en la base del proceso productivo.

bien se desarrolla fundamentalmente en los países hegemónicos, poco a poco se va proyectando en los países de las áreas de menor desarrollo.

Hacia una definición analítica de la gestión y su abordaje empírico

De acuerdo a la realidad de este sector, en este trabajo nos interesa abordar la gestión en un sentido amplio, tanto desde un punto de vista organizacional (gestión de recursos humanos) como del actor (autogestión). Cuando nos referimos a gestión, la entendemos siguiendo a Boussard (2008), como la capacidad de dominar tres áreas problemáticas en las organizaciones, que denominaremos aquí como: a) normativa; b) performativa y c) cognitiva, desarrolladas a continuación.

La dimensión normativa: refiere a cómo organizarse para dominar de forma ordenada el funcionamiento de la organización. Tiene que ver con las normas internas que se van creando en el grupo, tanto formales como informales, autónomas y de control (Reynaud; 1989) y las normas externas (formales, contratos de trabajo, sistema legal, etc.). A su vez, nos interesa distinguir a la interna de las organizaciones aquellas normas de tipo jurídico de aquellas de tipo ético (*commitment*, valores).

La dimensión performativa: refiere a cómo la organización logra ser performante por medio de una asignación eficiente de los recursos escasos (articula la misión a los medios disponibles). Se vincula al concepto de eficiencia, de su construcción *in situ* y las condiciones bajo las cuales la organización piensa su sustentabilidad.

La dimensión cognitiva: refiere a la reflexividad que emana de la aplicación normativa y la puesta en práctica, aportando una mirada dinámica de los procesos de gestión. Aspectos relevantes en este sentido son la construcción social del conocimiento y las identidades construidas en torno al mismo. Asimismo tiene que ver con cuestiones tales como qué es saber y qué es no saber, qué distinciones se crean al interior del universo en torno al conocimiento y cómo inciden éstas en la organización y en el relacionamiento del mundo interno de la organización con el mundo externo.

Nuestra hipótesis de investigación, que excede los fines de este artículo, es que la gestión en el software asume una configuración distinta a la del modelo industrial que en el mundo del trabajo oficia de referente y, por ende, articula de manera diferente estas tres dimensiones. Apelaremos a ellas recurrentemente en el análisis aunque no haremos una distinción expresa de las mismas.

Nuevos dilemas para la gestión de recursos humanos: resultados preliminares

Los avances en el proceso de investigación en esta etapa permiten establecer algunas líneas de análisis emergentes vinculadas a un conjunto de problemáticas sociológicas derivadas de esta caracterización y dinámicas de trabajo asociadas al sector de producción de software. A partir de la identificación de distintas estrategias colectivas e individuales analizamos cuál es su impacto en la gestión de recursos humanos,

siempre bajo la perspectiva de oponer una construcción tradicional, más asociada a un trabajo de tipo industrial, frente a una nueva construcción social de la gestión asociada a la dimensión de servicio y, específicamente, al sector del software. Destacar que es en el software, dadas las características del sector que reseñaremos, donde empiezan a visualizarse modalidades de acción, estrategias y mecanismos que son relevantes en términos sociológicos que, si bien no pueden ser generalizados a cualquier actividad de servicio, señalan cambios en la gestión que se enmarcan dentro de una lógica que, de alguna manera, amplía el sentido de algunas prácticas de la gestión de los recursos humanos¹³.

Por otra parte, señalar que en el marco de la estrategia analítica elegida, hemos tenido que diferenciar distintas dimensiones de análisis en relación a esta problemática. Por un lado, aquella que emerge en el marco de la relación e interacción que se produce entre los trabajadores y las empresas (empleadores). Por otro, aquellas derivadas de la tensión entre una dimensión individual y una dimensión colectiva del trabajo. Las principales categorías analíticas que estructuran el abordaje metodológico en este nivel son los perfiles profesionales y las trayectorias laborales, ambas construidas en base a un fuerte peso del componente de autogestión.

En este contexto, una primera categoría emergente para dar cuenta de la relación trabajador/a – empresa en el sector software es la construcción social de la referencia a la estabilidad. En el trabajo clásico (industrial) el conocimiento del/a trabajador/a como referencia de su estabilidad estaba ligado a su formación profesional o su aprendizaje o experiencia adquirida, que fijaban al individuo a una posición laboral, ya sea en un puesto o la empresa, construyendo así su carrera. Los fuertes cambios a los que se ve enfrentada la industria del software, exigen del trabajador/a una permanente actualización de conocimientos como condición necesaria para alcanzar la estabilidad. Aún cuando muchas veces, una constante actualización, sea insuficiente. En este sentido, no sólo cambia su vínculo con el conocimiento sino también cambia la naturaleza del conocimiento de referencia, ya que éste se vuelve mucho más lábil, difícil de probar a través de certificaciones o por medio de la experiencia o antigüedad en el sector. Este tipo de experiencia genera una representación del trabajo desligada de una posición fija. Por un lado, adquiere dominancia en el sector el mecanismo que hace que la empresa deje de ser el marco comprensivo desde el cual el trabajador piensa su trayectoria laboral, adquiriendo mucha más relevancia la movilidad individual horizontal: cambiar de empresa o de posición dentro de un proyecto, puede ser una estrategia del individuo para mejorar su conocimiento y estabilizarse en la profesión. Y por otro lado, las condiciones contractuales bajo las cuales usa estos conocimientos pueden ser muy variables en la trayectoria del trabajador, siendo frecuentes los cambios de categorías ocupacionales, es decir, pasar de empleado a autónomo o empresario, sin que ello se

13 Al respecto es preciso señalar que la opción por esta estrategia analítica no discrimina lógicas distintas dentro del sector –que sí son tenidas en cuenta en la investigación marco–, lo que implica una comprensión más global de las dinámicas que atraviesan el sector y las diferenciaciones internas. Dejamos esta tarea para futuras presentaciones de los avances en el proceso de investigación.

encuentre subjetivamente ligado a la idea de precariedad, ascenso o descenso social. A título de ejemplo, se presenta el siguiente fragmento de entrevista realizado a una de las autoridades de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI): *“Las empresas del sector, a nivel global, esencialmente trabajan a través de proyectos. (...) a los 8 meses hay que despedirlos, entonces tenés que pagarles un despido y todo eso, en cambio en computación, la idea es cobrar el trabajo y todo, pero se los contrata para el proyecto, termina el proyecto y te desvinculás, entonces, eso el BPS no lo acepta, que son las famosas empresas unipersonales, la Caja de Profesionales sí, entonces los ingenieros y los licenciados, hacen eso. Yo tengo muchísimos empleados que no son empleados, trabajan con contratos profesionales, cuando terminan los proyectos de acá, se acaba, y la gente está acostumbrada a eso. Muchas veces a los ingenieros les digo ‘¿qué querés? ¿Qué te contrate como profesional por contrato o te meto en planilla? En planilla en el bolsillo vas a tener menos plata, pero vas a tener la jubilación, elegí, o sea, el mismo costo que yo tengo, para mi es lo mismo, pero elegí vos’. Y saben que cuando terminen este contrato, a las tres semanas consiguen otro contrato, siguen trabajando.”* Es justamente esta modalidad de estabilidad que permite y exige una constante autogestión del trabajador, ampliando sus grados de libertad y generando una ilusión de no estar bajo relaciones de dominación, en particular del capital¹⁴ (Supervielle y Quiñones, 2004).

Estos nuevos referenciales para el trabajador definen una nueva situación para la gestión de recursos humanos, presentan desafíos que claramente no son fáciles de resolver bajo el esquema de la gestión proyectada bajo un modelo industrial. Esto se debe a que algunas de dichas herramientas de RR.HH. se han vuelto inoperantes a la hora de lidiar eficazmente con los problemas relativos a la retención, remuneración y el reclutamiento del personal en el contexto de perfiles profesionales que no necesariamente buscan la estabilidad en el empleo, sino que fundamentalmente se interesan y movilizan, en tanto se sientan atraídos por trabajos que les representen nuevos retos o desafíos. A título de ejemplo, aquellos entrevistados que ante la pregunta: *“¿Dónde te gustaría trabajar, qué características tendría el trabajo que te gustaría elegir?”*, responden: *“Algo más dinámico, más nuevo, con tecnologías más nuevas, cosas más actuales, que me demande aprender más, creo que acá ya aprendí todo lo que tenía que aprender...”* (Trabajadora de 24 años de edad, contratada como desarrolladora de programa por empresa internacional de producción y servicios de software que operan en Uruguay.)

14 Por su parte, la innovación permanente, incluso por requerimientos del cliente, presenta un sector o actividad profesional que está en permanente construcción, y además es una construcción muy variable, sin pautas rígidas. Esto implica que el carácter innovador de un proyecto laboral puede no tener referenciales de formación y los trabajadores deban adquirir estas habilidades incorporándose a equipos de trabajo que les transfieren o producen in situ el nuevo *know how*. Hemos visto estas dificultades en empresas multinacionales que se instalan en el país por ventajas comparativas y trabajan con mano de obra local para el servicio transnacional que ofrecen.

Asimismo, ello se ve reflejado en la entrevista realizada a un referente experto en el sector, consultor de varios organismos y ex empresario, el cual sostiene lo siguiente: *“Las condiciones laborales son bastante buenas en el sector, justamente porque es fácil para los trabajadores cambiarse de empresa, entonces las condiciones de trabajo han mejorado, es decir, es un mercado de vendedores, digamos, es un buen mercado para los que venden su trabajo. Ahora, ¿qué puede hacer una empresa para retener a su personal? Y lo puede retener motivándolo, con capacitación, y lo podés retener dándole algún nivel de participación en las ganancias, y eso es lo que las empresas hacen con el personal clave. Las empresas siempre distinguen entre personal clave y personal no clave, y al personal clave tratan de hacer todo lo posible para retenerlo”.*

En este sentido, ciertas herramientas de gestión otrora utilizadas se vuelven ineficaces para reclutar y retener a la mano de obra calificada, por ejemplo, la remuneración o la formación en el puesto. Por ello, algunas empresas implementan sistemas paralelos de remuneración, uno formal y transparente y otro confidencial basado en el rendimiento individual o construido bajo las condiciones negociadas con el trabajador para retenerlo. Esto se refleja en el siguiente fragmento de entrevista realizada a una trabajadora de 25 años, contratada por una empresa internacional radicada en Uruguay: *“Me vinieron a buscar. Un argentino que iba a poner una empresa de inteligencia de negocio, me vino a buscar a mí y a otros que trabajamos en (indica nombre de la empresa), en inteligencia de negocio. Nos pidieron si conocíamos a más gente y bueno, nos pagaban el doble.”*

Dicho sistema suele potenciar un clima de invisibilización de las condiciones colectivas de trabajo y de las reglas de juego, donde la valoración, evaluación de desempeño y los sistemas de recompensa son arbitrarios y atados a la situación particular de cada trabajador/a. A pesar de ello, y paradójicamente, el trabajo en equipo y, por tanto, la interacción constante, son los fundamentos para la producción, lo cual conlleva la aparición de diversos problemas éticos a ser resueltos, tanto por las empresas como por los trabajadores en sí.

La problemática de la retención se enmarca en una problemática más general de las empresas que es la estabilización de los clientes o al menos de un flujo sostenido de clientes. Lo que se articula a una fuerte necesidad de disponer de competencias de gestión, incluso algunas veces en forma generalizada, en los integrantes de los equipos de trabajo. En la medida en que el cliente se incorpora al proceso productivo, la capacidad de diálogo y negociación también aparece como una actividad de gestión clave en el sector que, sumado a la necesidad de aprender a gestionar equipos de trabajo que respondan a estas demandas, configura una situación que requiere una capacidad de agencia de los trabajadores que es vital para la sustentabilidad de las empresas.

Esta dinámica tiene repercusiones para el/la trabajador/a desde que se ha instalado una tendencia a valorizar la capacidad de desempeñarse con cierta polivalencia. A modo de ejemplo, se presenta el relato de una empresaria del sector de software: *“Yo, por lo menos en mi experiencia, gestionaba y desarrollaba, porque como que va*

muy pegada la parte técnica con la gestión, o sea, vos te ponés a ver cómo está trabajando una persona que tenés que supervisar, pero tenés que saber qué es lo que está haciendo y entonces te metés mucho en la parte técnica o quizás porque me gusta a mí eso y entonces me metía. En definitiva yo nunca me alejé de lo que es programar y conocer la parte técnica, soy como muy técnica en ese sentido. Nunca me gustó alejarme, pero la mayoría de la gente en mi profesión a medida en que van pasando los años, prefiere zafar.”

En este contexto se empiezan a diferenciar dos perfiles profesionales específicos, producto de la propia especialización derivada de la experiencia laboral o de la formación específica: el perfil focalizado en la gestión y liderazgo de los equipos de trabajo que llevan adelante los proyectos y resuelven las demandas o problemas de los clientes y, por el otro, aquellos centrados en desarrollar los aspectos técnicos del producto o servicio.

Pero quizás el rasgo más perverso de esta dinámica se observa en que la capacidad de las empresas para garantizar un flujo continuo de trabajo no está garantizada para el trabajador/a, quien en general no evalúa positivamente entrar en períodos de inactividad o en los que tiene que realizar tareas que no son específicas a su posición, mientras se encuentra a la espera de nuevos proyectos. Ello se ejemplifica en el siguiente fragmento de entrevista aportado por una trabajadora de 37 años, contratada por un empresa nacional de producción de software: *“No tengo mucha responsabilidad ahora como quien dice, para el cargo en el que estoy. Si bien ellos pretenden evaluarme de acuerdo a mi cargo, no estoy haciendo tareas de senior hoy por hoy. Este servicio que estoy haciendo es de soporte. Pero en la reunión de evaluación se trató eso, que esperaban más de mí pero a la vez no había nada que ofrecerme, estamos en esa transición.”*

Un segundo campo problemático en la industria del software, que encierra un claro enigma desde el punto de vista sociológico, lo es la interacción entre lo individual y lo colectivo al interior de la gestión. Las dinámicas de trabajo antes descritas ofician de contexto objetivo y subjetivo propicio para el desarrollo de formas de reconocimiento y determinadas estrategias de búsqueda de valorización individual de las competencias, y también de crecimiento o desarrollo de carrera que entran en contradicción con las formas más tradicionales de gestión de estas dimensiones que, por ejemplo en la industria, eran asumidas como funciones de los Sindicatos u otros corporativismos.

Una característica del sector es justamente la ausencia o los intentos fracasados respecto a la creación de sindicatos¹⁵, aunque por el contrario las empresas hayan construido ámbitos de organización, como lo es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), pero que no llegan a tener incidencia en la gestión de RRHH de las empresas. A título de ejemplo: *“Si yo a mis empleados les pago 100, y en Cór-*

15 Según la información recabada provista por un informante calificado, entrevistado en el marco de la investigación en curso.

do gan 95, no lo voy a traer, para traerme al cordobés le tengo que pagar 150, y yo para pagarle 150 tengo que tener una empresa que venda y que le pueda pagar a los empleados 150, eso se llama productividad, no se llama políticas públicas, ni asociación, ni la CUTI, ni nada... (Ingeniero en Computación, asesor en las áreas de Tecnología y Negocios).

En este contexto de prácticas autogestionarias de los trabajadores e individualización de las relaciones laborales en el marco de la gestión de RRHH de las empresas, también se destaca la baja problematización o, por el contrario, la invisibilización, que para los actores tiene la problemática de las condiciones laborales. Es común en el sector la presencia de empresas que operan bajo condiciones de incertidumbre para el trabajador, tales como exigencias de disponibilidad para cubrir turnos de trabajo las 24 horas del día o para emprender viajes frecuentes al exterior¹⁶. Las respuestas, siempre individuales del trabajador a este tipo de exigencias son variables: para algunos la situación aparece como una opción atractiva y construyen rutinas de trabajo que distan mucho de aquellas impuestas al trabajador tradicional. Sin embargo, esta opción deja de ser para muchos compatible con otras responsabilidades de la vida (como la familia), lo que suele expresarse en postergaciones o problemáticas de género que suelen ser reconocidas entre los/as trabajadores/as del sector¹⁷. Así lo refleja un fragmento de entrevista realizado a una trabajadora de 36 años, empleada como desarrolladora de software en una empresa nacional: *“El cliente ofreció eso a la empresa (pagar más por más horas de trabajo). Pero no fue algo que nos pareció serio, decir te cambio la tarifa, el tema es la vida... Aparte mi compañero pobre ya está con problemas con la esposa porque tiene un bebé chico.”*

En tercer lugar, dadas las características del sector, de sus procesos de trabajo de flujo continuo, con una fuerte necesidad de actualización y centrado en el conocimiento que se gestiona en base a un fuerte componente de autogestión, entre

16 Sobre todo en aquellas caracterizadas por desarrollar productos o servicios que, o bien por las exigencias relativas a vencimiento de plazos de entrega del proyecto, dificultades no previstas a ser trabajadas, etc. o bien porque implican coordinar el trabajo con clientes extranjeros y, por ende, con distinto uso horario, o bien porque involucran la coordinación del trabajo en equipo conformado por trabajadores localizados en distintas zonas geográficas.

17 Así puede pensarse que cuando la opción por la maternidad llega a algunas mujeres trabajadoras del sector, las desigualdades de género aparecen como constitutivas de la realidad del trabajo del software, y la restricción de oportunidades de optar por distintas trayectorias laborales parecen restringirse en las mujeres del sector que acusan la problemática de la compleja conciliación vida familiar y laboral en algunos trabajadores/as y que parece desplegarse por medio de la implementación de estrategias de permanencia y acceso al trabajo en puestos que no siempre son desafiantes o dotan de una mayor autonomía o grados de libertad para ciertos perfiles profesionales: *“Bueno, ahora también estoy planeando maternidad de nuevo y entonces no quiero hacer un cambio de trabajo en este periodo, si bien me encantaría hacerlo ahora, por ahí no es el mejor momento. Aparte tuve dos experiencias que no funcionaron, entonces quiero estar tranquila. Por ahora estoy en un plan así, me sirve y lo disfruto porque comparto más cosas con mi hijo, lo llevo al colegio y demás pero me preocupa más a futuro, yo ya tengo 38 y no es tan fácil hacer un cambio a esta edad...”* (Entrevista a experta en JAVA).

muchos otros rasgos, conlleva que nos preguntemos sobre el ciclo de vida laboral del trabajador/a. Nuestra hipótesis es que los trabajadores reducen este ciclo laboral buscando a cierta altura de su carrera ciertos nichos en los cuales tengan estabilidad laboral y una exigencia menor en materia de actualización de sus conocimientos. Consideramos, por lo tanto, que en estos casos hay una búsqueda de estrategias que le permitan al trabajador desenmarcarse de la lógica dominante del sector.

Conclusiones

En el artículo hemos abordado el análisis del sector de producción de software bajo la intención de llevar a cabo una comprensión de las dinámicas propias de la gestión de RR.HH. bajo condiciones muy distintas a las que dieron origen a las mismas en el modelo industrial. La gestión de RR.HH. es una construcción social de las empresas que se empieza a desarrollar en las últimas décadas como un cambio de mirada del trabajo, específicamente desde el cambio del paradigma del trabajo como esfuerzo al del trabajo como resolución de problemas. La centralidad de los conocimientos, propiedad del nuevo paradigma, conlleva que este pasaje tenga como principal característica la incorporación del trabajador al trabajo y, por medio de ello, la problemática de la gestión de recursos humanos. Cuestiones tales como la selección, reclutamiento, carrera, formación, evaluación, remuneración o retiro de los trabajadores tienen que ser repensadas a la luz de las nuevas condiciones de trabajo.

A partir de entonces en Uruguay como en otros países se ha abierto un proceso que implica fuertes desafíos a las organizaciones, cuya cultura de la gestión se ha construido sobre referentes heredados del clásico sistema predominante en la industria: mecanismos de selección particularistas, de promoción lenta, asociados a un puesto de trabajo, con fuerte peso de la antigüedad en la construcción de la carrera, con mecanismos de remuneración centrados en el salario, negociados colectivamente –con representación de sindicatos- y donde el retiro llegaba por alcanzar la edad jubilatoria. Al respecto consideramos que una de las grandes problemáticas es cómo articular los viejos y nuevos modelos de gestión bajo el contexto objetivo de lógicas empresariales (en el caso de Uruguay predominantemente rentistas, pero también con fuerte impacto de empresas globales) y obreras muy diversas, incluso al interior de los distintos sectores de actividad, de acuerdo al origen de los capitales, el tipo de propiedad, entre muchas otras variables.

Dadas las características del sector del software -siendo ellas parte del fundamento para la selección del estudio de caso- estos cambios se están imponiendo aún con más velocidad y asumiendo giros fuertemente desafiantes para las políticas de gestión de RR.HH. Ante una nueva definición de situación, en la que juegan un rol importante tanto las condiciones tecnológicas como del carácter globalizado y desanclado de los procesos productivos del sector, nos propusimos recoger esta especificidad y comprender los desafíos para la gestión de RR.HH., sus fundamentos, su orientación en el marco de las restricciones que en la práctica (dimensión performativa) y reflexi-

vamente (dimensión cognitiva) enfrenta a la hora de operar en el marco de las normas más generalizadas de la gestión de RR.HH. (dimensión organizativa).

Como mencionáramos al iniciar la mirada de los datos, los avances en el proceso de investigación en esta etapa permiten establecer algunas líneas de análisis emergentes vinculadas a esta problemática. Ellas son, por un lado, que se deriva del encuentro entre la gestión de RR.HH. que llevan a cabo las empresas y, por el otro, la capacidad de autogestión del trabajador. Asimismo, la articulación entre la dimensión individual del trabajo, que se ve potenciada por estas dos dimensiones de la gestión (gestión empresarial y autogestión del trabajador) y una dimensión colectiva.

De la primera dimensión hemos constatado cómo el trabajador del software se define como un sujeto mucho más autorreferenciado, con una alta capacidad de autogestión de su trayectoria y carrera, que interpone algunas limitantes para una gestión estándar de los RR.HH. Uno de los hallazgos relevados en el marco del estudio de la interacción entre individuo y empresa (que sociológicamente debe ser mejor vista como comunicación, en el sentido que cada una opera como entorno del otro), es que algunas herramientas de gestión de RR.HH. se han vuelto inoperantes para hacer frente eficazmente a los problemas relativos a la retención, remuneración y el reclutamiento de este personal en el contexto de perfiles profesionales que no necesariamente buscan la estabilidad en el empleo y de demandas de las empresas que, al quedar atadas a proyectos, son fuertemente volátiles. Esto como una modalidad de fuerte presencia en el sector, bastante inédita frente al mundo del trabajo tradicional, aunque sin ánimo de excluir otras posibles estrategias. Ésta aparece como una primera ruptura de la gestión de RR.HH. en el sector.

La segunda ruptura se enmarca en la necesidad de las empresas de contar con trabajadores capaces de abordar la dimensión cognitiva propia de este tipo de trabajo inmaterial y que las mismas deben canalizar a través de los procesos de reclutamiento y retención de los trabajadores, siempre en los límites de la duración de los proyectos. En este sentido, es visible cómo los criterios de selección el personal para algunos puestos “claves” priorizan más la disposición para formarse o la experiencia entendida como capacidad de articularse a diferentes proyectos (y no tanto como estabilidad en un conocimiento técnico) que constatar la capacidad de lidiar con las condiciones cambiantes del sector. Así, aparece un efecto devaluador de las credenciales escolares propio del sector, que si bien se asume como problemático para el empresario y el trabajador, no es el criterio orientador a la hora de la selección o gestión de los equipos de trabajo, ni una restricción para la empleabilidad del trabajador.

Dada esta problemática de reclutamiento como de retención ante la fuerte competencia en la que opera el sector, los sistemas de evaluación se vuelven inútiles y los de remuneración una variable de ajuste (frente a la competencia pero también como incentivo para retener al trabajador). Al punto que algunas empresas han manifestado mantener dobles sistemas de remuneración (uno visible y general para todos, con claros procedimientos que ligan el salario al ascenso, junto a otro, dependiente de las

condiciones de oferta y demanda en el sector) que se negocia directamente con el trabajador y aunque es de conocimiento público el mecanismo, mantiene invisibilizadas las diferenciaciones internas entre los empleados. A tales efectos categorías como autonomía laboral o una mayor alienación en el trabajo (dada la extensa jornada laboral, la falta de criterios de reconocimiento y valorización explícitos o las condiciones impuestas por una necesidad de formación constante de los trabajadores) nos abre como subdisciplina la interrogante sobre la posibilidad de nuevas formas encubiertas de precarización laboral: ¿quién protege socialmente al trabajador en el marco de la autogestión?

Por su parte, y abordando la segunda dimensión reseñada, aunque íntimamente ligada a la primera, la ausencia de una mirada colectiva sobre el trabajo, más allá de quedar vinculada al particular énfasis puesto por la gestión de RR.HH. a prácticas individualizantes (fundamentalmente en cuanto a reclutamiento y remuneración, como se ha mencionado) se potencia frente a un estilo de ejercicio del poder dentro de la gestión de RR.HH., no tanto basado en la posición de fuerza de la empresa en la relación desigual obrero-patrón, más característica de la industria, que desde el fundamento de la seducción y que permite negociar sin que entre en juego la oposición, ni la discusión propia de la lógica trabajo-capital en torno a las demandas o reivindicaciones colectivas. Esta dinámica particular de la gestión de RR.HH. en la industria del software explica la constatación empírica de las poco explícitas o ausencia de (quizás invisibilizadas) políticas de RR.HH. como la evaluación, la construcción de carreras, capacitación (que descansan en la autogestión) y que desaparecen ante esta modalidad de organización por proyectos dominante en el sector y de despido (al que se llega por acuerdo a través de la finalización de los contratos).

Por último, en esta dimensión especificada por la relación entre lo individual y lo colectivo, aparece como rasgo novedoso en la actividad el desarrollo de una suerte de nueva identidad, que por estar centrada en la elección, preferencias, motivaciones en torno a la construcción de conocimientos, podríamos denominar “cognitiva” y cuyo potencial desarrollo parece estar en flagrante tensión con referentes de otras construcciones identitarias más clásicas, propias del mundo industrial, como la pertenencia a una organización, la clase, entre otras e incluso con los contextos estructurales de sociedades como la uruguaya con los patrones de reproducción de las desigualdades (raza, clase social, etc.).

Bibliografía principal

- BOUSSARD, V.** (2008): *Sociologie de la gestion, les faiseurs de performance*, Belin Perspectives sociologiques.
- CASTILLO, J. J.** (2009): “Las fábricas de software en España: organización y división del trabajo. El trabajo fluido en la sociedad de la información.” *Trabajo y Sociedad. Indagaciones sobre el trabajo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas*. Nº 12, Vol. XI. Santiago del Estero.

- DE LA GARZA TOLEDO, E.** (2009): *Hacia un concepto ampliado de trabajo*. En *Trabajo, Empleo, Calificaciones Profesionales, Relaciones de Trabajo e Identidades Laborales*. Volumen I (Comp. Julio C Neffa, Enrique de la Garza Toledo y Leticia Muñiz Terra. CEILPIETTE- CONI-CET. CLACSO. Trabajo & Sociedad.
- DE LA GARZA TOLEDO, E.** (Coord) (2011): "Trabajo cognitivo y control sobre el proceso de trabajo: la producción de software." En: *Trabajo no clásico, organización y acción colectiva*. Ed. Plaza Valdés. México.
- GÓMEZ, G.** (2006) *Gestión del Conocimiento en la Industria del Software*. Monografía final de grado. Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.
- HYMAN, J.; LOCKYER, C.; MARKS, ABIGAIL** (2003): *Why is Union Membership so Low among Software Workers?*. Draft document. December 2003.
- ILAVARASAN, P. VIGNESWARA; SHARMA, ARUN KUMAR** (2003): "Is software work routinized? Some empirical observations from Indian software" *Industry.Journal of Systems & Software*"; April 15 2003, Vol. 66 Issue 1, p1-6.
- LAZZARATTO, M. y NEGRI, A.** (2006): "Trabajo inmaterial y subjetividad", *Revista Brumaria*, N° 7.
- MOCHI ALEMAN, P.** (2006): *La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano*. Cuernavaca. UNAM. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
- NOVICK, M.; YOGUEL, G.; MILESI, D. ; ROITTER, S. Y BORELLO, J.** (2004): "Información y conocimiento: la difusión de las tecnologías de información y comunicación en la industria manufacturera argentina." *Revista de la CEPAL* 82, 139-156.
- NOVICK, M.; Yoguel, G.** (2002): "La dinámica de oferta y demanda de competencias en un sector basado en el conocimiento en Argentina". *Cuaderno de Cepal. Serie de Desarrollo Productivo* N° 119 . LC/L.1696-P/E Septiembre de 2002.
- OFFE, Claus** (1992): *La sociedad del trabajo*. Alianza, versión española de Jaime Nicolás, Madrid.
- QUIÑONES, M. SUPERVIELLE, M. y SEGANTINI, M.** (2010): "Gestión de recursos humanos en la industria manufacturera exportadora de Uruguay 1991-2010". Informe del Proyecto I+D. Comisión Sectorial de Investigación Científica- Universidad de la República.
- REYNAUD, J. D.** (1989): *Les Règles du Jeu. L`action Collective et la Régulation Sociale* (París: Armand Colin).
- RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, G. et al** (2008): "Trabajadores Cognitivos en la Industria del Software: Hacia un Concepto Ampliado de Trabajo Simbólico." *INvurnus Volumen 3 N° 2 (Julio-Diciembre 2008):* 42-48.
- SIMON H. A.** (1980): *Problem Solving and Education. en Problem Solving an Education: Issues in Teaching and Reseach. Hilsdale.* Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey. U.SA.
- SOLIMAN, F. SPOONER, K.** (2000): "Strategies for implementing knowledge management: role of human resources management", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 4 Iss: 4, pp. 337-345.
- SUPERVIELLE, Marcos; QUIÑONES, Mariela** (2004): La incorporación del trabajador al trabajo. *Revista latinoamericana de estudios del trabajo*, V. 16, p.: 77 - 116, 2004. ISSN: 14051311



Las dimensiones descuidadas del trabajo

Mariela Quiñones¹ - Erika Van Rompaey²

Este artículo analiza tres dimensiones del trabajo que han sido invisibilizadas por una parte importante de las investigaciones y estudios en torno al mismo: la cognitiva, la ética y la de articulación. Si bien todas están íntimamente relacionadas, el modelo analítico y conceptual propuesto para estudiarlas se orienta hacia la caracterización de sus rasgos centrales y su diferenciación, teniendo en cuenta su interdependencia. Esto con el propósito de problematizar y dar cuenta del impacto e implicancias de las dinámicas y transformaciones sociales de los últimos treinta años en el trabajo como actividad de realización de los hombres y mujeres, así como respecto a su valor social. A su vez, el artículo aporta a la reflexión del estudio del trabajo mediante la incorporación de diversas perspectivas que, desde una mirada amplia y holística del mismo, aparecen como ineludibles a la hora de comprender las nuevas dinámicas sociales, así como los comportamientos individuales.

Hacia una conceptualización más amplia del trabajo: relectura de sus dimensiones invisibilizadas

Distintas corrientes teóricas provenientes tanto de la Economía como de la Sociología han otorgado especial relevancia al denominado “trabajo clásico”. Este concepto se ha utilizado comúnmente para hacer alusión al trabajo asalariado, asociado a la riqueza y producción material de las sociedades. En esta línea, la Sociología del Trabajo también acuñó dicho concepto, abordando el estudio del trabajo predominantemente bajo dicha mirada. Siguiendo a Supervielle (2010), podemos resumir que los abordajes teóricos en torno al trabajo como actividad humana pueden ser diferenciados en cuatro grandes perspectivas que, en cierta medida, se han sucedido en el tiempo, primordialmente combinándose y sin sustituirse entre sí. Por un lado, el trabajo entendido como *esfuerzo o sacrificio*, como abordaje que dio surgimiento al término trabajo. En segundo lugar, el trabajo concebido como *actividad profesional*, cuyo origen es gestado en la Época Antigua y que adquiere mayor relevancia durante la Reforma Protestante,

1 Doctora en Sociología, Profesora Adjunta en régimen de dedicación total. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Sociología del Trabajo. mariela.quinones@cienciassociales.edu.uy

2 Candidata a Doctora en Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona (España). Asistente de investigación del Grupo de Investigación I+D Sociología de la Gestión de los Recursos Humanos. Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. evrgiuria@gmail.com

culminando, más adelante con el proceso de secularización en la época moderna y constituyéndose como fundamento de los Estados de Bienestar. Por otro lado, la concepción del trabajo como *mercancía* desarrollada por Smith y Marx, que aparece en los siglos XVIII y XIX, complementando a los anteriores enfoques. Por último, el trabajo concebido como *resolución de problemas*, de acuerdo a los planteamientos realizados por Simon (1980), a mediados del siglo XX y que tiende a imponerse en la actualidad (Tripiet, 1999).

Con este cambio, en la medida en que pasamos de una mirada del trabajo bajo la perspectiva del esfuerzo a un enfoque a partir del cual se lo concibe como una actividad que exige movilizar conocimientos orientados a la resolución de problemas, todo trabajo pasa a tener una dimensión de servicio. El trabajo ya no se observa desde la mirada modélica del trabajo industrial, sino que empieza a adquirir importancia –incluso en este último– el carácter de prestación de un servicio. Ahora bien, ¿qué características le imprime al trabajo este cambio?

El trabajo de servicio se encuentra orientado a la resolución de situaciones problemáticas y por lo tanto requiere, entre otras cosas, competencias interactivas, cognitivas, cooperativas, lo que potencia su carácter reflexivo. Por consistir fundamentalmente en actividades de desviaciones de la normalidad y control de riesgos, se trata de una actividad no estandarizable y, en este aspecto, también se distancia del trabajo productivo industrial.

Esto supone que el contenido del trabajo de servicio depende de factores situacionales, lo que implica el requerimiento de márgenes de actuación laboral amplios. En contraste con el modelo de racionalidad industrial donde los fines y medios son altamente especificados, los controles sociales directos y la iniciativa fuertemente programada, en el trabajo de servicio encontramos dificultades para el establecimiento de unas reglas técnicas claras y de validez reconocida que indiquen qué tipo y qué cantidad de acciones instrumentales son necesarias y suficientes para llegar al resultado deseado (piénsese en el referente de la salud, de los cuidados de personas en situación de dependencia o de la educación, en los que el trabajo no puede ser prescripto)³.

En una línea similar, Vatin (2008) analiza los distintos valores del trabajo, y lo resume en dos perspectivas. Por un lado, una visión de tipo mecánica o ingenieril, tradicionalmente utilizada en el mundo laboral, a partir de la cual el trabajo es concebido como *gasto* o *esfuerzo*. En este sentido, la fuerza se corresponde con la cantidad de acción

3 Al decir de Offe (1992:316): *“Toda acción de trabajo puede descomponerse en una secuencia de medios, objetivos y funciones. Este argumento debería dejar en claro que en el ámbito del trabajo de servicios tanto la relación entre medios y objetivos de la acción de trabajo (‘indeterminación de inputs’) como la que existe entre objetivos y funciones (‘indeterminación de outputs’) por regla general es menos directa y evidente que en la esfera de la producción (...) el trabajo de prestación de servicios ofrece en ambas direcciones mayores márgenes para criterios decisorios normativos, no derivables inequívocamente de la lógica de la acción racional-teleológica, diferenciándose de esta manera de lo que es el caso en el trabajo de producción”.*

que los hombres (y mujeres) llevan a cabo para realizar su trabajo cotidiano, teniendo en cuenta las diferentes maneras en las cuales es empleada. Así, el centro del valor del trabajo es el esfuerzo físico asociado al mismo. Por ello, el trabajo se intentó medir o cuantificar, a partir del cálculo respecto a la realización de las tareas automáticas y repetitivas⁴. Frente a este modelo, señala la desviación o incapacidad del mismo para comprender el trabajo asociado al sector de servicios donde destaca que la sobrecarga psicológica y emocional realizada por quienes se ocupan en estos empleos, no es susceptible de medición en función de los parámetros y esquemas ligados al modelo mecánico o ingenieril. Por ello, gran parte de la labor asociada a los empleos en el sector de servicios queda invisibilizada. Por otro lado, Vatin (2008) plantea que existe otra visión, basada en un modelo biológico del trabajo y su organización. Este enfoque pone en evidencia la dualidad del concepto de trabajo: trabajar es a la vez producir o “realizar” y gastar (se), es decir, cansarse. En este sentido, entiende que existen dos cuestiones claves que diferencian el trabajo de los hombres y mujeres del que llevan a cabo el resto de los animales: el efecto que puede producir el empleo de sus fuerzas aplicadas a una máquina y la fatiga que pueden tener, produciendo dichos esfuerzos. De acuerdo con Vatin, la producción y el desgaste son expresiones de una misma grandeza física: el producto (efecto útil del trabajo) no es para él sino una fracción del trabajo total gastado (de la fatiga que exige el trabajo).

En relación a estos precedentes podemos recoger varios aportes y percibir cómo los autores introducen nuevas dimensiones que no estaban presentes en la mirada tradicional del trabajo. Por un lado, la perspectiva del trabajo como resolución de problemas permite incorporar una nueva dimensión, la cognitiva, antes invisibilizada, y con ella al trabajador. El trabajador, a su vez, introduce su subjetividad. Asimismo, las diferencias entre trabajadores ya no pueden ser analizadas en términos de adecuación a un puesto de trabajo sino por medio de sus capacidades, sus aportes a nivel de conocimientos. Y en esta línea, Vatin, al hacer foco en el trabajo asociado al área de los servicios en las economías actuales, deja planteado cómo la perspectiva de la mecánica industrial, al centrarse en el esfuerzo asociado al trabajo físico, no permite analizar los esfuerzos asociados a las cargas psicológicas y emocionales tan comunes en los empleos de atención directa al público.

Concluyendo, frente a las transformaciones en el mundo del trabajo, al desarrollo cada vez más acelerado de distintas formas de trabajo inmaterial que, aunque objetivadas, tienen su producción en un acto de simultaneidad con las etapas de circulación y consumo, el desarrollo de enfoques más integrales y holísticos del trabajo empiezan a gestarse en los últimos años. Éstos hacen énfasis en la capacidad del trabajo de transformación no sólo del objeto al que se aplica –cuando se trata de trabajo clásico–

4 De acuerdo a esta perspectiva, según Vatin (2010) todas las palabras cuentan y en este sentido *“la cantidad de acción es el tamaño físico sobre el cual Coulomb, como fiel representante de esta corriente, mide el trabajo de los hombres. Para Vatin dicha cantidad, o sea la producción del trabajo humano, varía en función de la manera en que los hombres “emplean sus fuerzas”*. Por ello, considera que Coulomb se orienta hacia el estudio del modo de empleo óptimo de esas fuerzas.

sino también del sujeto (incluyendo a los usuarios/as de servicios o productos) y de las relaciones sociales en que se sostienen los vínculos laborales donde, tanto las estructuras contextuales del trabajo, como los sujetos y el propio trabajo se retroalimentan y reconfiguran permanentemente⁵.

A continuación analizamos las características principales de las tres dimensiones del trabajo que, según entendemos, si bien empiezan a ser abordadas por la Sociología del Trabajo y las nuevas definiciones del trabajo, se encuentran poco sistematizadas, en tanto no tienen una extensa consideración en la práctica y en la gestión del trabajo.

El trabajo cognitivo

Como hemos expuesto, la evolución del concepto de trabajo y los significados atados a su desarrollo empiezan a mostrar un cambio en la concepción del trabajo, con la incorporación de la idea de servicio y, con ella, los conocimientos, quedando éstos incorporados a su definición: el trabajo es movilizar conocimientos orientados a la resolución de problemas. Según Zarifián (2003:33), el trabajo puede ser definido como *“el ejercicio concreto de la potencia del pensamiento y de acción de los individuos, a la vez en su singularidad (lo que hace que un individuo sea siempre diferente de otro y adquiera y desarrolle dispositivos corporales e intelectuales específicos) y en su interdependencia, en su conveniencia recíproca y cooperación, que hace que el ejercicio de una actividad profesional esté siempre atravesada por intercambios y conocimientos, puntos de vista, de experiencias distintas”*. Por ello, una de las tesis principales que sostiene el autor es que el trabajo es, sobre todo, invención, antes que imitación o reproducción.

Este redescubrimiento tiene su vital importancia por una serie de razones. Por un lado, porque introduce una perspectiva constructivista al concepto de trabajo que permite dar cuenta de fenómenos que aparecían invisibilizados en enfoques excesivamente objetivistas del mismo, tal como el abordaje de la relación entre el trabajo y el complejo equilibrio entre las relaciones de poder y dominación y los espacios de libertad que se establecen en el centro del trabajo. Por otro lado, esta conceptualización permite superar ciertas perspectivas reductoras de la realidad que además, al hacerlo, la falsean. A título de ejemplo, las descripciones de Taylor sobre el fordismo y su excesiva prescripción de cómo realizar las tareas, darían la impresión de que efectivamente

5 En sintonía con esto, los estudios sobre el trabajo inmaterial planteados por Hardt y Negri o Virno –entre los más destacados–, describen una nueva realidad en la que el trabajo se presenta cada vez más como “una fuerza laboral intelectual, inmaterial y comunicativa [Hardt, y Negri, 2002; Virno, 2003]”. Esto nos lleva a concordar con la idea que dichos autores sostienen, mediante la cual argumentan que existen tres aspectos esenciales asociados al trabajo inmaterial: por un lado, *la labor comunicativa de la producción industrial [vinculada por redes informáticas]*, por el otro, *la labor interactiva de los análisis simbólicos y, por último, la resolución de problemas y la labor de la producción y manipulación de los afectos [ibidem]*”. En esta línea, creemos que la importancia del trabajo inmaterial y la necesidad de teorizar en torno a él no emanan de su relativa novedad o su extensión en cuanto a cantidad de personas que en cifras absolutas y relativas realizan este tipo de trabajo, sino en la tendencia que este trabajo inmaterial tiene a subsumir todas las otras formas de trabajo anteriores.

el trabajador en estos regímenes de organización del trabajo carece de capacidad de iniciativa y autoorganización del trabajo, es decir, de invención. Las iniciativas de los trabajadores, así como los márgenes para que se produzca la acción individual, por más escasos que éstos sean, aparecen como elementos residuales en los análisis asociados a estas perspectivas (Supervielle, Quiñones; 2003).

Por otro lado, la definición de Zarifián, al considerar al trabajo como servicio brindado, incorpora un sentido de “utilidad social”, incluye no sólo la dimensión cognitiva del trabajo, sino una dimensión ética que, como veremos más adelante, ya que el trabajador/a, no sólo se enfrenta a problemas o dilemas sino a nuevas demandas derivadas de la necesidad de comunicarse y negociar con actores que pertenecen a mundos sociales distintos, en el marco de la participación del cliente o usuario del servicio al propio proceso productivo. La posesión de determinados conocimientos y la necesidad de asumir determinados comportamientos y competencias laborales en el trabajo asociadas a las nuevas dinámicas y dimensiones del mismo, aparecen como aspectos a ser explicitados, siendo necesario que determinadas formas de reconocimiento y visibilidad a nivel académico (ya sea materializadas en certificaciones y/o evaluaciones) sean tenidas en cuenta. Esto está cada vez más justificado ante nuevas formas y tipos de inseguridades, incertidumbres y riesgos laborales, tanto para el trabajador/a, como para el usuario/a, como resultados de la producción.

A título de ejemplo, los objetos producidos (sean éstos materiales o inmateriales), los que tienen como fuente de incertidumbre la falta de rigurosidad y responsabilidad en el trato hacia clientes o usuarios, los cuales son concebidos muchas veces como simples consumidores, sin explicitar ni explicar las obligaciones y consecuencias que acarrearán las compras de productos o servicios específicos. Obviando de esta forma, la posibilidad de explicar en qué medida los actores (productores y consumidores-usuarios) comprometen su futuro, ya sea para bien o mal, o cuando los trabajadores/as no reciben el soporte necesario por parte de las organizaciones contratantes o cuando las características del trabajo suponen una fuerte sobrecarga emocional para quienes en él se desempeñan, como es el caso de los empleos en el sector de cuidados (“*careworkforce*”).

Por tanto, por medio de esta mirada sobre la dimensión cognitiva del trabajo, estamos incorporando también otras dimensiones inherentes al trabajo, dimensiones antes obscurecidas, como lo son la ética y la emocional. Ambas están muy vinculadas al carácter colectivo e interactivo del proceso de trabajo, al trabajo como interacción social, y por ende, a la naturaleza compartida del trabajo y a la necesidad de afrontar las consecuencias de su esencia cooperativa.

En esta línea, esta investigación da significación a los aportes de Anselm Strauss y sus reflexiones a partir del concepto “trabajo de articulación” y la necesidad de incorporar esta mirada sobre el trabajo en su estudio y definición. Desde su óptica, el trabajo de articulación, dimensión también invisibilizada, es comúnmente concebido como un trabajo suplementario que debía ser efectuado “*porque los esfuerzos colecti-*

vos del equipo son más que el conjunto caótico de fragmentos separados del trabajo realizado" (Strauss et al., 1992: 191). El trabajo de articulación es un concepto central para comprender y dar visibilidad a lo que sucede realmente en el trabajo, más allá de las prescripciones. Esto sobre todo cuando estas prescripciones son herramientas de regulación y control del comportamiento de los trabajadores y trabajadoras. Pasamos a reseñar estas dimensiones.

La dimensión de articulación del trabajo y la relevancia de su visibilización en la conceptualización del trabajo emocional

La noción de trabajo de articulación elaborada por Strauss (1992), da cuenta de la forma en que en la práctica se articulan los procesos de trabajo entre diferentes trabajadores/as, conformando un único proceso de trabajo complejo. Es por esto que la idea de "*trabajo de articulación*" constituye una referencia conceptual apropiada para seguir ampliando la noción de trabajo y, de esta forma, hacer visibles diversos micro procesos del trabajo y fenómenos que se originan en esta dimensión, los cuales tienden a pasar desapercibidos y, por lo tanto, revelan aspectos del "trabajo" que de alguna manera suelen quedar "invisibilizados". A su vez, cabe destacar que esta dimensión de articulación fue reelaborada por autores más contemporáneos, siendo concebida como una dimensión común a casi todos los trabajos humanos, y en especial, de aquellos que implican la atención directa al público. En esta línea, según Hampson y Juno (2005), el concepto de trabajo de articulación refiere al proceso cognitivo requerido por la combinación de un criterio calmado, en conjunción con la capacidad de la toma de decisiones rápida y el uso rutinario y no rutinario de tecnología para actuar y balancear la ética cuando se brinda un servicio personal. De acuerdo con los autores, se trata, además, de la capacidad para suprimir las lealtades de clase y las simpatías naturales asociadas a las mismas, lo cual implica una negociación incómoda y conflictual para quien realiza el trabajo de articulación. Esta redefinición de la noción de trabajo de articulación, se vuelve de ineludible estudio en el caso del trabajo y ocupaciones en el sector de los servicios, en las que no sólo es preciso saber usar la tecnología o nuevas tecnologías de la información, sino también poder combinar su uso con la resolución de las demandas de usuarios/as, siendo capaz de establecer empatía con los usuarios y clientes que provienen de mundos de vida diversos (creencias, hábitos y estatus social) y que se encuentran en situaciones diversas (tensión, angustia, ansiedad, etc.).

Por ello, el trabajo de articulación requiere de la negociación de las demandas de mundos sociales, para lo cual es preciso juzgar y mediar, así como manejar los aspectos éticos de forma balanceada, a partir de la movilización de diversas competencias interpersonales. El tratamiento con clientes y la mediación o negociación para la satisfacción de demandas y la resolución de problemas como aspectos esenciales del trabajo de articulación, requiere del trabajo emocional entendido como el manejo o gestión de las propias emociones para hacer posible el trato con calidez con el usuario/a-cliente, así como de la capacidad de concentración y paciencia para interpretar el problema y conseguir la respuesta o solución adecuada en situaciones de presión.

Por esto, el trabajo de articulación, va más allá de la mera capacidad para lograr la comprensión abstracta de los flujos de información y la coordinación que involucra el uso adecuado de la tecnología con la información individual del cliente-usuario/a. El trabajo de articulación requiere del trabajo emocional, el cual es imprescindible para manejar y lidiar con las propias emociones y aquellas expresadas en el contexto de la interacción social (usuarios/as, colegas de trabajo, jefes/as, etc.).

En esta línea de reflexión, y en sintonía con lo planteado por los autores reseñados, Hochschild (1983) introduce el concepto de trabajo emocional en el contexto del exponencial crecimiento del sector de servicios, en contraste con el declive del sector manufacturero. Según la autora, los trabajos de servicio y, en particular, los servicios personales, requieren del trabajo emocional. Estos trabajos se caracterizan por el contacto cara a cara o voz a voz entre el trabajador o trabajadora y el público. En segundo lugar, exigen que el trabajador/a produzca un estado emocional en la otra persona. Ello se produce en un contexto donde el empleador, a través de entrenamiento y supervisión, en una cadena de sucesos, ejerce el grado de control sobre las actividades emocionales de sus empleados.

Hochschild (1983: 7⁶) define al trabajo emocional como la actividad orientada a *“inducir o suprimir sentimientos en orden de mantener la expresión externa que produce el propio estado de ánimo en los otros, en este caso, en el sentido de sentirse cuidados agradablemente y de forma segura”*. Para poder realizar el trabajo emocional, el trabajador/a debe implementar estrategias para crear, modificar o alterar las expresiones de las emociones en el curso de las relaciones e interacciones laborales⁷. En esta línea, es necesario que el trabajador/a desarrolle competencias específicas tales como la capacidad de crear una “máscara” o blindaje especial respecto a sus estados emocionales, controlando la expresión externa de los mismos (que es guiada por los imperativos y normas de la organización o empresa), así como ser capaz de lidiar con los riesgos laborales asociadas a la sobrecarga emocional.

6 Traducción propia de la siguiente definición: *“This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward countenance that produces the proper state of mind in others, in this case, the sense of being care for in a convivial and safe place”*.

7 Según Pugliesi, las estrategias emocionales pueden ser cognitivas (reinterpretar un evento o situación), conductuales (controlar las expresiones emocionales) o físicas (reducir sus efectos mediante el uso de psicoactivos).

La dimensión ética del trabajo: el compromiso en y con el trabajo

Por otra parte, con la extensión de una dimensión de servicio inherente al trabajo, donde los conocimientos y, por ende, una creciente autonomía de los trabajadores, también se extiende el campo de responsabilidades potenciales asumidas por los y las trabajadores/as e inclusive por los usuarios/as. Las implicancias de estas realidades para el propio sistema de trabajo conllevan también que la gestión del trabajo se proponga (en términos de ofrecer calidad y eficiencia) garantizar responsabilidad en la gestión de la fuerza de trabajo, en el desarrollo de sus competencias laborales e, incluso, de sus comportamientos a nivel ético. Asimismo, la dimensión ética del trabajo también está ligada al grado de compromiso en y con el trabajo de los trabajadores/as, el cual varía no sólo en relación al sentido que éste tiene en su vida y la propia naturaleza del trabajo, sino también en función de las condiciones y características en la cuales éste es estructurado y regulado por las empresas, así como de las condiciones y los riesgos laborales que lo enmarcan.

Ricoeur (1986) sostiene que la vida ética es una transacción perpetua entre el proyecto de la libertad y su situación ética, delineada o constreñida por el mundo de las instituciones. En este sentido, la vida ética y el compromiso de las personas no sólo se constriñe a la vida privada sino que se extiende a su ámbito de trabajo. Cotidianamente los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a situaciones, problemas o dilemas éticos, que los confrontan con sus valores morales, así como éstos inciden en su nivel de compromiso con y en el trabajo. Asimismo, las empresas deben hacer frente a la dimensión ética en tanto resuelven conflictos de intereses, de valores y asumen mayores o menores grados de responsabilidad respecto a ellos, a sus trabajadores y clientes. A nivel de la configuración individual de las personas, las creencias morales están en parte moldeadas por los valores y las tradiciones cultural y socialmente transmitidas. Asimismo, en las situaciones de trabajo, el trabajador resuelve las tensiones o dilemas éticos que se le presentan de acuerdo a sus propias creencias y valoraciones, las cuales muchas veces entran en contradicción o condicen con los valores y tradiciones morales asociadas a la empresa u organización en la que se ocupan.

Ahora bien, según Sennett la ética asociada se ha ido transformado a raíz de los cambios sociales. La ética del trabajo asociada al antiguo esquema u orden social dependía de instituciones suficientemente estables mediante las cuales las personas pudieran poner en práctica la postergación de la gratificación. Sin embargo, las nuevas realidades sociales han tenido consecuencias para el trabajo y los trabajadores/as, para quienes la postergación y el sacrificio pierden sentido ante lo efímero, fugaz e inestable. Así, el sentido del compromiso en y con el trabajo y el valor relativo a la idea del cosechar y trabajar arduo para cosechar y recoger frutos ha perdido fuerza en los tiempos actuales. De acuerdo con Sennett (2008; 104) *“un nuevo régimen con instituciones cambiantes se vuelve absurdo trabajar largo y duro para un empleador que sólo piensa en liquidar el negocio y mudarse”*.

La dimensión ética del trabajo se vincula también al sentido del compromiso en y con el trabajo por parte de los trabajadores. En esta línea, Sennett (2008) en su noción de artesano constituye el tipo ideal de trabajador comprometido con su trabajo. Dicha artesanía se funda en una habilidad desarrollada en alto grado donde la técnica ya no es una mera actividad mecánica y la posibilidad de tener conciencia de aquello realizado (si se hace bien o mal, con mayor o menor profesionalidad), conduce a un mayor compromiso con el trabajo. Según Sennett, los problemas éticos del oficio, emergen, fundamentalmente, cuando se alcanzan los niveles superiores o “la maestría”. Sin embargo, sostiene que en la actualidad la recompensa emocional o el orgullo respecto al trabajo se ha visto obstaculizado dado que la actividad práctica, de tipo artesanal, ha sido degradada, en tanto se la ha apartado o disociado de objetivos “supuestamente” superiores en torno a la misma. El orgullo del trabajo propio pasó a ser considerado como un “lujo”. A pesar de esto, afirma que si el artesano se destaca por ser una persona comprometida, sus aspiraciones e intentos reflejarán problemas éticos del pasado y el presente.

Por último, y no de menor importancia el análisis de las diferencias de género relativas a la formación de la moralidad y las formas de concebir y lidiar con los problemas éticos relativos a la vida personal y laboral de las personas, permite ampliar la mirada y mejorar el entendimiento de la integralidad y complejidad del trabajo en la actualidad. Al respecto, Gilligan (1983), sostiene que hombres y mujeres difieren en sus ideas sobre el desarrollo humano, así como tienen diferentes formas de imaginar la condición humana y de aquello que es valioso en la vida. Según Gilligan, la sensibilidad hacia las necesidades de los otros y el asumir la responsabilidad por el cuidado que predomina en las mujeres las lleva a preocuparse y a atender las voces de los otros antes que las suyas propias y a incluir en sus propios juicios el punto de vista de los otros.

Su moralidad se caracteriza por una fuerte preocupación por las relaciones y las responsabilidades y éstas se definen a sí mismas no sólo en términos de su habilidad para las relaciones humanas, sino que se juzgan a sí mismas en términos de su habilidad para cuidar. Sin embargo, considera que el foco de las teorías explicativas sobre el desarrollo moral humano está puesto en la individuación y los logros individuales, siendo la madurez equiparada a la autonomía personal, siendo la preocupación por las relaciones concebida como una debilidad más que como una fortaleza humana. En este sentido, Gilligan señala que los estudios sobre los roles sexuales estereotipados encuentran evidencias de que las cualidades concebidas como necesarias para la adultez (la capacidad para el pensamiento autónomo, la toma de decisiones clara y la acción responsable) están asociadas con la masculinidad y son consideradas indeseadas como atributos del ser femenino. Los estereotipos relacionados a la moralidad de hombres y mujeres inciden en la valoración de las competencias, las actitudes y predisposiciones de los trabajadores en el ámbito laboral. Así, las competencias expresivas asociadas a

las primeras son relegadas a segundo plano, mientras que las habilidades instrumentales vinculadas al dominio masculino son destacadas y recompensadas⁸.

De acuerdo a Gilligan, en la concepción moral de las mujeres los problemas morales emergen a partir de responsabilidades conflictivas, más que de la competencia por derechos y requiere para su resolución un modo de pensar que es contextual y narrativo antes que formal y abstracto. Así, argumenta que la concepción de moralidad relativa a la actividad de cuidado que caracteriza a las mujeres, centra su desarrollo moral en torno al entendimiento de la responsabilidad y de las relaciones, de la misma forma que la concepción de la moralidad como justicia que distingue a los hombres liga su desarrollo moral al entendimiento de los derechos y las reglas⁹. Por el contrario, la concepción de la moralidad centrada en la responsabilidad predominante en las mujeres, se focaliza en las limitaciones de cualquier resolución particular y tiene en cuenta los conflictos que permanecen en ella¹⁰. Por último, sostiene que la psicología de las mujeres caracterizada por una fuerte orientación hacia las relaciones y la interdependencia implica un modo más contextual de juzgar, así como un entendimiento moral distinto. Las mujeres le otorgan suma importancia al involucramiento con los otros a lo largo del ciclo humano de la vida. Por el contrario, entre las prioridades de la moral de los hombres aspectos como la separación, autonomía, individuación y los derechos naturales son celebrados.

Reflexiones finales

Reconocemos que son varias las perspectivas que se han ocupado de ampliar las dimensiones inherentes al ejercicio del trabajo, hacerlas visibles y aportar razones y fundamentos para sostener que este mecanismo de invisibilización de las dimensiones anteriormente analizadas (en particular de la dimensión de articulación y emocional) es reflejo de la desvalorización de algunos trabajos (entre los que no hay que omitir una mirada de género)¹¹. Si bien el concepto es suficientemente claro en el caso del trabajo

8 No obstante considera que, analizado desde una perspectiva alternativa a la dominante, los estereotipos asociados a los géneros reflejan una concepción de la adultez que en sí misma está desbalanceada, al favorecer la separación del ser individual de la conexión con otros, teniendo como referencia una vida de trabajo autónoma frente a aquella caracterizada por la interdependencia, el afecto y el cuidado.

9 Afirma que mientras la concepción de derechos de la moralidad que forma parte de los niveles superiores de desarrollo en el esquema de Kohlberg, se logra arribando a un tratamiento justo o una resolución justa de los dilemas morales en base a la cual todas las personas racionales pudieran acordar.

10 Por ello, entiende que la moralidad de los derechos y no interferencia puede parecer aterrador para las mujeres en su potencial para justificar la indiferencia y despreocupación. Al mismo tiempo, parece claro que desde la perspectiva moral masculina, la moralidad basada en la responsabilidad parezca inconclusa y difusa, dada la insistencia en el relativismo contextual.

11 Al respecto, un conjunto de autores (Hirata y Kerogat, 1995; Daune-Richard, 1995; Cancian y Olikier, 2000 y Rigby y Sanchis 2006), sostiene que la mayoría de empleos femeninos están infravalorados a raíz del sesgo de género que permea y condiciona el proceso de valoración social diferenciada del trabajo, la cualificación y las competencias laborales asociadas al mismo.

femenino, tampoco creemos que se restrinja a la realidad de las mujeres, atravesando múltiples situaciones de trabajo, sobre todo las de aquellas que llevan a cabo trabajadores subalternos, personal de apoyo, y muchísimos otros, sobre todo teniendo en cuenta que su trabajo muchas veces queda definido a partir de sus componentes más visibles y que definen la especificidad de su tarea o actividad quedando oscurecidos aquellos que refieren a la naturaleza compartida del trabajo¹².

De este modo, y por distintas razones, reafirmamos la importancia de repensar las definiciones reconocidas sobre el trabajo y sobre todo, la capacidad de dar cuenta de las dimensiones reseñadas. Las tres dimensiones (cognitiva, ética y emocional) requieren no sólo de competencias específicas¹³, sino que conllevan grados de responsabilidad, autonomía y *expertise* específicos que deberían coincidir con el nivel de cualificación asociado a los distintos puestos de trabajo.

La visibilización de aspectos o dimensiones del trabajo estereotipadas (por ejemplo, como típicamente femenino), así como las recompensas relacionadas con el reconocimiento de las capacidades interpersonales y específicas asociadas a una gran variedad de trabajos (propia del trabajo inmaterial) en tanto legítimos y merecedores de valoración social, se diluyen ante la creencia socialmente compartida de que las competencias o ciertas actividades deben ser llevadas a cabo por algunas personas porque naturalmente están dotadas de la capacidad y los conocimientos para llevarlas a cabo. Esto refuerza a su vez la idea de que estas actividades son menos cualificadas que otras, aquellas que desarrollan personas que naturalmente también poseen otras competencias y conocimientos. Esto explica que muchos de los trabajos del sector servicios tiendan a verse como femeninos y no cualificados debido a estos procesos.

De manera más general Kaplan (1987) y Rigby y Snachis (2006) sostienen que la mayor parte de los empleos en el sector servicios y en particular, los servicios personales, tienden a ser infravalorados socialmente. En esta línea, argumentan que en el modelo tradicional y taylorista de operario cualificado o trabajador se entiende que es requerida formación específica para adquirir conocimientos y prácticas o rutinas de trabajo, mientras suele creerse que el trabajo interactivo de servicios depende exclusivamente de las características personales de cada trabajador/a.

Cancian y Olikier (2000) al estudiar los empleos de servicio, y poniendo el ejemplo de los servicios personales, constatan que éstos involucran múltiples tareas complejas

12 En esta última dimensión también hay que reconocer el aporte de las corrientes feministas. Lo que Kaplan (1987) igual que Strauss denomina "trabajo invisible", refiere a aquellas actividades realizadas por mujeres en el ámbito privado y que son más difíciles de conceptualizar, en tanto involucran cariño y cuidado en el marco de la construcción y el mantenimiento de las relaciones interpersonales requeridos para el desarrollo y ejecución del trabajo de articulación y emocional antes estudiados.

13 A modo de ejemplo, una competencia laboral ligada a las dimensiones de articulación y emocional frecuentemente requerida en varios trabajos de servicios es la capacidad de hacer lo comunitario ("*making community*"), la cual consiste en atender a una situación o problemática que afecta a otras personas. Esto implica la habilidad de adoptar el lugar del otro y sentir algunos de los mismos sentimientos.

que requieren de la movilización de competencias interpersonales y específicas, tales como ser capaces de calmar a alguien con un problema mental. En línea con esto, Payne (2009), plantea que la gran mayoría de los empleos de atención directa implican un trabajo emocional que involucra una sofisticada forma de inteligencia social, inclusive la capacidad para captar las señales del cliente o usuario y seleccionar estrategias y tácticas de manejo emocional.

Por último, la invisibilización de las dimensiones del trabajo y en particular de la de articulación y emocional, obstaculiza el reconocimiento de riesgos laborales asociados a ellas, favoreciendo que las empresas no se responsabilicen por garantizar dispositivos tendientes a prevenir o minimizarlos. A modo de ejemplo, distintos autores (Hochschild, 1983 y Pugliesi, 1999) constatan que el trabajo emocional tiene consecuencias negativas para los y las trabajadores/as, tales como el síndrome de Burnout (o quemazón emocional) asociado a la sobrecarga emocional, raramente tenido en cuenta por los empleadores como fuente o factor de estrés profesional.

Bibliografía

- BISHOP, L.** (1999): "Visible and invisible Work: the Emerging post-industrial Employment relation" en *Computer Supported Cooperative Work*, N° 8, p. 115-126.
- CANCIAN, M. y OLIKER, S.** (2000): *Caring and Gender*. Altamira Press. Oxford.
- DAUNE-RICHARD, A.** (1995): *Cualificación y representación social. Las nuevas fronteras de la desigualdad*. Icaria. Barcelona.
- GILLIGAN, C.** (1983): *In a different voice. Pysocological Theory and Woman's Development*. Harvard University Press. Cambridge.
- HARDT, M. y NEGRI, T.** (2002): *Imperio*. Colección Estado y Sociedad. Paidós, Buenos Aires.
- HARDT, M. y NEGRI, T.** (2004): *Multitud*. Debate, Buenos Aires.
- HAMPSON, I. y JUNO, A.** (2005): "Invisible work, invisible skills: interactive customer service as articulation work". *New Technology, Work and Employment*. N° 2, Vol. 20.
- HIRATA, H. y KEROGAT, D.** (1995): "Una nueva mirada de la división sexual del trabajo." *Las nuevas fronteras de la desigualdad*. Icaria. Barcelona.
- HOCHSCHILD, R.** (1983). *The managed heart: commercialization of human Keeling*. University of California Press. Berkeley. 2012 Edition.
- JAMES, N.** (1992): "Care-organisation, physical labour, emotional labour." *Sociology of Health and Illness*. No. 4, Vol. 14.
- JENSON, J.** (1989): "The talents of women, the skills of men: flexible specialization and women". En Wood, S. (Ed.). *The transformation of work? Skill, flexibility and labour process*. Londres. Unwin Hyman.
- KAPLAN, D.** (1987): "Invisible Work". *Social Problems*. N° 5, Vol. 34.
- LAZZARATTO, M. y NEGRI, A.** (2006): "Trabajo inmaterial y subjetividad", *Revista Brumaria*, N° 7, p. 48.
- OFFE, Claus** (1992): *La sociedad del trabajo*. Alianza, versión española de Jaime Nicolás, Madrid.

- PAYNE, J.** (2009): "Emotional Labour and Skill: A Reappraisal." *Gender, Work and Organization*. N° 3, Vol. 16.
- PUGLIESI, K.** (1999): "The Consequences of Emotional Labor: Effects on Work Stress, Job Satisfaction and Well-Being." *Motivation and Emotion*. No. 2, Vol. 23.
- QUIÑONES, M.** (2009): "Pautas de desigualdad en el mundo social productivo uruguayo. Aportes para el debate en torno a la gestión por competencias." En Neffa et al (comp.) *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales*. CLACSO, Buenos Aires.
- RICEUR, P.** (1986): *Ética y cultura*. Editorial Docencia. Buenos Aires.
- RIGBY, M. y SANCHIS, E.** (2006): "El concepto de cualificación y su construcción social" *Revista Europea de Formación Profesional*. N° 37
- SENNETT, R.** (2008): *El artesano*. Anagrama. Barcelona.
- SENNETT, R.** (2003): *El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad*. Anagrama, Barcelona.
- SIMON H. A.** (1980): *Problem Solving and Education*. En *Problem Solving an Education: Issues in Teaching and Reseach*. Hillsdale. Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey. U.S.A.
- SCHUMAN, L.** (1996): "Supporting articulation Work" en Kling, R. (ed.) *Computerisation and Controversy* (San Diego: Academic Press), 2da. edición, pp. 407-423.
- STAR, S. L.; STRAUSS, A.** (1999): "Layers of silence, arenas of Voice: the Ecology of Visible and invisible Work" en *Computer Supported Cooperative Work* N° 8, pp. 9-30.
- STRAUSS, A. et al.** (1992): "Le travail d'articulation" En Anselm Strauss (ed.) *La trame de la negociation* (Paris: l'Harmattan), pp. 191-244.
- SUPERVIELLE, M.** (2010): *Trabajo decente*. OIT, Montevideo.
- SUPERVIELLE, M. QUIÑONES, M.** (2003): «La incorporación del trabajador al trabajo». *Revista Estudios del Trabajo*, N° 16, ALAST.
- TILLY, CH. y TILLY, C.** (1998): *Work Under Capitalism* (New Perspectives in Sociology, Boulder.
- TRAPIER, P.** (1999): "Elementos para una sociología de las herramientas y dispositivos de gestión." Prefacio del libro de Frederik Mispelblom "Un sociólogo frente al movimiento de la calidad". Traducción: Alicia Calvo y Jorge Walter.
- VATIN, F.** (2008): *Le travail et seus valeurs*. Albin. Paris.
- VIRNO, P.** (2003): *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas*. Puñaladas ensayos de punta, Colihue. Buenos Aires.
- ZARIFIÁN, P.** (2003): *Quoi sert le travail? La dispute*.



6

Violencia, Ciudadanía y Discursos



Factores asociados a la reincidencia delictiva en el Uruguay

Ana Vigna¹ - Nico Trajtenberg²

Se observa en Uruguay en los últimos 25 años un contexto problemático de crecimiento del delito, la violencia y la inseguridad. Al mismo tiempo, los últimos gobiernos han implementado una serie de cambios a nivel institucional buscando modificar las instituciones penitenciarias, intentando incidir sobre la reincidencia de los individuos involucrados en el mundo del delito. No obstante, es muy poco lo que se sabe sobre la reincidencia delictiva en nuestro país, ya que la producción académica es bastante escasa y sus abordajes se han limitado principalmente a estudios descriptivos. En este trabajo buscamos hacer una primera aproximación al fenómeno de la reincidencia. Para ello, empleamos los datos del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, a los efectos de desarrollar un modelo de regresión logística que permita estimar la probabilidad de reincidencia de los individuos que son detectados por el sistema de justicia.

Introducción

El delito es un asunto que preocupa tanto a las autoridades como a la opinión pública. La sensación de que es una problemática en aumento está asociada a distintos indicadores, entre ellos, el notable incremento de las denuncias policiales, así como de los procesamientos judiciales en los últimos años (OPP - MIDES, 2011)³. Sin embargo, hace ya tiempo que la literatura especializada ha destacado que una gran proporción de los delitos cometidos es responsabilidad de un reducido porcentaje de individuos (Blumstein, 1985). En consecuencia, el estudio de la reincidencia se torna un tema central.

Para el caso uruguayo, la reincidencia resulta también una problemática relevante, ubicándose aproximadamente en el 65% (Garcé, 2012). Estos niveles seguramente estén vinculados a las condiciones de encierro que caracterizaron a nuestras cárceles durante las últimas décadas y que fueron denunciadas tanto a nivel nacional como inter-

1 Docente e Investigador del Departamento de Sociología, FCS, UdelaR. nico.trajtenberg@gmail.com

2 Docente e Investigadora del Departamento de Sociología, FCS, UdelaR. anvigna@gmail.com

3 Por ejemplo, el número de procesamientos pasó de 6.237 en el año 1988 a casi el doble (11.337) veinte años después, en 2008.

nacional (Nowak, 2010; SERPAJ, 2009, 2010; Juanche y Palummo, 2012). Las dificultades observadas en el contexto institucional penitenciario no se encuentran acotadas únicamente a las carencias infraestructurales, que desembocaban en la vulneración de los derechos humanos, tanto de la población privada de libertad como de los funcionarios penitenciarios, sino también en las carencias a nivel de los programas que guían la privación de libertad (Garcé, 2009).

Frente a este panorama, el país inició un proceso de reforma penitenciaria, dentro de la cual se destacan como pilares: i) la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que viene a sustituir a la Dirección Nacional de Cárceles y Penitenciarías y está incorporando progresivamente a los establecimientos del interior del país, que hasta el momento dependían de las Jefaturas Departamentales de Policía; ii) la construcción y refacción de nuevos y diversos establecimientos (como ser Punta de Rieles, concebido como centro de pregreso, destinado a hombres penados, o El Molino, destinado a mujeres con sus niños a cargo), y iii) la incorporación de Operadores Penitenciarios, funcionarios de índole civil, que irán sustituyendo progresivamente al personal policial dentro de las prisiones.

Estas transformaciones a nivel de políticas públicas, deberían ir acompañadas por el desarrollo de investigaciones académicas e instrumentos penitenciarios que permitan evaluar los factores de riesgo y protectores relativos al mantenimiento o abandono de una trayectoria delictiva. A pesar de ello, en nuestro país aún es escasa la investigación criminológica y, la existente, generalmente es de carácter descriptivo y cualitativo (Rojido et al., 2011).

La literatura internacional ha destacado la relevancia de diferenciar el concepto de delito del de la reincidencia, tanto en términos de las teorías y modelos explicativos, como en lo relativo al diseño de políticas y programas eficaces (Moffit y Caspi, 1993; Thornberry, 1997). En este sentido, los antecedentes bibliográficos han señalado la importancia de una serie de factores que inciden en el comportamiento delictivo y, específicamente, en la reiteración de este tipo de actos.

Sin embargo, a menudo los estudios sobre la reincidencia quedan acotados a la identificación de factores asociados a un resultado específico: volver a cometer delitos o no hacerlo, sin prestar atención a los procesos que subyacen a este fenómeno (Visher et al., 2003). Entre los factores más frecuentemente mencionados por la literatura se destacan: la edad del primer delito (Hirschi y Gottfredson, 1983); el tipo, cantidad y gravedad de los delitos cometidos previamente (Blumstein et al., 1985; Baumer, 1997), Piquero et al., 2003; Ulmer, 2001; el sexo del ofensor (Gwynn, 1993; Heimer, 1996; Haynie et al., 2007), su educación Ulmer, 2001, (Corapcioglu et al., 2004; el tipo de trabajo (Laub y Sampson, 2001; Laub y Sampson, 2003), el grupo de pares (Akers, 1998, Warr, 2001), si tenían o no pareja, así como la calidad de vínculos afectivos (Sampson et al., 2006;), el consumo problemático de drogas legales e ilegales (Farabee et al., 2001); la raza (Blumstein y Cohen, 1987) Piquero, 2004; o los problemas de conducta anti social en la niñez y en adolescencia temprana (Moffit, 1993; Farrington,

2005; Blaginín, 2008). Sin embargo, a pesar de que dichos factores aparecen de modo recurrente, los mecanismos explicativos que podrían conectar la presencia de estas dimensiones con el fenómeno delictivo difieren según el marco conceptual del que uno parta⁴. A continuación presentaremos brevemente algunas relaciones propuestas por distintas teorías criminológicas.

Antecedentes

En primer lugar, se destaca la fuerte asociación entre delincuencia y edad. Es sabido que el delito presenta un pico en la adolescencia y primeros años de la juventud, disminuyendo de manera marcada a medida que se ingresa en la adultez. Esta relación ha sido constatada empíricamente con una firmeza tal, que autores como Gottfredson y Hirschi consideran a la “curva de edad del delito” como un fenómeno dado e invariante, que se mantiene más allá de las diferencias en tiempo y espacio (Hirschi y Gottfredson, 1983). Por su parte, desde perspectivas de corte más sociológico, se intenta proveer a dicha relación de una explicación que tome en cuenta procesos sociales, como los niveles de integración social, el miedo a las sanciones, o la utilidad del delito. Así, aquellos que se inician en actividades delictivas a edades más tardías podrían estar sujetos a una mayor presión social hacia la conformidad, presentar una mayor disponibilidad de medios legítimos para alcanzar objetivos preciados, y percibir como mayores a los costos de incurrir en actividades ilícitas –en concordancia con lo establecido con las teorías criminológicas del control social, la racionalidad o la tensión–, de modo tal de presentar una menor reincidencia que aquellos que se inician más tempranamente (Steffensmeier et al., 1989). La edad de la primera ofensa es, entonces, una de las variables más comúnmente utilizadas como predictor de futura reincidencia (Farrington, 2005; Miller, 2006; Blaginín, 2008).

Otra variable que afecta de manera decisiva el comportamiento delictivo es el sexo de los ofensores⁵. Las mujeres cometen menos delitos en las distintas sociedades y en los diversos momentos históricos. Desde una perspectiva de género se entiende que producto de: i) la *socialización diferencial* (incorporación de distintos roles, producto de la socialización primaria y secundaria); ii) la *estructura asimétrica de oportunidades* (las mujeres se encuentran durante más tiempo en el ámbito doméstico); y iii) la *reacción social diferencial* (criterios morales diferenciales al considerar el comportamiento masculino y el femenino), se le inculcan a las mujeres roles específicos que hacen menos probable su actividad criminal (Gwynn, 1993; Heimer, 1996). Así, las

4 La idea de que para explicar el crimen o la reincidencia no basta meramente con identificar factores de riesgo o establecer correlación entre inputs y outputs, sino que se debe procurar especificar el mecanismo causal subyacente, ha sido defendida teóricamente por Wikstrom y Sampson (2006), inspirados por algunos filósofos de las ciencias sociales como Jon Elster, Daniel Little, o los sociólogos analíticos como Peter Hedstrom o Diego Gambetta.

5 Braithwaite en su clásico trabajo *Crime, shame and reintegration* (1989) enumera una serie de factores a los que, ineludiblemente, cualquier teoría del delito “se debería ajustar”. El primero que destaca es que el delito es cometido desproporcionadamente por hombres.

mujeres están sujetas a mayores niveles de supervisión y control, y tienen por lo tanto más probabilidades de ser sancionadas ante comportamientos “inadecuados” (Haynie et al., 2007). Al estar más tiempo dedicadas a las tareas del hogar, al cuidado de terceros, y sujetas a controles informales más fuertes, tendrían menos oportunidades de involucrarse en actividades delictivas (Heimer, 1996), y para ellas los costos del delito serían mayores.

A su vez, una cuestión que ha despertado el interés de varios autores, es si la relación entre edad y delito se da en igual medida para hombres que para mujeres. Al respecto no existe un consenso: mientras que algunos sostienen que la misma se mantiene invariante (Hirschi y Gottfredson, 1983; Steffensmeier et al., 1991), otros advierten sobre la existencia de interacciones entre la edad y el sexo de los ofensores (Farrington, 1986). Según Farrington, si bien los hombres cometen proporcionalmente más delitos que las mujeres a todas las edades, esa diferencia se hace más marcada hasta los 22 años, y luego decae drásticamente hasta ser pequeña en las edades más avanzadas⁶.

Por su parte, desde la teoría del control social se destaca la inserción en vínculos e instituciones “convencionales” como inhibidor del comportamiento desviado. Así, el mantenerse por más tiempo en el sistema educativo, poseer un empleo estable y significativo, y formar un vínculo de pareja de calidad son vistos como elementos clave que van en detrimento de la actividad delictiva. La causa de ello radica, desde esta perspectiva, en el fortalecimiento de: i) el lazo emocional (apego) que nos vincula a personas convencionales (maestros, compañeros de trabajo, familiares); ii) el tiempo y energía destinados a la realización de este tipo de actividades (involucramiento); iii) nuestra inversión a largo plazo en el mundo convencional (compromiso); y iv) el grado de legitimidad que le atribuyamos a las normas y valores dominantes en estas instituciones (creencias) (Hirschi, 1969, ver también Sampson y Laub, 1993). Sin embargo, la fuerte inserción en el ámbito educativo, familiar y laboral no sólo disminuye las chances de que los individuos se involucren en actividades ilícitas gracias a las dimensiones resaltadas desde la teoría del control social, sino también a través de otros elementos destacados por la teoría de la racionalidad o del aprendizaje social. En estos casos, se resalta: i) un incremento en las oportunidades para lograr objetivos deseados a través de metas institucionalizadas; ii) un aumento en los costos –ya sea legales o informales– de cometer ilícitos; y iii) una disminución de la probabilidad de entrar en contacto con pares delictivos. En resumen, tanto el nivel educativo (Corapcioglu et al., 2004; Ulmer, 2001), el tipo y la calidad del empleo (Kurlychek et al., 2006), así como la presencia de un vínculo de pareja significativo (Baumer, 1997: 608) están asociados fuertemente a los niveles de reincidencia (Laub y Sampson, 2001).

6 En Uruguay, un trabajo reciente muestra que, si bien el delito disminuye con la edad para los ofensores de ambos sexos, la disminución en el caso de las mujeres es mucho menos acelerada (Vigna 2012).

En cuanto a la raza, se ha observado frecuentemente que correlaciona con el involucramiento delictivo, tanto como con la reincidencia. Sin embargo, no existe acuerdo acerca de los mecanismos causales que vinculan a las minorías raciales al delito. Generalmente, se entiende que dicho vínculo es espurio, ya que desaparece cuando se controla por otras variables, como la situación económica, la clase, el capital social, entre otras (Capdevila et al., 2009). Por otro lado, sabido es que existen sesgos en el accionar del sistema de control social (policial y judicial), tendiendo a recaer las etiquetas de “marginal” y “delincuente” sobre las minorías raciales en mayor medida que sobre otros grupos sociales (Fernandes, 2009).

El vínculo entre drogas y delito o, en este caso, entre drogas y reincidencia, se encuentra asimismo bajo debate. Si bien se ha observado una alta correlación entre ambos fenómenos, no hay consenso respecto a la naturaleza de dicho vínculo. Aún no está claro si se trata de una relación causal, y en caso de que así sea, cuál es el papel lógico que cumple cada una de estas variables en la relación, o cuáles son los mecanismos explicativos que conectan a ambos fenómenos (Musto et al., 2012).

Además de los factores ya mencionados, existen características propias de las trayectorias delictivas de los individuos, o de los propios actos delictivos que hacen más probable que éstos puedan ser reiterados. En primer lugar, el *tipo de delito* es frecuentemente utilizado para comprender los patrones de reincidencia (Ulmer, 2001). En concreto, aquellos que han cometido delitos contra la propiedad tienen más chances de reincidir que los involucrados en delitos contra la persona, aunque no hay acuerdo acerca de las diferencias entre estos últimos y los vinculados a las drogas (Baumer, 1997). Así, se plantea una clara diferencia entre aquellas infracciones para las cuales hay gran oportunidad y no requieren de una gran anticipación, y aquellas que impliquen una coyuntura más específica, o una mayor preparación previa (Piquero, 2004).

Otra de las características que podría estar incidiendo en las chances de reincidir es la *modalidad delictiva* –esto es, si el delito fue cometido de forma grupal o individual–. La influencia del grupo de pares en la actividad delictiva ha sido destacada por la literatura, principalmente por la teoría del aprendizaje social (Akers, 1998). Esta perspectiva intenta explicar el delito en términos de valores, actitudes y habilidades internalizados fundamentalmente a través de la interacción con otros significativos (asociación diferencial). Se ha mostrado que el carácter grupal de las ofensas imita a la curva de edad del delito, mostrando un máximo en la adolescencia, y decreciendo marcadamente con la edad (McGloin et al., 2009). Esto podría estar indicando la existencia de un tipo de “desistimiento selectivo”, en el sentido de que los que se inician grupalmente podrían abandonar el delito (tal vez debido a que estén menos dispuestos a tomar riesgos) más tempranamente que aquellos que comienzan de modo solitario (Reiss y Farrington, 1991).

Por último, se consideró el *tipo de procesamiento anterior* –esto es, si fue con o sin prisión–, básicamente por dos motivos. Por un lado, como *proxy* de la “gravedad” del acto delictivo anterior (el cual incide de manera decisiva en el tipo de respuesta judi-

cial adjudicada). Por otro lado, y basándonos en la teoría del etiquetamiento, podríamos suponer que el rótulo de “delincuente” se establece de manera más firme sobre individuos que sufrieron una pena de prisión, que sobre aquellos que fueron procesados sin privación de libertad. Es sabido que la cárcel tiene un alto efecto estigmatizador, al aislar a los individuos de la sociedad “convencional”, afectando sus chances de obtener un empleo de calidad a la salida, y de recomponer sus vínculos con el exterior (Nagin et al., 1998; Ulmer, 2001; Visher et al., 2003). Debido a ambos aspectos, uno esperaría que aquellos cuyo procesamiento fue con prisión tengan una mayor tendencia a reincidir.

Asimismo, desde el paradigma de las *carreras delictivas* (Blumstein et al., 1988; Piquero et al., 2003) se destacan principalmente dos conceptos fundamentales: i) la participación (distinción entre aquellas personas que cometen delitos, de las que no lo hacen); y ii) la frecuencia (tasa de actividad de los ofensores). Se parte de la idea de que existen ciertos delincuentes de “alto rango” que presentarían un inicio temprano y no llegarían nunca a desistir, o que presentarían carreras mucho más duraderas que el resto. En este sentido, la trayectoria o carrera previa es un predictor importante del comportamiento a futuro. Vinculado a ello, la teoría psicológica “del desarrollo” de Moffit (1993) establece que las causas del delito varían en función de la edad a la cual los individuos se involucran en el comportamiento delictivo. Desde esta visión, los ofensores que persisten a lo largo del curso de vida (“*life-course persistent*”), están conformados principalmente por personas que comienzan a mostrar problemas de comportamiento en la niñez, y se mantienen en el ámbito delictivo por mucho más tiempo que su contraparte desistidora. La explicación del comportamiento de este grupo yace en problemas del neuro desarrollo, los que conllevan deficiencias en el autocontrol. Para dar cuenta de este grupo de persistentes, se recurre a un enfoque “ontogénico”, en el cual los rasgos de la niñez prácticamente determinarán el comportamiento adulto. Desde esta perspectiva, las variables sociológicas son poco relevantes, ya que, por más que ocurran ciertos eventos durante la juventud o la adultez, el resultado estará poco menos que establecido de antemano (ver también Gottfredson y Hirschi, 1990).

Objetivos

Si bien los factores que afectan a la reincidencia delictiva, se encuentran ampliamente evaluados empíricamente a nivel internacional, en Uruguay aún se posee escaso conocimiento de los mismos. Una de las principales limitaciones que se presentan para desarrollar este tipo de estudios es la calidad de la información disponible, que habilite a realizar procesamientos más finos y que permitan incorporar la perspectiva longitudinal en el abordaje del fenómeno delictivo. En este sentido, el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, pretende analizar el efecto de distintos factores asociados a la reincidencia delictiva en Uruguay y, por otro, busca reflexionar acerca de las limitaciones de los datos disponibles.

Metodología y datos

Sobre la variable dependiente

En primer lugar, cabe mencionar algunas particularidades que presenta la variable dependiente reincidencia delictiva. Abordamos esa cuestión en un trabajo anterior (Pucci et al., 2009), donde la reincidencia fue definida como un evento que consiste básicamente en reiterar la comisión de un ilícito en un contexto espacio temporal determinado. En ese entonces, advertíamos de la existencia de dos indicadores diferentes para medir dicho fenómeno, y de las limitaciones que cada uno de ellos presenta. Por un lado, se encuentran los registros oficiales, dentro de los cuales es posible distinguir una multiplicidad de indicadores de reincidencia (Capdevilla y Puig, 2009, ver también Luque et al., 2005.): i) la reincidencia *policial* (detención reiterada de una misma persona por presuntos hechos delictivos); ii) la reincidencia *penal* (procesamiento reiterado de una misma persona por presuntos hechos delictivos); iii) la reincidencia *judicial* (condena reiterada de una misma persona por un hecho delictivo); iv) la reincidencia *penitenciaria* (ingreso en prisión reiterado de una misma persona por presuntos hechos delictivos); y, finalmente v) la reincidencia *jurídica* (procesamiento reiterado de una misma persona por presuntos hechos delictivos del mismo título del Código Penal).

El principal problema de los registros oficiales es la subestimación del fenómeno, la cual se agrava a medida que se avanza en el proceso penal. Aebi representó esta situación a través de un embudo, con una boca ancha (denuncias recibidas y detenciones hechas por la policía), que va haciéndose más angosta a medida que se avanza en el proceso penal. De hecho, no todos los delitos son denunciados, no todas las denuncias terminan en detenciones, ni todos los detenidos son procesados, así como no todos los procesados son enviados a prisión (Aebi, 2008). Adicionalmente existe también un fuerte sesgo generado por la operativa policial. Hay grandes discrepancias entre lo que las víctimas consideran que es un crimen y lo que termina registrándose, debido entre otras cosas, a las propias creencias e interpretaciones de la policía de lo que realmente constituye un delito y a la ineficiencia y burocracia del aparato policial (MacDonald, 2002, Maguire, 2008).

Una forma alternativa de medir la reincidencia es a través de las encuestas de auto reporte. Ésta podría considerarse como reincidencia *por autoinculpación*, y consiste en la comisión reiterada de hechos delictivos declarada por la propia población infractora, al ser consultada. Evidentemente, y dado el carácter *ilegal* de dichas actividades, es probable que se presente aquí también el problema del subregistro de la información. Por lo cual estas encuestas son utilizadas generalmente para relevar información acerca de infracciones menores o “comportamientos análogos”. Adicionalmente –y cuando el comportamiento delictivo es habitual– las personas encuestadas tienen problemas de recordación para identificar la frecuencia y ubicación temporal de los actos. Finalmente, pueden enfrentarse problemas de confiabilidad en cuanto a la cla-

sificación de los actos delictivos, ya que ésta es realizada por los propios respondientes (ver también Thornberry y Krohn, 2000; Aebi, 2008).

Más allá de los problemas antes mencionados, una dificultad adicional, que afecta tanto a las medidas oficiales como a las de auto reporte, refiere a la definición del período de observación para considerar a un individuo como *reincidente*. Al respecto, no existe consenso en la literatura, y los períodos manejados varían entre uno y once años luego de registrado el primer hecho delictivo (Warr 1998, Farrington y Hawkins 1991, en Brame et al. 2003).

Datos utilizados

Los datos utilizados provienen del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y corresponden a individuos procesados durante el año 2003. Si bien se contaba con la información correspondiente a todos los procesamientos ocurridos en el territorio nacional entre 1985 y 2008, se seleccionó el año 2003 a los efectos de poder reconstruir la trayectoria delictiva previa (esto es, si las personas contaban o no con antecedentes, y, en caso afirmativo, cuántos); así como dejar un margen de 5 años para observar si existió un procesamiento a posteriori o no (reincidencia).

En ese mismo sentido, se consideró únicamente a los procesados nacidos a partir de 1967, es decir, que alcanzaron la mayoría de edad a partir del 1 de enero de 1985, momento en el cual comienza el registro de datos, ya que no se contaba con información relativa a la existencia, o no, de antecedentes previo a esa fecha. Por último, se excluyó a las personas que hubieran sido procesadas por delitos cuya pena máxima superara los 200 meses de prisión⁷, dado que probablemente hayan estado privados de libertad durante largos períodos y, por lo tanto, físicamente imposibilitados de volver a cometer nuevos ilícitos⁸. Debe aclararse asimismo, que se trabajó únicamente con aquellos procesamientos que correspondieran o bien a delitos contra la persona, o bien a delitos contra la propiedad, dado que los restantes (que comprenden una gama extremadamente amplia de comportamientos, que incluyen tanto el desacato, la falsificación de documentos o el narcotráfico), mostraban un patrón errático, dificultando la comparación con los restantes tipos. Luego de estas modificaciones, obtuvimos una base final con 6.472 casos.

La variable dependiente primario/reincidente, se construyó considerando si los individuos en cuestión presentaban como último procesamiento el de 2003 o si, por el contrario, fueron procesados en al menos otra ocasión desde ese año hasta la finalización del período de observación (31 de diciembre de 2008). Vale aclarar que se adoptó, pues, una visión “legalista” del delito –y, en particular, una concepción de rein-

7 Específicamente, se excluyó a aquellos procesados por el delito de homicidio, así como por el de rapiña con privación de libertad (copamiento).

8 El no contar con un estimador fiable de la duración de la privación de libertad es reconocido como una de las mayores limitaciones de este trabajo. Se está procurando obtener información al respecto para futuras investigaciones.

cidencia “penal”, según la tipología anteriormente presentada–, que define la existencia del fenómeno a partir del momento en que el hecho fue “oficialmente constatado” mediante un procesamiento, independientemente de que el individuo haya cometido actos no detectados, o, que aun siendo detectados, no hayan merecido este tipo de respuesta judicial.

Variables explicativas

A partir de la información proveniente de la base de datos, se consideraron las siguientes variables explicativas: edad al procesamiento, sexo, tipo de procesamiento, nivel educativo, inserción ocupacional, estado civil, modalidad delictiva, tipo de delito, tenencia de antecedentes y raza.

La edad al momento del procesamiento fue introducida de forma continua, y varía entre un mínimo de 18 y un máximo de 36 años. La misma presenta una gran limitación, ya que se encuentra truncada hacia ambos lados, pero de manera más relevante hacia la izquierda, dado que no contamos con información acerca de los procesamientos que pueden haber tenido los individuos como menores. Por su parte, el sexo fue introducido de forma dicotómica, con la categoría “femenino” como referencia. El estado civil se consideró como dicotómico, distinguiendo a aquellos unidos (“casados o concubinos”), de los que no convivían con una pareja (“solteros, viudos o divorciados”). Para dar cuenta del “nivel educativo” se consideraron tres categorías: por un lado, a los analfabetos y aquellos que tienen hasta Primaria incompleta; en segundo lugar, a los que finalizaron Primaria, comenzaron Secundaria o estudiaron en UTU; y finalmente, a quienes tienen estudios especializados, Secundaria completa, o estudios universitarios. La “inserción ocupacional” se consideró asimismo en tres categorías (débil, media y alta), intentando dar cuenta, no de los niveles de formación o remuneración que cada uno de ellos representaría, sino más bien de diferentes niveles de integración o “estabilidad laboral” que las categorías originales parecían representar⁹. El “tipo de procesamiento” es una variable dicotómica, que indica si el mismo fue con o sin prisión. El “tipo de delito” fue incluido como variable dicotómica, distinguiendo los delitos contra la persona, de los efectuados contra la propiedad. Se construyó una variable con dos categorías, “solitario” y “grupal”, indicando la existencia de algún compañero en el procesamiento. La variable “raza” fue también considerada de modo dicotómico, siendo las categorías “blanca” y “otra”. Finalmente, y en cuanto a la trayectoria delictiva, se incorporó la variable “antecedentes”, que evalúa si la persona tuvo algún procesamiento entre 1985 y 2002. La misma fue considerada de modo continuo, y varía entre 0 y 16.

9 En la categoría inserción “débil” se incluyó a los desocupados y a los que hacen changas. En la categoría “media” se consideró a los jornaleros, los que trabajan en oficios, en trabajos industriales y en la prostitución. En la categoría “fuerte” están incluidos los comerciantes, docentes, empleadas domésticas y de labores, los peones rurales, los empleados públicos y privados, los empresarios y hacendados, y los universitarios.

Limitaciones de la fuente de datos

Si bien la base de datos es extremadamente rica, dado que cuenta con la totalidad de los procesamientos efectuados en el territorio nacional durante un período que abarca a más de dos décadas, debe tenerse en consideración que su construcción responde a fines estrictamente administrativos, lo cual pone en cuestión la calidad y relevancia teórica de la información recabada. La misma posee un número muy reducido de campos, a partir de los que fue posible construir únicamente las variables explicativas mencionadas más arriba. Aún así, algunas de ellas presentan serios problemas de registro, al punto tal que algunas debieron ser descartadas, como por ejemplo, estado civil o raza¹⁰.

Pero más importante aún, es la limitación proveniente de la no disponibilidad de datos relativos a la fecha de liberación de las personas que fueron procesadas con prisión. Esto vuelve imposible la delimitación del período preciso en que estas personas estuvieron “habilitadas” para reincidir (más allá de los delitos intracarcelarios), limitando la potencialidad del análisis de regresión logística, como el aquí presentado, pero haciendo imposible el uso de técnicas más idóneas para este tipo de estudio, como por ejemplo, la de historia de eventos o series de tiempo.

Metodología

Al ser la variable dependiente (reincidencia) considerada una variable capaz de asumir dos categorías de respuesta: reincidente / no reincidente, el método adecuado consistió en el análisis de regresión logística. Previo a la incorporación de las variables independientes en el modelo, se realizó un análisis bivariado a los efectos de evaluar los niveles de asociación de cada una de ellas, con el fenómeno de interés. A continuación, se procedió a elaborar modelos anidados, incorporando los distintos regresores a través de bloques conceptuales, en función de los antecedentes previamente reseñados. Los modelos que fueron siendo sucesivamente ajustados tienen la característica de contener los regresores identificados previamente como significativos, al tiempo que adicionan nuevas variables. En caso de que la bondad de ajuste de los modelos posteriores continúe aumentando y no se pierda en términos de parsimonia del modelo, se optará por el que logre un mayor poder explicativo.

Resultados

A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos a partir de los 6.472 casos en cada una de las variables incluidas en el modelo.

10 En el caso de “estado civil” el análisis exploratorio permitió observar que más del 82% de las personas pertenecían a la categoría “soltero” y menos de un 1% correspondía a la de “concubino”. Esta distribución hizo evidente la baja validez que reporta esta variable, tal como fue relevada la información.

Tabla N° 1. Estadísticos descriptivos

		%
Reincidente	No reincidente	60,6
	Reincidente	39,4
Sexo	Femenino	7,2
	Masculino	92,9
Nivel educativo	Hasta Primaria incompleta	16,9
	Hasta Secundaria incompleta	75,4
	Secundaria completa o más	7,8
Inserción ocupacional	Inserción débil	50,6
	Inserción media	26,1
	Inserción fuerte	23,3
Modalidad delictiva	Solitario	53,9
	Grupal	46,1
Tipo de delito	Contra la persona	17,1
	Contra la propiedad	82,9
Procesamiento con prisión	Sí	57,0
	No	43,0
Promedio de antecedentes	0,9	
Promedio de edad al momento del procesamiento	24,5	

Fuente: elaboración propia.

A los efectos de construir modelos anidados, las variables fueron ingresadas mediante bloques conceptuales. En los primeros dos modelos se introdujeron de a una las variables estructurales: en el Modelo 1, la edad al momento del procesamiento, y en el 2, el sexo del ofensor. El tercer modelo incorpora las dimensiones referidas al "control social": el nivel educativo y la inserción ocupacional. El Modelo 4 incorpora una noción relativa al influjo del grupo de pares, esto es, si el delito fue cometido de modo solitario o en colectivo. El Modelo 5, adiciona dos variables relativas propiamente al hecho delictivo: el tipo de delito cometido y si el resultado fue un procesamiento con o sin prisión. Finalmente, el Modelo 6 introdujo la noción de trayectoria delictiva previa, a partir de la tenencia de antecedentes.

En la Tabla N° 2 se presentan, además de un indicador de bondad de ajuste de cada modelo, los coeficientes de cada una de las variables en función del modelo ajustado. Como es posible observar, los coeficientes se mantienen relativamente estables y no se producen cambios de signo que resulten sospechosos al introducir nuevas variables. Por otro lado, las variables actúan en el sentido esperado por la teoría, además de ser todas ellas significativas a un valor $p < 0,01$.

La tabla muestra que los indicadores de bondad de ajuste de los modelos fueron mejorando a medida que se pasaba de uno a otro. Ello nos permitió sostener que cada uno de los modelos subsiguientes era preferible a los ajustados previamente. Por este motivo, y en función de los antecedentes presentados, consideramos al Modelo 6 como “modelo final”.

Tabla N° 2. Resultados de los Modelos Anidados¹¹

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5	Modelo 6
Pseudo R ²	0,02	0,03	0,06	0,07	0,09	0,14
Edad	-0,065911	-0,0640872	-0,0553086	-0,0584823	-0,0588408	-0,1016132
Sexo (hombre)		1,260531	1,01012	0,9862344	0,9228322	0,7573714
Hasta secundaria incompleta			-0,385049	-0,3900676	-0,3468399	-0,2945905
Secundaria completa o más			-0,6159146	-0,6614615	-0,5837457	-0,3939154
Inserción ocupacional media			-0,3949987	-0,3784312	-0,2824429	-0,2272632
Inserción ocupacional fuerte			-0,8499461	-0,8350821	-0,7455449	-0,6134537
Delito grupal				-0,4748653	-0,5085332	-0,4374894
Delito contra la propiedad					0,4495955	0,3588713
Procesamiento sin prisión					-0,7057084	-0,2686086
Antecedentes						0,4039273
Constante	1,167942	-1,325085	-0,4167074	-0,0798212	-0,106754	0,6524722

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla N° 3 se analiza con mayor detenimiento el modelo seleccionado. Para comenzar, cabe destacar que el ajuste global del modelo es de un Pseudo R²=0,14. Otro rasgo a resaltar es la clara significación de cada uno de los regresores considerados.

11 Todos los coeficientes son significativos a un valor $p < 0,01$.

En cuanto al sentido, el signo negativo en edad nos indica que, a medida que aumentan los años de la persona procesada, menores son sus chances de reincidir. El signo negativo en los dos regresores de nivel educativo (y aún más marcado en el nivel más alto, el de “Secundaria completa o más”), indican que, a medida que aumenta la educación, disminuyen las chances de reincidir en relación a la categoría de referencia (hasta Primaria completa). Algo similar ocurre con los regresores relativos a la inserción ocupacional, los que muestran que, cuanto más fuerte sea ésta, menor probabilidad de reincidencia existe. Aquellos que cometieron el delito en conjunto con otras personas tienen, tal como lo plantea la literatura, menores chances de volver a hacerlo que quienes actuaron de modo solitario. Lo mismo ocurre con quienes fueron procesados sin prisión, en comparación a aquellos que fueron privados de su libertad.

Por su parte, el signo positivo en “sexo masculino” indica que los hombres tienen mayores chances de reincidencia que las mujeres. A su vez, quienes fueron procesados por realizar un delito contra la propiedad es más probable que reincidan que quienes realizaron un delito contra las personas. Finalmente, el signo positivo en “Antecedentes” indica que, a medida que éstos aumentan, las chances de volver a ser procesado también se incrementan.

Tabla Nº 3. Resultados del modelo seleccionado

	Coefficientes	Error estándar	P > z
Edad	-0,1016132	0,0064968	0.000
Sexo masculino	0,7573714	0,1382844	0.000
Hasta secundaria incompleta	-0,2945905	0,0756583	0.000
Secundaria completa o más	-0,3939154	0,1326275	0.003
Inserción ocupacional media	-0,2272632	0,0679765	0.001
Inserción ocupacional fuerte	-0,6134537	0,0783536	0.000
Delito grupal	-0,4374894	0,058153	0.000
Delito contra la propiedad	0,3588713	0,081599	0.000
Procesamiento sin prisión	-0,2686086	0,0622452	0.000
Antecedentes	0,4039273	0,0229732	0.000
Constante	0,6524722	0,3329832	0.050

Fuente: elaboración propia.

Se calculó asimismo, un indicador complementario que da cuenta de la capacidad del modelo de clasificar correctamente los casos. Se trata del test de Hosmer y Lemeshow. En la medida que el test no es significativo, indica que la clasificación que

hace el modelo, no es distinta a lo observado. Dicho de otro modo, el modelo tiene un porcentaje de acierto elevado al predecir el evento (en este caso, la reincidencia). Para el Modelo 6, el χ^2 de Hosmer-Lemeshow tiene un valor de 10,70, con una significación de 0,2194.

En la Tabla N° 4 se presentan los deciles de probabilidades estimadas por el Modelo 6, así como la cantidad de casos observados y esperados para cada decil, que reincidieron (1), como que no lo hicieron (0). Los resultados muestran unos residuos muy pequeños, que a su vez no se concentran particularmente en ninguna zona específica de la distribución.

Tabla N° 4. Deciles de probabilidades estimadas

Grupo	Prob.	Obs._1	Esp._1	Obs._0	Esp._0	Total
1	0.1464	63	64.5	563	561.5	626
2	0.2073	103	111.8	524	515.2	627
3	0.2653	134	150.3	499	482.7	633
4	0.3243	188	185.0	439	442.0	627
5	0.3826	227	218.7	390	398.3	617
6	0.4379	240	257.6	387	369.4	627
7	0.4962	302	291.9	323	333.1	625
8	0.5662	357	331.6	270	295.4	627
9	0.6707	385	384.1	240	240.9	625
10	0.9965	495	498.4	130	126.6	625

Fuente: elaboración propia.

Al no ser posible interpretar los coeficientes en un modelo de regresión logística de un modo directo, tal como ocurre en la regresión lineal, se procedió a estimar “casos típicos” a los efectos de hacer más comprensibles los resultados obtenidos. A continuación se presentan las probabilidades predichas por el modelo final para valores fijos de las categorías de las variables estructurales (sexo y edad al momento del procesamiento), según la situación que presentan los individuos en los restantes regresores.

En el Gráfico N° 1 se observan diversos fenómenos. En primer lugar, el alto porcentaje de reincidencia (en el entorno del 75%) de los hombres que tienen 18 años al momento del procesamiento y se encuentran en la “peor situación”. Esto es: tienen una inserción ocupacional débil, un nivel educativo que alcanza como máximo a Primaria completa, cometieron un delito contra la propiedad, lo hicieron de modo solitario y fueron procesados con prisión (manteniendo los antecedentes en la media). A su vez, se observa que las mujeres en esa misma situación (la peor) y teniendo también 18 años al ser procesadas, presentan un nivel de reincidencia considerablemente menor que el de los hombres, que no llega al 60%. Estos resultados nos indican el efecto inhibitor

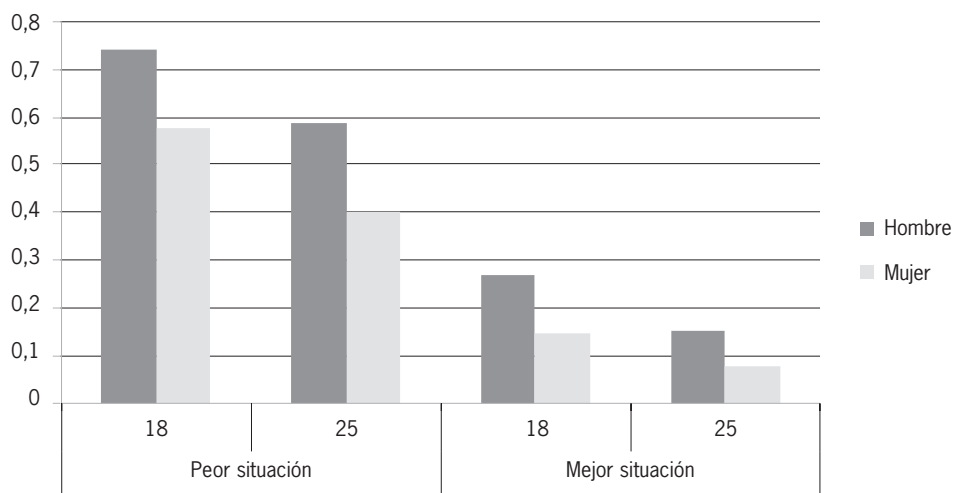
que tiene la estructura de género en el comportamiento delictivo, que hace no sólo que las mujeres cometan delitos de un modo muy eventual en relación a los hombres, sino que incluso, aquellas que incurren una vez en la actividad, reinciden en mucho menor medida que éstos.

Si nos mantenemos en la “peor situación”, pero modificamos únicamente la edad en el momento del procesamiento, se observa una clara disminución en los porcentajes de reincidencia. Así, por el sólo hecho de considerar una edad más avanzada (25 años, en vez de 18), los niveles de reincidencia masculinos bajan de 74% a 59%, mientras que los femeninos lo hacen de 58% a 40%. Estos resultados se encuentran en consonancia con lo propuesto por las teorías que destacan el impacto de la edad en el comportamiento delictivo, siempre manteniéndonos en la peor situación desde el punto de vista de los restantes regresores.

Sin embargo, resulta interesante analizar qué ocurre si, en vez de comparar las estimaciones según los distintos valores de sexo o edad (variables demográficas), ponemos a jugar las variables sociales. Para observar este efecto, construimos la “mejor situación”, que se encuentra en el extremo opuesto de la vista anteriormente. La mejor situación está definida por: tener una inserción ocupacional fuerte, un nivel educativo de Secundaria completa o superior, haber cometido un delito contra la persona, haber delinquido de modo grupal y haber sido procesado sin prisión (manteniendo los antecedentes en la media).

Al pasar de la “peor” a la “mejor” situación –aún manteniendo la edad fija– el descenso en los niveles de reincidencia es muy notable. Así, los hombres de 18 años pasan de un 74% a un 27%, mientras que los de 25 años pasan de un 59% a un 15%. En el caso de las mujeres de 18 años, el descenso se produce de un 58% a un 15%, mientras que las de 25 años pasan de un 40% a un 8%.

Estos resultados nos indican que, si bien las variables demográficas básicas (edad y sexo) tienen un impacto claro y contundente sobre las probabilidades de reincidencia, el efecto mayor viene dado por otro tipo de atributos de los cuales son portadores los individuos. Éstos refieren a su posición en la estructura social, así como a su modo de involucramiento en el ámbito delictivo.

Gráfico N° 1. Probabilidades esperadas de reincidencia para casos típicos.

Fuente: elaboración propia.

Reflexiones finales

Para finalizar, deseamos destacar diversos aspectos relativos a la información previamente presentada. En primer lugar, y en cuanto a los resultados obtenidos a partir del modelo de regresión logística, cabe resaltar que las variables destacadas por la literatura a nivel internacional para las cuales se dispone información, no sólo poseen un efecto significativo sobre el fenómeno de la reincidencia delictiva en el Uruguay, sino que también actúan del modo esperado. Brevemente, a medida que aumenta la edad, el nivel educativo y la inserción laboral, disminuyen las chances de reincidencia. A su vez, los delitos contra la propiedad, aquellos que realizan los ilícitos de modo solitario, los ofensores masculinos y quienes fueron procesados con prisión, muestran mayores probabilidades de reincidir que quienes cometieron delitos contra la persona, actuaron grupalmente, son mujeres o fueron procesados sin una pena privativa de libertad. Finalmente, a medida que aumentan los antecedentes delictivos, también se incrementan las chances de que la persona vuelva a ser procesada por la comisión de ilícitos.

A pesar de ello, es necesario remarcar los problemas serios tanto de ausencia de información como de validez de algunas de las variables disponibles, lo cual impide el desarrollo de modelos más sofisticados. Así, y debido a que se trata de registros administrativos, que son construidos con una finalidad distinta a la del análisis estadístico, se observan problemas relacionados al sentido y la categorización de algunas variables (como es el caso de estado civil, raza, u ocupación), así como la ausencia de variables criminológicas claves, como ser la edad de inicio delictivo o la fecha de egre-

so carcelario. En particular, esta última información resulta esencial para poder estimar efectivamente el tiempo de privación de libertad y, por ende, el período en el cual los individuos estuvieron efectivamente imposibilitados de reincidir. Ello permitiría aplicar otro tipo de técnicas más adecuadas como historia de eventos, series temporales, o inclusive modelos jerárquicos lineales que incluyan más adecuadamente la temporalidad y habiliten a que los resultados obtenidos tengan mayor precisión.

Finalmente, nos parece interesante destacar cuatro líneas futuras de trabajo asociadas, en parte, a las limitaciones que posee la base de datos empleada por este trabajo. En primer lugar, parece importante actualizar la base de datos hasta 2012 para evaluar si los últimos años marcan alguna diferencia en términos de los factores de riesgo asociados a la reincidencia. No obstante, dicha actualización de la base de datos seguiría adoleciendo de todos los problemas ya mencionados, y en particular, el más grave: la ausencia de información sobre el momento de liberación del individuo privado de libertad.

Por ello, una segunda línea de trabajo involucra realizar una muestra aleatoria de casos judiciales para concurrir a los juzgados y, en base a trabajo de archivo, reconstruir los momentos de liberación de los casos de la muestra, a los efectos de lograr estimar modelos más sofisticados, que nos permitan no sólo predecir qué factores determinan una mayor probabilidad de reincidir, sino también cuándo es que dicho evento puede tener lugar. No obstante, si bien realizar este tipo de estudios constituiría un importante avance y tendría utilidad para la toma de decisiones de política pública, sigue limitado por la escasez de variables explicativas que pueden emplearse e, íntimamente asociado, por la incapacidad para superar un modelo basado en factores de riesgo. Como señalábamos inicialmente, una adecuada explicación requiere no sólo identificar factores que correlacionan significativamente con el *output* de interés, sino que también es necesario poder identificar los mecanismos causales subyacentes. La referida escasez de variables disponibles en las bases de datos administrativas de instituciones penitenciarias limita seriamente la posibilidad de pronunciarse sobre qué tipo de mecanismos causales están operando detrás de las correlaciones observadas. Una asociación significativa entre débil inserción laboral y reincidencia puede obedecer a falta de recursos, a falta de integración social/normativa a ámbitos de socialización, a ausencia de control social por otros individuos, etc., o a la presencia simultánea de los tres. Pero en todo caso, con este tipo de información sólo es posible especular.

Por ello, una tercera línea de trabajo que creemos sería útil, involucra seguir los pasos de los estudios realizados en Norteamérica y Europa y desarrollar encuestas de reincidencia que permitieran incluir una mayor riqueza de ítems y variables teóricamente significativas y, en base a ello, permitir mayor capacidad para explorar y validar o falsar mecanismos causales subyacentes. De esta manera, sería posible no sólo incorporar variables relevantes ausentes en la actualidad, como por ejemplo hijos, pareja, etc., sino que permitiría también incluir ítems sobre qué tipo de efectos tienen este tipo factores sobre la probabilidad de reincidir. Un individuo liberado puede dejar de reincidir

una vez que empieza una relación amorosa pero, nuevamente, los mecanismos causales subyacentes pueden ser diversos: cambio de valores, mayor control social, pérdida de vínculo con grupo de pares delictivos, etc. Todos ellos, aspectos que sólo podemos evaluar empíricamente si contamos con ítems específicamente diseñados para tal fin.

Por supuesto, la identificación de algunos mecanismos causales más complejos puede verse limitada por el uso de cuestionarios de encuesta. Habida cuenta de esta limitante, como cuarta línea de trabajo nos parece importante lograr generar una efectiva triangulación entre los resultados obtenidos con las bases de datos cuantitativas y resultados de estudios cualitativos. El uso de técnicas cualitativas puede ser útil para contrastar y validar algunos de los hallazgos a nivel cuantitativo, para especificar mecanismos causales excesivamente complejos, o incluso para darnos una orientación más clara de qué tipo de medidas cuantitativas de factores y mecanismos causales son más relevantes en Uruguay, para de esta manera no depender de medidas diseñadas en contextos económicos, sociales y culturales muy diferentes.

Bibliografía

- AEBI**, M. (2008). *Temas de criminología*. Dickinson, Madrid.
- AKERS**, R. (1998). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Boston, MA: Northeastern University Press.
- AUSTIN**, J. y **HARDYMAN**, P. (2004). "The risks and needs of the returning prisoner population", en *Review of Policy Research*. Vol. 21, Nº 1.
- BAUMER**, E. (1997). "Levels and Predictors of Recidivism: The Malta Experience", en *Criminology*, Nº 35, 601.
- BLAGININ**, K. (2008). "Creating a Recidivism Prediction Model for Florida's DJJ Program Evaluation Model". Georgia State University. Artículo presentado en el congreso anual de la Asociación Americana de Sociología.
- BLUMSTEIN**, A.; **COHEN**, J.; y **FARRINGTON**, D. P. (1988). "Criminal career research: its value for criminology", *Criminology*, 26, 1-35.
- BLUMSTEIN**, A. y **COHEN**, J. (1987). "Characterizing criminal careers", en *Science*, 237, pp. 985-991.
- BLUMSTEIN**, A.; **FARRINGTON**, D.; **MOITRA**, S. (1985). "Delinquency Careers: Innocents, Desisters, and Persisters", en *Crime and Justice*, Vol. 6.
- BOADO**, M., **FERNÁNDEZ**, T. (2006). "La alegría no va por barrios: ¿qué clases sociales pagaron la gran crisis (2000-2003)?" en Mazzei (Org.) *El Uruguay desde la Sociología IV*. Montevideo, Departamento de Sociología, FCS, UdelaR.
- BRAITHWAITE**, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- BROME**, R.; **FAGAN**, J.; **PIQUERO**, A. et al. (2003). "Criminal careers of serious delinquents in two cities". *Youth Violence and Juvenile Justice*, Vol. 2, No. 3, 256-272.
- CAPDEVILA**, M. y **PUIG**, M. (2009). "Tasa de reincidencia penitenciaria 2008". Documento de Trabajo. Generalitat de Catalunya. Departamento de Justicia. Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

- CASPI A. y MOFFIT T.** (1993). When do individual differences matter? A paradoxical theory of personality coherence, en *Psychological Inquiry* 4:247-271.
- CID, J.** (2009). "Is imprisonment criminogenic? A comparative study of recidivism rates between prison and suspended prison sanctions". En *European Journal of Criminology*. Vol. 6, Nº 6.
- COPAS, J. y MARSHALL, P.** (1999). "The ofender group reconviction scale: a statistical reconviction score for use by probation officers", en *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*, Vol. 47, No. 1.
- CORAPCIOGLU, A., ERDOGAN, S.** (2004). "A cross-sectional study on expression of anger and factors associated with criminal recidivism in prisoners with prior offences", en *Forensic Science International* 140; 167-174.
- FARABEE, D., VANDANA J., y M. DOUGLAS ANGLIN** (2001). "Addiction careers and criminal specialization". *Crime & Delinquency* 47:196-220.
- FARRINGTON, D.** (1986). "Age and crime", en *Crime and Justice*, Vol. 7.
- FARRINGTON, D.** (2005). "Early identification and preventive Intervention: How effective is this Strategy?", en *Criminology and Public Policy*, Nº 4.
- FERNANDES, J.** (2009). "A ressocialização através do estudo e do trabalho no sistema penitenciário brasileiro". Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
- GARCÉ, A.** (2009). Poder Legislativo - Comisionado Parlamentario. Informe de actuación y evaluación del Sistema Penitenciario 2009.
- GARCÉ, A.** (2012). Informe encargado al Comisionado Parlamentario por la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria. Disponible en <http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/otrosdocumentos/comisionadoparlamentario/InformeEspecialAgosto2012.pdf>
- GOTTFREDSON, M. y HIRSCHI, T.** (1990). *A general theory of crime*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- GIORDANO, P.; DEINES, A. y CERNOVICH, S.** (2006). "In and out of crime: A life course perspective on girl's delinquency", en **HEIMER, K. y KRUTTSCHNITT, C.** (Eds.) *Gender and crime. Patterns in victimization and offending*. New York University Press.
- GUJARATI, D.** (2004). *Econometría*. Cuarta Edición. McGraw-Hill / Interamericana. México, D.F.
- GWYNN, C.** (1993). "Women and crime: the failure of traditional theories and the rise of feminist criminology". *Monash University Law Review*. Vol 19, Nº 1.
- HAYNIE, D.; STEFFENSMEIER, D. y BELL, K.** (2007). "Gender and serious violence. Untangling the role of friendship sex composition and peer violence", en *Youth Violence and Juvenile Justice*. Vol. 5, Nº 3.
- HEIMER, K.** (1996). "Gender, Interaction, and delinquency: Testing a theory of differential social control", en *Social Psychology Quarterly*, Vol. 59, Nº 1.
- HIRSCHI, T.** (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- HIRSCHI, T. y GOTTFREDSON, M.** (1983). "Age and the explanation of crime", en *American Journal of Sociology*, 89.
- HOSMER, D. y LEMESHOW S.** (2000). *Applied Logistic Regression*. Second Edition. John Wiley. New York.
- JUANCHE, A. y PALUMMO, J.** (Coords.). (2012). *Hacia una política de Estado en privación de libertad. Diálogo, recomendaciones y propuestas*. SERPAJ, OSJ, Unión Europea.

- KURLYCHEK, M.; BRAME, R.; BUSHWAY, Sh.** (2006). "Scarlet letters and recidivism: Does an old criminal record predict future offending?", en G. Pogarsky, "Criminal Records, Employment, & Recidivism". *Criminology & Public Policy*, Vol. 5, No. 3, 479-521.
- LAUB, J.; SAMPSON, J.** (2001). Understanding desistance from crime. *Crime and Justice: a Review of Research* 28: 1-69.
- LAUB, J. y SAMPSON, J.** (2003). *Shared Beginnings, Divergent Lives. Delinquent Boys to Age 70*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- LUQUE, E.; FERRER, M.; CAPDEVILLA, M.** (2005). "La reincidencia penitenciaria a Catalunya". Barcelona. CEJFE. Colección Justicia i Societat, N° 25.
- MACDONALD, Z.** (2002). "Official Crime Statistics: Their Use and Interpretation", en *The Economic Journal*, Vol. 112, No. 477. Pag. 85-106.
- MAGUIRE, M.** (2008). "Crime Statistics and the construction of crime", en Maguire, M.; Morgan, R. y R. Teiner *The Oxford Handbook of Criminology*, The Oxford Handbook of Criminology, Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press.
- MCCARTHY, B. y HAGAN, J.** (1995). "Getting into street crime: The structure and process of criminal embeddedness", en *Social Science Research*, N° 24.
- MCGLOIN, J.; PIQUERO, A.** (2009). "I wasn't alone': collective behaviour and violent delinquency", en *Australian and New Zealand Journal of Criminology*. December, 1.
- MILLER, H.** (2006). "A Dynamic Assessment of Offender Risk, Needs, and Strengths in a Sample of Pre-release General Offenders", en *Behavioral Sciences and the Law*, N° 24: 767-782.
- MOFFIT, T.** (1993). "Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy", en *Psychological Review*. 100: pp. 674-701.
- MUSTO, C., TRAJTENBERG, N. y VIGNA, A.** (2012). "Consideraciones teóricas y metodológicas sobre el vínculo entre el consumo de drogas y delito", en *El Uruguay desde la Sociología X*. DS, FCS, Udelar.
- NAGIN, D. y WALDFOGEL, J.** (1998). "The effect of conviction on income through the life cycle", en *International Review of Law and Economics*, 18.
- NOWAK, M.** (2010). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Misión a Uruguay. Naciones Unidas Uruguay.
- OPP-MIDES** (2011). Reporte Social 2011. Principales características del Uruguay Social, Mastergraf, Montevideo, Uruguay.
- PIQUERO, A.; FARRINGTON, D. y BLUMSTEIN, A.** (2003). "The criminal career paradigm", en *Crime and Justice*, Vol. 30, pp. 359-506.
- PIQUERO, A.** (2004). "Somewhere between persistence and desistance: the intermittency of criminal careers", en Maruna e Immarigeon (Eds.) *After crime and punishment*. Willan Publishing.
- POWERS, D y XIE, Y.** (2001). *Statistical Methods for categorical data Analysis*. Academic Press; NY.
- PUCCI, F.; TRAJTENBERG, N.; ROJIDO, E. y VIGNA, A.** (2009). "EXPLICACIONES DE LA NO REINCIDENCIA delictiva". En Mazzei (coord.) *El Uruguay desde la sociología VII*. Departamento de Sociología, FCS, Udelar. Disponible en: <http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=798&CatId=40&SubCatId=380>

- REISS, A. y FARRINGTON, D.** (1991). "Advancing Knowledge about Co-Offending: Results from a Prospective Longitudinal Survey of London Males", en *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 82, N° 2.
- ROJIDO, E., TRAJTENBERG, N. y VIGNA, A.** (2011). "Rehabilitación y prisiones: estado del arte en la investigación en Uruguay", Documento de trabajo, N° 80, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
- SAMPSON, R. y Laub, J.** (1993). *Crime in the making: Pathways and Turning Points through life*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- SAMPSON, R., LAUB, J., y WIMER, Ch.** (2006). "Does marriage reduce crime? A counterfactual approach to within-individual causal effects", en *Criminology*. Vol. 44, N° 3, pp. 465-507.
- SERPAJ.** (2009). Derechos humanos en el Uruguay. Informe 2009.
- SERPAJ.** (2010). Derechos humanos en el Uruguay. Informe 2010.
- STEFFENSMEIER, D.; ANDERSEN, E.; HARER, M.; STREIFEL, C.** (1989). "Age and the distribution of crime", en *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, N° 4.
- STEFFENSMEIER, D.; y STREIFEL, C.** (1991). "Age, gender, and crime across Three historical periods: 1935, 1960, and 1985", en *Social Forces*, Vol. 69, N° 3.
- THORNBERRY, T.** (ed.). (1997). *Developmental Theories of Crime and Delinquency*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- THORNBERRY, T. y KROHN** (2000). "The Self-Report Method for Measuring Delinquency and Crime", en *Criminal Justice 2000*, Vol. 4: Measurment and Analysis of Crime and Justice.
- ULMER, J.** (2001). "Intermediate Sanctions: A Comparative Analysis of the Probability and Severity of Recidivism", en *Sociological Inquiry*, Vol. 71, N° 2, 164-193.
- VIGNA, A.** (2012). "¿Cuán universal es la curva de edad del delito? Reflexiones a partir de las diferencias de género y del tipo de ofensa", en *Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS*, Vol. 25, N° 31, diciembre.
- VISHER, Ch. y TRAVIS, J.** (2003). "Transitions from prison to community: Understanding individual pathways", en *Annual Review of Sociology*. N° 29.
- WARR, M.** (1998). "Life-course transitions and desistance from crime". *Criminology* 36(2): 183-217.
- WARR, M.** (2001). "Age, Peers, and Delinquency." Reprinted in Weis, J. G., R. D. Crutchfield, y G. S. Bridges (eds.), *Juvenile Delinquency Readings*. Second Edition. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- WIKSTROM, P. O. y SAMPSON, R.** (Eds.). (2006). *The Explanation of Crime. Context, Mechanisms and Development*. Cambridge.



La protesta social conservadora

Representaciones sociales y nuevas sensibilidades sobre juventud y violencia a través de las movilizaciones en torno a la baja de edad de responsabilidad penal

Susana Mallo¹ - Nilia Viscardi² - Marcia Barbero³

En el Uruguay de la posdictadura se han discutido dos leyes vinculadas al ámbito de los Derechos Humanos, la violencia política y social y el rol punitivo del Estado. La primera de ellas refiere al movimiento que impulsó una ley hoy vigente mediante la cual se estableció la caducidad del “ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales. El segundo movimiento también se ha iniciado a la salida de la dictadura, y refiere al debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad penal para adolescentes de entre 16 y 18 años de edad⁴.

Introducción

Ambos movimientos ponen de relieve la emergencia de un grupo de opinión que calificamos de conservador en materia de violencia social y estatal y que poco se ha investigado en términos de sus impactos en relación a la consolidación de leyes que se vinculan a la cuestión de los Derechos Humanos en Uruguay. Desnudando las continuidades y homologías de posiciones respecto del tema, ambos procesos se vinculan al conflicto social y la justicia. En los dos casos, los jóvenes se han visto involucrados en debates que refieren a la Justicia, el sentimiento de inseguridad, las dinámicas del castigo y las interpretaciones respecto del rol del Estado en relación a dos tipos de violencia: la violencia social y la violencia política. La diferencia radica en que la prime-

1 Profesora Titular en el Área de Teoría Social e investigadora responsable del Área de Sociología Política del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Doctora en Ciencias Sociales. Autora de diversos libros y artículos. susana.mallo@cienciassociales.edu.uy

2 Profesora Adjunta del Área de Sociología Política del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Doctora y Magíster en Sociología por la UFRGS. Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. Investigadora Nivel 1 de la ANII. nilia.viscardi@gmail.com.uy

3 Socióloga, Candidata a Magíster en Sociología, FCS, UdelaR. Candidata a Investigadora SNI-ANII marcia.barbero@gmail.com

4 Agradecemos muy especialmente la colaboración de Martín Couto y Camila Falkin en la redacción del presente artículo.

ra instancia legal (la Ley de Caducidad) responde en sus inicios a un proceso político partidario y la segunda (pedido de baja de edad de responsabilidad penal) ancla en una corriente de opinión mayoritaria que se ha estructurado incluso en protestas populares y pedidos de grupos refrendados e impulsados por sectores políticos que aparecen como sus voceros.

En el presente texto, se propone contribuir a una perspectiva que vincule pensamiento conservador y dinámicas de grupos y movimientos sociales en la lucha por Derechos Humanos y Derechos de Niñez y Adolescencia. Postulamos que las dinámicas actuales se asocian a un cambio de sensibilidad del país en materia de violencia social y juventud. Para ello, retomando un debate que ha tenido su especificidad en el análisis histórico-político, focalizaremos las raíces sociales del sentimiento de inseguridad y de la nueva cultura de control social en Uruguay.

El pensamiento conservador

El estudio sociológico de las acciones y políticas públicas sociales dirigidas a los jóvenes debe ubicarse en los debates actuales en torno a la violencia, la inseguridad, las respuestas pretendidas por los diferentes sectores de la sociedad ante el fenómeno y las respuestas efectivamente implementadas desde el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Efectivamente, ellas operan como marco contextual en el cual se conciben y desarrollan las políticas de seguridad. Ello ubica nuestro estudio en lo que Garland (2002) propone como el *análisis de la naturaleza del sustento social del castigo y su significación cultural*. Una de sus afirmaciones más relevantes para este trabajo tiene que ver con lo siguiente: no es el crimen ni el conocimiento sociológico sobre el castigo lo que afecta las políticas al respecto sino la percepción del “problema del crimen” y las posiciones políticas que motivan las políticas. En Uruguay, entendemos que en la etapa actual esta percepción está siendo fuertemente orientada por un giro que se comprende mucho más desde la sustancia del pensamiento conservador y su visión del crimen que en función de posturas político partidarias.

Veamos, entonces, de qué hablamos cuando aludimos al concepto de “conservadurismo”. Diversos analistas señalan que el conservadurismo, surgió como reacción frente a la Revolución Francesa. En tanto tradición política que incluye una serie de partidos y varios gobiernos parece definirse más por aquello a lo que se opone que por aquello que propone. El conservadurismo proclamaría, por su nombre, que conserva y que está en contra del cambio. Sin embargo, el conservadurismo propone el cambio y lo efectúa, aunque esta idea choca contra la idea dominante de esta tradición (Eccleshall, 1984; Honderich, 1993).

“El conservadurismo nunca ha estado a favor de la modificación que es *cambio*, que entraña falta de familiaridad. Ha estado y está a favor del tipo de modificación que es *reforma*, que entraña sin duda también cierta falta de familiaridad. (...) existe una diferencia profunda entre cambio y reforma”. (Honderich: 13). El cambio es innovación y la reforma no es un cambio en la sustancia o disposición primaria de los objetos, sino

la aplicación directa de un remedio al mal que se padece. Innovar no es cambiar, de allí su oposición original: los revolucionarios franceses se quejaron de todo, no dejaron nada, absolutamente nada, sin cambiar.

También existe un conservadurismo que puede surgir en cualquier partido político, y ha surgido en partidos socialistas y comunistas. No tratamos de las alas conservadoras de esos partidos. Nos concentramos más bien en la tradición política concreta de creencias, sentimientos, criterios, legislación y actuación, una tradición política que ha evolucionado y que incluye diversidad. Existe acuerdo en que la obra literaria más importante que funda esta tradición se encuentra en *Reflexiones sobre la revolución de Francia*, de Edmund Burke escrita en 1790. Este conservadurismo ha propugnado modificaciones, pero su pensamiento es asistemático y es difícil saber qué modificación apoya y a cuál se opone.

Para la sociología política la esencia del conservadurismo radica en la “función” que debe cumplir en el sistema político. Por tanto su programa es limitado. El intento es el de evitar una fuerte connotación política con miras a preservar un orden basado en la supremacía de la Ley como control y posee por ello mismo en su discurso un alto contenido de ambigüedad como asimismo una fuerte carga emotiva simbólica. Consecuentemente, de ello se deriva una falta de sistematización del pensamiento conservador, a la vez que un cuerpo de ideas simples, de fácil comprensión. Ejemplo de ello es la velocidad con que varias ideas han penetrado socialmente en Uruguay:

- la doctrina de la tolerancia cero en materia de seguridad por oposición a una política de prevención social de la violencia;
- la represión y el encarcelamiento como respuestas eficaces frente a la violencia social;
- la crítica a una política económica de redistribución, que va de la mano de la idea de “reducir el peso del Estado” y las cargas sociales del Estado;
- el cuestionamiento a las transferencias sociales sustentado en la idea de que el asistencialismo atenta contra el fomento de la cultura del trabajo de los pobres, de quienes se duda que tengan derecho moral al mismo ya que su modo de vida demostraría que lo rechazan como valor;
- la defensa de un sistema educativo con circuitos escolares socialmente diferenciados de acuerdo a las capacidades naturales y el origen social;
- la idea del mercado como regulador de la sociedad y de la propiedad como derecho fundamental y estructura fundante de la sociedad;
- la estratificación social como dato natural de la realidad y la desigualdad social como expresión de capacidades individuales diferenciales e irreversibles;
- la crítica al reconocimiento de las nuevas identidades sexuales y configuraciones familiares y a los derechos reproductivos;

- la culpabilización de los adolescentes y jóvenes infractores y la defensa de respuestas punitivas por oposición a medidas socioeducativas a nivel judicial y políticas de reinserción y protección social.

Todo colabora en proyectar la constitución e idea de *la sociedad* jerarquizada de acuerdo a un orden moral basado en el concepto difuso de tradición (“tradición, familia y propiedad” como lema de sentido común más conocido). Fundamenta esta idea la pretensión de búsqueda de un orden estable de modo de satisfacer las exigencias humanas, idea que podríamos oponer al conflicto que supone defender el cambio social en aras del progreso y que proviene claramente de los intentos opositores a la propia revolución francesa.

Complementaria es la concepción que se tiene de la *naturaleza humana*, la cual también está en cuestión. Pensada como inmodificable porque existe una imposibilidad de mantener moralidad y trascendencia, su definición se opone al socialismo de la época que cree en la constitución social del sujeto y la determinación social de su existencia. Una existencia que, en la modernidad naciente, contribuye a la desigualdad, el individualismo y la conformación de modos de existencia marcados por la pobreza extrema contra aquello que, en un proyecto progresista, favorecería el desarrollo social y el humanismo de Marx. La naturaleza inmodificable del conservadurismo tiene línea directa, en materia de seguridad con las políticas de mano dura y el énfasis en el rol punitivo y represivo del Estado, ya que la apuesta al cambio y la reinserción social como segunda chance contradicen la visión progresista de la propia naturaleza humana (Garland, 2002).

Asimismo, los conservadores han pensado y profundizado mucho más que los progresistas el problema del *poder político*. Weber definió al Estado como garante legítimo de la coacción y el uso de la fuerza. Pero también como agente de construcción cultural y social, ya que de eso depende todo tipo de dominación social y la propia legitimidad estatal que nunca se funda meramente en el uso de la fuerza (Weber, 1992). La visión del Estado como organización que también crea cultura y expande derechos, en la tradición de izquierda, no fue una visión exenta de conflictos y desencuentros⁵.

En la visión conservadora, la Ley es elevada a tabú intocable en cuanto instrumento estabilizador de los procesos sociales en el marco de las definiciones de ciertas tradiciones. La Ley es objeto de embate y lucha cuando la misma se inclina hacia el cambio y la defensa de sujetos y colectivos que atentan contra las tradiciones y valores conservadores. En este sentido, la Ley de Caducidad permitió legitimar la violencia del

5 En su crítica a las luchas y visiones del Estado de los movimientos de izquierdas de los años sesenta y setenta, Castel (1997) admite que se minimizó la visión del Estado a la de garante de los intereses de la clase dominante, invisibilizando su poder de constitución social, su función de garante de derechos colectivos resultantes de largas luchas históricas, su persistencia en la sociedad y las conquistas sociales de los trabajadores y sectores populares que el mismo en parte amparó. El caso de Uruguay y el advenimiento del primer batllismo constituye un momento paradójico en este debate, en tanto se instituyó tempranamente como Estado que diera concesiones sociales y políticas.

Estado frente a los actos protagonizados por los “subversivos” políticos de los años setenta sin cuestionar el exceso de poder del Estado. El pedido de baja de la edad de imputabilidad es una transformación que busca frenar los avances que en materia legal tuvieron en el país el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño. Este Código y la Convención, claramente, expresan el progreso de ideas que los sectores conservadores actuales cuestionan filosófica y pragmáticamente. Filosóficamente, porque no creen en las medidas socioeducativas y pragmáticamente porque consideran que el delito a temprana edad muestra una naturaleza monstruosa inmodificable que las medidas socioeducativas difícilmente transformen. La medida de política es el temor al castigo, por eso, para los conservadores, debe actuarse sobre el castigo y su recrudescimiento, único garante del respeto a la regla.

Otro elemento a señalar es el *individualismo social* en el pensamiento conservador. Para éste “El hombre aprende a regañadientes que solo debe contar consigo mismo, no con poderes sobrenaturales creados a su imagen y semejanza” (Lash, 1997: 204). Esto confluye con los planteos de Castel (2004) que propone ver las nuevas lecturas conservadoras en materia de seguridad como resultado del individualismo negativo, sin relación con la acción de colectivos y mucho menos con los avances de políticas neoliberales.

Conservadurismo, progresismo y tendencias en materia de seguridad

Barrán sitúa en los inicios del pensamiento conservador en Uruguay a la jerarquía católica y el movimiento que producía el temor a las revoluciones socialistas. A principios del siglo XX, la burguesía liberal uruguaya se vio fuertemente interpelada con el advenimiento del batllismo y la pérdida de poder sobre el Estado. Asimismo, “... tenía que compartir el anticlericalismo con su enemigo político y social, el anarquismo. Su problema central, en realidad, ya no era sólo la pérdida de la hegemonía cultural. Era más grave. Con el batllismo reformista y “obrerista” en el poder desde 1911, la burguesía liberal ya no contaba con su tradicional aliado, el gobierno. Desde Máximo Santos, en 1882, hasta Juan Lindolfo Cuestas en 1903, con el breve interregno de Juan Idiarte Borda (1894-97), esa burguesía había apoyado a gobiernos liberales y a la vez, socialmente conservadores” (Barrán, 2004: 76).

Las presidencias de José Batlle y Ordóñez eran anticlericales y socialmente peligrosas a los ojos de los conservadores. La Comuna había ocurrido en París, la Internacional de 1889 tenía su sede en la misma ciudad, la que conjugaba, según el clero, lujuria, socialismo, masonería y judaísmo. A su vez, en Montevideo, la primera serie de huelgas de cierta entidad había ocurrido entre 1895 y 1896. La siguiente ocurrió en 1901 y recién en 1905 se fundó la primera central obrera anarquista⁶.

6 “Los peligros imaginados son también reales, es sabido, pero como demoran tanto en hacerse carne se puede dejar de creer en ellos. El alerta conservador y el “freno” ofrecido por la iglesia recién alcanzó plena funcionalidad luego de 1911, cuando el batllismo primero y la renovación del peligro internacional con la Revolución Rusa de 1917, tornaron más fuertes los miedos conservadores pues

¿Qué significa hablar de conservadurismo –y de progresismo- en el Uruguay contemporáneo? “De acuerdo al análisis comparado con Brasil los partidos Nacional y Colorado pueden ser calificados claramente como “partidos conservadores” (y no partidos de centro)”. (Moreira, 2004: 134). Para Moreira existen claramente dos bloques, un bloque centro izquierda así definido por líderes y electores y percibido por los otros como tal y un bloque conservador que se autopercibe como de centro pero que es visto por los otros y su propio electorado claramente ubicado en la centro derecha del espectro ideológico. En la dimensión social y en la dimensión política las diferencias entre los partidos tradicionales y la izquierda se mantienen en términos más o menos equivalentes. La izquierda sigue abogando por una decidida intervención estatal en el área social y en la dimensión política sigue siendo más favorable a un aumento de la participación popular en el gobierno que los partidos tradicionales. En otros temas, de orientación más secular o “posmaterialista”, la izquierda se sitúa en la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la posición respecto al aborto.

En lo que refiere al cambio político en el período que va de los años sesenta a principios de siglo, éste demuestra ser de largo aliento y las élites en el poder se opusieron a él por todos los medios. Para ello, intentaron erosionar la propia cultura democrática del Uruguay en el contexto de luchas y conflictos sociales que tuvieron que sortear. De hecho, en el proceso político de la posdictadura y a diferencia de otros países de América Latina, la agenda de las reformas fue parte del debate público. En esto participaron el sindicalismo y la izquierda. Es por ello que los uruguayos han concurrido a las urnas muchas más veces que otros países que únicamente debían elegir sus representantes. Las iniciativas de referéndum y plebiscito muestran hasta qué punto la sociedad civil ha tratado de resistir a la agenda política del gobierno privatizador (Moreira, 2004).

La comparación de las izquierdas o centro izquierdas de “nueva generación”, nos permite señalar ciertas similitudes para esclarecer el debate sobre políticas de seguridad y pensamiento progresista y conservador. Sin duda, las mismas han construido con mucho esfuerzo e imaginación un “electorado de opinión pública”, rompiendo las representaciones simbólicas de los partidos tradicionales y unificándolos. Un nuevo modo de conocimiento de la izquierda le ha otorgado la capacidad de captar la creatividad potencial de las situaciones y orientar la práctica social. Esto no significa que el discurso se transforme en una sumatoria de elementos heterogéneos. Lo cierto es que se ha complejizado la noción de “homogeneidad” del discurso, siendo el gran desafío de las nuevas agrupaciones políticas la construcción de lo heterogéneo sin perder homogeneidad que permita ubicar el signo de un pensamiento progresista en todos los niveles. Lograr, asimismo, un formato integrador que la unifique, a la vez que la ubique en términos de distancia en relación a otros discursos, es uno más de los desafíos a los cuales están abocados los líderes.

El problema de la seguridad es, en este sentido, emblemático en tanto ha puesto en jaque este trabajo de construcción de una hegemonía discursiva e identitaria del pensamiento progresista. A diferencia de otros temas –salud, políticas sociales, redistribución –si la producción y práctica de la oposición ha perdido capacidad identitaria– en éste obligó a la izquierda a construir un discurso que le era ajeno en tanto supone asumir la idea de la represión. La misma ha tenido dificultades para establecer una hegemonía discursiva sobre la violencia social explicándola como resultado de la violencia estructural entendida como producto del conflicto social y la desigualdad. Esta dificultad se engarza en parte en que le ha costado comprender la violencia como resultado de las políticas ya no del Estado solamente, sino del propio gobierno y sus instituciones. O sea, como resultado de las propias políticas de gobierno de izquierda en caso de que fallaran o no transformaran las raíces institucionales de la violencia. Y ello en el contexto de la debilidad mostrada por sus políticas sociales y redistributivas para incidir en el descenso de los indicadores de violencia social y delito. Pues ha faltado, precisamente, un trabajo en materia de transformación de las raíces institucionales y estatales de la violencia: la educación, el sistema de rehabilitación y amparo de niños y jóvenes infractores, el sistema de justicia, el sistema carcelario y la policía, fundamentalmente.

Mirar más allá de las políticas y diseñadores de políticas implica mirar la condición social y estructura que define las decisiones políticas y hace que algunos esquemas sociales parezcan posibles y deseables. Estos esquemas y las relaciones entre los grupos sociales determinan nuestras percepciones del peligro y su castigo, en tanto el crimen es socialmente construido. En este sentido, es necesario advertir que el problema de la seguridad se convierte en un problema social en sí mismo, independiente de las manifestaciones concretas de la violencia. La percepción de inseguridad, la construcción de categorías peligrosas, la estigmatización de grupos, la falta de confianza en las instituciones, son elementos recurrentes de nuestra historia reciente. Ante esta realidad se ha invisibilizado la relación existente entre estos procesos y las desigualdades sociales, relación nunca advertida por las visiones conservadoras y no asumida por la izquierda actual, esquivando con ello la complejidad de una discusión sustantiva sobre estas problemáticas (Paternain, 2012).

A nivel de la opinión pública, la necesidad de erigir un discurso –el discurso de la inseguridad– que le permita explicarse y dialogar con toda la sociedad constituye otro desafío fundamental. En este discurso, se ha observado su dificultad de hablar de seguridad en términos de prevención y protección social –propia del pensamiento progresista– y mucho más de mostrar resultados institucionales y políticos a este nivel. Aparece así un discurso que termina cooptando a la propia izquierda: el de la represión, la mano dura y el papel punitivo del Estado, discurso propio del pensamiento conservador. Quién, en gran parte, ha sido el oponente más claro al pensamiento de izquierda no es tanto la oposición, sino su dificultad en definir una política de medios, defender simbólicamente sus políticas y establecer un diálogo fluido con la sociedad informando de sus acciones. La sensibilidad sobre la violencia social se ha construido

por vía de un discurso establecido por los medios de comunicación que claramente identificó el problema de la violencia con el de la pobreza, la imposibilidad de resolver la cuestión social y, lo que es más grave, estableciendo las causas de esta violencia social. Hablamos, precisamente, de los jóvenes y muy especialmente de los jóvenes pobres (Viscardi, 2011).

No puede negarse una importante batería de políticas redistributivas y por tanto progresistas en materia de educación, política social, salud y vivienda implementadas por los dos últimos gobiernos de izquierda en el país. Pese a ello, la respuesta a la demanda de Derechos Humanos, o de ciertas políticas sociales todavía mantienen un horizonte importante de desafíos a concretar. Pero el discurso de la seguridad no admite, en la sensibilidad actual, espacio para tematizar este aspecto: la prevención y la protección se relegan al ámbito de las prácticas de gobierno y el discurso público cambia su signo liderado, fundamentalmente, por el discurso de los medios de comunicación (de corte culpabilizante, inmedatista y conservador en general).

El dilema de las organizaciones es también muy similar. ¿Cohesión significa disciplina y control social? ¿Se puede profundizar la integración barrial sobre la base de las agrupaciones vecinales? ¿Qué lugar para los jóvenes? Sin duda estas preguntas nos conducen a una nueva situación, las izquierdas tienen que estructurar sus discursos, sus prácticas y sus políticas considerando la tensión en términos de captación de los movimientos sociales en los que ya se observan distintas pérdidas ante la incoherencia de las prácticas y de los discursos. Esta idea adquiere relevancia a la hora de pensar la política, las propuestas de la izquierda y el discurso. Como lo hemos sugerido con anterioridad, en este momento, el embate se encuentra en alcanzar una nueva hegemonía discursiva de izquierda en materia de seguridad, que pueda incluir de modo coherente las ideas de protección y las de represión, enlazándolas con prácticas organizacionales e institucionales y un programa de reformas consistente.

Sin embargo, este pensamiento no se ha analizado y se asume como un conjunto de presupuestos. Por ello, es fundamental indagar en los elementos que se desprenden de la práctica de los diversos grupos, movimientos, gremios y corporaciones en materia de seguridad para conocer cómo “hace carne” el pensamiento progresista o conservador en materia de seguridad. Visto de otro modo, supone también entrar en uno de los elementos en que menor hegemonía discursiva ha tenido el pensamiento progresista frente al conservador –el de la seguridad– y analizarlo desde los movimientos sociales y sus dinámicas en Uruguay.

Hemos sugerido que históricamente esta hegemonía discursiva progresista tuvo que capitalizar un discurso que en materia social, de políticas de Estado y concesión de derechos fue tempranamente constituido por José Batlle y Ordóñez en el seno del Partido Colorado instaurando un programa progresista en el seno del naciente Estado Nación uruguayo, programa que se instauró desafiando a los sectores conservadores católicos o laicos. Reconfigurar este patrimonio discursivo ha permitido fortalecer a la izquierda.

Pero en materia de derechos, infancia y adolescencia, la historia, si es leída en clave de historia partidaria y no de tendencias conservadoras o progresistas, muestra contradicciones. Estas aparentes contradicciones podrían establecerse si comparamos la posición actual del Partido Colorado con aquellas defendidas por representantes del Partido Colorado a mediados de la década de los 80 en relación a la baja de edad de responsabilidad penal. Hoy, la retirada del pensamiento progresista a la esfera de la coalición de izquierda permite con libertad al sector “Vamos Uruguay” liderar el movimiento de pedido de la baja de la edad de imputabilidad penal, sin que ello constituya una contradicción ideológica.

Simultáneamente, el problema de la seguridad debe ser analizado como la interrogante fundamental en juego para un pensamiento progresista en cuanto al modo que se está construyendo una izquierda coherente donde lo popular como práctica política –históricamente desdeñada y luego pensada por Gramsci y posteriormente por Laclau–, es interpretado como lógica social y modo de construir lo político desde una nueva dimensión del análisis de la lucha por la hegemonía y la formación de identidades sociales. Entender este proceso es fundamental para comprender el vínculo del partido de gobierno y del pensamiento progresista con las corrientes de ideas sostenidas desde diferentes grupos sociales, organizaciones corporativas y movimientos populares. La política –y el pensamiento– sobre seguridad interpela para la izquierda el proyecto prometido: una “democracia radical en el actual escenario de un capitalismo globalizado” (Laclau, 2005: 97).

Efectivamente, la problemática que se ha instaurado rompe los límites de la política nacional tradicional e implica analizar cómo responder a la demanda popular y simultáneamente responder a los organismos internacionales que requieren políticas restrictivas. Simplemente, si bien el problema de la globalización en la agenda nacional se observaba en términos de problemas económicos, comerciales o medioambientales, nunca se pensó en términos de seguridad. Mucho menos, en su impacto en términos de su vínculo con las anheladas metas de desarrollo, distribución y equidad. Pues la seguridad también se distribuye desigualmente y reproduce estructuras sociales que profundizan la desigualdad. Cabe aún preguntarse junto a Bobbio (1995) ¿qué aglutina a la izquierda a pesar sus ‘obvias’ diferencias provenientes de razones específicas y contextuales? Fundamentalmente, un programa progresista que proclama que ser de izquierda, es considerar toda desigualdad generada por y en lo social –no en la naturaleza humana– y toda injusticia aberrante.

La izquierda progresista ha llegado al poder construyendo su identidad contra sus antepasados conservadores. Desde su llegada al gobierno le corresponde integrar a los sectores siempre postergados. Esto es, le toca mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, proteger a las víctimas de toda forma de violencia y discriminación, disminuir la población reclusa, mejorar la condición de las cárceles y modificar las condiciones de vida de los jóvenes involucrados en procesos sociales delictivos, a partir de las transformaciones que se plantearon como metas de su tiempo.

En el año 2012, el gobierno se encontraba discutiendo una serie de medidas vinculadas a la seguridad pública⁷. Las medidas aprobadas, en sustancia, sirven de ejemplo para observar las tendencias contradictorias entre un gobierno de orientación progresista y una política que propone medidas de corte represivo. Efectivamente, la mayoría de las medidas propuestas se orientan hacia la severización de las penas y el resarcimiento hacia las víctimas de delito. Un conjunto significativo de ellas fue propuesto por los partidos de oposición, específicamente el Herrerismo en el Partido Nacional y “Vamos Uruguay” en el Partido Colorado. A modo de ejemplo, una de las medidas discutidas ha sido la de habilitar el allanamiento nocturno en bocas de venta de pasta base, medida que deberá sortear las trabas legales que actualmente impiden a la fuerza pública el ingreso a hogares durante la noche. A su vez, se discutía la posibilidad de que la policía pudiera detener a quienes circulan por la calle y solicitarles su identificación. Otras propuestas dirigidas hacia el endurecimiento de las penas, hacían referencia a la equiparación del tráfico de pasta base con el delito de homicidio, y a quitar la patria potestad de sus hijos a los delincuentes reincidentes. Se intentaba, además, penar con mayor dureza el porte de armas y el tráfico ilícito de éstas. En cuanto al resarcimiento de las víctimas, las medidas planteadas proponían otorgar flexibilidad a los comerciantes que sufrieron rapiñas y tienen dificultades para cumplir con las cuentas frente a los entes públicos; así como la creación de un fondo con parte del salario de los presidiarios que trabajan, del cual se financiarían tratamientos psicológicos o la compra de instrumentos médicos para las personas que hubiesen sido dañadas por los delitos. Finalmente, entre otras medidas que se encuentran en discusión, ha comenzado a plantearse la posibilidad de realizar careos voluntarios entre las personas agredidas y quienes cometieron el delito, medida que, según se sostiene, tendría efectos positivos en ambas partes.

Movimientos, grupos y seguridad en el país: el pedido de baja de edad de la imputabilidad en Uruguay

El trabajo *Los hijos del Estado* (Morás, 1994) aporta un panorama sobre el control social de la minoridad en el Uruguay a lo largo del siglo XX. El autor propone que el modelo de control de menores se funda en tres períodos históricos: los años 30, los 50 y los años de la restauración democrática, en particular desde 1988. Estos tres períodos tienen en común la crisis del Estado de Bienestar y su incapacidad para dar respuesta a las crecientes demandas de la sociedad. En los tres, los portavoces de los intentos de reforma del sistema de control han sido los sectores más conservadores de la sociedad.

A mediados de los años 50, con el desgaste del modelo batllista providente y conciliador, el Estado ya no logra responder a un amplio conjunto de demandas sociales. Es el momento para la primera gran crisis del modelo de protección-control a la infancia. En este período, el debate adquiere un tinte ideológico creciente. Los principa-

7 Fuente: http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_E582/Estrategia.pdf

les protagonistas de las reformas serán los sectores conservadores, que se legitiman a partir de los “reclamos populares” de mayor seguridad ciudadana. En este contexto de agudos conflictos sociales, se encuentran referencias a una infracción juvenil vinculada a la subversión de valores y, más aún, a una conspiración de alcance político.

Podemos identificar, en el período predictatorial, la creación de un mecanismo de criminalización de la lucha política y de los jóvenes. La operación lógica fue la de instalar que los jóvenes que participaban de actos de violencia política eran sediciosos, subversivos y criminales. Aunque la violencia política tenía otro significado, la violencia utilizada por los grupos de izquierda permitió criminalizarlos. El medio utilizado fueron los medios de comunicación de masas: identificación, lista de nombres, terror en la sociedad. Esto configuró un antecedente claro en materia de violencia de Estado y juventud. Aunque no podemos establecer lecturas lineales, la criminalización de los jóvenes que legitimó ideológicamente la violencia estatal contra estos grupos supo ser realidad y continuar a la salida de la dictadura, pero ya en contexto de “violencia delictiva”: los jóvenes son foco de noticia en los medios de comunicación, con métodos y figuras retóricas para referirse a los “criminales” en la prensa escrita. La publicación de nombres y fotografías de los jóvenes “sediciosos” en los años 60 nos recuerda la publicación de fotografías de personas presuntamente delincuentes en el período posdictadura, acompañadas de adjetivos tales como “monstruo” (El País 9/08/1987) o “alevoso asesino” (El País 21/07/1987 y 23/07/1987).

La Ley de Caducidad nos muestra otra faceta de la postura social frente a la violencia de Estado: un conjunto de la opinión pública, tanto en el voto verde (1989) como en el 2009, continuó avalando esta ley. Cabe mencionar hoy que si bien la ley nunca fue anulada ni derogada, los hechos legislativos ocurridos en el año 2011 (desarchivo de los casos, no amparo de los mismos bajo la Ley de Caducidad y votación en las cámaras legislativas que impidió que las causas caduquen) determinaron que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico del Uruguay. Miguel Serna aborda también el tema de los Derechos Humanos en nuestro país, en relación con los plebiscitos dirigidos a la anulación de la Ley de Caducidad, concentrándose en los efectos psicosociales de la Opinión Pública. Sostiene que uno de los motivos por los cuales la propuesta ha fracasado tiene que ver con la función latente de la Opinión Pública, que generó una “espiral del silencio”, dando lugar a un “vuelco de último minuto” y generando el resultado ya conocido: “Nuestros hallazgos preliminares nos dieron indicios del funcionamiento del efecto de carro ganador, lo único que en los dos casos se produjo en forma de mayorías silenciosas y con climas de opinión fuertemente opacos”. (Serna, 2011: 160). Serna demuestra así cómo se ponen en juego mecanismos psicosociales de control y conformidad de los colectivos, que vienen a reforzar el temor y conservadurismo de ciertos sectores sociales.

No juzgar es, en cierta medida, legitimar esa violencia del Estado que históricamente recayó sobre todo en los jóvenes otrora militantes. Hoy, pasada la Ley de Caducidad y ya sin la obligación de pasar por un discurso político, la sociedad ratifica

la importancia de medidas cada vez más duras por parte del Estado y la Justicia frente a los delitos de los adolescentes como respuesta eficaz al conflicto social. Lo significativo es que el mecanismo simbólico que se basó en la utilización y el etiquetamiento en los medios, de influencia en la opinión pública y generación de un estado de temor, quedó legitimado, con lo cual resulta más sencilla su aplicación.

En cuanto a la demanda de la baja de la edad de responsabilidad penal, aún cuando aparece como un hito de nuestros días, el debate en torno al tema tiene sus orígenes en el Uruguay de la década de los ochenta. El trabajo de Tenenbaum (2011) da cuenta de la historicidad del fenómeno en el período 1985-2011, mostrando que desde la última recuperación del régimen de gobierno democrático hasta la actualidad, se han presentado dieciséis intentos legales para cambiar el umbral etario penalmente punible. Esta discusión se ha articulado a partir de dos movimientos (impulsos políticos reunidos en un saber cuyo fin es estatuir la verdad sobre la edad de imputabilidad que realiza un tratamiento riguroso de aquello por lo que se orienta). El primero de ellos se conforma tras la dictadura (1986-1989) y el segundo se forma en el devenir contemporáneo (2008-2011).

El primer movimiento da cuenta de la continuación del discurso represivo en el escenario democrático, mostrando las ligaduras políticas con la dictadura militar en tiempos de democracia. Pero las posiciones a favor o en contra del cambio en la edad de imputabilidad no se pueden asignar a partidos políticos, por lo que el autor señala que el tema escapa a los cierres partidarios. En el segundo movimiento, al igual que en el primero, la edad de imputabilidad trasciende los límites de los partidos políticos y el mismo parece encontrar mayor respaldo en la opinión pública.

El trabajo referido muestra los hilos conductores que atan los dos movimientos de reforma, encontrando ligaduras que permiten afirmar que estamos frente al eterno retorno de la discusión sobre la edad de imputabilidad y sus temas afines. Además, ambos movimientos necesitan del respaldo ciudadano para conducir este hecho político y trascienden claramente la política partidaria: para la edad de imputabilidad no hay un saber-verdad por partido político.

Actualmente, y como herramienta de normalización, el proyecto de ley, fue sustituido por otra, el plebiscito. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal como forma de combatir la inseguridad es el resultado de un conjunto de sentidos socialmente producidos. Responde a la sensación de miedo que instala como prioridad el problema de la seguridad ante otros problemas sociales, emerge de la asociación que une juventud –y minoridad en particular– con violencia⁸, y es el resultado de la construcción

8 Estas tendencias de opinión, aunque reales sobre todo en sus impactos, aparecen alejadas de una realidad en la que estos mismos jóvenes son también víctimas de delitos y violencias de diversa índole, así como de un modelo de sociedad que no logra integrarlos ni brindarles las bases necesarias para que se constituyan en tanto sujetos de derechos. Sin embargo, el miedo al delito es real, tanto porque expresa un estado de opinión como por las consecuencias que puede tener -y de hecho tiene- en la construcción colectiva de respuestas ante una situación que es vivida como real entre aquellos

de un consenso social que coloca las medidas punitivas como la mejor respuesta ante el problema de la violencia, en comparación con otras medidas posibles⁹. El miedo al delito es también un proceso de interiorización de relaciones de poder que aseguren la hegemonía cultural conservadora en nuestra sociedad. La percepción de un “otro” como diferente, delincuente o criminal, permite la construcción de un discurso político sobre el castigo que aboga por la juridización de los conflictos sociales así como por su “exclusión” de la comunidad de iguales (Rico, 2012).

Así, existe hoy un movimiento político que propone la aplicación del sistema penal de adultos a los adolescentes a partir de los 16 años de edad. Concretamente, a pesar de que en el sistema penal juvenil en vigencia los adolescentes ya son imputables a partir de los 13 años de edad, este movimiento pretende que desde los 16 años los adolescentes sean juzgados como adultos. Con este objetivo, dicho movimiento ha liderado una campaña a la que se ha denominado por “la baja de la edad de imputabilidad”, campaña que tiene como epicentro a la figura del actual senador colorado y ex candidato presidencial en el año 2009 Pedro Bordaberry. El sector político por él creado y liderado en el Partido Colorado se denomina “Vamos Uruguay”.

Si bien la presentación de iniciativas legales para bajar la edad de imputabilidad no cesó en el período 2005-2010 (Tenenbaum 2011), Bordaberry es quien encabezó la recolección de firmas para reformar el artículo 43 de la Constitución uruguaya y la disposición transitoria y especial B de dicha norma, que culminó con la entrega de 367.439 papeletas al presidente de la Asamblea General. A partir del lanzamiento de la campaña por la recolección de firmas en 2011, el Partido Colorado intentó ampliar sus aliados, creándose así la “Comisión Nacional por la Seguridad para vivir en Paz, Yo firmo”, integrada por el Partido Colorado (Vamos Uruguay, Propuesta Batllista - ProBa) y los sectores del Partido Nacional Herrerismo (liderado por el expresidente Luis Alberto Lacalle) y Aire Fresco (encabezado por el diputado Luis Lacalle Pou). Es de destacar que al inicio de la campaña de recolección de firmas existía el apoyo de un senador de

que se sienten más amenazados y temerosos (Mallo, Viscardi, 2011).

9 El informe de Equipos Mori - Ministerio del Interior (2011) señalaba que de las personas encuestadas, el 57% creía que la mayoría de los delitos eran cometidos por menores, mientras que un 32% consideraba que la proporción de delitos cometidos por menores y mayores era similar, y solamente un 8% creía que la mayoría eran cometidos por mayores. El 69% creía que debía bajarse la edad de imputabilidad penal. Por su parte, Tenenbaum (2010) profundizó en este análisis, encontrando que el 65% de los montevideanos consideraba que debería cambiarse la edad de imputabilidad frente a un 32% que consideraba que debía mantenerse y un 3% que no sabía o no contestaba. Una de las razones esgrimidas para ello era la creencia de que el aumento de la delincuencia se debía a infracciones cometidas por menores de 18 años (16,2%), así como porque los menores eran impunes (38,2%) o saben “lo que está bien y lo que está mal” (20,6%). El estudio mostró que la impunidad, el vacío normativo y la creencia de que el aumento del delito se debía a infracciones cometidas por menores, cimentan la tendencia a favor de bajar la edad de imputabilidad. Se observaba en la opinión pública una tendencia creciente a apoyar la baja de la edad de imputabilidad, apoyada en la creencia generalizada de que buena parte de los delitos eran cometidos por menores, lo cual contrastaba con las tendencias delictivas de los últimos años (datos del Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad del Ministerio del Interior, 2010).

la coalición de gobierno Frente Amplio (FA). El entonces senador frenteamplista Jorge Saravia se manifestó en reiteradas ocasiones a favor de la iniciativa. Sin embargo, Saravia se retiró en 2011 del Frente Amplio para formar un nuevo sector dentro del Partido Nacional. Por lo tanto, actualmente no existen actores de relevancia dentro del FA que apoyen la medida.

El argumento fundamental para bajar la edad de imputabilidad que esgrimen los impulsores de la reforma constitucional se centra en la idea de que los y las adolescentes de entre 16 y 18 años son “conscientes” de los actos que realizan y sus implicancias: *“muchos menores con conductas delictivas adquieren conciencia del carácter y la gravedad de sus acciones a partir del inicio de la adolescencia. Considerarlos irresponsables y por ende inimputables, es un agravio a la inteligencia y capacidad del propio menor”* (Partido Colorado, 2009: 77). Este argumento se inscribe en los tres ejes en torno a los cuales se desarrolla el debate sobre el umbral de imputabilidad en el sistema político uruguayo. Según Tenenbaum *“la edad de imputabilidad viene, típicamente, determinada por el desarrollo de la personalidad, aspectos éticos-morales e influencias sociales”* (2011: 20). El primer elemento refiere a las capacidades adquiridas por la persona para evaluar los actos que realiza, mientras que el segundo versa sobre aquellos parámetros que la persona tiene en cuenta para evaluar lo correcto o incorrecto. El tercer eje refiere a las ideas socialmente instituidas sobre qué es “normal” –y por tanto deseable– y qué no lo es, es decir, qué configura una desviación. Como se puede observar en la cita del programa de gobierno presentado por el Partido Colorado en las elecciones nacionales de 2009, el argumento central (repetido en un documento anterior al programa, presentado por Vamos Uruguay¹⁰) refiere a que el individuo mayor de 16 años ya adquirió capacidades propias (desarrollo de la personalidad) que le permiten evaluar el ajuste o no de sus actos (aspectos ético-morales) a lo socialmente esperado y deseado (influencias sociales).

Como correlato de la “Comisión Nacional por la Seguridad para vivir en Paz, Yo firmo”, se conformó una coordinación de diversas organizaciones que se oponen a la medida. Esta coordinación tuvo su primera convocatoria en abril del 2011, a la que asistieron más de 70 organizaciones. La llamada “Comisión Nacional No a la Baja” tuvo períodos de mayor y menor actividad y visibilidad pública, así como también han variado las organizaciones participantes y el grado de actividad de cada una de ellas. Desde esta comisión han surgido reiteradas críticas hacia la falta de apoyo de las organizaciones político partidarias que también se oponen a la reforma constitucional, y a pesar de que la integran diversas agrupaciones y sectores políticos del Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Frente Amplio, han primado en el trabajo cotidiano las organizaciones sociales y políticas no partidarias. Ésta es una notoria diferencia con lo que ocurre en la “Comisión Nacional por la Seguridad para Vivir en Paz, Yo Firmo” donde los sectores políticos aparecen como claros referentes de la comisión.

10 “50 medidas para mejorar la seguridad pública”. Consulta 21/05/12 <http://www.vamosuruguay.com.uy>

El año 2013 se inicia con el traslado de la Jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Justicia Civil. En su juzgado había cerca de 50 casos relacionados con violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura. No ahondaremos en las circunstancias y debates de esta remoción, pero la misma fue claramente cuestionada por grupos y movimientos de defensa de los Derechos Humanos, movilizó una protesta significativa. Inclusive, esta remoción acaba de ser cuestionada en París, en el contexto de un coloquio sobre el derecho a saber que tuvo lugar en mayo de 2013, donde la comunidad jurídico-académica internacional, además de ver con preocupación las declaraciones de inconstitucionalidad de la ley de imprescriptibilidad, cuestionó el traslado la jueza Mota al ámbito civil.

Una mención fundamental, en este proceso, debe realizarse en relación al papel de los Organismos Internacionales que trabajan en pro de la Defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de la Niñez y la Adolescencia. Hoy en día y en América Latina muchos organismos han presionado por los avances en los referidos temas, sirviendo de contralor a muchos discursos locales. Un ejemplo de ello lo constituye la declaración de Unicef en relación a la Baja de Edad de Imputabilidad penal, la posición de IELSUR (IELSUR, 2011, UNICEF, 2011) o la posición de organismos como Amnistía Internacional. Este elemento, en el escenario de globalización de la lucha y avance por los derechos humanos, debe ser tomado en cuenta en el apoyo a movimientos concretos y en la legitimación que estos organismos internacionales y sus filiales nacionales junto a algunas ONGs (Voz y Vos, 2011) generan tanto en la construcción de discursos como en la movilización de acciones y debates en materia legal.

A modo de cierre

Si nos concentramos en la secuencia temporal que parte del período posdictatorial dividiéndolo del siguiente modo: 1985-1989; 1990-1999; 2000-2014, la primera etapa contempla el primer período de gobierno democrático, la segunda la consolidación del período neoliberal y la tercera la búsqueda de salidas a los efectos del neoliberalismo y la asunción de gobiernos de izquierda por primera vez en la historia del país. Hemos intentado sugerir elementos para identificar en las tendencias en materia de seguridad los rasgos del pensamiento conservador en el país en cada etapa. Ellos pertenecen a una sociología cuyo cometido será el de profundizar en los estudios sobre seguridad, incorporando la perspectiva de los movimientos y organizaciones sociales en clave de cultura política. Específicamente, se señala la fuerte relación existente entre cultura del control social, sensibilidad y representaciones sociales en materia de adolescencia y juventud.

En particular, el mapeo de los grupos, organizaciones y sindicatos que se han movilizado en Uruguay por temas de seguridad y juventud en cada uno de los tres períodos sugiere afinidades claras en esta relación, que explican las nuevas modalidades de protesta social sobre seguridad. En nuestro análisis hemos sugerido relaciones entre

los discursos sobre seguridad de diferentes grupos y organizaciones colectivas, a la luz de los rasgos del pensamiento conservador o progresista en los mismos a través del tiempo. De este modo, nuestra reflexión procura repensar el proceso político uruguayo relativo a seguridad desde las pugnas por modificaciones legales en materia de justicia juvenil y código penal desde la recomposición democrática. Para ello hemos abordado someramente algunas de las modificaciones y propuestas legales en perspectiva de programa conservador o progresista en materia de niñez, adolescencia y juventud.

En síntesis, entendemos que, la escisión conservadurismo/ progresismo permite comprender la lógica y dinámica de las demandas de diferentes grupos, organizaciones y sindicatos, superando la división político partidaria. Entre ellos se encuentran: Vamos Uruguay, Comisión No a la baja, Organismos Internacionales (Amnistía Internacional, Unicef, Unesco), Organismos No Gubernamentales que trabajan en el área (IELSUR, SERPAJ, El Abrojo, Gurises Unidos, etc.), Sindicatos policiales, Sindicatos de la educación (primaria, secundaria, universidad), comerciantes, empresarios, gremios, integrantes de Mesas Locales de Convivencia (vecinos), sindicato de recolectores, Movimiento de cooperativas y viviendas, Centros Comunales Zonales, integrantes de partidos políticos, grupos de jóvenes (políticos, minorías, derechos sexuales, legalización marihuana), detenidos desaparecidos, jóvenes infractores, presos políticos, presos comunes (asociaciones), entre otros.

En Uruguay, sugerimos que en la etapa actual la percepción sobre el problema de la violencia delictiva y el crimen se está orientando por un giro ideológico y social explicado por la preeminencia paulatina de un pensamiento conservador en materia de violencia y vulnerabilidad social. En este proceso, los portavoces de las reformas y modificaciones legales vinculadas a violencia de Estado y vulnerabilidad social están siendo liderados cada vez más por los sectores conservadores.

Los hechos reseñados, particularmente medidas tales como las del programa “Estrategia por la vida y la convivencia”, sugieren que en el actual período histórico (2000-2015) el discurso conservador en materia de seguridad y juventud logra captar la demanda popular por mayor seguridad y respuestas represivas y elevarla a nivel de programa de gobierno. Se produce así una contradicción histórica que reafirma la hipótesis planteada por Garland: la cultura del control social se vuelve cada vez más conservadora en momentos de acceso de los partidos progresistas al gobierno. Las que ayer fueron “minorías silenciosas” que calaron el pensamiento conservador, toman hoy voz pública y se constituyen en tanto sujetos activos y protagónicos del debate social y político. La inclusión de demandas vinculadas a seguridad y juventud en grupos, organizaciones y gremios en el período 1985-2015 se vincula a una visión conservadora en relación a la violencia social, sus causas y las respuestas a brindar. Es en función de esto que el debate en torno a la edad de imputabilidad cristaliza la oposición de dos bloques sociales diferenciados, a nivel de movimientos sociales, una perspectiva conservadora y otra progresista en relación a los temas de violencia social y juventud. Mientras el pedido de bajar la edad de imputabilidad para los adolescentes

que cometen infracciones a la ley penal busca frenar los avances que en materia legal tuvieron lugar en el país (ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Código de la Niñez y la Adolescencia) expresando este conflicto, el gobierno capta los reclamos conservadores por vía de medidas de seguridad. Esta escisión muestra la contradicción de la era progresista en materia de seguridad y violencia social, desnudándose en las relaciones conflictivas entre Estado, gobierno, movimientos sociales y partidos políticos.

Referencias Bibliográficas

- BARRÁN, José Pedro** (2004). "Los conservadores uruguayos (1870-1933)". Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
- BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott.** (1997). "Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social moderno. Alianza, Madrid.
- BOBBIO, Norberto** (1995). "Derecha e izquierda". Taurus, Madrid.
- CASTEL, Robert** (1997). "Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado". Paidós, Buenos Aires.
- CASTEL, Robert** (2004). "La Inseguridad Social ¿Qué es estar protegido?". Ed. Manantial, Buenos Aires.
- ECCLESHALL, Robert** (1984). "Conservadurismo". En: Eccleshall, Robert; Geoghegan, Vincent; Jay, Richard; Wilford, Rick. "Ideologías políticas". Tecnos, Madrid, pp. 83-118.
- EQUIPOS MORI - MINISTERIO DEL INTERIOR.** (2011). "Encuesta de opinión pública sobre niveles de victimización, percepciones de inseguridad y grados de confianza institucional en el Uruguay". Consultado en <http://www.minterior.gub.uy>
- GARLAND, David.** (2002). "The culture of control. Crime and social order in contemporary society". Chicago Press, Chicago.
- HONDERICH, Ted** (1993). "El conservadurismo. Un análisis de la tradición anglosajona". Península, Barcelona.
- IELSUR** (2011). "Documento de 8 puntos contra la baja de la edad de imputabilidad penal" <http://www.ielsur.org/desarrollo/documentos.php>
- LACLAU, Ernesto** (2005). "La razón populista". FCE. México.
- MALLO, Susana; VISCARDI, Nilia** (Comps.). (2011). "Seguridad y miedos. ¿Qué ciudadanía para los jóvenes", FCS-DS, Calco impresos, Montevideo.
- MINISTERIO DEL INTERIOR** (2010). "Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad" MIN-UNFPA, Montevideo.
- MORÁS, Luis Eduardo** (1994). "*Los hijos del Estado. Fundación y crisis del modelo de protección-control de menores en Uruguay*". DS, FCS, Serpaj, Montevideo.
- MOREIRA, Constanza** (2004). "Final del juego", Trilce, Montevideo.
- PARTIDO COLORADO** (2009). Programa de gobierno presentado en elecciones de 2009, disponible en: http://www.corteelectoral.gub.uy/proggob09/Programa_de_gobierno_Partido_Colorado_2009.pdf
- PATERNAIN, Rafael** (2012). "La inseguridad en Uruguay. Genealogía básica de un sentimiento" en R. Paternain, A. Rico (coords.): "Uruguay. Inseguridad, delito y Estado". Trilce, Montevideo.

- RICO, Álvaro** (2012). "La ilusión represiva. Delito y política" en R. Paternain, A. Rico (coords.): "Uruguay. Inseguridad, delito y Estado". Trilce, Montevideo.
- SERNA, Miguel** (2011). En: Mallo, Susana; Viscardi, Nilia (Comps.). "Seguridad y miedos. ¿Qué ciudadanía para los jóvenes". FCS-DS, Calco impresos, Montevideo, pp. 139-162.
- TENENBAUM, Gabriel** (2010). "Controlando la inseguridad. Estudio de opinión pública acerca de la edad de imputabilidad y la legítima defensa". Aludec, Montevideo.
- TENENBAUM, Gabriel.** (2011). "La normalización política de la edad de imputabilidad". Tesis de Maestría en Sociología, FCS, Universidad de la República.
- UNICEF** (2011). "Comunicado de prensa posición de Unicef ante el debate público sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la Ley". http://www.unicef.org/uruguay/spanish/20110405_Posicion_de_UNICEF_ante_el_debate_adolescentes_en_conflicto_con_la_ley.pdf
- VISCARDI, Nilia** (2011). "Juventud, violencia y ciudadanía en el Uruguay del siglo XXI: medios, justicia y educación". Friedrich Ebert Stiftung. Fesur, Montevideo.
- VOZ Y VOS** (2011). "Adolescentes en conflicto con la Ley en la Prensa Uruguaya". Agencia de Comunicación. El Abrojo, Red Andi, Montevideo.
- WEBER, Max** (1992). "Economía y sociedad" Fondo de Cultura Económica, Madrid.

El genocidio de los charrúas

Discurso, poder y multiculturalismo

Felipe Arocena¹ - Pablo Silva²

El 11 de abril de 1831 los indios charrúas fueron casi aniquilados en la zona limítrofe de los departamentos de Tacuarembó y Paysandú. Atraídos por las promesas de Fructuoso Rivera, primer Presidente de la República Oriental del Uruguay, cayeron en una emboscada de la que difícilmente podían escapar. Las fuerzas militares desplegadas por Rivera fueron artífices materiales de dicha acción. Luego de 180 años todavía existen diversas maneras de entender el acontecimiento, sus causas y sus consecuencias. El objetivo de este trabajo es el análisis de la lucha simbólica en torno a la interpretación de lo sucedido en la matanza de Salsipuedes. Diferentes actores sociales en la actualidad, en particular los integrantes de las asociaciones de descendientes de indígenas y algunos integrantes del Partido Colorado, muestran opiniones encontradas en torno a este hecho histórico, que año a año se reflejan en la prensa escrita³.

Combatientes antiguos y modernos

Durante la primera mitad del siglo XIX predominó en el ámbito de las élites políticas rioplatenses una ideología positivista, racista y darwinista de la sociedad. Uno de

- 1 Sociólogo y ensayista uruguayo que se dedica a la sociología de la cultura y a la sociología del desarrollo. Actualmente trabaja como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y es investigador Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Ha escrito y editado diez libros, así como numerosos artículos en diarios, revistas especializadas y compilaciones en Europa, América del Norte y América del Sur. En 2001 y 2011 ganó el Premio Anual de Literatura de Uruguay en las categorías Ensayo Literario y Ensayo en Ciencias Sociales, respectivamente. felipe.arocena@cienciassociales.edu.uy
- 2 Licenciado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. pablo300sd@yahoo.es
- 3 Este capítulo tiene como referencia principal la Monografía de Grado de Sociología, UdelaR, de Pablo Silva (2009), orientada por Felipe Arocena. Se utilizaron como fuentes los diarios *La República* y *El País* de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Se analizaron los diferentes folletines o comunicados de los años 2002, 2003, 2006 y 2008 emitidos por las asociaciones de descendientes de indígenas de nuestro país nucleadas en el CONACHA (Consejo de la Nación Charrúa), e INDIA (Integrador Nacional de los Descendientes de Indígenas Americanos). También se realizaron doce entrevistas en profundidad a integrantes de dichas asociaciones indigenistas e investigadores, entre los años 2006 y 2007: a Bernardino García –bisnieto del cacique Sepé–, Ana María Barbosa, Blanca Rodríguez, Eduardo Picerno, Enrique Auyanet, Gonzalo Abella, Juana Olivero, Leonel Cabrera, Lucía Tajam, Mónica Michelena, Mónica Sans y Renzo Pi.

los exponentes más destacados de esta forma de pensamiento fue el político argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien escribió su obra "Facundo" en 1845. Sarmiento creó una división geográfica y valorativa de la sociedad argentina en la cual vivió. Vinculó el concepto "barbarie" con el medio rural argentino e identificó la "civilización" con las ciudades. Si bien admiraba las destrezas de algunos personajes típicos de la campaña, sostuvo que la problemática social en Argentina era causada por la vida salvaje y bárbara, característica de su ámbito rural. "Sarmiento se conmueve con el habitante del campo y su religiosidad natural, pero rechaza igualmente esta conciencia aún no racionalizada y signo de atraso" (Arocena; 1996: 15). Afirmó que ya no había lugar para el atraso y la barbarie; éstos debían ser erradicados para dar paso a una modernidad al estilo europeo. Facundo Quiroga era un personaje que sintetizaba la barbarie del ámbito rural argentino. Sarmiento será el líder intelectual de la llamada generación del ochenta, bajo la que se produjo la "guerra del desierto" en la que el General Roca emprendió exitosamente el exterminio de los indios al sur de Buenos Aires.

Las clases dirigentes uruguayas del siglo XIX utilizaron la misma división civilización-barbarie acuñada por Sarmiento. Vincularon el término barbarie al exceso en el juego y el ocio, en la sexualidad, en la violencia y en la exhibición desmedida de la muerte. La clase dirigente, sea esta "(...) blanca o colorada, liberal o clerical, 'progresista' o conservadora en lo social, (...), coincidió en la condena de la 'barbarie' y el elogio de otra sensibilidad, la 'civilizada'" (Barrán; 2004: 16).

Si bien es cierto que Salsipuedes ocurrió unos quince años antes de que Sarmiento escribiera su principal tesis, el conjunto de elementos expuestos anteriormente es útil a la hora de intentar clarificar los motivos que llevaron a planificar y ejecutar la matanza de Salsipuedes. La obra y el pensamiento de Sarmiento, así como también la ideología que tenían las clases dirigentes uruguayas del siglo XIX, influyeron en la conformación de la visión que Rivera tuvo acerca de las comunidades charrúas que poblaban nuestra campaña y que lo llevaron a tomar la decisión de exterminarlos. El concepto de barbarie manejado por las clases dirigentes a las cuales Rivera pertenecía se ajusta a la descripción del modo de vida que tenían las comunidades charrúas. Los charrúas llevaban una vida errante, nómada y simple, obtenían su alimento fácilmente del ganado vacuno que se criaba en forma salvaje y no estaban forzados a trabajar para subsistir. Desarrollaron además excelentes dotes de jinetes y utilizaban el cuchillo con gran destreza, tanto como arma de combate como herramienta. Por otro lado, se oponían al intento del hombre blanco de *disciplinarlos* y obligarlos a servir y eran reacios ante la imposición de la autoridad. Ello no era bien visto por los sectores dominantes y condujo al primer gobierno uruguayo que nació en 1830 a que al año siguiente tomara la decisión de poner fin al estado de anarquía y vandalismo que azotaba la campaña. El orden y la pacificación debían lograrse sin importar si eran alcanzados a través del uso y el ejercicio de la violencia física contra los acusados de quebrantarlo.

Siendo éste el clima intelectual de la época en que se planificó la matanza de Salsipuedes, una de nuestras hipótesis es que eso se hubiera llevado adelante indepen-

dientemente de quién fuera el presidente de los orientales. A Rivera le tocó estar allí, pero si hubiera sido Lavalleja el primer presidente lo mismo hubiera hecho. Porque ese era el designio de la época de la construcción de los nóveles Estados nacionales. Igual ocurrió más tarde en Argentina con Roca y la “guerra del desierto”. La convicción de poseer la razón y expandir la civilización justificaban el sometimiento de los indígenas; a algunos como a los guaraníes se los integraba por la asimilación en las puertas de la iglesia católica. A quienes eran orejanos, no se doblegaban y rechazaban rezar el Ave María, como los charrúas, o los ranqueles, no había más remedio que hacerles morder el polvo.

Durante todos los años de nuestra historia en que estuvo el Partido Colorado al frente del gobierno uruguayo con una mínima alternancia con el Partido Nacional, el tema de Salsipuedes fue ocultado y relativizado. Sin embargo, luego de la salida del período dictatorial, desde 1985 se empezó a manifestar un debate respecto a dichos sucesos. Diferentes actores sociales uruguayos, en particular los integrantes de las asociaciones de descendientes de indígenas, algunos integrantes del Partido Colorado, historiadores y antropólogos, manifiestan opiniones encontradas en torno a si la matanza de Salsipuedes puede calificarse o no de genocidio.

En opinión de la profesora Marta Canessa, por ejemplo, “la conducción del caudillo –refiriéndose a la presidencia de Fructuoso Rivera– navega entre los obstáculos y podemos decir fundadamente que su primera presidencia la pasó prácticamente ‘a caballo’, debiendo por lo mismo delegar frecuentemente sus funciones en los diversos presidentes del senado (...)”. “La primera salida a la campaña –que va de enero a junio– la tiene que hacer antes de que pasen los dos meses iniciales de su mandato. Debe combatir las hordas de charrúas que en el norte del país –según reza el mensaje del Ministro Dr. José Ellauri– reunidos en más de 600 hombres ‘habían arrebatado tropas de mil y mil quinientas cabezas, (...)’” (Canessa; 1987: 53-54). La profesora de historia y esposa del dos veces presidente Sanguinetti, justifica así las acciones emprendidas contra los indios en Salsipuedes por Fructuoso Rivera y las llevadas adelante en agosto del mismo año (1831) por Bernabé Rivera en los campos de Mataperros y Arerunguá. Desde su punto de vista esas acciones fueron necesarias para poner fin a la situación de desorden y falta de garantías que imperaba en la campaña uruguaya, e iniciar proyectos poblacionales. Varios años después, la profesora Canessa declara en el semanario *Búsqueda* fechado en la semana del 1º al 7 de diciembre de 2005: “los charrúas eran muy pocos, violaban, robaban y mataban, ante ello, Rivera no tuvo otra opción que la de poner colonos y civilizar. Por ello no se puede decir que Rivera haya promovido un genocidio”. Ella se pregunta además: “¿130 charrúas son un genocidio?”.

Para el ex Presidente Julio María Sanguinetti, el enfrentamiento entre los charrúas y el ejército comandado por Fructuoso Rivera en Salsipuedes fue un simple enfrentamiento entre tantos. Marcó el final del modo de vida charrúa, la toldería, “(...) incompatible con la vida criolla, refugio de delincuentes, constante aliado del invasor portugués y del “bandeirante” traficante de esclavos, que procuraba allí la gente para secuestrar

niños guaraníes o mujeres blancas y venderlas en Brasil” (palabras del ex Presidente Julio María Sanguinetti, citadas en diario *El País*. 19 de abril de 2009). A juicio de Sanguinetti, hay un uso abusivo de la historia con el objetivo de empañar la figura de Rivera, quien realizó “grandes esfuerzos” en la lucha por la independencia de nuestro país. En una postura totalmente antagónica a la de los integrantes de las asociaciones indigenistas e investigadores académicos, y haciendo uso de su poder discursivo a través de medios de prensa destacados como el diario *El País*, el ex Presidente Sanguinetti es categórico al afirmar que la sociedad uruguaya no heredó nada en lo cultural o en lo genético de la etnia charrúa, como ser palabras o nombres de pueblos. En su opinión, la toponimia y la conformación del ejército nacional, así como la construcción de las murallas montevidéanas y el hábito de trabajo de la población rural uruguaya deben atribuirse a la etnia guaraní-misionera, fundamental en la constitución de nuestra sociedad.

Otro miembro del Partido Colorado, el ex diputado Washington Abdala, tiene una visión algo diferente a la de Canessa y Sanguinetti. Dice sentirse identificado con el trabajo de INDIA, en cuanto al rescate del papel de los indígenas en el devenir histórico uruguayo, así como del aporte étnico indígena a la sociedad uruguaya actual. Sostiene que la sociedad uruguaya debe dejar de lado toda forma de exclusión y discriminación. Opina que hay que fortalecer la integración de la sociedad sobre la base del reconocimiento de la diversidad, “(...) dejando atrás todo lo que pudo habernos dividido o diferenciado, en el entendido que nada aporta la insistencia en visiones revisionistas descontextualizadas” (Boletín *Mar Inchalá* N° 148, 2002).

El investigador Eduardo Picerno, integrante de ADENCH (Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa), responde a la pregunta que formuló Canessa con los ejemplos de genocidio expuestos en el artículo 6 del Estatuto de Roma: no interesa la cantidad sino la intención de aniquilar a un grupo humano⁴. El hecho de que los charrúas fueran muy pocos, no justifica que alguien tenga derecho a eliminarlos física y culturalmente de su tierra natal. Los charrúas que mataban, lo hacían en defensa de sus propias vidas o de su tierra; y quienes eran violadas eran las indias charrúas, por parte de hombres blancos. De esos embarazos nacieron los mestizos que dieron origen al gaucho y a miles de descendientes. Para Picerno, el Estado uruguayo cometió un genocidio al aniquilar a los charrúas, siendo Rivera el planificador y ejecutor de la matanza, así como también el responsable de todas las medidas inconstitucionales para terminar con la cultura charrúa. El éxito del aniquilamiento se basó en el engaño y en el ataque a traición en momentos en que los charrúas estaban descuidados y desarmados. Según el artículo 6 del Estatuto de Roma, aprobado por la ONU en 1998, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con el fin de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia

4 En www.chasque.net/vecinet/noti796.htm. Página web uruguaya. Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular. 25 de enero de 2006.

que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. En opinión de Picerno, las afirmaciones de la profesora Canessa y del ex Presidente Sanguinetti constituirían una apología del genocidio charrúa.

Para los indigenistas, la atención que se ha venido otorgando a estos hechos desde filas del Estado ha sido siempre inadecuada. Afirman que en la mayor parte de los casos, el tema ha sido politizado: el Partido Colorado y el Partido Nacional se han culpado mutuamente innumerables veces con relación a la responsabilidad sobre lo acontecido. Siguiendo lo expuesto en el Informe Sobre Desarrollo Humano publicado por el PNUD en 2004, la politización en torno a temas históricos se manifiesta también dentro de esferas tan cruciales como la educativa. El ámbito educativo es un espacio de conflicto, de lucha entre distintas posiciones político-sociales, por lo cual no es extraño que se dé una politización por los contenidos que se quiera dar a los currículos o programas educativos. Pues no hay que olvidar que "(...) el control sobre los recursos educacionales permite que el Estado elabore textos de estudio con el fin de distorsionar la historia, dirigirse a comunidades específicas y promover estereotipos racistas" (PNUD; 2004: 76).

Los descendientes e integrantes de las asociaciones califican unánimemente lo ocurrido en Salsipuedes como genocidio, exterminio, masacre o matanza. La acción emprendida por Fructuoso Rivera y sus tropas en contra de los charrúas es tildada de injusticia, engaño y traición. "Muchas injusticias hicieron con los indios acá, (...). Lo importante es apoyar el movimiento, que se divulgue, cuanto más se sepa, mejor. Si es una historia verdadera" (palabras de Bernardino García, bisnieto del cacique charrúa Sepé, recogidas en una entrevista realizada en Tacuarembó, octubre de 2006). "(...) los descendientes de indígenas, nunca relegamos el 11 de abril, fecha que nos es tan cara y significativa. 170 años después la sociedad está transformando una fecha dolorosa, luctuosa en un verdadero y sentido reconocimiento a los primeros habitantes de este suelo (...)" (palabras de Farah Siquiera, integrante de la Comisión Directiva de INDIA, en Boletín Mar Inchalá N° 148, 2002). Algunos integrantes de las asociaciones hablan del etnocidio ideológico cometido en contra de la parcialidad charrúa, o sea el exterminio y negación de su sistema cultural, más allá del exterminio físico al que fueron sometidos. Los charrúas "(...) debieron integrarse a familias no indígenas, fueron obligados a evangelizarse, impedidos de hablar sus lenguas, de regresar a sus lugares de origen, así como de toda posibilidad de reagrupamiento (...). De esa forma se perdieron los hábitos, los rasgos y las facetas culturales que los distinguían" (Boletín Informativo Inchalá N° 21. Agosto de 2008).

Para el presidente de ADENCH Enrique Auyanet, es de suma importancia que el Estado reconozca oficialmente el grave error que cometió en Salsipuedes, al intentar aniquilar a los charrúas. No se debe dar vuelta la página dejando atrás lo acontecido, por la magnitud de los hechos. En la misma línea, el ex presidente de INDIA, Rodolfo Martínez Barbosa citaba en una entrevista que le fuera realizada el 12 de abril de 2005

por el diario *El País*: “Había intereses políticos por la participación que en esos hechos –refiriéndose a lo acontecido en Salsipuedes– tuvieron el presidente de entonces, Fructuoso Rivera, su propio sobrino, Bernabé Rivera, y otros connotados personajes que pasaron a integrar cuadros de los partidos políticos históricos”. “Y lo primero que debe prevalecer es la verdad”. Si bien las asociaciones de descendientes destacan la negación histórica de la masacre de Salsipuedes, consideran que ha habido algunos avances últimamente. En palabras de Ana María Barbosa, presidenta del Fondo Indígena de Latinoamérica y el Caribe e integrante del grupo Guyunusa de Tacuarembó, grupo perteneciente al CONACHA, se percibe cierta apertura hacia el tema desde que Uruguay pasó a integrar dicho fondo en 2005⁵. El historiador Gonzalo Abella vincula el genocidio de Salsipuedes a los orígenes del Estado uruguayo, a la fundación del Partido Colorado, al establecimiento de los grandes terratenientes en el ámbito rural uruguayo y a la contrarrevolución agraria “(...) el Estado Oriental uruguayo nace con una definición claramente anti artiguista, (...) el Partido Colorado es el club de los enemigos de Artigas, y (...) la Constitución de 1830 fundamentalmente inaugura la contrarrevolución agraria, un proceso de consolidación de la gran propiedad que Artigas había cuestionado”⁶.

Se evidencia también un tono unánime de denuncia y condena hacia lo acontecido en Salsipuedes en los artículos que refieren al tema publicados en dos connotados diarios uruguayos, como lo son *El País* y *La República*. Se califica lo ocurrido como “un hecho lamentable”, “una luctuosa emboscada” o una “terrible e injusta matanza”.

La creciente notoriedad que ha ido adquiriendo el tema del exterminio charrúa en los últimos años se traslada a la esfera de la cultura, con el estreno el 11 de abril de 2008 de la obra “Salsipuedes Remasterizado” de Alberto Restuccia, en el teatro Agadu de Montevideo. Desde el ámbito parlamentario se aprecia además una mayor atención hacia el tema, con la aprobación el 12 de agosto de 2009 en la Cámara de Diputados de la ley por la que se crea el “Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena”, iniciativa que apunta a ser un “acto de justicia” y resarcimiento ante la matanza de Salsipuedes. Desde el ámbito académico se señala unánimemente que la matanza de Salsipuedes significó un corte en lo cultural y en la transmisión de la lengua charrúa hacia las generaciones posteriores, no sucediendo lo mismo en cuanto a los rasgos biológicos y sanguíneos charrúas, que fueron heredados por la población rural uruguaya principalmente: “El exterminio cultural existió, pero no así el exterminio masivo en cuanto a la biología. (...) La genética sobrevive porque la mezcla fue previa al ‘exterminio’ del siglo XIX. Mucho antes de Salsipuedes ya había muchísima mezcla”⁷. Se califica la matanza de Salsipuedes como un punto triste de nuestra historia, fruto en parte de la visión marcadamente negativa que había hacia los indígenas en aquel momento. El arqueólogo Leonel Cabrera pone en tela de juicio la versión de Fructuoso Rivera referida al número de bajas que dejó el enfrentamiento de Salsipuedes: “Rivera

5 Palabras citadas en diario *La República*, 11 de abril de 2008.

6 Palabras de Gonzalo Abella expresadas en una entrevista realizada en junio de 2006.

7 Palabras de la antropóloga Mónica Sans recabadas en una entrevista realizada en junio de 2006.

habla de alrededor de 40 muertos, y sin ninguna duda éste fue bastante mayor. Si no, hay que suponer que la sociedad indígena charrúa no tenía hombres, eran sólo mujeres y niños. Lo cual es una barbaridad”⁸.

La batalla actual en el discurso

Pocos como Michel Foucault han trabajado este tema del poder del discurso: “(...) relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso” (Foucault; 1992: 139-140). Este autor entiende por verdad una serie de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, la difusión y el funcionamiento de los discursos. La verdad está vinculada a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que provoca. La verdad está centrada en la forma del discurso científico y en las instituciones que lo producen, está sometida a una permanente incitación política y económica, es objeto de una gran difusión y consumo dentro de cada sociedad y es producida y transmitida bajo la tutela y control dominante de ciertos aparatos políticos y económicos, por ejemplo los medios de comunicación. La verdad se constituye así en el centro de los diferentes debates políticos y de los enfrentamientos sociales, existiendo un combate “por la verdad” o “alrededor de la verdad” (Foucault; 1992: 187-188). Los conceptos de poder y de verdad son cruciales al momento de analizar la dinámica confrontativa que se da al nivel de las prácticas discursivas en los diferentes grupos humanos. Las ideas de Foucault son útiles a la hora de intentar dar cuenta de las interpretaciones que entran en pugna en este caso particular en torno a lo acontecido en Salsipuedes, donde se da un combate por la verdad que se manifiesta entre los integrantes de las asociaciones de descendientes indígenas e integrantes del Partido Colorado. El concepto de poder es vinculado certeramente a la capacidad que poseen los diferentes grupos y fracciones sociales de crear, mantener y expandir hacia otros sectores de la sociedad sus ideas, juicios o interpretaciones respecto a cierto tema en particular.

Para Ricardo Viscardi, la principal característica del discurso es “(...) la presencia de un sujeto y sus predicamentos” (Viscardi; 1987: 79-81). Cuando dicha presencia se constituye para marcar una posición ante los demás y el mundo, “(...) adquiere el valor de una forma de poder”. El discurso tiene por objeto la “(...) captación subjetiva de la voluntad individual, mediante la adhesión consciente de índole reflexiva: su objetivo no es vencer, sino convencer”. “Este dar lo afirmado por real y verdadero no puede convencer sino en tanto el devenir de un razonar muestra como trascendentes al individuo razonante, como reales y verdaderas, las propias razones expuestas por el individuo”. Viscardi vincula en forma acertada el concepto de discurso al ámbito de la subjetividad del individuo, el discurso como instrumento del cual el individuo hace uso a la hora de querer diferenciarse y posicionarse respecto a los demás. Es una forma a través de la

8 Palabras de Leonel Cabrera tomadas de una entrevista que le fuera realizada en julio de 2007.

cual el individuo obtiene poder mediante el convencimiento y la captación de la voluntad de otros. Estas ideas son adecuadas para exponer y analizar la divergencia de opiniones existente entre los integrantes de las asociaciones de descendientes indígenas y algunos integrantes del Partido Colorado acerca de lo ocurrido en Salsipuedes, porque relacionan la producción discursiva de los diferentes actores involucrados con su capacidad de obtener poder y generar convencimiento en otros individuos.

Es que la imposición de una determinada forma de interpretación al resto de la sociedad es esencial en la formación de un consenso legitimador para una determinada forma de dominación social. Es una lucha por el sentido, que busca violentar los imaginarios colectivos para redefinir el proceso de producción simbólica mediante el cual una sociedad y una época se explican a sí mismas el funcionamiento del poder. El enfrentamiento de las interpretaciones se ha hecho posible por la misma concepción de la interpretación que se extiende, sin que haya un punto a partir del cual se juzgue y se decida. Esta diferencia de interpretaciones enfrentadas es un elemento central en este trabajo.

Existen condiciones que permiten que en cierta sociedad se digan ciertas cosas y otras no, así como también separar lo que se considera verdad de lo que no. “En toda sociedad, la producción de la palabra está controlada, seleccionada y distribuida por ciertos procedimientos. La función de esos procedimientos es evitar peligros, conjurar poderes, manejar lo azaroso y esquivar la materialidad del discurso” (Díaz; 2005: 78). Por eso es que durante tanto tiempo no fue posible que emergieran enunciados que denunciaran la matanza de Salsipuedes, lo que recién pudo acontecer cuando se dio una modificación en el régimen de verdad imperante. Pues “hay condiciones de posibilidad que preceden al encuentro del hombre con la verdad. Cada época, cada cultura, cada episteme tiene las suyas. Ellas son como el límite que marca cuáles enunciados pueden ser considerados verdaderos y cuáles enunciados ni siquiera merecen ser considerados en un régimen de verdad, incluso ni para computarlos como falsos” (Díaz; 2005: 79).

Continuando con Foucault, puede decirse que existió un combate discursivo en torno a la verdad acerca de lo acontecido en Salsipuedes. El combate principal se manifiesta entre los integrantes de las asociaciones de descendientes de indígenas y algunos referentes del Partido Colorado y se vincula a la calificación de los hechos ocurridos allí. En este caso se visibiliza un claro antagonismo entre la posición del ex Presidente de la República Julio María Sanguinetti y su esposa la profesora Marta Canessa, quienes califican la acción de Salsipuedes como algo justo y necesario para poner fin al estado de “barbarie” que asolaba la campaña uruguaya a mediados del siglo XIX y así “civilizar”⁹, siendo en opinión de Sanguinetti un simple enfrentamiento entre

9 Posición que se inscribe en un marco interpretativo influenciado por las ideas de Sarmiento y las de la clase dirigente uruguaya del siglo XIX, acerca de la dicotomía civilización-barbarie; y similar a la que tuvo Fructuoso Rivera respecto a los charrúas y su modo de vida.

tantos; y los integrantes de las asociaciones de descendientes, quienes lo consideran genocidio, masacre o matanza.

Muy importantes son los recordatorios llevados adelante por las asociaciones de descendientes año tras año, cada 11 de abril. En ese sentido, cabe citar los dos actos principales realizados anualmente en Montevideo, con motivo de la conmemoración de la matanza charrúa. La asociación INDIA realiza dicha ceremonia a los pies del monumento a José Artigas, en Plaza Independencia; mientras que la asociación ADENCH conmemora la fecha en el Monumento a los Charrúas, ubicado en el Prado montevideo. La creciente notoriedad que ha ido adquiriendo el tema al nivel de nuestra sociedad, hace que cada año que pasa las asociaciones reciban más adhesiones y demostraciones de afecto ante el significado del 11 de abril, provenientes de distintos sectores de la sociedad uruguaya y desde el extranjero –personalidades políticas, artistas, investigadores del tema, académicos o educadores–: “Reciban ustedes nuestra adhesión a la reivindicación de los antepasados indígenas. Aprovechamos esta instancia para agradecer todo lo que ustedes aportan a nuestros alumnos, dentro del conocimiento de la importancia de la Nación Charrúa con relación a nuestra identidad. Un saludo afectuoso de Alumnos, Personal Docente y no Docente, Maestros Practicantes, Padres de Escuela N° 235 “Eudoro Melo” de la ciudad de Las Piedras (Canelones)”. (En Boletín Informativo Inchalá N° 20, junio de 2008). Resulta muy interesante destacar el interés que despierta el tema de la descendencia indígena en ciertas zonas del interior del país, particularmente aquellas que concentran la mayor descendencia charrúa, como el departamento de Tacuarembó: “(...) siempre que tenemos novedades se acerca la prensa, viene aquí a casa, mañana mismo ya sé que vienen todos por acá. La gente está como inquieta por el tema, (...)”¹⁰.

Respecto al tema educativo, ha habido avances en los últimos años por la inclusión de la temática indígena en los programas educativos de primaria y secundaria. Según Ana María Barbosa, ha habido receptividad por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura a partir de la utilización de algunos documentos elaborados por CONACHA como insumo en los programas educativos. Otro tema en el cual se han registrado avances, es en la integración que se ha dado al nivel latinoamericano, entre grupos y asociaciones de descendientes de indígenas, a través del Fondo Indígena para Latinoamérica y el Caribe, Uruguay ratificó el convenio con dicho fondo en 2005. También supuso un gran logro para los descendientes la repatriación de los restos del cacique Vaimaca Perú desde Francia, que arribaron a nuestro país el 17 de junio de 2002.

Los objetivos que se plantean las asociaciones de descendientes son diversos. Se aspira a una mayor incorporación de la temática indígena en la educación a efectos de que los órganos educativos lo tomen en cuenta en sus programas. En opinión de algunos integrantes de CONACHA, existe una gran carencia educativa vinculada a la crisis de identidad que supone la falta de inclusión de contenidos relativos a los pueblos

10 Palabras de Ana María Barbosa, octubre de 2006.

originarios de nuestro país en los programas de enseñanza. Se apunta a investigar más acerca de la lengua charrúa, a que se revaloricen las costumbres, valores y espiritualidad de dicha etnia, así como también a lograr protección de parte del Estado hacia lugares sagrados, cementerios y pictografías charrúas.

Otro tema en el cual se intenta lograr avances, es en la obtención de tierras para que los descendientes puedan vivir en comunidad, concretamente en la zona de Arerunguá: "Sin territorio, un pueblo indígena no es nada, porque la relación del indígena con la tierra, con el monte, es vital. Por medio de esa relación, podemos recuperar nuestra cultura: el uso de plantas medicinales, etc. No es que vayamos a vivir como antes, (...), pero sin la conexión con la tierra no podemos vivenciar"¹¹. Asimismo se fomenta el respeto hacia la biodiversidad, se denuncia el cambio climático como fenómeno que pone en riesgo la vida de las especies, incluyendo la humana; y se reclama la protección de los recursos naturales como el agua.

Los integrantes de las asociaciones de descendientes resaltan el sacrificado papel que tuvieron los charrúas en la lucha junto a Artigas por la independencia de nuestro país, así como la convivencia pacífica y armoniosa que mantuvieron respecto a la tierra que habitaban, no manejando los conceptos de propiedad ni de robo. Si bien con el tiempo los charrúas fueron adoptando algunos elementos introducidos por el europeo luego de la conquista, como el caballo o la carne vacuna a su dieta, mantuvieron el respeto a su cultura no aceptando la imposición de otra desde afuera. El arqueólogo Leonel Cabrera señala que la sociedad charrúa presentaba una complejidad y dinamismo mayor de lo que comúnmente se supone y una estructura económica que le permite manejar exitosamente su entorno ecológico. En opinión de la ex diputada Nora Castro, debe haber un reconocimiento hacia nuestras raíces culturales, el cual "(...) debe ser un trabajo desde las más tempranas épocas de la formación del ciudadano"¹².

Los descendientes de indígenas e integrantes de las asociaciones indigenistas tienen diversas opiniones respecto a los rasgos charrúas que perdurarían hoy día en nuestra sociedad. El presidente de ADENCH Enrique Auyanet, manifiesta el orgullo que tanto él como el resto de los integrantes de la asociación sienten al reconocerse como descendientes de charrúas: "Nos reconocemos orgullosamente como charrúas y tenemos conciencia de ser y pertenecer física y espiritualmente a esta tierra, regada tantas veces con la sangre de nuestros antepasados en la lucha contra los invasores"¹³. Lo que convoca y une a los descendientes es el "sentirse charrúas", aspecto que pasa más por lo cultural y no por lo genético. En cuanto a lo genético, Auyanet señala que a partir de estudios de ADN mitocondrial, el 40% de los uruguayos tiene ascendencia indígena por vía materna. Afirma además que en la Encuesta Nacional de Hogares de 2006, más de 115000 personas se auto identificaron como descendientes de indígenas, llegando a un 5% del total de la población uruguaya. Con relación a lo cultural,

11 Palabras de Mónica Michelena, tomadas de una entrevista realizada en abril de 2007.

12 Palabras de Nora Castro citadas en diario La República, 12 de abril de 2005.

13 En Boletín Inchalá N° 21, agosto de 2008.

Auyanet menciona algunas prácticas a su juicio de origen charrúa, que se han mantenido en la sociedad; como ser la presentación de los niños a la luna, una especie de celebración que se realiza ante la llegada de la madurez en las niñas, el tema del mate y la yerba –rito espiritual al igual que el consumo de coca por parte de los indios de la zona andina–, así como también la relación que se da entre el gaucho y el caballo, fundamentalmente en las zonas rurales del país. En lo que concierne a la lengua, señala que sobreviven muchas palabras, incluidos nombres propios de origen charrúa. Otros integrantes de ADENCH, como el investigador Eduardo Picerno y Lucía Tajam resaltan la importancia que tuvo la tradición oral al momento de conocer acerca de su condición de descendientes de charrúas. Picerno sostiene además que hay intereses creados en la Facultad de Humanidades, que llevan a los antropólogos a dejar de lado el estudio de los charrúas, y a explorar en las zonas del litoral, donde habitaron los guaraníes, o a los indios habitantes de los cerritos, de Rocha. “(...) hay una especie de bronca hacia los charrúas, (...) a los antropólogos, las flechas no les dicen mucha cosa. No dejaron nada, más que las boleadoras que se venden en la feria, (...). Eso no habla. La historia es la que habla. La antropología no va a demostrar nada de los charrúas”¹⁴. Para algunos integrantes del grupo Guyunusa de Tacuarembó, como Bernardino García, Ana María Barbosa y Blanca Rodríguez, el “sentirse charrúas” es un estado al que se llega a través de la tradición oral familiar. Bernardino García destaca el papel que cumplieron los análisis genéticos, a los cuales se sometió para confirmar su ascendencia charrúa: “Me hicieron todos los análisis, de manos, pies y sangre y me salió que era indio. (...) Me los hicieron el 24 de noviembre de 1998 y la etnia era charrúa. Ahora, les digo una cosa: el instinto siempre lo tuve”¹⁵. En lo referido a las prácticas y costumbres charrúas que perduran en nuestra sociedad, tanto Bernardino como su esposa María señalan el origen charrúa de la práctica yuyera y de la presentación de los niños a la luna.

Los miembros de las asociaciones de descendientes poseen una postura en común respecto a la presencia de rasgos charrúas en nuestra sociedad, estableciendo la ascendencia genética charrúa de la población uruguaya en aproximadamente un tercio de los habitantes.

Para el antropólogo Renzo Pi, el legado cultural charrúa es ínfimo, y se visibiliza en algunas costumbres del gaucho. Señala como ejemplo la costumbre de los pobladores rurales de llevar las dos riendas del caballo hacia el lado que quieren doblar. Los jinetes europeos, en cambio, tiran la rienda del lado correspondiente al que quieren doblar. Con relación a la lengua charrúa, tanto Renzo Pi y Mónica Sans, como el arqueólogo Leonel Cabrera coinciden en señalar que sobreviven muy pocas palabras charrúas, fundamentalmente topónimos como Marmarajá –paraje de Lavalleja–, u Olimar –río de Treinta y Tres–. Pero ello no permite reconstruir del punto de vista lingüístico la lengua charrúa original. Renzo Pi considera exagerado el porcentaje de incidencia indígena en

14 Palabras de Eduardo Picerno, tomadas de una entrevista realizada en septiembre de 2006.

15 Palabras de Bernardino García, tomadas de entrevista realizada en octubre de 2006.

el ADN uruguayo manejado por Sans. Cree que probablemente exista algún error en la metodología de investigación por la cual llega a esos valores.

Reflexiones finales

Multiculturalismo y la Ley de reconocimiento de la nación charrúa

Cuando Rivera asume el 6 de noviembre de 1831 como primer presidente del país se le plantea la necesidad imperiosa de consolidar el naciente territorio independiente. Unánime era en ese momento que la zona del norte del Río Negro estaba sumida en la anarquía absoluta, asolada por delincuentes, forajidos y gente que vivía del saqueo de estancias, robo de ganados y asesinato de hacendados y empleados rurales. Esta población al margen de la ley se aprovechó de la ausencia de autoridad y del vacío de poder del período revolucionario y son inagotables las quejas de la época acerca de la inseguridad y el miedo que generaban en quienes pretendían vivir en paz. Casi todos los delincuentes se guarecían en las tolderías charrúas que no solamente los acogían, sino que participaban activamente en los ataques.

Esta situación de inseguridad y miedo pasó a ser percibida, correctamente, como el principal problema que debía resolver el novel Estado oriental. Toda la clase política de la época, los hacendados y sus empleados, la sociedad urbana y rural en su conjunto eran una sola voz exigiendo la solución al problema. Rivera asume el desafío partiendo, a los pocos meses de haber tomado posesión, a pacificar la campaña. El objetivo era claro como el agua: “que se procure con toda eficacia limpiar la Campaña de bandidos y ladrones, que la están infestando con perjuicio del orden público, y de la seguridad de las personas y la propiedad; que se contengan los salvajes y se les reduzca al verdadero estado en que deben conservarse”¹⁶.

A estos últimos les había llegado su hora final. La expansión de los colonos los había dejado ya sin espacio en tierras brasileñas al norte del Cuareim, ni en la Mesopotamia argentina, y apenas podían refugiarse en el desierto uruguayo. Con la paz y el Estado Oriental ese espacio también se acotó y entonces las condiciones que habían hecho su estilo de vida posible, las praderas sin límites y el ganado sin dueño, desaparecieron.

Sobre los hechos de la emboscada de Salsipuedes hay dos interpretaciones que realiza Padrón Favre que interesa ahora destacar. La primera ya está anticipada antes en nuestro trabajo y es que no hubo voces discrepantes con la matanza y posterior distribución de esclavos indios; Lavalleja hubiera hecho lo mismo. Las críticas a Rivera recién aparecieron un buen tiempo después cuando “los enfrentamientos políticos alcanzaron la más absoluta radicalidad y todo el pasado y el presente de los orientales pasó a ser instrumento de esa enconada lucha. La campaña contra las tolderías no

16 Texto citado por Padrón Favre a propósito del encuentro entre Rivera y sus ministros José Ellauri y Gabriel Pereira antes de partir; Padrón Favre; 2011: 66.

escapó a esa batalla ideológica y entonces –recién entonces– surgieron las condenas por lo realizado” (Padrón Favre; 2011:73). Si es cierto que este apoyo generalizado ayuda a entender mejor los hechos y los inscribe en una corriente de opinión que los hace comprensibles, no por ello quedan justificados ni legitimados. La segunda interpretación de Padrón Favre es la siguiente: “el triste final de las remanentes tolderías charrúas-minuanas parece encerrar una enseñanza y una advertencia para nosotros. Ellas se empeñaron en conservar una forma de vida que los datos objetivos de la realidad señalaban que era imposible mantener” (ídem, p. 74). Es muy discutible.

Si parece claro que ninguna cultura puede perpetuarse sin adaptaciones y cambios, no lo es tanto que los charrúas se empeñaran en rechazarlos. Ya habían modificado radicalmente su manera de vivir cuando se introdujo el ganado vacuno y, sobre todo, el caballo. Transformaron completamente su modo de vida incorporando estos elementos y además supieron interactuar con el hombre blanco, el negro y el gaucho. Es decir, los charrúas fueron adaptándose notablemente a las nuevas condiciones que llegaron con la colonización. Pero no se asimilaron como hicieron parte de los guaraníes. Quienes empecinadamente descartaron otras salidas que el exterminio de los indígenas fueron los Estados nacionales. Si no se los eliminaba por la asimilación, que no es más que una forma de muerte cultural, había que segregarse los indígenas o matarlos. Empecinadamente fue la cosmovisión de la sociedad europeizada, racista, darwinista y violenta que se mantuvo cerrada y sorda en relación a los derechos a la identidad del pueblo charrúa. Quienes debían adaptarse eran los indios a los blancos y la posibilidad inversa de una adaptación mutua era un dislate. Seguir proponiendo que fueron los charrúas que se negaron a cambiar, es reproducir exactamente el mismo error que llevó al Estado Oriental a exterminarlos. (Rivera en definitiva fue apenas su marioneta y tan culpable como toda la clase política y la sociedad de la época).

Muy probablemente no fue que los charrúas empecinadamente desconocieran la nueva realidad, más correcto sería decir que empecinadamente la cultura dominante de la época le cerró todos los caminos por donde transitar a una adaptación recíproca que, entre otras cosas hubiera requerido la cesión de tierras. Empecinada fue la razón de Estado, ciega, sorda y muda en relación a los derechos de las minorías o grupos etnoculturales más débiles. Siempre lista para identificar delincuentes con indígenas, indígenas con violencia, violencia con una cultura corrupta y moralmente degradada.

Asistimos en el presente a este esfuerzo de adaptaciones mutuas. Perdida la omnipotencia y la soberbia moderna del impulso civilizador, entonces el reconocimiento mutuo y la negociación genuina en la que diferentes culturas en interacción ceden aspectos significativos para convivir, aparecen hoy como el camino más justo. La Ley 18.589 “Día de la nación charrúa y la identidad indígena”, aprobada el 18 de setiembre de 2009, ha sido un buen avance en este sentido¹⁷ y procura que todos los años se recuerde el 11 de abril, pero fundamentalmente que el tema se haga visible y se

17 Vale la pena leer la exposición de motivos de la Ley y los argumentos emitidos en sala para fundamentar los votos de algunos senadores; 2 en 24 votaron en contra.

incorpore en la escuela y en la sociedad toda la discusión sobre el pasado y el presente indígena del país. Este tipo de medidas que apuntan a reinterpretar un pasado racista de los Estados nacionales modernos en Latinoamérica, marcando sus errores y reconociendo en el presente derechos culturales de indígenas y negros están directamente asociados a lo que en otras ocasiones hemos denominado un giro hacia el multiculturalismo en nuestro país (Arocena, 2011; Arocena-Aguiar, 2007), que apunta a la construcción de una nueva manera de percibirnos, no como apenas una nación de inmigrantes europeos italianos y españoles, sin indios ni negros, sino como un país mucho más diverso culturalmente, antes y ahora.

Referencias bibliográficas

- ACOSTA Y LARA, Eduardo** (1985). “Salsipuedes 1831 (los Lugares)”. En “Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias”. Volumen I, número 4. Impreso por la División Publicaciones y Ediciones de la Universidad de la República, Montevideo.
- ACOSTA Y LARA, Eduardo** (1989). “La Guerra de los Charrúas en la Banda Oriental”. Librería Linardi y Risso, Montevideo.
- ACOSTA Y LARA, Eduardo** (1989). “Salsipuedes 1831 (los Protagonistas)”. Imprenta Vinaak, Montevideo.
- ANTÓN, Danilo** (1993). “Nuestro Uruguay Piri: Descorriendo los Velos de una Historia Racista”. Rosebud Ediciones, Montevideo.
- AROCENA, Felipe** (1996). “Muerte y resurrección de Facundo Quiroga. Historia cultural de lo que ha significado ‘ser moderno’ para los latinoamericanos”. Ediciones Trilce, Montevideo.
- AROCENA, Felipe; AGUIAR, Sebastián** (editores) (2007). “Multiculturalismo en Uruguay. Ensayo y entrevistas a once comunidades culturales”. Ediciones Trilce, Montevideo.
- AROCENA, Felipe** (2011). “La mayoría de las personas son otras personas. Un ensayo sobre multiculturalismo en Occidente. Estuario Editora, Montevideo.
- BARRÁN, José Pedro** (2004). “Historia de la sensibilidad en el Uruguay”. Tomo 1. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
- Boletín Informativo “**INCHALÁ**”. Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa. Números 19 (09/ 2006), 20 (06/ 2008) y 21 (08/ 2008), Montevideo.
- Boletín Informativo “**MAR INCHALÁ**”. Integrador Nacional de los Descendientes de Indígenas Americanos. Números 147 (08/ 04/ 2002), 148 (15/ 04/ 2002), 195 (07/ 04/ 2003) y 196 (21 /04/ 2003), Montevideo.
- CANESSA DE SANGUINETTI, Marta** (1987). “Rivera, un oriental liso y llano”. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
- DE MATTOS, Tomás** (2000). “¡Bernabé, Bernabé!”. Ediciones Santillana, Montevideo.
- Diario **EL PAÍS**. Secciones “Ecos”, “Editorial”, “Espectáculos”, “Nacional”, “Último Momento”, “Las Firmas de El País”. Días 25/04/2005, 18/04/2006, 17/10/2006, 11/04/2007, 17/04/2007, 09/04/2008, 10/04/2008, 19/04/2009, 10/05/2009, Montevideo.
- Diario **EL PAÍS**. Suplemento “Ciudades”. Segunda Sección. Días 12/04/2005, 01/04/2007, 02/04/2007, 12/04/2007, 28/10/2007, 11/04/2008, Montevideo.

- Diario **La República**. Secciones "Cultura", "Editorial". Días 10/04/2008, 11/04/2008, Montevideo.
- Diario **La República**. Suplemento "Comunidad". Días 10/04/2005, 12/04/2005, 12/04/2006, 11/04/2007, 11/04/2008, 12/04/2008, Montevideo.
- DÍAZ, Esther** (2005). "La filosofía de Michel Foucault". Editorial Biblos, Buenos Aires.
- FOUCAULT, Michel** (1992). "Microfísica del Poder". Las Ediciones de La Piqueta, Madrid, España.
- HOUOT, Annie** (2000). "Movimientos Neo Indigenistas en el Uruguay del Año 2000". Editorial Costa Atlántica, Montevideo.
- KYMLICKA, Will** (1995). "Ciudadanía Multicultural". Ediciones Paidós, Barcelona, España.
- PADRÓN FAVRE, Oscar** (1997). "Salsipuedes: Conclusión del Conflicto Interétnico Charrúa-Guaraní". En "Cuadernos de Estudios Históricos y Sociales". Trabajo presentado en el IX Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya. Imprenta-Editorial Medios, Durazno, Uruguay.
- PADRÓN FAVRE, Oscar** (2011). *Los charrúas-minuanes en su etapa final*. Tierradentro Ediciones, (1ª edición de 2004), Durazno, Montevideo.
- PICERNO, Eduardo** (2000). "Repatriación de los Restos de los Charrúas Orientales Conducidos a Francia en 1833". Edición (compilación personal), Montevideo.
- PNUD** (2004). "La Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy. Índice de Desarrollo Humano 2004". Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD.
- PORLEY, Rodolfo** (1997). "El Laberinto de Salsipuedes". Suplemento de *Diario La República*, Montevideo.
- PORZECANSKI, Teresa** (2005). "Nuevos Imaginarios de la Identidad Uruguaya: Neoindigenismo y Ejemplaridad". En "20 Años de Democracia" (Gerardo Caetano). Editorial Taurus, Montevideo.
- RAGA, Adriana** (1998). "Raíces". Cifra, El País, 22/ 11/ 98. Montevideo. Uruguay.
- SANS, Mónica** (1994). "Bases Para el Estudio de la Población Uruguaya". Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Publicaciones, Montevideo.
- Semanario **BÚSQUEDA**. Número 1332. Semana del 1º al 7 de diciembre de 2005, Montevideo.
- TAYLOR, Charles** (2001). "El multiculturalismo y la 'política del reconocimiento'". Ensayo de Charles Taylor. Fondo de Cultura Económica. México DF. México.
- VIDART, Daniel** (1996). "El Mundo de los Charrúas". Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
- VISCARDI, Ricardo** (1987). "Discurso, Poder y Razón". En "Revista de Ciencias Sociales" Número 2. Fundación de Cultura Universitaria. Instituto de Ciencias Sociales, Montevideo.

Sitios Web

<http://www.forobatllista.com/>

<http://members.tripod.com/indiauy/>

<http://www.quehacer.com.uy/Uruguay/charruas/salsipuedes.htm>

mostlywater.org/canada's_native_people_get_a_formal_apology

www.chasque.net/vecinet/noti796.htm

www.ElPaisDigital.com.uy- *Diario El País en la Web*. 13/ 08/ 2009

www.espectador.com

www.internet.com.uy/charruas/

www.LR21.COM- *Diario La República en la Web*. Suplemento "Cultura". (2006). Página 34. Año 8. Número 2182. 07/05/2006; sección "Política"s (2009). Página 6. Año 10. Número 3357. 13/08/2009.

www.nacióncharrua.blogspot.com

Retornar al Uruguay

Verónica Filardo¹

En el 2011 el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay alerta sobre una frecuencia inédita e inesperada del flujo de retorno de uruguayos residentes en el exterior. En función de las dificultades sociales, económicas y de acceso a servicios públicos que se estima viven en su reinserción y recursos institucionales relativamente escasos para atender a esta población la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) convenian con la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) la realización de una investigación consistente en indagar desde una perspectiva cualitativa las expectativas y experiencias de retorno (entre 2009 y 2011) de uruguayos que hubieran residido en el exterior al menos dos años consecutivos. Este trabajo toma como insumo los productos de esa investigación.

Migración internacional

La migración internacional como fenómeno complejo y creciente en magnitud tiene múltiples efectos y es abordado por diversas disciplinas. La preocupación de los desplazamientos de personas a escala global está básicamente vinculada al ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, y al problema de la gobernabilidad internacional de la migración.

Se destacan algunos factores asociados al crecimiento de la migración tanto como causa como consecuencia de los procesos de globalización (Martínez, 2008), que responden a diferentes dimensiones (económica, social, política y cultural). El factor económico alude a los diferenciales de ingreso y los ciclos macroeconómicos; tanto como a las crecientes desigualdades globales que provocan la migración que a su vez actúa como mecanismo de reproducción de las desigualdades. Afectan tanto a la mano de obra menos calificada de los países más pobres (que están dispuestos a trabajar por salarios mínimos y en condiciones de precariedad), como a los de mayor capaci-

1 Doctora en Sociología (Universidad de Granada, España). Máster en Desarrollo Local y Regional, Universidad Católica del Uruguay (UCU). Maestría en Sociología y Socióloga (UdelaR). Profesora Agregada del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Integra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI - ANII). filardo.veronica@gmail.com

tación (provocando el llamado “braindrain”). El flujo más importante, en consecuencia, es sur-norte.

“La demanda creciente de mano de obra para fomentar competitividad e impulsar el crecimiento de la economía por una parte, y la oferta de trabajo proveniente de las economías menos desarrolladas o que se encuentra en condiciones de mayor pobreza, por la otra, parecieran ser dos partes de una ecuación que debería resolverse sin mayor conflicto. Sin embargo las progresivas restricciones al ingreso de inmigrantes (Naciones Unidas, 2004), la discriminación en las sociedades de llegada y las dificultades que enfrentan para ejercer sus derechos son elementos que obstaculizan el desarrollo de esta relación en condiciones de mayor fluidez” (Martínez, 2008).

Otro elemento asociado al factor económico remite a las remesas, que tienen creciente importancia para la economía de algunos países emisores. Sin embargo se manifiesta un debate respecto al tratamiento de las remesas, ya que no sólo se vincula a lo económico sino también a las esferas culturales, sociales y también para las familias (la población de los países emisores). En este sentido, las remesas son objeto de discusión en el marco de diferentes conceptualizaciones de desarrollo.

En relación al factor político, la cooperación internacional adquiere relevancia en la protección de derechos de los migrantes, dadas situaciones críticas que enfrentan a la llegada a diversos países; la trata de personas es otro fenómeno que preocupa en este ámbito.

Dentro del factor social se destacan las organizaciones de migrantes, las redes; y en el orden cultural los procesos de xenofobia que se desencadenan contra los inmigrantes en las sociedades receptoras. Determinadas circunstancias que adquieren connotaciones globales agudizan esta situación como el atentado del 11 de setiembre que intensificó la asociación migración terrorismo. Aunque en ocasiones se sostiene que la intensidad de estos procesos es procíclica, actualmente surge con fuerza un cambio de paradigma respecto a la migración internacional, mutando del paradigma asimilacionista al transnacionalismo. Mientras que el primero se fundamenta en los procesos de integración, asimilando las normas culturales y conductas de los migrantes a las de las sociedades receptoras; en el segundo se hace énfasis en el mantenimiento de las relaciones de diverso orden entre los migrantes y sus sociedades de origen. Sin duda este paradigma interactúa de otra forma con el conflicto y con la potencia otorgada otrora a la noción de Estado Nación (particularmente porque los migrantes por lo general no tienen ciudadanía única).

Un elemento que coadyuva al cambio de paradigma es la constatación empírica que la segunda generación de migrantes no siempre presenta condiciones más favorables de integración social que los de la primera generación; particularmente en aquellos sectores que tienen altos índices de pobreza, y presentan síntomas de exclusión. Por tal motivo además, la inmigración requiere distinciones; dada la altísima heterogeneidad de sus realidades en diferentes planos analíticos.

Lo anterior conduce a que la migración internacional tenga un lugar privilegiado en la agenda internacional. La *governabilidad migratoria* es uno de los temas en que la cooperación y acuerdo entre los países se hace prioritaria. Lamentablemente, los esfuerzos en relación a ello aún no obtienen resultados satisfactorios y se revelan sustantivos *pasos atrás* unilaterales. Como se verá más adelante, algunos de éstos tienen consecuencias directas para el caso de migrantes uruguayos y en su forzado retorno.

La Agenda Internacional para la Gestión de la Migración (FOM, 2005) y las iniciativas de OIM de impulsar debates regionales sobre gobernabilidad migratoria incluyen como uno de los puntos “los procedimientos y prácticas afines al retorno y el fortalecimiento institucional”. (Martínez, 2008: 62). Sin embargo este aspecto aparece como poco más que retórico y no ha tenido prácticamente desarrollo².

La situación en América Latina

Las características que adquiere a partir de la década de los ochenta la migración en América Latina tiene variaciones con respecto al patrón histórico. Pasa de receptor a emisor; así como se incrementa la magnitud de la migración y se extiende en territorios de destino. (CEPAL, 2008); (Canales, 2009: 66). Algunas de las características de la migración internacional en América Latina son:

Los destinos principales de la emigración de latinoamericanos son Estados Unidos y crecientemente Europa (España en primer lugar); y Japón.

Se incrementa la migración intrarregional, tanto la transfronteriza (bolivianos a Argentina; guatemaltecos a México; colombianos a Venezuela, etc., como nuevos flujos que expanden los destinos al interior de la región.

Crece la complejidad de las modalidades migratorias. Canales (2009) distingue entre otras: migración permanente, temporal, circular, transfronteriza, de retorno, e indocumentada.

Diversidad de sectores poblacionales participan en el proceso migratorio: mujeres, indígenas, migración familiar. Algunos adquieren mayor visibilidad, particularmente las mujeres.

En el 2000, se registran 22,3 millones de latinoamericanos residiendo en países diferentes al de nacimiento (19,2 millones fuera del continente y 3,1 millones eran migrantes intraregionales). Lo que hace a una particularidad: su gran contribución al total de emigrantes extraregionales en el total regional (21%)³. Como contraparte sólo se registra en el continente latinoamericano 5,1 millones de inmigrantes, de los que

2 “En la reunión correspondiente a las Américas se mencionó además (de muchos otros varios puntos) la importancia de crear programas y condiciones dignas para el retorno, garantizando la plena reincorporación de las personas en su país de origen”. (Martínez, 2008: 65).

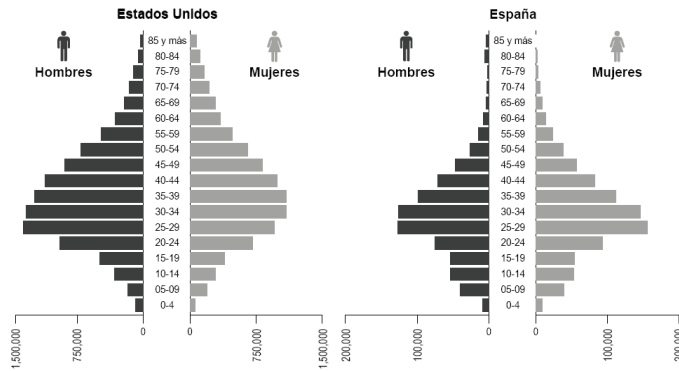
3 Los migrantes extraregionales latinoamericanos representan el 3,8% de la población del continente; por eso tiene la mayor tasa de emigración extra regional a nivel mundial.

3,1 son los intraregionales ya mencionados. El saldo migratorio de América Latina es negativo en 17,2 millones de personas.

Canales (2009) afirma que la migración internacional contemporánea es “una gran marcha de fuerza de trabajo desde los países del Sur hacia los del Norte desarrollado” y América Latina no escapa de este patrón general sino que con Asia son los que contribuyen más, en esta tendencia. Por otra parte existen flujos que concentran los destinos de los emigrantes latinoamericanos: el 80% se dirige a Norteamérica (principalmente Estados Unidos) y un 10% a la Unión Europea (fundamentalmente España). Esto lleva a Canales a definir “la nueva migración latinoamericana” como aquella que se dirige a España y a Estados Unidos, y que sea el foco de su análisis (Canales, 2009: 71).

Hasta fines de los 90; la relación Estados Unidos - España como destinos de los migrantes latinoamericanos era de 17/1. En promedio del 2000 al 2005 esta relación fue de 3/1 y en el 2007 se registra que la emigración a Estados Unidos fue sólo un 17% superior a la que se fue a vivir a España. Sin embargo, no se distribuyen igual según país y región de origen. Mientras que los mexicanos y centroamericanos se dirigen con mayor frecuencia relativa a Estados Unidos, los sudamericanos se dirigen en mayor proporción a España. Atendiendo a la estructura por edad y sexo de los emigrantes latinoamericanos hacia España y Estados Unidos se verifica un predominio claro de las edades productivas (de 20 a 49 años) que permite hablar de dos fenómenos: en primer lugar del carácter laboral de la migración y en segundo lugar que la migración familiar es menor en términos estadísticos dado el bajo porcentaje de niños que se presenta en los datos analizados. Como veremos en el apartado siguiente, este perfil para el continente se distancia de las especificidades que manifiesta la migración internacional para el Uruguay.

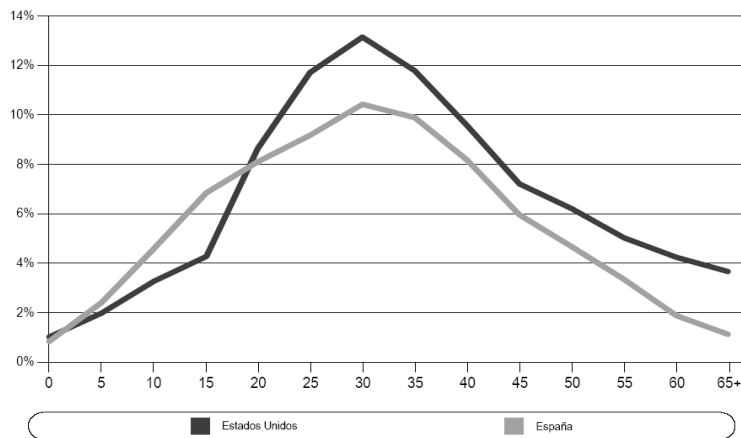
Estados Unidos y España, 2008.
Estructura por edad y sexo de los migrantes latinoamericanos.



Fuentes: elaboración propia con base en INE. España, Padrón municipal de población al 1 de enero de 2008 y Census Bureau, EE.UU., Current Population Survey, March Supplement, 2008.

Extraído de Canales, 2009

Contribución de los inmigrantes latinoamericanos a la población total, según grupos quinquenales de edad y país de destino, 2007.



Fuentes: elaboración propia con base en INE. España, Padrón municipal de población al 1 de enero de 2008 y Census Bureau, EE.UU., Current Population Survey, March Supplement, 2007.

Extraído de Canales, 2009

Se calcula que los inmigrantes latinoamericanos de 25 a 35 años representan entre 10 y 12% de la población residente en España y Estados Unidos en esas mismas edades. Se ha demostrado que la migración internacional de estos tramos de edad ha permitido la sustentabilidad demográfica de estos dos países (que habían reducido su población nativa en esas edades entre 2000 y 2007)⁴. Por otra parte, el flujo de emigrantes a Estados Unidos es masculinizado, frente al dirigido a España que tiene una composición en que predominan mujeres (y esto visto tanto en el stock de emigrantes de Latinoamérica a esos destinos, como de la emigración reciente de 2000 a 2007). Sin duda la composición por sexo se vincula a las posibilidades de inserción laboral tanto en origen como en destino. Al respecto dice Canales (2009): “El predominio femenino (en España) se explica por una amplia incorporación de mujeres latinoamericanas en puestos de trabajo vinculados a los servicios de cuidado de personas (niños, adultos mayores, enfermos, entre otros) y al servicio doméstico, en lo que se ha denominado como la transnacionalización de la industria del cuidado y la maternidad (Hondagneu-Sotelo, 2001; Herrera, 2005). Por su parte, en el caso de Estados Unidos la mayor presencia masculina suele explicarse en términos de la ya amplia tradición migratoria de mexicanos y centroamericanos, quienes históricamente se han insertado en sectores económicos tradicionalmente masculinizados, tales como la agricultura y más recientemente, como jornaleros de la construcción (Bustamante, 1997; Canales, 2007)” (Canales, 2009: 79).

Sin embargo, en los datos que el autor presenta, que se muestran a continuación, se manifiesta con claridad la paridad por sexo de Uruguay en ambos destinos, a pesar de que en España haya una leve diferencia a favor de los varones, lo cual es consistente con la hipótesis de que la migración internacional del país sea de “familias”.

4 “A principios del S XXI, los inmigrantes son un factor clave en el desarrollo de las sociedades modernas, incluso estratégicamente si se considera el envejecimiento de la población. La migración es fundamental para asegurar la supervivencia de los países europeos” (Naciones Unidas, 2004); (Martínez, 2008: 43).

Estados Unidos y España, 2006-2008.
Índice de Masculinidad de la migración latinoamericana según país de origen

Estados Unidos						España					
Masculina		Equilibrio		Femenina		Masculina		Equilibrio		Femenina	
Guatemala	171	Argentina	104	Haití	92	Argentina	107	Chile	99	Ecuador	94
Honduras	134	Uruguay	104	Colombia	79	Uruguay	105			Venezuela	88
México	125	Venezuela	101	R. Dominicana	77					Perú	87
Chile	123	Brasil	99	Bolivia	77					Costa Rica	87
Costa Rica	121	Perú	99	Paraguay	63					Cuba	81
Ecuador	118	Cuba	96	Panamá	59					Panamá	79
El Salvador	110									Bolivia	78
Nicaragua	105									México	78
										Colombia	76
										Guatemala	71
										Brasil	69
										El Salvador	64
										R. Dominicana	58
										Paraguay	53
										Honduras	52
										Nicaragua	51

Fuentes: elaboración propia con base en Buró del Censo, Estados Unidos, Current Populations Survey, March Supplement, 2006, 2007 y 2008; e INE, España, Padrón Municipal 2006, 2007 y 2008.

Extraído de Canales, 2009.

Además de esta descripción a escala “macro”, es necesario conocer el panorama sobre el complejo escenario en que viven los inmigrantes latinoamericanos en los países destino. La investigación de Castles y Millar (2004), sirve de referencia al introducirse en los análisis micro de las diversas estrategias de sobrevivencia de los inmigrantes en las condiciones hostiles que presentan las sociedades receptoras del norte. La mirada micro, ha sido favorecida asimismo por el impulso que cobra la perspectiva transnacionalista en el estudio de las migraciones internacionales. Sin embargo ésta no se ha desarrollado libre de cuestionamientos y críticas⁵, tanto desde lo teórico como desde los magros resultados que se obtienen de políticas basadas en esta perspectiva que algunos Estados han implementado⁶.

5 Por ejemplo el argumento de que “la transnacionalidad contribuye a reproducir las desigualdades sociales propias de los países de origen, ya que los sectores de clase alta que emigraron a un lugar determinado no interactúan mayormente con los inmigrantes provenientes de los sectores populares o de zonas rurales que se instalaron en la misma ciudad (Guarnido, Sánchez y Roach, 2005)”, citado en (Martínez, 2008).

6 “Es probable que la pertenencia a una comunidad pequeña favorezca el proceso de transnacionalidad en el extranjero. En cambio, algunos estudios sobre la migración proveniente de las zonas urbanas y de la clase media indican que ese tipo de vínculo es más débil. Ejemplo de ello es el caso colombiano,

Martínez (2008) coloca datos que produce el Eurobarómetro en el 2004 y que muestran el estado de opinión en Europa, que encuentran quienes migran a estas sociedades: “en 15 estados miembros de la Unión Europea sólo 25% de los encuestados se resiste a una sociedad multicultural, mientras 60% considera que la sociedad ha alcanzado su límite máximo de multiculturalidad, 39% se opone a que se otorguen derechos civiles a los inmigrantes y 22% está a favor de la política de repatriación de los inmigrantes regularizados, considerada extrema en materia migratoria”.

La situación de Uruguay

Desde su nacimiento como Estado independiente Uruguay se caracterizó por ser un país en el que las migraciones transnacionales se incorporaron como una práctica sociocultural aceptada la cual ha jugado un rol fundamental en la conformación de su identidad y mitos fundacionales. (Aguiar, 1985; Achugar, H., Caetano, G., 1995; Pellegrino, 1994). En estos dos siglos las corrientes migratorias no siempre se dirigieron en la misma dirección, desde mediados del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX el país adquirió el carácter de receptor de contingentes de población que provenían de regiones transoceánicas y regionales.

A fines de la década de los sesenta, como consecuencia del agotamiento del modelo de industrialización sustitutivo de importaciones, o de “crecimiento hacia adentro”, se produjo una crisis económica y social que modificó la estructura social del país, y también la dirección de las corrientes migratorias. La persecución política que comienza a fines de los sesenta y se consolida con el proceso cívico militar en el período 1973-1985, hizo que en las nuevas trayectorias migratorias se mezclaran razones de índole económica con las estrictamente políticas que originaron el exilio. Dada la ausencia de datos anteriores (el último censo databa del año 1908), según estimaciones de Pellegrino y Luján (1994), durante el período intercensal 1963 a 1985 habría emigrado entre 11 y 12% de la población media del país, y aproximadamente 20% de la Población Económicamente Activa (PEA). Es en este período en el que se crean las primeras colonias de uruguayos, las cuales mantuvieron distintos tipos de lazos con Uruguay, y que fueron también un sitio de encuentro y germen de lo que recientemente se ha dado en llamar patria peregrina. Como veremos posteriormente en el análisis, está generación de emigrados-exiliados son los padres de algunos retornados recientes, o

donde pese a que el Estado se ha esforzado por mantener activos los lazos con las comunidades residentes en el extranjero, no ha logrado que éstos trasciendan el plano de las relaciones privadas y familiares a ámbitos políticos y económicos de mayor envergadura, tal como sucede en México o el Salvador. Colombia ha mantenido el derecho a voto de la comunidad extranjera desde 1958, y en 1991 se aprobó la doble ciudadanía y se creó un distrito electoral extraterritorial a fin de que los colombianos radicados fuera del país tuvieran representación en el Congreso. Además el gobierno amplió el alcance de varios programas de ayuda para integrar residentes fuera del territorio. Sin embargo, estas iniciativas han encontrado poca acogida en la comunidad emigrante, sin lograr el objetivo de fomentar y profundizar la transnacionalidad. La explicación radicaría en que el origen de la migración colombiana hacia Estados Unidos es principalmente clase media urbana, cuyo sentido comunitario es mucho más débil que el del mundo rural”. (Martínez, 2008: 50).

bien, son ellos mismos que regresan para vivir su vejez en el país con lo cual muestra la continuidad de las trayectorias migratorias en al menos dos generaciones. En cuanto a los destinos, el 50% fue a Argentina, 11% a Estados Unidos, 7,4 a Australia, 7,2 a Brasil y 4,8 a España. (Pellegrino y Vigorito, 2005). Por otra parte, la aceptación tardía del fenómeno migratorio (Aguir, 1985) postergó su reconocimiento como un proceso estructural que se instalaba en la sociedad uruguaya y que a pesar de su importancia demográfica, económica y social no ha tenido la debida atención en el marco de las políticas de población contemporáneas.

En el Uruguay de la década de los noventa también se aprecian ciertos procesos ya reseñados para el conjunto de América Latina, como lo son el cambio de destino, el perfil de las personas que emigran o la modalidad que adquieren las trayectorias. Los destinos cambian en relación a los de la década de los setenta: Estados Unidos (33,3%), España (32,6%), Argentina (8,5%) e Italia (4,7%).

En la actualidad existen indicios de que la tendencia en relación al saldo migratorio negativo comienza a revertirse y Uruguay vuelve a recibir nuevos contingentes de población. A diferencia de otras etapas en las que llegaban inmigrantes fundamentalmente de España o Italia, en este caso, los que están llegando son un conjunto de uruguayos que retornan desde distintos países, tras haber transitado diversas trayectorias vitales fuera de fronteras.

Retornar al Uruguay

El estudio de las expectativas y experiencias de uruguayos que retornaron a Uruguay, consistió en la aplicación de entrevistas a informantes calificados (autoridades y técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección Nacional de Migraciones) y de 30 entrevistas en profundidad –relatos de vida–, a personas que retornan a Uruguay entre el 2009 y principios del 2011; éstos son definidos tal como lo hace la Ley 18.250 en su capítulo XIV Art 76: *“todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que decida retornar al país”*.

Según el país de residencia en el exterior diez de los retornados entrevistados corresponden a España, nueve a Estados Unidos, dos a Argentina, y una a cada uno de los siguientes países destinos: Brasil; Chile, Venezuela, México; Suecia, Suiza, Francia, Japón y Australia. Nueve de ellos se registran al volver a Uruguay en la Oficina de Retorno y Bienvenida del Ministerio de Relaciones Exteriores y veintiuno no lo hacen.

Pascual de Sans (1983), alerta contra el agregado *ideológico* que en muchas ocasiones trae consigo el uso de la palabra retornado. Argumenta que se cuelean en este término algunas ideas y supuestos que desde un uso académico y riguroso es necesario distinguir: En primer lugar, en el término retorno subyace la idea de un movimiento migratorio de ida y vuelta. A la ida corresponde el movimiento desde un punto de origen hasta el destino y al retorno le corresponde el movimiento contrario: el regreso al lugar de origen. Esta premisa es falaz por varios motivos: por presuponer un mo-

vimiento biunívoco, por la ambigüedad del punto de origen (finalmente se tomará como referencia de ese punto el país, y no los pueblos o ciudades o departamentos, aunque las consecuencias territoriales de cuál sea el punto de llegada eventualmente sean relevantes). En segundo lugar, se pretende que el retorno es “definitivo” (el retornado, vuelve para quedarse). Sin embargo, el retorno, puede verse como uno de los tantos movimientos migratorios siempre transitorios, puesto que la vida nómada –señalada como característica de las sociedades contemporáneas por Maffesoli o Augé, entre otros, supone intensa movilidad y con destinos temporarios, no definitivos. En este sentido, la vuelta al Uruguay, luego de dos años de residencia en el extranjero, puede ser sólo uno de los tantos movimientos residenciales extra fronteras a lo largo de la vida de sujeto. Vale la pena detenerse en este punto porque en general el fundamento esgrimido para colocar la necesidad de poner en agenda esta cuestión es que los retornados vuelven para quedarse. Se verifica una suerte de *actitud natural* de la noción retorno; dando por hecho que es definitivo; no se requiere argumentación ni prueba de ello, y constituye un “piso de verdad” sobre el cual se construyen otros argumentos.

De alguna forma, se advierte un sesgo de conceptualización moderna de pertenencia a un Estado, de ciudadanía única. En el Uruguay de hoy el número de personas con ciudadanía múltiple no sólo es significativo sino que probablemente, crece. Según la Encuesta Nacional de Adolescentes y Jóvenes (2008) el 12% de los encuestados –de 12 a 29 años que residían en el país al momento del relevamiento– declaran tener ciudadanía de otro país (Cabrera, 2010). Estos datos merecen considerarse al tratar con el concepto de “retorno” de ciudadanos uruguayos; un porcentaje considerable son simultáneamente ciudadanos de otro país y son pasibles de ser “retornados” de varios países en sus trayectorias migratorias.

En esta investigación se indaga sobre experiencias, vivencias, estrategias, y sentidos construidos de un periodo vital del sujeto entrevistado. Los relatos (de vida) son holísticos, remiten a sentimientos, situaciones, decisiones, circunstancias, dando a la subjetividad en estos procesos vitales un lugar central, ya que además en la instancia de la entrevista el sujeto ordena, prioriza, selecciona y describe acontecimientos de este periodo de su vida. También la memoria juega un papel altamente significativo, sobre todo en el relato de por qué se fue del país, siendo que en ocasiones se habla de muchos años atrás. El tiempo en estas entrevistas y relatos de vida, debe ser necesariamente un foco de análisis ya que en ocasiones el sujeto cuenta, desde el hoy, lo que le ocurrió (o las decisiones que tomó) en un ayer más o menos lejano; y por tanto más que el relato de los hechos, realiza una evaluación vital de aquellos momentos.

Los relatos de vida, suelen ser muy movilizados; por otra parte, la selección de los entrevistados como retornados recientes, agregan el elemento de una fase de adaptación actual (que por lo general es conflictiva) que es justamente la que define su pertinencia en tanto entrevistado. Por tanto, lejos de ser un tema que pueda ser tratado desde un lenguaje técnico, o desde un enfoque que admita distancia y hablar desde un yo generalizado, estas entrevistas apelan a la intimidad, a las vivencias más

personales, al sentir subjetivo; requieren por tanto de muy buena disposición de los entrevistados, ya que se narra desde el yo íntimo, y se ponen en juego las emociones durante toda la entrevista.

Los relatos de vida, son difíciles de “fragmentar” en párrafos o códigos para el análisis, ya que como veíamos antes, se requiere tener en cuenta la integralidad puesta en juego en este discurso.

La riqueza obtenida en este campo merece seguir siendo objeto de futuros análisis con el uso de otros abordajes. Manifestamos aquí nuestro reconocimiento a los entrevistados que nos dedicaron su tiempo y sobre todo su relato sobre esta porción de vida, de ellos/as y sus familias.

Tipos de retorno y país receptor

Para el análisis de los relatos se distinguen diferentes tipos de retorno: los que se procesan voluntariamente, y los que responden a decisiones ajenas a los sujetos retornantes. *“Los Estados tienen facultades indiscutibles para determinar qué personas extranjeras pueden ser admitidas en su territorio, expulsar a algunas de ellas en ciertas circunstancias, controlar sus fronteras y adoptar las medidas necesarias para proteger su seguridad cuando se considera amenazado”* (CEPAL; 2008: 317).

Por tanto los retornos pueden ser: *Decididos Voluntariamente* (cuando el migrante decide volver a residir en Uruguay y no existe ningún mecanismo externo que lo “obligue” a tomar esta decisión); *Deportación* (es la acción de un Estado, de forzar el regreso al país de origen de aquellas personas que se encuentran residiendo ilegalmente en él, es decir sin tener la documentación válida y necesaria para la residencia en ese país⁷); *Inadmisibilidad o exclusión* (aplica cuando un extranjero busca entrada a un país y le es negada⁸); *Expulsión*⁹.

En segundo lugar, se atendió especialmente al país receptor. Esta distinción es relevante dado que muchas de las situaciones que se viven fuera, así como los recursos que se tienen y/o se obtienen dependen de dónde se haya residido. También es importante en la medida en que el país de procedencia se vincula al tipo de retorno (las deportaciones sólo se dan desde Estados Unidos). Así también las coyunturas específicas de los países destino de los emigrantes uruguayos condicionan la propensión y el retorno efectivo. Se consideró España; Estados Unidos y “otros países”. En la última categoría se consideran tanto países de la región (Argentina, Brasil, Chile) como

7 En este estudio se registran deportaciones sólo desde los Estados Unidos.

8 En este estudio se registraron casos de personas que retornan a Uruguay porque ellas o miembros de su familia, en un aeropuerto de España fueron declaradas inadmisibles y se les negó la entrada.

9 Se tienen referencias a partir de informantes claves de retornos probables que serían clasificados como expulsiones: *“Concretamente tenemos 2000, 2500 presos, uruguayos presos en Argentina. Hay una ley que dice que cuando cumplís la mitad de la condena te expulsan. Entonces vos tenés que esas personas van a venir al Uruguay, tenés un montón de gente que en la mitad de la condena los expulsan. Llegan acá a la nada...”* (entrevista a informante calificado).

destinos transoceánicos (Japón, Suecia, Francia, Australia, etc.). La selección de los entrevistados privilegió a España y Estados Unidos en la medida que son los principales destinos de la emigración latinoamericana y también nacional reciente¹⁰.

Irse - durante y volver

El análisis de los relatos toma en cuenta la fase de la trayectoria migratoria. El reconocimiento del retorno como proceso y como un movimiento poblacional diverso, nos condujo a situarlo como una fase de algo más amplio que se define como *trayectorias migratorias*. Esta conceptualización permite a su vez, distinguir de forma analítica tres momentos que visibilizan los elementos que estaban en juego en la articulación de las mencionadas trayectorias, aunque éstas no se consideren cerradas¹¹ (irse; durante; volver).

La idea de *trayectorias migratorias* supone que el retorno no es el final de un proceso sino simplemente una fase en la que la movilidad no tiene por qué desaparecer sino –como lo manifestaron varios entrevistados– quedar en suspenso, o con alta probabilidad para una nueva partida. En este sentido, es probable que la propensión migratoria sea mayor para aquellos que hayan pasado por una experiencia de residencia en el exterior, y que hoy puedan ser clasificados como “retornados”.

Es en este contexto que concebimos –sólo a efectos analíticos– cuatro momentos del proceso. Éstos son: a) la partida, b) la estadía en el lugar al que se emigró, c) el proceso de decisión de emprender el retorno al Uruguay, y d) la llegada a Uruguay propiamente dicha. Al interior de estos momentos se suceden diversos acontecimientos, de orden personal y familiares que determinan la trayectoria de los migrantes uruguayos y su inserción tanto en los países a los que se emigra, como así también, en su reinserción en la sociedad uruguaya tras su retorno.

Irse

Explorando cuáles son las causas o motivos que los sujetos atribuyen para su partida de Uruguay, se observa que al objetivar las razones para ir a vivir a otro país, aparecen simultáneamente el “contexto” y la “situación personal”. Así se manifiestan interrelaciones de los ciclos de vida, relaciones personales, proyectos vitales, proyectos laborales, y una evaluación del entorno que los condiciona o restringe. Por lo general se conjugan una serie de elementos, y es su combinación lo que lleva a la decisión de emigrar. Es frecuente la mención de varios factores que convergen: “*fue por un conjunto de*

10 En la encuesta de Caracterización social de 2002, el 80% de los emigrantes recientes concentraba sus destinos en cuatro países: Estados Unidos (33%); España (33%), Argentina (8,5%) e Italia (4,7%). Esta distribución geográfica era, a su vez, muy diferente de la observada en la década de los años 70, cuando la mitad de los emigrantes habría tenido como destino Argentina, 11% Estados Unidos y menos de 5% España, según la encuesta de Migración Internacional de 1982 (Pellegrino y Vigorito, 2005).

11 De hecho un apartado dentro de “volver” es el análisis correspondiente a la predisposición a “volver a irse”.

cosas”, “*un poco de todo*”, “*en realidad fue un cúmulo de cosas...*”, lo que manifiesta la multicausalidad de la partida.

Es difícil clasificar a los entrevistados a partir de una causa o motivo (como si fuera un código de una pregunta en una encuesta). Lo que este estudio de carácter cualitativo muestra¹² es la “interpretación” que el sujeto hace del entorno y de su propia situación, en un momento de su vida, a partir de la cual toma la decisión de emigrar. Son las interpretaciones (la diversidad de causas y motivos que se combinan), lo que da riqueza a un estudio de estas características¹³. No obstante la multicausalidad registrada, pueden distinguirse algunas razones que son frecuentes en los relatos: 1) una interpretación del entorno en que priman las dificultades de índole económica, asociadas principalmente a la pérdida del empleo, los bajos salarios, y la incertidumbre o inestabilidad laboral, 2) una evaluación negativa de la proyección laboral en Uruguay al momento de la partida, 3) el proyecto afectivo, vinculado a la consolidación de parejas o familias, 4) la búsqueda de nuevos horizontes, que se piensa imposibles de obtener en Uruguay, y 5) la posibilidad de seguir estudiando o formándose académicamente en el exterior.

En segundo término, también surgen, de manera indirecta, a veces verbalizada por los entrevistados, y en otras, producto del análisis, otros factores que están en juego, que intervienen en el proceso de partida (facilitándolo) y que de alguna manera, condicionaron el modo de llegada e integración al país escogido y el desarrollo de las estrategias de sobrevivencia en ese destino. Este conjunto estaría compuesto por el manejo del *riesgo*, los *recursos*, y las *habilidades* que los migrantes realizan. Abarca las siguientes dimensiones: 6) la tenencia o no de papeles para residir legalmente, 7) la existencia de redes con las que contactarse para acceder a trabajos, vivienda, etc., 8) el efecto de llamada o contagio (que se produjo específicamente ante la crisis del 2002), 9) la capacidad de adaptación como un prerequisite funcional para sobrevivir fuera, y 10) la trayectoria migrante de generaciones anteriores, ya sean padres o abuelos. En algunos casos la dimensión política emergió en las trayectorias de exiliados e hijos de exiliados políticos como causa de su devenir migrante.

De todo lo mencionado antes se hará énfasis en el factor económico y el sentido que se le atribuye. Las características de este estudio, basado en el trabajo con discursos libres, no fragmentados, distante de las respuestas precodificadas características de una encuesta, permite indagar en los múltiples significados que adquiere ese lugar común de emigrar por “razones económicas”. Aunque no siempre es posible aislar un factor determinante exclusivo sino que se mencionan un conjunto de piezas que funcionan en una estructura argumental. Los relatos permiten desbrozar el sentido atribuido

12 Justamente por trabajar con los discursos no fragmentados ni con respuestas definidas a priori como en la técnica de encuesta.

13 Por eso el informe completo del estudio busca el equilibrio entre un abordaje fenomenológico –mostrando lo que “sujetos dicen” que permite compartir con el lector relatos extraordinariamente ricos, y diversos–, y la observación de segundo orden que realiza el investigador –la interpretación, análisis y lectura de dichos relatos–.

a “lo económico”, por los sujetos que emigraron (y retornaron al Uruguay). Ese factor aglutina diversas significaciones. Además se tipifica como principal causa de la emigración que se produce en Uruguay en los primeros años del siglo XXI.

El contexto de crisis económica que se produjo en los inicios de la década del 2000 fue determinante en la trayectoria migratoria de muchos de los entrevistados. El año 2002 es el que registra mayor desempleo en el quinquenio 2000-2005 y es el año en el que se registran más salidas de uruguayos¹⁴. La instalación y consecuencias de esta realidad económica adversa afectaron tanto a las personas que pudieron iniciar una trayectoria migratoria como aquellos que se quedaron y buscaron alternativas en el país. No obstante estos datos, que recurrentemente se utilizan para los análisis y la determinación de factores que expliquen desde una perspectiva macro los comportamientos individuales como la decisión de emigrar, no permiten detectar el “sentido” (o más bien los múltiples sentidos) que adquiere para los emigrados la “situación económica”. De hecho, aunque es el factor más fácilmente objetivable, como razón o motivo para la emigración, adquiere diversos *sentidos* asociados con los proyectos personales de los entrevistados. Es por ello que, si bien la crisis golpea fuertemente a todos los uruguayos a comienzos de la década del 2000, el tipo de vínculo que establecen los entrevistados entre el factor económico y su decisión de “irse” admite distinciones.

Con frecuencia el “factor económico” (coyuntura por la que atraviesa el país) se vincula a la percepción de impedimento o dificultad para el crecimiento (personal, laboral, de ingresos, de realización) más que al hecho de “no conseguir trabajo”. Por otra parte la población que migra –y que en este estudio se capta como retornados–, está en edades productivas, en el momento vital de “dar el salto”, de progresar, de crecer social y económicamente para sí y para la familia. Así también sirve de marco cuando se percibe que el rendimiento que se obtiene por el trabajo es mayor en otro país que en Uruguay.

La relevancia de destacar este aspecto, radica en la *tipificación* que se realiza de los motivos de la emigración masiva que se produce a comienzos de la década de los 2000 en Uruguay, aludiendo a una necesidad casi impuesta por el entorno a los sujetos que migraron. Esta interpretación (sin duda nutrida y reproducida por los instrumentos utilizados para estudiar estos fenómenos) es habitualmente utilizada tanto en los medios masivos de comunicación, en el sistema político, por parte de la academia y como se mostrará más adelante, permea incluso la percepción de los entrevistados de este estudio al hablar de los “otros que emigraron”. No obstante se detienen particularmente en señalar que no es o no fue su propia situación.

El hecho de que el proceso migratorio sea concebido como un *recurso* es recurrente en las partidas, y también en los retornos. Sin embargo, sólo se menciona que

14 En el año 2002 la tasa de desempleo en Uruguay se ubica en 17% (ECH- INE, 2007). Se calcula que en ese año, el saldo de movimientos de egresados e ingresados del Aeropuerto de Carrasco es negativo y alcanza 28.302 personas (Pellegrino y Cabella, 2005).

es el “último recurso” al hablar de los “otros que se fueron”, no representa en general la interpretación que se realiza de la propia partida.

Principalmente entre aquellos entrevistados en edades productivas, aparecen otras búsquedas, que si bien se atan al entorno que se encuentra depresivo, no se agota en ello. En esta dimensión, subyace la cuestión económica pero también están presentes otros elementos como el malestar cultural (*creo que me fui más bien escapándome del Uruguay del “no se puede”*), el deseo de conocer otras realidades, la búsqueda y construcción de una estabilidad como fundamento para el crecimiento personal y familiar.

Dentro de los *factores intervinientes* uno de los elementos fundamentales que determinará la decisión de irse y la trayectoria de llegada e inserción de los migrantes es el hecho de *poseer o no documentación* que les permita acceder al permiso de residencia u obtener la ciudadanía, y consecuentemente vivir “legalmente” en otro país. Partir, transitar o establecerse como indocumentados no necesariamente opera como un freno, sino que en ocasiones es parte del *riesgo* que los migrantes asumen asociado a su movilidad y que se conjuga con los recursos (redes familiares o de amigos), expectativas y esperanzas depositadas en el proceso migratorio.

La política aplicada hacia la inmigración irregular desarrollada en el país escogido como destino, determinará aspectos estructurales como la forma de acceder al mercado de trabajo, la integración social, también incidirá en aspectos de la intimidad, los afectos, las emociones o el miedo permanente a ser deportado.

“O sea, uno siempre sabe... o sea todo el mundo tiene en la cabeza, que podés salir de mañana de tu casa y no poder volver, que te pueden agarrar. Es como que, a vos te esté buscando la policía: vos sabés que salís de tu casa y no sabés si volvés”. (Entrevista 20).

Ser inmigrante “ilegal” supone un estado de reconocimiento suspendido de elementos básicos de la ciudadanía como votar, tener acceso a documentos que reconocen una identidad, un contrato formal de trabajo, etc. Activa recelos que en algunos casos radicalizados, puede llegar hasta prácticas xenófobas de las cuales ser objeto. Limita la integración en la sociedad de acogida; pero también los vínculos con la sociedad de origen o de partida. Ello supone el despliegue de estrategias para “conseguir los papeles”, que se distinguen en función del país de destino. Para acceder a la regularización en el caso de España se identifican tres modalidades en el conjunto de nuestros entrevistados: en primer término, la doble nacionalidad, que obtienen mediante trámites y certificación aquellos que son hijos o nietos de ciudadanos europeos (básicamente España e Italia, origen principal de la inmigración nacional); en segundo lugar a través del casamiento con un ciudadano/a español/a (o de algún otro país de la Unión Europea, como Italia), esta vía la utilizan muchas parejas en que ambos son uruguayos y uno de sus integrantes posee la doble nacionalidad. Es frecuente que se casen antes de emigrar. En tercer lugar, a través de las amnistías y regularizaciones que ha

hecho España –la última regularización data del año 2005– para aquellas personas que cumplen ciertos requisitos (permanencia, arraigo, contrato de trabajo, etc.). Entre los entrevistados que residieron en Estados Unidos, se detectan dos estrategias (aplicadas por ellos o por conocidos). La primera es el casamiento con una pareja con ciudadanía estadounidense y la segunda la compra de la *greencard*. A diferencia de España, en el caso de EE.UU., se manifiesta que el casamiento con alguien que posea la nacionalidad americana es prácticamente la única vía de acceso a la legalidad. Las bajas expectativas sobre procesos de amnistía o regularización para inmigrantes determina que se deba vivir ilegalmente y en un estado emocional donde prevalece el temor a ser deportado. En la medida que las restricciones y los controles son más rigurosos, también las estrategias para acceder a la regularización se hacen más complejas. Esta situación va más allá del colectivo de uruguayos que residen en EE.UU. y es parte de un fenómeno y problema cultural que está instaurado en los EE.UU.. El riesgo asociado a comprar una “greencard” o “casarse” con algún desconocido –como forma de adquirir los papeles– es una posibilidad para aquellos que además de estar dispuestos a llevar adelante esta acción tienen los recursos suficientes para poder hacerlo. En este contexto entran en juego organizaciones que obtienen beneficios y a las que se puede recurrir a costa de multiplicar el riesgo: además de estar indocumentado, se está cometiendo un delito.

Ser migrante ilegal en Estados Unidos supone vulnerabilidad no sólo por la precariedad en la que se vive sino también por las limitaciones que plantea a la movilidad social y espacial, la integración y acceso a las posibilidades que la sociedad abierta ofrece. En este escenario, la interrelación queda limitada a los iguales, y en algunos casos está en el origen de la conformación de barrios o guetos constituidos cultural o étnicamente. El acceso al sistema educativo y particularmente a la universidad no es un derecho para los “sin papeles”. Ser ilegal en España, aunque tiene menos riesgos que en Estados Unidos, también tiene consecuencias para los uruguayos, referidas principalmente al mercado laboral (acceso a determinados puestos de trabajo y diferencias salariales con respecto a los españoles, aunque no se consideren bajos salarios). Por otra parte, no se manifiestan dificultades al momento de la emigración en conseguir trabajo.

La existencia de redes facilita el acceso a recursos, acelera procesos de aprendizaje y a partir de ellas, se transmite información y experiencia de los que ya están que resulta útil y relevante para los recién llegados. Es capital social que frecuentemente se moviliza y contrapesa los límites y restricciones que se despliegan desde el ámbito público o estatal en el que se afianzan nuevos marcos jurídicos restrictivos, o desde el espacio social.

El efecto contagio se manifiesta con frecuencia en los relatos: “La época del boom”, “me fui como se fueron miles”, “todo el mundo se iba a Miami”, son expresiones que describen cómo los sujetos se autoinscriben en una corriente que aunque no es organizada ni colectiva, sino de naturaleza individual, adquiere un carácter general. Los estímulos externos, la imitación de experiencias cercanas de emigración, el seguir

trechos que otros recorrieron antes y facilitan el recorrido propio, parecen dar las condiciones que favorecen el pasaje de “propensión migratoria” a “emigración”.

Durante

En este apartado se organiza la información obtenida de los relatos de la experiencia vivida durante la residencia en otro país. Entre los entrevistados la duración varía entre 4 y 13 años. Existen casos en que la residencia en otro país transcurre en la misma localidad, mientras que en otros se confirma en el “durante” a su vez movilidad geográfica.

La definición, caracterización y concepción del hecho de vivir en un país al que se ha emigrado –o al que se retorna– ha cambiado radicalmente en los últimos años como consecuencia del despliegue de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el reordenamiento de los mercados de trabajo a nivel internacional, y la adaptación restrictiva de los marcos jurídicos para contener, controlar y gestionar los diversos movimientos poblacionales. (Sassen, 2003). Este despliegue ha afectado los modos de comunicación, de trabajo, ha producido nuevas estrategias de sobrevivencia, de desplazamiento y apropiación de los espacios y las ciudades, ha instaurado la simultaneidad normativa entre las personas. (Castells, 1997). El acceso y uso de las nuevas tecnologías está afectando a los propios marcos de la comunicación –fronteras físicas, territoriales o temporales–. El desplazamiento subjetivo que supone el hecho de sentirse comunicado con la familia se desplaza hacia la acción de “estar conectado”. En este contexto multidireccional, de disolución de los espacios convencionales y articulación de nuevos territorios de socialidad y socialización, surgen nuevas geografías que multiplican la experiencia de habitar, comunicar, integrar y transitar por una trayectoria migratoria.

En los relatos esto se traduce en el acceso cotidiano a medios de prensa y estar al tanto de las noticias de Uruguay, la comunicación permanente vía skype, chats, mails, redes sociales con los que se quedaron, mantener las prácticas identitarias (el mate paradigmáticamente). Con la descripción de estas intersecciones se da cuenta de cierto grado de extraterritorialidad que afecta a las formas tradicionales de concebir la integración, la permanencia, los vínculos, las sensaciones y sentires del estar enraizado en un determinado país. En este contexto, adviene el sentimiento de ser uruguayo cuando se está fuera, elemento de la sensibilidad que antes de la partida no tenía especial relevancia, y viceversa, una vez que se retorna aflora el sentimiento de ser también un poco parte de “allá”.

Los cambios en las maneras de habitar y estar plantean desafíos a los migrantes, en la medida que deben convivir en contextos culturales que no les son propios, como los lingüísticos, los laborales, educativos, o en el acceso a diversas formas de ocio o consumo. Es así que la sumatoria de elementos como las dificultades lingüísticas, la condición de ilegal, la precariedad laboral, conexión permanente con la familia en Uruguay, su capacidad de adaptación, pueden llevar a que exista una percepción frag-

mentada de la experiencia vital y por lo tanto, se viva dissociado del espacio material y simbólico en el que se vive realmente. Paradójicamente el hecho de estar conectado posibilita la prolongación de los vínculos con los que se quedaron y un grado de conocimiento fehaciente de la evolución del país, pero a la vez, puede provocar un desconocimiento, y en muchas ocasiones desafección política y cultural en la sociedad en la que se está¹⁵.

Otro elemento que hace más compleja esta situación refiere a las variaciones de la vivencia migratoria entre los distintos integrantes de una familia: no siempre es lo mismo la forma y el grado de integración al que pueden llegar los hijos, los padres, o aquellos que se fueron solos/as. En términos generales, y sabiendo que existen multiplicidad de situaciones, podemos afirmar que el anhelo y predisposición a la integración “tradicional” en la sociedad de acogida, constituye un elemento fundamental para la estabilidad emocional y el ejercicio de un conjunto de roles funcionales como pueden ser los asociados al trabajo o a la interacción social.

Conjuntamente con el proceso de integración, que puede adquirir distintas formas, también se constatan otras prácticas o sentimientos, como la comparación constante entre el “allá” en el que se ha vivido y el “acá” que estoy viviendo, o el desencaje que supone sentir que ya no se es de ningún lado. En varias entrevistas se menciona la condición de inmigrante que denuncia el acento para el caso de los uruguayos, o la raza y el aspecto físico en otros; para esta condición no pasa el tiempo, e indistintamente provoca reacciones en las interacciones en la sociedad de acogida (“A ver, extranjero así vas a ser siempre, aunque lleves veinte años...”). Más allá de las diferencias que se aprecian en los relatos, tanto en la forma en que se maneja la condición “ser inmigrante” (en algunos casos más conflictivamente que en otros) y las diversas maneras de justificar y/o argumentar cómo se evidencia el estigma, y las reacciones que desencadenan –fenómeno del que Uruguay no es ajeno como sociedad receptora–, es claro que formó parte de la cotidianeidad de muchos de los entrevistados, durante su estancia en el exterior.

“La gente cuando se va, se piensa que es como el Uruguay pero más limpio, que hay autos más grandes y que te pagan más. Llegás, sos toda la vida inmigrante, ¿entendés? Es como el caso de la gente que vino inmigrante en los años 40 acá. (...). Por ejemplo acá viene un chino y va a ser toda la vida un chino inmigrante, nunca va a ser un uruguayo, nunca lo van a considerar uruguayo. Le van a decir “el chino”, va a ser “el chino”. Y por más que tome mate y coma asado, y eso, le va a seguir gustando la comida china y la música de China, y va a querer ir a China...”. (Entrevista 20).

El trabajo es la dimensión que articula la trayectoria migratoria, es el verdadero motor que da sostenibilidad y establece la dirección de aquellos que utilizaron el recur-

15 “...todo el mundo habla inglés allá, pero yo en sí no pude hablar absolutamente nada, entendía lo que me decían pero no era una cosa que pudiera hablar..., nada. Compré cursos para poder hablar y nada, fue una cosa que tampoco le dí mucha bolilla, lo mío era trabajar, mi vida era trabajar y poder venirme para acá”. (Entrevista 19).

so migratorio como una vía para desarrollarse personal, familiar y/o profesionalmente. Las competencias, el oficio o profesión que el migrante posee es parte de su identidad, le da atributos para su integración, le sitúa para los demás y abre la posibilidad de inserción en los mercados de trabajo. Además produce sentido de pertenencia, seguridad y la estabilidad emocional y material fundamentales para su arraigo en el país propio o en el escogido como destino.

La combinación de las trayectorias laborales y migratorias no siempre se da en la misma dirección, como queda explícito en varias de nuestras entrevistas. La movilidad puede ser entendida como un movimiento circular en el que prevalece el sentido individual de obtención de beneficios, riqueza o bienestar y que de alguna forma, podría estar redefiniendo las prácticas asociadas al nomadismo y migraciones contemporáneas.

A diferencia de otros momentos históricos en los que desplazarse era más difícil debido al costo y al tiempo de los viajes (cuando se hacían en barco y llevaba meses) en la actualidad la movilidad es indisoluble de los cambios globales y locales en los mercados de trabajo.

Con la trayectoria migrante también se producen circulaciones y producciones de conocimientos asociados a la inserción en el mercado de trabajo. La formación o experiencia no es estática, el sentido de adaptación abre la posibilidad de que los migrantes estén dispuestos a aprender nuevos oficios o directamente realizar tareas que no realizarían en su país de partida (*“allá nos rescatamos”*). Por tanto, si bien se constata que la formación de partida juega un rol importante en el acceso al mercado de trabajo, ésta no queda estancada o estática, los migrantes están dispuestos y la propia realidad del mercado de trabajo les condiciona para incorporar otros saberes no reglados formalmente, pero que les habilitan para desempeñarse profesionalmente.

En esta dirección, surge en las entrevistas algo que es materia de reflexión entre los que se quedaron y los que se fueron relacionado a la disposición de trabajar en “cualquier cosa” que tienen los migrantes al partir, actitud que contrasta con la disposición para aceptar realizar ciertos trabajos en el país antes de su partida o tras su retorno. En particular, esto es muy visible en aquellas personas que se insertan en el sector servicios, y dentro de este sector particularmente en la rama de la hostelería, o en la de cuidados.

Por último, más allá del status legal y al país donde se emigró es importante destacar que la existencia de familiares o amigos constituyen las redes a través de las cuales se facilita la inserción al país de emigración, aspecto que veremos posteriormente al momento del retorno y que es un activo fundamental en el devenir de las trayectorias migratorias.

El anhelo del desarrollo individual o familiar, y la sumatoria de aquellos elementos que constituyen la “vida cotidiana” no siempre son productos de una planificación a futuro o de estrategias que combinan de la mejor forma medios y objetivos personales. Además de la existencia de decisiones que van marcando un rumbo, se detectan en

las entrevistas ciertas inercias que afectan tanto a la autopercepción como al propio ritmo de vida. Esta dimensión no está sujeta exclusivamente al grado de integración en la sociedad de acogida, o a los lazos que se mantienen con la sociedad de partida, va más allá de éstos y otros vínculos. La sensación de inercia, es fruto del interaccionar sistémico, relacionado con el trabajo o los estudios; puede ser parte de las condiciones de habitabilidad y movilidad en contextos urbanos en que las distancias demandan mucho tiempo para los desplazamientos. Particularmente, en sociedades de consumo o desarrolladas –como es el caso de Estados Unidos o España– la posibilidad de acceso a determinados bienes o servicios (como pueden ser viajes o tecnología) es un prerrequisito que favorece la cohesión social, y a su vez regula el tiempo, los espacios de ocio y comunicación. En estas circunstancias, la vida personal, en tanto construcción sobre la que las personas proyectan deseos, despliegan su voluntad o desarrollan conductas queda acotada, limitada a un mínimo espacio de reencuentro y realización. Las pérdidas de ciertas prácticas, son vividas como restricciones que afectan el modo de vida que se llevaba antes de partir. Es así que la metáfora de “la vida te va llevando” es significativa también para pensar en los retornos, la falta de planificación e inercias que pautan la vida cotidiana bien podría llevar a una nueva metáfora que podría ser “la vida te va trayendo”. Esta dimensión está sujeta a decisiones y dinámicas concretas (como el acceso al trabajo, grado de integración, sentimiento de desarrollo personal o realización) pero no quiere decir esto que se desconozca su existencia e incidencia.

En la intersección entre gobernabilidad y migraciones, y concretamente en aspectos vinculados al arraigo permanente pautado por las leyes de retorno, estas dinámicas pueden ser cuestionadoras, en la medida que esquivan las planificaciones y gestión de las trayectorias.

Volver

Al igual que sucede con la decisión de “irse”, para “volver” operan un conjunto de circunstancias, es una interpretación de la situación en que juegan nuevamente condiciones de entorno y proyectos personales asociados con frecuencia a ciclos vitales. La multicausalidad destacada para la decisión de emigrar, emerge nuevamente en el caso del retorno, aunque hay un elemento nuevo que pesa significativamente en los relatos y es la valoración del “tiempo” afuera del Uruguay. Por otro lado la conjugación de una evaluación simultánea tanto del entorno relativo al país de acogida, como el que se vislumbra propio de Uruguay, a través de exploraciones previas, o de relatos de otros significativos –que pueden ser muy contradictorios–, búsquedas e investigaciones en Internet, aprobaciones de leyes que favorecen (como la Ley 18.250), programas de retorno de científicos y académicos, etc.

La decisión de volver también tiene diferencias; en algunos casos prima un “proceso”, que conduce a una planificación del retorno. Aquí es recurrente que los entrevistados aludan a “la idea de volver siempre estuvo”¹⁶ o que planificaron una residencia

16 —“¿Y siempre habían tenido la idea de volver o no? —Sí, siempre... es como dice la canción de Laura

fuera del país acotada en el tiempo (*“nos fuimos por un par de años”*). En otros, el relato de los entrevistados sugiere un “darse cuenta”, algo que repentinamente se descubre y precipita la vuelta. Otros casos –exclusivos de aquellos que residían en Estados Unidos– son deportaciones, en que no hay retorno voluntario sino que el regreso al Uruguay es forzado y media además un procedimiento policial difícil y complejo (*“... es diferente que te vuelvan”*).

Uruguay como destino atractivo para un nuevo movimiento migratorio aparece en algunas entrevistas referido al “momento histórico”, o a determinados valores o relaciones deseados para los hijos. En otras ocasiones los hijos aparecen más como un obstáculo para retornar, particularmente en casos de entrevistados que vuelven de Estados Unidos, tanto sea por deportación de algún miembro de la familia o del retorno casi forzado por el miedo a serlo. Cuando Uruguay se sigue sintiendo el país de pertenencia, pese a los años de ausencia, determinadas condiciones históricas aparecen como elementos que condicionan el regreso: en ocasiones son cambios políticos (como el cambio de gobierno), y en otras aparecen factores asociados a características sociales que se pretenden para los hijos.

Es frecuente que el tiempo de estar fuera condicione la decisión del regreso, fundamentalmente en aquellos en que la emigración había sido planificada como “temporal”. La evaluación *“ya es suficiente tiempo fuera”* o *“ya hace mucho tiempo de esto”*, etc. se presenta en varias entrevistas. Por otra parte, los beneficios que otorga la ley 18.250 para aquellos que retornan, no son mencionados con frecuencia; y en muchas ocasiones son más un factor que se *“aprovecha”* cuando la decisión de volver está tomada que un elemento que catalice la vuelta.

Los afectos, la familia, *“extrañar estar en casa”*, son motivos frecuentemente aludidos para retornar. La vejez de una madre, los problemas de salud de un familiar cercano, pero también circunstancias difíciles que se viven lejos (separaciones, divorcios) que requieren de contención, protección y cariño, se van entretejiendo para formar una malla afectiva de lazos identitarios que se mantienen más allá del tiempo y la distancia. Se construye de esta forma un espacio imaginado de contención, un lugar mítico desde el cual nunca se ha producido un corte radical, y que siempre está ahí como un lugar de refugio, en el que es posible ser acogido.

Como en la partida, se detecta un efecto contagio producto tanto de las interrelaciones que se establecen entre los “retornantes” con aquellos que permanecieron en el país y les dan noticias del Uruguay, del incremento de “los que están volviendo” y de una mejor situación del país que la que había al momento de la partida. El efecto “contagio” por tanto, se percibe a través de diferentes expresiones “olas” y “oleadas” de retorno. La decisión de otros de regresar al Uruguay, aparece en el repertorio de las conductas posibles, que se conjugan con una evaluación del entorno actual del lugar donde están (que eventualmente también ha sufrido cambios en relación a lo que era

cuando se fueron), el replanteamiento de los proyectos de vida luego de los años que hace que están afuera, y el cumplimiento o no de las expectativas que tenían al irse.

Los hijos tienen un papel ambivalente en la decisión del retorno. Tanto puede ser objetivado como uno de los motivos que provoquen la decisión de volver al Uruguay, como la situación contraria: las dificultades que los propios entrevistados manifiestan en el retorno son las posibilidades, la inadaptación y/o el disgusto que tiene para los hijos la decisión de los padres de retornar a vivir en Uruguay. En gran medida el lugar que ocupen los hijos así como el papel que jueguen (a favor o en contra) en la decisión de volver se asocia a la edad de los hijos –que tengan voz, capacidad de opinar y decidir, etc.–, y sin duda a cómo se procese el retorno; en el caso de deportaciones el conflicto que se plantea es de mayor intensidad, y en general los casos más problemáticos de adaptación de los hijos remiten a adolescentes que vienen de Estados Unidos. Muchos de los entrevistados que tienen hijos, tanto si los tuvieron fuera del país o hubieran viajado con ellos, referencian la importancia que tiene en la decisión de volver el que los hijos vivan en Uruguay. Los argumentos giran en torno a conocer Uruguay, a vivir acá, a la cercanía con la familia, la consolidación afectiva de los lazos familiares que permanecieron en el país durante su estancia fuera, o porque la sociedad en la que vivieron no es la que pretenden para ellos. En ningún caso es un reclamo de los propios hijos, sino un deseo de los padres, sean los dos uruguayos o uno de ellos. En otros casos, las referencias son de las dificultades que tienen los hijos (generalmente de mayor edad) para adaptarse a Uruguay; problemas de inserción en la vida social y educativa, o quiebres en la condiciones de consumo a las que estaban acostumbrados y en las que se socializaron.

Se identifica una serie de factores que intervienen en la decisión de volver a Uruguay: uno de ellos corresponde a la situación económica o de política migratoria que se vive en el país de residencia. Se aprecia nitidamente que si para Estados Unidos el miedo a ser deportado marca intensamente tanto la vida allá como la decisión de volver, en España son las condiciones de mayor precariedad laboral producto de la recesión sostenida que vive ese país, que afecta a los inmigrantes y en mayor medida aún a los que están en situación de ilegalidad. A ello se suma la percepción de que “Uruguay está mejor, está creciendo”. Algunos han regresado al Uruguay aprovechando los beneficios que otorga el gobierno español para los inmigrantes que decidan volver a sus países de origen (Plan de retorno voluntario que se crea en el 2003¹⁷).

El incremento de los controles a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos produce inseguridad, miedo y la permanente y cotidiana sensación de riesgo. Las actividades más básicas, como el desplazamiento en la ciudad, aún sorteando las dificul-

17 El “Programa de retorno voluntario de atención social” está dirigido a quienes no tengan recursos económicos: “Desde su creación, en 2003, el promedio anual de uruguayos que demandaban este plan era de 90 personas. En 2009 la cifra superó los 400. Según un documento divulgado recientemente por el Observatorio Permanente de la Inmigración español, entre diciembre de 2008 y mayo de 2010, 850 uruguayos buscaron ayuda para volver” (Costa, 2010).

tades provenientes de la inserción en el mercado laboral, son una de las fuentes más mencionadas como factores de peligro a ser “detenidos” por no tener documentación válida para demostrar residencia en el país. La centralidad del automóvil como medio principal de transporte, dada la escasez de transporte público y las grandes distancias a recorrer hasta sus puestos laborales y el hecho de que para expedir la licencia de conducir se exija ciudadanía, provocó para la mayoría de los entrevistados no tenerla y por tanto conducir en infracción. Esto se traduce en un nuevo factor de riesgo para ser deportado, dado que la detención en un control de tránsito, podría desencadenarla. La situación del riesgo permanente que supone vivir ilegal en Estados Unidos, se vincula con las consecuencias que tiene el ser detenido e identificado en esta condición de irregularidad. No sólo la deportación se menciona sino las pérdidas incluso económicas que esto puede representar. La cancelación de las cuentas bancarias es automática y con ello la posibilidad de perder el capital acumulado durante el tiempo de estadía en EE.UU.

La llegada

Luego del aterrizaje en Carrasco, empieza otra etapa: instalarse en Uruguay. En la entrevistas también se indaga sobre este periodo y particularmente en la percepción que tienen del país una vez que han vivido al menos dos años en otro; con qué planes o expectativas llegan, qué se encuentran, y en particular si utilizan los servicios específicos de información para retornados con que cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se aprecia que también en esta etapa hay diversas estrategias, muchas de ellas condicionadas por el tipo de retorno que fuera antes objeto de distinción. Los deportados no deciden el retorno, y por tanto no desarrollan estrategias previas para instalarse aquí. La diversidad de condiciones se encuentra por ejemplo, respecto a la vivienda. Varios entrevistados mantuvieron sus casas en Uruguay y por tanto tienen este recurso. El mero hecho de haber mantenido la propiedad de su vivienda conduce a pensar que independientemente de la duración de su emigración, las posibilidades del retorno estaban –cuando menos– latentes. En otros casos, el regreso manifiesta la misma incertidumbre y precariedad en cuanto a las condiciones de instalación que se verificó antes, en la emigración. Se registran casos, que vuelven a vivir en la casa de padres o familiares, al menos hasta que puedan “instalarse” y asentarse para conseguir su propia vivienda.

La gran mayoría vuelve con familia; parejas (con las que se había partido, o que han formado en el exterior, con personas de otras nacionalidades), y con hijos (muchos nacidos en el exterior, y portadores de doble ciudadanía). De los entrevistados que no pertenecen al listado dado por la Oficina de Retorno y Bienvenida, ninguno ha pasado por este servicio ni lo conoce, aun cuando varios de ellos han tenido que realizar trámites de legalizaciones y/o se han traído enseres (la mayoría).

Al hablar de “como ven Uruguay”, estos retornados recientes coinciden en tres aspectos principales: está mejor que cuando se fueron, es muy caro vivir en Uruguay y la relación salarios o ingresos-costos de vida es mucho menos favorable que lo que vivieron fuera; es frecuente la mención a dificultades de movilidad urbana para el caso de los que vienen de España a residir a Montevideo.

Volver... ¿para quedarse? o ¿volver a irse?

Hemos visto cómo en muchos casos el movimiento migratorio es conducido por la priorización en el logro de metas y objetivos particularistas que trasciende el arraigo a un país o sociedad concreta. Esto podría determinar que –para el caso de los retornados–, el migrar como recurso, se dispare nuevamente como posibilidad ante contextos adversos en los que la percepción sobre el futuro, o el tránsito por el presente, sea valorado negativamente en comparación a una experiencia migrante “ya vivida”.

En varias ocasiones se expresa cómo el retorno es una nueva experiencia migratoria: inserción laboral, de vivienda, de redes sociales, servicios para los hijos, etc. Y en esta línea, frente a dificultades asociadas al retorno, varios no descartan la posibilidad de volver a partir. Se consideran con capacidades y competencias para el proceso migratorio, es decir, asumen tener ciertas herramientas y disposiciones que les permitiría volver a enfrentar el desafío de una nueva partida. Si bien alguno de los entrevistados plantea que podría irse a cualquier sitio, la amplia mayoría volvería al lugar en el que vivió todos estos años; se presentan casos en que todavía tienen los pasajes abiertos.

La vivencia del retorno está relacionada también con los motivos de la emigración y con las experiencias en el extranjero; se encuentran expresiones de quien no quiere volver a irse, otros en que el retorno se produce dejando lejos a los hijos que llevaron mientras eran menores de edad, pero que decidieron no regresar, o familiares (hermanos, etc.) que quedan lejos.

Políticas y acciones para los retornados

Lo más concreto que debe hacerse para situar el tema es conocer su magnitud¹⁸. No existe hasta el momento una idea precisa de cuántas personas han retornado al país en los últimos años, y sólo se cuenta con el número de los formularios llenados en la Oficina de Retorno y Bienvenida del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sólo capta un subconjunto de los que llegan. Por otra parte existen probables sesgos según atributos de los que allí se registran: subrepresenta a los que van al interior y depende de las demandas de los propios retornados, lo que en gran medida se asocia a las condiciones de la vuelta.

18 En este sentido en el informe del proyecto se planea una propuesta de procesamiento de información existente en Dirección General de Migraciones para traducir en información estadística los datos administrativos y cuantificar los retornados al país.

Es imperioso establecer un sistema de información que favorezca el registro, compilación, sistematización y traducción estadística de información vinculada con el retorno al Uruguay y los retornados. Para ello, es necesario identificar rápidamente los organismos públicos que llevan registro administrativo de los trámites que realizan los retornados para nutrir un sistema de información que genere datos útiles para la toma de decisiones para la gestión pública así como para el diseño de políticas. Un sistema de estas características por otra parte, agiliza el proceso de fiscalización para aquellos que traen autos y que hoy no se realiza. Permite, en otro orden, un seguimiento de los procesos de inserción y permanencia de los retornados en el Uruguay.

Es conveniente además, mejorar la difusión de la información previa de los retornantes: la difusión de protocolos para determinadas acciones, para ser entregados a todos los uruguayos en el exterior que los requieran y de acceso en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la medida en que muchos de estos trámites deben ser realizados en los países en que se resida y la obtención de los certificados probablemente lleve tiempo, deben ser conocidos previamente al viaje y formar parte de una planificación (como ejemplos: procedimientos y requisitos para la inscripción en el sistema educativo; trámite que se requiere en la Corte Electoral si no se votó en las últimas elecciones y el Fondo de Solidaridad para profesionales que no lo han pagado en los últimos años). Asimismo los beneficios que otorga la Ley 18.250 para el retorno de uruguayos también han sido objeto de una difusión confusa o incompleta, que ha generado efectos o externalidades negativas. En estas acciones el involucramiento de los Consulados se torna crucial, tanto como una página web del Ministerio de Relaciones Exteriores con información completa, relevante y actualizada. La localización de los Consulados (particularmente en Estados Unidos) es otro de los puntos que muestra inconvenientes.

¿Qué políticas? ¿Para qué retornados?

La ausencia de una política clara y explícita en relación al retorno se evidencia en los discursos de los informantes calificados, técnicos y políticos que han sido entrevistados. Una de las razones de “no tener en agenda” el tema del retorno y la gestión pública deriva indudablemente de la ausencia de información que dé cuenta de su magnitud. Sin embargo, es de orden establecer sobre qué vectores estratégicos el Estado desarrollará su acción.

Si bien existen políticas específicas de promoción del retorno de algunos sectores poblacionales de mayor calificación y de escaso impacto numérico (académicos, investigadores y científicos) no se visualiza una mirada integral del fenómeno retorno, resultando en iniciativas aisladas y poco coordinadas (y sin difusión de evaluación de resultados) entre los diferentes organismos públicos. Asimismo se revela un debate de filosofía política en relación al retorno: qué criterios se establecen para la obtención de qué beneficios.

Jon Elster llama problemas de justicia local a los asociados a la distribución de bienes o cargas. *“Básicamente es un asunto de hacer corresponder beneficios (incluyendo exenciones de obligaciones) a receptores”* (Elster, 1994:32). Por lo tanto los criterios que se establezcan para determinar a los posibles beneficiarios de cualquier política social pueden considerarse como casos de justicia local de acuerdo a esta definición. De las entrevistas surge que este debate adquiere gran intensidad y no se ha logrado laudarse en la ciudadanía, en el sistema político, o en la academia. Se encuentra presente en gran parte de los discursos la idea de “justicia”. Básicamente se puede resumir en la siguiente pregunta: *¿es justo que los que se fueron y ahora vuelven tengan beneficios a los que no acceden los que se quedaron?*

La atención actualmente consiste en dar la información de los programas universales (y/o focalizados para determinados perfiles) pero sin distinguir como una “clase particular de beneficiarios” a los retornados. Sin embargo, lo existente no aplica a los requerimientos de algunos retornados (como tampoco aplicaría para las condiciones de algunos ciudadanos residentes en el país). La política hasta el momento, salvo convenios que flexibilizan condiciones de acceso, ha sido informar, vincular y articular a los retornados con diferentes organismos del Estado que cuentan con programas disponibles según los requerimientos que éstos planteen a la llegada. Sin desmedro de lo anterior, y con la escasa dotación numérica de recursos humanos dedicados a ello, se ha avanzado en la “coordinación y planificación de actividades con Ministerios y organismos estatales: MIDES, MEC, MSP, MEF, MTSS, MINTUR, MVOTMA, BPS, BHU, BROU, IMM, UdelaR y con instituciones no gubernamentales como Fundasol, y otros”.

Conclusiones

El análisis de los relatos de vida de los retornados a Uruguay entre el 2009 y el 2011 entrevistados, se estructura en tres fases de su trayectoria migratoria (que se considera abierta): irse de Uruguay; la estadía en el exterior y volver.

Tanto la decisión de partir como de volver, son producto de interpretaciones de la situación que viven los sujetos, en la que se articula lo afectivo, lo económico, el ciclo de vida, los proyectos educativos, las relaciones familiares, la opinión y sugerencias de otros significativos: todo forma parte. Dentro de los motivos o razones dadas para decidir emigrar de Uruguay, los entrevistados señalan de forma recurrente el “factor económico”. Lo que la investigación de corte cualitativo permite, es indagar el sentido, o más bien los múltiples sentidos que se esconden tras esta expresión. De forma recurrente, la crisis que se vive en la región y en el país en los primeros años de los 2000, se refleja en las perspectivas de futuro que los sujetos en edad productiva elaboran; no necesariamente implica para ellos vivir el estado de desempleo o de “quedarse sin trabajo”. Traduce con frecuencia la idea de no poder progresar en el Uruguay, no dar un “salto cualitativo” y tener restricciones para la movilidad social. La creencia que en “otro lugar - otro país” es más fácil progresar, o al menos es posible, adquiere, en los discursos, una dimensión más relevante que el sentido de último recurso. Presupone el

deseo de ascenso social y económico, la proyección laboral, profesional y personal o familiar, así como una lógica individualista para conseguir los fines, estando detrás la sólida percepción que el entorno no era favorable a la consecución de éstos.

Consideraciones que pesan en la decisión de volver a Uruguay remiten al entorno inmediato (situación del país de residencia: recesión económica, desempleo, incremento de controles y restricciones para inmigrantes, o incluso, medidas de estímulo a los inmigrantes para regresar a los países de origen); otras refieren a los proyectos o circunstancias personales (necesidades afectivas, proyectos de o para los hijos, circunstancias personales como muertes o divorcios, proyectos personales que se cumplieron o no durante el periodo de emigración) muchas veces combinadas o mediados por el tiempo de permanencia fuera del país. También juegan elementos percibidos sobre el Uruguay (su mejoría económica respecto al momento en que se produce la partida), condiciones políticas (cambio de gobierno). El capital social o redes son factores que favorecen la decisión tanto de irse como de volver. El efecto contagio y el estatus legal (tener o no tener papeles) también son elementos que juegan en ambas.

Uruguay no cuenta con políticas de retorno claras, y el hecho de que se identificara un incremento del flujo de retornados durante 2011 y 2012 pone en evidencia las carencias en este aspecto. Se presentan debates intensos de filosofía política que obstaculizan su concreción, que puede traducirse en el dilema acerca de si deben tener aquellos que se fueron y que hoy vuelven beneficios específicos respecto a los que se quedaron en Uruguay. Otro de los temas álgidos en políticas de retorno, remite a si debe existir alguna prioridad en los perfiles de emigrantes sobre quienes impactar en los estímulos para el regreso a Uruguay. Es claro, que aún sin un debate potente en esta línea, se han ensayado diferentes medidas por parte de organismos vinculados al ámbito científico y académico, anteriores incluso al registro de este fenómeno del retorno de uruguayos en el exterior. La Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) y la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (CSIC-UdelaR) son ejemplos de ello, y han desarrollado programas y recursos propios para estimular el retorno de científicos y académicos uruguayos en el exterior, aunque su población objetivo sea reducida en número respecto a la emigración total del país.

Es probable que además de algunas medidas de carácter genérico dirigidas a los retornantes al país (establecidas en la Ley 18.250 del 2008) puedan articularse otras de carácter más específico a ciertos perfiles de retornados, como empresarios y/o emprendedores de diversas escalas diseñando diversas estrategias para dar estímulos para que instalen empresas o micro emprendimientos en el Uruguay. No se conocen hasta el momento iniciativas públicas de mayor calibre que las referidas a capacitación, a pesar de la frecuencia en los medios y en los discursos políticos de menciones sobre la necesidad de pensar en ello.

El diseño de estrategias coordinadas entre diversos organismos para diferentes perfiles de retornados requiere de decisiones políticas que hasta el momento no están instaladas ni han sido designados responsables directos (institucionales y políticos)

para ello. Por otra parte sería conveniente considerar tres ingredientes adicionales para pensar el diseño de políticas de retorno: la transversalidad (integración de diversos organismos sectoriales involucrados); la perspectiva de género (es cada vez más importante considerar a las mujeres como migrantes activas y ya ha sido demostrado el peso que tienen en el flujo de la inmigración internacional) y para el Uruguay concretamente contemplar como unidad la familia y no sólo al migrante individual dado las características que adquiere en el país la emigración internacional de núcleos familiares y particularmente el retorno.

Bibliografía

- ACHÚGAR, H. y CAETANO, G. et al. (1992).** Identidad uruguaya: ¿mito, crisis o afirmación? Editorial Trilce, Montevideo.
- AGUIAR, César (1985).** Uruguay país de emigración. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- BOLOGNA, E. (org.) (2009).** Temáticas migratorias actuales en América Latina: remesas, políticas y emigración. Serie Investigaciones N° 7. ALAP. Montevideo. Editorial Trilce.
- CABELLA, W.; PELLEGRINO, A. (2005).** Estimación de la Migración Internacional. Programa de Población, Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales. Serie Documentos de Trabajo N° 70, Montevideo.
- CANALES, A. (2009).** Panorama actual de la migración internacional en América Latina. En Revista Latinoamericana de Población. Año 3, número 4/5 enero - diciembre de 2009. ALAP México. Pp 65-92.
- CASTELLS; Manuel. (1997).** La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol 1. La sociedad Red. Alianza Editorial. Madrid.
- CASTLES, Stephen y MILLAR, Mark. (2004).** La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno, México, D.F., Universidad Autónoma de Zacatecas.
- CEPAL (2008).** Migración internacional, derechos humanos y desarrollo. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- COSTA, Leticia (2010).** *Migrantes. Deportados o apremiados por el desempleo, cientos de uruguayos regresaron al país.* Revista Qué Pasa – El País, 20.11.2010.
- DICONCA, Beatriz; DE SOUZA, Lydia (2003).** “El camino del ‘afuera’: La opción de emigrar”. Anuario Antropología Social y Cultural en Uruguay 2002-2003. Departamento de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UdelAR. Montevideo.
- DOMENACH, H.; PICOUET, M. (2005).** Las Migraciones. Argentina: Universidad Nacional de Córdoba.
- ELSTER, Jon (1994).** Justicia Local. Gedisa Editorial. Barcelona.
- FILARDO, V. (coord); CABRERA, M. y AGUIAR, S. (2010).** Segundo Informe Encuesta Nacional de Adolescentes y Jóvenes en el Uruguay. Montevideo, Infamilia- INJU MIDES.
- FOM (Oficina Federal de Migración). (2005).** “Iniciativa de Berna. Agenda Internacional para la Gestión de la Migración”. Berna.
- MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge (editor). (2008).** América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo. CEPAL. Santiago de Chile.

- MEZZADRA, S. (2005).** Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Madrid: Traficantes de sueños.
- PASCUAL DE SANS, Ángels (1983).** Connotaciones ideológicas en el concepto de retornos de migrantes. Barcelona: Papers, Revista de Sociología, Nº 20. pp 62-71.
- PELLEGRINO, A.; Luján, C. (1994).** La propensión migratoria de los jóvenes uruguayos. Montevideo: INJU, CEPAL, OIM.
- PELLEGRINO, A. (compiladora) (1995).** Migración e integración. *Nuevas formas de movilidad de la población.* Montevideo: Ediciones Trilce.
- PELLEGRINO, A. (2001).** La emigración de latinoamericanos a EE.UU. Un polo de atracción. Buenos Aires: Encrucijada, Revista de la Universidad de Buenos Aires. Año I, Nº 7.
- PELLEGRINO, A. y VIGORITO, A. (2005).** La emigración uruguaya durante la crisis del 2002. Montevideo. Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y Administración . Serie Documentos de Trabajo DT 03/05.
- SASSEN, S. (2003).** Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de sueños.
- SOSA GONZÁLEZ, A. (2009).** La política de re-vinculación del Estado uruguayo con su diáspora. Florianópolis: Revista, Tempo e Argumento. V 1, Nº 2. pp. 37-63.

Otros recursos

Decreto de Creación de la Oficina de Retorno y Bienvenida:

http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2008/07/339_26%2006%202008_00001.PDF

http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2008/07/339_26_06_2008_00001.PDF

Programa de Retorno productivo <http://www.retornoproductivo.org.uy/comoParticipar.aspx>

Ley 18.250: <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18250>

